

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

El partido de acción republicana, 1925-1934

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Eduardo Espín Templado

Madrid, 2015

TB 1921-1

EL PARTIDO DE ACCION REPUBLICANA

1925 - 1934



*Tesis presentada por Eduardo
Espín Templado, en cumplimien
to de los requisitos exigidos
para el título de Doctor en
Derecho.-*

FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

Mayo de 1978

"Sólo hubo un *gran* político republicano, Manuel Azaña, que por cierto, con una insensatez, con una ceguera increíbles, fue continuamente denostado y calumniado por la *plus bête* derecha del mundo. Más por otra parte, ¿cuál era la propuesta positiva de éste? ... Que fue, a la vez, intelectual y político, y no un intelectual con veleidades políticas, parece indudable. ¿Tuvo preparación técnica y sentido social suficientes? ¿Se ocupó de estudiar los problemas económicos en la medida que se ocupó de analizar los que planteaban el militarismo y el Ejército? En cuanto al hecho diferencial -y de otras partes de España-, ¿acertó Azaña a presentar los "Estatutos" como una nueva estructuración, más dinámica, abierta y adecuada de la realidad total española que el viejo centralismo? ..."

Aranguren.

INDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	2
PRIMERA PARTE	
II. ORIGENES DE ACCION REPUBLICANA (1925-1930). . .	18
1. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA.	19
2. CREACION DE ACCION REPUBLICANA	27
3. LA ALIANZA REPUBLICANA	34
4. REAPARICION PUBLICA DE ACCION REPUBLICANA. .	43
5. CONSPIRACION REPUBLICANO SOCIALISTA Y PACTO DE SAN SEBASTIAN	51
6. GOBIERNO BERENGUER Y ABSTENCIONISMO ELECTORAL	56
7. ELECCIONES MUNICIPALES DE ABRIL DE 1931. . .	60
8. PROCLAMACION DE LA REPUBLICA	72
III. TRANSFORMACION EN PARTIDO DE ACCION REPUBLICANA (1931)	80
1. TRANSFORMACION EN PARTIDO Y PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL	81
2. ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES	94
A. CAMPAÑA ELECTORAL	100
B. CANDIDATOS Y DIPUTADOS DE ACCION REPUBLICANA	109
C. SEGUNDA VUELTA: 12 DE JULIO DE 1931 . . .	121
D. RESULTADOS GLOBALES DE ACCION REPUBLICANA .	128

3. DISCUSION CONSTITUCIONAL: HACIA UNA NUEVA MAYORIA GUBERNAMENTAL	136
4. SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL	145
5. FIN DE LA ALIANZA REPUBLICANA	151
6. AZAÑA, JEFE DEL GOBIERNO PROVISIONAL.	156
IV. ACCION REPUBLICANA DURANTE EL SEGUNDO GOBIERNO AZAÑA (ENERO-1932/JUNIO 1933).	174
1. PRIMER GOBIERNO CONSTITUCIONAL; UNA NUEVA MAYORIA: ACCION REPUBLICANA EJE DE LA COALICION MINISTERIAL	175
2. TERCERA ASAMBLEA NACIONAL DE ACCION REPUBLICANA	187
3. CRECIMIENTO DE ACCION REPUBLICANA EN 1932	197
4. UNA FEDERACION PARLAMENTARIA: LA FIRPE.	202
5. ACCION REPUBLICANA EN 1933	208
6. ELECCIONES MUNICIPALES DE ABRIL DE 1933	213
A. PLANTEAMIENTOS POLITICOS ANTE LAS ELECCIONES	216
B. RESULTADOS GENERALES	226
C. RESULTADOS DE ACCION REPUBLICANA	239
D. CONSECUENCIAS POLITICAS DE LAS ELECCIONES	248
V. NUEVO GOBIERNO AZAÑA, DERROTA ELECTORAL Y FUSION DE LOS REPUBLICANOS DE IZQUIERDA (JUNIO-1933/ ABRIL-1934)	264

1. JUNIO DE 1933: CRISIS Y NUEVO GOBIERNO	
AZAÑA	265
2. ELECCIONES PARA VOCALES DEL TRIBUNAL DE	
GARANTIAS	278
A. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LAS	
ELECCIONES	279
B. CONSECUENCIAS POLITICAS DE LAS	
ELECCIONES	291
3. CRISIS GUBERNAMENTAL DE SEPTIEMBRE:	
CAIDA DE AZAÑA	300
4. CUARTA ASAMBLEA NACIONAL DE ACCIÓN	
REPUBLICANA	317
5. ELECCIONES GENERALES A CORTES	
(NOVIEMBRE DE 1933)	334
A. PLANTEAMIENTOS POLITICOS ANTE LAS	
ELECCIONES	335
B. CAMPAÑA ELECTORAL.	344
C. COALICIONES ELECTORALES Y RESULTADOS	
EN LA PRIMERA VUELTA	349
D. SEGUNDA VUELTA	368
E. RESULTADOS GLOBALES.	372
6. LOS PARTIDOS REPUBLICANOS TRAS LA	
DERROTA	380
7. HACIA UN UNICO PARTIDO REPUBLICANO DE	
IZQUIERDAS: FORMACION DE IZQUIERDA	
REPUBLICANA	388

SEGUNDA PARTE

VI. PROGRAMA Y COMPORTAMIENTO PARLAMENTARIO DE ACCION REPUBLICANA	405
1. ACCION REPUBLICANA, UN PARTIDO	
REFORMISTA	406
2. CUESTION RELIGIOSA Y DOCENTE	413
A. PROGRAMA DE 1931	414
B. DISCUSION DE LA CONSTITUCION	420
C. LEGISLACION POSTERIOR	432
D. PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA. . .	441
3. POLITICA MILITAR	445
A. PROGRAMA DE 1931	448
B. REFORMAS MILITARES DE AZAÑA.	451
C. BALANCE DE LAS REFORMAS MILITARES. . .	480
D. PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA. . .	494
4. POLITICA REGIONAL	496
A. PROGRAMA DE 1931	497
B. DISCUSION DE LA CONSTITUCION	502
C. DISCUSION DEL ESTATUTO DE CATALUÑA . .	514
D. OTROS ESTATUTOS REGIONALES	531
E. PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA. . .	542
5. CUESTION AGRARIA.	545
A. PROGRAMA DE 1931 Y PRIMEROS PORYECTOS DE REFORMA AGRARIA	547

B. LA MINORIA PARLAMENTARIA	760
6. LAS JUVENTUDES DE ACCION REPUBLICANA (JAR),	776
A. LA JAR DE MADRID	782
7. ARTICULACION GENERAL DEL PARTIDO	799
A. ENLACES DE TIPO VERTICAL	803
B. CENTRALIZACION DE ACCION REPUBLICANA . .	806
C. CARACTER DEMOCRATICO DE ACCION REPUBLICANA	814
D. FINANCIACION DEL PARTIDO	824
8. ACCION REPUBLICANA Y LA PRENSA	829
A. PUBLICACIONES OFICIALES Y OFICIOSAS DE ACCION REPUBLICANA	831
B. ACCION REPUBLICANA Y LA PRENSA REPUBLICANA INDEPENDIENTE	835
9. BASE SOCIAL DE ACCION REPUBLICANA	843
A. EL MANIFIESTO DE 1930	847
B. LA DIRECCION DEL PARTIDO	852

VIII. ACCION REPUBLICANA EN EL SISTEMA DE PARTIDOS

REPUBLICANO	865
1. EL SISTEMA DE PARTIDOS REPUBLICANO.	866
2. ACCION REPUBLICANA EN EL SISTEMA PARLAMENTARIO DE PARTIDOS DE 1931 A 1933.	879
3. ESTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LAS CORTES CONSTITUYENTES.	892

Página

IX. CONCLUSIONES	905
APENDICES	922
NOTA INTRODUCTORIA	923
I. DOCUMENTOS DE ACCION REPUBLICANA.	927
1. DOCUMENTOS POLITICOS	928
A. TEXTOS PROGRAMATICOS DEL PARTIDO.	929
B. DOCUMENTOS DE LAS ORGANIZACIONES PROVINCIALES Y DE LA JAR.	965
2. ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DEL PARTIDO.	998
II. ESCRITOS Y DISCURSOS DE AZAÑA	1.043
1. ARTICULOS DE PRENSA	1.044
2. INTERVENCIONES EN CORTES	1.061
3. DISCURSOS	1.099
4. ALOCUCIONES A LOS MILITARES	1.215
5. PREAMBULOS A LEYES Y DECRETOS SOBRE EL EJERCITO	1.242
6. ENTREVISTAS	1.279
INDICE DE LOS APENDICES	1.303
FUENTES Y BIBLIOGRAFIA	1.309

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AR:	Acción Republicana
AS:	Archivo de Salamanca
AVB:	Archivo Vidal y Barraquer
CN:	Consejo Nacional
DDSS:	Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes
DRV:	Drecha Regional Valenciana
GP:	Gobierno Provisional
MP:	Minoría Parlamentaria
PSOE:	Partido Socialista Obrero Español
(PR)RS:	(Partido Republicano) Radical Socialista
RSI:	Radical Socialistas Independientes
TGC:	Tribunal de Garantías Constitucionales.

INTRODUCCION

CAPITULO - I

INTRODUCCION

La conciencia de haber vivido las últimas consecuencias del fracaso de la experiencia republicana en España habrá llevado a más de un investigador en la actualidad a trabajar sobre la agitada década española de los años treinta y no solamente por el interés de conocer las causas y circunstancias que habían determinado aquel fracaso.

La ausencia de memoria histórica de un pueblo es con frecuencia la causa de repetir errores fatales. La posibilidad de contribuir a evitarlos, mediante la investigación y clarificación de tales errores constituye indudablemente un atractivo más de la investigación del pasado cercano español.

Una aportación semejante, desde el punto de vista científico se transforma en algo de ardiente actualidad cuando en nuestro país se encuentra empeñado en una tarea que, *servata distantia*, contiene no pocos rasgos de analogía con el proyecto político de la II República. En efecto, al igual que entonces, se trata de consolidar un sistema político democrático, que sucede a una dictadura y que hereda sus problemas irresueltos.

Cierto es que por fortuna, las circunstancias actuales parecen bastante más favorables que entonces; por ello no obsta para que podamos extraer todavía numerosas enseñanzas. No ocultamos que contribuir a ello, desde nuestro ámbito propio de investigación, la Ciencia Política, ha estado presente

te entre los motivos que nos indujeron a iniciar nuestro trabajo. En este campo, precisamente por ser posible prescindir, a la hora de obtener algún tipo de conclusiones, del contexto histórico concreto, se podía confiar en hacer alguna aportación que tuviera alguna vigencia práctica.

Al adentrarnos en la historia de la II República, llevados por una confesada simpatía hacia la política reformista que en el contexto español de los años treinta había desarrollado Azaña, queríamos contrastar la coherencia y la oportunidad de tal modelo de modernización aplicado a la arcaica sociedad española, aproximándonos así a las causas que condujeron a su fracaso.

Punto de partida era la sospecha de que gran parte de las condenas que sobre el modelo reformista republicano se han hecho han sido motivadas algunas por la parcialidad ideológica -no exclusivamente de carácter conservador- y en otros casos por simple desconocimiento de hechos. Es evidente que tales condenas cuentan con un supuesto veredicto de la historia a su favor. El propio Azaña no se recataría en reconocerlo incluso antes de que la guerra civil terminase.

Y sin embargo, la necesidad histórica no es a nuestro juicio tal que considerásemos inútil romper una lanza a favor de la eventualidad de que el intento de 1931 fuese, a pesar de su fracaso, un intento noble y posible. Tanto más cuanto que en nuestra opinión tal intento no sólo era factible sino que era el *único* posible para modernizar el país. Ni una opción

revolucionaria ni un mantenimiento del *statu quo* eran realistas tras la caída de la Dictadura. La República, bajo la dirección de quien fue su estadista y su figura más representativa, inició la transformación gradual y pacífica de España y fracasó en su tarea.

Nada mejor entonces para contrastar si esta idea era acertada, que el estudiar la actuación del instrumento político de Azaña, Acción Republicana. La investigación sobre un partido político imponía, sin duda, una determinada metodología.

En efecto, la proliferación actual de los estudios sobre partidos políticos del pasado español reciente ha llegado a constituir en nuestra literatura científica, un tipo específico de investigación que como se ha dicho se encuentra a medio camino entre la Historia y la Ciencia Política.

No ha sucedido esto por capricho de los investigadores -procedentes asimismo de ambos campos- que se han ocupado de la materia. En Ciencias Sociales como en cualquier campo de investigación, es el objeto junto con los objetivos que se pretendan obtener, lo que de forma inequívoca imponen el método adecuado de investigación.

Y no es otra la razón de la homogeneidad y el enfoque común de los estudios sobre partidos existentes. Las fuentes, prensa y archivos, bibliografía, tanto de época como de índole teórica, etc., obligan a una combinación de métodos de

investigación histórica -políticos y teóricos que tan sólo va riarán en la medida en que la finalidad de la investigación se incline por una u otra faceta. Así se suman a veces las dificultades de ambos tipos de investigación, desde la escasez de fuentes hasta la necesidad de la construcción teórica.

En lo que a nuestro trabajo se refiere ambos aspec tos se encuentran presentes. Y no sólo porque sea inevitable por las razones antedichas, sino porque también el objetivo perseguido ha sido doble. En primer lugar, y como requisito primero resultaba imprescindible conocer cuál había sido la realidad del partido que en su época de Gobierno acaudillara Manuel Azaña.

La laguna de la bibliografía histórica a este res- pecto era absoluta. Tan sólo se encontraban algunas palabras que solían ir en un único sentido: negar la importancia de di cho grupo político y su reducción -con indudables connotacio nes despectivas- a una tertulia de amigos, tertulia además de intelectuales. Nada habría que objetar si tales juicios se fun daran sobre investigaciones documentadas: pero tanto sobre Acción Republicana, como sobre el resto de los partidos republicanos de iz- quierda, tales investigaciones brillaban por su ausencia. El hecho es más grave de lo que parece. Pues si bien sobre la II República se ha escrito ya demasiado, la mayor parte de las ve ces se escribe a base de valoraciones globales desprovistas de base factual. Así en el caso que nos ocupa, la caracterización del partido de Azaña a que hemos hecho referencia favorecía in

interpretaciones del tipo "II República - República de intelectuales - falta de realismo - fracaso inevitable", que subyace más o menos expresamente a muchas obras sobre el período. Es necesario repetir, que tal identificación podía ser cierta: pero hay que demostrarla. No se puede escribir la Historia ni sobre la base de intuiciones ni tampoco de valoraciones puramente subjetivas.

Esta finalidad de clarificación histórica nos ha llevado a un estudio pormenorizado, en la medida en que la escasez de fuentes lo permitía, de la historia interna de Acción Republicana y de su participación en los acontecimientos políticos.

Pero por encima del interés que *per se* tuviese tal labor de esclarecimiento histórico, para nosotros constituía una tarea previa para poder contrastar las hipótesis que albergábamos sobre la función de Acción Republicana en el sistema de partidos republicanos, así como sobre la naturaleza y viabilidad de la opción política que representaba Azaña y su partido. Pues tales han sido las pretensiones últimas que han constituido el hilo conductor de nuestra investigación.

Al encauzar así nuestra investigación, pronto dimos con una hipótesis de naturaleza más concreta cuya contrastación constituye en puridad el hilo conductor de esta tesis. Se trata de la convicción de que la inexistencia de un partido de masas potente que apoyase la política gubernamental de Azaña constituyó un factor decisivo del fracaso de la vía reformista emprendida por éste.

Si esto fue así podríamos terciar en las inevitables disquisiciones que siempre se han hecho -y que continuarán haciéndose- en torno a las responsabilidades del fracaso republicano. Pero nuestro punto de vista no sería el habitual. No nos interesaría ya -aunque no por ello lo consideremos ni mucho menos falto de interés-, si fueron los republicanos o sus antagonistas los principales responsables de la catástrofe que puso fin a la experiencia republicana. Lo que nos interesaba era más bien precisar los límites de lo posible en la actuación de los republicanos y en particular de Azaña, único político que pretendió que la República fuese algo más que un cambio de personas y responder así a las esperanzas despertadas por el cambio de régimen. Y uno de esos límites, y desde luego no el menos importante, fue la inexistencia de un gran partido republicano de izquierda reformista burguesa.

Perderían así importancia relativa otros factores -indudablemente concurrentes- y que son alegados con frecuencia. Nos referimos por ejemplo a la inexistencia de una clase media poderosa o la incompetencia técnica de la coalición republicano socialista (Malefakis) o a otros ya de naturaleza más polémica como la falta de prudencia en la actuación gubernamental -o el exceso de la misma.

Creemos que había más que suficiente base social para un partido burgués de talante reformista como Acción Republicana. De hecho la fuerza de Izquierda Republicana en 1936 vendría a probarlo. Su inexistencia de 1931 a 1934 determinaría

en gran medida el fracaso de Azaña y, por tanto de la Republica reformista.

Si la existencia de un partido con tales características era posible en términos absolutos, ¿por qué Acción Republicana no llegó a ser un partido poderoso? Que era factible construir un partido en ese lapso de tiempo de tres años lo probaría Gil Robles al lograr crear la CEDA. El dilucidar esta cuestión constituía una de las múltiples preguntas que partiendo de nuestra hipótesis debíamos tratar de responder a lo largo de nuestra investigación. Como veremos, a la hora de delimitar el grado de responsabilidad personal que le cupiera a Azaña por el fracaso republicano, estaría a nuestro juicio más cerca de estos factores que de otros que frecuentemente se le han achacado, como su supuesto desinterés por las cuestiones de orden económico y social.

Puede ser más grave para un régimen, aunque pueda parecer una perspectiva cínicamente técnica, no comprender la urgencia de la construcción de un partido político que no apurar el tiempo en la aplicación de una reforma agraria cuyos efectos pacificadores sólo podían producirse como pronto a medio plazo.

Esa sería a nuestro juicio la gran tragedia del Azaña estadista. Su visión sobre lo que la República podía significar fue certera. Su cultura histórica y sus ideas sobre el porvenir español daban pie a una fecunda actuación política, y no solamente, como se repite a menudo, en un país más evoluu

cionado. Incluso en la turbulenta España de los años treinta él era la única persona con capacidad para guardar la serenidad y "hacer política", algo que la mayor parte de los políticos desconocen. De hecho y aunque sea salirnos fuera de nuestro tema, parece haber unanimidad entre la literatura para considerar que la reclusión de Azaña en 1936 en la Presidencia de la República -a la que él se resistió primeramente- significó la pérdida del único político que podía dominar aquella explosiva situación. Y precisamente, cuando ya disponía del instrumento de un partido fuertemente estructurado y amplio del que había carecido en 1931.

¿Fue él consciente de que le faltaba un partido? Creemos que sí. Aunque quizás no comprendió la necesidad de forzar la marcha en pro de una unión de los partidos republicanos. Esto es, comprendió la necesidad de dicha unión, pero no que conseguirla era una tarea de gobierno tan urgente como cualquier otro problema con que se enfrentara como Presidente del Consejo. De ahí su inactividad en este sentido. Cuando lo comprendió, tras la derrota electoral del 33 ya había sido desalojado del poder. Y 1936 es ya una historia que queda al margen de nuestras consideraciones. En cualquier caso sobre todas estas cuestiones se centran las páginas de la tesis.

No se agotaba el objeto de nuestra investigación en constatar la corrección de esta tesis. Fuera o no cierta, que daría en todo caso averiguar cuál había sido el papel efectivo desempeñado por Acción Republicana en la vida política de

la República. Salvo que las caracterizaciones a que antes nos hemos referido y que negaban toda realidad al partido de Azaña fuesen acertadas, Acción Republicana fue un partido menor con una cierta presencia parlamentaria. ¿Tuvo algún significado esta presencia en el sistema de partidos parlamentarios? ¿O fue más bien una fuerza marginable y marginada por las restantes fuerzas políticas? En último término, en caso de que Acción Republicana no le hubiese reportado al Presidente del Gobierno Azaña un apoyo suficiente y estable, ¿había desempeñado por lo menos alguna otra función útil o le había resultado un instrumento político absolutamente inútil?

A la luz de las investigaciones ya realizadas sobre los partidos y el sistema de partidos en la II República, cabía entrever la posibilidad de que Acción Republicana, a pesar de sus reducidas dimensiones, hubiese desempeñado un papel importante en el juego parlamentario: una función de cohesión de una mayoría parlamentaria cuyas disensiones en los principales problemas de gobierno con que se enfrentaban eran patentes.

Así pues, ambos aspectos venían a ser las dos caras de una misma moneda: el papel que Acción Republicana podía y debía haber alcanzado para un funcionamiento más satisfactorio del sistema de partidos y el que subsidiariamente cumplió, en virtud tanto de las dimensiones que tenía, como de su posición en el espectro político.

En cuanto a la adecuación del modelo reformista es

cogido por Azaña y las fuerzas políticas que él dirigió, ha constituido un aspecto de la tesis a demostrar, pues sólo si dicha adecuación existía, podíamos considerar relevante la existencia o no de un partido digno ejecutor y sustento de la política de la coalición republicano socialista.

De ahí nuestras continuas referencias a la justeza y realismo de la política aplicada en el primer bienio republicano. Un juicio sobre ella no debe caer en el anacronismo de juzgarla con patrones presentes ni de aislarla de su contexto social, económico y político. Sin embargo el veredicto de la historia a que antes hemos hecho referencia nos indica que no bastó esa justeza. Que los errores y las dificultades fueron superiores a las realizaciones positivas. Y por ello hemos insistido en verificar si, como creemos, un elemento básico para explicar que ese saldo fuera negativo lo constituyó la inexistencia de un instrumento político partidario capaz de disciplinar la opinión, de ser un apoyo electoral firme y un eficaz legislador en el Parlamento. En resumen, la certeza de que Ac-ción Republicana no llegó a ser lo que para el momento republicano era imprescindible que fuese.

Antes hemos hablado de la doble faceta de la investigación sobre un partido político. Creemos por ello necesarias unas palabras sobre los criterios que nos han guiado en los aspectos históricos de la investigación. Respecto a la historia interior del partido hemos preferido incluso excedernos en seguir las evoluciones tanto de la organización central del par

tido como de las organizaciones provinciales, aún a riesgo de que nuestro trabajo adquiriera un carácter excesivamente erudito y detallista. Y hemos procedido así no porque creamos en el interés específico de un hiperfactualismo descriptivo, sino como un aparato, narrativo si se quiere, que nos permitiera obtener conclusiones inequívocas e irrefutables sobre la auténtica naturaleza y dimensiones de la organización política que estudiábamos.

Respecto a la intervención del partido de Azaña en los acontecimientos políticos nos hemos detenido especialmente en dos aspectos. Uno es evidentemente las luchas electorales, punto básico para conocer el arraigo de cualquier partido en sistemas políticos competitivos. En la medida en que nos ha sido posible, considerando que existe una considerable ausencia de monografías de sociología electoral, hemos procurado aclarar cuál era el verdadero apoyo que recibía el partido, saliendo del terreno de las presunciones en el que hasta ahora se han movido las afirmaciones hechas sobre la materia.

Y el otro punto de carácter histórico general en el que nos hemos extendido ha sido el desarrollo de las crisis gubernamentales durante el primer bienio. La razón está ya dicha: no es sino el convencimiento de que en la mayoría de los casos se han establecido hipótesis y se han sacado conclusiones sobre motivos y resultados de las crisis que no tienen mucho que ver con los hechos reales, frecuentemente más prosaicos que las interpretaciones al uso. Por lo demás, en las coyunturas de cri

sis nos era posible destacar con mucha mayor claridad la auténtica posición de Acción Republicana en el espectro político.

No solamente hemos necesitado recurrir a métodos de investigación históricos. También de forma complementaria hemos debido realizar análisis sociológicos, tanto en la materia electoral ya citada, como para apuntar la probable base social del partido estudiado. Es obvio que tan sólo con carácter auxiliar, pues cualquiera de ambos puntos podía ser objeto de investigaciones monográficas que para ser plenamente útiles deberían abordar simultáneamente el conjunto de partidos republicanos de izquierda, lo que quedaba fuera de nuestras posibilidades de investigación.

Algo parecido podríamos decir en cuanto a determinados análisis constitucionales. Aunque materia esencial en la disciplina académica del Derecho Político, en nuestra tesis tan sólo nos hemos adentrado en ella en la medida en que nos era necesario para poder enjuiciar el desarrollo de las relaciones entre los órganos de poder republicanos. En efecto, la breve historia de la II República impidió que determinadas ambigüedades o insuficiencias técnicas de la Constitución quedasen superadas a través de una práctica constitucional. Por ello las interpretaciones antagónicas que las diversas fuerzas políticas hicieron de artículos clave de la Constitución, provocaron tensiones y enfrentamientos adicionales. En la medida en que estorbaron un funcionamiento sin fricciones del sistema parla

mentario nos ha sido preciso en ocasiones exponer lo que creíamos la interpretación más coherente con un análisis sistemático de la Constitución; y era materia que afectaba directamente a nuestro tema, puesto que el brusco fin del primer bienio republicano tuvo mucho que ver, como es sabido, con tales discrepancias de interpretación.

Sólo nos queda trazar el plan de exposición que he mos seguido. La primera parte trata sobre la historia y evolución de Acción Republicana, las actitudes políticas adoptadas, etc. Tiene inevitablemente un carácter descriptivo, que no he mos podido ahorrar debido a la inexistencia absoluta de referencias sobre Acción Republicana en la bibliografía histórica de la II República. También de naturaleza análoga son las páginas que tratan sobre la evolución interna de algunas organizaciones de las que poseíamos más abundante documentación, in cluídas en la parte segunda.

Hemos preferido incluir la participación electoral de Acción Republicana cronológicamente a lo largo de esta pri mera parte, en vez de agrupar en un único capítulo lo referente a todas las elecciones en que participó -como se ha hecho en otras investigaciones sobre partidos- para permitir comprender mejor las consecuencias políticas de los resultados electorales, que en la República fueron de enorme trascendencia.

En la segunda parte hemos procedido en sendos capítulos al análisis de las características organizativas del partido, así como de su actuación parlamentaria; ésta la combinamos

mos con un análisis tanto del programa editado por el partido en 1931 como del proyecto de programa de Izquierda Republicana de 1934, en el que queda reflejada la experiencia de los dos años de gobierno.

El último capítulo lo dedicamos a tratar de delimitar el papel desempeñado por Acción Republicana en el sistema parlamentario de partidos.

En cuanto a las fuentes hemos procurado abarcar al máximo de títulos posible, aunque hay que considerar que en ningún modo es posible la exhaustividad. Tanto en la producción de libros políticos de la época como en la bibliografía científica, el número de volúmenes publicados rebasa las posibilidades de una investigación personal. Añadamos que, en lo que a las obras de la época republicana se refiere, aunque hemos consultado gran cantidad de ellas, su consulta ha resultado por lo general decepcionante. Aunque tengan la utilidad de acostumbrar al discurso ideológico y político de aquellos años, pocos superan el nivel de simple propaganda o proporcionan datos de interés.

De la prensa hemos consultado los principales diarios de Madrid y eventualmente la prensa de provincias que por algún motivo concreto nos era necesaria.

En el Archivo de Salamanca perteneciente a la Presidencia del Gobierno, hemos localizado alguna documentación interna del partido, aunque escasa. El primario estado de ordena

ción de los materiales allí reunidos ha impedido probablemente que localicemos más documentos.

PRIMERA PARTE

C A P I T U L O - I I

ORIGENES DE ACCION REPUBLICANA

(1925 - 1930)

1. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Es conocida la habitual crítica que el régimen político de la Restauración ha merecido a los historiadores de todas las tendencias. El falseamiento generalizado del sufragio, el caciquismo, las frecuentes intervenciones de la Corona en las contiendas internas de los partidos y en la vida del Ejército hacían ficticio el sistema parlamentario en vigor. Y sin embargo, el reconocimiento de las libertades públicas (a pesar de su frecuente suspensión), el pluripartidismo y las contiendas electorales, por muy falseadas que fuesen, mantenían siempre abierto el cauce a una autentificación de la vida pública. El hecho de que una y otra vez esta posibilidad se hubiese frustrado no impedía que se le pudiera seguir considerando una posibilidad real. Si las grandes ocasiones se habían desaprovechado (Maura, Canalejas, la crisis de 1917), en algunos aspectos limitados esa autentificación se había demostrado posible: la creciente fuerza del partido Socialista o la mayor sinceridad del sufragio en las ciudades, perdidas ya para los partidos de turno eran muestras de ello. Aunque esto no pudiera ocultar otros rasgos evolutivos negativos como la descomposición de los partidos de turno, la cada vez mayor indisciplina e incompetencia del Ejército y sus subversivas intervenciones en la vida política, no había razón para considerar que la ruptura absoluta con el régimen monárquico fuese la única solución posible para una modernización del Estado y de la política españolas.(1)

(1) Sobre modernización, vid. Eisenstadt, *Ensayos sobre el cambio social y la modernización*, Tecnos, Madrid 1970; Apter, *The politics of modernization*, 1965, Univ. of Chicago Press.

Toda esta perspectiva cambió sin embargo con el golpe de Estado (tolerado habría que precisar) de septiembre de 1923. Destinado a encubrir las causas y responsabilidades del desastre de Annual y alimentado por la ignorante creencia de que los problemas de España tan solo necesitaban de sentido común y de una actuación "enérgica". La gobernación del Estado de los "corruptos" políticos, el golpe de Primo de Rivera arrumbaba, mediante el alojamiento de las libertades públicas, el sistema parlamentario y con éste sus posibles vías de evolución, todo ello con la anuencia del que debía haber sido su máximo garante (1). Para la inmensa mayoría de los políticos, monárquicos y republicanos, la Corona se había jugado su subsistencia al no oponerse a la rebeldía militar.

La mayoría de los políticos, a pesar de los públicos ataques de que fueron objeto, adoptaron la poco gallarda actitud del silencio, cediendo a la popularidad que en un primer momento pareció arropar a los sublevados (y que posiblemente subsistió hasta 1926). Sin embargo casi todos cifraban en una pronta vuelta a la normalidad, una vez resueltos algunos problemas que como el africano estaban al alcance de los militi

(1) Sobre la falta de resistencia de Alfonso XIII al golpe de Primo de Rivera, Martínez Cuadrado, *Historia de España Alfaguara VI*, p.381; Tuñón, *La España del siglo XX*, p.119 y ss.; Payne, *Ejército y Sociedad...*p.278 y ss., entre otros muchos.

En su reciente obra, "La destrucción del caciquismo...", Tusell presenta la Dictadura de Primo de Rivera como un intento frustrado de regeneracionismo anticaciquil. A pesar de que reconoce -como no podía ser menos- que nada serio se hizo en tal sentido, no deja de ser una tergiversación de

tares, la posibilidad de que la Monarquía sobreviviese a la Dictadura. El pesimismo que años más tarde, en 1930, acometería a los políticos monárquicos respecto a la posibilidad de llevar a buen término el retorno al régimen constitucional, no era sino el cumplimiento de sus íntimas y atinadas previsiones de seis años antes.

Desde que el ejército estuvo en su totalidad alineado junto a la Monarquía, la República carecía de posibilidades reales de ser implantada en España. Esta situación era ya definitiva al comenzar con el siglo el reinado de Alfonso XIII, y se acentuó durante éste como consecuencia de la política favoritista y de anticonstitucional relación directa con los altos mando del Ejército del monarca. En modo alguno bastaban para una posible implantación de la República el arraigo indudable de la idea republicana en algunas zonas del país. Ni su peso global ni su organización, harto deficiente, permitían aceptar como probable esa posibilidad.

(1) cont. pág. anterior

lo que la Dictadura podía ser desde su mismo nacimiento, basándose en la presunta sinceridad de las declaraciones del Dictador durante los primeros meses. Ni por el medio utilizado (golpe militar), ni por las personas implicadas en él, ni por las mismas proclamas del propio régimen, podía éste ser otra cosa que lo que fue: el mantenimiento de un régimen en crisis por una vía autoritaria, prescindiendo de las libertades públicas y sin representar ningún cambio social o económico; salvo esporádicos y superficiales enfrentamientos, las oligarquías sociales y económicas se mantuvieron, sumándose a ellas los seguidores del nuevo régimen. Los únicos perjudicados directos fueron los políticos del régimen monárquico que se vieron -algunos- marginados del poder. Como puede comprenderse el dilucidar si Primo de Rivera era sincero en su palabrería regeneracionista es una cuestión trivial.

En efecto: aunque el partido Radical, principal organización republicana, había evolucionado de ser un partido exclusivamente radicado en Cataluña a un partido de alcance nacional, su organización era sin embargo sumamente débil, basada en partidos autónomos locales, cuya única relación orgánica era frecuentemente el reconocimiento del ideario del partido y de su líder, Alejandro Lerroux. Fuertemente implantado en ciertas zonas (Levante por ejemplo), prácticamente ausente en otras, no contaba con una fuerza suficiente como para hacer peligrar el régimen, y muchísimo menos con los suficientes cuadros y con un programa elaborado y renovador que hiciese factible la pretensión de implantar la República.

El partido reformista de Melquiades Alvarez, fundado en 1912, que representaba, en cuanto propugnador de una "nueva política" dentro del marco monárquico, el posibilismo otrora encarnado por Castelar, y que en un principio había - atraído en su torno a toda la intelectualidad politizada, había derivado hacia una esterilidad política y una completa falta de empuje, muy posiblemente consecuencias de la escasa capacidad organizadora de su fundador (1).

El Partido Reformista, como decía Azaña (2) había recorrido el camino de acercamiento a la Monarquía, necesario para gobernar, sin que se viese cercana tal posibilidad, nece

(1) Tal era la opinión de Azaña, OC. III, p. 819.

(2) Ya en 1915 pensaba Azaña así de la trayectoria de M. Alvarez, id. id.

saría contrapartida para que fuese rentable dicha evolución. Esto es: ni había sabido hacerse imprescindible, ni la ceguera y concepciones del monarca le habían permitido a éste ver la posibilidad de renovación que el reformismo ofrecía.

Como consecuencia de tal situación, la opinión republicana se hallaba en gran medida dispersa y sin perspectivas reales de llevar a cabo la parte esencial de su ideario, esto es, el cambio de régimen, en tanto que punto de partida para una renovación del país. Es más: ni siquiera contaba con la posibilidad cercana de actuar dentro de la monarquía como soporte de un gobierno en el que figurasen sus figuras representativas.

Sin embargo esta situación cambiará sustancialmente a raíz de septiembre de 1923; como consecuencia del suicidio de la Monarquía, se le abría a la República una ocasión histórica para unir de forma irrefragable la existencia de las libertades públicas y el gobierno parlamentario con su propia existencia y el consiguiente derrocamiento de la dinastía reinante.

Sin embargo y como antes dijimos, la reacción de los líderes republicanos no fue la que cabía esperar; una ambigüedad sin límites fue lo que caracterizó su actitud primera. La mayoría calló y sólo hubo algún gesto simbólico como en el caso de M. Alvarez a la sazón Presidente del Congreso, quien realizó una visita casi protocolaria a Palacio, junto con Romanones -Presidente del Senado- para advertir al soberano de la responsabilidad de no convocar nuevas Cortes en el plazo cons-

constitucional. Si como veremos más adelante, la perspicacia de Lerroux le hizo advertir pronto la necesidad de acometer una labor ímproba de reorganización de las fuerzas republicanas que permitiese recoger la involuntaria herencia que la Dictadura les ofrecía a mayor o menor plazo, M. Alvarez en cambio sería uno de los pocos líderes que jamás llegó a comprender la transcendencia de los acontecimientos de septiembre. Se limitó a permanecer ambigualmente al margen de la Dictadura esperando el retorno a la normalidad constitucional (1).

Manuel Azaña formaba parte en 1923 del partido Reformista. A él pertenecía casi desde su fundación en 1912 (2). Poca había sido su actividad en él. Redactó la parte del programa referida a los asuntos militares, y por dos veces intentó lograr un acta de diputado presentándose, con escaso apoyo de su partido, por el distrito de Puente del Arzobispo (Toledo), en 1918 y 1923. No es extraño que inmediatamente después del golpe de Primo de Rivera, Azaña escribiese una carta a su jefe político, M. Alvarez, dándose de baja ante su inactividad en tales circunstancias. El incumplimiento por parte del monarca del juramento de respeto a la Constitución, exigía en opinión de Azaña, una franca y decidida declaración de republicanismo, con la subsiguiente campaña propagandista y organizativa.

(1) Sobre la pasividad de M. Alvarez ante la Dictadura, vid. Oliveros, *Asturias ...*, p. 204.

(2) Para éste y otros datos biográficos de la época prerrepública de Azaña, vid. Marichal, *La vocación de M. Azaña*; Sedwick, *The Tragedy of ...*; Rivas-Xerif, *Retrato ...*

El partido Reformista, colectivamente o por medio de su jefe, no inició ningún tipo de actividad que indicase que el criterio político de Azaña era compartido por sus correligionarios.

De la actividad de Azaña en 1924, tras esta separación del Partido Reformista, tenemos una sola e importante noticia, el manifiesto suscrito individualmente por él, titulado "Apelación a la República". De los dos breves fragmentos que han llegado hasta nosotros (1) se podría destacar una idea que es básica en el sistema de pensamiento de Azaña: la democracia no es sólo un sistema de gobierno sino que implica -debe implicar, habría que decir- escuela, cultura, civilidad. Pero si eso falta, o incluso si como sistema de gobierno funciona defectuosamente -como sucedía en España-, "tenemos que satisfacernos con unas Cortes defectuosas para no caer en un despotismo perfecto". No se ha encontrado -afirma Azaña- sustitutivo del parlamentarismo, por lo que las críticas que se le hagan deben reconocer válido, para no beneficiar a la reacción, que "el órgano preponderante, mientras los hombres deseen ser libres y se gobiernen por opiniones, será una asamblea, una reunión donde pongan en común sus puntos de vista, y los contrasten, los acepten o rechacen sumando votos. Eso o la violencia. La cuestión es siempre la misma: querer la libertad o no quererla".

Por ello, Azaña fue de los pocos que no vaciló en una rotunda condena del pronunciamiento de Primo de Rivera, frente a la actitud de otros intelectuales.

(1) Azaña, OC. Ip.555.

2. CREACION DE ACCION REPUBLICANA

CREACION DE ACCION REPUBLICANA

Las actividades políticas del doctor Giral y de Martí Jara, ambos catedráticos de Universidad, iban a culminar en mayo de 1925 con la firma de un Manifiesto, suscrito por numerosos intelectuales, en el que comunicaban la constitución de una agrupación -Acción Política, pronto Acción Republicana- que pretendía la unión de toda la opinión republicana, militase o no en grupos organizados.

El manifiesto lo conocemos porque Azaña lo incluyó en el prólogo de su recopilación de discursos "Una política"(1), sin duda con la intención de demostrar la raigambre republicana "de antes de la República" de su grupo, que para la mayoría de los españoles nació con la República. La censura impidió su publicación en la prensa española, siendo reproducido en cambio, por lo menos fragmentariamente, por la prensa hispanoamericana, como recuerda Azaña en dicho prólogo (2).

Aunque la participación de Azaña en la iniciativa política debió ser destacada, pronto debió perder el entusiasmo organizador, a pesar de que fuera considerado por el resto de sus correligionarios y desde luego por los principales promotores del grupo, Giral y Martí Jara, como una de las principales

(1) Azaña, OC II, p. 4

(2) La Nación, de Buenos Aires, por ejemplo, incluyó algunos párrafos en primera página el 12 de mayo. Se hablaba de que lo lanzaban "los intelectuales y algunos políticos destacados" sin dar nombres.

figuras con que contaban.

Pocas son las fuentes en que nos podemos basar para el análisis de las circunstancias anteriores a 1930. La censura no dejaba traslucir la actividad política de signo contrario a la Dictadura y, por otra parte, actividades iniciales de Acción Política no pasaban de ser reuniones de personalidades que deseaban formar una organización de todos los republicanos, pero por fuerza de las circunstancias sin posibilidad de organizar actos públicos. Por ello nos basamos fundamentalmente en las memorias de los que participaron en aquellas actividades y, en primer lugar, en las propias de Azaña. Claro está que no son sino hipótesis razonables a falta de una más abundante documentación, si es que llega a aparecer.

Pues bien, según su propio testimonio, Azaña fue prácticamente arrastrado a la acción política por Martí Jara y Giral, forzándole a abandonar su actitud evasiva, y designándole "con la extrañeza de algunos o con desdén de otros" (1) para los puestos de dirección del grupo y para los organismos representativos de las organizaciones republicanas a partir de la creación, en 1926, de la Alianza Republicana. De su mano es sin duda el manifiesto que comentamos.

(1)

Azaña, OC IV, p. 85, al escribir el 18 de agosto del 31 unas notas en el aniversario del fallecimiento de Martí Jara.

Que sepamos, la firma del manifiesto es la única actividad fundacional del grupo, que se titularía Acción Política; no se eligió ninguna directiva entonces, ni conocemos ningún programa de actividades (lo que no implica, huelga decirlo, que no existiera). Vamos, por lo tanto, a comentar brevemente la naturaleza del grupo nacido en tan adversas circunstancias, en base a dicho manifiesto.

El grupo que acaba de nacer no cabe desde luego calificarlo como partido político. Y no porque ellos lo nieguen, pues tal negativa puede no pasar de una estratagema tranquilizante para el resto de las organizaciones republicanas, con objeto de facilitar la implantación de un nuevo partido. Sin embargo, la declaración de objetivos declarados en el Manifiesto indica claramente que la nueva asociación política es, en principio, una organización suprapartidaria con la misión de agrupar en su torno, tanto a los individuos no organizados hasta ese momento en ningún partido como a los diversos partidos ya existentes, con objeto de potenciar la actividad propagandista de carácter republicano. Cabalmente la impresión que se saca de la lectura del Manifiesto es que en su primera concepción, Acción Republicana -Acción Política- pretende ser lo que meses más tarde se constituiría con el nombre de Alianza Republicana. Sería difícil averiguar si la intención última de los fundadores era desde un principio ir a la constitución de un grupo político autónomo, o si por el contrario se pretendía sinceramente dar cohesión a los diversos partidos ya existentes y a la opinión no agrupada por ellos. Nuestra opinión es

que la intención era ésta, sin perjuicio de que se pensase en una ulterior transformación en partido si las circunstancias lo permitían y aconsejaban, como se venía a reconocer al afirmar: "Embrión de un partido, centro organizador, agente de relación; todo eso y más que las circunstancias demanden, pretende ser".

En cuanto al contenido ideológico, el Manifiesto es un repudio de la situación presente, un público compromiso político de carácter democrático para que no se interprete el silencio como aceptación de la Dictadura y una invocación a la República como necesidad política interna y que posibilitase asimismo una mejora de nuestras relaciones exteriores (1).

Respecto al nombre que escogiera el grupo, lo más probable es que como supone Marichal, en un primer momento se llamase Acción Política, para pasar a ser, en el mismo 1925 , Acción Republicana (2).

(1) Incluimos el Manifiesto en el Apéndice.

(2) *El 11 de febrero de 1926. Manifiesto*, Madrid 1926. En este libro-manifiesto que editó la Alianza Republicana para conmemorar su nacimiento, se cita en dos ocasiones a Acción Política: al informar que "se ha convenido por ese núcleo de intelectuales que se llama de "Acción Política" abandonar el tema de la accidentalidad de las formas de gobierno "(postulado reformista)" por incompatible con la realidad española y declararse resueltamente en favor de la instauración de la República" (p.139), y después, al aludir a la necesidad de una mejor convivencia entre las diversas regiones y de un resurgimiento de la propia Castilla, labor "comenzada con actitud resuelta por el grupo de "Acción Política" que representa el Sr. Azaña" (p.143). Sin embargo entre los firmantes del Manifiesto de la Alianza, Azaña aparece en representación de Acción Republicana (p.198). Este nombre sería ya definitivo.

Sin embargo, lo más importante radica en que, según todos los indicios, manifiesto y agrupación constituyeron un fracaso. Quizás ahí resida la causa de ese desánimo y soledad que Azaña atraviesa en 1925 (1). En un artículo de 1926 en el que Luis Araquistain comenta con sumo escepticismo el nacimiento de Alianza Republicana, recuerda para apoyar su postura lo que pasó con el intento de constituir un año antes una organización republicana y de lanzar en tal ocasión un manifiesto que creemos sin duda que hace referencia a Acción Republicana. A pesar del tono mesurado del manifiesto, decía Araquistain, casi nadie de los que presumiblemente estarían dispuestos a firmarlo lo habían hecho, con sutiles pretextos sobre uno u otro párrafo (2).

En 1932, en un discurso ante su partido, Azaña llegaría a decir que cuando hicieron circular el Manifiesto por Madrid, les fue difícil encontrar una veintena de firmas que lo subscribiesen; aunque la cifra pudiera ser una manera de enfatizar el poco eco alcanzado, es muy indicativo de lo que debió ocurrir (3).

Aunque muy influido por la enemistad hacia Acción Republicana y Azaña todo el contenido del Libro de Oro que el P. Radical editó en 1934, lo más probable es que fuera cierto cuanto refiere del fracaso en la constitución de Acción Repu-

(1) Azaña, OC IV, p. 85.

(2) *El Sol*, 3-4-1926.

(3) Azaña, OC.II, p.325.

blicana y su inexistencia práctica hasta 1930. Afirma que fracasado el intento, Martí Jara y Giral propusieron a los demás representantes de los partidos históricos que Azaña formase parte de la Junta Provisional de la Alianza en representación de los intelectuales firmantes y de los que ingresasen en lo sucesivo. Pero afirma que Acción Republicana "ni se llegó a organizar, ni cotizó, ni tuvo Junta directiva, ni celebró ninguna Asamblea hasta cuatro años después de constituida la Alianza Republicana" (1).

Por último, la Dictadura no implicaba en modo alguno, la imposibilidad de reunirse o de constituir grupos republicanos, etc., y permitía, incluso, dar breve noticia de ello a la prensa. Las restricciones se referían más bien a actos públicos, actividades claramente propagandistas, censura en la prensa, etc. El hecho de que a partir de 1929, cuando empiezan a abundar las noticias sobre formación de organizaciones locales de Alianza Republicana o del recién nacido Partido Radical Socialista, no se encuentren referencias a Acción Republicana hasta febrero de 1930, creemos que es un factor más que prueba la existencia casi formal del grupo durante estos años, como veremos al examinar el papel de Acción Republicana en la Alianza Republicana.

(1) *Libro de Oro ...*, p.151, la prolija explicación que se hace en esta obra del nacimiento de Alianza Republicana estaba provocada porque en unas "Bases de un ideario político" que había editado Acción Republicana, se afirmaba que "Acción Republicana concibió y creó "Alianza Republicana" como un instrumento de inteligencia y cooperación para instaurar la República". Aunque lo más probable es que la principal iniciativa fuera de Giral y Martí Jara, oficialmente como explicamos, la idea fue impulsada por la Escuela Nueva".

3. ALIANZA REPUBLICANA

ALIANZA REPUBLICANA (1926 - 1930)

La Alianza Republicana nació en 1926, con la finalidad de constituir un organismo estable de coordinación republicana. La iniciativa había partido de los animadores de la Escuela Nueva, institución de carácter pedagógico y político, fundada en 1911 por Núñez de Arenas y en la que Giral, Martí Jara y Marsá Bragado desempeñaron puestos de importancia a partir de 1923 (1).

Estos mismos fundadores fueron los que se encargaron de hacer las gestiones pertinentes aunando a los líderes republicanos y organizando como primer acto la celebración conjunta del 11 de febrero de 1926 (aniversario de la I República). Dicho acto fue un éxito, tanto en Madrid como en provincias, decidiéndose entonces las principales figuras y líderes de partidos republicanos a lanzar un manifiesto y a constituir órganos de la Alianza Republicana en todas las provincias, coronados por una Junta nacional provisional en la que figuraban esos mismos jefes republicanos.

La pretensión era la de que en todas las localidades y en los niveles provincial y nacional, se creasen órganos donde quedasen integrados todos los grupos, entidades y asociaciones de carácter republicano, así como las personas indivi-

(1)

Una breve reseña de la historia de la Escuela Nueva en Tuñón de Lara, "Medio siglo ...", p. 163.

duales que lo quisiesen, y que dichos organismos, subordinados jerárquicamente a los de nivel superior sirviesen para todo tipo de movilizaciones y actividades conjuntas de orientación republicana.

La Alianza reunía la originalidad de ser un órgano de coordinación que a la vez poseía una cierta capacidad de iniciativa y actuación (1). Si bien en un primer momento la respuesta parece que fue alentadora, en los años siguientes y hasta 1930 las únicas actividades de cierto relieve siguieron siendo la celebración del 11 de febrero. Y si al principio se habían logrado superar las reticencias de algunos sectores republicanos, en 1929 se produjo, a consecuencia de disensiones políticas, un proceso de desintegración, que tuvo como consecuencias más graves la creación del Partido Radical Socialista por Marcelino Domingo y Alvaro de Albornoz, la salida de algunos elementos intelectuales y la temporal separación de los federales madrileños (2). Sin embargo, más tarde, los radicales socialistas firmaron un pacto de actuación conjunta -Unión Republicana, mayo de 1930- a la vez que los elementos federales retraídos se reintegraron en la Alianza, restaurándose así la unidad propagandística.

(1) Respecto a los orígenes de la Alianza Republicana, vid. el *Libro de Oro* citado y el libro-manifiesto "*Alianza Republicana*"; el primero reproduce varios documentos de éste.

(2) Vid. Ruiz Manjón, *El Partido Republicano Radical ...*, p.136 y ss.; la causa fue la actitud excesivamente colaboracionista con los elementos monárquicos del jefe radical Lerroux.

La Junta provisional de Alianza Republicana que se constituyó en 1926 estaba compuesta por Azaña (Grupo de Acción Republicana), Manuel Hilario Ayuso (Partido Republicano Federal), Roberto Castrovido (Prensa Republicana), Marcelino Domingo (Partido Republicano Catalán) y Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical), siendo los secretarios Giral, A. Marsá y Martí Jara.

Azaña pasó a ser el representante en la Alianza de los intelectuales independientes que se fueran adscribiendo a ella, según lo que afirma el Libro de Oro del P. Radical, quedando genéricamente englobados en la Acción Republicana. Aunque esto, como antes dijimos, estuviese bastante cerca de la realidad, no excluye que se fueran formando auténticos grupos de Acción Republicana en diversas ciudades aunque sin práctica política y sin estructuración organizativa interna. En un discurso de 1929, Lerroux afirmaba de Acción Republicana "que tiene representantes en casi todas las poblaciones donde hay Universidad, Facultad o Instituto" (1). Será ya después de la asamblea del grupo madrileño de Acción Republicana de febrero de 1930 cuando se empezará a tener noticias de la formación de núcleos suyos en diversas poblaciones.

A pesar de la poca actividad de la Alianza -en lo que nosotros conocemos- durante los años 1926-29 y de la separación de los elementos radical-socialistas, a partir de 1929

(1) García Nieto-Donazar-López Puerta, *La dictadura...*, p. 217.

empezaron a constituirse en diversas provincias los organismos provinciales que, en su gran parte, debían estar integrados por elementos radicales. Y una vez caída la Dictadura, en enero de 1930, se comenzaron a organizar actos públicos, prohibidos hasta entonces.

Así el 11 de febrero de 1930 se conmemoró por vez primera con la posibilidad de pronunciar discursos. En Madrid uno de ellos corrió a cargo de Azaña, quien habló en nombre de su grupo.

El discurso de Azaña era una vibrante arenga en la que se llamaba a la acción, que incluye muchas de las ideas que luego explayará en otros discursos e intentará llevar a la práctica: progreso social, laicismo, supresión del militarismo, necesidad de dominar la escuela, etc. (1).

El acto político más importante sin duda, de todos los organizados por la Alianza fue el mitin de la plaza de toros de Madrid, que tuvo lugar el 29 de septiembre. Ya en marcha la conspiración republicana y más unidos que nunca lo habían estado tras el pacto de San Sebastián, dicho acto puso de manifiesto su capacidad de convocatoria y evidenció que el movimiento republicano se hallaba en un momento de plena expansión. Ante la plaza abarrotada hablaron Cárceles, Abad Conde, Martínez Barrio, Marco Miranda, Azaña, M. Domingo, Alcalá Zamora y Lerroux. Entre ellos sumaban cinco de los ministros de los tres principales partidos republicanos que iban a integrar

(1) Azaña, OC. II, p. 7.

el futuro Gobierno Provisional (1).

El mismo día comenzó también, la asamblea nacional de Alianza Republicana. La Junta nacional la componían entonces Azaña, Castrovido, Giral, Lerroux y A. Marsá. En la asamblea se leyó una prolija Memoria en la que se hacía historia de las actividades de la Alianza desde su fundación, ésta era la primera asamblea que tenía lugar, y allí se mencionaba "por su extraordinaria importancia, el alentador aumento y desarrollo considerable de los grupos de Acción Republicana, partido que presidió D. Manuel Azaña".

Como decisión política de interés de la Asamblea hay que citar la propuesta de Rico (de Acción Republicana) de dejar a la decisión de los partidos la postura a adoptar en caso de contienda electoral, aprobada frente a otra propuesta que declaraba taxativamente la abstención de los partidos de la Alianza "ante una farsa electoral que puede consolidar la monarquía"; todo ello, naturalmente se refería a las elecciones legislativas previstas por Berenguer.

Se eligieron asimismo los treinta componentes de la Junta nacional, de los cuales quince lo eran en representación de Madrid, y los otros quince de provincias. La mayor parte de ellos pertenecían al Partido Radical y a Acción Republi-

(1)

Sobre el acto, *El Sol* y *El Liberal*, 30-9-30.

cana (1). De Acción Republicana estaban entre los representantes madrileños, Castrovido (2), Giral, Pico, Azaña, Honorato de Castro, Coca, F. Carreras, L. Martín, Echevarría, Luis Doportó y H. Rodríguez Pinilla, superando, lo que no deja de ser sorprendente, al Partido Radical. Dado que eran una candidatura presentada por la Mesa y que fue aprobada por unanimidad, se quiso con toda seguridad dar una cantidad aceptable de puestos en la Junta a Acción Republicana, que quedaban de sobra com pensados con los de provincias, casi en su totalidad del Parti do Radical.

Por provincias representaban a Acción Republicana, D. Angel Pascual Devesa, de Alicante, con 20 votos, y Arturo Cortes (Albacete, 26 votos).

El número de sufragios recibido oscilaba entre un máximo de 38 y un mínimo de 19, recibiendo los representantes radicales un número notablemente mayor de votos.

Por último, entre los consejeros residentes en Madrid, se eligieron varias comisiones; la de Acción Política re sultó compuesta por Azaña, Rodríguez Pinilla y Castrovido, y la Comisión Ejecutiva, máximo órgano de dirección por: A. Marsá, Lerroux, Giral, Azaña, Rico, De Castro y Guerra del Río, actuando de secretario De Castro (3).

(1) Desconocemos si alguno de los nombres pertenecen al Partido Federal.

(2) Sobre la militancia de Castrovido, vid. infra.

(3) *Libro de Oro*, p.177; *El Sol*, 7-10-30, y *El Liberal*, 10-10-30. Hay algunas

El mitin republicano de la Plaza de Toros madrileña sellaba la unión de los republicanos, incluso por encima de la Alianza (participaba por ejemplo Alcalá Zamora).

Tras lograrse en octubre la conjunción con los socialistas (1), y una vez transformado el Comité Revolucionario en un Gobierno Provisional, las perspectivas para el movimiento antimonárquico eran optimistas. A partir de entonces, su actividad propagandística se incrementaría enormemente, organizándose multitud de actos públicos con gran afluencia de partidarios, frente a una escasa actividad de masas de las derechas. Conforme se fueron acercando las elecciones municipales de - abril del 31, los actos pasaron a ser en muchos casos conjuntos con los socialistas, reflejándose así la unidad alcanzada.

Y en esa actividad propagandística de muchos meses es donde estaría probablemente la base inmediata de la victo-

(3) cont. pág. anterior

discrepancias pues la prensa añade entre los representantes en la Junta nacional por Madrid a Torres Campañá (sumando así 16) y como representantes por provincias se dan solo los nombres de Blasco, Martínez Barrio, Marraco, E. Vaquero y A. Garra. *El Liberal* del 12 daría la lista correcta; *El Libro de Oro*, que reproduce las actas de las sesiones nos parece lo más fiable a pesar de ser posterior. Se nombraron también sendas comisiones de Hacienda y de Relaciones y Propaganda. Todo lo referente al desarrollo de la asamblea en las págs. 171 y ss. del *Libro de Oro* y en *El Sol* y *El Liberal* de los días 30-9-30 y ss.

(1) El enlace de los republicanos con los socialistas lo formaban Alcalá Zamora y Azaña precisamente; A. Rosal, *"Historia de la U.G.T. ..."*, p. 324.

ria antimonárquica, al permitir una amplia difusión de sus puntos de vista y de sus acusaciones sobre las responsabilidades anticonstitucionales de la monarquía (1).

(1) Sobre el auge del republicanismo como consecuencia de su adaptación a nuevas circunstancias políticas, de contacto directo con los electores, vid. Tusell, *La Crisis* ..., p. 309 y ss.

4. REPARACION PUBLICA DE ACCION REPUBLICANA

REAPARICION PUBLICA DE ACCION REPUBLICANA

El 8 de febrero de 1930 se convocó por medio de una nota en la prensa (1), una reunión de "afiliados y simpatizantes" con objeto de nombrar junta directiva y "organizar la propaganda de modo intensivo"; la reunión tuvo lugar ese mismo día en el Círculo Republicano Federal (en Echegaray, 20), pues Acción Republicana no contaba todavía con local propio (2).

La reunión fue presidida por Azaña, cabeza visible hasta ese momento de Acción Republicana, a pesar de ser una figura poco conocida especialmente fuera de Madrid; actuaron de secretarios Martí Jara y Giral, es decir el núcleo alentador y organizador del grupo. En la reunión se eligieron los representantes del grupo en las juntas nacional y local de Alianza Republicana. Para la primera se confirmó a quien le venía representando desde el comienzo, es decir, a Azaña. Para la junta local de Madrid se eligieron los siguientes afiliados: José Serrano Batanero, Leonardo Martín Echevarría, Pedro Rico, Pedro Rodríguez, Angel Navarro Blasco, Manuel Martínez Risco, Vicente Gaspar, José Royo Gómez y José Giral.

Asimismo se nombró la secretaría del grupo: Pedro Rodríguez, Francisco Escola, Olimpio Gómez Ibáñez y Jose Gi-

(1) *El Sol*, 8-2-30.

(2) *El Sol*, 11-2-30; y no el 12 de marzo, como dice Artola, *Partidos y Programas...*, Ip. 577.

ral (1).

El hecho de designar la secretaría del grupo madri
leño y los representantes locales en Alianza Republicana, así
como la confirmación de Azaña en su puesto de representante
nacional, que hasta ese momento no había sido electivo, mues-
tra que el grupo madrileño se comportó como portavoz de Acción
Republicana a nivel nacional, en la medida en que hubiese re-
laciones efectivas con los otros núcleos provinciales. Estas
relaciones fueron uno de los puntos de la discusión y en la
referencia de prensa se citan como existentes los grupos de
Acción Republicana de Granada, Palencia, Salamanca, Zaragoza,
Barcelona y Segovia.

También se da la razón de que se celebren ahora elec
ciones para tales cargos por primera vez: las circunstancias po
líticas de todos conocidas habían impedido que estos nombramien-
tos fueran hechos en la forma democrática indispensable a todo
organismo republicano. El número de asistentes, según la refe-
rencia, fue de cerca de 200 personas.

Un Manifiesto: El mismo 13 de marzo en que se inser
tó en *El Sol*, con algún retraso (ya había dado otra más breve
el 11 de febrero) la referencia de la reunión anterior se pu-
blicó también en el mismo periódico un manifiesto con fecha de

(1)

Este último fue probablemente elegido secretario general, quizás por
la propia secretaría, pues la reunión que veremos del 19-5-31, será
presidida por él en cuanto secretario.

enero y que venía a ser la nueva presentación en público del grupo. El contenido esencial del manifiesto es el siguiente:

- Se afirma que el grupo se fundó "a finales de 1925" (lo que es como sabemos inexacto), por personas dedicadas a trabajos intelectuales; afirmación pública del componente sociológico de sus militantes plenamente demostrada al consignar las profesiones de los firmantes del manifiesto "por el grupo de Madrid" (únicas firmas publicadas).

- Se insiste al igual que cinco años atrás en que el aglutinante del grupo consistía en cooperar en la instauración de la República, dando cohesión a todo el republicanismo nuevo, no incluido en los partidos históricos, y cooperando con éstos para dicho fin; conllevaba la ausencia de un programa concreto y la admisión de diversidad de opiniones dentro de los grupos de Acción Republicana, con objeto de dar fuerza política a sectores dispersos o no actuantes hasta ahora, y sobre todo se insistía en el rechazo de la calificación de partido: el dársela no aumentaría la efectividad del grupo y podría producir divisiones en los partidos restantes.

- Sin embargo, no se excluye la posibilidad de transformarse en partido; pero tal evento solo se considera posible cuando exista plena libertad de palabra (todavía ni se había suprimido la censura ni se había levantado la suspensión de de rechos y libertades públicas) que permitiera movilizar la opinión pública sobre las cuestiones fundamentales del país.

- Respecto a la organización interna del grupo se reconoce el funcionamiento interno democrático e igualitario ("todos los miembros son iguales", para asuntos comunes se nombran delegados, lo que no deja de ser una afirmación peculiar); al mismo tiempo se afirma también que el grupo funciona mediante un organismo central constituido en Madrid, y organismos locales en las demás provincias. No parece sin embargo, por la reunión de febrero, que el organismo central fuese por el momento otra cosa que el grupo local de Madrid. De todas formas, se plantea como tarea urgente el fortalecer la organización donde existiera y crearla allí donde no la hubiere.

El manifiesto va suscrito por 140 firmas, entre las cuales es abrumador el predominio de las profesiones intelectuales y universitarias: 112 de ellos lo son, destacándose la importancia numérica de los catedráticos (27), abogados (16), ingenieros (13), médicos (13) y farmacéuticos (12).

Hay que señalar también que junto con figuras representativas de Acción Republicana que ocuparán puestos directivos en el futuro, firman el manifiesto personas que pronto dejarán de pertenecer a él, como por ejemplo Eduardo Ortega y Gasset.

Aunque como veremos más adelante, Acción Republicana será, una vez que se estructure como un auténtico partido político, un partido de masas, por el momento no pasaba de ser una organización política que no podía ser calificada de auténtico partido político -ni por sus pretensiones, ni por su es-

tructura, etc.- y que si acaso se acercaba a un incipiente partido de cuadros. Por su composición social, por su escasa actividad política, por su presencia tan sólo en las principales localidades, entre otros rasgos, se le podría considerar como una laxa organización política de cuadros (1).

Poco tiempo después, el 29 de marzo, en otra reunión del grupo madrileño, presidida igualmente por Azaña, se amplió la secretaría como consecuencia de exceso de trabajo, lo que parece indicar que el proceso de consolidación iba bien (2); pero aparte las cuestiones organizativas, lo más interesante de esta reunión fue el discurso pronunciado por Azaña. Por lo que se deduce de la referencia de prensa, se debió discutir el tema de la unidad de los diversos grupos republicanos. Hay que recordar que la iniciativa de M. Domingo y A. de Albornoz de constituir un nuevo partido en 1929, el radical-socialista, desgajándose de la Alianza Republicana, había tenido un inmediato éxito organizativo presentándose como la moderna alternativa al Partido Radical, y superando rápida y ampliamente a los escasos e inconexos grupos provinciales de Acción Republicana.

La razón de ello, quizás, se debiera a que mientras Acción Republicana nacía muy caracterizada por su componente intelectual, los fundadores radical-socialistas contaban con

(1) Sobre los requisitos necesarios para considerar como partido político a una organización política, vid. Weiner y La Palombara, "*Political parties...*", p.6.

(2) *El Sol*, 1-4-30.

mucha mayor popularidad como antiguos prohombres republicanos y habían logrado atraer en una activa campaña organizativa a numerosos núcleos de republicanos conocidos localmente y a partidos republicanos autónomos; M. Domingo disponía también con sus habituales colaboraciones periodísticas de una magnífica plataforma propagandística.

Sea como fuere el caso es que la indeterminación programática de Acción Republicana y el carácter apartidario del grupo (justificado como vimos en el manifiesto de enero) y la mayor vitalidad de los otros dos partidos republicanos, provocó que hasta la adquisición definitiva de un perfil ideológico propio a lo largo de la discusión constitucional en 1931, Azaña tendrá que insistir frecuentemente en la necesidad de mantener la independencia de Acción Republicana y de no destruirla en la fusión con alguno de los otros partidos.

En esta ocasión, Azaña, tras historiar los orígenes de Acción Republicana -algo que se repetirá en las intervenciones públicas de los líderes de Acción, todo a lo largo de la vida del grupo- justificó extensamente la existencia de una pluralidad de grupos republicanos como consecuencia de la riqueza ideológica del pensamiento republicano. Negó la necesidad de su fusión, aunque reconocía la conveniencia de pactos para asuntos concretos de interés común. Esto sin embargo, no pasaba probablemente de una mera táctica para justificar la independencia de Acción Republicana, la cual, sin duda para muchos de sus miembros no debía estar tan clara al haber sido desbordados por

los radical-socialistas. El mismo Azaña, años después se lamentaría de la innecesaria proliferación de grupos republicanos que hubo en la época anterior a la implantación de la República, pensando sin duda en la aparición del Partido Radical Socialista. Intentando este constituirse, al igual que Acción , en un aglutinante del nuevo republicanismo, suponemos que Azaña vería su nacimiento con reticencia, existiendo ya el núcleo de Acción Republicana.

A partir de estas reuniones, abundaron en la prensa notas sobre la constitución de organizaciones de Acción Republicana, en numerosas localidades. Los grupos republicanos de reciente constitución (radical-socialistas, Acción Republicana, y otros) experimentaron en esta época un proceso de crecimiento y extensión cuya eficacia y límites no se comprobarían hasta las elecciones de junio del 31; simultáneamente los partidos históricos (radicales y federales) se dedicaban a reorganizar sus filas, con diferencia notable en ímpetu y efectividad a favor de los primeros.

En los casos más favorables eran partidos locales, círculos o casinos republicanos los que se adherían en bloque a uno u otro partido, facilitando así la implantación del mismo en la localidad, a modo de cabeza de puente.

Las elecciones de junio del 31, como decimos, demostrarían que en el campo del nuevo republicanismo de izquierdas, los radical-socialistas habían ido mucho más lejos que Acción Republicana.

5, CONSPIRACION REPUBLICANO SOCIALISTA Y
PACTO DE SAN SEBASTIAN

CONSPIRACION REPUBLICANO SOCIALISTA Y PACTO DE SAN SEBASTIAN

Azaña asistió a la reunión de San Sebastián, en representación tanto de la Alianza Republicana, junto con Lerroux, como de su propio grupo de Acción Republicana. Ningún papel destacado desempeñó en la discusión, además de llegar, según los diversos testimonios, con bastante retraso (1). En efecto, el espinoso asunto del acuerdo sobre la cuestión catalana, y en general sobre las autonomías, estaba ya resuelto cuando él llegó. Pero no por ello dejó de ser elegido para el comité ejecutivo que habría de encargarse de las tareas conspiratorias junto con Alcalá Zamora, Casares, Prieto, Galarza y Aiguader (2).

Al transformarse el Comité revolucionario en Gobierno Provisional, en él se le adjudicó a Azaña la cartera de Guerra, una de las de mayor trascendencia en caso de que se implantase la República, dado el carácter maybritariamente monárquico del Ejército, los compromisos de numerosos militares con la Dictadura y la existencia de conflictos de cuerpo como el de los artilleros, enconados y de difícil solución. Fue una de las pocas carteras cuya atribución se debió a la presunta capacitación técnica del que iba a ocuparla merced precisamente a sus estudios y ensayos sobre política militar francesa (3). En efec

(1) *Libro de Oro*, p.164; Aiguader, *Cataluña*, p. 76 y ss.

(2) *Artola, Partidos y Programas....*, p.578.

(3) *Guzmán, 1930*, p.378; Maura, *Así....*, p.225.

to, Azaña había visitado, con una serie de escritores y periodistas aliadófilos, los frentes militares en la guerra del 14. Y debía ser conocido también por los restantes miembros del Gobierno Provisional el hecho de que por las anteriores razones precisamente había elaborado él la ponencia de política militar del Partido Reformista en el Congreso de 1918 (1).

El Gobierno Provisional, aparte de por sus labores organizativas, fue un caso ejemplar por su dedicación y estudio de los principales problemas que debería abordar en caso de llegar al poder. Según testimonio de varios de sus miembros, se discutieron por extenso la reforma agraria, la militar, la económica, la política y exterior militar, etc. La única figura silente fue Lerroux, quien descubrió así, en opinión de sus compañeros de conspiración, su profundo desconocimiento de todos los temas de gobierno; el resto discutieron los asuntos más decisivos que habrían de solventar en los primeros momentos en sus respectivos Ministerios. El gran fallo fue probablemente no aplicar en el período de efectivo gobierno provisional los planes elaborados entonces en todas las materias, como se hizo en el terreno militar. Especialmente en lo que toca a la reforma agraria el error se pagó caro (2).

(1) Marichal, *La vocación...*, p. 119.

(2) Maura, *Así cayó ...*, p.81 y ss.; M. Domingo, *La experiencia...*, p.20; Alcalá Zamora, *Memorias*, p.146; Miguel Maura, retrospectivamente se suma a la opinión expresada en el texto, a pesar de que junto con su entonces correligionario Alcalá Zamora fue el responsable de la "moderación" de posponer las reformas a la acción de las Cortes, p.83.

La conspiración de diciembre fracasó por el concurso de varios factores. Desde la alerta que la anticipación del capitán Galán en Jaca significó para el Gobierno, hasta la falta de precaución de gran parte de los miembros del Gobierno Provisional, que no tomaron siquiera la elemental medida de cambiarse de domicilio, puede decirse que todo falló, como era tradicional en estos levantamientos de resabios decimonónicos. Quizá haya que resaltar el bloqueo que el tandem Besteiro-Saborit hizo de la decisión del Comité Ejecutivo de la U.G.T. de declararse en huelga el 15 de diciembre, así como el incumplimiento del compromiso de salir a la calle por parte de muchos militares -como sucedía siempre por multitud de causas- como dos de los factores más determinantes del fracaso, al fallar los dos elementos de fuerza de la conspiración, los militares y las masas obreras.

Jaca sería, con la ejecución de Galán y García Hernández, por la torpeza tanto del gobierno Berenguer como del monarca, que no calibraron lo que significaba otorgar dos mártires a la revolución, un factor importante en la mitología republicana.

Una vez fracasado el levantamiento, mientras que Alalcalá Zamora, Maura, Albornoz, Casares, Largo y De los Ríos, se dejaron detener o se entregaron a la policía, Prieto, Azaña y M. Domingo se ocultaron. El líder de Acción Republicana permaneció rigurosamente aislado hasta el mismo día de la proclamación de la República. Su cuñado Cipriano Rivas Xerif hizo creer

que al igual que Prieto, Azaña había salido de España y que se encontraba en Pau, hasta el punto de que el periódico *La Tierra* publicó un breve artículo de Azaña firmado en dicha ciudad; este artículo, prácticamente desconocido, pues no ha sido reproducido posteriormente, debió sin duda ser entregado al periódico a través del propio Rivas-Xerif (1).

El hermetismo del aislamiento de Azaña, quien al parecer apenas se comunicó con el resto del Gobierno Provisional preso en la cárcel Modelo, hizo según afirma Alcalá Zamora, que se le llegase a dar por dimitido como futuro Ministro de la Guerra, aunque ninguno de los restantes miembros del Gobierno Provisional encarcelados que han escrito sobre esa época dicen nada sobre el particular (2).

(1) *La Tierra*, 2-4-31; lo reproducimos en el Apéndice.

(2) Alcalá Zamora, *Memorias*, págs. 152 y 161.

6. GOBIERNO BERENGUER Y ABSTENCIONISMO ELECTORAL

GOBIERNO BERENGUER Y ABSTENCIONISMO ELECTORAL

Pocas actividades específicas de Acción Republicana, aparte las de organización y extensión, conocemos en los meses que median entre enero de 1931 y la implantación de la República.

Tras la intentona de diciembre, el hecho político más destacado fue sin duda la caída del Gobierno Berenguer, de bida a que se hizo inviable su proyecto de restablecimiento de la normalidad constitucional, una vez que la mayor parte de las fuerzas políticas decidieron abstenerse en las elecciones generales convocadas. En efecto, tanto la oposición republicano-socialista como los principales sectores liberales y conservadores declararon su intención de no concurrir a unas elecciones legislativas sin carácter constituyente, convocadas como si la Dictadura no hubiese existido. El hecho decisivo que provocó la caída de Berenguer fue la abstención de Romanones-Alba-Cambó, con lo que tan solo determinados sectores conservadores (Bugallal, Cierva) quedaban en liza.

Los partidos republicanos habían comunicado ya el día 30 de enero su decisión de abstenerse por medio de una lacónica nota en la que manifestaban "hacer público el acuerdo, hace tiempo adoptado de abstenerse totalmente"(1). Los socialistas se sumarían días después a la abstención.

(1)

Gutiérrez Ravé, *España en 1931*, p. 13.

Sin embargo por lo que respecta a Acción Republicana en concreto, la única noticia que tenemos sobre la actitud del grupo ante las elecciones se refiere a una reunión del grupo de Madrid -que sigue actuando como representante de todo el partido nacional- celebrada con posterioridad a esa fecha. Así pues se discutió a posteriori sobre la decisión acordada y hecha pública previamente por la directiva. Por otro lado, creemos que la decisión de la coalición republicano socialista no debió ser tomada con tanta antelación como da a entender la nota.

Dicha reunión del grupo madrileño tuvo lugar el 10 de febrero. En ella tras rendir homenaje a los afiliados representados por los hechos de Jaca y solicitar fondos para todos los perseguidos por tal motivo, se pasó a discutir la actitud a tomar ante las elecciones convocadas por Berenguer.

Hay que entender que lo que se discutía era la corrección de la postura ya adoptada por los líderes del grupo. En la discusión intervinieron Serrano Batanero, De Benito, Rico, Coca y Carmona. Todos coincidieron en la necesidad de la abstención, aunque frente a la propuesta del primero de ellos de participar votando "no a personas sino al ideal profesado" -lo que no se sabe bien qué actitud concreta significaba-, se impuso la actitud plenamente abstencionista, defendida por De Benito y Rico; se discutió sobre la situación de los funcionarios públicos, ante el temor de que el Gobierno pudiese tomar

represalias (1), acordándose con todo, la abstención; según Carmona, el Gobierno no se atrevería a crearse tal conflicto sancionando a los funcionarios. La reunión fue presidida por Giral, dado que Azaña se encontraba oculto (2).

-
- (1) La ley electoral de 1907 preveía, entre otras, sanciones económicas para los que se abstuviesen, percibiendo remuneración del Estado. (Art. 84).
- (2) *El Sol*, 14-2-31. En la reunión se habló de la desaparición de la documentación del grupo, actas de constitución del partido en provincias, etc., sin que se indiquen las causas.

7. ELECCIONES MUNICIPALES DE ABRIL DE 1931

ELECCIONES MUNICIPALES DE ABRIL DE 1931

Ante las elecciones municipales convocadas por Aznar, la conjunción se aprestó en cambio, a concurrir sin vacilar. Una renovación de las instituciones representativas a partir de los ayuntamientos les permitía una mayor prolongación de la eficaz campaña propagandística republicana y les posibilitaba a afrontar unas ulteriores elecciones a Cortes con mayores garantías de neutralidad del poder. Podían, además, medir sus fuerzas sin renunciar a la reivindicación de elecciones a Cortes constituyentes.

Pese a los intentos del Gobierno de restar importancia a las elecciones municipales, unos y otros fueron a ellas convencidos de su carácter plebiscitario sobre el régimen. Pero a la vez, ninguno esperaba unas consecuencias tan inmediatas como las que ocurrieron, aunque incluso en el lado monárquico hubiera muchas personalidades convencidas de que a mayor o menor plazo la batalla estaba ya perdida para la monarquía.

Que los republicanos no esperaban una inmediata implantación de la República en caso de victoria, lo prueba el comportamiento del Gobierno Provisional en los días 12 y 13 de abril. Tan sólo el futuro ministro de Gobernación, M. Maura creía en el completo triunfo y luchó por persuadir a sus compañeros de que así era (1). Fue ante la magnitud del triunfo, el desconcierto y la incapacidad de reacción de las derechas,

(1)

Maura, *Así cayó...*, p. 152.

los hechos consumados que empezaron a ocurrir el 14, y la actuación por fin decidida del Gobierno Provisional, por lo que fue posible el pacífico cambio de régimen (1).

Pasemos, pues, a un análisis de las elecciones municipales. Conviene recordar que el sistema electoral regulado en la ley Maura de 1907, establecía un escrutinio mayoritario con reserva de puestos a las minorías.

Aunque estas elecciones sean, como ha dicho Artola, un "permanente tema de debate historiográfico", el hecho es que ciertos datos sí pueden considerarse definitivos. Uno de ellos es, como el mismo autor establece, lo inexacto de la afirmación, frecuente hasta hace relativamente poco, y todavía presente en muchos autores, de que frente a veintitantos mil concejales monárquicos sólo habían resultado elegidos cerca de seis mil republicanos. Implicaría ésto que si bien en las ciudades había triunfado la oposición, en el conjunto de la España rural lo habían hecho los candidatos monárquicos. Estos son los datos parciales de la prensa del día 14, a pesar de que son considerados como definitivos, incluso en muchas memorias de republicanos (2); completos son únicamente los del Anuario

(1) Vid. entre otros muchos, el testimonio de Berenguer, Ministro de la Guerra, en *De la Dictadura a...*, p.317 y ss.

(2) Maura, por ejemplo (op. cit. p. 147).

Estadístico (1), e indican una división bastante equilibrada:

Antimonárquicos (art.29 y elegidos)

Republicanos 34.368 (13940-20438)

Socialistas 4.813 (887- 3926)

Comunistas 67 (10- 57)

Total. . . 39.248

=====

Monárquicos (art. 29 y elegidos)

Monárquicos 19.035 (6065-12970)

Otros 15.198 (6043- 9155)

No consta 6.991 (2859- 4132)

Total. . . 41.224

=====

Sin embargo, estos datos están posiblemente rectificados con los resultados posteriores al 12 de abril, como los de las parciales del 13 de mayo. Es muy probable que efectivamente en los distritos rurales triunfaran las candidaturas monárquicas en una proporción más elevada que la que indican el AEE. Pero de todas como demuestra el estudio de Tusell referido a Andalucía, incluso en los pueblos grandes el triunfo fue en general para las candidaturas antimonárquicas (2).

(1)

Anuario Estadístico de España, 1931, p. 482.

(2)

El estudio de Tusell en el que intenta demostrar la victoria monárquica en los distritos rurales andaluces tiene el interés de basarse en

Esto, junto con la victoria republicano socialista en casi todas las ciudades de importancia da una imagen real de lo que fue un auténtico triunfo, no meramente cualitativo (voto urbano frente a voto rural) sino incluso en número de votos, pues hay que tener en cuenta que, según recuerda Tuñón (1), el número de concejales no era proporcional al de electores: Madrid capital, por ejemplo, con 196.928 electores elegía 50 concejales, mientras que el resto de la provincia con 87.266 electores elegía 1.285 concejales (2). Dado que esto se repetía en muchas de las provincias, y considerando el triunfo urbano de la Conjunción, aquellos dos mil concejales de desventaja (e incluso bastantes más), quedaron compensados con muchos miles de votos a favor de las candidaturas antimonárquicas.

Hay que resaltar que, como indica el caciquismo, la victoria republicana en un muro no despreciable de municipios rurales, aún sin desaparecer (no se logrará erradicarlo por completo ni siquiera a lo largo de toda la República, especialmente en algunas zonas), había experimentado una grave quiebra, influyendo en ello probablemente la inactividad a que había sido reducido, a efectos electorales, en los años de dictadura.

(2) cont. pág. anterior

un análisis de la prensa provincial y local de los días siguientes a la elección. Efectivamente parece que así fue, pero también que dicha victoria no existió en los pueblos grandes; cfr. *La crisis...*, p.435.

(1) *La Segunda República*, vol. I, p. 54.

(2) Tuñón, sin duda por error o errata, da la cifra de 1.677. Las cifras dadas por mí pertenecen al Censo de 1930, con el que se realizaron

No hay que descartar la posibilidad de que algunos concejales se declararan republicanos después del 14 de abril, adscribiéndose a los partidos más afines, o simplemente como republicanos independientes; nos parece más que probable el hecho de que el republicanismo de muchos municipios rurales fuera bastante superficial. Y en muchos casos hay que suponer que ese considerable triunfo de candidatos antimonárquicos en municipios rurales se debió al oportunismo de los restos de caciquismo que operaran ya a favor de algunos partidos republicanos de sólida implantación local (el Partido Radical por ejemplo), ante la falta de fé generalizada en la supervivencia de la Monarquía.

Resulta difícil aportar datos de los candidatos de Acción Republicana y de los que resultaron electos ante la ca rencia de estudios monográficos de ámbito provincial sobre es tas elecciones. Los datos del Anuario Estadístico solo propor cionan calificaciones políticas genéricas (1). Cabe suponer sin embargo, dado el carácter embrionario de Acción Republicana y su marcada caracterización intelectual que el porcentaje de candidatos que se le asignara en la distribución de puestos de la Conjunción fuera muy minoritario. Vamos a dar algunos da tos fragmentarios que hemos recogido y que confirman esta im-

(2) cont. pág. anterior

las elecciones municipales: el total de concejales provinciales era de 1335, menos los 50 de la capital dan los 1285 indicados. Tuñón utiliza el número de habitantes en vez del de electores para mostrar la desigual representación. Vid. para los datos, *AEE*, 1931, págs. 480 y 481.

(1) No hay que olvidar tampoco que dado que en la prensa local los resultados se dan con frecuencia únicamente con adscripciones políticas genéri

presión.

Respecto al grupo madrileño, sabemos que se reunió el 24 de marzo para tratar el tema de las elecciones municipales. En esta reunión se eligieron por unanimidad los tres candidatos de Acción Republicana que se le habían otorgado en Madrid. Estos eran Honorato de Castro, catedrático de la facultad de Ciencias, por el distrito de Centro; Fernando Coca, médico, por Chamberí, y Pedro Rico, abogado, por Buenavista. Los tres firmantes del manifiesto de marzo del 30, y probablemente miembros de primera hora del grupo (1); posiblemente hay que suponer que esa unanimidad se debería a que los candidatos habían sido propuestos por la dirección y aceptados previamente por la Conjunción.

La Conjunción presentaba 30 candidatos por mayorías, tres por cada uno de los distritos madrileños. Acción Republicana no presentó ninguno fuera de las candidaturas conjuncionistas, que triunfaron en su totalidad.

Los 30 candidatos se repartían a partes iguales entre los socialistas con 15 (en reconocimiento a su fuerza tradicional en la capital) y los distintos grupos republicanos, que

(1) cont. pág. anterior

cas. (Vid. por ej. los resultados para Madrid provincia dados por *El Liberal*, el 2-6-31) los estudios que se hagan en esta materia encontrarán dificultades a veces insuperables. De todas formas, un estudio exhaustivo de todas las fuentes hemerográficas y oficiales accesibles (por ej. Boletines Oficiales de las Provincias) podrán aportar siempre más datos.

(1) *Ahora*, 24-3-31.

se repartían equitativamente los restantes quince. Este reparto, consecuencia del desconocimiento de la fuerza relativa de los distintos grupos republicanos, favorecía evidentemente a los nuevos partidos (DLR, PPRS, Acción Republicana) frente al partido radical, del que cabía esperar una implantación más sólida (1).

En Alicante tres de los 29 candidatos por mayorías que presentaban la Conjunción eran de Acción Republicana, lo que significaba la misma proporción que en Madrid; el mayor bocado era aquí para los radical-socialistas (11 concejales; los restantes grupos tenían: 6 los radicales, 4 los socialistas, 3 la DLR, uno los federales, y otro era un independiente radical-socialista) (2).

La Conjunción triunfó en todos los distritos.

(1)

Sin embargo Alcalá Zamora, en sus *Memorias*, achaca a Lerroux el que aprovechando que las candidaturas a concejales se elaboraron cuando el Gobierno Provisional se hallaba encarcelado, presentaba a la Alianza Republicana como un solo partido para presentarse como líder del grupo más poderoso, pero a la hora del reparto descomponía la Alianza en sus tres componentes para obtener más puestos; en realidad no parece que tuviera mucha razón Alcalá Zamora puesto que la Alianza era por entonces el organismo republicano más representativo y en todo caso quienes salían favorecidos eran Acción Republicana y los federales, no los radicales; por otro lado también los grupos republicanos de fuera de la Alianza, la DLR y los Radical-socialistas, eran fuerzas de las que se desconocía su verdadera importancia. Alcalá Zamora, *Memorias*, p.497.

(2)

Ruiz Manjón, *El Partido Republicano Radical...* p. 175. La distribución de candidatos no coincide con la del AEE que da 14 para los socialistas y 15 para los republicanos. En Valencia, donde todavía no se había constituido Acción Republicana, no había lógicamente candidatos suyos, vid. Aguiló Lucía, *Las elecciones en Valencia...* p.38.

Logroño en cambio debía ser una de las pocas capitales en que Acción Republicana se presentaba en una posición relativamente más fuerte, al haber heredado la casi totalidad de la organización del monárquico partido liberal con el paso al republicanismo de su jefe Amós Salvador. De los 20 puestos que en la capital correspondían a las mayorías, la coalición republicano-socialista se los repartió de la siguiente manera: 3 socialistas, 12 del partido republicano autónomo (1), y 5 de Acción Republicana; éstos eran los siguientes:

- Benigno Marroyo, catedrático.
- Bernabé Bergasa, industrial.
- Manuel Sánchez Herrero, ingeniero.
- Bonifacio Fernández Torralba, ingeniero.
- Amadeo Navascues, ingeniero.

La candidatura salió íntegra (2).

El 13 de mayo se convocaron elecciones para todas aquellas localidades donde hubiese habido protestas sobre el desarrollo de las habidas el 12 de abril (3). Como lógica con

(1)

Los partidos republicanos autónomos incluídos en la Alianza Republicana, quedaban por lo general englobados en la laxa estructura del Partido Radical, a veces aceptando como único o principal lazo de unión la jefatura personal de Lerroux; algunas veces sin embargo se adscribieron a Acción Republicana o al PRRS, o incluso se dividieron según la correlación de fuerzas entre las diversas tendencias existentes en su seno. Por lo tanto, en principio y a expensas de lo dicho se puede suponer la adscripción de estos grupos al Partido Radical. Vid. en torno a ésto, Ruiz Manjón, Op. cit. pág. 602 y ss.

(2)

Rioja, 31-3-31. El último de los candidatos citados tuvo que ser sustituido por ser funcionario público, de acuerdo con la ley municipal vigente.

secuencia del triunfo republicano anterior y de la implantación de la República, los resultados fueron todavía mucho más ventajosos para los republicanos.

La derecha protestó duramente contra estas elecciones parciales, considerándolas un abuso y afirmando que se destituían ayuntamientos por el único hecho de ser monárquicos. El motivo principal de dicha acusación era el que se repitieran las elecciones también en los casos en los que las protestas fueron posteriores a las órdenes del 16 y 18 de abril por las que se ordenaba a los gobernadores civiles que si había habido protestas no se constituyesen los ayuntamientos. Se regirian transitoriamente por una Comisión gestora designada por el Comité de la Conjunción Republicano-socialista local. Esto dejaba sin duda, abierta la posibilidad a impugnaciones oportunistas al único efecto de repetir unas elecciones, pues dada la nueva situación darían un resultado más favorable a los partidos gubernamentales sin necesidad de falseamientos electorales; de hecho parece que aunque la Dirección General de la Administración comunicó oficiosamente que sólo un 5% de las elecciones protestadas merecía la anulación, se decidió que la elección se repitiese siempre que hubiese habido protestas -sin que sepamos cuántas de éstas eran anteriores o posteriores a las órdenes antes citadas (1).

(3) pág. anterior

Que son pasadas por alto en todas las escasas monografías electorales existentes hasta ahora.

(1) Pérez Serrano, *La Constitución Española*, p.12; para las protestas de-rechistas, Burgos y Mazo, *De la República a ...*, p.107, y Chapaprieta, *La paz fue posible*, p.149-50.

En cuanto al número de ayuntamientos afectados finalmente por la medida, Burgos y Mazo da la cifra de 3.000; dado que los municipios eran entonces 9.252 (1); eso significaría que se habían repetido las elecciones en casi un tercio de los municipios; Miguel Maura, en sus memorias afirma que eran unos 2.500 (2). Esto implicaría un número aproximado de concejales destituidos de 21.800. Por ello las cifras dadas por Gobernación y reproducidas en la prensa del día 2 de junio (por ejemplo en *El Liberal*) que suman un total de 5.295 deben ser parciales (3). En cualquier caso ni siquiera a título de orientación nos sirven para saber en qué medida Acción Republicana aumentó su número de concejales, al dar, como era habitual, calificaciones genéricas. Desde luego la victoria republicana

(1) AEE, 1931, p. 480.

(2) Miguel Maura, que escribe sus recuerdos treinta años después se equivoca cuando afirma que efectivamente solo fueron repetidas las elecciones en un 5% de los 2.500 ayuntamientos protestados (lo que implicaría unos 125 ayuntamientos y unos mil concejales). Ello nos confirma el dato proporcionado por Pérez Serrano de que en principio se pensó en anular un porcentaje parecido tras un meticuloso examen de los expedientes. Pero de hecho la convocatoria del 13 de mayo incluye a todos los protestados.

(3) Nos confirma que estos datos no sean finales el que al dar dicha nota a los periodistas, Maura afirmara que en resumen se podía considerar que habían resultado elegidos unos 6.000 concejales afectos al régimen y unos 900 adversos, lo que daría un total de 6.900, en vez de los 5.300 que suman los datos que comentamos. El tipo de escrutinio hacía que el recuento fuese muy lento y que hasta pasados bastantes días no se contara con los resultados totales oficiales.

fue abrumadora:

Conjunción republicano-socialista	1.645
Socialistas	674
Radicales-socialistas	301
Alianza Republicana	141
DLR	757
Unión Republicana autónoma	461
Radicales	203

Total 4.182

Monárquicos	201
Católicos	47
Agrarios	91
Independientes (tradicionalistas, nacionalistas y otros)	354

Total 693

Los restantes hasta un total de 5.295 pertenecen a otros partidos republicanos de menor entidad.

8. PROCLAMACION DE LA REPUBLICA

PROCLAMACION DE LA REPUBLICA

El 14 de abril quedó instaurada la República. El tránsito completamente pacífico de un régimen a otro fue contemplado con asombro -y recelo- por la conservadora Europa de la época, así como por el resto del mundo, y exhibido con orgullo por los responsables de la nueva situación. Incluso los lamentables sucesos del 12 de mayo pueden considerarse de relativa importancia -a pesar de la campaña de desprestigio que con dicho motivo desencadenaron los sectores antirrepublicanos- si se les considera como único saldo negativo del tránsito de régimen.

Sin poner en duda el hecho aducido frecuentemente por los republicanos de que el 12-14 de abril fue posible por que previamente había sucedido un 12-15 de diciembre (1), la República advino como consecuencia directa de una jornada electoral, es decir como consecuencia del libre ejercicio del sufragio, y no por un pronunciamiento militar o cívico-militar de carácter decimonónico (como el que se intentó en diciembre). Este fue uno de los factores que más paralizó y desconcertó a los gobernantes monárquicos, puesto que es indudable que una acción decidida el mismo día 12 de abril -que no el 14, día en el que ya no era posible-, hubiera tenido muchas probabilidades de controlar la situación; sin embargo les contuvo, además de la falta de percepción de algunos de ellos de la trascendencia

(1) Por ejemplo Azaña en su discurso de Valencia, ap. II 3

de aquellos momentos, la reflexión de que poco podía la fuerza frente a la libre expresión por el país de sus preferencias republicanas. Posiblemente, los más perspicaces de ellos (Romanones, Gabriel Maura), consideraron inútil intentar prolongar la vida de la Monarquía, pues en su opinión poco se podía hacer por salvarla aún en el caso de que se lograra superar el obstáculo de los resultados de abril (1).

Tan sólo cinco años después, una rebelión militar -la segunda en el curso de la República-, sumiría a nuestro país en la más sangrienta guerra civil que había conocido. La explicación de qué fenómenos habían podido provocar un enfrentamiento con tanto odio y miedo en juego sería tanto como hallar la clave de la República, pues su historia no es sino la salida a la luz de todos los conflictos y tensiones latentes en una formación social cuya dinámica exigía la modernización tanto de la sociedad como del Estado.

Esa historia lo es asimismo consecuentemente de las iniciativas con que los sectores más progresistas de la sociedad intentaban encauzar esa transición y de las respuestas que una derecha, ultrareaccionaria más que conservadora, desencadenó para obstaculizar todo lo que alterase el statu quo, sin muchos escrúpulos sobre las consecuencias de los medios utilizados.

(1)

Ambos políticos han dejado en sus memorias testimonio de su estado de ánimo, vid. la bibliografía citada.

Un proceso de modernización no es un proceso neutro. Se hace en beneficio de unas clases o de otras, y de él resulta el establecimiento de uno u otro tipo de sociedad. En un breve pero lúcido artículo el profesor Jorge de Esteban propugna como clave del desenlace republicano el enfrentamiento entre tres modelos de modernización antagónicos y ninguno de ellos con la suficiente fuerza como para imponerse de forma decidida, resultando inevitable al cabo la definitiva resolución del conflicto, mediante un enfrentamiento armado (1).

Los modelos en juego eran el republicano (con el que colaboraron en diversas fases los socialistas), de carácter progresista burgués, con concesiones a una socialización evolutiva; el socialista integral, encarnado por Largo Caballero a partir de la derrota electoral del 33, y el reaccionario autoritario de la derecha católica, apoyada por la oligarquía terrateniente, hostil a cualquier concesión y proclive a una involución autoritaria que le permitiese un modelo de dominación en el que las clases populares careciesen de posiciones de fuerza. Este último modelo sería el que acabaría imponiéndose, merced al recurso de la fuerza de las armas, sin detenerse ante la perspectiva de una lucha civil feroz, y por ello en su versión más intransigente y dictatorial.

(1)

Diario 16, 20 de julio de 1977, p.21.

Los cinco años de República en paz son la historia del intento por parte de una coalición republicano socialista de impulsar la primera de las vías de evolución y su fracaso; y como consecuencia de este fracaso la progresiva hegemonía en los dos polos de la República de sus propios modelos más radicalizados.

Si hay una tesis política subyacente a nuestra investigación es el intento de confirmar la sospecha de que el proyecto burgués progresista, tan motejado por unos y otros como "utópico", idealista, insuficiente, excesivo, sectario, etc. etc., y lo que es peor, sometido a lo que podría denominarse una "crítica cruzada" (1), era viable, o mejor dicho, el único viable para lograr esa adecuación de la formación social española a un proceso de imprescindible e inevitable industrialización en lo económico, de moderación de antagonismos en lo social, mediante una enérgica mejora de la mísera situación de las clases populares españolas y de modernización en lo político. El único posible, se entiende, en paz (lo que no significa sin conflictos, incluso graves) y con respeto a las normas democráticas que la República significaba. Una vez implantadas las reformas que dicho proyecto implicaba, podría el socialismo forzar una evolución más acorde con su ideario, pero el salto a un socialismo integral desde la atrasada situación español

(1)

Entendemos por "crítica cruzada" la crítica simultánea y contradictoria que se ha utilizado frecuentemente con la República y más a menudo todavía contra los proyectos gubernamentales de Azaña, que con mayor o menor acierto encarnaban el modelo reformista. Como por ejemplo el acu

la no era posible, sin graves enfrentamientos.

En cambio, el modelo ultraconservador quedaría completamente superado en caso de que las reformas de carácter progresista se consolidasen, por lo que sus defensores se dedicaron desde el primer momento a conspirar contra la República o a obstaculizar la resolución de cualquiera de los numerosos conflictos con que el nuevo régimen se encontró. A partir de febrero de 1936, la primera de ambas políticas sería la que se convertiría en hegemónica.

El artículo antes citado utiliza el análisis republicano para trazar un paralelo con la actual situación española. En efecto, también ahora se ha comentado con admiración por propios y extraños la originalidad y la tranquilidad (en relación con las dificultades esperadas) de la transición a la democracia ocurrida en nuestro país. El profesor De Esteban concluye que la coincidencia actual de los partidos obreros, las fuerzas de centro y ciertos sectores de una derecha moderada sobre la necesidad de consolidar un sistema democrático, un Estado eficiente, y una cierta redistribución de las cargas sociales (lo que significa la aceptación por todos ellos y durante un plazo inmediato de mayor o menor duración del marco socio-económico capitalista) como objetivos primarios, antes de poner

(1) cont. pág. anterior

sar de excesivamente moderados sus intentos de reforma en cualquiera de los campos en que se intentó para a continuación -a veces pocas páginas después- criticar la excesiva ambición, rapidez o sectarismo de todas o alguna de ellas.

en juego las opciones socioeconómicas privativas de cada sector político, hace concebir esperanzas de que se logrará consolidar la democracia. La comparación con la época republicana no deja de ser sin embargo una advertencia sobre la fragilidad de todo proceso de transición de una dictadura a una democracia. Esperemos que esta vez no resulte defraudada la expectación suscitada por la evolución ocurrida en nuestro país desde la muerte del dictador.

Se podría pensar que una coincidencia similar hubiera sido posible en 1931, facilitando la consolidación de la República, lo que equivalía a consolidar la democracia. Sin embargo es una perspectiva superficial. Dicha consolidación sólo se podrá lograr en 1931 si simultáneamente se realizaban las reformas emprendidas en el primer bienio (1). La razón es que las diferencias sociales y la lucha de clases consiguiente eran mucho más antagónicas, puesto que el nivel de vida de grandes sectores de las clases populares no pasaba del nivel de subsistencia -si es que llegaba-, y las interferencias de las instituciones Ejército e Iglesia eran de naturaleza muy diferente a la actual. La Iglesia hoy día no es un obstáculo para la democratización -sin perjuicio de que probablemente habrá conflictos, sobre todo en el terreno de la enseñanza-, y la actual reforma del Ejército se está haciendo por las propias fuerzas de

(1)

Cfr. Azaña, OC. II, p. 29-30.

rechistas lo que facilita su realización, eliminando tensiones superfluas. Además, en la actualidad, la Monarquía sabe que su prestigio depende de que impulse y favorezca la democratización. Los tres factores, Iglesia, Ejército y Monarquía, eran en cambio en 1931 obstáculos solo superables por vía del sometimiento, pues los elementos de los mismos favorables o neutrales a una evolución como la que se estaba desarrollando eran absolutamente minoritarios, y los únicos sectores políticos de rechistas que comprendían su necesidad y que estaban dispuestos a impulsarlo no lograron arrastrar a su electorado potencial. (Alcalá Zamora, Maura).

Superada la fase del Gobierno Provisional toda la reforma recayó en manos de la izquierda. Naturalmente ésta le dio el sesgo ideológico correspondiente a la coalición en el poder. Y entre errores propios y obstáculos ajenos fue incapaz de dominar la situación a largo plazo. Todo ello lo iremos viendo con ocasión de la política realizada por los gobiernos Azaña, en base a una coalición republicano socialista cuyo elemento de cohesión fue precisamente el minoritario partido que estudiamos de Acción Republicana.

C A P I T U L O - I I I
=====

TRANSFORMACION EN PARTIDO DE ACCION REPUBLICANA
=====

(1931)
=====

1. TRANSFORMACION EN PARTIDO Y PRIMERA ASAMBLEA
NACIONAL

TRANSFORMACION EN PARTIDO Y PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL

Si el objetivo inicial de Acción Republicana era traer la República, recogiendo para ello toda una serie de sectores predominantemente intelectuales que no estaban encuadrados en ningún partido, y constituyendo un centro de aglutinamiento (una opción no partidaria) de los diversos grupos republicanos que laboraban con el mismo fin, ese objetivo estaba ya conseguido, por supuesto sin ningún protagonismo de Acción Republicana, y con bastante más rapidez que la que los principales líderes republicanos pensaban.

Cabe suponer que muchos de los participantes del grupo se plantearon de nuevo tras el 14 de abril, la carencia de una verdadero razón de ser del grupo. El viejo y el nuevo republicanismo estaban ya representados por dos partidos más fuertes, el radical y el radical socialista. Debían participar de este planteamiento los que no hubieran abandonado su militancia en otro partido, puesto que de acuerdo con la naturaleza de A.R. estaba permitida la doble militancia. Pero a estas alturas la idea del núcleo dirigente y de Azaña (1), así como de todos esos grupos que se iban constituyendo en pueblos y ciudades de varias provincias, era sin duda que Acción Republicana era un partido incipiente, y que en modo alguno se agotaba su objetivo con la proclamación de la República. Respecto a Giral y Azañ

(1) Martí Jara había fallecido en agosto de 1930.

ña puede verse claro en su persistente defensa de la independencia de su grupo. Si siempre se había mencionado la posibilidad de transformarse en partido, es a partir de 1930 cuando esta opción parece imponerse en las intenciones de los líderes.

En lo que se refiere a la base del partido es evidente que la opinión mayoritaria era la misma, pues las noticias de constitución de grupos afiliados a Acción Republicana en diversas localidades después del 14 de abril son abundantes; esto implicaba que globalmente la cuestión no ofrecía duda y que la propaganda del grupo, que se acrecentó a partir del 14 de abril, iba encaminada a la extensión y fortalecimiento del grupo.

Así fue en la Junta general del 19 de mayo (1) donde se trató de la importante cuestión, aprovechando la ocasión para dar publicidad a su opción política. La reunión tenía lugar después de una consulta hecha a los organismos provinciales y locales sobre el tema. Es por cierto la primera vez que se cuenta públicamente con dichos centros para adoptar una de cisión. El acuerdo tomado por estas organizaciones era favora ble a que Acción Republicana se constituyera en partido. Esta iba a ser también como era de esperar, la resolución de la agru pación madrileña, que en último término sigue actuando como ór gano de decisión a nivel nacional; esta junta general de los afiliados de Madrid ejerce, a pesar de la consulta a las pro-

(1)

La reseña de la reunión en *El Liberal*, 20-5-31.

vincias, las atribuciones de una Asamblea Nacional. En ella se da el sí definitivo a la opción de proseguir en la construcción de un partido -con orientación izquierdista-, al mismo tiempo que se elige, aunque se especifique que provisionalmente, a los miembros del Consejo Nacional del partido. Es la primera vez que se nombra un órgano de dirección política, pues en la reunión de marzo del 30 tan sólo se eligió una secretaria y los representantes de Acción Republicana en la Alianza.

Se daba así el primer paso público para la regularización y estructuración de las relaciones internas de Acción Republicana, única forma de capitalizar la labor propagandística y el crecimiento realizados desde 1930, así como de posibilitar la consolidación de Acción Republicana en tanto que partido.

Aunque el Consejo provisional se elige ahora, sus miembros, que en parte coinciden con los representantes de Acción Republicana en la Alianza Republicana llevaban preparada una ponencia como esquema de programa del partido, ponencia que se aprueba cara a su discusión en la Asamblea Nacional de delegados (1ª Asamblea Nacional que Acción Republicana iba a celebrar) prevista para días después.

La junta la presidía el secretario Giral, quien sin embargo cedió su puesto a Azaña cuando éste se presentó durante el transcurso de la junta, como solían hacer los jefes supremos en estos partidos republicanos.

En la reunión se eligió el siguiente Consejo Nacional: Azaña, Giral, Rico, Serrano Batanero, Martínez Risco, Roy Gómez, H. de Castro, H. Rodríguez Pinilla, Fernández Clérigo, Doporto, Clara Campoamor y Amos Salvador.

Asimismo, cara a la inmediata Asamblea Nacional se nombraron los delegados de Madrid para la misma, que fueron los siguientes: Ramos, Escribano (1), Vázquez Humasqué, Alvarez Ugena, De Benito, Navarro Blasco, Bolívar, Montilla, Lamana, Ferrer y Rioja.

Esta 1^a Asamblea Nacional se desarrolló en Madrid, los días 26 y 27 de mayo. Se puede decir que ésta es la fecha del espaldarazo del grupo como partido de alcance nacional . Tres puntos centraron la actuación de los delegados: aprobación del programa, elección del organismo de dirección nacional junto con la aprobación de unas bases de organización y, por último, la actitud a tomar ante las elecciones a Cortes Constituyentes (2).

La discusión y aprobación del programa significaba

(1)

Dos eran los hermanos Escribano, ambos militantes de Acción Republicana, L.(?) y Roberto; la prensa no especifica en muchas ocasiones a cuál de ellos se refería. Roberto, médico de profesión era un propagandista mucho más activo y pertenecerá a los círculos dirigentes del partido, por lo que en principio tanto en este caso como cuantas veces no se especifica, suponemos que es él. De todas formas, salvo que estemos seguros por alguna circunstancia de cuál de los dos sea, indicamos tan sólo el apellido.

(2)

Sobre el desarrollo de la Asamblea, *El Liberal*, 29-5-31.

dar a la publicidad por vez primera con repercusión nacional cuál era la ideología concreta del grupo; hasta ese momento las posiciones políticas y doctrinales de Acción Republicana se habían ido propagando mediante mitines y actos de propaganda tanto propios como en conjunción de otros partidos republicanos; generalmente corrían a cargo de miembros de la agrupación madrileña y tenían lugar en las capitales donde se lograba la implantación de núcleos locales. Pero con toda seguridad estos núcleos se irían formando más que por el atractivo de un programa concreto gracias al aglutinante de un rechazo del histórico Partido Radical.

Positivamente influiría la atracción por la valía intelectual de los promotores, su genérico republicanismo y sus conocidas convicciones progresistas, no excesivamente articuladas en un todo ideológico coherente; la única afirmación ideológica que hasta ese momento se puede recoger repetidamente en los actos propagandísticos de Acción Republicana es la autoproclamación de que son un grupo de izquierdas; en el momento de su transformación en partido, era imprescindible concretar sus planteamientos en un programa articulado si se quería tener credibilidad como un partido de futuro.

Según la referencia de prensa la discusión fue animada, participando casi todos los delegados de Madrid y provincias, aunque sin indicar el sentido de las intervenciones. El programa, que más adelante analizaremos, era de carácter reformista burgués, aunque por su esquematismo poco serviría para juzgar

el mayor o menor radicalismo del partido.

Respecto a las cuestiones organizativas -segunda cuestión tratada en la Asamblea-, se procedió a aprobar unas bases de organización preparadas por el Consejo Nacional provisional, y se eligió el Consejo que había de regir en adelante el partido. La importancia del grupo madrileño fue patente y reconocida por todos, como lo demuestra el hecho de que fueron elegidos para el Consejo, 13 representantes por Madrid y 12 por el resto de las provincias, lo que supone que aquellos contaban con la mayoría absoluta.

Desconocemos tanto los criterios con que se procedió a la elección, como el hecho de si los delegados de Madrid escogieron los 13 que correspondían a la capital y los de provincias los suyos o si, por el contrario, todos participaron en la elección de unos y otros. Dado que se hizo la distinción parece más natural que fueran elegidos según el primer sistema. También existe la duda de si era necesario pertenecer a las organizaciones de Madrid o de alguna provincia para ser elegidos como representantes por la capital o por provincias; no parece que fuera así, pues, por ejemplo, entre los consejeros por Madrid hay más de uno con fuerte arraigo en su organización provincial o incluso cabeza indiscutida de la misma, como Amós Salvador en Logroño.

El Consejo nacional elegido fue el siguiente:

Por Madrid:

Manuel Azaña

Clara Campoamor

Amós Salvador

Hipólito Rodríguez Pinilla

Honorato de Castro

José Giral

José Serrano Batanero

Luis Doporto

Luis Fernández Claérigo

Manuel Martínez Risco

Pedro Rico

Fernando Coca

Angel Navarro Blasco

Por provincias:

José Royo Gómez

Vicente Gaspar

Enrique Ramos

José Palanco

Ernesto Díaz Sánchez

Pablo Bustos

Arturo Cortés

José Estruch

Miguel Moreno Laguña

Emilio Pascual Hidalgo

Antonio Campoy

Ildefonso Coronel

Debemos señalar que todos los miembros del Consejo Nacional provisional fueron reelegidos, 12 de ellos por Madrid (Angel Navarro Blasco era el único consejero elegido por Madrid que no pertenecía al Consejo Provisional y el restante, José Royo Gómez, por provincias. Los otros 11 representantes provinciales eran incorporados por vez primera al máximo cargo directivo.

Un caso que merece especial atención es el de Clara Campoamor. Fue elegida para el Consejo provisional en la junta madrileña del 19 de mayo, siendo reelegida en la Asamblea Nacional. También tenemos noticia de su participación en algún acto público como perteneciente a Acción Republicana.

Parece que desde finales de 1929, pertenecía a Acción Republicana, aunque su nombre no figura entre los firmantes madrileños del manifiesto de enero de 1930 (1) ni tampoco hemos localizado ninguna referencia en la prensa respecto a su

(1)

Capel, *El sufragio femenino* ..., p.215. No indica sin embargo la fuente de la que obtiene la militancia de Campoamor desde esa fecha.

100

militancia en Acción Republicana antes de la junta madrileña del 19-5-31. Tras la Asamblea Nacional todavía participó en un mitin como representante de Acción Republicana el 30 de mayo (1). En las diversas alusiones que en su diario hace Azaña a la que sería diputado radical por Madrid, no se refiere para nada a su breve paso por Acción Republicana. Desconocemos las razones de su salto al partido radical; Capel (2) apunta como razón, o por lo menos la coincidencia, con la transformación en partido de Acción Republicana, pero no creemos que fuera esta la razón, pues no hubiera sido entonces lógico que aceptara por dos veces ser nombrada miembro del Consejo Nacional del flamante nuevo partido. Por el mismo motivo, no cabe pensar que hasta su salida de Acción Republicana hubiera simultaneado la militancia en ambos partidos.

La tercera gran cuestión de la asamblea fue la perspectiva de las próximas elecciones a Cortes Constituyentes. En la prensa se habla del amplio debate en torno a la colaboración o no con determinados partidos y parece indicarse la existencia de dos posiciones básicas. Tras la intervención de los que propugnaban una u otra posición se acordó mantener la Conjunción republicano socialista hasta las próximas Cortes Constituyen-

(1)

El Liberal, 31-5-31. El 3 de junio anunciaba *El Sol* un mitin para el día siguiente en el que participarían Escribano, Fernández Clérigo, Clara Campoamor y Azaña. *El Liberal* del 6 de junio incluye una referencia de dicho acto, pero los oradores habían sido R. Escribano, Antonio Cabezas y Azaña. Y en *El Liberal* del 14 de junio se reseña un acto del Partido Radical en el que interviene Clara Campoamor.

(2)

Ibid. p. 215.

tes. Parece plausible pensar que la otra postura requiriera la ruptura de la Conjunción, manteniendo tan sólo la alianza con el Partido Radical. Se perfilaba ya la pugna entre colaboración con los radicales o con los socialistas (y radical socialistas), rápida y definitivamente resuelta por la evolución de las circunstancias hacia este último bloque de izquierdas.

Castrovído escribiría días después un artículo en *El Liberal* defendiendo la necesidad de ir unidos a las elecciones todos los partidos de la Conjunción, por un lado, como consecuencia del compromiso de resolver el problema catalán que todos subscribieron en San Sebastián; por otro, arguyendo que la Conjunción no significaba confusión ideológica alguna como se le achacaba, pues el elector conocía las ideas de unos y otros y podía obrar en consecuencia a la hora de votar (1). Además la diferenciación de los diversos partidos se produciría de todas formas en las Cortes de manera que en las próximas elecciones legislativas podrían ir todos de forma independiente con unas posiciones políticas más definidas. A partir de este momento Castrovído sería ya siempre un firme decidido de la colaboración con los socialistas y de la participación de éstos en la gobernación de la República. Desconocemos el momento en que se produjo la afiliación de Castrovído a Acción Republicana, pero en este momento debía ya ser miembro (2).

(1)

El sistema electoral admitía el *panachage* y por lo tanto el elector podía mezclar listas o tachar nombres en ellas.

(2)

El Liberal, 12-6-31.

La designación de candidatos se acordó que fuera realizada por el Consejo Nacional, con el acuerdo previo de las organizaciones provinciales; en realidad no cabía más solución , desde el momento en que se decidió mantener la conjunción, que centralizar en extremo esta tarea, pues los puestos reservados a Acción Republicana en las candidaturas conjuntas dependían de las negociaciones entre partidos. Dado que Acción Republicana no podía pretender que se le asignasen muchos puestos, era lógico que la dirección pretendiera garantizar la elección de las principales figuras del partido antes que personalidades provinciales. Por lo demás dada la escasa entidad de las organizaciones provinciales de Acción Republicana no creemos que el procedimiento fuera discutido. También en el resto de los partidos republicanos la elección de candidatos solía estar centralizada.

La solución adoptada buscaba respetar una cierta autonomía a las organizaciones provinciales al requerir su acuerdo previo antes de la designación definitiva. Quedaba así invertido el procedimiento más habitual en los partidos que cuentan con algún grado de descentralización, que es la designación por las organizaciones locales y el asentimiento de la dirección.

También se propuso por parte de algunos delegados que se impusiera una cierta limitación a los militantes que hubiesen ingresado en el partido tras el 12 de abril, no pudiéndoseles nombrar para cargos de representación popular. Este movimiento de defensa fue común a todos los partidos republica-

nos ante el aluvión de adhesiones tras la implantación de la República (1). La propuesta fue adoptada aunque suavizándola al autorizar al Consejo nacional que en casos especiales obrara según su criterio.

Conviene quizás hacer un somero cálculo de la extensión que Acción Republicana pudiera tener en estos momentos, aunque sea con los pocos datos con los que contamos. Por los diversos indicios que indicamos a continuación, creemos que posiblemente en unas veintidós provincias existía organización -o mejor presencia- , siquiera incipiente, de Acción Republicana. Así por ejemplo, en aquellas provincias de las que tenemos constancia por la prensa de que había grupos de Acción Republicana en pueblos o en la capital (en el primer caso lo más probable es que su creación fuera impulsada desde la capital).

En esta situación estarían las 16 siguientes provincias: Asturias, Badajoz, Cáceres, Castellón, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Guipúzcoa, Lugo, Madrid, Logroño, Huelva, Murcia, Oviedo, Toledo y Zaragoza. A ellas habría que sumar algunas de las citadas en el manifiesto de marzo de 1930, como muestra de las que contaban con organización de Acción Republicana, tales como: Granada, Palencia, Salamanca y Segovia. A las que añadiríamos aquéllas de las que en la referencia de la Asamblea Nacional se mencionan a sus delegados, como Lugo y León. Entre todas suman un total de 22 provincias.

(1) Sobre este fenómeno, Artola, *Partidos ...*, p. 629.

2. ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES

ELECCIONES A CORTES CONSTITUYENTES (29-6-31)

Las elecciones se saldaron con un completo triunfo de los republicanos, a pesar de que el frente conjuncionista se había fragmentado. Pero si absoluta fue la victoria republicana, también lo fue el éxito izquierdista dentro del conjunto de partidos republicanos, pues frente a los 93 diputados radicales, que en estas fechas podían considerarse, presuntamente al menos, de centro, los socialistas y los diversos grupos republicanos de izquierda y regionales superaban los 250 diputados. Esta iba a ser la mayoría que a partir del 8 de diciembre iba a apoyar a los gobiernos de Azaña.

Diputados en las Cortes Constituyentes (1):

Acción Republicana	26-33
Socialistas	116
Radicales	90
Radical socialistas	56
Esquerra catalana	36
Derecha Liberal Republicana	22
ORGA	15
Agrupación al Servicio de la República	16
Vasconavarros	14
Agrarios	26
Lliga Regionalista	3
Otros	19

El abstencionismo fue ligeramente inferior al de abril: participó un 70,14% frente a un 67% (1); abstencionismo que fue superior en las zonas de implantación anarquista (Levante, Andalucía) mientras que en las zonas de tradición conservadora como Castilla se daban precisamente las más altas cotas de participación. Lo cual desmiente que fuera la abstención de sectores conservadores una de las causas (o "la causa") de la derrota derechista (2); tampoco parece aceptable, ni se obtiene esa impresión de la lectura de la prensa, que el resultado estuviese mediatizado por parcialidad gubernamental; el ministro de la Gobernación era Miguel Maura, lo que es garantía de ello. Por encima de abusos locales, ésta, como todas las elecciones habidas en la República (incluidas las de abril, su pórtico), fueron unas elecciones sinceras (3). Creemos que el movito fundamental fue la desaparición de los partidos derechistas, con escasísimo tiempo para una reconversión de su política y su propaganda tan considerable como la que exigía el cambio de régimen y en segundo lugar el ambiente de la calle, de exaltación republicana que indudablemente fue un factor condicionante sin que tuviera por qué ser necesariamente abusivo.

(1) pág. anterior
Tuñón, *La Segunda ...*, I.p. 76; la 2ª cifra correspondiente a Acción Republicana es nuestra.

(1) Cfr. Tuñón, *La Segunda ...*, I.p.75. Cfr. cifras en *AEE 1931*, p.480 y 486.

(2) Tal era la opinión por ejemplo de Miguel Maura, *Así cayó ...*, p. 320.

(3) No son convincentes los argumentos de Chapaprieta, por lo demás aisla-

La derecha hizo una campaña desvaída, con muchos menos mítines y actos de propaganda (y no porque fueran sistemáticamente obstaculizados, aunque algunos casos hubo). Esto era, por lo demás, lo que ya había pasado en las municipales de abril por causas parecidas (1) aunque menos graves. En efecto, si en aquel momento la lentitud en reaccionar de los partidos derechistas, su incompresión de la necesidad de una campaña de propaganda intensiva que contrarrestase la de la Conjunción, su falta de fe en la contienda, etc., fueron las causas de la derrota derechista, ¿qué se podía esperar ahora, a pesar de la campaña animadora de *El Debate*, sin tales partidos y en un régimen que se les presentaba adverso?

La ruptura de la Conjunción en numerosas circunscripciones fue objeto de comentarios en la prensa y queda evidenciada por la cifra de candidatos conjuncionistas (115) en comparación con el número de candidatos que los partidos presentaron aisladamente (por ejemplo, el socialista 104).

Parece que esta ruptura parcial de la conjunción no preocupaba ni a unos ni a otros. *El Socialista* en un editorial del día 27 justificaba el hecho dado que la unión entre un partido de clase y los republicanos estaba justificada por la ne-

(3) cont. pág. anterior

dos, aunque pudiera tener razón en casos concretos, *La paz*... p.155; ni los de Robinson, por lo menos como intento de presentar los hechos aludidos por él como tónica general y decisiva, *Orígenes*, p.

(1)

Algo que ha sido reconocido por todos los conservadores que han testimoniado sobre aquel período (marqués de Hoyos, Berenguer, Romanones, Mola, etc.)

cesidad de derrocar la monarquía pero "a nadie se le ocurriría que un partido de clase, de honda raíz revolucionaria y anti-capitalista, como es el nuestro, hipotecase su libertad de acción en la labor constructiva y de estructuración social que realizarán los Constituyentes". Justo lo contrario de lo que iba a acontecer. No por eso, sigue diciendo, quedaba desprotegida la República pues tanto el PSOE como la UGT se habían comprometido a defenderla por encima de todo.

También *El Liberal*, en un editorial había defendido días antes (el 23) la pluralidad de opciones electorales una vez conseguida la República.

Es necesario advertir las importantes modificaciones que en el sistema electoral había introducido el decreto de 8 de mayo. En efecto, se pasaba de los distritos uninominales a circunscripciones provinciales plurinominales; las ciudades de más de cien mil habitantes constituían también circunscripciones independientes. Con ello a la vez que se favorecía a los partidos, se asestaba un golpe importante al caciquismo.

El tipo de escrutinio establecido era el mayoritario con cuota reservada a las minorías, cuota que oscilaba en torno al 20% de los puestos. El sistema implicaba una prima considerable a la mayoría, a la que una ligera ventaja en votos le bastaba para alcanzar el 80% de los escaños. Se exigía al menos obtener un 20% de los votos para ser proclamado en la primer vuelta. Los escaños que quedaran vacantes por no alcan

zar este porcentaje se disputarían en una segunda vuelta, en la que ya no era necesario.

Aunque más adelante nos referiremos a los efectos del sistema electoral sobre el sistema de partidos republicanos, podemos adelantar la opinión casi unánime de la bibliografía de que fueron sumamente negativos, al favorecer la polarización de bloques electorales antagónicos, pues el que un partido fuera aislado a las elecciones podía significar que no obtuviera escaño alguno.

A. CAMPAÑA ELECTORAL DE ACCION REPUBLICANA

CAMPAÑA ELECTORAL DE ACCION REPUBLICANA

¿Cuál fue la campaña electoral de Acción Republicana para las Cortes Constituyentes? Su papel tuvo que ser forzosamente limitado y creemos que substancialmente se basó en actos conjuntos con otros partidos republicanos; Acción Republicana carece en estos momentos de la infraestructura necesaria para organizar una campaña autónoma. Vamos a analizar la campaña realizada por el ministro de la Guerra para después dar una rápida mirada a los actos organizados independientemente de los restantes partidos por los candidatos de Acción Republicana.

Azaña abrió su campaña con un resonante discurso en Valencia el día 7 de junio, en un acto organizado por la Alianza Republicana, en el que también participaron Sigfrido Blasco (cabeza de los radicales autonomistas), Pedro Rico y Lerroux. Habló después en Albacete el día 11, y volvió a la región Valenciana para pronunciar otro discurso en Alicante, junto con Rico, el 14 de junio. El día 21, acompañado de Sánchez Albornoz dio un mitin en Avila y los últimos días, desde el 25 al 27, participó en una gira por los pueblos de Toledo promoviendo la candidatura encabezada por él que Acción Republicana presentaba por esta provincia al margen de la conjuncionista; dicha gira finalizó con su intervención en la capital toledana el día 27 (1).

(1)

El Liberal, 12, 16, 23 y 27 de junio. *El Sol*, 9 y 23 de junio. *El Pueblo* (Valencia), 9 de junio.

El discurso de Valencia, con ser uno de los más importantes que Azaña llegara a pronunciar, aunque sólo fuera por sus negativas consecuencias a largo plazo, es un discurso que al no ser recogido (quizás por esa razón) por el propio Azaña en sus recopilaciones, no ha pasado a la actual edición de sus obras completas (1), permaneciendo hasta ahora prácticamente inédito.

Azaña justifica en él el origen revolucionario de la República, pues -afirmaba- si era cierto que advino como consecuencia de una jornada electoral, el resultado de esa jornada no fue sino el fallo del pueblo en la lucha entre la tiranía y la revolución: hubo República porque antes había habido revolución, que culminó en los sucesos de Jaca. Como revolucionario debía pues, comportarse el Gobierno exigiendo responsabilidades. Azaña llegaba a calificar la cuestión de las responsabilidades como más importante que la Constitución. Prefería a todos los textos constitucionales y todos los discursos, "trescientos hombres decididos, trescientos diputados constituyentes... dispuestos a levantarse y fulminar con el rayo de la ira popular a los culpables de la tiranía española, pidiendo su cabeza, si es menester..."

(1)

La, por otra parte, excelente edición de Juan Marichal dista desde luego por ahora de ser completa. La recopilación de discursos es quizás de los puntos en los que esto es más evidente, debido al criterio de haberse limitado a incluir aquéllos que ya el propio Azaña recogió en sus libros de discursos, excepto algunas excepciones. Vid. a este respecto la Introducción a nuestro Apéndice.

La segunda parte del discurso es de tono más positivo, aunque no menos enérgico. En ella Azaña habla de la necesidad de construir un Estado nuevo, un Estado republicano que significa paz en el exterior y en el interior. En el exterior yendo hacia el desarme, y en el interior acogiendo y amparando a todos los españoles sin distinción de ideas, aunque eso sí, la acción de gobierno debía estar en manos de republicanos para la necesaria consolidación del régimen. Aludió a la necesidad de destruir el caciquismo y fue aquí en Valencia donde expuso por vez primera su tesis, que le valdría la presidencía del Gobierno, y que normalmente se considera que Azaña expuso por vez primera el 13 de octubre de que España ya no era, por el contenido actual de su pensamiento creador, católica. Y sacaba la consecuencia que también expondría meses más tarde: la enseñanza debía revertir al Estado, para substituir el caduco pensamiento católico por un pensamiento laico y republicano.

No sería esto lo que causaría los negativos efectos a que aludíamos, con ser quizás lo más interesante, tanto doctrinal como políticamente. Pronto montaría la derecha una eficaz campaña de falsedades tergiversando unas frases y dándoles un contenido aparentemente injurioso para el Ejército. Veamos sin embargo, porque la extensión de la calumnia lo merece, cuáles fueron las palabras pronunciadas por Azaña. Al hablar de la reducción del Ejército como prueba palpable de la política pacifista de la República y de su sinceridad al defender el desarme, añadió:

"La República es la paz exterior e interior, y es, por consiguiente, el desarme, y es, por consiguiente, la conclusión de aquella pesadilla militarista que durante un siglo ha manejado la monarquía, ha manejado la dinastía para mantener aherrojado al pueblo español.

Yo debo declarar, porque tengo motivos para ello, que el pavoroso problema que representaba durante el siglo XIX y sobre todo en el primer tercio del corriente, por la obra personal del rey, que corrompía el ejército violando sus obligaciones, empleándole en una obra puramente personal, arrancándolo del camino fraternal con el pueblo, como debe estar el ejército, yo tengo motivos para declarar que el ejército español ha dado un ejemplo de civismo que es merecedor del agradecimiento de todos sus conciudadanos, porque éste, consciente de sus deberes, se ha fusionado con el sentimiento nacional, está compenetrado con el espíritu republicano y su adhesión al régimen republicano ha constituido un modelo y un ejemplo que han de imitar en lo futuro los demás cuerpos del Estado, cuando llegue la hora de reorganizar los demás departamentos ministeriales.

Yo hago constar aquí, ante el pueblo valenciano, que el ejército español se ha hecho acreedor, por su conducta, a la admiración, a la gratitud y a los mejores sentimientos de la nación entera". (Muy bien. Aplausos).

Luego, apenas unas frases después, y tras aludir a la paz interior, en el sentido más arriba aludido, afirmó con

respecto al caciquismo:

"Hablaban nuestro elocuente correligionario señor Alfaro de la necesidad de destruir el caciquismo; es evidente. Mientras queden en los pueblos o en las capitales confabulaciones personales, económicas, bancarias o territoriales..., no podremos tener la seguridad de que un día no nos han de dar una sorpresa. Dicho en una palabra: bien destruyendo la organización municipal o apoderándonos del Gobierno por algún medio ilícito y corrompido. Eso hay que tritutarlo, hay que deshacerlo; y hay que deshacerlo desde el Gobierno.

Y yo os aseguro que si alguna vez tengo participación en este género de asuntos, he de tritutar, he de arrancar esta organización con la misma energía, con la misma resolución, sin perder la serenidad, que he puesto en deshacer otras cosas menos amenazadoras para la República". (Ovación).

Es claro que la referencia a esas otras cosas que ya no eran una amenaza para la República, iba en todo caso a la pesadilla militarista, y no en modo alguno al Ejército, para el que tuvo siempre palabras de elogio cuando hablaba en público, al igual que en las Cortes, como por supuesto era obligado para un ministro de la Guerra, a pesar de que la situación profesional y moral de nuestro ejército en conjunto no era precisamente óptima.

Sobre este discurso se edificó la leyenda en verdad absurda pero que todavía hoy repiten de forma increíble ciertos

historiadores, de que Azaña había afirmado su propósito de "triturar al Ejército" (1).

El discurso tuvo una inmediata repercusión. *El Debate* le contestaba el día 10, en un editorial titulado "Un discurso subversivo". El periódico católico tachaba de impropios de un hombre de cultura, y más de un gobernante, el tono y la terminología empleados por el ministro, añadiendo que con tales amenazas difícilmente se evitaría la huida de capitales. Es curioso observar que lo único que se critica es el contenido, hasta cierto punto demagógico y propagandista, del discurso ("los trescientos hombres decididos", "la trituración del caciquismo") -pues la leyenda de la "trituración del Ejército" es posterior-, sin hacer alusión a los aspectos más hondos -y en realidad más temibles para los intereses católicos- del discurso, entre los que se encontraba el referente a la enseñanza. Concluía el editorial comparándolo con el discurso en el mismo acto de Lerroux, al cual alababa abiertamente, como empleado en un ideal constructivo frente al destructivismo de Azaña (2). El tono de ambos era ya efectivamente muy distinto, aunque como hemos visto no era el discurso de Azaña meramente destructivo.

(1)

Vid. por ejemplo Robinsón, *Orígenes*, p.147, y Payne en Carr, *Estudios...*, p.III; Sevilla Andes, prólogo a *Región y Religión...* de Astarloa Villena, p.10.

En su discurso de clausura de la asamblea nacional de Acción Republicana de septiembre de 1931, diría Azaña refiriéndose a la estructura caciquil de los pueblos españoles: "Una vez dije yo en Valencia que era preciso realizar una trituración de estos organismos, y algunas gentes poco bien intencionadas han atribuido estas palabras a otras obras mías, que no tienen nada que ver en esto. Yo aludía a esta obra local del caciquismo español que hace fracasar todas las constituciones, las pasadas y las venideras". Azaña, OC. II, p. 39.

(2)

Confirmando la moderación de la campaña lerrouxista, vid. O. Ruiz Manjón, *El Partido...*, p.187.

vo, y los excesos verbales quedaban compensados con llamamientos a la concordia y explícitas condenas de disturbios como los acaecidos en mayo.

Es este desafortunadamente el único discurso de Azaña de esta campaña electoral que hemos podido localizar reproducido íntegramente; sería de interés el contrastar si los demás respondían a este tono jacobino y exaltado que pronto la responsabilidad gubernamental se encargaría de moderar, aunque sin por ello modificar el contenido democrático progresista de su política reformista.

Tenemos referencias incompletas en la prensa de Madrid de otros tres discursos: los de Alicante, Avila, y Toledo; del discurso de Albacete hay que recordar que no fue en sentido estricto un discurso electoral, pues fue pronunciado con ocasión de la asamblea provincial de Acción Republicana.

Puntos sobre los que habló Azaña fueron: origen revolucionario de la República, la Constitución, responsabilidades, presupuestos, supremacía del poder civil, reforma agraria, elogios al Ejército por comprender la necesidad de la reforma, etc. Criticó duramente al antiguo régimen y a la dinastía; definió su postura como de un "radicalismo constructor" y en Alicante se mostró partidario de la República federal.

En cuanto a otros actos organizados por Acción Republicana se hicieron varios en la provincia de Toledo (Talavera, el día 4, y en otros pueblos de menor importancia los días

7 y 11), en Aranjuez (11 y 20 de junio), y en Guadalajara (7 de junio de 1931). En ellos intervinieron los hermanos Escribano, A. Cabezas, Vázquez Humasqué, De Benito, Fernández Clérigo y Serrano Batanero. Los temas que invariablemente tocaron fueron: Escuela Única, sanidad, cuestión agraria, clericalismo, militarismo, responsabilidades y caciquismo (1).

Por supuesto estos actos de los que la prensa madrileña nos da noticia son con toda seguridad sólo una parte de los que Acción Republicana organizara en este mes de junio; de todas formas nos dan una idea de las preocupaciones políticas del grupo, así como de su escasa capacidad organizativa; tanto más cuanto al menos si serían la mayoría de los organizados en las provincias cercanas a Madrid, donde se encontraba el núcleo principal de Acción Republicana.

(1)

El Liberal, 31 de mayo, 6, 9, 12, 16 y 23 de junio.

B. CANDIDATOS Y DIPUTADOS DE ACCION REPUBLICANA



BIBLIOTECA

CANDIDATOS Y DIPUTADOS DE ACCION REPUBLICANA

No tenemos datos del número exacto de candidatos presentados por Acción Republicana; en los proporcionados por Gobernación el 23 de junio los candidatos de Acción Republicana pueden estar comprendidos en cuatro adscripciones: Acción Republicana y luego "Alianza Republicana", "Conjunción republicano socialistas" y "republicanos". Según estos datos, expresamente por Acción Republicana, se presentaban 30. El número de candidatos presentados como de Alianza Republicana era de 34, de la Conjunción 115, y como republicanos 27 (1).

Dada la escasa fuerza del grupo hay que suponer que de los 21 candidatos de Acción Republicana elegidos en la jornada del 28, la mayoría si no la totalidad, se habrían presentado en candidaturas de la Conjunción o de Alianza; identificados como de Acción Republicana dentro de las coaliciones, pero no en candidaturas propias de Acción Republicana.

Al analizar los resultados vemos primero los de aquellas provincias en las que Acción Republicana consiguió algún diputado y de las que tenemos datos; después hacemos una breve mención de algunas otras provincias en las que los candidatos

(1)

Estas cifras estaban a falta de los datos de Málaga. La cifra de los candidatos de Alianza Republicana está rectificada con los datos de la prensa del día 26. Vid. *El Sol*.

de Acción Republicana resultaron derrotados. No hace falta in
sistir en que son datos fragmentarios en ambos casos.

Entre las primeras tenemos el caso de Albacete, don
de Acción Republicana, recién constituida oficialmente, conta-
ba con un arraigo incipiente prometedor. Tras no pocas renci-
llas entre los partidos integrantes de la Conjunción sobre los
puestos atribuidos a cada uno, ésta se mantuvo salvo la exclu-
sión de los radical-socialistas. Así, se presentaba la candidata
tura de la Conjunción por mayorías con dos socialistas, dos de
Acción Republicana y un radical, mientras que los radical-social
istas y los restantes partidos presentaban candidaturas por
minorías.

Los dos candidatos de Acción Republicana eran Anto-
nio Velao y Esteban Mirasol, ingeniero y abogado respectivamente
te. Sólo el primero de ellos era originario de Albacete.

Los resultados fueron de triunfo total de la Conjunci
ción, los dos candidatos de Acción Republicana resultaron ele-
gidos en primer (Velao) y tercer puesto (Mirasol), con un porta
centaje elevado de votos (1).

(1)

En lo referente a las elecciones en Albacete, nos basamos en Sánchez
Sánchez y Mateos Rodríguez, *Elecciones y partidos en Albacete...*, p.
73 y ss.

Diputado	Partido	Votos	% de los sufragios emitidos
A. Velao Oñate	Acción Republic.	45.236	72,8
A. Fobra Rivas	Socialista	45.030	72,5
E. Mirasol Ruiz	Acción Republic.	43.243	69,8
E. Alfaro Girona	Radical	42.489	68,4
R. Viñas Arcos	Socialista	40.964	65,9
M. Alcázar	Radical-socialist	12.706	20,4

En Asturias, donde Acción Republicana acabaría teniendo dos diputados tras la incorporación de Menéndez y Sarmiento hubo posibilidad de una coalición de centro con melquiadistas; en efecto, tras las gestiones de Pedregal para coaligar al reformismo con otros partidos republicanos, Azaña, que coincidía en esa idea, ofreció lograr que se aprobase por el Gobierno Provisional una coalición para Asturias a base de ocho reformistas, uno de Acción Republicana, dos republicano-conservadores de Maura y un radical, dejando los cuatro puestos de las minorías para los otros grupos de la Conjunción. Esta posibilidad se frustró ante el veto de Melquiades que deseaba que se aceptase a su partido como un aliado a nivel nacional, y no sólo en Asturias. El criterio que prevaleció en el Gobierno Provisional fue sin embargo el contrario, a instancias de Prieto y Albornoz, y como consecuencia de los escasos merecimientos políticos de Melquiades Alvarez para con la República; se consideraba además, con bastante realismo, que el reformismo era a esas alturas, salvo alguna excepción poco cualificada, un fe

nómeno regional (1). La coalición de la Conjunción que finalmente se formó, sin ningún miembro de Acción Republicana triunfó por mayorías, y los dos futuros integrantes de Acción Republicana lograron su escaño en una coalición coyuntural de los federales con ellos, que se autodenominaron agrarios y que iban apoyados en la fuerza del campesinado medio, organizado en la Federación Agrícola Asturiana (2).

En las Baleares, donde se mantenía asimismo la coalición republicano socialista, se presentaban dos radicales, dos socialistas y un candidato de Acción Republicana por mayorías. Este candidato no era sino Azaña, quien alcanzó el primer puesto con 35.663 votos de la lista (el mínimo era 34.184; la diferencia es prácticamente irrelevante e implica una gran disciplina del electorado de la Conjunción). Es indudable que aquí prima más la figura del miembro del GP y de la Conjunción que el líder de Acción Republicana, por lo que no es índice del posible electorado de Acción Republicana (3). Azaña renunciará a este acta, al resultar elegido también por Valencia.

En Madrid, tras una reunión de los partidos de la Conjunción se acordó presentar una candidatura única compuesta

(1) Oliveros, *Asturias en ...*, p. 308.

(2) Girón, *Elecciones ...*, H^a 16, Extra II, p. 117.

(3) Las cifras de votos en Pérez Gabriel, *El movimiento...*, p. 193.

por 7 socialistas y 7 republicanos; vemos que se repite el reconocimiento a la fortaleza del PSOE en la capital, concediéndole tantos candidatos como al resto de los partidos republicanos juntos.

Para la distribución de los puestos entre los republicanos, se decidió presentar a Castrovido como figura representativa de la prensa republicana y luego un candidato por cada uno de los partidos coaligados (radical-socialistas, radicales federales, Acción Republicana, DLR y ASR); Acción Republicana salió notablemente favorecida, si como creemos Castrovido militaba ya en ella, pues resultaba más representada que todos los demás.

Respecto a los resultados podemos observar que siendo los socialistas los que reconocidamente tenían más fuerza, los cuatro primeros puestos de la conjunción fueron para los republicanos; esto prueba que mientras el electorado socialista votó disciplinadamente por la Conjunción, un determinado porcentaje de republicanos mezclaron candidaturas, eliminando a los socialistas de sus papeletas; además de este posible comportamiento de republicanos de derechas y centro hay que contar con el posible voto a las figuras más conservadoras de la Conjunción por parte del electorado hasta este momento monárquico, como señala Tussell (1), pues el alto porcentaje de vo-

(1)

Tussell, *La Segunda República* ..., p.

tantes, para lo usual en España, excluye un abstencionismo de las derechas en estas elecciones -abstencionismo que ha sido repetidamente afirmado- (1). En lo que se debiera al comportamiento de republicanos, tal actitud estaba en contra de las directrices de sus líderes que aconsejaban votar la candidatura completa.

En ambos casos, el voto superior obtenido por tales candidatos republicanos debía responder a las llamadas de otras candidaturas republicanas de carácter centrista (Apoyo a la República, Pureza Republicana).

Los dos candidatos de Acción Republicana (2) están entre estos primeros puestos. Tomamos las cifras del Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, reproducidas por Tussell.

Como puede observarse, (en pág. siguiente) *El Liberal* coloca a Rico en 4ª posición en vez de en 3ª, posponiendo a Sánchez Román. El hecho de que sea una candidatura de coalición nos impide saber nada respecto al apoyo electoral específico de Acción Republicana. Pero sí nos indica una cosa, y es que su imagen en estos momentos -y en Madrid, pues creemos que en junio de 1931 lo más probable es que el partido careciese de una imagen nacional-, es de un grupo moderado y centrista, beneficián

(1)

La participación en Madrid capital, en abril fue de un 67% y en junio de un 67,97%. Hay que mencionar también el aumento del número total de votantes como consecuencia de la nueva regulación electoral; según Tussell, ese electorado joven habría beneficiado a la Conjunción, *ibid.* p.49.

(2)

A Castrovido, Tussell lo adscribe equivocadamente a la Derecha Liberal Republicana; el candidato por ésta era Juarros. De todas formas ya sabemos que Castrovido iba en tanto que representante de la prensa republicana y no de Acción Republicana.

donde así de esos votos derechistas y republicanos moderados que reciben de prima sobre sus compañeros de candidatura socialistas y restantes republicanos; claro que no es sólo esto lo que les coloca en las primeras posiciones puesto que Juarros, del grupo de Alcalá Zamora y M. Maura, está por ejemplo detrás de las principales figuras socialistas, sino que también se refleja el acierto del grupo al haber propuesto a una figura conocida y popular como P. Rico, a la sazón alcalde de Madrid, como representante suyo, y Castrovido por su parte, que no va en cuanto miembro de Acción Republicana, sino de la Prensa republicana, se beneficia de su enorme prestigio como periodista republicano.

Fuentes: Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (1 de julio), *El Liberal*, *El Debate* y *El Sol*

	Lerroux	L. Caballero	Besteiro	Castrovido	Rico	Juarros	Saborit	Tapia	Cordero	T. Gómez	Ovejero	Sanchis	Sánchez Román
Centro	7.681	6.148	6.116	6.545	6.911	5.697	4.885	5.723	4.940	4.363	5.356	5.470	6.753
Hospicio	8.778	7.331	7.264	8.156	7.826	6.794	5.942	6.910	6.116	5.503	6.610	6.888	7.932
Chamberí	17.226	15.179	15.214	16.296	15.953	14.619	12.854	14.904	13.284	12.869	14.235	14.217	16.051
Congreso	13.333	11.482	11.496	12.255	12.011	10.640	9.434	10.764	9.168	8.985	10.386	10.527	12.067
Hospital	12.356	11.545	11.589	12.201	12.069	11.416	10.661	11.758	10.884	10.213	11.077	11.250	11.650
Buenavista	16.025	13.622	13.415	14.385	14.117	12.698	11.483	12.367	11.327	10.483	12.038	12.421	14.115
Latina	13.776	12.519	12.676	13.376	13.214	12.470	11.583	12.766	11.523	10.793	11.803	12.135	12.876
Inclusa	10.880	10.286	10.299	10.846	10.423	9.728	9.637	10.265	9.636	9.415	10.085	10.081	10.384
Palacio	10.147	8.620	8.596	9.298	9.092	8.116	7.404	8.272	7.337	6.483	7.674	7.980	9.187
Universidad	15.762	14.391	14.371	14.991	14.921	14.024	12.928	14.183	12.915	12.344	13.314	13.623	14.453
TOTAL	125.964	111.123		118.311	116.537								115.462
TOTAL:													
<i>El Debate</i>	123.425	117.808	117.793	125.776	123.782	112.885	103.190	115.025	104.136	97.897	109.428	111.516	123.244
<i>El Liberal</i>	133.789	118.431	117.917	126.603	124.227	114.326	103.882	115.769	104.567	98.290	110.866	111.879	125.375

(1).

(1) Datos en *ibid.* pags. 47 y 204.

La moderación es por otra parte una característica de toda la propaganda de la conjunción, incluida la de *El Socialista*, en la provincia de Madrid (1).

Señalemos también que ya en estas elecciones son los dos candidatos de Acción Republicana los que menos diferencia de porcentaje de votos entre los diversos distritos reciben, índice de un mayor interclasismo que otros partidos, dato que se repetirá en las elecciones madrileñas de 1933 (2).

Azaña logró, como hemos dicho, dos actas, una por Baleares (a la que renunciaría y que luego posibilitaría la elección de F. Carreras, también de Acción Republicana) y otra por Valencia capital.

El presentarse por varias circunscripciones, permitido por el sistema electoral, era frecuente entre los principales líderes de los partidos, ya desde antes de la República. Era una forma de asegurarse la elección y a la vez de mostrar su popularidad. Lerroux, por ejemplo, consiguió cuatro actas.

Valencia era un distrito seguro como subraya Aguiló Lucía (3), pues por él se presentaban tres candidatos de importancia nacional: Lerroux, Azaña y Melquiades Alvarez (este último por oferta de Lerroux al renunciar el jefe reformista a

(1) *Ibid.* p.35.

(2) *Ibid.* p.49.

(3) Aguiló Lucía, *Elecciones...*, p.63. Las cifras de la elección en Valencia proceden todas de este estudio.

presentarse por Asturias). En las conversaciones previas de to dos los partidos de la conjunción se atribuía a Acción Republi cana, de los 16 puestos que por mayorías había en las dos cir- cunscripciones valencianas sólo un candidato, manteniéndose esta asignación tras la ruptura parcial de la conjunción que se limitó finalmente en la capital a Acción Republicana, los radicales y radicales autónomos(1) (Lerroux y Blasco Ibáñez), PSOE (Sanchís) y el mencionado M. Alvarez.

Es destacable la alta votación obtenida por Azaña, desconocido hasta poco antes en Valencia, quien supera en 5.000 vo- tos a M. Alvarez y al jefe radical local Blasco Ibáñez, y que da tan sólo a 2.000 votos del caudillo radical; además en 6 de los distritos que son precisamente los más populares, la votación recibida por Azaña es superior a la de Lerroux, aun- que por escasa cantidad de votos; la ventaja de Lerroux se de be a los votos de 3 distritos de clase social acomodada (aun- que a pesar de ello también en estos distritos la mayoría de los votos fue a parar a la Alianza de Izquierdas pero también es a la vez donde la DRV que se había retirado de la lucha con sigue más votos). El hecho creemos que puede ser explicable co mo consecuencia del impacto de la campaña electoral de Azaña: el vigor de su discurso del día 7, en un momento en que la Alian- za Republicana no presenta fisuras le permitieron conseguir es-

(1)

El PURA (Partido de Unión Republicana Autonomista) estaba incluido en la estructura del partido radical, aunque conservara algunas peculia- res características ideológicas.

tos resultados en un feudo radical autonomista, adquiriendo una imagen ante los valencianos, más izquierdista y radical que Lerroux (1).

Algunos datos tenemos de candidatos de Acción Republicana derrotados en diversas provincias. Así Fernando Morales, derrotado en Almería junto con otros dos candidatos de Acción Republicana (2); Morales visitaría a Azaña explicando las causas de la derrota asegurando que la provincia estaba tan poco trabajada por los partidos que podía ser un feudo de Acción Republicana, si se le apoyaba desde el poder, solicitando un gobernador del partido; de hecho en Almería, Barcia, que ingresaría pronto en Acción Republicana consiguió implantarse fuertemente (3). En Alicante, Devesa, médico, fue igualmente derrotado (4). En Toledo Acción Republicana presentó una candidatura propia encabezada por Azaña que incluía a Valdés, radical socialista (de Talavera), Ugena (de Acción Republicana, de Quintanar) y Luis Bello. Esta candidatura de Acción Republi

(1)

Los votos recibidos por los candidatos fueron los siguientes:

Lerroux	53.132
Azaña	51.313
M. Alvarez	46.074
B. Ibáñez	43.163
Sanchís	44.421

(2)

El Sol, 23-6-31.

(3)

Azaña OC.-4, p. 10.

(4)

Azaña, OC-4, p. 15.

cana podía aspirar a algún puesto por lo menos por las minorías, pero los dos de minorías fueron para las derechas, mientras que la candidatura conjuncionista copó todos los de mayorías. Hay que resaltar que Toledo fue donde más se empleó Acción Republicana en su propaganda electoral (1). Por Cuenca hemos localizado a los candidatos Rafael Marín Lázaro y Enrique Cuartero, que tampoco lograron ningún puesto.

(1)

Azaña, OC-4, p. 15.

C. SEGUNDA VUELTA: 12 DE JULIO DE 1931

SEGUNDA VUELTA: 12 DE JULIO DE 1931

Acción Republicana salió muy favorecida en esta segunda vuelta obteniendo dos de las siete actas que se disputaron: una por Madrid capital y otra en Albacete. Con ellas reforzaba su presencia en las dos provincias en las que era más fuerte, pues contaba ya con dos diputados por Albacete (1) y con tres en Madrid, de los cuales dos lo eran por la capital.

Estas elecciones nos van a permitir calibrar en alguna medida la adhesión que podía suscitar un candidato de Acción Republicana, puesto que en muchos casos van a ser elecciones para cubrir un solo escaño. Es claro que no se puede atribuir el total de votos recibidos por Bello en Madrid a Acción Republicana, puesto que era un candidato de la Conjunción; sin embargo el hecho de ser una elección "no disputada" casi, pues tras los resultados de junio y ante una candidatura conjuncionista ninguna posibilidad tenían las derechas, hace que el escaso porcentaje de votantes que acudió a las urnas pueda considerarse como el electorado de Acción Republicana y sus sectores más cercanos (radical-socialistas, izquierda de los radicales, etc.) y hasta cierto punto como prueba de la popu-

(1)

Según cuenta Azaña en sus memorias, Rafael Sánchez Guerra intentó que el grupo de Maura le sacase diputado por Albacete en estas elecciones. Estaban los ministros reunidos en ese momento y Maura por toda contes tación le dijo, refiriéndose a Azaña: "Díselo a ese, que es el amo de Albacete". Azaña le explicó que ya había sido proclamado candidato por Acción Republicana Coca. La fuerza inicial de Acción Republicana en Albacete era como sabemos bastante considerable en comparación con los restantes grupos republicanos. Azaña OC.-4, p.17.

laridad de algunas de las figuras de Acción Republicana. En Bello concurría su popularidad como el publicista que había llamado la atención sobre el deplorable estado de las escuelas en toda España; incluso *La Nación* reconocía que era "un hombre de talento y grandes méritos" (1), y por supuesto su candidatura fue alabada por toda la prensa republicana (2).

Bello fue designado candidato de la conjunción en una reunión de los partidos incluidos en ella: el 7 de julio (3) la prensa publicaba una nota en la que la comisión electoral de la Conjunción comunicaba que para Madrid capital se ha bía designado candidato a Bello y para la provincia al radical Torres Campaná y al radical-socialista Martín de Antonio. Por Acción Republicana firmaba Navarro Blasco (4) y junto a él los representantes socialistas, radical-socialistas, radicales y federales.

El acuerdo consistió en asignar el puesto los parti dos citados y que estos designaran los candidatos, pero en rea lidad se debió llegar a dicho acuerdo conociendo cuáles iban a ser los candidatos, única manera de que pudieran ser apoyados por todos los partidos de la conjunción sin reticencias. De he

(1) Tussell, *ibid.* p.63.

(2) Vid. por ejemplo, *El Sol* y *El Liberal*, 8-7-31.

(3) *El Liberal*, 7-7-31.

(4) También representaba a Acción Republicana en la Comisión el Sr. Doporto.

cho Bello debió moverse bastante para conseguir su designación como candidato de la Conjunción, pues parece que mostró bastante interés en conseguir un acta: recordemos que fue candidato derrotado de Acción Republicana en Toledo (1).

El único acto de campaña electoral que hemos localizado es el que tuvo lugar en la Casa de la República el 11 de julio por la noche, en el que hablaron Tato y Amat como presentador, y a continuación Juarros, Roberto Escribano (de Acción Republicana), Emilio Morayta, Andrés Ovejero (PSOE) y por último el candidato Bello; éste se refirió en su parlamento a su campaña por la escuela, motivo fundamental de su presentación como candidato conjuncionista y de la unanimidad con que la prensa republicana había acogido la designación (además de ser un colega de la profesión) (2).

<u>Electores</u>	<u>Votantes</u>	<u>Abstenciones</u>	<u>Bello</u>	<u>% E</u>	<u>% V</u>	<u>Herrera</u>
230.308	50.700 (22%)	179.608 (78%)	47.933	20,8	94,5	617

(3)

Los resultados dejan bien claro que las derechas se abstuvieron totalmente (el 28 de junio Herrera había obtenido

(1)

Azaña, OC-4, p. 9.

(2)

El Liberal, 12-7-31.

(3)

Datos de Tussell, op. cit. p. 63 y 208.

27.000 votos); la participación y la votación favorable a Bello fue algo superior en los distritos populares (Latina, Hospital, Chamberí) e inferior en los más derechistas (Palacio, Buenavista). El total de votos recibidos (48.000) está entre un 30 y un 40% de los votos recibidos por los candidatos de la la conjunción el día 28. Dos años después, Azaña con un censo duplicado por la presencia de la mujer, tan solo logrará 46.000 votos, claro que en un contexto político completamente distinto que imposibilita la comparación. Pero de todas formas queda bien claro que el voto recibido por Bello es bastante más amplio que el de Acción, aunque también indica su popularidad; no olvidemos que tres meses más tarde, Cossío, en una elección en la que los republicanos y los socialistas pusieron más empeño porque se presentaba Primo de Rivera y no se podían arriesgar a que triunfase el hijo del dictador, lograron arrastrar muy pocos votos más (56.000). Madrid capital será la circunscripción en la que el porcentaje de votantes en esta segunda vuelta fue más bajo de todas.

En Albacete fue al parecer el propio Azaña quien gestionó la candidatura de Coca, que dada la hegemonía de Acción Republicana en la provincia representaba un escaño seguro (1). Sólo se presentaron dos candidatos a la elección, Coca y un socialista, Severiano Garrido, desistiendo tanto los restantes partidos de la Conjunción como las derechas no republicanas. Sin llegar a ser por tanto una elección no disputada como la de Ma

(1)

Sánchez Sánchez y Mateos Rodríguez, *op. cit.*, p. 102.

drid, dados los resultados de la primera vuelta, el candidato socialista tenía pocas posibilidades de éxito.

Damos a continuación los datos del AEE de 1931, en cuanto a votantes y porcentaje de abstención, remitiéndonos en las cifras de votos recibidos por los candidatos a la monografía de M. A. Mateos sobre las elecciones en Albacete.

Los resultados muestran además, si se desglosan por distritos en la capital, la abstención lógica de las derechas en esta contienda que les resulta ajena por completo. Se confirma la hegemonía del republicanismo de izquierdas y en concreto de Acción Republicana, que como resalta el autor antes citado, cuenta con el apoyo oficial en la provincia, pues el líder y fundador de Acción Republicana en ella, Arturo Cortés, ostentaba el cargo de gobernador civil desde la implantación de la República.

<u>Electores</u>	<u>Votantes</u>	<u>% elect</u>	<u>% abstención</u>	<u>Coca</u>	<u>Garrido</u>
86.704	36.397	41,98	58,02	19.922	6.381

(1)

El 4 de Octubre se celebraron nuevas elecciones complementarias (y últimas de importancia en esta legislatura constituyente) (2)

(1)

El número de votos recibido por ambos candidatos procede de los datos de la prensa local (*El Defensor* de Albacete) recogidos por Mateos; aun que según indica no son completos, los votos de los pueblos que faltan son pocos y no alteran la relación entre ambos contendientes. Tomamos las cifras de electores y votantes del AEE-1931, porque las que utiliza dicho autor son las del censo electoral de 1930, *op.cit.* p.103 y AEE 1931, p. 488.

(2)

El 8 de noviembre hubo otra elección parcial en Logroño por un escaño.

por 33 Escaños en 20 circunscripciones (diez de los cuales en la de Lugo, por haberse anulado las elecciones de junio).

Acción Republicana consiguió el escaño de Baleares que Azaña había dejado vacante al renunciar a su acta, con Francisco Carreras Reura. Tanto los socialistas como los radicales apoyaron a Carreras, aunque al parecer en el caso de los socialistas tras fuertes discusiones; Carreras fue así uno de los últimos candidatos conjuncionistas, lo que explica también el alto porcentaje de abstenciones.

<u>Electores</u>	<u>Votantes</u>	<u>% electores</u>	<u>% abstenciones</u>
102.545	41.136	40,11	59,89

(1)

En Sevilla se presentó sin éxito, por Acción Republicana un candidato, Ricardo Majo; también en Jaén presentó a Pedro Llopis, como candidato de Alianza Republicana.

En Jaén, como en Baleares, el Partido Radical apoyó los candidatos de Acción Republicana; el Consejo Nacional del Partido Radical acordó el 17 de septiembre presentar candidatos en todas las circunscripciones excepto en esas dos, en las que apoyaba a Acción Republicana (2).

(1)

AEE 1931, p. 488.

(2)

El Sol, 18-9-31.

D. RESULTADOS GLOBALES DE ACCION REPUBLICANA

RESULTADOS GLOBALES DE ACCION REPUBLICANA

El 11 de julio la secretaría de Acción Republicana dio una nota a la prensa en la que afirmaba que los diputados conseguidos por el partido eran unos 25, aunque confiaban en llegar a unos 40 con los independientes que se sumasen a ellos (1). En realidad la cifra exacta de diputados de Acción Republicana elegidos en la primera vuelta era de 21, aunque se habían conseguido 22 actas, puesto que Azaña había logrado dos (por Valencia y Baleares). Otros dos diputados serían elegidos el 12 en la segunda vuelta, y uno más en las complementarias de octubre, sumando entonces el total de elegidos por Acción Republicana 24. Respecto a los independientes que se pudiesen sumar a la minoría de Acción Republicana las previsiones de la secretaría se mostraron infundadamente optimistas. Tan solo tres diputados (Esplá, Ansó y Figueróa O'Neill) se sumaron en los días inmediatos. Con el paso del tiempo sí se adherieron más diputados, aunque no independientes, sino procedentes de otros grupos de la Cámara.

A continuación damos la lista de diputados de Acción Republicana, añadiendo además aquéllos que fueron elegidos en elecciones complementarias o que se sumaron posteriormente al grupo, explicando las circunstancias en que se produjeron estas incorporaciones, para tener una idea clara de cuál fue la

(1)

El Sol, 11-7-31.

fuerza del grupo de Azaña durante toda la legislatura, dato siempre tan confuso en la bibliografía.

Diputados elegidos el 28 de junio:

Albacete	Esteban Mirasol Ruiz y Antonio Velao Oñate.
Avila	Claudio Sánchez Albornoz.
Baleares	Manuel Azaña.
Cáceres	José Giral y Antonio Sacristán Colas.
Castellón	José Royo Gómez.
Ciudad Real	Gumersindo Alberca Montoya.
Granada (prov.)	José Palanco Romero.
Guadalajara	José Serrano Batanero.
León	Gabriel Franco López.
Madrid (capit.)	Roberto Castrovido Sanz y Pedro Rico López.
Madrid (prov.)	Luis Fernández Clérigo.
Málaga (prov.)	Enrique Ramos y Ramos.
Murcia (capit.)	Mariano Ruiz Funes García.
Orense	Manuel Martínez-Risco y Macías.
Palencia	Matías Peñalba y Ojeda.
Segovia	Pedro Romero Rodríguez.
Valencia (cap.)	Manuel Azaña.
Valladolid	Isidro Vergara Castrillón.
Zaragoza (prov.)	Honorato de Castro Bonell.

Total: 22 actas y 21 diputados.

Diputados elegidos en la segunda vuelta del 12 julio:

Albacete Fernando Coca González Saavedra.

Madrid (capital) Luis Bello Trompeta.

Diputados que se sumaron a Acción Republicana inmediatamente después de las elecciones:

Alicante Carlos Esplá Rizo.

Murcia (provincia) Gonzalo de Figueroa O'Neill.

Navarra Mariano Ansó Zunzarren.

Diputados elegidos en elecciones complementarias del 4 de octubre:

Baleares Francisco Carreras Reura.

Todos los diputados elegidos de Acción Republicana vienen reconocidos como tales en el A. Estadístico excepto dos; son éstos Sacristán Colas, diputado electo por Cáceres y, Peñalba, elegido por Palencia. El primero fue elegido con votos socialistas en una candidatura denominada "Al servicio del socialismo", por lo que probablemente en el Anuario le incluyeron como socialista (1). Peñalba viene como diputado de Alianza Republicana, lo cual es normal dado que el Partido Radical, Acción Republicana y los federales presentaron en varias provin

(1)

Azaña. OC-4, p. 321. El diputado que en el AEE, 1931 se atribuye a Acción Republicana es sin duda José Giral.

cias candidaturas conjuntas de Alianza Republicana; el que Peñalba era ya de Acción Republicana es indudable puesto que , por ejemplo, en *El Liberal* del 30 de junio se le califica así.

De los tres diputados que se sumaron por entonces a la minoría de Acción Republicana, Esplá y Ansó eran ciertamente independientes incluídos en las candidaturas conjuncionistas; el primero viene consignado como independiente en el Anuario y en la prensa (1), y el segundo, cuya independencia nos la atestigua él mismo en sus memorias (2), como de la Conjunción republicano-socialista. Figueroa en cambio, desconocemos si se presentó como independiente; dado que por la circunscripción de Murcia provincia resultaron elegidos tres radicales (Martínez Moya, Cardona Serra y Templado) (3), dos socialistas (Ruiz del Toro y Luis Prieto), y según el Anuario los dos restantes diputados elegidos eran uno radical socialista y otro de la DLR, nos parece bastante posible que se presentase como miembro de este último grupo, para pasarse en seguida a Acción Republicana; dadas las posiciones políticas que luego mantendría no es probable que perteneciera hasta ese momento al PRRS.

(1) *El Liberal*, 30-6-31. AEE 1931, p. 487.

(2) *Yo fui...*, p. 41.

(3) Ruiz Manjón, *El Partido Republicano ...*, p. 195. .

Diputados sumados a Acción Republicana con posterioridad procedentes de otros grupos de la Cámara:

1931: José Sánchez Covisa y Sánchez Covisa, diputado por Cuenca, procedente de la minoría progresista de Alcalá Zamora, de la que se dio de baja el 20-10-31 (1).

1932: Eduardo Pérez Iglesias y Ramón Ruiz Rebollo, diputados por Santander, ambos procedentes del partido federal, se dieron de alta en Acción Republicana el 30-1-32. (Vid. *El Sol* de esta fecha).

Pedro Vicente Gómez Sánchez, diputado por Ciudad Real, procedente del partido radical, se dio de alta en Acción Republicana en marzo de 1932 (2).

Angel Sarmiento González y Angel Menéndez Suárez, diputados por Asturias, y ambos elegidos por el Bloque agrario. Desconocemos la fecha exacta de su adscripción a Acción Republicana, de cuya minoría, desde luego, formaban parte en noviembre de este año, mes en el que participaron en un banquete de la misma (3).

1933: Luis de Zulueta Escolano, diputado por Badajoz

(1) DDSS nº 59, p. 31.

(2) *El Sol*, 27-3-32.

(3) *El Sol* y *El Liberal*, 13-11-32.

y procedente del grupo liberal-demócrata de Melquíades Álvarez, se incorporó el 16-6-33 (1), aunque su intención de sumarse a Acción Republicana procedía de muy antiguo, de finales de 1931. Si no lo hizo antes fue por no querer dar la impresión de oportunismo sumándose al partido del Presidente del Gobierno. Por ello, se le puede considerar prácticamente como de Acción Republicana a efectos parlamentarios durante los gobiernos Azaña.

Federico Castillo Extremera, diputado por Jaén, procedente del grupo conservador de Maura, se dió de alta en Acción Republicana en febrero de 1933 (2).

Joaquín Poza Juncal y Bibiano Fernández Ossorio Tafall, diputados por Pontevedra y procedentes del Partido Republicano Gallego (antes ORGA), se dieron de alta en mayo de 1933 (3).

Así pues, Acción Republicana acometió la discusión de la Constitución con 26 diputados, de los cuales 23 habían sido elegidos bajo la etiqueta de Acción. A finales de año , cuenta con 28 diputados, siendo uno de los dos nuevos diputados elegido en elecciones complementarias (Carreras). En 1932

(1) *El Sol*, 16-6-33; Azaña, OC. IV, p. 259.

(2) *El Sol*, 9-2-33.

(3) *El Sol*, 4-5-33.

se sumaron a la minoría cinco nuevos diputados, dándose de baja dos (Figuerola y Alberca Montoya), con lo que al finalizar el año, Acción Republicana contaba con 31 diputados. Y por último, en 1933 se adhirieron a Acción Republicana cuatro diputados más, sufriendo el grupo otras tres bajas (Pérez Iglesias, Zulueta y Rico). La primera de ellas lo fue por fallecimiento; la de Zulueta se produjo al renunciar a su acta por haber sido nombrado embajador en Berlín, y la baja de Rico se produjo estando ya disueltas las Cortes Constituyentes, por lo que en realidad la minoría de Acción Republicana alcanzó el fin de la legislatura con 33 diputados.

3. DISCUSION CONSTITUCIONAL: HACIA UNA NUEVA
MAYORIA GUBERNAMENTAL

DISCUSION CONSTITUCIONAL: HACIA UNA NUEVA MAYORIA GUBERNAMENTAL

Se puede decir que los partidos adquirieron un per
fil político propio en los cuatro meses que duró la discusión
del texto constitucional. En ese lapso de tiempo se prefigurar
rán las posiciones que habían de durar por lo menos hasta el
fin del primer bienio.

Esto es tan claro que precisamente ante el anteproy
ecto de Constitución de la Comisión Jurídica Asesora fue cuand
o el Gobierno tomó conciencia de la profunda e insalvable dif
ferencia de criterios de sus componentes, renunciando a adopt
tarlo como suyo y a elaborar uno propio. Difícilmente podía
ser de otra forma.

El Debate sin embargo, en manifiesta contradicción
con su editorial del 24 de abril (1) criticó acremente esta in
hibición gubernamental. A primera vista puede parecer extraña
esta actitud, pues si el Gobierno lograba con mutuas transacc
iones elaborar un proyecto propio, éste resultaría aprobado
por las Cortes sin demasiadas dificultades ni modificaciones,
y por fuerza sería un proyecto que habría de disgustar a la
derecha católica. Probablemente pensaba, no sin razón, que aún
así, siempre sería más moderado un proyecto gubernamental que

(1)

En el que propugnaba un Gobierno Provisional lo más inhibicionista pos
sible.

otro elaborado por la comisión correspondiente de las Cortes, más directamente influida por las organizaciones de los partidos.

No sólo los partidos orientaron definitivamente su rumbo sino que cuando se aprueba la Constitución, la política general ya había dado un giro a la izquierda con la dimisión en octubre del ala conservadora del GP, acercándose éste a la configuración ya netamente izquierdista que tendría en los dos próximos años. El último paso se daría en diciembre al negarse el partido radical a continuar en la coalición. Al fin y al cabo al elaborar la constitución se fueron tocando todos los temas que luego exigirían su desarrollo en leyes ordinarias y que serían objeto de las duras luchas políticas posteriores.

En lo que a nosotros nos afecta es interesante constatar que es proceso de afirmación ideológica es tanto más decisivo para Acción Republicana cuanto que era precisamente el partido de ideología más indefinida, junto con el radical, cuya oscilación a la derecha sorprendió por lo continuada y profunda.

Si bien en la campaña electoral de Azaña para las Constituyentes, así como en muchos actos del partido se insistió en su carácter izquierdista y se anticiparon las soluciones legislativas que la futura coalición gobernante iba a impulsar, la enorme moderación de muchos de sus representantes parlamentarios y la poca cohesión inicial de la minoría parlamentaria, iban a exigir un rápido proceso de disciplina de la

misma, proceso que iba a concluir en una primera fase sin pé
ridas humanas. A lo largo de estos meses la minoría parlamen-
taria de Acción Republicana, que junto con el Consejo Nacional
iban a ser los dos órganos de dirección del partido, iba a
alinearse de una manera definida tras las posiciones izquier-
distas de su líder y del ala más progresista de Acción Republi
cana.

Según cuenta Azaña con cierta satisfacción, con oca
sión de una votación parlamentaria (1) en la que se alinearon
Acción Republicana, radical-socialistas y socialistas frente
a radicales y derechas, se comentó en los pasillos del Congres
o que ahí se había visto cuál iba a ser el futuro sistema de
alianzas en las Constituyentes, provocando la irritación de
los radicales. En diciembre esa conclusión era ya bastante clara.
Y ello se produjo a pesar de los intentos de Azaña de uti-
lizar la Alianza Republicana como un instrumento para retener
a Lerroux en la izquierda; consecuentemente, al fracasar este
intento los días de la Alianza estaban contados.

Como veremos más adelante al estudiar la estructu-
ra de poder en el interior del partido, la dirección de éste
recaerá sobre dos órganos, el Consejo nacional y la Minoría
Parlamentaria, en frecuentes reuniones conjuntas. Una impor-
tante reunión de ambos órganos tuvo lugar el 25 de agosto. Y

(1)

Azaña, OC. IV. p.116.

fue importante porque en ella se aborda por vez primera de forma directa la cuestión de la disciplina, al tiempo que se iniciaba la discusión de los temas ideológicos más polémicos.

El Consejo Nacional se reunió en la tarde del 25. Se trataron cuestiones organizativas analizándose la situación política interna del partido. La cuestión de la disciplina había llegado a ser tan aguda que el jefe de la minoría, Giral, pretendía dimitir, pues según afirmaba, no se le hacía caso. Se percibía además una división entre un ala derecha y un ala izquierda, haciéndole temer a Azaña este hecho próximas dificultades. Se acordó convocar la próxima Asamblea nacional del partido con el objeto fundamental de aprobar los estatutos para el 12 de septiembre (y la local de Madrid el día 5), y para resolver los problemas antes citados se acordó celebrar una reunión conjunta con la Minoría Parlamentaria esa misma noche.

Giral había apuntado un factor que estaba en la base de la falta de disciplina de la minoría y era que muchos diputados acababan de ingresar en el partido antes o después de las elecciones. Eran éstos los que planteaban dificultades. Todo era una consecuencia inmediata del primario estado de organización del partido, pues los que se adherían al partido desde la fuerte posición de diputados no se encontraban con un grupo coherente y disciplinado sino con una organización que estaba todavía por asimilar su propio ideario y de perfilarlo con criterios propios.

Otro aspecto resaltado también por Giral será en cam

bio más permanente, aunque conforme Acción Republicana vaya encontrando su puesto en el espectro político, más que un problema, será uno de los más poderosos medios de cohesión del partido: la autoridad de Azaña. Giral afirmaba que estando presente Azaña todo el grupo parlamentario acataba su autoridad, pero faltando él no había disciplina. Muchos le habían llegado a confesar que estaban en el partido por "admiración o consideración a Azaña", sin participar del ideario del grupo. Semejante situación planteaba en estos momentos más problemas que ventajas, porque todavía no había ocasión de que Azaña representase con nitidez una política determinada. Sin embargo nos indica la relevancia que Azaña había ya adquirido dentro de su propio partido.

A la noche tuvo lugar la reunión conjunta del Consejo Nacional y la Minoría Parlamentaria, prolongándose el día siguiente. Se discutió sobre los debates constitucionales, sobre la situación política en relación con los últimos discursos de Lerroux y su posible repercusión en la Alianza, y sobre la cuestión de la disciplina parlamentaria.

Respecto al tema constitucional la discusión se centró, a pesar de que se estaban todavía en el debate de totalidad, sobre la cuestión de las autonomías. Las posturas de los diputados cubrían todo el abanico posible: Sánchez Albornoz y Franco unitarios, Ansó, diputado por Navarra, defendía la ley paccionada; Palanco era federal, otros autonomistas, etc. Tras grandes discusiones se logró ir homogeneizando las diversas

posturas, acercándolas a las soluciones autonomistas del partido; Sánchez Albornoz, que era precisamente quien iba a intervenir en nombre de la minoría en el debate de totalidad, fue el que más resistencias opuso a alinearse con sus correligionarios. Por ello algunos pretendieron que fuese Azaña quien fijase la posición del partido. Azaña prudentemente se negó, en base a que prefería ver tomar posiciones a los otros grupos antes de intervenir él. Sería en efecto Sánchez Albornoz quien hablase finalmente, sin que su intervención desentonase de la línea de Acción Republicana.

El discurso de Lerroux en Valladolid el día 23 (1) había producido gran disgusto entre los líderes de Acción Republicana por sus tintes claramente conservadores (defendiendo, entre otras cosas, la conveniencia de contar con la colaboración de los partidos superstites de la Monarquía, etc.). Azaña dio claramente las directrices: evitar la polémica con él; la postura de Acción Republicana debía fijarse por medio de la propaganda propia, sin favorecer un distanciamiento de Lerroux. Necesidad de mantener la coalición gobernante hasta que se aprobase la Constitución, y a ese efecto la Alianza era sumamente útil.

(1)

Un resumen en Gutiérrez Ravé, *España en 1931*, p. 285.

Respecto al tema, que había de ser clave, de la disolución o pervivencia de las Cortes Constituyentes, Azaña veía con claridad que la composición de la Cámara de mayoría izquierdista convenía a los planteamientos del partido, basado en una colaboración republicano socialista. Sin duda Azaña también contaría con el factor de que un grupo con escasa entidad, como el suyo, no podía arriesgarse a unas nuevas elecciones inútilmente, pues no se veía por qué razones iba a conseguir mayor representación que la que tenía; más prudente era sin duda dedicarse al fortalecimiento del partido a partir de sus fuerzas organizativas y parlamentarias actuales.

Azaña consideraba que la pretensión de Lerroux, de disolver las Cortes encubría su deseo de obtener el decreto de disolución, hacer él las elecciones y gobernar con un Parlamento más templado. Para ello necesitaba que una vez elegido el Presidente de la República, le concediese el decreto de disolución a pesar de existir posibles gobiernos mayoritarios en la Cámara, y de que era el único grupo que defendiera más o menos abiertamente la disolución; lo cual era, y en esto la posición de Azaña era irrefutable, volver a invertir el sistema parlamentario, poniendo el centro de gravedad en la confianza del Jefe del Estado y no en el Parlamento.

Además, el decreto de convocatoria de las Cortes Constituyentes confería a éstas el más "amplio poder constituyente y legislativo", lo que implicaba que la labor de las Cortes no quedaba reducida a elaborar la Constitución. El he-

cho de que el propio Lerroux hubiera afirmado en otro discurso de la noche anterior que el único presidente posible con estas Cortes era Alcalá Zamora, le permitía a Azaña -según su razonamiento- exigir la continuación de las Constituyentes sin que pareciese que estaba interesado por el poder. Era claro que Lerroux (y la mayoría), todavía no habían "descubierto" a Azaña (1).

En cuanto a la disciplina parlamentaria se evitó la dimisión de Giral, dándole explicaciones y reafirmando la necesidad de una actuación conjuntada de la minoría. Y una última observación que destaca de las notas que Azaña escribió sobre esta reunión es su constatación de que la mayoría de los pro-hombres de su partido eran conservadores. De hecho veremos cómo su tarea será homogeneizar sus posturas políticas e irlos arrastrando hacia posiciones más izquierdistas, cosa que logrará gracias a su enorme autoridad y talento sin que casi nadie de estos conservadores abandonase el partido (2).

(1) Ya cuando se había discutido en el Partido Radical la cuestión de otorgar la confianza al GP, al presentarse éste a las Cortes, había manifestado Lerroux su escasa predisposición a gobernar con las Cortes Constituyentes. La importancia residía en que dada su aspiración a gobernar, su postura implicaba la necesaria disolución de las Constituyentes una vez aprobada la Constitución. En sus sucesivos discursos esta postura se iría manifestando cada vez con más claridad.

(2) Para las reuniones citadas vid. *El Liberal* y *El Sol*, 27-8-31 y Azaña, OC. IV, p. 102-3.

4, SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL

SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL

Previamente a la Asamblea nacional habían de reunirse las asambleas locales para la designación de delegados (como ya se había hecho en mayo).

Las respectivas organizaciones provinciales eran las encargadas de convocar a los grupos locales para que designasen dichos delegados. Nada sabemos de los criterios de representación en la Asamblea, esto es a cuántos delegados tenía derecho cada organización local. Por una nota aparecida en la prensa (1) se convocaba a todos aquellos consejos locales de provincias donde no existía organización provincial para que se reuniesen en asamblea local y eligiesen sus delegados; en principio parece pues que cada grupo local tenía derecho a por lo menos un delegado fuera cual fuera su importancia numérica; Madrid eligió cinco. Posteriormente, los delegados a la Asamblea nacional serían elegidos no directamente por los grupos locales, sino por asambleas provinciales constituidas por delegados elegidos en asambleas locales. Las dimensiones todavía reducidas del partido y el estado de incipiente organización forzaban a prescindir del nivel intermedio provincial.

A la asamblea, que se desarrolló los días 12 y 13 de septiembre, podían asistir todos los afiliados que lo desearan, pero solo los delegados tendrían voz y voto.

(1)

El Sol, 6-9-31 y *El Liberal*, 8-9-31.

Del orden del día concreto sólo sabemos dos puntos (seguramente únicos): la discusión y aprobación de los estatutos y la elección de nuevo Consejo Nacional. La Asamblea estuvo presidida por Giral, y la mesa se componía además de un secretario, Fernando Coca, entonces secretario general del partido y de tres vocales: Peñalba (diputado por Palencia), Ramos (diputado por Málaga) y Martínez Risco (diputado por Pontevedra).

Para la discusión del proyecto de estatutos se nombró una mesa (1) presidida por el Sr. Castelar e integrada además por Ricardo Manjón y De Benito (catedrático de Salamanca). La discusión duró hasta las dos de la madrugada, hora en que quedó totalmente aprobado. Ninguna referencia ni documento hemos podido encontrar respecto al contenido de la discusión (2).

De Pedro Rico sabemos debió tener intervenciones discutidas y tachadas de reaccionarias; como veremos Rico, actuará siempre poco firme en sus convicciones políticas, y su proximidad a los radicales dará a veces que hablar; en cualquier caso su posición dentro del partido y especialmente dentro del grupo madrileño que presidiera hasta finales de 1933 nunca fue muy segura. También hubo ataques a la labor de la

(1) La nota de *El Sol* habla de que se nombraron varias mesas de discusión, pero por la misma nota se deduce que en realidad solo se eligió una y que el único punto discutido fue el de los Estatutos.

(2) Para lo referido a estatutos vid. infra, cap. VII.

secretaría, lo que provocaría el relevo de Coca (1).

El Consejo que vino a substituir al elegido en mayo, fue el siguiente:

Presidente: Manuel Azaña.

Vicepresidente: José Giral.

Secretario: Vicente Gaspar Soler.

Consejeros: Leonardo Martín Echevarría.

Honorato de Castro Bonell.

Amós Salvador Carreras.

Enrique Ramos y Ramos.

Angel Navarro Blasco.

Manuel Alvarez Ugena.

José Serrano Batanero.

Cándido Bolívar Pieltrin.

José Estruch Ripoll.

Hipólito Rafael Romero Flores.

Arturo Cortés.

José Palanco Romero.

Ramón González Cid.

Mariano Ruiz Funes.

Joaquín Alvarez Pastor.

Demófilo de Buen.

(1)

Azaña, OC. IV, p. 127.

Rubén Landa Voz.

Joaquín Gómez Llerena.

Fernando González Rodríguez.

Andrés Torre Ruiz.

Enrique Rodríguez Mata.

Manuel Sánchez-Herrero y Alba.

De acuerdo con los Estatutos recién aprobados, es de suponer que once representantes lo serían por Madrid y los restantes por provincias. Lo que resalta a primera vista es la profunda renovación operada en el Consejo, exigida asimismo por los Estatutos. Sólo 10 de los 25, menos de la mitad, permene-
cen. El antiguo secretario general, Coca, no solo no es reele-
gido en su puesto sino que ni siquiera forma parte del nuevo Consejo (1). De los 12 anteriores representantes por provin-
cias sólo 4 son reelegidos, Gaspar, Estruch, Cortés y Palanco, mientras que de Madrid son seis los que siguen en el Consejo. Seis de los componentes son además diputados (siete era el má-
ximo permitido por los Estatutos).

El nuevo Consejo Nacional celebraría su primera reu-
nión días después, tratando fundamentalmente de tareas organi-

(1)

En este caso debieron influir las críticas sobre su gestión, que debie-
ron ser bastante generalizadas; V. Gaspar, el secretario elegido ahora
informaría en la próxima asamblea que prácticamente la secretaría no
había funcionado hasta que él se encargó de ella.

zativas. Se acordó por ejemplo, confeccionar un censo del partido, afirmando la nota dada a la prensa que constantemente aumentaba el número de organizaciones locales y de afiliados; se proyectó un amplio plan de propaganda por toda España y , aparte otras cuestiones de trámite, se procedió a la elección de la Comisión ejecutiva creada también por los recién aprobados estatutos. La comisión quedó compuesta por los siguientes consejeros: Azaña, Giral, Amós Salvador, Vicente Gaspar, L. Martín Echevarría, Serrano Batanero, A. Navarro Blasco y Cándido Bolívar. Esta reunión tuvo lugar el día 15 (1).

En el discurso de clausura de la Asamblea Nacional, Azaña insistió en que las Cortes Constituyentes debían subsistir hasta que terminaran no sólo la Constitución sino también las reformas que la opinión pública esperaba y que estaban incluidas en los programas de los partidos republicanos. Y lanzaba una severa advertencia que pronto sería coreada por socialistas y restantes republicanos de izquierda: "no veo yo qué Presidente inauguraría su gestión dando el decreto de disolución de estas Cortes a una combinación ministerial porque no contase con mayoría en ellas; eso equivaldría a un golpe de Estado que nosotros no podríamos tolerar" (2).

(1)

El Liberal, 22-9-31. Azaña, OC. IV, p. 131.

(2)

Azaña, OC. II, p. 37.

5. FIN DE LA ALIANZA REPUBLICANA

FIN DE LA ALIANZA REPUBLICANA

Si la Alianza Republicana había servido antes del 14 de abril para aunar las tareas propagandísticas de los republicanos, y en mayor medida las de los dos partidos más significativos de ella, el Radical y Acción Republicana, una vez instaurada la República se procedió al lógico replanteamiento de su finalidad. En un primer momento esta siguió siendo idéntica; en la reunión que el Consejo Nacional de la Alianza tuviera el 27 de abril se decidió conservar la Alianza y mantener la conjunción republicano socialista para las elecciones a Cortes, cosa que como sabemos sólo se cumplió en parte (1).

Reunidas ya las Cortes Constituyentes, la Alianza quedaba, aunque descompuesta en varios grupos parlamentarios como el conjunto de diputados más numeroso pertenecientes a una organización política. En consecuencia, desde un primer momento se pensó en constituir un bloque parlamentario con un único organismo rector. Así se acordó en una reunión del Consejo Nacional, el 10 de julio; este organismo, de acuerdo con los partidos integrantes y junto con un comité parlamentario compuesto por dos radicales, dos de Acción Republicana y un federal, sería el que dirigiera el bloque, que integrado por Acción Republicana, radicales, federales no disidentes y republicanos

(1)

El Sol, 28-4-31.

autónomos contaba con unos 130 diputados (1).

Sin embargo, la Alianza, ni en la calle ni en el parlamento volvió a dar muestras de vitalidad salvo en muy contadas ocasiones. Ya hemos visto de pasada cómo las elecciones complementarias que tuvieron lugar tras las de junio fueron una de ellas. Pero el curso de la discusión constitucional fue delimitando una progresiva distanciación de radicales y Acción Republicana, sin cuya unidad la Alianza no podía subsistir. Así como Azaña concibió siempre la Alianza, una vez instaurada la República, como un instrumento que podría retener a Lerroux en la izquierda, éste a su vez debió considerarla como un medio a través del cual podría controlar -e incluso absorber- al partido de Azaña, como se transluce en la preocupación de éste en las reuniones del Consejo nacional de la Alianza en dejar bien sentado que la colaboración no implicaba confusión de ambos grupos. Ni una ni otra expectativa se vieron confirmadas (2).

Practicamente la última reunión de algún relieve de la Alianza fue la de diciembre de 1931. Convocada antes de la crisis ministerial que había de producirse necesariamente con

(1) *El Sol*, 11-7-31; Azaña, OC. IV, p. 23.

(2) Vid. por ejemplo Azaña, OC, IV, p.10-11.

la elección del Presidente de la República, tuvo lugar el día 9 por iniciativa de Lerroux, con objeto de examinar la situación política y más en concreto de resolver sobre la colaboración ministerial socialista. Contra ésta se expresaron la mayoría de los que hablaron, y algunos, como dos gobernadores de Acción Republicana, Doporto y Cortés, con gran vehemencia. También Giral y Martínez Barrio se manifestaron contra la continuación de la alianza con los socialistas. Hablaron por último Azaña y Lerroux; el primero, que hasta poco antes había sido partidario de dicha solución, habló extensamente sobre los inconvenientes de tener enfrente un partido socialista que sacaría ventaja del desgaste ministerial a la vez que dificultaría grandemente la acción de gobierno. A continuación habló Lerroux quien afirmó que el Presidente del Gobierno debía continuar siendo Azaña y no él, imposibilitado en aquellas circunstancias por la enemiga socialista y radical socialista. La reunión concluyó otorgando un voto de confianza a los cuatro ministros presentes para resolver según su mejor criterio. Según Azaña lo que se había acordado era la continuación de la alianza, y el discurso de Lerroux había reforzado su argumentación, terminando de convencer al Consejo. La referencia de prensa y el acta de la sesión reproducen sin embargo del discurso de Lerroux tan sólo unos pasajes ambiguos, y luego las afirmaciones recogidas más arriba. Sin embargo creemos que la intervención de Lerroux debió efectivamente apoyar la opinión de Azaña pues así lo afirmaría éste al presentar el Gobierno a las Cortes sin ser contradicho (1).

(1)

El Sol, 10-12-31; *El Liberal*, 10 y 11-12-31; *Libro de Oro...*, p.201; Azaña, OC.IV, p.265 y 266, y II, p. 111 y ss.

El desarrollo de la crisis, demostraría que la cohesión de la Alianza era nula y que de poco había servido la reunión previa. A partir de ese momento la Alianza estará muerta, pues la crisis determinaría el comienzo de la ruptura entre radicales y Acción; los subsiguientes discursos de Lerroux harían el resto. La Asamblea Nacional que Acción Republicana celebrará en marzo del 32 discutirá si se declaraba públicamente fenecida la Alianza. No se hará así, pero sus organismos ya no se volverán a reunir.

6. AZAÑA, JEFE DEL GOBIERNO PROVISIONAL

AZAÑA, JEFE DEL GOBIERNO PROVISIONAL

La crisis del 13 de octubre que encumbró a Azaña a la jefatura del GP fue una de las jornadas claves, para bien o para mal, de la II República española. Fue una crisis más amplia que un simple cambio de gobierno. En ella se decidió, por un lado la solución a aplicar a uno de los problemas de las relaciones Iglesia Estado que más preocupaban a la opinión repu**bl**icana y a la propia Iglesia, el status jurídico de ésta y de las órdenes religiosas. El papel de Azaña en la solución final fue decisivo aunque de un carácter bien distinto al que una bibliografía parcial ha querido presentar. La consecuencia política inmediata fue la exaltación de Azaña a la Presidencia del Gobierno; las consecuencias indirectas se entrecruzan con toda la historia posterior de la República, pues toda ella resultó mediatizada por la política religiosa. Vamos a analizar en primer lugar la ocasión de la crisis ministerial: el punto al que había llegado la discusión sobre el artículo 24 del proyecto constitucional (luego 26 de la Constitución) cuando se produjo la intervención del ministro de la Guerra que propició la solución definitiva. Luego estudiaremos brevemente el efecto político en la coalición ministerial, para concluir con algunas reflexiones sobre el significado profundo de esta jornada en la existencia de la República (1).

(1)

Sobre todo lo relacionado con la aprobación del art. 26, vid. Arbeloa, *La semana...*, y Azaña, OC, IV. pags. 170-189.

El dictamen de la Comisión constitucional, gracias a la presión gubernamental, había resultado ser un texto en el que habían influido previas enmiendas de Acción Republicana y los radicales y que había sido elaborado sobre la base de un escrito presentado por Maura; éste leyó en Consejo un texto el día 10 que fue con algunas modificaciones el que resultó definitivamente como dictamen. Por él, frente a la disolución y confiscación de sus bienes de todas las órdenes religiosas del primitivo dictamen, se establecía que quedarían reguladas de acuerdo a una ley especial y se posibilitaba la disolución de aquéllas que constituyen una amenaza para la seguridad nacional (cláusula que apuntaba hacia los jesuitas). Pero los radical socialistas no se conformaban con esta solución moderada y estaban dispuestos a votar el primitivo dictamen ahora convertido en voto particular, de carácter mucho más radical -disolvía a todas las órdenes religiosas y confiscaba sus bienes-. Los socialistas, aún comprendiendo la inoportunidad de una solución de este tipo, se hallaban presos de la demagogia radical socialista, pues no estaban dispuesto a que un grupo burgués les arrebatase una posición de extrema izquierda. Y si ambos partidos votaban efectivamente el voto particular, éste contaba con muchas posibilidades de resultar aprobado, teniendo en cuenta, además, que muchos radicales, sumamente anticlericales, lo votarían también en contra de las directrices moderadas de Lerroux.

La clave política del discurso de Azaña fue una apelación a los socialistas para que votasen el texto propugnado

por los radical socialistas, sólo en el caso de que estuviesen dispuestos a recoger el Gobierno. Pues si imponían una redacción inaceptable para ciertos partidos republicanos (todos me nos los radical socialistas) ellos, como grupo más numeroso de la Cámara y que apoyaban dicho texto, debían recoger la responsabilidad gubernamental. Si no podían o no querían hacerlo, debían ceder y aceptar la solución de transacción que les ofrecía, pues agravaba el texto del dictamen en dos puntos para que les resultase más aceptable (1). Tras este discurso los socialistas, con gran indignación de los radical socialistas pidieron un plazo para discutir la cuestión y tras someterlo a votación en su grupo parlamentario aceptaron la propuesta de Azaña, que resultó aprobada con la abstención de los radical socialistas.

Dos cosas hay que aclarar en lo que se refiere a los hechos narrados: una, si hubiera sido posible otra solución más aceptable para los sectores católicos, tanto republicanos como no republicanos. Y en segundo lugar si la intervención de Azaña fue hecha con la intención de desbancar a Alcalá Zamora de la presidencia del Gobierno Provisional, como este creyó firmemente.

Respecto al primer punto Alcalá Zamora habla en sus memorias, destacando la desleal actuación de su ministro de la

(1)

Dichas modificaciones eran la inmediata disolución de la Compañía de Jesús en vez de relegarla a una ley especial, y la prohibición de enseñar a las órdenes religiosas.

Guerra, que su intervención abortó unas negociaciones que llevaban buen camino; poco se compagina esto con sus propias afirmaciones respecto a la falta de apoyo con que se encontró, incluso por parte de los ministros que se habían comprometido a buscar una solución de concordia, así como con la actuación de las minorías radical socialistas y socialistas, antes y después de la intervención de Azaña. Pues en efecto, lo que forzó -y permitió- a los últimos a dejar solos a los radical socialistas fue precisamente la habilidad de la intervención de Azaña, y los radical socialistas no ocultaron su irritación. Por ello no se ve la verosimilitud de que por un acuerdo previo se hubiese llegado finalmente a una solución más moderada, lo que no se había logrado en varios días de negociaciones.

Además, ninguno de los protagonistas ha escrito nada que pueda hacer pensar que la intervención de Azaña hubiese frustrado voluntaria o involuntariamente una solución de mayor compromiso con las fuerzas católicas. El propio Alcalá Zamora no da detalle alguno de la negociación a que alude (1).

Y respecto a la segunda cuestión es bastante claro que no hubo plan preconcebido alguno de eliminar a Alcalá Zamora. Este quedó persuadido de que los ministros o algunos de ellos (incluido su propio correligionario Maura, con quien eran conocidas sus diferencias) habían planeado substituirle por Azaña; la motivación de éste sería en su opinión la ambición; la de los demás no se imagina con facilidad, por lo menos la de algunos ministros.

Como en otras ocasiones su hipótesis la elabora en base a dos o tres detalles almacenados por su sorprendente me

moria e hilados de manera a veces completamente arbitraria; ello es una prueba de la compleja psicología del Presidente del Gobierno y posteriormente de la República, que llevaría a diversos políticos de derechas e izquierdas a considerar que padecía de una patológica manía persecutoria.

Sin que eso signifique poner en duda la honestidad personal y buena intención de Alcalá Zamora -quien sin duda se creía sus propias figuraciones-, las pruebas que él creía que demostraban la conspiración son disparatadas; los planes de gobierno de diversa composición elaborados (o recogidos como rumor) por Maura eran sumamente frecuentes, como el propio Azaña nos cuenta en sus memorias; es por tanto perfectamente posible que ya en junio hubiese proyectado a Azaña como jefe del Ministerio como afirma Alcalá Zamora, sin que ésto implique que ¡meses después! se ejecutase dicho plan.

El alegar que Azaña había llamado a su familia para comunicarle que "todo iba según lo previsto", según recoge D. Niceto es sencillamente histriónico. Por último, la frase de Azaña en su discurso de que ellos -los republicanos- habían encontrado un instrumento de gobierno y por lo tanto tenían derecho a que se votase su solución, al contrario de lo que les sucedía a los socialistas, no tenía porqué implicar un cambio de jefatura en el Gobierno. Es obvio que en la intención de Azaña en ese "instrumento de gobierno" quedaban incluidos cualquier gobierno republicano o republicano socialista de hegemonía republicana, como lo era el Provisional.

(1) página anterior

Sobre la versión de Alcalá Zamora, *Memorias*, p.193 y 500. Gil Robles también alude a su posible transacción de última hora, calificándola de "leve especulación".
" detalles No ue... .53.

Y si no había plan colectivo, ¿se puede pensar que Azaña interviniese con la intención de forzar a Alcalá Zamora la dimisión? Sin duda alguna se puede contestar negativamente. En primer lugar, ninguno de los miembros del Gobierno lo interpretó así. Si como se ha dicho, Azaña no fue consciente de aquella jornada de su trascendencia futura, lo mismo les ocurrió a sus compañeros de gobierno incluido Lerroux. El comportamiento de todos ellos al final del discurso prueba también que no esperaban ninguna consecuencia política inmediata. Todos se acercaron a felicitar al ministro de la Guerra, manifestando su alegría por haber salido del trance difícil en que se hallaban al quedar excluida la aprobación del voto particular radical-socialista. Maura, sabiendo la orientación de la intervención de Azaña, le había animado a hablar como mejor forma de intentar resolver el problema (1). Lerroux, quien en su pedestre libro de memorias (2) sostiene la versión de la puñala da de Azaña a su Presidente, estaba radiante de satisfacción tras el discurso de Azaña.

Nadie parecía pensar que se fuera a producir una crisis (y menos que se fuera a producir una crisis irreversible) pues el Presidente solía plantearlas con cierta frecuencia (3).

(1)

Lo cual quita todavía más verosimilitud a la afirmación de Alcalá Zamora de que se había abortado una solución de concordia.

(2)

Lerroux, *La pequeña...*, p.111.

(3)

Maura, *Así cayó...* p.212 y Azaña, OC.IV; durante todo el período del Go bierno provisional hasta octubre, Alcalá Zamora dimitió en numerosas ocasiones.

Por otra parte en la reunión de ministros que tuvo lugar para discutir la solución a la crisis planteada, si Lerroux no resultó elegido jefe de gobierno fue por su propia intervención proponiendo a Azaña (ya nos es conocido que su opción realista era que no le era posible gobernar con eficacia en estas Cortes, dadas sus posiciones políticas del momento), pues de lo contrario los socialistas, aún a disgusto, no hubieran tenido más remedio que transigir con la jefatura de Lerroux hasta terminar la elaboración de la Constitución. Es decir que la consecuencia previsible si se pensaba en una substitución de Alcalá Zamora era que la presidencia pasase a Lerroux.

Azaña, sin que por eso deje de translucir que -como es natural- se sentía halagado por su encumbramiento, lo consideraba prematuro, al igual que los que él tenía por más lúcidos de su minoría parlamentaria.

Digamos por último que por lo que el propio Alcalá Zamora deja entrever con claridad, su dimisión vino provocada más que por la solución legislativa dada al artículo 24, por mucho que ésta le disgustase, por la convicción de que había habido un complot encabezado por uno de sus ministros y secundado por el resto (1). Es curioso señalar que Gil Robles en varios mítines subsiguientes a la crisis daba pábulo a la versión

(1) Hay una prueba palmaria: el subsecretario del Presidente, Rafal Sánchez Guerra dijo a los periodistas que el mismo día anterior Alcalá Zamora declaraba que la expulsión de los jesuitas se imponía como única solución de transacción. Y el mismo día al explicar las razones de su dimi

del ex presidente, hablando de "puñalada" y "zancadilla" para describir el desarrollo de la crisis (1).

Indudablemente Azaña no improvisó el discurso en dicha sesión. Muchas ideas ya las había expresado en otros discursos suyos; tal como se desarrollaron los hechos y según su propio diario, él debía tener preparada su intervención para el caso de que fuera oportuna y política, y las ideas básicas del mismo se las comunicó por adelantado a su minoría. Su intervención significaba para Azaña y su grupo tan solo apuntarse un éxito importante tanto por el contenido ideológico del discurso como por posibilitar la superación de la peligrosa situación provocada por los radical socialistas, pero no pasar a la presidencia del Consejo.

La minoría de Acción Republicana desempeñó un papel secundario a lo largo de toda la crisis. El problema que se discutía dividía profundamente a los miembros de la misma por lo que Giral acudió a Azaña en el curso de la histórica sesión para comunicarle la situación; con gran irritación y para evitar que votasen cada uno por su lado convocó éste a su grupo

(1) cont. pág. anterior

sión expresadas en la carta que dirigió a los ministros afirmó que en síntesis se trataba de que se había sentido desasistido de su gobierno y de las Cortes (*El Liberal*, 15-10-31, pags. 2 y 3); lo cual coincide con lo que Lerroux y el propio Alcalá Zamora afirman respecto al contenido de la citada carta, en la que el dimitido presidente denunciaba la desleal actuación de algunos de sus ministros.

(2)

Gutiérrez Ravé, *España en 1931*, p.376 y 392.

a una reunión urgente; tras una severa llamada al orden y una tensa discusión (donde se llegó a hablar de dividir el partido), Azaña les expuso las líneas de su proyectado discurso, en caso de que encontrara una ocasión propicia para ello. La intervención y su contenido satisficieron a todos, pues su disgusto se refería a verse desbordados por la izquierda, por radical socialistas y socialistas, formando ellos bloque con los radicales como ala conservadora de las Cortes. Su discurso les dejaría en una posición a la izquierda de los radicales y alejados de la demagogia radical socialista. Por ello le animaron encarecidamente a que interviniera.

Ocurrida la crisis, Azaña, que era arrastrado por las circunstancias ya narradas, fue informando en sucesivas reuniones a su minoría del curso de la tramitación; ya dijimos que algunos consideraron prematura su rápida subida a la jefatura del Gobierno (1), pero la minoría fue otorgando su asentimiento a los diversos pasos dados por su líder, aunque ciertamente ni aquellos ni éste tenían muchas vías entre las que elegir.

Cuando forzado por el acoso del resto de los ministros acabó aceptando la presidencia, Azaña impuso la condición de que aparte las dos inevitables dimisiones de Alcalá Zamora y Maura, el resto de los ministros permaneciesen en sus Carteras. Al retener él la de Guerra, hubo solo de nombrar al nuevo

(1)

Que hasta la aprobación de la Constitución lo era también del Estado.

ministro de Marina, Giral, al pasar a Gobernación quien había de serlo durante sus tres Ministerios, S. Casares Quiroga.

En cuanto al Consejo Nacional de Acción Republicana, no intervino en el transcurso de la crisis, probablemente por lo imprevisto y rápido como por su reciente nombramiento y falta de experiencia organizativa.

Hemos visto los hechos que determinaron esta crisis imprevista y el desarrollo de la misma en lo que se refiere a Acción Republicana y su ministro. Sobre las consecuencias a largo plazo no podemos sino hacer unas breves consideraciones.

Cuando Azaña reflexionaba más tarde, sobre el decurso de la República, se remontaba precisamente al 13 de octubre para entender la clave del mismo. El entusiasmo del Gobierno y de la mayoría gubernamental por la solución hallada no les permitió ver que a pesar de que se evitaba un mal peor, la trascendencia de lo hecho era considerable. Sin embargo cabe dudar de que otra solución más moderada hubiera facilitado más la estabilización republicana; la Ceda, como el reciente estudio de Montero ha demostrado (1), no era solo una reacción contra los ataques a los intereses de la Iglesia, aunque también lo fuera y aunque utilizara el argumento religioso como principal arma

(1)

La Ceda. El catolicismo social y político en la segunda República.

ideológica para provocar la reacción de las masas conservadoras. Subsistentes las amenazas sobre los intereses económicos y agrarios básicos en la actuación de la derecha católica, no se puede afirmar que ésta hubiera tenido un carácter menos extremista de haberse llegado a una solución meramente laica sin elementos anticlericales como la disolución de los jesuitas; a mayor abundamiento el mero laicismo era inapelablemente rechazado por la Iglesia. Y no hay que olvidar que la mayoría de la jerarquía española a duras penas compartía los puntos de vista más moderados de Tedeschini y Vidal y Barraquer (1).

En cuanto a Azaña personalmente, el simplismo de la propaganda derechista utilizó profusamente la afirmación de que "España había dejado de ser católica" que discutible o no constituía toda una interpretación de la historia espiritual y cultural española, como si fuera una afirmación panfletaria. Quizas fuera un error de Azaña emplear una frase tan tajante, pero dado que contra Azaña, cuando no se encontraban armas de ataque, como ha escrito Jackson, se recurrió frecuentemente a la calumnia, creemos que es de una superficialidad inaceptable atribuir un valor taumatúrgico y decisivo a dicha frase (2). El que Azaña fuera la "bestia negra" de la derecha católica era algo inevitable pues pronto fue bien evidente que era el

(1) Según Marongiu Buonaiuti, también la Santa Sede estaba en realidad más cerca de las posiciones duras que de las de estos dos prelados.

(2) Piénsese en Casaviejas, en la absurda fábula de su expulsión cuando era joven de una academia militar por "sus vicios", etc. etc.

único gobernante republicano con capacidad y autoridad para llevar adelante las diversas reformas emprendidas por los gobiernos republicanos, reformas que Acción Popular-Ceda no estaba dispuesta a aceptar ni en grado mínimo fuera de declaraciones verbales tímidamente reformistas (1).

En cualquier caso quizás el error fundamental de este partido derechista fue no simultanear su actuación por muy ultrarreaccionaria que fuese, con una expresa declaración de republicanismo, inequívoca y sin ambages, así como de aceptación de la Constitución, sin perjuicio de su legítimo derecho a reformarla (2).

Su ambigüedad resultó excesiva para el precario equilibrio del recién implantado régimen.

Y en lo que se refiere a Azaña, una actitud más -ecuánime les hubiera forzado a reconocer que si bien era el único que efectivamente podía impulsar la renovación española, era a la vez el que podía moderarla y aplicarla de forma gradual, en la medida en que podía comprometer a los socialistas en su política. Concretamente en el problema religioso pocas veces se ha reconocido que su intervención -en las circunstancias en que se produjo- tuvo un valor de transacción y modera-

(1) Montero, *La Ceda...*, cap. VIII.

(2) Como sí lo hizo en cambio Martínez de Velasco tras las elecciones de noviembre del 33.

ción (1).

El cambio en la jefatura del Gobierno tuvo consecuencias rápidas muy evidentes. El rumbo del Gobierno adquirió una firmeza de la que antes carecía. Es indudable que Azaña tenía más clara idea que Alcalá Zamora de los objetivos a los que quería llegar. Hay también una razón que le forzaba a dar a su Gobierno una apariencia de seguridad y es que sólo así conseguiría una autoridad que de otra manera le sería negada como Presidente de un Gobierno transitorio hasta el fin de la discusión constitucional.

Consciente de ese peligro, ya lo advirtió en su discurso de presentación ante las Cortes. República para todos los españoles, gobernada por los republicanos y que, caso de no ser respetada, se haría temer. Gobernaría como si tuviese delante un prolongado período de gobierno. La autoridad gubernamental no saldría disminuida de sus manos (2).

Y a los pocos días de gobierno Azaña consideró imprescindible tener un instrumento legal que le permitiese suprimir por vía gubernativa los obstáculos que se encontrase en lo que él consideraba su tarea esencial de gobierno: la consolidación del régimen.

Ya durante los anteriores meses se había discutido la necesidad de una ley semejante que se había denominado de "defensa de la República". A pesar de que en un principio le

(1) Arbeloa tiene el mérito de ser uno de los pocos que ha analizado con objetividad el proceso de esta crisis, en *La Semana*....

(2) Azaña, OC.II, p. 63.

disgustase tal denominación, ahora no se esforzó en buscar otra.

La aprobación de dicha ley, leída y discutida con carácter de urgencia el 20 de octubre, tiene el interés de ser uno de los pocos actos de un cierto sabor "jacobino" de la República -junto con la expropiación de tierras de la nobleza tras el 10 de agosto del 32 y la disolución de los jesuitas-. Su significación era la de atribuir al ministerio de Gobernación amplias facultades sancionadoras por encima de las garantías plasmadas en los artículos, ya discutidos, de la nueva Constitución referidos a las garantías de derechos individuales. Los supuestos definidos como "actos de agresión a la República" y contemplados por la ley tenían una formulación genérica y cubrían todos los actos de violencias, conspiraciones o resistencias, activas o pasivas, a la legalidad vigente, y las sanciones consistían en multas (de un máximo de 10.000 pts.), confinamientos indefinidos, mientras estuviese en vigor la ley y posibilidad de suspensión de todo tipo de publicaciones. La ley de Defensa de la República se consideraría derogada al entrar en vigor la Constitución salvo que fuese ratificada por las Cortes. Esta ratificación la obtendría Azaña sin dificultad, permaneciendo la ley de Defensa de la República vigente hasta que en su segundo Gobierno fue substituida por la ley de Orden Público, ajustada a los preceptos constitucionales.

La ley de Defensa de la República es una ley típica de poderes extraordinarios, pero no por ello quedaba anulado

el sistema parlamentario en su funcionamiento regular. Si una ley de este tipo es siempre un instrumento peligroso en manos de un ejecutivo poco escrupuloso, estaba claro y así quedó de mostrado que la intención de Azaña era realmente la de consolidar el régimen; durante la vigencia de la ley de Defensa de la República y a pesar de su aplicación, que fue sin duda moderada aunque por supuesto discutible, la vida política trans currió con normalidad, esto es, siendo las Cortes el centro po lítico donde salían a relucir y se resolvían todos los conflic tos surgidos de la dinámica social y política. No impidió su vigencia que las tensiones políticas se plantearan dentro y fuera del Parlamento con todo su vigor, y toda la política de obstrucción, tan dudosamente aceptable en un sistema parlamen tario, desarrollada por las oposiciones a lo largo del inviern o de 1933 ocurrió bajo la vigencia de dicha ley. La ley de Defensa de la República se aplicó tan solo frente a los actos de violencia y contra ciertas campañas propagandísticas (revisión constitucional, por ejemplo) y de prensa.

Las reacciones a la aprobación de la ley fueron tem pladas. Fueron aplaudidas como necesarias y como muestra del vigor con que el nuevo Presidente del Gobierno se ocupaba de la consolidación del régimen por parte de la prensa de izquier das y firmemente apoyadas, rebajándole su importancia al señalar las diferencias con la etapa de Primo de Rivera por los so cialistas (1).

(1) *El Liberal*, 21-10-33, artículo de Pedro Massa; *El Socialista*, editorial del 23-10-31.

Fue criticada por *El Debate* aunque con menor acritud que la de costumbre dada la importancia de la ley (1). Merece la pena sin embargo reseñar el comienzo del editorial del periódico católico para resaltar la doble actitud de aparentar una disposición desapasionada y objetiva hacia el nuevo régimen para a continuación hacer una crítica indiscriminada de todas sus implicaciones. Comenzaba así:

"Ayer fue leída y aprobada en las Cortes una ley de defensa de la República...

Tratárase de una ley para robustecer el principio de autoridad o el prestigio del Estado, y nada tendríamos que oponer a ella. Al contrario. Ella vendría a confirmar cuanto hemos escrito sobre los excesos de la democracia iliberal. Nadie cree hoy en el liberalismo. Y es lo cierto que una libertad limitada de propaganda y de prensa hace imposible la obra de la gobernación, sobre todo en países de escasa cultura. Así por ejemplo, ¿quién no dará su conformidad en principio a los apartados 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo primero de la nueva ley?"

Tras esta inequívoca declaración de antiliberalismo solo se podía proceder a un aplauso sin regateos de la ley, al conceder poderes extraordinarios al ejecutivo; sin embargo continuaba:

(1) *El Debate*, 21-10-31, "Lo del día".

"Pero es el caso que tal como se ha redactado ésta, puede resultar en su aplicación un arma mortal para las libertades legítimas, que quedan a merced del ministro de la Gobernación".

Olvidando que eso es una consecuencia inevitable de una ley como la que se discutía, de poderes extraordinarios: no era un problema de redacción, sino de la propia naturaleza de la ley. O se estaba de acuerdo en su procedencia y necesidad o no. El artículo continuaba con una crítica liberal ortodoxa de la ley -incluidos los apartados antes citados- aunque sin excesiva hostilidad.

C A P I T U L O - I V

ACCION REPUBLICANA DURANTE EL SEGUNDO GOBIERNO AZANA

(ENERO-1932 / JUNIO-1933)

1. PRIMER GOBIERNO CONSTITUCIONAL.

UNA NUEVA MAYORIA: ACCION REPUBLICANA EJE DE
LA COALICION MINISTERIAL.

PRIMER GOBIERNO CONSTITUCIONAL. UNA NUEVA MAYORIA: ACCION
REPUBLICANA EJE DE LA COALICION MINISTERIAL

Conforme se acercaba la aprobación de la Constitución y la consiguiente elección del Presidente de la República, empezaron a menudear las declaraciones y tomas de posición sobre la crisis ministerial con que necesariamente había de iniciarse la vigencia de la Constitución.

Tema imbricado con el anterior era el de la duración de las Cortes que ya comentamos. Las posiciones seguían siendo las mismas: los partidos del Gobierno, excepto los radicales apoyaban una amplia duración de la legislatura; los radicales, aunque deseosos de su inmediata disolución parecían resignados a la prolongación de su vida, pero decididos a que ésta fuera lo más breve posible. Como apuntó Luis Araquistain en un artículo (1) eran partidarios de la disolución quienes no estaban en ellas (derechas), o quienes juzgaban demasiado radical el rumbo de la República (radicales); en último término, como siempre que se plantea una polémica de esta naturaleza, eran partidarios de la disolución quienes estaban descontentos con los resultados electorales (2).

(1) *El Sol*, 1-12-31.

(2) En la actualidad parecen invertidos los términos: mientras el centro derecha, que a través de la UCD tiene asegurada la estabilidad parlamentaria es partidario de agotar los cuatro años de legislatura, la izquierda propugna la disolución de las Cortes una vez elaborada la Constitución.

La polémica terminó con un acuerdo que a la vez que flexible plasmaba la inevitable y lógica victoria de quienes contaban con la mayoría parlamentaria. Se acordó en el Consejo de ministros del 1-12-31 que la vida de las Cortes se prolongaría hasta la aprobación de las leyes orgánicas consubstanciales a la Constitución, -rechazando así una lista exhaustiva de todas las leyes mencionadas o implicadas por la Constitución-, dependiendo del Gobierno que se constituyera la determinación de dichas leyes. Pues tal como Azaña lo planteara, habría gobierno y Cortes mientras hubiera mayoría parlamentaria, pero faltando ésta no habría más remedio que ir a la disolución por muchas leyes complementarias que faltasen (1).

Respecto a la crisis gubernamental, las posiciones no eran muchas; todas las fuerzas prestaban su concurso a un Gobierno como el existente. Sin ninguna objeción, los socialistas (2), quienes pasarían probablemente a la oposición en caso de un gabinete Lerroux. También éste hizo repetidas declaraciones de aceptación y apoyo a un gobierno similar, lo que es interesante cara al posterior desarrollo de la crisis (3). Las

(1) Gutiérrez Ravé, *España en 1931*, p.431. Azaña, OC. IV, p. 252.

(2) Declaraciones de De los Ríos en *El Socialista*, de 27-11-31; *El Sol*, 3-12-31.

(3) *El Sol*, 3-12-31, "¿Lerroux? ¿Azaña?", y 6-12-31, declaraciones de Lerroux, en las que literalmente dijo "En mi opinión el futuro gobierno debe ser y será probablemente heterogéneo. Tratándose del mismo Parlamento el gobierno no debe ser análogo al actual, integrado por iguales elementos y en las mismas proporciones. Si se me solicita mi concurso personal en un Gobierno de esas condiciones lo prestaré gustoso. Solamente, ratificándome en mi decisión, no formaré parte de un Gobierno presidido por un socialista". Frente a otras declaraciones de este tenor, sólo hemos localizado unas divergentes: Martínez Barrio, en una asamblea radical en Madrid, declaró que si el próximo Gobierno era republicano socialista, los radicales colaborarían desde la oposición, *El Sol*, 1-12-31, p.5. Recuérdese además lo que se dijo respecto a la reunión de la Alianza Republicana, supra.

condiciones que exigía eran que la presidencia y la mayoría de las carteras permaneciesen en manos republicanas, no socialistas. Lerroux por lo demás parecía ya decidido a no pretender la presidencia del Gobierno ratificando su criterio de octubre de no gobernar con tales Cortes. Dado que la permanencia de éstas estaba ya clara, confiaba sin duda en una duración limitada a la aprobación de las más imprescindibles leyes orgá-nicas. Los radicales socialistas no parecían plantear demasiados problemas, aunque probablemente pondrían reparos a un go-bierno Lerroux.

Azaña tuvo que emplear su influencia para persuadir a su grupo de la conveniencia de mantener la coalición con los socialistas, fuera bajo la presidencia de Lerroux -cosa improbable en aquellas circunstancias- o bien mediante la continuación del Ministerio presidido por él. Para discutir la crisis inmediata se reunieron el Consejo Nacional más la Mayoría Parlamentaria el 30 de noviembre, días antes de la aprobación de la Constitución; la mayoría de los reunidos se manifestaron partidarios de un Gobierno de concentración republicana, aun-que algunos lo viesan imposible, votándose contra la subsistencía de la coalición con los socialistas (1).

Bien en esta reunión o en otra posterior, se debió acordar a pesar de ello mantener la coalición con los socialis

(1)

Azaña, OC. IV, p.250.

tas, quizás considerándolo algo inevitable, pues la actitud de Azaña en la reunión de la Alianza Republicana, defendiendo dicha coalición parece indicarlo así, o por lo menos se debió otorgar un voto de confianza a Azaña para actuar en la tramitación de la crisis como considerase más conveniente. Sin duda tuvo que influir en la actitud del grupo, que en principio como vemos era contrario a prolongar la colaboración con los socialistas, la actitud de los radicales, cuya inclinación progresiva a la derecha imposibilitaba prescindir de los socialistas. Y por otro lado así como los radical socialistas era difícil que aceptasen la presidencia de Lerroux, éste se negaba a dejarse presidir por Azaña en un Gobierno de concentración exclusivamente republicana. Todos los factores empujaban hacia la subsistencia del Gabinete Azaña.

Así las cosas Azaña presentó la dimisión al Presidente de la República el sábado 12 de diciembre. Iniciada la vigencia de la nueva Constitución era evidente que la dimisión del Jefe del Gobierno era forzosa puesto que su designación había sido hecha por un procedimiento distinto al regulado por la Constitución. Ahora debía contar con la confianza tanto de las Cortes como del Presidente de la República. Por ello la pregunta de Alcalá Zamora sobre si la crisis era formal o de fondo no parece que tuviera mucho sentido. En cualquier caso Azaña, tras exponer el caso a su Gobierno, ratificó el carácter de fondo de su dimisión.

La tramitación de la crisis puede decirse que siguió

un proceso normal, pues todas las fuerzas políticas se comportaron como habían anunciado previamente a excepción de los radicales. En ninguna de las declaraciones de Lerroux o de sus segundos, como ya hemos dicho, se habían puesto pegas respecto a la continuación de un Gobierno como el existente, manifestando únicamente su oposición a una hegemonía socialista, lo que no era el caso del elaborado por Azaña. La negativa de Lerroux en la segunda entrevista que mantuvo con Azaña, con la justificación de no haber consultado a su grupo cara al público, y como consecuencia de la preponderancia socialista (?) en la lista elaborada por Azaña, era claramente un anticipo de la negativa que el grupo pensaba dar en dicha reunión (1).

Es muy probable que tuviera Azaña razón al atribuir a presiones internas del grupo radical sobre su líder el cambio de postura de éste. Las razones alegadas por el grupo radical al decidir su negativa a continuar en el Gobierno eran todas de poca monta -aparte de que según Azaña no le había hecho Lerroux ninguna indicación sobre cualquier tipo de condiciones en la primera consulta que mantuvo con él-, y difícilmente se podían considerar insalvables para la formación de un gobierno. Substancialmente eran que los socialistas mantenían sus tres carteras, mejorando incluso la calidad de las mismas, que se pensase desgajar de Fomento lo referido a ferrocarriles (sector d

(1)

Eso pensaba Azaña con razón, OC. IV, p. 276.

fácil y conflictivo en ese momento) y traspasarlo a Comunicaciones, lo que significaba traspasar la dificultad de un ministro socialista a uno radical, y el nombramiento de Carner en Hacienda por lo que la presencia de un catalán en dicha cartera pudiese prejuzgar la cuestión del Estatuto (1).

Que Lerroux cambió de opinión en el curso de la crisis es incontrovertible; no hay más que leer los términos en que evacuó su consulta con el Presidente de la República, en la que apuntaba claramente a un gabinete similar al presidido por Azaña (2). De esta forma la versión de las memorias de Lerroux se contradice (así como la de las de Alcalá Zamora, que se basan según afirma éste, en lo que Lerroux y Martínez Barrio le refirieron meses después de la crisis) no solo con el discurso de Azaña ante las Cortes -que no fue objetado por Lerroux- sino por las declaraciones hechas hasta el mismo día de la crisis sobre la plena disposición de Lerroux a formar parte de un Gobierno de iguales características, sin ninguna alusión a la exigencia que él narra en sus memorias de reducir la representación socialista en el Gobierno.

(1)

Estas fueron, por lo menos, las justificaciones públicas que se dieron los radicales por su negativa. Respecto a la segunda de ellas Azaña aclara en su diario que no era cierta, pues cuando había pensado algo parecido era con la idea de poner a Largo en Comunicaciones, Azaña, OC. IV, p. 276.

Respecto al curso de la crisis, ibid. pags. 270 y ss. y la prensa de esos días.

(2)

El Liberal, 15-12-31, p.2, y *El Sol*, id.

El que a Alcalá Zamora le sorprendiera la dificultad con que Azaña se topó con los radicales es lógico tras los términos de la consulta evacuada con él por Lerroux. Lo que no es comprensible es que pusiera en duda la veracidad de Azaña al afirmar que nada le había dicho Lerroux sobre tal condición en la primera entrevista, pues difícilmente iba Lerroux a plantearle a Azaña unas dificultades que no le hubiera expuesto a él en la consulta en Palacio. Ello hubiera significado que se le había ocultado al Presidente de la República un condiciona miento que de existir, el líder radical debía haberlo manifes tado en la consulta presidencial, en cuanto que mediatizaban el apoyo dado a una solución de la crisis sobre la base de Aza ña.

Para hacer más evidente el cambio basta añadir que días después, la versión oficial radical pasó a ser la conveniencia de que los socialistas hubieran abandonado el Gobierno (1). La razón de esta evolución habría que verla en que al con siderar el partido radical que la duración del Gobierno Azaña debía ser breve, permaneciendo en una oposición moderada conservaban su independencia para criticarlo y poder reivindicar la pronta disolución de las Cortes, una vez elaboradas las le yes orgánicas más imprescindibles.

(1)

El Sol, 11-2-32.

La composición final del Gabinete fue la siguiente: Presidencia y Guerra, Azaña; Estado, Zulueta; Justicia, Albornoz; Marina, Giral; Hacienda, Carner; Gobernación, Casares Quiroga; Instrucción Pública, De los Ríos; Trabajo y Previsión Social, Largo Caballero; Agricultura, Industria y Comercio, M. Domingo; Obras Públicas, Prieto; Casares se encargaba asimismo interinamente de Comunicaciones, cartera desgajada en su día por Martínez Barrio y que no volvería a ser cubierta autónomamente hasta el primer gobierno Lerroux en 1933.

Dos nuevas figuras formaban parte del Gobierno, Carner, en representación catalana, y Zulueta, afecto como dijimos a las posiciones azañistas. Azaña se resistía a incorporar a miembros de la Esquerra, probablemente para evitar presiones demasiado directas; prefería por ello figuras a las que tanto la minoría parlamentaria catalana como la Esquerra le reconociesen autoridad y representatividad pero sin que perteneciesen a ésta. Carner, con su destacada participación en la elaboración del Estatuto de Nuria era la persona ideal para tales requisitos.

Como en la crisis de octubre, Azaña se reunió en diversas ocasiones a lo largo de la tramitación de la crisis con su minoría, para darle cuenta del encargo recibido y de las gestiones realizadas para su cumplimiento.

Azaña evacuó su consulta con Alcalá Zamora como Presidente dimisionario; la representación del grupo la ostentó Bello, quien la evacuó el domingo 13, día en que se produjeron

las consultas a los jefes de las minorías parlamentarias. En la nota facilitada a la prensa (1), se resumía la actitud del grupo adoptada por la minoría previamente. Bello recomendó la formación de un Gobierno republicano socialista, presidido por un republicano, con amplias facultades para escoger las personas y asignar las carteras; urgido por el Presidente había dado naturalmente el nombre de su jefe como el más indicado. Practicamente todas las minorías, excepción hecha de las derechas habían aconsejado lo mismo; la federal, la catalana, la gallega, radical socialista, socialistas, y como dijimos, también Lerroux. José Ortega y Gasset recomendó una concentración con Azaña.

Dentro de la coalición parlamentaria el pequeño partido de Acción Republicana iba a representar un papel esencial. Iba a ser el partido que como propio del Presidente iba a estar más identificado con la política desarrollada por la coalición.

Mientras que el partido socialista tenía que conformarse con unas reformas parciales que tan solo iniciaban una evolución social en el sentido que marcaba su programa y el partido radical socialista se encontraba todavía en la plenitud de su fase "jabalí" (2) y por lo tanto disgustado a menudo por

(1)
El Sol, 15-12-31.

(2)
Como había denominado Ortega a los sectores demagógicos de las Cortes en su famoso discurso del 30-7-31.

la moderación de la política adoptada, Acción Republicana, progresivamente sometida a la autoridad de Azaña, iba a ser el más acorde con la política de transacción desarrollada por su jefe. No significa que en su seno no hubiese disensiones en un sentido o en otro sobre las soluciones adoptadas, pero siempre se discutieron y lograron superarse en sucesivas reuniones de la Minoría Parlamentaria y del Consejo Nacional, debiendo emplearse en muchos casos a fondo el mismo Azaña (especialmente en la discusión del Estatuto catalán). Es indudable que como veremos más adelante, el consenso interno de Acción Republicana se consiguió en gran medida gracias al azañismo creciente entre todos sus miembros; el prestigio de Azaña, como líder imbatible en las Cortes que superaba los obstáculos más difíciles se consolidó a lo largo de dos años de gobierno y no solo entre su propio grupo. Los socialistas le respetaban como político honesto y eficaz, así como gran parte del partido radical socialista. Al igual que hubo un azañismo que permitió a Acción Republicana permanecer unida limando sus diferencias internas, también lo hubo a nivel más amplio entre todos los grupos que apoyaban al gobierno, facilitando la supervivencia de la coalición. El propio Azaña confesaba a veces su desánimo ante la excesiva tarea que pesaba sobre él: se esperaba que fuese él quien templase todas las cuerdas.

En parte, pues por la autoridad de su presidente y en parte por la indudable identificación global del grupo con la orientación política de la coalición, se puede decir que Acción Republicana fue el eje de la coalición. Desde luego en el

2º Gobierno Provisional, puesto que entonces, al comprender la coalición al Partido Radical, Acción Republicana quedaba en el centro, inclinando la balanza a un lado o a otro cuando se producía una división de la coalición; pero también a partir de diciembre, dado lo caótico de la organización radical socialista. Si los socialistas eran la base numérica parlamentariamen- te y en la calle, al permitir el apoyo de un sector mayorita- rio de las clases populares a una política reformista avanza- da, esta política era solo como hemos dicho una conquista parcial de su programa, mientras que para Acción Republicana, de llevarse a su término las reformas iniciadas, era la plena rea- lización de su programa.

Los grupos gallego y catalán, igualmente discipli- nados, especialmente el último, apoyaban también la política general del Gobierno Azaña. Dadas sin embargo sus característi- cas específicamente regionales, su grado de identificación era forzosamente menor que un partido de alcance estatal como Ac- ción Republicana. Sin embargo la Orga, de la que era líder in discutible Casares Quiroga, estaba muy próxima a las posicio- nes de Azaña (1).

(1) Sobre todo esto, con más amplitud, vid. el Cap. VIII.

2. TERCERA ASAMBLEA NACIONAL DE ACCION REPUBLICANA

TERCERA ASAMBLEA NACIONAL DE ACCION REPUBLICANA

Esta asamblea tenía lugar en cumplimiento de los Estatutos que prescribían una asamblea anual, en el primer mes del año. Cara a esta asamblea, que se decidió fuese en marzo, las organizaciones provinciales iban por vez primera a convocar asambleas respectivas previas, en las que deberían, entre otros puntos, elegir a quienes les habían de representar en la nacional. En ellas debían discutirse también las ponencias que sobre las diversas partes del programa serían después discutidas en la nacional (1).

Esta tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de marzo. El orden del día previsto era el siguiente:

- 1ª Memoria de secretaría.
- 2ª Ponencia sobre Sanidad.
- 3ª Ponencia sobre Enseñanza.
- 4ª Ponencia sobre problema monetario.
- 5ª Ponencia discurso sobre tema puramente político.
- 6ª Ruegos y preguntas (2).

(1) Tal era lo prescrito por los estatutos; el grado de cumplimiento, dada la poca experiencia organizativa es dudoso, pues si en la asamblea de octubre del 33 las organizaciones provinciales se quejaron de no haber recibido las ponencias con la suficiente antelación, es difícil que ahora se funcionara mejor.

(2) *El Liberal*, 4-3-32; más en detalle el orden del día era el siguiente:

La memoria de secretaría, fue leída y elaborada por el secretario general Vicente Gaspar. En unas declaraciones hechas a la prensa había declarado que el número de afiliados se aproximaba a los 40.000, y que Acción Republicana contaba con comités provinciales en todas las provincias. Añadía que la labor de secretaría databa desde su llegada a la misma, y que solo desde entonces se había regularizado el funcionamiento de los Comités provinciales. Si bien el número de afiliados es posible que fuera cierto, aproximadamente y suponemos que calculando por lo alto, no lo era sin duda el que contaran ya con organización en todas las provincias.

Como sistema de votación en la Asamblea se atribuía a cada delegación provincial un número de votos proporcional a su importancia cuantitativa y organizativa.

Según afirmó Vicente Gaspar en su Memoria, la Asamblea carecía de trascendencia política, pues su función se limi

(2) cont. pág. anterior

Día 26, 11 h.: Presentación de delegados.
 Elección de mesas de discusión.
 Exposición de la secretaría del partido.
 Lectura de cuentas.

16 h.: Ruegos y preguntas.
 Propositiones de los delegados.
 Elección de comisiones para el estudio de ponencias y propuestas.

Día 27, 11 h.: Reunión de las comisiones para el estudio de ponencias y propositiones. No hay sesión de tarde.

Día 28, 11 y 16 h.: Discusión de propuestas y ponencias y clausura de la Asamblea. (*El Liberal*, 25-3-32).

taba a consolidar el partido tras el reciente crecimiento, a someter a la Asamblea la labor realizada por el Partido y a cumplir los Estatutos.

En la discusión sobre la Memoria intervinieron Vighi, Alberca Montoya, Escribano y Peñalba, impugnando en mayor o menor medida la afirmación del secretario, y en particular el Sr. Escribano planteó que era imprescindible decidir si Acción Republicana podía seguir en la Alianza Republicana. La intervención de Peñalba, recordando el orden del día, recondujo la discusión hacia la aprobación de la actuación del partido, y posteriormente a la rendición de cuentas (a cargo del Sr. Echevarría) y discusión del estado económico.

Por la tarde prosiguió la discusión sobre temas económicos del partido, centrándose el debate en una propuesta de Mirasol, que establecía que los miembros del partido que ostentasen cargos políticos, revertiesen al partido un 10% de lo que cobrasen por tal concepto (igual que lo venían haciendo los diputados de la minoría), aparte sus cuotas respectivas, proponiendo la expulsión a los tres meses de impago de tales contribuciones extraordinarias, al efecto de conseguir un fondo económico importante. Varias intervenciones (Vergara, Coca, Escribano, Serrano Batanero y Vighi) suavizaron la propuesta aprobándose la contribución con el carácter de voluntaria. Coca propuso además que se admitiese una categoría de afiliados no cotizantes, para evitar que aquéllos que no pudiesen aportar su cuota con regularidad se separasen del partido. Esto era en

efecto algo que ocurría con frecuencia como hemos podido cons
tatar en las fichas que hemos encontrado de varias localida-
des, entre las que hay un número elevado de bajas cuya causa
es la falta de cotización; aunque en muchos casos sería por
desinterés hacia el partido, en un determinado porcentaje lo
sería por motivos económicos, como lo prueba el que a veces se
consignase que el interesado había declarado que volvería a
darse de alta cuando le fuese económicamente posible. La pro-
puesta, combatida por Escribano y apoyada por Serrano Batanero,
quien resaltó su importancia en medios rurales, no sabemos
si fue finalmente aprobada o no.

Tras los temas económicos se planteó un anticipo de
discusión política al debatirse la proposición de Gómez Izquierdo
sobre posibilidad y actitud de un bloque de izquierdas republi
canas. Dos tendencias parece que se manifestaron con niti-
dez. Una partidaria de que la Asamblea marcara un rumbo en torno
a esta cuestión y otra opuesta a ello para evitar que
pudiera provocar conflictos a la alianza en ese momento en el
poder. En definitiva se acordó proponer al Consejo Nacional que
incorporara a la ponencia política el pensamiento de la asamblea
en torno a este punto.

El fondo de la cuestión era si se sancionaba con una
declaración la ruptura de la Alianza Republicana o no. Ya vimos
que Escribano lo planteó nada más comenzar la asamblea y sobre
esto se centrará la discusión al debatirse la ponencia políti-
ca.

Esta había sido elaborada por Cuevas, Esplá, Castro, Mirasol y Fernández Clérigo, componentes de la comisión política.

Una propuesta del delegado sevillano Pérez Jofre, propuso añadir al dictámen un voto de confianza al Consejo Nacional autorizándole a romper cuando lo considerase necesario la Alianza Republicana, sin necesidad de convocar nueva asamblea. La intención era no poner trabas al Gobierno, permitiéndole a éste una mayor capacidad de maniobra. El dictámen al que se pretendía añadir el voto de confianza abogaba por la unión republicana en torno a la obra del Gobierno, y preveía la necesaria colaboración de los diversos partidos republicanos y del socialista, al tiempo que reafirma su significación izquierda.

Por lo tanto, la propuesta del delegado sevillano hay que entenderla como una alternativa frente a la propuesta de carácter más radical presentada al comienzo de la Asamblea por Escribano que pretendía marcar una orientación concreta en la cuestión de las alianzas republicanas.

Esta postura más dura es retomada ahora por Alberca Montoya, quien por un lado defendió la exclusiva competencia de la Asamblea para llegar a una ruptura de alianzas y por otra afirmaba que la discrepancia de Acción con el partido Radical era ya sobradamente evidente.

Apoyaron a Alberca Montoua, Demófilo de Buen, cate-

drático de Sevilla y Escribano entre otros. Tras una interven
ción de Esplá se aprobó tanto el dictamen como el voto de con
fianza, derrotando a la postura más radical e intransigente.

En cuanto al resto de las ponencias sobre varios puntos del programa, fueron discutidas a lo largo del lunes 28. La de Sanidad, elaborada por Adolfo Hinojar, Amós Salvador, Ortíz de Landazuri, Navarro Blasco y Coca (1), tal como fue presentada a debate constaba de cuatro conclusiones:

"Primera. Compete al Estado la dirección y coordina
ción de los servicios sanitarios en todo el país.

Segunda. Para realizar esta misión se creará el mi
nisterio de Sanidad, aceptándose en términos generales la orien
tación que se da en las ponencias.

Tercera. Para la coordinación que en materia de Sa-
nidad corresponde al Estado y a las entidades locales se enten-
derá que todo el personal, cuya misión fundamental sea la de-
fensa de la salud colectiva, dependerá y será nombrado por el
Estado; y en las regiones autónomas por éstas, en lo que afec-
ta a los intereses intrarregionales, siendo en ambos casos idén
ticas las rigurosas medidas de selección. El personal, aún pres
tando sus conocimientos para la defensa de la salud colectiva y

(1)

A los miembros redactores de la ponencia se sumaron los integrantes de la comisión nombrada por la Asamblea para presentar las conclusiones sobre las que se basaría la discusión, que eran Rodríguez Pinilla, Sánchez Covisa, Buendía, Herrero de la Orden, Mestre, Cuevas y Ferragut.

tenga como misión primordial la salud individual, podrá ser nombrado por las corporaciones de que dependa, ateniéndose a las normas y garantías de capacidad mínima que señala el Estado, quien controlará su ejecución.

Cuarta. Es de urgente necesidad la aprobación de una nueva ley de Sanidad por el anacronismo de la actual y por la maraña administrativa de disposiciones ministeriales contradictorias muchas veces con la misma ley".

En general no debió suscitar demasiada oposición y se aprobaron íntegramente. El doctor Escribano, habló apuntando la opinión de que quizás debido a la política restrictiva de gastos no fuera éste el momento oportuno de crear el ministerio, siendo replicado por Coca, médico también y uno de los redactores de la ponencia, indicando que el reunir los servicios que se encontraban diseminados en multitud de organismos no implicaba aumentar gastos. En la discusión intervinieron además los señores Ferragut, Morayta (quien estimaba más útil el discutir puntos concretos: el pago por el Estado de los médicos titulares, el seguro de maternidad, etc.), Sánchez Covisa, Cebrián, Benito, Brugués y Cuevas. Ferragut acabó retirando una adición a la segunda conclusión que proponía, en caso de no poder crearse el ministerio de Sanidad, la independización de la función sanitaria del de Gobernación, por entender la incompatible con las restantes conclusiones.

No tenemos de la ponencia sobre enseñanza (redactada por Sánchez Albornoz, Martín Echevarría, Cándido Bolívar y

Roberto Escribano) el texto de las conclusiones aprobadas, pero sabemos que entre las reivindicaciones referidas a primera enseñanza se encontraban las siguientes: sólida preparación en los maestros y mejor remuneración económica, separación en los establecimientos benéficos entre los niños normales y anormales, creación de cantinas, roperos y bibliotecas y clases para adultos hasta la erradicación del analfabetismo.

Bello además presentó una serie de conclusiones entre las que se encontraban la petición de que las órdenes religiosas suspendiesen el ejercicio de la enseñanza desde el 1^a de octubre, siendo substituídas por el Estado, municipios e instituciones privadas, y la creación de 25.000 escuelas más.

Turnos en contra de las conclusiones de la comisión consumieron los señores Cebrián, Escobedo, Albors, Angulo, Maylo, Arroyo y Robledano, siendo rebatidos por los ponentes Rubén Landa y Echevarría. Interrumpida la discusión sobre este punto para dar paso a la discusión política, la ponencia fue finalmente aprobada, desconocemos en qué términos, tras el discurso de Azaña.

A continuación se discutió y aprobó igualmente la ponencia sobre cuestión monetaria, elaborada por tres especialistas del partido, Vergara, G. Franco y Viñuales, finalizando a continuación la asamblea.

Las discusiones programáticas de esta Asamblea que acabamos de reseñar tienen el interés de mostrar cómo el pro-

yecto modernizador encarnado por el partido de Azaña no se limitaba a los aspectos más polémicos y políticos, como frecuentemente se quiere hacer ver (cuestión militar, regional y religiosa principalmente). Tal caracterización tiende a la consideración de las reformas republicanas como un último intento de reformas liberales decimonónicas.

Por el contrario, creemos que el ejemplo de la reforma de la Sanidad discutida a fondo en la Asamblea -y que tuvo amplio eco en la prensa- muestra cómo la pretensión reformadora era global, tanto del Estado como de la sociedad, y no se limitaba a los temas de más actualidad política.

El discurso con que Azaña clausuró la Asamblea careció de un interés político directo; salvo resaltar su opinión ya conocida de que las Cortes Constituyentes podían sostener todavía a diversos Gobiernos de composición variada, lo dedicó a ensalzar el cambio de costumbres políticas y a condenar todas las maniobras de desprestigio que contra la República, las Cortes y el Gobierno difundían los sectores antirrepublicanos.

3. CRECIMIENTO DE ACCION REPUBLICANA EN 1932

CRECIMIENTO DE ACCION REPUBLICANA EN 1932

A lo largo de 1932 Acción Republicana experimentó un lento pero progresivo fortalecimiento, sumándosele diversos núcleos locales, creando nuevos comités y regularizando su vida orgánica. En algunos casos era tras la unión al partido de los diputados de otro grupo cuando se reemprendió la verdadera organización de Acción Republicana en la provincia en cuestión, partiendo, en el supuesto de que los hubiera, de los núcleos ya existentes y utilizando el arraigo que el diputado tuviera en su circunscripción. Tal es por ejemplo el caso del diputado por Ciudad Real, Pedro Vicente Gómez, quien durante todo el año y tras su incorporación al partido, procedente del Radical, se dedicó a dicha tarea de reorganización.

Así también el partido autónomo de Bilbao (con más de dos mil afiliados), elementos de la Derecha Liberal Republicana de Pamplona, la organización del partido federal de Santander (con sus dos diputados a Crotas, Ruíz Rebollo y E. Pérez Iglesias) se cuentan entre las fusiones que conoció Acción Republicana.

Otras veces fueron simples tareas de propaganda y creación de comités locales en los pueblos de la provincia, de constitución de los preceptivos organismos provinciales, como en Valencia, Almería y otras provincias. Al estudiar las diversas organizaciones provinciales veremos más en detalle, a partir de los escasos datos con que contamos, el crecimiento de las mismas. Nos interesa ahora tan solo dejar constancia del

crecimiento organizativo de Acción Republicana, producto con frecuencia de la fusión de otros grupos; fusiones provocadas por la desilusión de grupos locales ante el giro que tomaba la política de su partido y la atracción que ejercía el Presidente del Consejo y su partido, el cual daba la impresión de ser el único grupo republicano de izquierda coherente.

No hay porqué creer sin embargo que Acción Republicana experimentara un crecimiento ni de lejos parecido al que en el campo de la derecha tuviera Acción Popular. Para ello hubiera sido necesario carecer de competidores y Acción Republicana los tenía. Aparte los partidos de nacionalidades específicas (Orga y Esquerra), los radicales socialistas contaban con una sólida organización, que si a largo plazo podía pensarse, dada su falta de dirección coherente, que iría oscilando hacia Acción Republicana, no dio tiempo a que sucediera así a causa de la velocidad que tomaron los acontecimientos políticos. Y no cabe duda que tanto en la organización como en los círculos de electores y simpatizantes del Partido Radical había sectores que dada la naturaleza derechista que adquirió la política de este partido, forzosamente tendrían que abandonarlo. Pero a pesar de que en 1933 la tensión política era ya muy grave, eso no sucedería hasta entrado 1934, cuando ya se había constituido Izquierda Republicana, y entonces Martínez Barrio no se fue a la fusión con ella sino que creó otro partido (1).



BIBLIOTECA

(1)

La actual ARDE procede de la fusión en el exilio de Izquierda Republicana y el que fundara Martínez Barrio, Unión Republicana.

En razón de la pluralidad existente de partidos de ideología semejante, se habría necesitado más tiempo para que Acción Republicana hubiera ido absorbiéndolos lentamente; lo cual hubiera sucedido siempre que Acción Republicana hubiera continuado siendo un grupo coherente y unido.

Con el atractivo del poder y con la deslumbrante figura de Azaña como líder indiscutible, el crecimiento continuado que Acción Republicana inició en 1932 proseguiría en 1933 a pesar de la agudización de las tensiones políticas. Este camino se interrumpió en noviembre de 1933; el desastre electoral sufrido forzó a elaborar otra vía de crecimiento: Azaña se esforzó a fondo en conseguir la fusión con los partidos más afines, con objeto de que hubiera un sólo núcleo de republicano de izquierdas como polo de atracción organizativa. Si antes se había intentado esta vía acelerada de crecimiento (la FIRPE, propugnada por Azaña), la idea, rápidamente objeto de manipulaciones partidistas, fracasó sin que Azaña, considerando viciado el intento *ab origine*, se tomase demasiada molestia por evitaerlo. Resultando ya clara en 1933 la falta de continuidad y la brusquedad de la política republicana, Azaña se sintió obligado a forzar la fusión antes citada; contaba ya para ello con la autoridad indiscutida suficiente para imponer su criterio.

Este proceso de expansión de Acción Republicana, se extendió también a Cataluña. Sin embargo, no está claro hasta qué punto Azaña era partidario de ello. Como luego veremos, la actuación de los partidos no exclusivos de Cataluña, topaba con

dificultades para actuar al ser hostigados por los partidos que sí lo eran, los cuales sabían tacharlos de sucursalistas. Según cuenta Rivas Xerif en su biografía de Azaña, éste era opuesto a ello por lo que pudiera significar de tensiones con la Esquerra, celosa por cualquier competencia en su propio feudo. Frecuentemente Azaña alude en sus Memorias al recelo de los políticos catalanes siempre que pensaron por alguna circunstancia que él pretendía hacer política en Cataluña, lo cual estuvo en todo momento lejos de su intención. Por ello parece verosímil la versión de Rivas Xerif, en el sentido de que fue más bien un deseo de sus amigos catalanes y suponemos que del resto de los dirigentes de Acción Republicana, sin que Azaña lo impulsase realmente. El caso es que dicho partido se creó en los primeros meses de 1932, sobre la base de un programa nacional común y una posición plenamente autónoma en la política catalana. Faustino Ballvé y E. Isern Dalmay fueron las figuras iniciales de la organización, que se denominó Partit Català Acció Republicana.

Añadamos aquí tan solo que de todas formas esta creación no fue completamente ex novo, pues ya desde 1930 se contaba a Barcelona como una de las provincias donde había un núcleo de Acción Republicana, y tenemos noticias de que posteriormente también se sumó a Acción Republicana algún otro centro republicano (1).

(1)

Vid. infra lo referente al PCAR.

4, UNA FEDERACION PARLAMENTARIA: LA FIRPE

UNA FEDERACION PARLAMENTARIA: LA FIRPE

Declarada por los radicales su oposición a que los socialistas continuasen participando en el Gobierno a partir de la crisis de diciembre del 31, fue gestándose tanto en el pensamiento de Azaña como en el de otros políticos de la mayoría la necesidad de lograr una articulación de los grupos republicanos que fuese un sólido instrumento de gobierno en caso de que las circunstancias forzasen a los socialistas a dejar el poder. Evidentemente era una consecuencia de la desaparición de la Alianza Republicana, pensada en su día con dicho fin.

Así, ya por marzo del 32, se empezó a hablar de la posibilidad de constituir un "cartel" de izquierdas a efectos electorales y parlamentarios (1). Pero no será hasta el discurso de Azaña en Santander el día 30 de septiembre cuando dicha idea tomará cuerpo. El Presidente del Consejo, como era su costumbre en las intervenciones públicas de interés político previstas de antemano, había expuesto en Consejo el contenido del discurso, que además de trazar una perspectiva del programa de gobierno planteó la necesidad de una Federación parlamentaria de izquierdas.

No habló de la posibilidad de una fusión de partidos. Se limitó a proponer una Federación parlamentaria para el

(1)

El Sol, 10 y 11-3-32.

momento en que el Gobierno hubiese cumplido su programa. Tampoco quiso lógicamente aludir a qué partidos consideraba de izquierdas: eso se deducía de los programas y de los actos. Pero la Federación que él proponía se limitaba a las izquierdas.

Mes y medio después, el 13 de octubre, insistiría sobre el tema en otro discurso en Valladolid. Saliendo al paso de posibles malinterpretaciones aclararía Azaña que el programa que pudiese elaborar la Federación valdría para el futuro Gobierno, cuando la Federación fuese la base del Gobierno, pues el de ese momento de colaboración socialistas, ya tenía desde su constitución un programa que cumplir. Parece advertir se ya un cierto recelo a los caminos que pudiera tomar la idea lanzada por él (1).

En efecto, el discurso de Santander había tenido inmediatas y amplias repercusiones. Aplausos por parte de los republicanos de izquierda y socialistas. Reticencias de los radícales y de un sector de los radicales socialistas, el afecto a Albornoz.

Prieto en unas declaraciones había animado a los interesados no sólo a federarse en el Parlamento sino a fusionar se. Sin embargo la idea de fusión, voluntariamente apartada por Azaña del contenido de su discurso contaba con la oposición -

(1)

Azaña, OC. II, p. 436 y 460.

irreductible de Albornoz que este cuidó de manifestar inmediatamente (1). Esta oposición fuera quizás la determinante de que Azaña se limitase a proponer una Federación parlamentaria (2).

Los radicales, por su parte, mostraron su preocupación de quedar excluidos de la unión que se proyectaba, definiéndose por aquella época como de izquierdas en toda ocasión posible. Sin embargo, ya desde el principio las gestiones encaminadas a poner en marcha la Federación se limitaron a los grupos catalán y gallego, radical socialista y Acción Republicana.

El hecho es que los cuatro grupos, tras numerosas reuniones y consultas, acabaron constituyendo la Federación de Izquierdas Republicanas Parlamentarias Españolas (FIRPE), el 23 de diciembre de 1932, en una sesión al cabo de la cual habló el Presidente del Gobierno. Se eligió el comité directivo, compuesto por las siguientes personas: Presidente, Galarza; vicepresidente 1ª, Santaló; vicepresidente 2ª, Ruiz Funes; vicepresidente 3ª, Gómez Paratcha, y secretarios Sbert, Moya y Royo

(1) *El Sol*, 4-10-32; *Luz*, 6-10-32; *El Sol*, 28 y 30-10-32.

(2) De hecho si públicamente todos rechazaban la idea de una fusión -excepto los socialistas- en las conversaciones entre los ministros no era así. El 17 de julio escribía ya Azaña en su diario: "Cree conveniente Fernando (de los Ríos) la fusión de Acción Republicana, radicales-socialistas y la Orga. Domingo está conforme. El estorbo es Albornoz". Aunque no le cita, es de suponer que Casares no se opondría. Como se ve también en estos cabildeos eran los socialistas los que empujaban a los republicanos a unirse, a pesar de que *El Socialista*, algo independiente de las orientaciones de los ministros socialistas, insertara un artículo el 30 de octubre tachando de carente de sentido la Federación.

Gómez (1).

Azaña en su discurso repetiría la observación de que la Federación era más un instrumento de futuro que de aquél momento, un instrumento para que los sectores republicanos de izquierda, en caso de salida de los socialistas del Gobierno, pudieran constituir el centro de gravedad del Parlamento. Claramente se advierte la idea de que el sector izquierdista fuera el decisivo en una hipotética combinación republicana. Además defendió la conveniencia de acentuar el izquierdismo de la política desarrollada y de proseguir la obra revolucionaria (2).

Sin embargo, la Federación a ojos de Azaña era ya un organismo inservible. La responsabilidad principal la achacaba a los radical socialistas, entre quienes Gordón Ordás y Albornoz no parecían muy partidarios de la Federación. Por lo demás habían abundado por lo visto las intrigas por la composición del Comité directivo, atribuyéndosele cierto valor a sus puestos directivos en el camino de alcanzar un ministerio (3).

(1)

Aunque días antes (*El Sol*, 8-12-33) había aparecido un proyecto de Manifiesto-programa de la Federación, redactado por Gálarza (Arrarás, *Memorias íntimas...*, p.317), no se aprobó en la sesión de constitución probablemente porque como escribiera Azaña era un "galimatías".

(2)

Azaña, OC. II, p. 527.

(3)

Arrarás, *Memorias...*, págs. 148, 142, 249, 250.

Sin duda por estos factores, así como por la insuficiencia de la propia fórmula de la Federación parlamentaria, la FIRPE fue tan inservible dentro del Parlamento, como lo ha bía sido la Alianza Republicana. En diversas ocasiones se reu nió su Comité directivo o se reunieron conjuntamente todos los diputados que la componían pero en ningún caso puede decirse que su intervención fuera decisiva para el curso político. La política parlamentaria de la mayoría siguió en manos de las diversas minorías que la integraban, no en las de la FIRPE.

5. ACCION REPUBLICANA EN 1933

ACCION REPUBLICANA EN 1933

De acuerdo con los Estatutos correspondía realizar una nueva Asamblea Nacional en los primeros meses de 1933. Así se acordó efectivamente en la reunión del Consejo Nacional de 25 de febrero (1). Sin embargo la Asamblea no tuvo lugar.

Aunque carezcamos de información directa no parece difícil averiguar la causa probable: el conflicto de Casasviejas y la obstrucción de las oposiciones (2) habían hecho subir al máximo la tensión política. La absorción de Azaña y las principales figuras del partido en las tareas de la lucha parlamentaria y de sus puestos en el ejecutivo, debieron ser las causas del aplazamiento, a pesar de la apariencia de normalidad que el desarrollo de la Asamblea hubiera producido, posibili-

(1) *El Sol*, 26-2-33.

(2) Preferimos utilizar el término "oposiciones", en plural, porque creemos que refleja mejor la realidad del juego parlamentario en las Constituyentes a partir de 1932. En efecto, no se puede asimilar ni ideológicamente ni en su actividad parlamentaria a los radicales -y otros grupos menores de la derecha republicana- con la minoría vasconavarra y los agrarios, aunque todos ellos ejercieran una oposición a la coalición gubernamental. Oposición que a partir de enero de 1933 apenas se diferenció en dureza empleada, pero que en ningún caso permite utilizar para ambos bloques el término de "oposición", con las connotaciones de alternativa homogénea al Gobierno que posee. Algo similar podía decirse en la actualidad respecto a la oposición izquierdista (socialistas y comunistas) al Gobierno de UCD y la que pueda realizar por la derecha Alianza Popular.

tando además una plataforma propagandística para explicar las posiciones del partido en el momento de mayor acoso al gobierno Azaña.

Cabe también considerar la hipótesis del temor a disensiones internas, pero no tenemos ningún dato indicativo de dicha posibilidad. Los que tenemos apuntan más bien a un lógico cerrar filas en torno a Azaña, simultáneo sin embargo con un creciente desánimo de la minoría parlamentaria ante las enormes dificultades con que se enfrentaban.

De nuevo en junio, en la reunión del Consejo Nacional del día 6, según la referencia dada por Ruiz Funes al término de la reunión, se discutieron los temas a abordar en la próxima Asamblea, que debía comenzar el día 11 del mismo mes (1). Al día siguiente Alcalá Zamora desencadenaría la crisis al requerir abrir consultas ante la leve reorganización que Azaña pretendía hacer en su Gabinete. Tras el retraso obligado por la larga tramitación de la crisis y la puesta en marcha del nuevo Gobierno, no volvemos a tener noticias de su celebración hasta septiembre, en que se habla de octubre como fecha de la Asamblea como efectivamente lo sería. Posiblemente ya no pareció adecuado celebrarla durante el verano, época poco propicia para celebrar la serie escalonada de asambleas con el recargo de trabajo que implicaba un Congreso nacional consiguiente

(1)

El Sol, 7 y 9-6-33.

te, cuando ya costaba trabajo lograr que los diputados permaneciesen en Madrid para las tareas parlamentarias, que no se habían interrumpido.

Además del normal y lento crecimiento del partido que no se detuvo pese a lo que pudiera pensarse, como consecuencia del escándalo Casasviejas, en abril se produjo un importante refuerzo organizativo en una de las provincias gallegas, en Pontevedra. La Orga era objeto de frecuentes disensiones internas, siendo su causa por lo general tanto divergencias políticas, como acusaciones de caciquismo a los organismos directivos. La Orga de Pontevedra concretamente tenía una larga tradición de conflictividad con la organización central del partido por dichos motivos. En *El País*, que venía a ser el órgano oficial del partido en la capital pontevedresa, se insertaban frecuentemente denuncias del caciquismo existente en las altas esferas de la Orga. La remodelación del comité directivo de la provincia, no reconocido por la mayoría de la organización provincial y denunciado como una manipulación de la dirección regional, llevó a la ruptura definitiva entre ambas. Es interesante subrayar que los líderes pontevedreses, en sus ataques a la dirección del partido exculpaban siempre a Casares Quiroga, considerando que sus tareas de ministro le impedían estar al tanto y cortar los abusos que se daban en su partido. Dicha actitud la mantuvieron incluso en el momento de la ruptura.

Esta se produjo en marzo y en la práctica significó

el comienzo de una verdadera presencia de Acción Republicana en la provincia, donde hasta ese momento llevaba una vida más bien lánguida. Además, la fusión aportó dos nuevos diputados a la minoría parlamentaria de Acción. Ambos diputados, Poza Juncal y B. Fernández-Ossorio Tafall emprendieron en los meses siguientes una campaña por la provincia para conseguir la adhesión a Acción Republicana de todos los antiguos comités del PRG. Al igual que sucedió en alguna otra provincia, los recién adheridos a Acción Republicana se volverían a encontrar más tarde con sus antiguos correligionarios en marzo del 34, al producirse la fusión tripartita de Acción Republicana con el PRG y los radical socialistas independientes.

6. ELECCIONES MUNICIPALES DE ABRIL DE 1933

ELECCIONES MUNICIPALES DE ABRIL DE 1933

En abril de 1933 se convocaron elecciones municipales parciales con objeto de substituir a los concejales que ha cía dos años que habían sido elegidos por el artículo 29 de la Ley Electoral -artículo suspendido a partir del decreto electoral de 8 de mayo de 1931-. Estos concejales habían sido ya substituídos en octubre de 1932 por comisiones gestoras (1).

A pesar de que estas elecciones tuvieron profundas consecuencias políticas, el Gobierno las planteó públicamente como unas elecciones de trámite y se despreocupó de su desarrollo. Una de las consecuencias fue la ausencia de una campaña electoral de suficiente interés (especialmente por parte de los partidos gubernamentales) como para tratarla específicamente. Hubo pocos mítines y sin participación de las principales figuras políticas; no hay que olvidar que las elecciones iban a tener lugar en localidades pequeñas.

Por ello y con objeto de ver la actitud de Azaña y de Acción Republicana, así como de las restantes fuerzas políticas, vamos a basarnos fundamentalmente en un análisis de la prensa. En cuanto a los resultados, teniendo en cuenta sus re

(1)

En estas comisiones debían estar representados los obreros y las asociaciones patronales, Arrarás, *Historia...*, II, p.40. Robinson afirma equivocadamente que con estas elecciones se iban a substituir las comisiones gestoras nombradas por Maura en 1931, *Orígenes*, p.198.

percusiones políticas, merece la pena desbordar el análisis de los obtenidos por Acción Republicana y considerar los resultados globales, pues estas elecciones apenas han sido analizadas por la bibliografía.

A, PLANTEAMIENTOS POLITICOS ANTE LAS ELECCIONES

PLANTEAMIENTOS POLITICOS ANTE LAS ELECCIONES

El planteamiento de las elecciones concebido por Azaña fue sin duda arriesgado. Probablemente contaba con persuadir a los catalanes de que aceptasen su idea de hacer coincidir las elecciones en todo el territorio nacional. Porque desde luego, sin la segura victoria en Cataluña, el planteamiento, más que arriesgado, era temerario. Se equivocaba *El Debate* si creía que el Gobierno esperaba una fácil victoria; según Vidarte los ministros socialistas eran contrarios a la celebración de estas elecciones y L. Caballero había comunicado al mismo Azaña que las organizaciones socialistas en los pueblos afectados eran débiles. Tanto Caballero como Prieto se sentían pesimistas (1).

Parece que la intención de Azaña era "reforzarse del traspies de Casasviejas" según comentó Prieto a Besteiro; Azaña esperaba por tanto que estas elecciones ratificasen de alguna manera la discutida autoridad gubernamental. ¿Por qué no convocó, aunque hubiera tenido que modificar la ley de Régimen Local, elecciones municipales generales? Sin duda pensaba que era mal momento, pero igual o más lo era para unas parciales de estas características; de hecho el efecto no fue el deseado, pues los resultados fueron interpretados de forma antagónica por las izquierdas gubernamentales y por las oposicio

(1)
Vidarte, *Las Cortes Constituyentes...*, p. 530.

nes. Creemos que la clave del error de cálculo de Azaña residió en la defección catalana.

Porque parece claro que fue Azaña el que en todo momento tomó la iniciativa en este asunto; en su discurso del 14-3-33, en el Frontón madrileño, anunció que la coalición gubernamental iría unida a las elecciones municipales (1); según Vidarte tal decisión no había sido tratada ni en la Ejecutiva del PSOE ni en el órgano directivo de la FIRPE (2).

No parece concebible que Azaña no hubiese consultado el tema previamente con sus ministros y lo más razonable es pensar que había obtenido su conformidad en consejo; pero en cualquier caso parece que Largo Caballero no debía estar muy conforme con la decisión, según el testimonio de Vidarte (3).

La idea de convocar primero elecciones tan sólo para los ayuntamientos afectados por el art. 29 en 1931, se trató en Consejo por vez primera inmediatamente después del dis-

(1)

Que todavía no se había decidido restringir a los municipios elegidos en 1931, por el art. 29.

(2)

Vidarte, *ibid. ibid.*; el no consultar a la FIRPE disgustó por lo visto a los radical socialistas.

(3)

Vidarte cita varias pruebas de ello; por ejemplo en una reunión de la ejecutiva, pidió al secretario De Francisco que leyese las comunicaciones de las federaciones sobre la alianza electoral con los republicanos; las federaciones eran mayoritariamente contrarias a ella por negar fuerza o existencia a los republicanos o por considerar a estos elementos caciquiles hostiles a los socialistas. La intención de Largo era apoyarse en las federaciones frente a Prieto, presumiblemente favorable a la coalición. *Ibid. Ibid.*

curso citado: el 17 de marzo, mostrándose todos de acuerdo (1). La idea de Azaña era convocar estas municipales parciales y después convocar elecciones parciales a diputados. El 24 de marzo, una semana después, se trató de nuevo el tema, ratificándose dicho acuerdo en lo referente a las municipales (2) y aplazando en cambio las legislativas parciales (3).

De esta forma queda muy poco clara la actitud de los socialistas, pues si por el testimonio de Vidarte aceptamos que los ministros socialistas eran escépticos cuando no adversos a estas elecciones, no debieron manifestarlo claramente en Consejo, pues una oposición suya la hubiera sin duda reflejado Azaña en su diario, y posiblemente hubiese desistido de la idea, como lo hizo con las elecciones legislativas parciales ante el disgusto de Prieto (4).

Dos editoriales de *El Debate* nos ilustran sobre la posición y expectativas de las derechas católicas ante las elecec

(1) Azaña, OC. IV, p. 471.

(2) Azaña, OC. IV, p. 476.

(3) En los tratos con los radicales para que estos cesaran en la obstrucción, por medio de Besteiro, Azaña aparentaba que la convocatoria de elecciones era una concesión. Su propio testimonio y el de Vidarte nos indican que también en las intenciones de Azaña estaba el tantear de alguna manera la opinión, aunque la manera final de hacerlo fue, desde su propia conveniencia, desafortunada. Azaña, OC. IV, p. 478.

(4) Azaña, *ibid.*, p. 476.

ciones de abril.

En el primero de ellos, de enero de 1933, tras el anuncio del Gobierno de que se celebrarían las elecciones municipales en abril, aunque todavía no se convocaban ni se había acordado que fuesen a ser sólo parciales, *El Debate* adopta una prudente actitud. Se resalta la coacción en que viven las derechas, bajo la ley de Defensa de la República, especialmente tras agosto del 32; ello y la actuación sectaria de las autoridades de todos los niveles, hacen que el gobierno parta con una indudable ventaja: una victoria suya no sería ningún motivo de envanecimiento. Se recuerda además el carácter localista y no directamente político de unas elecciones municipales.

Pero por otro lado, añadía, en una situación constituyente, toda elección, por muy sectorial que sea, adquiere tinte político, y éstas lo iban a tener; finalizaba con un llamamiento a los católicos a participar con el máximo entusiasmo, "estrenando" la remozada maquinaria electoral derechista (1).

El segundo de los editoriales es ya de marzo, cuando el Gobierno acaba de anunciar que las elecciones se restringirían a los ayuntamientos afectados por el artículo 29, excepto en Cataluña donde la renovación sería total. Este planteamiento es denunciado por el periódico católico como un abuso de

(1) *El Debate*, 5-1-33.

poder.

En su opinión se restringían las elecciones de esta forma por miedo a una apelación a la opinión pública nacional; se intentaba así ir a unas elecciones en ayuntamientos "controlados", pues eran los mismos en los que desde hacía 3 meses los concejales habían sido substituídos por comisiones gestoras nombradas por los gobernadores, con lo que había habido un plazo de tiempo suficiente para preparar el terreno electoral en beneficio de la coalición en el poder.

Además, el electorado afectado era fácilmente maleable por constituir "una ciudadanía menos culta, más atrasada, más abúllica y medrosa" como correspondiente a pequeños municipios (1).

En cambio, en Cataluña, reciente la victoria en las legislativas catalanas de la Esquerra y siendo de esperar una victoria izquierdista, se iba a la renovación total de los ayuntamientos: no se esperaba en este caso hasta noviembre como en el resto de España porque para entonces ya se habría producido la reacción antiesquerrista que ahora se apuntaba (2).

(1)

Es curioso contrastar esta opinión del órgano más autorizado de las derechas con la de Payne, quien opina que aquellos municipios pertenecían a zonas con un nivel de alfabetización más alto y eran de los más fiables del país. No hay que olvidar que sí el País Vasco y Navarra quizás estuviesen globalmente en tal situación, las elecciones iban a tener lugar, por lo general, en los pueblos más pequeños, y también en zonas más atrasadas como Castilla.

(2)

El Debate, 29-3-33.

Conviene aclarar que no se acordó ninguna fecha para el resto de las elecciones (o no se hizo público el acuerdo), aunque el rumor generalizado era que se realizarían en noviembre. En realidad no era tal aplazamiento, sino cumplimiento de la ley de Régimen Local: para haber celebrado elecciones generales municipales en abril era necesario modificar dicha ley. Esto, que es recordado varias veces por Azaña en su diario, parece ser desconocido por los comentarios que la presa de la época hace en torno a las elecciones (1).

Con respecto a las elecciones catalanas, lo que se hacía era dejarlas al arbitrio del Gobierno de la Generalidad; y en este caso es muy cierto que Azaña intentó persuadir al Gobierno catalán de que las convocasen con simultaneidad a las nacionales. La razón para ello era sin duda la misma que irritaba a *El Debate*, que la esperada victoria de las izquierdas en Cataluña aseguraba que globalmente el resultado de las elecciones favoreciese al Gobierno. No sabemos cuáles serían las razones que impulsaron al Gobierno cuando la conveniencia política era obvia a las izquierdas tanto catalanas como no catalanas, pues una caída o incluso el deterioro del gobierno Azaña en nada les podría favorecer, como reconocían en Cataluña.

(1)

En cuanto a los deseos de Azaña, OC. IV, pag. 501. Respecto a la opinión catalana sobre el Gobierno Azaña, vid. por ejemplo, el artículo de Rovira i Virgli, ya pasadas las elecciones, *El Sol*, 11-5-33.

En la prensa gubernamental, el planteamiento es lógicamente inverso. Lo que *El Liberal* destaca en su editorial del 30 de marzo es que el Gobierno, al convocar elecciones en los pueblos del art. 29, renuncia de antemano a una votación lucida pues eran los reductos más claros del monarquismo, aunque por adaptación a la nueva situación muchos concejales se hubiesen integrado en los partidos republicanos conservadores. Se parte del supuesto de que prácticamente todos los proclamados por el artículo 29 en abril del 31 eran monárquicos, lo cual no es exacto como vimos al analizar aquellas elecciones; aunque dado que el carácter republicano de muchos de esos votos se debió sin duda a las especiales circunstancias de aquellas elecciones, el supuesto del conservadurismo y caciquismo de tales municipios era presumiblemente cierto.

Este editorial era contestación al de *El Debate* del día 29; también rechaza que la ley de Defensa de la República fuese un obstáculo a la propaganda, pues el Gobierno no pensaba aplicarla a la propaganda electoral, según había declarado.

Inmediatamente antes de las elecciones, de nuevo en un editorial, *El Liberal* negaba taxativamente carácter e importancia políticos a las elecciones, considerándolas tan sólo como una muestra de cómo se iba a manifestar el voto femenino; e insistía de nuevo en el caciquismo imperante en tales pueblos aunque se rotulase republicano: la realidad era la ausencia de ciudadanía que dos años de República no habían bastado para ha

cerla nacer (1).

Parecidas impresiones tenía un ministro a la salida del Consejo, al ser interrogado por *El Sol*: esperaba sin embargo el ministro que la reacción ante los nuevos modos republicanos mostrase un despertar liberal y democrático en tales pueblos (2).

El Socialista, por su parte, repetía la alternativa enunciada por Azaña en su discurso de 14 de febrero: si resultaban vencidos se les exigiría a los partidos de la coalición renunciar a sus actuales ambiciones; por lo tanto se triunfaban formularían sus exigencias de manera apremiante; planteamiento arriesgado que venía a aceptar el carácter decisorio de tales elecciones (3).

Citemos por último el editorial del mismo día 23 de *El Socialista* en el que mostraba una actitud más prudente; insistía en el carácter caciquil de los pueblos afectados, enclavados la mayor parte en Castilla, Navarra, etc.; y rechazaba la afirmación de que las comisiones gestoras hubiesen preparando el camino a una victoria republicana socialista, pues poco

(1) *El Liberal*, 22-4-33.

(2) *El Sol*, 12-4-33.

(3) *El Socialista*, 18-4-33.

podían hacer los ayuntamientos y comisiones frente al poder del dinero y de las relaciones sempiternamente dueñas de la vida local en estos pueblos; se resaltaba igualmente que las derechas acudían envalentonadas por la concurrencia femenina a las urnas.

La postura de unos y otros era como puede verse dedefensiva y cautelosa, arguyendo las dificultades con que respectivamente topaban, aunque nadie descartase la posibilidad del triunfo y su aprovechamiento; y todos consideraban, aparentemente, que el perder no era un contratiempo excesivamente grave.

B. RESULTADOS GENERALES

RESULTADOS GENERALES

Los datos que la literatura ha manejado de estas elecciones están marcados por la imprecisión. De nuevo, como en abril del 31, los únicos datos definitivos con los que se cuenta son los del AEE, de 1934. Estos datos son los siguientes (1):

Nº de municipios en los que hubo elección:	2.653
Nº de concejales a elegir:	19.103
Nº de concejales electos:	19.068

La diferencia entre estas dos últimas cifras se debe, según indica el Anuario, a la anulación de las elecciones en algunos ayuntamientos, en los que se constituyeron comisiones gestoras; la cantidad de concejales destituidos es despreciable: 35. Frente a estos datos, la bibliografía posterior repite equivocadamente las cifras provisionales que el ministerio de Gobernación dió el 24 por la noche y que la prensa reprodujo el 25: se habían desarrollado las elecciones según estos datos en 2.478 pueblos (2), y se disponía información de tan solo 2.192 ayuntamientos, que significaban 16.031 concejales.

(1) AEE, 1934, pags. 650 y 651.

(2) Estos datos vienen en todos los periódicos madrileños; sorprende de todas formas que el ministerio de Gobernación no tuviera de antemano noticia exacta del número de pueblos en los que se iban a desarrollar las elecciones.

Desdichadamente el AEE al incluir en el mismo apartado a todos los grupos republicanos, desde los conservadores y radicales hasta los radical-socialistas, hace estos datos poco útiles; de todas formas comparándolos con los datos parciales más detallados de la prensa podemos llegar a una idea bastante aproximada de los resultados finales.

Contamos asimismo con las cifras dadas por los periodistas franceses Moch y Picard, que dan los datos referidos a 17.809 concejales de 2.384 ayuntamientos, y que estimamos de suficiente fiabilidad (1).

El hecho de que la distribución porcentual de los datos de Gobernación del día 25, que corresponden a un nivel de escrutinio del 84'1%, coincidan casi absolutamente con los de Picard-Moch -referidos a un 93'4 del escrutinio- nos da garantía suficiente respecto a su fiabilidad, especialmente al coincidir asimismo, en las cifras que son comparables, con los porcentajes de los votos finales del Anuario.

(1)

Estos datos, aunque el autor no nos indica su procedencia, los debió solicitar a Gobernación; lo suponemos así por la utilización exacta de la misma clasificación de partidos que empleó dicho ministerio para los datos parciales antes citados. Por otro lado hay que añadir que Picard-Moch seguía pensando que el total de ayuntamientos en los que hubo elección era de 2.478, por lo que tenían idea de que los datos que poseían eran prácticamente finales, pues se referían a 2.384 pueblos.

	<u>Gob. día 25</u>	<u>Piccard-M.</u>	<u>AEE</u>
Porcentaje de concejales socialistas	11'4	11'4	10'6
Porcentaje de concejales republicanos (1)	49'8	49'9	49'5
Porcentaje de concejales Acción Popular	{ 2'5	{ 2'3	{ 1'9
Porcentaje de concejales agrarios	24'0 { 18'5	24'0 { 19'0	26'5 { 21'1
Porcentaje de concejales tradicionalistas	{ 3'0	{ 2'7	{ 3'5

Como puede observarse la disminución de los socialistas en los resultados finales es muy pequeña, 0'8; los resultados del conjunto de grupos republicanos son practicamente idénticos, y tan sólo en el campo de las derechas se percibe un ligero aumento debido a la cifra de concejales agrarios.

Para los resultados completos ver la Tabla I.

(1)

Aquí para las cifras de Gobernación del día 25 y de Piccard-Moch sumamos los concejales obtenidos por los partidos gubernamentales, de oposición y partidos diversos.

TABLA I

En la primera columna damos los resultados parciales de Gobernación del día 25; en la segunda los proporcionados por Picard-Moch, y en la tercera los finales del AEE.

Nº ayuntamientos	2.192	2.384	2.653
Nº concejales	16.031 (84'1%)	17.809 (93'4%)	19.068
	(1)	(1)	

Coalición gubernamental

Socialistas	1.826 (11'4%)	2.024 (11'4%)	2.019 (10'6%)
	(2)	(2)	(2)
Acción Republicana	1.202 (7'5%)	1.319 (7'4%)	No especifica
	(23'8%) (3)	(24'0%) (3)	(5)
Radicales Socialist.	1.730	1.845	
Republicanos galleg.	131	149	
Galleguistas	1	No especifica	(4)
Izquierda Republicana			
Gubernamental	7		
Adictos sin clasificar	151		

Total....	5.048 (31'5%)	5.496 (30'9%)
-----------	---------------	---------------

Oposición republicana

Radicales	2.479	5.496
Conservadores	1.473	1.580
Progresistas	122	161
Federales	36	No especifica
Rad.soc.de izquierda	61	
Al servicio de la Rep.	35	

Total.....	4.206 (26'2%)	4.713 (26'5%)
	=====	=====

Otros partidos republicanos

Republicanos derecha	35	No especifica
Republic.indefinidos	19	
Republic.autónomos	4	
Republic.agricultores	6	
Republic.agrarios	54	
Republic.liberales- demócratas	10	
Republic.de izquierda	78	
Republic.independientes ³⁴²		

Total....	548 (3'4%)	694 (3'9%)
	=====	=====

Total partidos repu-

blicanos (excepto

socialistas) . . . 7.976 (49'8%) 8.879 (49'9%) 9.436 (49'5%)

Partidos derecha

Agrarios	2.964 (18'5%)	3.382 (19'0%)	4.029 (21'1%)
Acción Popular	395 (2'5%)	410 (2'3%)	360 (1'9%)
Tradicionalistas	486 (3'0%) (24'0%)	488 (2'7%) (24'0%)	660 (3'5%) (26'5%)
Nacionalistas	532	541	No especifica
Jaimistas	9	9	
Monárquicos	30	30	
Católicos	339	No especifica	
Coalición derechas	120		
Otras derechas	79		
<hr/>			
Total....	4.954 (30'9%) =====	5.394 (30'3%) =====	

Varios

Indefinidos	783	917	No consta filiación: 395
Independientes	359	512	615
Comunistas	26	30	28
Extrema izquierda	2	No especifica	
Sindicato minero	56		
Otros	49		
<hr/>			
Total....	1.275 (8'0%) =====	1.512 (8'5%) =====	1.526 =====

(1)

Porcentaje del total de concejales electos, que indica en qué punto se encontraba el escrutinio.

(2)

Este porcentaje, como todos los que le siguen en la columna se refiere al total de concejales escrutados, indicándonos la fuerza relativa del partido o grupo de ellos.

(3)

Este segundo porcentaje de Acción Republicana lo es respecto del total de concejales conseguidos por la coalición gubernamental.

(4)

En las cifras dadas por Picard-Moch no se especifican los concejales conseguidos por los partidos menores de cada bloque de partido, pero sí siempre los totales.

(5)

En el AEE solo se especifican los concejales de los republicanos, los socialistas y de algunos grupos de derechas, sin seguir en lo más mínimo la clasificación utilizada por Gobernación. Por ello solo damos porcentajes comparativos en los casos en los que es posible.

C. RESULTADOS DE ACCION REPUBLICANA

RESULTADOS DE ACCION REPUBLICANA

Lo que más nos interesa de estos datos es que aceptada la fiabilidad de esos escrutinios parciales y mientras no se cuente con un estudio detallado por provincias, nos van a servir como base para garantizarnos la representatividad de los resultados provinciales conseguidos por Acción Republicana y comprobar así su grado de arraigo local, con las matizaciones que haremos.

En efecto, contamos también con los datos de la prensa diaria en los días posteriores a las elecciones: no los antes citados de Gobernación, sino los que los corresponsales de los periódicos en las provincias telegrafiaban a Madrid, proporcionando los resultados locales, procedentes de los escrutinios de las juntas locales del censo. Estos datos son algo menos completos que los de Gobernación, ascendiendo, tal como nosotros los hemos seleccionado a 15.390 concejales, equivalentes a un 80'1% del total. La gran ventaja es que nos proporcionan la distribución detallada por partidos, desglosando los correspondientes a los diversos partidos republicanos. Para estos datos nos basamos en la inmensa mayoría de los casos en los proporcionados por *El Debate* (1).

(1)

El criterio utilizado para la selección de estos datos ha sido el de tomar los resultados de *El Debate*, excepto cuando los de otro periódico son más completos. Las diferencias entre los diversos periódicos no suelen ser muy grandes y son debidas -aparte errores, siempre fáciles- a que sumaban los datos de pueblos distintos. Hay que destacar la manipulación por la coincidencia general ya aludida y porque la diferencia no siempre es favorable a la tendencia del periódico en cuestión. Mientras que las cifras de *El Debate* -que repetimos que son la inmensa mayoría-

Nuestro punto de partida es que al coincidir el porcentaje de concejales obtenido por Acción Republicana según estos datos con el de los datos comentados más arriba, tenemos suficiente garantía de las cifras parciales por provincias.

Aunque nos hayamos limitado a computar los concejales pertenecientes a Acción Republicana, creemos que un recuento similar de los correspondientes a los restantes partidos no haría sino confirmar nuestra hipótesis.

A continuación damos el porcentaje de concejales de Acción Republicana en los tres niveles de escrutinio respecto al total de concejales escrutados en cada uno de ellos:

<u>Prensa día 25 y ss.</u>	<u>Gobernación día 25</u>	<u>Picard-Moch</u>
7'2	7'5	7'4

En el interior de la coalición gobernante, los porcentajes de Acción Republicana en los datos de Gobernación y en los de Picard-Moch eran respectivamente de 23'8 y 24'0 (1).

A la hora de comentar estos resultados hay que recordar en primer lugar que todos los condicionamientos que la prensa gubernamental denunciaba respecto al carácter desfavorable para los partidos de la coalición de estas elecciones se

(1) cont. pág. anterior

son todas del día 25, de *El Sol* y de *El Liberal* hemos visto las que ambos periódicos trajeron en los días sucesivos conforme se iba progresando en el escrutinio.

(1) vid. Tabla I.

daban primerísimamente para Acción Republicana, partido eje de la coalición y encarnación de la política de Azaña, carente además de un electorado disciplinado como el socialista; cabe por ello admitir que hasta cierto punto es una estimación por bajo del potencial de Acción Republicana.

En segundo lugar dado que a estas elecciones se iría en coaliciones diversas unas veces, aislados en otras, son un índice tan solo relativo de la fuerza autónoma de cada partido. Sin embargo, pensamos que eso no es óbice para que, hecha la advertencia, sea considerado como un índice de bastante fiabilidad, pues al fin y al cabo el reparto de puestos en cada localidad, cuando se iba en coalición (lo que sucedió siempre), dependía de las estimaciones que los partidos afectados hacían de su propia fuerza y de los restantes partidos coaligados, y este reparto es siempre más fiable cuando se trata de elecciones locales que en unas elecciones legislativas, por encima de ventajas o pretericiones eventuales en unos u otros pueblos.

Y en tercer lugar y quizás lo más relevante, es que se trata de un índice indirecto, pues no operamos con votos si no solo con puestos de concejales conseguidos; el número de votos sería lo que más nos indicaría la exacta fuerza local del partido de Azaña (aunque siempre nos encontrásemos con el problema de las coaliciones). Así en las provincias en las que no se consigue ningún concejal, no implica necesariamente una ausencia total de presencia del partido. Como en todas las elecciones del período republicano, el sistema mayoritario con cuo

TABLA II (1)

Provincia	Conc. escrut.		A.R.	Conc. eleg.	Conc. prov.	% elect. prov.
Alava	186	2	1'18	270	597	35'9
Albacete	230	65	28'3	230	943	17'99
Alicante	112	23	20'5	123	1471	1'83
Almería	99	34	34'3	100	1035	5'15
Avila	467	128	27'4	829	1980	32'9
Badajoz	136	5	3'6	159	1861	5'21
Baleares	123	20	16'3	164	796	11'30
Burgos	820	72	8'8	1176	3451	25'14
Cáceres	132	6	4'5	134	2049	4'02
Castellón	320	102	32'2	336	1289	11'75
Cádiz	18	-	-	18	691	0'50
Ciudad Real	109	-	-	278	1158	16'19
Córdoba	34	-	-	36	1086	1'42
Cuenca	936	33	3'5	1187	2240	42'0
Granada	185	8	4'3	233	1984	5'98
Guadalajara	551	84	15'3	752	2663	15'3
Guipúzcoa	320	-	-	328	859	18'95
Huelva	59	-	-	59	900	2'36
Huesca	941	29	3'1	1390	2475	43'23
Jaén	81	2	2'7	91	1326	5'52
León	418	50	12'0	615	2170	22'86
Logroño	347	41	11'8	456	1375	19'39
Lugo	193	1	0'5	244	972	21'23
Madrid	354	6	1'7	382	1335	2'76

Málaga	18	4	22'2	18	1189	0'68
Murcia	58	-	-	61	723	4'04
Navarra	949	28	3'0	1053	2113	34'94
Oviedo	159	5	3'2	166	1218	6'85
Palencia	675	7	1'0	675	1780	27'12
Palmas	25	-	-	81	468	8'11
Pontevedra	116	17	14'7	117	998	9'54
Salamanca	1048	83	7'9	1218	2859	32'91
Sta.C.Tenerife	209	2	1'0	242	670	26'07
Santander	203	16	7'9	226	1072	15'25
Segovia	418	70	16'8	449	1882	22'59
Sevilla	27	1	3'0	27	1314	0'84
Soria	112	2	1'8	221	2243	13'20
Teruel	773	27	3'5	968	2035	45'92
Toledo	489	26	5'3	575	1965	20'94
Valencia	348	4	1'2	365	2636	6'79
Valladolid	640	36	5'6	796	1806	24'17
Vizcaya	403	-	-	431	1175	11'79
Zamora	681	15	2'2	881	2308	33'14
Zaragoza	849	61	7'2	903	2440	21'83

Total... 15390 1112 7'2 19068 81022 12'89

- (1) La primera columna indica el número de concejales escrutados, según las cifras recogidas de la prensa; a continuación y bajo las iniciales de Acción Republicana damos los concejales conseguidos por Acción Republicana entre los escrutados y el porcentaje de éstos que significan. Las tres

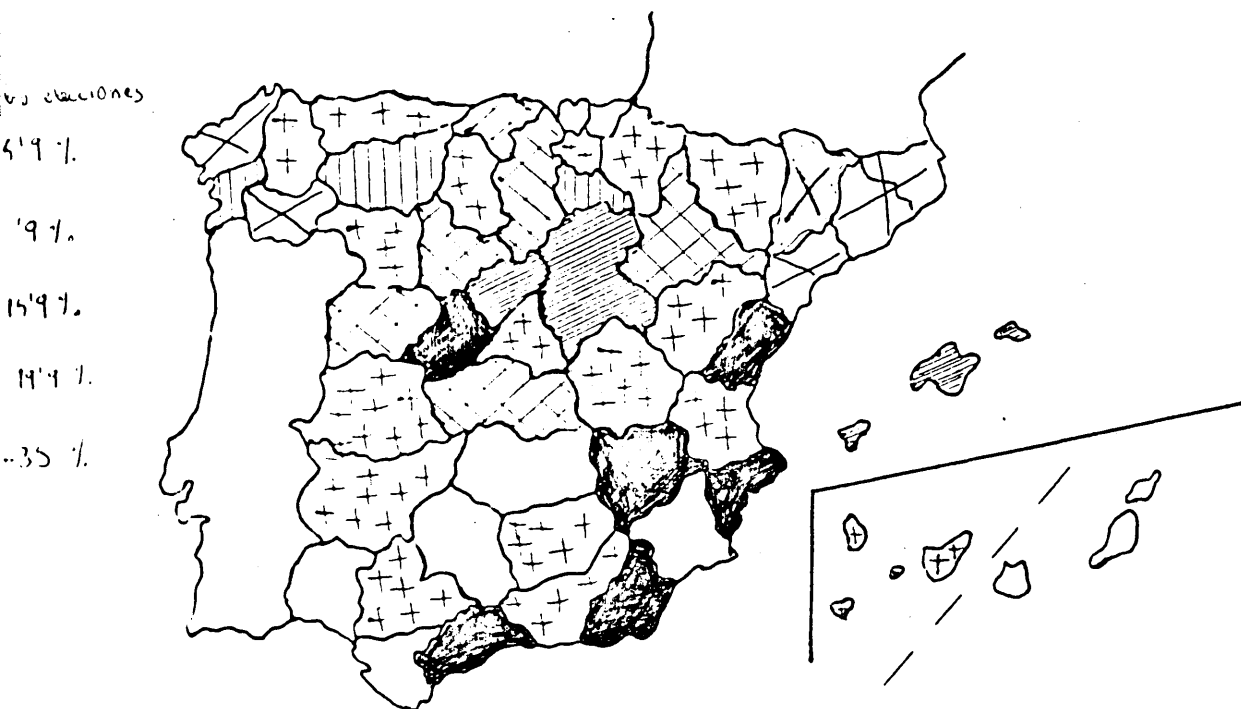
últimas columnas dan el total de concejales elegidos en día 23, el total de concejales existentes en la provincia y el tanto por ciento del electorado provincial movilizado en estas elecciones (cifras de los AEE de 1931 y 1934).

La fuerza local demostrada por Acción Republicana no es despreciable. Es indudablemente un partido pequeño, pero con una implantación cierta, que llega a ser importante en algunas provincias. Seis fuerzas se destacaron en estas elecciones: Acción Republicana, radicales socialistas, socialistas, radicales, conservadores (M. Maura) y agrarios. De ellos Acción Republicana es el menor, muy cerca de los conservadores; con mejores resultados se colocaron socialistas y radicales socialistas, y con más del doble radicales y agrarios.

Teniendo en cuenta los factores ya aludidos de ser unas elecciones prácticamente rurales y fundamentalmente en zonas conservadoras nos parece un resultado más que aceptable para un partido nacido en la práctica en 1930, y que al contrario que radicales y radicales-socialistas no había heredado, excepto en contados casos, las antiguas organizaciones republicanas autónomas; el cual además, si bien podía recoger el prestigio personal de Azaña, también recogía el desgaste de dos - años de gobierno. Las elecciones tenían lugar en plena obstrucción parlamentaria y tres meses después del comienzo del escándalo de Casasviejas que se había prolongado durante varias semanas.

Hay que insistir en que lo que Acción Republicana

obtiene en este momento no lo tenía al comienzo de la Repúbli
ca y que por lo tanto no se puede hablar de desastre electoral
al referirse al partido de Azaña en estas elecciones municipal
les, como -lógicamente- se esforzó en afirmar la derecha en
1933 y como -menos comprensiblemente- ha repetido la bibliograf
fía conservadora.



Comentando los resultados por provincias vemos que
la ausencia total de concejales de Acción Republicana en cinco
provincias (Cádiz, Córdoba, Murcia, Huelva y Las Palmas) pier-
de relevancia al ver que pertenecen al grupo de siete en las
que se eligen menos de cien concejales, con cifras ya muy ba-
jas para considerarlas representativas. En parecida situación
se encuentran otras tres provincias andaluzas, Jaén, Sevilla y
Málaga; en las dos primeras el porcentaje de concejales de Ac-

ción Republicana, es muy bajo, de un 3%, mientras que el alto porcentaje de Málaga, un 22'2%, no nos dice nada pues solo se eligieron en la provincia 18 concejales.

Dicho esto vemos dos zonas en las que la implantación de Acción Republicana es igual o superior a la media nacional. La de más fuerza es el Sudeste/Levante: tres provincias, Almería, Alicante y Castellón superan el 20%, a las que se puede sumar Baleares, con más del 15% y Albacete, con un 28'3%. Las provincias de esta zona que se separan de esta pauta son Murcia, ya aludida antes y Valencia en la que probablemente se dejaba sentir el absoluto predominio que ejercían los blasquistas (1).

De Andalucía oriental no podemos afirmar nada con excesiva seguridad pues los concejales elegidos eran en casi todos los casos muy pocos (2). Así pues los datos apuntados con firman la importancia de Acción Republicana en provincias como Almería, Albacete y Castellón.

(1)

Hay que señalar que el porcentaje de electores movilizados en Almería es muy bajo (5'15%); el de Alicante lo es tanto que le resta todo valor (1'83%). En Valencia el Pura consiguió más del 50% de concejales. Ruiz Manjón, *El Partido...*, p.370.

(2)

De todas formas O. Ruiz Manjón atribuye la escasa fuerza del Partido Radical en Andalucía oriental a la fuerza de Acción Republicana y socialistas en ella. Es posible que, aparte del caso de Almería, donde la fuerza de Acción Republicana confirmada por otros datos no nos pa rece dudosa, el resultado de Málaga, por muy fragmentario que sea, no fuese casual. *Ibid.*, p. 370.

Como segunda zona de implantación tenemos, por paradójico que parezca al contradecir la imagen exclusivamente derechista de esta zona a Castilla la Vieja. Por supuesto que las organizaciones de Acción Republicana en estas provincias constituyen el sector más moderado del partido, pero aún así, la imagen nacional del partido del presidente Azaña no podía a estas alturas de 1933 variar excesivamente.

En cualquier caso puede observarse que León, Burgos, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca están todas (excepto Valladolid con un 5'6%) al nivel de la media nacional, (en torno al 7% Burgos y Salamanca) o por encima (Avila (1), Segovia y León). Enlazadas a esta zona podría considerarse a dos provincias de Castilla la Nueva: Guadalajara y Toledo, especialmente esta, de tradición conservadora: Acción Republicana consigue en aquella un 15'3% y en Toledo un porcentaje bajo pero todavía apreciable, 5'3%.

Este análisis nos confirma también otros datos que apuntan a la fuerza de Acción Republicana en algunas provincias como Salamanca y Guadalajara, y matizan la imagen conservadora de la zona. Esta matización se tendría que contrastar con un análisis semejante de los restantes partidos de izquierda (2);

(1) La importancia en Avila de Acción Republicana se debía en parte probablemente a la tradición del apellido Sánchez Albornoz. Alcalá Zamora, que tanto despreciaba al partido de Azaña, atribuía efectivamente a este factor su relativo arraigo en la provincia.

(2) Sin dificultad en lo que a los socialistas se refiere, pues el AEE especifica los concejales obtenidos por el PSOE. Respecto a los radical socialistas habría que utilizar métodos como el empleado aquí.

de todas formas creemos que el resultado global confirma precisamente esta idea, pues puede considerarse aceptable para la izquierda, sin que sea un triunfo. Y en este caso es interesante resaltar que lo dicho respecto a estas provincias sí se puede considerar relevante pues son aquéllas donde las elecciones tuvieron verdadera amplitud. El porcentaje de electores movilizados en las ocho provincias citadas es de un 24'6%.

Por último, el mapa nos confirma la fuerza (siempre relativa) de Acción Republicana en un par de provincias que es la expresión de factores de índole provincial: Pontevedra, donde se acaba de pasar a Acción el sector mayoritario del PRG (ex ORGA), y Logroño, donde la unión de un sector importante del antiguo partido liberal acaudillado por Amós Salvador había proporcionado infraestructura local al partido de Azaña.

A la inversa, creemos que Acción Republicana era especialmente débil en aquellas regiones en las que el antagonismo social, protagonizado por las fuerzas derechistas y socialistas era directo y brutal, consecuencia del enfrentamiento entre un caciquismo secular y un campesinado mísero que por vez primera iba tomando conciencia de su fuerza. En esta lucha los republicanos de centro o de izquierda poco podían hacer; los radicales se entregaban para sobrevivir cada vez más decididamente a la ultrareaccionaria CEDA (1); los republicanos de iz

(1)

Logrando así conservar su fuerza, siempre importante, en esta zona. Ruiz Manjón, *ibid.*, p. 369.

quiera sucumbían entre ambos contendientes, rechazados como eran por los socialistas, quienes les acusaban de ser los mismos caciques que en otros momentos les había oprimido, en una condena global de todos los sectores burgueses; ellos por su parte se quejaban de ser acusados y desprestigiados injustamente por los dirigentes socialistas locales, prevalidos de su ascendiente sobre los obreros y con la intención de que no compartiesen su dominio político sobre los sectores populares.

No podemos comprobar esto con ayuda de las presentes elecciones porque en Andalucía y Extremadura el número de concejales elegidos fue muy escaso. De todas formas y excepto en Málaga y Almería, en Andalucía oriental, y quizás también Albacete, provincias que siendo de tales características se salen aparentemente de esta hipótesis, el resto de las provincias aludidas eligen en los pocos pueblos en que celebran elecciones a contados concejales de Acción Republicana, y en algunos casos a ninguno (Cádiz, Huelva y Córdoba).

El País Vasco tampoco elige ningún concejal con el rótulo de Acción Republicana; suponemos que bajo denominaciones (republicanos de izquierda, coalición republicano socialista, etc.) habría alguno. No hay que olvidar sin embargo, que dado el sistema electoral vigente, y siendo las principales fuerzas los nacionalistas, los tradicionalistas y los socialistas, los republicanos de izquierda, a pesar de tener fuerza y tradición, podían con facilidad ver reducidas al mínimo

sus representaciones al repartirse aquéllos mayorías y minorías (1).

(1) En parecida situación se encontraba aquí el partido Radical.
Ruiz Manjón, *op. cit.*, p. 370.

D. CONSECUENCIAS POLITICAS DE LAS ELECCIONES

CONSECUENCIAS POLITICAS DE LAS ELECCIONES

Las interpretaciones que las fuerzas políticas dieron a estos resultados fueron antagónicas: todos clamaban victoria. Como Azaña reconoce en su diario, las elecciones habían dado "un resultado confuso, que unos y otros entienden como más les gusta". Simplemente la lectura de los titulares de los periódicos es muy indicativa de lo que decimos; *El Debate* titulaba su primera plana del día 25 "Victoria aplastante contra el Gobierno y contra los socialistas", y el editorial "La opinión empieza a hablar"; *El Sol* en cambio, todavía en su fase progubernamental, hablaba de "El triunfo electoral del domingo" y de manera parecida se refería toda la prensa a la jornada electoral, según su tendencia.

Los planteamientos eran los siguientes. La derecha, tanto la pseudorrepublicana (agrarios, Acción Popular) como la republicana (radicales, conservadores) leían en conjunto sus resultados, deduciendo que doblaban entre todos ellos, el número de concejales obtenidos por los partidos gubernamentales; además, individualmente, los dos partidos más fuertes eran los agrarios y los radicales; el país había hablado, quedaba demostrado el divorcio continuamente denunciado entre el Parlamento y la opinión nacional y la conclusión lógica era que el Gobierno debía presentar la dimisión.

Frente a esto los partidos de la coalición, la prensa adicta y el mismo Azaña hacían un balance bien distinto; por un lado distinguían entre las oposiciones republicanas y las no

republicanas; sumando aquellas a sus propios votos empezaban por concluir la sólida implantación de la República frente a sus detractores. Y en segundo lugar arguían que dado el carácter de estas elecciones, realizadas en feudos caciquiles y conservadores (y no dóciles a cualquier poder, como contraargumentaba la derecha), impedía por completo dar crédito a estas elecciones tanto como expresión de la voluntad nacional que como índice de ella. No solo eso, sino que de indicar algo era el avance de los partidos republicanos y especialmente de los izquierdistas en localidades en las que por la aplicación del art. 29 nunca había habido política disputada, sino caciquismo y relaciones personales: era un éxito que los partidos ministeriales hubieran conseguido en tales pueblos un tercio de los concejales (1).

Es necesario hacer un juicio equilibrado de lo que significaron estas elecciones, cuya importancia como causa mediata de la crisis política de junio es evidente. Primeramente vamos a comentar cuál ha sido la actitud de la bibliografía. La de carácter conservador ha hecho algo severamente criticable, que es repetir, sin argumentaciones y sin pruebas, las posiciones derechistas de abril de 1933: para ella el Gobierno resultó absolutamente derrotado, negándose a sacar las conclusiones políticas inherentes a tal derrota. Esta opinión exige

(1) Respecto a la opinión de Azaña, OC. IV, p. 501;

dos puntualizaciones, una de carácter histórico y otra de doctrina parlamentaria.

Veamos primero la fácil manera de resolver el primer problema de las elecciones por parte de estos autores ; O. Ruiz Manjón afirma: "Los resultados de estas elecciones su pusieron una clara derrota para la coalición gubernamental; los grupos antigubernamentales habían obtenido más del doble de concejales que los partidos representados en el Gobierno. Los radicales obtenían el grupo de concejales más numeroso en tre los partidos republicanos de oposición. Los agrarios alcan^zaban la mayor cifra entre las derechas no republicanas" (1).

Payne destaca la absoluta fiabilidad política de las zonas donde se realizó la elección, que "poseían un nivel de alfabetización comparativamente alto y se encontraban entre las más dignas de confianza de todo el país" (2), y considera el resultado como "muy perjudicial" para la mayoría (3).

Tussell coincide en que "Las elecciones municipales se celebraron y supusieron una victoria clara para las derechas, que en las provincias en que era mayor su raigambre y tradición casi dejaron sin representación a las izquierdas"(4).

(1) *El Partido...*, p.369.

(2) *vid. supra*, pag. 2.

(3) *La Revolución Española*, p.108.

(4) *Historia de ...*, p.223 (T.I.)

Sería interesante que el profesor Tussell indicara en qué provincias en concreto sucedió esto. "La interpretación de *El Debate* fue, por tanto, que se imponía la disolución de las Cortes".

Por supuesto otros autores, estos ya de una marcada parcialidad, coinciden con tales opiniones (Arrarás, Robinson).

La bibliografía más independiente como Jackson, Tuñón de Lara o Brenan, dan una valoración más equilibrada de estas elecciones, bien señalando lo negativas que fueron para el Gobierno políticamente, como consecuencia de la situación parlamentaria existente, pero no como derrota electoral (1), bien destacando lo poco que ayudaron a conocer el estado de la opinión (2).

En realidad, como ya hemos avanzado, desde el punto de vista electoral el resultado fue aceptable para el Gobierno. No era cierto, como sabemos, que todos los concejales de los pueblos afectados (antes de que fueran substituidos por comisiones gestoras) fuesen monárquicos, pues al analizar los resultados de 1931 vimos que las candidaturas antimonárquicas obtuvieron un número importante de concejales en los pueblos sin

(1) Por ejemplo Jackson, *La República...*, p. 430.

(2) Brenan, *El Laberinto...*, p. 248.

elección. Sin embargo no es menos cierto lo escrito por Azaña en su diario (1) en cuanto a lo poco real de la lucha política en estos pueblos; llega incluso a minimizar la importancia de los concejales elegidos ahora como republicanos puesto que en muchos casos serían las mismas personas que antes se titulaban monárquicas. Pero el hecho numérico cierto es que si la conjunción republicano socialista había obtenido menos de un 50% de estos concejales en 1931, dos años más tarde los partidos que integraban aquella coalición conseguían dos tercios de los concejales. Evidentemente ahora parte de la antigua conjunción estaba en la oposición, pero la conclusión inequívoca es entonces que los partidos gubernamentales no habían perdido posiciones sino que las habían mantenido, y probablemente mejorado, pues el retroceso de los antirrepublicanos (de más de un 50% a un 30%) no debieron beneficiar solo a radicales y conservadores (2).

Tampoco pueden sumarse en abril de 1933, con la facilidad con que se ha hecho, los votos de las oposiciones republicanas con los de las no republicanas. A pesar del continuo desliz hacia la derecha de los radicales, todavía no se podía pensar en una alianza entre ambos sectores: a ella se llegaría

(1) *Ibid.*, p. 501.

(2) Habría que conocer en detalle el reparto de concejales en 1931 para poder afirmar algo con mayor certeza. Una opinión coincidente con la expresada aquí es la de Madariaga, en su ensayo *España...*, p. 398.

en las elecciones de noviembre (1), tras dos crisis de gobierno y como consecuencia del sistema electoral. Aún así una cosa es una alianza electoral y otra una coalición gubernamental; esto no fue todavía posible ni tras la abrumadora victoria de rechista de noviembre. Así sí no podían sumarse sus votos, pues to que en estas elecciones habían ido en general por separado, menos se podía extraer conclusiones políticas que implicaban unas alianzas irreales tanto en las Cortes existentes como en unas nuevas.

Hay que evitar también, a la hora de analizar estas elecciones interpretar sus resultados como un aviso inequívoco de lo que iba a ocurrir en las legislativas de noviembre; en abril y en base a estas elecciones -susceptibles de interpretaciones diversas- los protagonistas no tenían por qué suponer que el cambio en la opinión pública -en unión de otros factores- iba a producir unos resultados como los de siete meses más tarde (2).

Pasamos con esto a las consecuencias políticas de las elecciones. Ya sabemos la exigencia de la derecha no republicana y de las oposiciones republicanas. Tussell admite que no era razonable que se pusiera fin a dos años de Gobierno aza

(1) E incluso entonces, como demuestra Ruiz Manjón, no fue una alianza generalizada sino en una minoría de provincias, por lo menos en la primera vuelta. *El Partido...*, p. 393.

(2) Prueba de lo que decimos lo constituyó la política electoral llevada a cabo por los socialistas en noviembre. Aunque para Azaña y Prieto entre otros, esta política fuera un obvio error, Largo y la dirección del PSOE estaban persuadidos de que iban a fortalecer sus posiciones aún yendo aislados.

nista mediante una decisión presidencial (1). Pero no es solo ese el problema. Políticamente es indudable que un resultado ambiguo, en un momento en que el Gobierno era duramente combatido, le desgastó más todavía. Pero ¿exigía esto en una correcta política parlamentaria una dimisión o una rectificación del Gobierno? Ahí es donde la posición de Azaña negándose a ello era absolutamente correcta. Las opiniones en contra de entonces (y de ahora) entraban dentro de la lucha política, intentando desbancar al adversario y cambiar la opinión pública, pero no se podía pretender que el adversario estuviese de acuerdo.

¿Había un divorcio entre el Gobierno y la opinión? Posiblemente; sería insignificante a juicio de la mayoría y enorme en la opinión de la oposición. Pero que un Gobierno deba dimitir por ser impopular -cosa siempre discutible-, o como consecuencia del resultado electoral parcial adverso, es insostenible. Y en base a ello Azaña tachaba de atrocidad el que se exigiera un cambio de política general. Tanto más cuando la popularidad de un Gobierno puede oscilar enormemente en un lapso de cinco años, como de hecho ya había sucedido con el de Azaña: del desgaste de la primavera del 32 como consecuencia de la oposición al Estatuto y a la Reforma Agraria se había pasado a la época, según todos los testimonios, de mayor popularidad de su Gobierno, en el otoño del mismo año tras la aprobación

(1)

vid. *Historia* ..., p. 222.

de ambas leyes con el impulso revitalizador que había supuesto la victoria contra los sediciosos de agosto. Para inmediatamente pasar, con el escándalo de Casasviejas y la política obstruccionista de la oposición a un progresivo deterioro de la mayoría y del Gobierno (1).

Para ver hasta qué punto, correspondía al Presidente de la República -ya que no a Azaña, Presidente del Gobierno- forzar un cambio de política en aquel momento, conviene realizar un sucinto análisis del sistema parlamentario establecido por la Constitución republicana. La Constitución de 1931 implantó un sistema de doble confianza necesario para la permanencia del Gobierno. Por un lado la confianza presidencial, puesto que el Presidente de la República podía "nombrar y separar libremente al Presidente del Gobierno" (art. 75). Y en segundo lugar la confianza parlamentaria, exigida tanto en el mismo artículo, al forzar al Presidente de la República a separar al Gobierno en caso de un voto de no confianza, como por el art. 64, que regulaba la moción de censura.

Ahora bien, es evidente, a la vista de una interpretación sistemática de la Constitución que no tenían ambas el

(1)

Piénsese en el ejemplo inglés, en el que, aunque naturalmente nadie considera impulsen a la oposición a solicitar nuevas elecciones generales, que repetidas derrotas en elecciones parciales, obliguen al Gobierno a dimitir o a disolver el Parlamento, incluso cuando cuente sólo con una precaria mayoría; queda fuera de la hipótesis el caso extremo de que la mayoría parlamentaria se pierda como consecuencia de la derrota en unas elecciones parciales, claro.

mismo valor, como no podía dejar de ser al faltarle al Presidente de la República una plena legitimación democrática directa -como es sabido era nombrado por los parlamentarios más un número igual de compromisarios elegidos-. En efecto, salvo una previa desautorización parlamentaria del Gobierno, el Presidente, por propia iniciativa, solo debía provocar una crisis -solicitando abrir consultas- ante una inequívoca manifestación del electorado, y aún así tan sólo en el caso de que considerase que la situación parlamentaria quedaba políticamente modificada.

Pero tal hipótesis sería infrecuente porque cualquier elección parcial rara vez proporcionaría un juicio contundente que exigiera un cambio de política.

Fuera de esa hipótesis, la estabilidad gubernamental debía depender tan sólo del juego parlamentario, o de lo contrario el sistema establecido por la Constitución no podía funcionar.

Y no podría funcionar porque cesar a un Gobierno que contase con mayoría parlamentaria, implicaría, salvo la incongruencia de volver a designar un Gobierno análogo -cometida por Alcalá Zamora en junio de 1933- bien variar de mayoría, lo cual frecuentemente sería imposible, bien disolver las Cortes.

En el primer caso, salvo que fuese realmente necesaria -y aquí la prudencia política del Presidente jugaría un papel esencial- la intervención presidencial debía evitarse al

máximo, so pena de arrogarse el Presidente un protagonismo que la Constitución no le otorgaba; y porque de repetir las intervenciones presidenciales para alterar la mayoría acabaría conduciendo forzosamente al Presidente a la segunda hipótesis, la disolución de la Cámara -como le ocurrió a Alcalá Zamora en la segunda legislatura republicana.

Y es precisamente en la limitación constitucional de la facultad presidencial de disolver las Cortes donde reside a nuestro juicio el argumento que justifica la interpretación que realizamos. Pues podría admitirse una frecuente intervención del Presidente -que haría derivar el sistema hacia un parlamentarismo de corte presidencialista- en caso de que la facultad de disolución no estuviese limitada. En tal caso sería posible que el Presidente se arrogase la facultad de juzgar, al menor síntoma político, electoral o de otra índole, la conveniencia de la permanencia de un gobierno o de una mayoría, y si resultaba imposible cualquier otra combinación ministerial, podría recurrir al electorado para que éste decidiese.

Sin embargo, esta posibilidad le estaba vedada, por lo que el centro político venía a residir en el Parlamento, y para que el Presidente se aventurase a una intervención sobre un Gobierno que contase con mayoría parlamentaria, arriesgándose a tener que desembocar en una disolución, debía estar absolutamente justificada. Hay que recordar que el Presidente sólo tenía derecho no condicionado a una disolución, puesto que la segunda disolución debía ser enjuiciada por las Cortes elegi-

das a continuación, pudiendo ocasionar la destitución del Presidente. Los constituyentes quisieron introducir esa segunda disolución como factor de flexibilidad, aunque involuntariamente desnaturalizaban algo el sistema constitucional, de naturaleza parlamentarista.

Creemos que las ambigüedades de la regulación en la Constitución del 31 de la figura del Presidente de la República no pueden superarse por la vía del reforzamiento de sus atribuciones, sino por la interpretación restrictiva de las mismas; la razón sería fundamentalmente la ya dicha de la limitación de la facultad de disolver el Parlamento.

No residiría entonces a nuestro juicio tal ambigüedad en que se le hiciera responsable de funciones para las que no se le otorgaban suficientes poderes, sino en que podía interpretarse que gozaba de más responsabilidades y atribuciones de las que en una recta interpretación de la Constitución en realidad tenía.

La Constitución, pese al aparente absolutismo del artículo 75, exigía un Presidente *que no hiciera política* y se encontró con un Presidente que interpretaba sus deberes constitucionales -sin duda de buena fe- en el sentido de que debía velar porque la política gubernamental se ajustase a lo que él interpretase como voluntad coyuntural de la nación.

Creemos por eso que constitucionalmente carece de valor la justificación de la doble disolución decretada por

Alcalá Zamora por el hecho de que en ambos casos hubo un cambio de mayoría parlamentaria. Es un argumento político que só lo tendría valor constitucional en el caso de que el Presidente de la República tuviese la misión de velar por la adecuación entre cuerpo electoral y Cortes, que es precisamente la interpretación que nos parece desafortunada (1).

No había pues lugar ni a una dimisión ni a una retirada de la confianza presidencial. Así lo entendió Azaña y también, Alcalá Zamora, según el testimonio de ambos. Sin embargo sus respectivas versiones de la ratificación de la confianza difieren considerablemente. Sobre cuál nos merece más creditibilidad es necesario recordar la diferencia entre un diario escrito día a día y unas memorias escritas años después, 7 en este caso, aún considerando la prodigiosa memoria de D. Niceto; años además sobre los que pesaba una lucha política apasionada entre ambos protagonistas (2).

Según Azaña, que escribe el día 30 de abril, una semana después de las elecciones y antes de presentarse a las Cortes el día 25, y por lo tanto antes de que se entablase el previsible debate político sobre el resultado de las elecciones,

(1) Sobre la interpretación de este punto de la Constitución, vid. Pérez Serrano, *La Constitución Española...*, p.255 y 266, que parece defender el punto de vista opuesto.

(2) Lo cual se hace patente en las memorias de Alcalá Zamora, que constituyen una justificación de su conducta y un ataque contra numerosos politicos republicanos, unas veces con razón y otras sin ella, pero mostrando una especial "predilección" por Manuel Azaña.

le planteó al Presidente si contaba con su confianza: si en virtud de sus atribuciones, consideraba que las elecciones de bían producir un cambio político era el momento de decírselo; que el Consejo era contrario a dimitir, pero que tenía a su disposición su cargo y que necesitaba saber si contaba con su confianza porque las oposiciones le acusarían de no plantearle la cuestión de confianza al Presidente. La respuesta de Alcalá Zamora fue que no se imponía un cambio de política; en todo ca so moderar el sentido izquierdista no agravando la ley de Con gregaciones; quedaban además por aprobar muchas otras leyes, como la del Tribunal de Garantías, la de Orden Público, Arrenda mientos, etc. (1).

Alcalá Zamora en cambio habla de la costumbre de Azaña de aparentar que se le confirmaba la confianza "sin arriesga rse a dimitir"; y afirma que al terminar el despacho ordinario, yéndose ya, de pie y en broma, le hizo una alusión a si por los resultados electorales pensaba llamar al Gobierno a su amigo Martínez de Velasco, y que él contenstó, en serio, que restaban varias leyes y que lo que se imponía era que iniciara una "política de conciliación nacional y republicana" (2).

Lo que narra Azaña sin embargo (y en el fondo también Alcalá Zamora), independientemente de si se hizo de pie o sentada

(1)
OC. IV, p. 502.

(2)
Memorias, p. 235.

dos y al acabar el despacho ordinario o antes (1), no es una conversación breve y accidental, sino una explícita solicitud de ratificación de confianza, ratificación que fue concedida.

Pero lo que más destaca y en definitiva lo que importa, es la peculiar concepción que Alcalá Zamora tenía de su prerrogativa de la confianza; parece desconocer que en cualquier sistema parlamentario durante todos y cada uno de los días en que un Gobierno existe, cuenta constitucionalmente con la confianza del Jefe del Estado; y si dicha confianza deja de existir, el Jefe del Estado debe hacérselo saber al Presidente del Gobierno, en caso de que éste no se lo plantee abiertamente. Por lo tanto, no se comprende qué quiere decir al afirmar que Azaña pretendía aparentar su confianza sin arriesgarse a dimitir; ¿es que sólo dimientiendo y recibiendo nuevo encargo de gobierno se obtiene la ratificación de confianza? Tal parece ser la idea de Alcalá Zamora, según éste y otros comportamientos (piénsese en la crisis inicial de diciembre del 31). Porque una de dos, o Azaña recabó, como él dice, la ratificación de confianza -que no equivale a dimisión- y Alcalá Zamora se la otorgó, o bien como este último afirma no le planteó la cuestión seriamente, en cuyo caso al no manifestarle D. Niceto que

(1) Azaña cuenta que tras presentarle a la firma el proyecto de la ley de Vagos, "de paso, hablaron de la situación" narrando a continuación la conversación aludida; pero lo que es indudable es que, según su testimonio, esa conversación fue bien explícita, llegando el Presidente a decirle que respecto a la confianza suya "podía decir, dónde y cuando quisiera, que el Gobierno tenía las seguridades más amplias respecto de ese particular". OC. IV, p. 502.

como consecuencia del resultado electoral necesitaba abrir consultas, le concedía por necesidad, una ratificación implícita. Si opinaba que ese paso hacia una política de conciliación nacional y republicana no lo debía o podía dar el Ministerio Azaña, así se lo debía haber manifestado, en caso de que Azaña, incorrectamente, no se lo hubiese planteado (1).

(1)

De acuerdo con esta interpretación, Azaña OC. II, p. 761.

C A P I T U L O - V

NUEVO GOBIERNO AZAÑA

DERROTA ELECTORAL Y FUSION DE LOS REPUBLICANOS DE IZQUIERDA

(JUNIO 1933 - ABRIL 1934)

1. JUNIO DE 1933: CRISIS Y NUEVO GOBIERNO AZAÑA

JUNIO DE 1933: CRISIS Y NUEVO GOBIERNO AZAÑA

En el Consejo de Ministros del 8 de junio se acordó un leve reajuste del Ministerio, consistente en desdoblar la cartera de Agricultura, Industria y Comercio en dos, una para Agricultura y otra para las dos restantes materias, y a la vez nombrar nuevo ministro de Hacienda ante la irreversible enfermedad de Carner. Al exponer el proyecto al Presidente de la República, éste manifestó su deseo de abrir consultas, provocando la inmediata dimisión de Azaña, quien correctamente interpretó que el deseo presidencial implicaba una falta de confianza. Así se llegaba al término de un Gobierno que había durado año y medio.

Los últimos seis meses habían sido de máxima presión sobre él. A partir de Casasviejas (enero de 1933) la oposición republicana encabezada por el Partido Radical, se había considerado con la suficiente justificación como para buscar un enfrentamiento frontal con el Gobierno, hasta el punto de intentar impedir el funcionamiento del Parlamento. Desde entonces los rumores, -extendidos en muchas ocasiones por los propios interesados en su cumplimiento- sobre crisis de Gobierno inminentes abundaron casi todas las semanas; la prensa gubernamental y antigubernamental de estos meses constituye un continuo entrecruzamiento de rumores y desmentidos de crisis, a veces a cargo del propio Gobierno por boca de alguno de sus ministros.

Según Alcalá Zamora, Azaña podía haber evitado la crisis procediendo a una reorganización meramente interna de

su Gabinete, pero él no podía aceptar que buscara una ratificación indirecta de la confianza presidencial (1).

Ante esta crisis las posturas de los diversos partidos estaban más clarificadas que en diciembre de 1931. Los integrantes de la mayoría gubernamental se encontraban irritados por la pasada actitud de las oposiciones y por el origen presidencial de la crisis; el resto de las fuerzas en plena oposición al Gobierno. Los socialistas y los radicales eran ya plenamente incompatibles, sin las ambigüedades que habían caracterizado la actitud de éstos en 1931.

Por eso mismo es difícil comprender las razones que impulsaron al Jefe del Estado a provocar la crisis si no estaba dispuesto a disolver las Constituyentes. Pues dada la aguda y reciente tensión entre mayorías y oposiciones era difícil una variación substancial de los frentes. Por ello y dado que la disolución no entraba en las intenciones de D. Niceto, adquiere verosimilitud la versión de los periódicos gubernamentales de que el objetivo mínimo de la crisis era eliminar a Azaña de la presidencia del Consejo (2).

Según los rumores que le habían llegado a Azaña, ya desde febrero era "poco estimado" en Palacio, aunque él no les hubiera dado crédito (3); lo que parece indudable es que el com

(1) Vemos aquí de nuevo la peculiar manera con que Alcalá Zamora entendía su prerrogativa. Alcalá Zamora, *Memorias*, p. 241.

(2) *El Liberal*, 10 y 14-6-33.

(3) Arrarás, *Memorias...*, p. 59.

portamiento efectivo y comprobado de Alcalá Zamora durante la tramitación de la crisis nos muestra hasta qué punto se estaba mostrando desacertada su elección para la máxima magistratura del Estado.

En las consultas, mientras los partidos de la anterior coalición gubernamental se mostraron partidarios de la continuación de un gobierno similar al anterior, las oposiciones se manifestaron por la disolución; la única excepción entre estas la constituían los federales, quienes habían participado en la obstrucción ya muy forzados y se encontraban ahora divididos en una tendencia colaboracionista en un hipotético Gobierno de concentración republicana o de carácter izquierdista (que equivalía a un Gobierno similar al anterior), y los adversarios decididos de la colaboración con los socialistas. Las personalidades individuales se dividieron: mientras por ejemplo Unamuno definía la crisis como de las Cortes, más que de Gobierno, Ortega y Sánchez Román defendían la continuación de las Constituyentes, con Gobiernos de amplia concentración (1).

Los encargos de formar gobierno fueron siguiendo, con alguna alteración, el orden de la fuerza numérica de las minorías. Se comenzó con Besteiro, con quien Alcalá Zamora pensaba cumplir formalmente con la necesidad de encargar el gobierno

(1) Sobre el desarrollo de la crisis en general, la prensa del día 9 y ss. y Arrarás, *Memorias...*, pags. 254-263.

no a la minoría socialista, la más numerosa. Eliminada esa alternativa por los propios socialistas -quienes no aceptaron que Besteiro les representase en una empresa a la que era personalmente opuesto- tuvo que transmitir el encargo a Prieto. Sin embargo, también se precavería poniéndole difíciles condiciones para la tarea. Tras Prieto, Marcelino Domingo recibió el encargo y fracasó al no poder cumplir tampoco la ampliación de la mayoría solicitada por el Presidente; la clave de esta ampliación se cifraba en la colaboración radical. Pero al negarse los socialistas, a la colaboración con los radicales -luego habría que ver si estos lo aceptarían a su vez-, cortaron el camino tanto a Prieto como a Marcelino Domingo. Tampoco este obtuvo el consentimiento de su partido para llamar a los radicales y no logró siquiera la ampliación más modesta de los federales.

Y así, el encargo volvió a Azaña. Este logró por lo menos la colaboración federal, consiguiendo siquiera en grado mínimo la ampliación de la coalición requerida por Alcalá Za-mora (1).

De todas formas y aunque Azaña había logrado una mínima ampliación de la mayoría que no habían conseguido Prieto ni Domingo, se añade el hecho de que no podía substituir un gobierno con la misma mayoría que el anterior, de no estar presidido por Azaña, pues de otra forma se evidenciaría que la cri-

(1)

El Sol, 10-6-33.

sis se había debido a la animadversión personal de Alcalá Zamora hacia Azaña, cosa que aquél, tan puntilloso para tales cuestiones no podía permitir. Por ello y bien en contra de su voluntad, tuvo que volver Azaña (1), cuyo encargo incluía la posibilidad de formar gobierno aún sin la colaboración federal, esto es, idéntico al anterior.

La Minoría Parlamentaria de Acción Republicana mantuvo numerosas reuniones conjuntas con el Consejo Nacional del partido, (en realidad se declararon en sesión permanente) para seguir el curso de la crisis, reuniones a las que Azaña asistiría en ocasiones, concediéndosele siempre un voto de confianza para resolver sobre la colaboración del partido y de su propia persona.

Ruiz Funes fue el que evacuó las consultas en nombre de Acción Republicana. Tras la primera de ellas, realizada el viernes 9 (el jueves se había reunido la minoría sin que hubieran dado nota de referencia), Ruiz Funes leyó a la prensa la siguiente nota:

"Me he mostrado partidario de la continuación de las actuales Cortes, cuya obra legislativa no está aún terminada y aguarda nuevas e interesantes aportaciones para acabar de perfilar el carácter izquierdista de la República. El señor presidente me ha expresado su coincidencia en cuanto al extremo de

(1)
Id. id.

que las actuales Cortes deben subsistir. Me ha preguntado cómo debía constituirse el nuevo Gobierno y yo le he expresado mi opinión de que debe formarse a base de las mismas fuerzas políticas que el dimisionario. A una nueva indicación suya respecto de si procedía ampliarlo con otras fuerzas, a condición de no prescindir de ninguna de las que estaban implicadas en el Gobierno anterior, he respondido que mi opinión, en principio, era favorable a que se restringiera el nuevo Gobierno a los grupos representados en el que ha dimitido; pero en la hipótesis de que se creyera oportuno ampliar la base política del Gobierno futuro, creía que no había inconveniente en extenderla a otros partidos de izquierda".

Tras la reunión a última hora del mismo día, la Minoría Parlamentaria y el Consejo Nacional entregaron a la prensa otra nota que decía:

"Se ha reunido el Consejo Nacional de Acción Republicana y la minoría parlamentaria del partido, cambiando impresiones sobre el desarrollo de la crisis y ratificándose en la posición expuesta hoy a S.E. por el Sr. Ruiz Funes favorable a una colaboración franca con un Gobierno de izquierdas de análoga base parlamentaria que el dimitido".

Una tercera nota fue dada tras la reunión en que Azaña dio cuenta del encargo recibido por Prieto y de la petición de éste solicitando la colaboración tanto de la minoría como de Azaña personalmente; lo primero no ofrecía obstáculos, y lo segundo, dados los términos en los que lo solicitó Prieto -en su

colaboración personal basaba que prosiguiese cumplimentando el encargo- tampoco se hizo Azaña de rogar. Dicha nota decía (1):

"Se han reunido el Consejo Nacional de Acción Republicana y la minoría parlamentaria. El Sr. Azaña dio cuenta del requerimiento de D. Indalecio Prieto para que formara parte del Gobierno, advirtiéndole que si no le prestaba su concurso personal en el ministerio de la Guerra daba por terminadas sus gestiones y declinaba el encargo recibido.

Después de una amplia deliberación se acordó un voto de confianza al Sr. Azaña para que resuelva sobre la colaboración solicitada".

Con la posterior solicitud de M. Domingo, la resolución de ambos organismos de Acción Republicana fue semejante, ofrecimiento de su cooperación y voto de confianza a Azaña para que resolviese en consecuencia.

El desenlace mostró que la crisis había resultado inútil. O mejor dicho había rendido una utilidad, la de mostrar el único tipo de Gobierno que era posible con las Cortes Constituyentes, dado el antagonismo a que se había llegado. Varias veces en su diario apunta Azaña lo que era su idea de lo que debía haber sido el curso político con dichas Cortes. Tras un

(1)

El Liberal, 11-6-33.

gobierno republicano socialista podría gobernar una coalición republicana con Lerroux, "administrando" las reformas ya implantadas legalmente, abandonando los socialistas el Gobierno en buenos términos con los republicanos y quedando como un partido de turno en la República (1). Sin embargo, la impaciencia de Lerroux y su partido por gobernar, que creemos que fue el determinante de una tan acentuada oscilación a la derecha y de que llegase a estas dispuesto a aceptar el poder proveniente de un golpe de Estado (el 10 de agosto), les había llevado a desencadenar una hostilidad tan feroz que se había hecho imposible una coalición entre los partidos republicanos, lo cual quedaría patente en la crisis de septiembre/octubre.

Entre otros ejemplos de que la actitud radical, más que debida a firmes convicciones ideológicas -aparte de que acertase en comprender que podía capitalizar el desencanto de numerosos sectores de centro, de las clases medias y de la burguesía-, procedían de su incoercible deseo de gobernar, se puede citar las promesas que hizo discretamente Lerroux cuando la discusión del Estatuto se encontraba atascada, colaborando en ello su partido, de que si recibía el poder aprobaría el Estatuto por decreto (2).

También lo prueba el que participase en toda la oposición al gobierno Azaña el sector de Martínez Barrio -o con

(1) Azaña, OC. IV, p. 644.

(2) Azaña, OC. IV, p. 429-30.

más propiedad el ala izquierda del partido radical- y de que él personalmente llevase el peso principal de la oposición en la campaña de obstrucción, ala que se separaría posteriormente al comprobar lo irreversible, tanto de la evolución derechista de Lerroux como del conjunto del partido. Igualmente, el hecho de que Lerroux tardase bastante en renunciar al uso del apelativo izquierdista para su partido es algo muy indicativo.

Es necesario también observar que si a partir de enero del 33 la oposición radical fue absoluta con el empleo de la obstrucción parlamentaria, y los rumores de crisis comenzaron a difundirse de manera sistemática, ya desde enero del 32, esto es, desde el mismo inicio del 2º gobierno Azaña, comenzó Lerroux a afirmar el desgaste del gobierno, la necesidad de la salida de los socialistas, y cada cierto tiempo, con ocasión de algún resonante discurso de oposición (de M. Alvarez, del propio Lerroux), se especulaba por las oposiciones con la inminente crisis. Esto es, no se dio tiempo de rodaje al Gobierno, sino que desde un comienzo se lanzó el líder radical a una labor de desgaste, aunque no se empleara a fondo hasta fines de 1932.

De ahí que Azaña, conocedor de la naturaleza de la oposición radical, afirmase en más de una ocasión que Lerroux actuaba en contra de su conveniencia. Pocas consecuencias hubiera tenido la táctica radical, si no se hubiera juntado con que Alcalá Zamora estuviese más compenetrado con la perspecti

va regia de hacer y deshacer gobiernos que con las casi representativas funciones que le otorgaba la Constitución republicana.

El nuevo Gabinete incluía cuatro nuevos ministros y prescindía de Carner, imposibilitado por su mortal enfermedad, así como de Giral. Los nuevos ministros eran Viñuales, miembro de Acción Republicana, el federal Franchy Roca, Francisco Barnés, radical socialista y Companys, de la Esquerra Catalana. Viñuales, a pesar de ser correligionario del Presidente iba a ser un rígido ministro de Hacienda, excesivamente centralista y a quien Azaña se vería forzado a aceptarle la dimisión a finales de agosto (1). Franchy Roca, principal líder del partido Federal, y que representaba la única ampliación de la mayoría gubernamental, había condicionado su colaboración a la no aplicación de la ley de Defensa de la República hasta que fuese abrogada y substituida por una ley de Orden Público.

Giral salía de Marina para permitir la entrada de Companys, representante de la minoría catalana y en particular de la Esquerra. El Ministerio quedaba así: Presidencia y Guerra, Azaña; Estado, De los Ríos; Justicia, Albornoz, cuya cartera sería provisionalmente acumulada por Casares cuando fue nombrado Presidente del Tribunal de Garantías a mediados de julio; Marina, Companys; Gobernación, Casares; Hacienda, Viñuales;

(1) Pi Sunyer, *La República...*, p. 132.

Instrucción Pública, Francisco Barnés; Trabajo, Largo Caballero; Agricultura, M. Domingo; Obras Públicas, Prieto e Industria y Comercio Franchy Roca.

La prensa republicana que apoyaba la coalición gubernamental comentó con acritud el origen y la innecesariedad de la crisis, mientras que *El Debate*, tras un alarmante editorial -significativamente titulado "Palabras de Serenidad" (1)- por la posibilidad de un Gobierno Prieto, reaccionó violentamente ante la solución final, calificándola ni más ni menos que de golpe de Estado; afirmaba *El Debate* que un poder, las Cortes -o su sector mayoritario- había sojuzgado al otro, el Presidencial. En esta postura de absoluta tergiversación de las reglas parlamentarias y constitucionales tan solo el vehemente Maura estaba de acuerdo con el periódico católico, siendo esta una de las pocas ocasiones en que *El Debate* alababa al jefe del partido Republicano Conservador.

Respecto a las críticas que al origen y tramitación de la crisis dirigieron prensa y partidos republicanos, hubo un editorial de *El Sol* ("Crisis de confianza. Una y no más", de 13-6-33) que iba a tener repercusiones de alto alcance. El editorial estaba al parecer redactado por Bello (2). Su contenido era una crítica severa al comportamiento del Jefe del Es

(1) *El Debate*, 13-6-33.

(2) Arrarás, *Memorias...*, p. 326 y 327; Alcalá Zamora, *Memorias*, p. 242.

tado por haber promovido una crisis a un Gobierno con mayoría en Cortes, para, tras buscar infructuosamente todas las posibles soluciones, haber tenido que volver a una combinación como la que ya existía. El resultado había sido el desprestigio del Jefe del Estado.

Probablemente debido a que insistentemente se había rumoreado que los editoriales de *El Sol* -de un ministerialismo y "azañismo" que el propio Azaña consideraba excesivo (1)- eran redactados por Azaña en persona (lo cual sabemos que no era cierto a través de sus Memorias, aparte sus públicos desmentidos), el caso es que Alcalá Zamora quedó tan persuadido de que el autor era su Presidente del Gobierno que no se lo perdonó nunca, hasta el punto de no recibirle más para despacho en su domicilio privado. Lo cual era un nuevo paso en el proceso de enemistad entre ambos hombres públicos. Alcalá Zamora no aceptó como cierto el que Bello fuera el autor, suponiendo que se había buscado un cabeza de turco.

(1)

Arrarás, *id. id.*

2. ELECCIONES PARA VOCALES DEL TRIBUNAL DE
GARANTIAS

A. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LAS ELECCIONES

DESARROLLO Y RESULTADOS DE LAS ELECCIONES

Al igual que en junio, la crisis de septiembre iba a ir precedida (y producida) por un resultado no satisfactorio en una prueba electoral. Se trataba ahora de la elección de vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales; los representantes de las regiones en el Tribunal, uno efectivo y otro suplente por cada región habían de ser elegidos por los concejales de los ayuntamientos de las mismas.

Respecto a la actitud ministerial ante estas elecciones tenemos el testimonio de dos miembros del Gobierno: el de M. Domingo y el del propio Azaña. Ambos coinciden en que el Gobierno no se preocupó del tema y dejó que los partidos gubernamentales concurrieran como quisieran sin ningún plan acordado desde arriba. En suma, respondiendo a la caracterización que Azaña hizo de las elecciones como no políticas se acordó una neutralidad completa. El planteamiento de Azaña, expuesto en el Parlamento en el debate político subsiguiente -y antes de las elecciones en declaraciones de los ministros- era que no siendo el Tribunal un órgano partidista, e independientemente de que cada sector político intentase hacer elegir a sus candidatos, no se debía plantear una batalla política en torno a la elección de sus miembros. Azaña intentó, según sus propias palabras "evitar que se le concediese un carácter de votación de confianza", y el error lo pagó caro; pero desde un punto gubernamental el error consistió, no tanto en intentar evitar la caracterización política de las elecciones -empresa siempre difí

cil en aquellas circunstancias-, sino por no haber forzado si multáneamente a los partidos a concertar una política de alianzas firmes. Y porque las consecuencias fueron, como veremos, muchísimo más graves que la derrota electoral y subsiguiente caída del Gobierno (1).

Los resultados de la prensa del día 5 son, como siempre en estos casos, parciales y provisionales; los definitivos los había de dar el propio TGC tras realizar el escrutinio definitivo. Conocer los resultados definitivos sería especialmente interesante pues nos proporcionaría el número de concejales de los diversos partidos o coaliciones en su caso. Los resultados que tenemos de la prensa son los siguientes:

Candidatos ministeriales:

Socialistas	7.611	14'6%
Rad.socialistas	2.750	
	542	6'3%
	<hr/> 3.292	
Acción Republic.	5.477	10'5%
Gallegos	2.021	3'9%
	<hr/>	<hr/>
Total....	18.401	35'4%
	<hr/>	<hr/>

(1)

Azaña, OC. IV, p.643 y II, p. 836; M. Domingo, *La experiencia...*, p.311.

Candidatos republicanos antiministeriales:

Radicales	14.495	
	543	
	<hr/>	
	15.038	28'9%
Liberaldemócratas	411	0'8%
Conservadores	1.194	2'3%
	<hr/>	<hr/>
Total.....	16.643	32'0%
	<hr/>	<hr/>

Derechas no republicanas:

Agrarios	13.194	25'4%
Nacionalistas	822	1'6%
Bloque derechas (Navarra)	1.348	2'6%
Nacionalistas vascos	1.145	2'2%
March	420	0'8%
	<hr/>	<hr/>
Total.....	16.929	32'6%
	<hr/>	
Total.....	51.973	100%
	<hr/>	<hr/>

Son datos que totalizan un 64'1% del total de concejales (1). La prensa antigubernamental volvió a presentar los

(1) Las cifras electorales dadas, en *El Sol*, 5-9-33; en ellas nos basamos más adelante para los resultados regionales, que son por lo tanto igualmente parciales. El porcentaje de concejales que citamos es el obtenido

resultados con dos únicos componentes: los 17.859 votos gubernamentales y los 33.029 de las oposiciones todas. Mientras no se realicen estudios detallados por regiones no se podrá tener una idea clara del alcance de los votos recibidos por cada partido en cada región. Globalmente es claro que eran un resultado desfavorable al Gobierno, pues ahora habían votado los concejales de toda España; esto es, los elegidos en abril y mayo de 1931, y en abril de 1933. Era una votación indirecta pero universal, pues habían participado todos los electores de segundo grado afectados, de los que el Gobierno solo contaba con una tercera parte, frente a la mayoría absoluta de que disponía en el Parlamento.

Respecto a las candidaturas que se habían presentado el 31 de agosto daba *El Sol* la noticia de las siguientes coaliciones gubernamentales acordadas:

Castilla la Vieja:

Vocal efectivo	Acción Republicana
Vocal suplente	Socialista

Valencia:

Vocal efectivo	Acción Republicana
Vocal suplente	Radical socialista

Murcia:

Vocal efectivo	Acción Republicana
Vocal suplente	Socialista

(1) cont. pág. anterior
 en comparación con el total de concejales del AEE, 1931, p.480. A radicales y radicales-socialistas les atribuimos por mitad los votos que obtuvieron en candidatura conjunta en Extremadura.

Asturias, Aragón, León:

Vocal efectivo	Radical socialista
Vocal suplente	Socialista

Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía:

Vocal efectivo	Socialista
Vocal suplente	Socialista

Baleares:

Vocal efectivo	Federal
Vocal suplente	Socialista

Galicia:

Vocal efectivo	ORGA
Vocal suplente	Socialista

No aclara la prensa cómo se llegó a este acuerdo, ni qué compromiso había de respetarlo; pero hemos podido constatar que desde luego no fue muy firme, pues sufrió numerosos cambios. En algunas hemos comprobado que se rompió el acuerdo, compitiendo varias candidaturas y en otras la candidatura oficial fue apoyada con displicencia.

Y es más que probable que circunstancias parecidas se dieran en casi todas las regiones, así como en los colegios electorales restringidos (Universidades, etc.), aunque en éstos, la situación del Gobierno hubiera sido en cualquier caso más difícil.

Veamos brevemente el desarrollo de las elecciones -en base a los datos parciales con que contamos- en las regiones donde se presentaba algún candidato de Acción Republicana, y a continuación la actitud del partido en las restantes regiones.

En Baleares la coalición gubernamental presentó frente a radicales y frente a March (que se presentaba candidato) a Vicente Tejada, de Acción Republicana -en vez de un candidato federal- para vocal propietario, y a un socialista, Juan Monserrat como suplente. Consiguieron 169 y 158 votos respectivamente frente a los 420 y 453 de la candidatura de March, y por encima de los 139 y 125 de los candidatos radicales. Aquí fue el poder del dinero el triunfador.

En Castilla la Vieja, el candidato para vocal efectivo, Matías Peñalba, diputado de Acción Republicana, fue derrotado por el de Acción Popular. Recibió 3.504 votos frente a los 7.234 de su contrincante Jesús García. El suplente, radical-socialista (no socialista como se acordó en un principio) fue derrotado con un margen similar por el candidato de Acción Popular. Entró también en liza una candidatura radical que obtuvo para ambos puestos unos 1.400 votos.

En Galicia, según el editorial de *El País* de Pontevedra de 2-9-33, Orga y socialistas se apresuraron, sin intentar coalición alguna, a nombrar candidatos propios; posteriormente se tomó el acuerdo general antes citado y los socialistas, en su cumplimiento, se avinieron a retirar su candidato a

vocal suplente pero la Orga rechazó el acuerdo. La consecuencia fue que concurrieron por separados todos y cada uno de los partidos de la coalición gubernamental. Acción Republicana de Pontevedra, como forma simbólica de demostrar su fuerza provincial tomó el acuerdo de presentar candidato para vocal suplente a uno de sus miembros.

Acción Republicana se quejó de la actitud de los socialistas de haber presentado una candidatura propia sin haber intentado previamente una coalición con el resto de las fuerzas y especialmente con Acción Republicana y radical socialistas; y más cuando al llegarse a un acuerdo nacional, no pudo aplicarse en Galicia por incumplirlo la Orga. Acción Republicana insinuaba que dada la escasa fuerza socialista en la región más le hubiera valido haber intentado una coalición con el P.Radical Socialista y acción Republicana, pues éstos si la hubieran respetado.

Como hemos dicho Acción Republicana de Pontevedra presentó a D. Telmo Bernárdez Santomé para vocal suplente, al tiempo que dejaban a sus concejales en libertad para votar al vocal efectivo, aunque recomendando votar al más afín, lo que en este caso y dado el antagonismo con Orga favorecía a los socialistas (1). Esto no dejaba de ser un acto meramente simbólico, puesto que con los votos de una provincia no se podía obte

(1)
El País, 28-8-33.

ner el triunfo en ningún caso. La organización provincial de Acción Republicana consideró sin embargo satisfecho su objetivo al conseguir su candidatura una lucida votación.

En León, Ramón Lafarga de Acción Republicana con 1.302 votos, acompañado por el socialista Rafael de Castro como suplente, que recibió 1.201 votos, fue derrotado por los agrarios que alcanzaron los 2.500 votos; por debajo quedaron una candidatura republicano-conservadora con una votación muy cercana a la de Acción Republicana y otra radical con muy pocos votos. En León la coalición gubernamental se mantuvo unida.

En Murcia triunfó la candidatura de Acción Republicana, no sin cierta irregularidad. En efecto el titular electo fue Arturo Cortés (de la organización de Albacete), con 452 votos, y el suplente un radical, Mario Espreáfico. Pero lo curioso fue que el candidato de Acción Republicana triunfó frente a otro también de Acción Republicana, Mariano Tejero, impuesto por la dirección en Madrid; éste iba acompañado por un socialista, Enrique Antón Coca como suplente, obteniendo aquél 1.234 votos y el socialista 93. Esta candidatura era la apoyada oficialmente por los tres partidos de la coalición, Acción Republicana, radicales socialistas y socialistas, pero la organización local de Acción Republicana consideró la designación de M. Tejero una injerencia injustificada, manteniendo el candidato por ellos designado, que en definitiva triunfó. M. Tejero, en carta escrita a *El Liberal* (7-9-33) aclaró que había aceptado su de-

signación, hecha por los comités nacionales de los tres parti
dos y sus representaciones parlamentarias, por disciplina, consci
ciente del desastre al que iba, sin que él hubiera tenido más
participación que esa; él era un republicano conocido en Arag
gón, pero absolutamente desconocido en Murcia. Para mayor divis
sión de los votos de los partidos del Gobierno también luchó
otro candidato a vocal titular, José María Anlló, que logró
203 votos, que desconocemos si era socialista o radical social
lista.

En Navarra una candidatura gubernamental semejante,
de Acción Republicana y socialistas (Natalio Cayuela, propiet
tario y Gregorio Ayala, suplente) fue abultadamente derrotada
por los tradicionalistas (bloque de derechas): cerca de 300 vot
tos aquellos y sobre los 1.300 éstos. Con menos votos todavía
quedaron los radicales.

En Valencia, donde el acuerdo reproducido por *El Sol*
incluía un candidato de Acción Republicana como candidato a tit
tular, acompañado por un suplente radical socialista, desconoc
cemos si efectivamente se llegó a presentar esta candidatura.
En *El Sol* del día 5 se cita la candidatura radical autonomist
ta como única, y nada se dice de votos recibidos para ambos
puestos por otras candidaturas distintas a la radical-autonom
mista, la cual, en cualquier caso, venció abrumadoramente.

En el País Vasco, iba como suplente un candidato de
Acción Republicana, Ernesto Ercoreca, que recibió 354 votos ,
acompañando a un titular socialista que alcanzó 349 votos. El

cho es que fueron derrotados por los nacionalistas (sobre los 1.100 votos) y por encima de ellos quedaron también los tradi
cionalistas (sobre los 700 votos).

Según las fuentes de prensa consultadas, en ninguna otra región se presentaban candidatos de Acción Republicana, aunque no se puede descartar que en alguna provincia hubiera alguna candidatura aislada y simbólica al estilo de la de Pontevedra (1).

Respecto a la postura de Acción Republicana en las regiones donde la candidatura del Gobierno no incluía ningún miembro suyo, suponemos que en general sería de apoyo a la mis
ma pero no cabe descartar actitudes ambiguas. Así tenemos cons
tancia de que en Extremadura, donde la candidatura era integra
mente socialista, la consigna fue de abstención; y según los socialistas, así como en algunos sitios como por ejemplo Plasencia, los seguidores de Acción Republicana votaron a sus can
didatos, en muchos otros lugares, cuando no se abstuvieron vo
taron la extraña amalgama de radicales y radical socialistas.

Conociendo la situación de la organización de Cáceres
de Acción Republicana nos parece bastante verosímil la de
nuncia socialista; en un manifiesto de la organización provin

(1)

Los datos de Acción Republicana de Pontevedra no aparecieron en la prensa nacional del día 5, según *El País* de aquella capital, por ocultación del gobernador civil para evitar que Casares se enterara del fracaso de la Orga en la provincia. *El País*, 8-9-33.

cial de Acción Republicana de dicha provincia se llegó a decir "que no desconoce la realidad de los hechos y sabe que en muchos pueblos de la provincia será imposible el apoyo a los candidatos socialistas por verdadera incompatibilidad de hecho a causa de la violencia de la lucha entablada y de la manifiesta enemistad entre ambos bandos" (1). La misma sospecha de apoyo a los candidatos radicales tenían los socialistas respecto de Acción Republicana y los demás republicanos de izquierda en sus otros feudos, Castilla la Nueva y Andalucía.

(1)
El Socialista, 5 y 6-9-33.

B. CONSECUENCIAS POLITICAS DE LAS ELECCIONES

CONSECUENCIAS POLITICAS DE LAS ELECCIONES

Era difícil saber hasta qué punto esta votación hecha por los concejales se correspondía con un hipotético voto de los electores; en cualquier caso, respecto al voto de abril los partidos gubernamentales mejoraban algo su porcentaje (de un 30'9% a un 35'4%)(1) pero algo más lo hacían los republicanos de oposición (de un 26'5% a un 32%) entre quienes los radicales se llevaban de nuevo la parte del león; también mejoraban algo las derechas (de un 30'3% a un 32'6%). Substancialmente los resultados, así vistos, eran semejantes, con la diferencia fundamental de que ahora eran todos los municipios los que habían votado (excepto los catalanes cuyos representantes eran elegidos por su Parlamento): era pues una votación de todo el país, no como en abril, aunque por otro lado era una votación indirecta.

Para las oposiciones, el resultado podía resumirse en el titular del editorial de *El Debate* del día 5: "El país ha hablado otra vez"; y en contra del Gobierno, claro. Se alegraba la derrota gubernamental frente a los radicales y especialmente frente a las derechas, a la CEDA. Añadía que los electores han sido los concejales que, salvo los elegidos en el último abril y los progubernamentales, habían sido destituidos y substituidos por comisiones gestoras en muchos casos. Reconocía por otra parte que el número de sufragios recibidos era superior al de concejales de la CEDA, de lo cual el editorialista sacaba un nuevo argumento, pues o bien los propios conceja-

(1) La comparación es meramente indicativa, pues aparte de que los datos de septiembre son menos seguros que los que expusimos en las elecciones de abril, mientras entonces eran porcentajes de concejales *elegidos* ahora lo son de concejales *electores*.

les republicanos le habían votado o bien su adscripción política no era sino un medio de cubrirse frente a presiones gubernamentales. Por supuesto, quitaba toda legitimidad a las argumentaciones que resaltaban el carácter conservador del voto indirecto, etc. En resumen por la dignidad del poder, solicitaba la dimisión inmediata del Gobierno.

A similar conclusión llegaba *El Sol*: la constatación de un hecho, la discrepancia entre un espectral Parlamento y las comunidades básicas, los ayuntamientos, exigían una rectificación clara de la política; en otro comentario político el periódico precisaba más su pensamiento: rectificación fundamentalmente del marchamo socialista de la política gubernamental.

Esta era la postura actual de *El Sol*; combatir duramente a los socialistas apuntando hacia un Gobierno de concentración republicana. Aunque la forma de propugnar tal política, por los feroces ataques a la situación ministerial en el poder, tenía como efecto más bien ahondar la división entre los republicanos y emponzoñar la relación de los socialistas con la República, lo cual era contraproducente con la intención de propugnar un gobierno republicano de concentración.

En el campo gubernamental la polémica se planteaba en otro punto; tanto Azaña en sus Memorias como M. Domingo reconocen la derrota gubernamental. Ambos consideran como causa fundamental la discordia interna entre los partidos de la coalición. En palabras de Azaña, conforme se descendía de nivel,

la coalición era más inestable: lo que en el Gobierno y en las Cortes era inexpugnable, en los pueblos se traducía frecuentemente en lucha abierta. Eso junto a la inhibición gubernamental, la sobrevaloración de cada partido de sus propias fuerzas, y una minusvaloración de las consecuencias políticas que pudiera tener una derrota, explicaban la desunión y el desorden en el que fueron los partidos gubernamentales a estas elecciones (1).

Los resultados estaban por lo demás aproximadamente de acuerdo con la idea que tenía Azaña del estado de la opinión nacional; idea que transcribió en su diario tanto con ocasión de las municipales de abril como tras estas elecciones; entonces afirmaba que si hubiera elecciones legislativas el resultado sería una presencia reforzada de la derecha no republicana. Y ahora al comentar esta elección y prever un resultado de las elecciones parciales para los treinta escaños vacantes en aquel momento, opinaba que la mitad de ellos podría ir para la coalición y la mayoría de los restantes para los republicanos de oposición, y muy pocos para las derechas hostiles al régimen. Partiendo por supuesto de la base de una eficaz unión electoral de los partidos gubernamentales. Lo cual, si bien quizás con una cierta subvaloración de la CEDA, no parece estar lejos de la realidad al considerar el resultado de esta votación que

(1)

Azaña, OC. IV, p. 644.

dio 5 vocales al Gobierno (1), 4 a los radicales y 6 a las de rechas, habiendo ido en gran medida desorganizados los partidos de la coalición, y habiendo producido algunas victorias por apretado margen (la de los agrarios sobre los socialistas en Andalucía, por ejemplo).

Volviendo a la polémica de los partidos de la coali ción, en opinión de Azaña, el efecto más nocivo de estas elec ciones fue envenenar sus relaciones; si ya había hostilidad en la base de los respectivos partidos, como consecuencia de con flictos locales de carácter social y político, ahora vinieron los reproches recriminándose los unos a los otros no haber cum plido los pactos. Lo cual sería probablemente cierto por parte de todos ellos.

Así si la derrota tuvo trascendencia fue porque su causa fundamental, la desunión de la coalición, se vio agra da por los mismos resultados; sólo un estudio detallado de es tas elecciones podría esclarecer la exacta dimensión de esta derrota gubernamental, pero no parece una mera excusa de emer gencia el achacar a esa desunión parte fundamental de la derro ta.

Los editoriales de los días 5 y 6 de *El Socialista* son un amargo memorial de quejas: la coalición entre radicales

(1)

Uno de ellos, el catalán, elegido por su Parlamento, en el que dominaba la Esquerra.

y radical-socialistas en Extremadura, que publicó un manifiesto durísimo contra los socialistas, y la abstención en la misma región de Acción Republicana; indisciplina de voto en Castilla la Nueva; parecida situación en Andalucía donde los candidatos socialistas contendieron contra los restantes grupos republicanos, etc.

Dos puntos habría que destacar respecto a los socialistas; por un lado que ellos ya eran antes de las elecciones de abril poco proclives a las alianzas electorales con los republicanos: ello llevó incluso a que De los Ríos tuviera el propósito, no sabemos si cumplido, al discutir y apoyar el Gobierno la ley Electoral que daba una enorme prima a la mayoría, de advertir a Zaña que en modo alguno estaba asegurada por parte socialista la coalición electoral en caso de disolución de las Cortes (1). Por lo tanto estas quejas contradicen el hipotético acierto de aquella actitud, que deshauciaba por completo el valor de una alianza con los republicanos y que se basaba, especialmente, en la mente de Largo Caballero, en la convicción de poder triunfar aún yendo aislados; sin embargo, ahora que como consecuencia de la desunión electoral los socialistas solo triunfaban en Extremadura (perdiendo -por pocos votos- dos de sus bastiones, Castilla la Nueva y Andalucía), venían los reproches.

(1)

Sobre la discusión en la Comisión ejecutiva socialista sobre la ley Electoral, vid. Vidarte, *Las Cortes...*, p. 620.

En segundo lugar y en contraposición a lo anterior, probablemente los socialistas tenían razón al achacar a los republicanos la responsabilidad fundamental de la indisciplina local a la hora de votar; para ello nos basamos en la mayor disciplina partidista del PSOE (demostrada por ejemplo en Galicia frente a la actitud de Orga), y en la comprobada actitud republicana en Extremadura.

Sin embargo la responsabilidad principal recae por igual sobre unos y otros y consistía en no haber hecho todo lo posible por llegar a una alianza firme. Por parte del PSOE, el cual desde hacía varios meses era poco propicio a la coalición electoral, pudo haber también un cierto intento de considerar estas elecciones como una prueba de su concurrencia aislada a las urnas.

Las consecuencias, nos cuenta Azaña (1), llegaron incluso al Consejo de Ministros; Largo Caballero afirmó solemnemente que la coalición electoral estaba rota. Esto para Azaña significaba mucho más: la ruptura del Gobierno. A la vista las elecciones municipales de noviembre, decidido a convocar las parciales a Cortes en el mismo septiembre, y estimando imprescindible la coalición republicano socialista para ir a ellas con perspectivas de éxito, la declaración de Largo implicaba la dimisión del Gobierno pues Azaña no se prestaba a presidir unas elecciones perdidas de antemano, como lo estaban si concurrían separados republicanos de izquierda y socialistas. Si la

(1) Azaña, OC. IV, p. 645.

crisis no surgió espontáneamente de Azaña (probablemente sólo si Largo se hubiera retractado, se hubiera evitado), fue porque D. Niceto se adelantó.

En esta crisis influyó sin duda la poco cordial relación entre Azaña y Alcalá Zamora. Este afirma que Azaña llegó a discutir con él la mejor forma de ir a la crisis tras la derrota electoral; pero que luego con su escuálida votación de confianza en Cortes y cediendo a su ambición de poder cambió de opinión. Desdichadamente las memorias de Azaña correspondientes a esta época están en los cuadernos sustraídos durante la guerra civil y todavía no restituídos. Pero en sus recuerdos escritos años después afirmó su intención de no ir como Presidente a unas elecciones en tales circunstancias. Probablemente Azaña, a pesar de la votación en las Cortes, no había abandonado su idea de dimitir (como muy tarde en noviembre, antes de las municipales), pero desearía antes intentar recomponer la rota solidaridad entre republicanos y socialistas. Una más franca relación entre ambos presidentes hubiera quizás puesto las cosas en claro (1).

La elección de los vocales correspondientes a colegios restringidos (Universidades, Colegios de abogados) empeoró el resultado para el Gobierno. Menos importancia tenía esto por ser instituciones que de antemano se sabían más conser

(1)

La versión de D. Niceto en *Memorias*, p. 243.

vadoras (aunque en la época de la Dictadura de Primo de Rivera los sectores más progresistas hubieran logrado, lógicamente, un apoyo generalizado contra la situación), y porque se realizaron ya dimitido el Gobierno Azaña.

3. CRISIS GUBERNAMENTAL DE SEPTIEMBRE :

CAIDA DE AZAÑA

CRISIS GUBERNAMENTAL DE SEPTIEMBRE: CAIDA DE AZAÑA

El caso es que Azaña tras conseguir la que sería su última votación de confianza en las Cortes, el 7 de septiembre hizo una larga exposición de la situación política en Consejo de ministros presidido por Alcalá Zamora y puso el cargo a disposición del Presidente con objeto de obtener una explícita ratificación de la confianza. La mejor forma de conocer el desarrollo de dicho Consejo es la extensiva nota dada por Azaña a la prensa que creemos indispensable reproducir y que decía así (1):

"En el Consejo de ministros celebrado el jueves en Palacio, el jefe del Gobierno dijo ante el señor presidente de la República lo siguiente:

- El Gobierno ha examinado los antecedentes y circunstancias de la elección de vocales del Tribunal de Garantías y estima, en conclusión, que no pueden ni admitirse ni el hecho de haber padecido una derrota ni la tesis de que aquéllas elecciones pongan cada vez en tela de juicio la permanencia de un Ministerio. El Gobierno funda su parecer en la naturaleza y los fines del Tribunal, y por ello se abstuvo de intervenir en las elecciones.

No obstante, el Gobierno siente un quebranto de su autoridad y necesita un robustecimiento total para seguir en funciones. Las Cortes le han ratificado su confianza frente a la importante oposición de algunos grupos republicanos. Constii

(1) *El Sol*, 9-9-33.

tucionalmente el Gobierno necesita ahora un acto demostrativo de la confianza del Jefe del Estado, y para que lo realice, si lo tiene a bien, o en otro caso abra las consultas, el presidente del Consejo pone su cargo a la disposición del señor presidente de la República.

Su excelencia manifestó que antes de resolver sobre la cuestión planteada desearía conocer la respuesta de los ministros a estas tres preguntas:

Primera. ¿Estiman que están quebrantados el Gobierno y la mayoría en que se apoya?

Segunda. ¿La continuación de este Gobierno facilita o impide la coalición electoral republicana, cuya conveniencia defendió en su último discurso el Jefe del Gobierno?

Tercera. ¿Creen que es éste el Gobierno que más conviene para afrontar las elecciones municipales próximas?

El Gobierno considera que en tanto subsista como tal, forma una unidad política solidaria y debe hablar por él exclusivamente el jefe del mismo. Los ministros individualmente sólo pueden opinar sobre los temas políticos planteados por S.E., una vez abiertas las consultas y requeridos individualmente para ello.

El Gobierno estima que la primera de las preguntas formuladas por S.E. en cuanto recaba un juicio sobre si la mayoría y el propio Gobierno se hayan quebrantados, sólo puede

ser contestada en los términos en que lo hiciera ayer el jefe del Gobierno en el Consejo, esto es, que la polémica nacional y la interpretación dada por algunos sectores de la Cámara a hechos recientes suscita en el Gobierno la convicción de que se le ha quebrantado; más discernir el valor de los actos y hechos que ha producido esa apreciación del Gobierno es atribución peculiar y privativa del jefe del Estado. En cuanto a la mayoría, no obstante haber sido sometida a las pruebas más duras que la historia parlamentaria de España conoce, no ha dejado de demostrar su eficacia.

La segunda pregunta de S.E. sólo puede ser contestada cuando todos los partidos, los implicados en el Ministerio y los que no lo están, pero admiten la Constitución, digan si aceptan o no esa coalición postulada.

En cuanto a la tercera pregunta, envuelve una serie de cuestiones que es imposible dilucidar, porque hay en ella un término de referencia contenido en el "más", que sólo puede esclarecerse sometiendo a un análisis irrealizable las hipótesis que la realidad política brinde; será más conveniente o menos conveniente este Gobierno, según sean los términos de la alternativa.

Es, pues, S.E. el señor presidente de la República quien en vista de su superior juicio sobre lo que reclaman en esta hora los intereses del régimen, y ejerciendo la función constitucional que le compete habrá de apreciar lo que procede.

Al conocer las anteriores manifestaciones, el señor presidente de la República dijo que él se inclinaba a que continuara el Gobierno actual para un cometido circunstancial que en el orden parlamentario y gubernativo abarcara la aprobación de la ley de Arrendamientos rústicos, la ratificación o no del Convenio con el Uruguay, la totalidad de las disposiciones necesarias para sustituir la enseñanza que corría a cargo de las Congregaciones religiosas y la valoración de los servicios traspasados a la Generalidad de Cataluña.

El Gobierno estimó, y así hubo de declararlo el presidente del Consejo, que la solución del problema político debía ser urgente y definitiva.

En vista de ello, el señor presidente de la República anunció su propósito de abrir inmediatamente las consultas, y el jefe del Gobierno notificó oficialmente la crisis al presidente de las Cortes, al efecto de la obligada suspensión de sesiones".

Indudablemente, las preguntas formuladas por el Jefe del Estado pretendían revestir de carácter objetivo la segunda crisis de origen presidencial que se producía en pocos meses. Las consultas se abrieron inmediatamente y la tramitación de la crisis fue larga y dificultosa como era ya habitual con D. Niceto. Las posiciones de las fuerzas políticas fueron lógicamente muy similares a las mantenidas en junio. Quizás un mayor número de consultados se manifestaron partidarios de la disolución, o lo hicieran con mayor rotundidad, aunque tampoco

era una actitud generalizada. La solución tenía que ser sin embargo diferente, llegándose así al gobierno Lerroux.

Por parte de Acción Republicana fue de nuevo Ruiz Funes el encargado de evacuar las consultas en el Palacio Nacional. La manera de proceder del partido fue también análoga, mediante reuniones conjuntas del Consejo Nacional y la Mayoría Parlamentaria. Acción Republicana recomendó la formación de un gabinete de concentración republicana de izquierdas; ante las preguntas de los reporteros, Ruiz Funes aclaró que por tales reputaba también a los socialistas y a los radicales, y que había abogado por un gobierno republicano-socialista (1).

Como presidente dimisionario Azaña fue llamado de nuevo a Palacio donde a la salida dio una nota que le había entregado Alcalá Zamora, en la que se indicaba la intención de dar un encargo de gobierno con una significación distinta al anterior con la finalidad de obtener la concordia republicana (2).

No es necesario que describamos aquí extensamente el desarrollo de la resolución de la crisis, estudiada por J. Tomás Villarroja (3); fue una de las maneras "tipo" de resol-

(1) *El Liberal*, 9-11-33.

(2) *El Liberal*, 10-9-33.

(3) *La formación de Gobiernos ...* El desarrollo de la crisis, prensa del día 8 y siguientes; Azaña, OC.II, p.843 y ss.; Vidarte, *Las Cortes...*p.658.

verlas que se dieron en la II República, según el análisis hecho por dicho autor, por lo menos en la primera parte de la crisis. Su especificidad consistió en que Lerroux pretendió formar un Gobierno al margen de los partidos, incluyendo miembros de éstos pero en cuanto personalidades, no como tales miembros de los partidos. La reacción de las organizaciones fue airada, retirando las ofertas de colaboración prometidas. Fue necesaria una doble rectificación, lograda a través de la intervención del Jefe del Estado.

En una conferencia con el Presidente dimisionario éste le explicó las razones de la negativa de los partidos de izquierda a colaborar con el proyectado Gobierno Lerroux. Tras dicha conversación, Alcalá Zamora tuvo una nueva reunión con Lerroux, quien transigió en solicitar la colaboración a los partidos, única forma por otra parte de que el Gobierno consistiera en una concentración republicana, como exigía el encargo presidencial; por su parte los partidos republicanos de izquierda no regatearon ya su colaboración puesto que de no prosperar el Gobierno Lerroux sería inevitable la disolución (1).

(3) cont. pág. anterior

La prensa derechista, y como tal hay que considerar en estos momentos a *El Sol*, se refería al temor a la disolución como la razón determinante del cambio de opinión de los partidos republicanos de izquierda. Afirmaba que solo ante la amenaza esgrimida por el Jefe del Estado habían renunciado a "una maniobra como la de junio" para conservar el poder. Sin duda fue un factor importante lógicamente en la decisión de dichos partidos y reconocido por ellos, pero no el único, como lo prueba el que Acción Republicana retirase su colaboración después de haberla ofrecido; si Lerroux no hubiese pretendido desconocer a los partidos, esto probablemente no hubiera sucedido.

(1)

El Sol, 12-9-33, p. 2.

Mientras que los radical socialistas en su primer impulso se negaron a colaborar con Lerroux, Acción Republicana en la reunión que su minoría mantuvo el día 10, acordó ofrecer su colaboración, consecuente con su posición repetidamente afirmada de no ser obstáculo a la unidad republicana.

Sin embargo, conforme se fue conociendo el procedimiento que Lerroux estaba utilizando para la formación de Gobierno, y en contra de lo que según Azaña había acordado con él, junto con el hecho de la negativa radical socialista y la no invitación a los socialistas determinaron que en una nueva reunión tenida el mismo día, Acción Republicana retirase su colaboración. La nota dada a la prensa por Ruiz Funes explicaba claramente los motivos de la decisión:

"En la reunión celebrada esta mañana por el Consejo Nacional y la minoría de Acción Republicana el Sr. Azaña dio cuenta de la visita que le había hecho el Sr. Lerroux, quien solicitó la colaboración del partido para un Gobierno de concentración republicana, en el cual estuvieran además representados los partidos de izquierda que integraban el Gobierno dimisionario. En un rápido cambio de impresiones sobre la obra a realizar por el futuro Gabinete, a preguntas del Sr. Azaña precisó el señor Lerroux que persistiría en la aplicación leal del Estatuto de Cataluña y en la política militar que viene realizando la República desde su instauración. El Sr. Lerroux ofrecería una cartera a una personalidad del partido.

El Sr. Azaña expresó su conformidad personal con dicho

cha orientación, a reserva de lo que resolviera en definitiva su partido.

Este, compartiendo la opinión expuesta por el Sr. Azaña, acordó colaborar en el Gobierno de concentración de partidos republicanos que se proyectaba, aplazando comunicar este acuerdo al señor Lerroux hasta ver si era posible lograr una conformidad de los grupos afines sobre un programa mínimo de Gobierno parlamentario de izquierdas.

Posteriormente se supo que el jefe radical, antes de conocer la actitud favorable de Acción Republicana había ofrecido una cartera al Sr. Viñuales, y por otra parte, que los grupos afines, unos no habían aceptado el ofrecimiento de colaboración y otros no habían sido invitados directamente a prestarla.

En vista de ello, Acción Republicana ha estimado que la colaboración que estaba dispuesta a prestar a un Gobierno de concentración con representaciones auténticas de los grupos parlamentarios no podía ofrecerla a un Gabinete compuesto por un solo partido y por personalidades sin la representación política de los grupos a que pertenecen; lo que de hecho es negar el principio de concentración de partidos defendido como base de concordia entre republicanos antes de la crisis y durante su tramitación".

Por último, el 11 de septiembre y tras las incidencias antes señaladas, la minoría (1) y Consejo Nacional de Ac-

(1) *El Sol*, 12-9-33, p. 8.

ción Republicana acuerdan de nuevo colaborar en el Gobierno Lerroux, decisión que Ruiz Funes comunicó a aquél en su domicilio, entregando al tiempo una nueva nota con las condiciones de la colaboración que se prestaba:

"Mantenemos en primer lugar la conveniencia de la colaboración socialista, no excluida de una concentración de partidos republicanos de izquierda en la nota de Su Excelencia el Presidente de la República, entregada por el Sr. Azaña a la Prensa.

Si no es posible esta colaboración, nos mostramos partidarios de cooperar en un Gobierno donde estén representados los partidos republicanos de izquierda, condicionando la colaboración a las siguientes bases: funcionamiento normal del Parlamento, mantenimiento de la política militar iniciada al instaurarse la República, política laica y social, leyes agrarias, cumplimiento y ejecución del Estatuto de Cataluña y exigencia de responsabilidades".

El representante elegido por Lerroux sería curiosamente Sánchez Albornoz, a la sazón de viaje en Buenos Aires y sin haberle consultado ni pedido su asentimiento. Lo daría al día siguiente telegráficamente, tras hablar con Azaña y saber la conformidad del partido (1).

(1)

El Sol, 13-9-33.

En realidad, la crisis de septiembre no pasaría de ser una crisis tan inútil como la de junio. No ya en su origen presidencial como aquella, sino también en su resolución, a pesar de ser ambas opuestas. La razón estribaba en la actitud de Lerroux. Este había estado declarando durante más de dos años que no gobernaría con las Cortes Constituyentes. Y ahora se le daba precisamente el encargo de gobernar con el mismo Parlamento cuya representatividad había estado impugnando con el único fundamento de su discrepancia con la mayoría en el poder, y aliado a los mismos partidos que hasta la víspera habían sido sus peores enemigos. ¿Había modificado su actitud al aceptar el encargo? En realidad no lo había modificado como lo demostraría al presentar su Gobierno a las Cortes. Como es sabido, Lerroux postergó hasta el 2 de octubre dicha presentación del Gobierno.

Indudablemente se podría considerar un error dicha tardanza de haber tenido verdaderas intenciones de gobernar, pues habiéndose llegado al acuerdo de concentración con no pocos esfuerzos, esos veinte días de retraso en conseguir la contianza parlamentaria posibilitaban todo tipo de maniobras y de deterioro del nonnato Gobierno. Como dijera un editorial de *El Liberal*, la concentración no la deseaban en el fondo ni los radicales ni los republicanos de izquierda (17-9-33). Habiéndose llegado a ella por mutua transacción y conveniencia -actuando de catalizador Alcalá Zamora, verdadero factor de la solución-, si realmente se la quería utilizar hubiera convenido echar cuan

to antes a rodar el nuevo Gobierno.

En efecto, como era de temer durante el mes de sep
tiembre se produjeron dos tomas de posturas de las organizacioo
nes madrileñas de Acción Republicana y de los radical socialiss
tas, que desgastaban al Gobierno antes de su presentación a
las Cortes y que mostraban el estado de ánimo de las bases de
dichos partidos contrarias a cualquier entendimiento o benevou
lencia con los radicales (1).

Pero sin duda lo que indicó a las claras que Lerroux
seguía firme en sus intenciones de conseguir a todo trance la
disolución de Cortes fue su discurso de presentación ante las
mismas.

En efecto, el discurso, acusando de nuevo a las Corr
tes de estar divorciadas de la opinión, con severas críticas
a la obra de los anteriores Gobiernos (de los cuales figuraban
representantes en su propio Gobierno), era todo menos una petii
ción de confianza a los sectores a los que debía estar dirigi-
da. No creemos que Lerroux, a pesar de lo que afirma en sus Mem
orias (2), se engañase sobre la respuesta que había de recibir
su discurso.

(1)

En este sentido, Azaña, OC. II, p. 843.

(2)

Lerroux habla de "traición" "deslealtad" "cinismo" etc. Op. cit.p.158.
Lerroux afirma, sin duda por error, que se presentó a las Cortes el
8 de septiembre.

Pues es indudable que si tales representantes estaban allí era con unas determinadas condiciones, o mejor dicho, supuesta una determinada orientación del Gobierno, como lo demuestran las notas y referencias que con ocasión de la formación del mismo dieron a la publicidad, y que nosotros en lo referido a Acción Republicana hemos reproducido. También el encargo presidencial estaba hecho en unos términos con los que no era muy compatible la declaración ministerial. Se puede decir que tras la crisis de septiembre, Lerroux volvió a sus posturas previas, originando a su vez la vuelta a sus puntos de partida de los partidos de la antigua coalición. ¿Con qué sentido hizo esto Lerroux? A nuestro juicio con el objetivo, ya indicado, de provocar la disolución de Cortes; y su error fue no contar con el artículo 75 de la Constitución, según el cual el Presidente debía separar necesariamente a los ministros en caso de negación explícita de la confianza; o haber considerado quizás que no iba a ser de aplicación para el supuesto presente y que se le encargaría de formar nuevo Gobierno esta vez con decreto de disolución (1).

(1)

La interpretación de este artículo fue muy discutida, sobre todo en su relación con el 64: desde la interpretación mantenida por los socialistas de que recaída sobre el gobierno una votación de no confianza ninguno de sus componentes podía participar del inmediato gabinete, hasta la de considerar imprescindible, para que dicho artículo tuviese efectos el que la votación se hiciese con los requisitos exigidos por el art. 64, y de considerar que la separación forzosa solo afectaba al presidente. Alcalá Zamora opinaba que tal como ocurrió la votación de desconfianza, sin aplicar los requisitos de una moción de censura, no quedaba obligado a excluir en el próximo gobierno ni siquiera al Presidente; si de hecho lo hizo, al nombrar a Martínez Barrio, fue por consideraciones de orden político, Alcalá Zamora, *Memorias*, p. 246.

El hecho es que Azaña, contestando de la única forma que podía tras el discurso de Lerroux afirmó que tras el discurso del Presidente del Gobierno y salvo una explicación suficiente se vería obligado a apoyar la proposición socialista, que negaba la confianza de la Cámara al Gobierno que ante ellas se presentaba.

Caído el Gobierno, tras el duro enfrentamiento personal entre Azaña y Lerroux en la famosa sesión del 3 de octubre, y después de las de nuevo prolijas consultas quedó constituido un Gobierno bajo la presidencia de Martínez Barrio y con el concurso de los restantes partidos republicanos con el objeto de presidir las nuevas elecciones generales. Los socialistas quedaban fuera de este comité electoral por propio deseo al no encontrar una fórmula coherente de explicar su pertenencia a un Gabinete en el que se encontraban miembros del anterior, tras haber sostenido una interpretación rígida del consabido artículo 75.

Previamente habían fracasado Sánchez Román, Pedregal y González Posada, habiendo desarrollado también Marañón ciertas gestiones por encargo de Alcalá Zamora, aunque sin intención de presidir el Gobierno. Todos ellos habían fracasado ante la negativa radical a sentarse en el mismo gobierno con los socialistas; a este veto le seguía la negativa de los radical socialistas independientes (1) a colaborar en el Gobierno.

(1) El partido radical socialistas, se había escindido en su reciente Asamblea en los radical socialistas ortodoxos, acaudillados por Gordón Ordás, de tendencia centrista y que contaban con mayoría en los órganos del partido y los radical socialistas independientes de Marcelino Domingo, mayoritarios en la Minoría Parlamentaria.

no si no lo hacían los socialistas. Pues el encargo presidencial era de constituir un Gobierno de amplia concentración republicana, incluyendo si era posible a los socialistas, que presidiese las elecciones generales.

Tuvo que ser un radical, M. Barrio, quien lograra levantar el irreductible veto de Lerroux a los socialistas, para lo que hizo falta una sorprendente entrevista que hicieron a Lerroux, Martínez Barrio, M. Domingo y Azaña (1).

Sin embargo, una vez levantado el veto fueron los propios socialistas quienes renunciaron, dada la interpretación que hasta ese mismo momento habían realizado del art. 75 de la Constitución. Azaña no parece dudar de esta razón como la única determinante de la renuncia socialista; parece sin embargo dudoso que por el simple hecho de que a Prieto le resultase difícil hallar una redacción adecuada para la nota que había de explicar la colaboración socialista, se renunciase a formar parte del nuevo Gobierno. Tal como cuentan Vidarte y Azaña (2),

(1)

Lerroux había declarado que sin embargo para no constituir un obstáculo en la resolución de la crisis apoyaría desde fuera un Gobierno que contase con la participación socialista, al objeto de realizar las elecciones.

Sobre la visita al domicilio de Lerroux, vid. Lerroux, *La pequeña...* p. 163 y ss.; Azaña OC. IV. p. 646.

(2)

Azaña, *id. id.*; Vidarte, *Las Cortes...*, p. 670.

el momento en que logrado el acuerdo, Prieto intentó sin éxito la redacción de la nota y la facilidad con que renunciaran él y Largo a integrar el Gobierno, no puede por menos de pensarse que los socialistas aprovecharon la ocasión para no comprometerse en el nuevo Gobierno, pudiendo mantener así la tesis de la liquidación de sus compromisos con los republicanos (1).

La posición de Acción Republicana en esta nueva crisis, tanto en la consulta evacuada por Ruiz Funes como representante de la minoría como en la de Azaña como expresidente del Consejo, fue la de recomendar la formación de un Gobierno de concentración republicana o republicano socialista para gobernar con las Cortes Constituyentes, y en su defecto, si se iba a una disolución, constituir un Gobierno de amplia concentración, con participación de todos los partidos que hubiesen aceptado la Constitución, con objeto de llevar a cabo las elecciones. De todas formas, que sepamos, Acción Republicana no hizo cuestión de que participasen los socialistas, como lo demuestra una nota en la que se afirmaba que el partido había dado toda clase de facilidades sin reservas a los señores Sánchez

(1)

En propagandas y discursos posteriores, los socialistas proclamaron que habían sido ignominiosamente expulsados del Gobierno de la República, como una justificación de dicha "liquidación de compromisos", lo cual si en sentido genérico podría considerarse cierto, dada la feroz e injusta campaña que contra su participación en el Gobierno habían desencadenado ciertos republicanos -y por supuesto las derechas no republicanas-, era falso en lo que se refiere a su no participación material en el Gabinete Martínez Barrio, como Azaña señala en varias ocasiones

Román, Pedregal y Marañón, y sabemos que por ejemplo Pedregal había intentado un Gobierno tan sólo de republicanos, aunque en buenas relaciones con los socialistas (1).

(1) cont. pág. anterior

en su diario; por lo demás en el referido sentido genérico también se había "expulsado" a los partidos republicanos de izquierda.

(1)
El Liberal, 7-10-33, p. 2.

4. CUARTA ASAMBLEA NACIONAL DE ACCION REPUBLICANA

CUARTA ASAMBLEA NACIONAL DE ACCION REPUBLICANA

Si toda la vida política del mes de septiembre y octubre estuvo absorbida por las sucesivas crisis y la tensa situación, también diversos partidos tuvieron que enfrentarse a crisis internas más o menos abiertas, o por lo menos a defi
niciones claras de su posición política y de sus relaciones con el resto de las fuerzas políticas. Ya hemos aludido a la definitiva escisión que sufrió el heterogéneo partido radical socialista. Si bien las diferencias internas de Acción Republi
cana no habían alcanzado en ningún momento un antagonismo si-
milar, eran de naturaleza semejante, entre un ala prosocialista
y otra que consideraba perjudicial para el partido una alianza
tan prolongada con los socialistas y que se manifestaba parti
daría de alianzas con los republicanos de derechas. Pero so-
bre todo la diferencia fundamental con la situación radical so-
cialista es que en Acción Republicana no se habían materializa
do dichas tendencias en corrientes orgánicas, muy posiblemente
a causa de que la autoridad de Azaña sobre todo el partido;
el que Azaña mantuviera unas posiciones muy definidas, impedía
que se materializase orgánicamente alguna tendencia con una bande
ra sensiblemente diferente. Vemos así que ni un Rico, un Sán-
chez Albornoz, u organizaciones provinciales como la de Cáce-
res por la derecha, ni por ejemplo la organización de Madrid
o las de Juventudes por la izquierda, significaron más que las
naturales diferencias de criterio existentes en cualquier orga-
nización política. Y la asamblea nacional de octubre se iba a
saldar sin ningún fraccionamiento del partido, a pesar de que

dichas diferencias de criterio se encontraban, con razón de los últimos acontecimientos y ante las próximas elecciones, en su momento más acentuado.

En la reunión del Consejo Nacional con la Minoría Parlamentaria del 6 de septiembre es la primera vez que volve mos a tener noticias de la aplazada Asamblea Nacional. Según la referencia que dio Ruiz Funes a la salida se había tratado de la organización de la Asamblea, de los temas a discutir y se habían repartido las ponencias; la Asamblea estaba prevista para los días 15, 16 y 17 de octubre (1).

De nuevo en la reunión del 14 de septiembre se reun ió el Consejo Nacional en los locales del partido para tratar sobre cuestiones organizativas y de propaganda. En unas palabras que dirigió a los afiliados presentes, Azaña les prometió que ahora, libre de las responsabilidades de Gobierno se preocuparía de mejorar la organización del partido. Desde luego, como veremos al tratar a continuación el desarrollo de la asam blea, no le vendría mal al partido la experiencia organizativa del ex-presidente del Consejo (2).

Sobre el retraso de la Asamblea había habido un in tercambio de notas entre *El Sol* y el partido durante el mes de

(1) *El Sol*, 7-9-33.

(2) *El Liberal*, 15-9-33.

agosto, dado que en su nueva orientación política, el periódico liberal se complacía en airear las posibles dificultades internas de los partidos de la mayoría.

El 10 de agosto había insertado una nota en la que aludía a un supuesto malestar entre los diputados de Acción Republicana por los continuos aplazamientos de la Asamblea Nacional. La causa sería que en ella se habían de discutir las condiciones para que Acción Republicana participase -o continuase, hay que entender- en el Gobierno, y que las conclusiones podrían poner en dificultades a Azaña, a quien se atribuía la responsabilidad del retraso. Se añadía que las conclusiones que podrían imponerse serían tendentes a un acuerdo con radicales y socialistas para una acción conjunta en las próximas elecciones, lo cual no es muy congruente con las posiciones respectivas de ambos partidos en aquel momento, ni se ve por qué había de oponerse Azaña.

Al día siguiente, *El Sol*, rebatiendo el desmentido de la minoría insistía en que el descontento era real, que se había programado hacerla en Pamplona y que se había rectificado el acuerdo, y que si la excusa que se daba era el calor, el verdadero motivo era político.

Que debía haber deseo e impaciencia por celebrar una Asamblea ya varias veces aplazada parece probable, y en eso debía tener razón el articulista de *El Sol*. Las expectativas que se achacaban a la Asamblea, a la vista del desarrollo de la misma cuando tuvo lugar en octubre, y el que la responsabilidad del aplazamiento fuera de Azaña por temor ante los resultados

parece en cambio sumamente improbable.

Por fin el 13 de octubre se reunió efectivamente el Congreso de Acción Republicana (1).

Los datos organizativos que tenemos sobre esta asam
blea nos dan cuenta del avance hecho en la organización del partido. Asistieron 43 organizaciones provinciales y 268 delegados (uno por cada 500 afiliados) que representaban a 134.000 afiliados. Aún concediendo que como suele suceder estos datos estuviesen estimados por arriba no cabe duda de que el partido había crecido de manera considerable. En la memoria de secretaria, Gaspar hablaría de 192 agrupaciones y 130.000 afiliados, sin contar los de algunas agrupaciones no incluidas todavía en su cómputo.

No sabemos qué entendería agrupación pues es una ci
fra demasiado baja para referirse a las agrupaciones locales. Estas, según se mencionó en la discusión y exámen de actas, se elevaban a unas 2.000, que parece una cifra aceptable e implica
ría una media de 46-47 organizaciones locales por provincia.

Como en las anteriores Asambleas del partido se comenzó con la presentación de actas, que con algunas discusiones en algún caso, se acabaron aceptando todas. También fue admiti
da una delegación de afiliados a Acción Republicana residentes

(1) Sobre el desarrollo de la Asamblea, *El Sol* y *El Liberal*, 14 y 16-10-33.

en México. Se eligieron cuatro mesas de discusión que se turnarían en la dirección de los debates (1). Respecto al sistema de votación, cada delegación provincial votaba en sentido único por medio de uno de sus componentes, y contaba con un número de votos proporcional a su peso numérico.

Se eligió asimismo una comisión a la que se sometió el estado de cuentas para que dictaminase ante la Asamblea, y que resultó compuesta por Escribano (Madrid), Felicísimo de Castro (Alicante), Brugués (Orense), Romero (Segovia) y Ampuria (Toledo). El estado de cuentas sería aprobado al ser presentado a la Asamblea al final de la sesión de tarde.

La Memoria de secretaría, redactada y defendida por el secretario general V. Gaspar provocó una fuerte discusión en la que salieron a la luz las deficiencias organizativas del partido a la vez que se emitieron fuertes críticas a la gestión del Consejo Nacional.

Antes de su lectura y discusión, Amós Salvador, vicepresidente del partido dirigió unas breves palabras en las

(1)

Las cuatro mesas tenían la siguiente composición: 1^a, Pres. E. Serrano Rosales (Jaén); vicepres. F. Urabayen (Toledo); secret. Manuela Pérez Días (Murcia) y vocales R. Bengaray (Navarra) y M. Benavides (Alicante); 2^a (por el mismo orden de cargos) Mariano Tejero (Zaragoza), A. Casco (Málaga), S. Brugués (Orense), Concha Alfaya (Segovia), y R. Escribano (Madrid); 3^a, C. Prieto Carrasco (Salamanca), M. Canales (Santander), J. Tubiós (Córdoba), S. Escobedo (Asturias) y Julio Romero (Zaragoza); 4^a, Gil Baños (Valladolid), G. Ridaura (Alicante), A. R. Machín (Badajoz), A. Viana (Pontevedra) y N. García Alvaro (Madrid).

que resaltó el hecho de que el haber participado en un Gobierno de coalición implicaba no haber podido realizar el programa del partido, por las necesarias transacciones hechas con los restantes partidos gubernamentales (1). Indicó también que estaban muy avanzados los trabajos para sacar un periódico afín al partido, vieja aspiración de Acción Republicana.

Tras la lectura de la Memoria de secretaría, las críticas fundamentales que los congresistas dirigieron a la gestión organizativa del Consejo Nacional y de la secretaría fueron las siguientes:

- No haber celebrado la Asamblea en enero como era preceptivo.
- Escaso crecimiento del partido.
- Deficiencias en las tareas propagandísticas.
- No haber proporcionado a las organizaciones provinciales a su debido tiempo la Memoria y las ponencias infringiendo el reglamento.
- Escasa asistencia prestada a las organizaciones provinciales.
- Que la voz del partido la hubiese llevado la minoría parlamentaria, no el Consejo Nacional.

(1)

Desconocemos en qué momento pasó Amós Salvador a ser vicepresidente del partido, pues en septiembre de 1931 (última vez que se renovó el Consejo Nacional) fue Giral el elegido. Probablemente sería a consecuencia del nombramiento de Giral como ministro de Marina en octubre de 1931, por lo que suponemos que no tardaría mucho en producirse la substitución. Suponemos que sería una decisión del Consejo Nacional.

La más repetida fue la que atañía a la deficiente propaganda, que había ocasionado una escasa divulgación del ideario del partido y había coartado su crecimiento.

Defendieron la gestión del Consejo Nacional, Serrano Batanero, Ruiz Funes y Vicente Gaspar. El primero justificó al Consejo Nacional asegurando que no se habían podido atender más requerimientos por exceso de trabajo; que el hecho de que los diputados tuvieran que estar preferentemente en contacto con sus propias provincias había impedido una más estrecha colaboración entre la Minoría y las organizaciones. También un asambleista de Navarra defendió la posibilidad del Consejo Nacional en atender las solicitudes planteadas.

Ruiz Funes defendió a la Mayoría Parlamentaria alegando su buena voluntad en toda su gestión, explicando también las tareas respectivas de Mayoría Parlamentaria y Consejo Nacional, en las cuales no había habido colisión ninguna. Y Vicente Gaspar defendió con mayor extensión la gestión del Consejo Nacional. La escasa tradición del partido, organizado como tal en 1930 (hecho que produjo la separación de afiliados que militaban en otros partidos), y su pequeña fuerza inicial, el hecho de que las figuras más destacadas desempeñaran diversos cargos y tareas de gobierno, había dificultado sobremanera las tareas de propaganda. Alegó además que la cifra de afiliados era consoladora. Afirmó, al igual que Ruiz Funes, que las relaciones entre Mayoría Parlamentaria y Consejo Nacional habían sido correctas. Rebatió asimismo una propuesta del delegado por Madrid, Pérez Urría, de que fuese el partido quien deci-

diese las personas que habían de ocupar los altos cargos, haciendo ver que tales personas habían de ser de la confianza del que los nombraba.

Hubo a continuación un turno de intervenciones en el que Vilanova, de Orense, presentó una moción de censura contra el Consejo Nacional y especialmente contra su secretaria, mandato que traía de su organización provincial, pero que acabó retirando tras algunas intervenciones instándole a ello , incluso de algunos delegados que habían criticado la gestión del Consejo Nacional.

Por fin y por aclamación se aprobó la Memoria, suponemos que, como Ballvé (de Barcelona) había propuesto, con las oportunas correcciones y modificaciones. Es de notar que a lo largo de las discusiones hubo varias alusiones a la necesidad de no extremar las intervenciones y de procurar mantener la unidad y evitar escisiones. Es indudable que latía en Acción Republicana una solidaridad partidaria no excesivamente frecuente en los partidos de su ideología y base social. Habría que compararlo por ejemplo con los fraccionamientos de los partidos Federal, Radical o Radical-Socialista, a lo largo de toda la República, mientras perduraron como tales, pues todos ellos dejaron de existir de una forma u otra a lo largo de los seis años escasos de paz republicana.

El último día (15, lunes), tras la terminación de la discusión sobre los Estatutos, que fueron reformados y cuyo análisis dejamos para el capítulo en que nos ocupamos de

la estructura del partido, se discutieron varios puntos organizativos sobre las Juventudes que también discutiremos entonces. Las Juventudes reivindicaban una estructura paralela y autónoma, llegándose a una solución intermedia con Estatutos autónomos y participación de las Juventudes en los diversos niveles de dirección del partido.

Se acordó asimismo que las organizaciones de las Repúblicas Hispanoamericanas pudieran formar parte del partido nacional.

La importante ponencia política se discutió en la sesión de noche del 13 y en alguna de las sesiones del 14 (1).

Como puntos destacados de la ponencia podemos señalar:

Materia económica y social:

- Más justa distribución de la renta y riqueza nacionales.
- Reforma agraria: lo ya realizado era la base para iniciar una transformación profunda.
- Intervención estatal de la distribución y del cambio, de mayor o menor intensidad, según "lo defectuoso y perjudicial de la situación del sector para los intereses por los que el Estado está llamado a velar"; intervención en forma de simple control, de estímulo a la gestión directa; necesidad de una economía mixta.

(1) Vid. íntegra en Ap. I, 1 a.

- Política comercial tendente a romper las restricciones nacionalistas imperantes en la actualidad en la mayor parte de los países.

Cuestiones Políticas:

- Propugnar la implantación de Estatutos regionales, a partir de criterios políticos y sobre una suficiente base económica.
- Propugnar la fusión con Acción Republicana de los partidos regionales, desarrollando éstos en su región su propia política y secundando la de Acción Republicana en el ámbito nacional; el apoyo al Estatuto catalán probaba que Acción Republicana es auténtica y lealmente autonomista.
- Propugnar la fusión de los partidos republicanos de izquierda: aspiración a un solo partido republicano de izquierdas en toda España que sea un instrumento de gobierno eficaz y disciplinado
- Estatuto de funcionarios y reforma de la Administración, haciéndola eficaz y servidora leal del Estado republicano; rígida disciplina por medio de sanciones para evitar rebeldías por acción u omisión contra el Estado republicano.
- Colaboración con los partidos que coincidan con planteamientos políticos, sociales y morales, rechazando las colaboraciones que se basen en uno solo de tales aspectos.

- Reprobación de la difamación como arma política, utilizada profusamente por los enemigos de la República, y necesidad de su represión.
- "No puede haber libertad para los enemigos de la libertad"; "absoluta necesidad de evitar por todos los medios que lo que fue una dictadura his-triónica se reproduzca en forma de una dictadura cruel y sanguinaria".

A continuación habló Ruiz Funes en un discurso que gustó mucho y en especial al sector juvenil y radical del par-tido (1); en él insistió en los anteriores puntos de vista ex-presados en la ponencia, por lo que nos limitamos a resaltar aquellos en los que añade algo:

- Preponderancia para el partido de los problemas políticos sobre los de tipo económico; Acción Republicana no es un partido de clase, pero tiene la necesidad de conocer y resolver los problemas sociales.
- Crítica de la divergencia en algunos partidos en-tre sus programas y sus conductas, por el grave confusionismo y peligro ocasionado a la Repúbli-ca con ello.
- Imposibilidad de federarse con partidos de dere-chas.
- Acción Republicana no ha desarrollado una políti-ca militar, sino una política civil en torno al problema militar.

Tras la intervención de Ruiz Funes (escuchado y aplaudido por Azaña) habló Escribano, el batallador militante madrileño quien en unión de Ruiz Rey, presidente de la Juventud, presentó una proposición que reproducimos a continuación y en la que puede fácilmente observarse que significa una acentuación de los rasgos más izquierdistas y radicales:

"Que se afirme (y aún acentúe) por la asamblea el carácter profundamente izquierdista de nuestro partido.

Que se declare que Acción Republicana no está representada en el Gobierno nada más que a los efectos de garantía de la sinceridad electoral.

Que bajo ningún pretexto pueda Acción Republicana formar alianzas electorales con otros partidos que con aquéllos que estuvieron implicados en el último Gobierno Azaña, pero nunca con aquellas fuerzas políticas que significaron su ruda oposición a aquel Gobierno. Esta regla sólo podrá tener una excepción: la de que la necesidad aconseje a alguna provincia la unión de todas las fuerzas republicanas y socialistas para contrarrestar el auge de los enemigos del régimen; pero lo que en modo alguno puede admitirse, por ser de una manifiesta inmoralidad política, es que pensando más en el número de diputados que en la pureza del partido, vayamos en algunas provincias a la lucha coaligados con partidos adversarios de nuestra obra de gobierno para luchar contra los que fueron nuestros colaboradores en la misma.

(1) pág. anterior
En *Jar* del 21-10-33 se alababa por ejemplo el discurso de Ruiz Funes.

Exacto cumplimiento de todas las leyes votadas por las Constituyentes.

Mantenimiento de la política militar iniciada por Acción Republicana.

Aumento eficaz y progresivo del impuesto sobre la renta.

Procurar la anulación de los monopolios.

Aplicación estricta de las leyes laicas.

Implantación efectiva de la Reforma agraria, imprimiéndola un ritmo acelerado.

Restauración en toda su eficacia de la ley de Términos municipales, por entender que es un dique contra el caciquismo.

Impuesto pro cultura.

Organización de la asistencia social".

Ruiz Rey insistió en la necesidad de explicitar los partidos con los que se podría coaligar Acción Republicana con fines electorales y aquellos con los que no debería hacerse ; Ballvé por su parte hizo unas observaciones sobre la dificultad del PCAR de lograr la inteligencia con otros grupos izquierdistas. Tras la correspondiente discusión y siguiendo una propuesta de Ruiz Rey se acabó nombrando una comisión para que aunara las diversas propuestas (ponencia, proposición de Ruiz

Rey e indicaciones de Ballvé) integrada por Ruiz Funes, Ballvé, Ruiz Rey y Escribano.

El 14 prosiguió la discusión de la ponencia que fue finalmente aprobada sin que sepamos el sentido de las modificaciones introducidas. Sin embargo y en lo que se refiere al importante punto de las posibles alianzas electorales se dejó explícitamente en libertad a las organizaciones provinciales para su política electoral, en contra de lo propuesto por la enmienda de Ruiz Rey y Escribano que pretendía excluir a los radicales e incluir tan solo a los socialistas, radical socialistas independientes, federales, Orga y Esquerra como aliados. Sobre este punto insistió Ruiz Rey y fue rebatido por Ruiz Funes alegando las diferentes circunstancias provinciales; este pragmatismo será criticado fuertemente en la revista *Jar* de 21-10-33.

Las delegaciones solían adoptar cuando contaban con diputados, posiciones políticas semejantes a las suyas, según afirmaba la revista juvenil (1), y es un dato de interés a la hora de juzgar la importancia de los parlamentarios en el interior del partido. Parece apuntar a que los diputados por su propio puesto se convertían en las figuras más determinantes de las orientaciones políticas de su respectiva organización provincial, sin olvidar que en muchos casos contaban con antiguo arraigo en la provincia.

(1)

Jar, id. pags. 4 y 5.

Tras el escrutinio de la votación para elegir el Consejo Nacional, a última hora del lunes 15, todavía el grupo de Madrid, presentó una moción política de interés pidiendo que tras la realización de las elecciones se retirase del Gobierno el ministro del partido Sánchez Albornoz; a propuesta de otro delegado se acordó un "No ha lugar a deliberar" por considerarla extemporánea, con el voto en contra de la delegación madrileña.

El resto de las ponencias ideológicas fueron discutidas el día 15. Se aprobaron ponencias sobre Transportes, defendida por Velao y elaborada por éste y Diamante; sobre Seguros Sociales, y sobre política Financiera leída y elaborada por Gabriel Franco. Desafortunadamente y sin duda por tener un menor interés político, las referencias de la prensa nada incluyeron sobre el contenido y sobre las discusiones que motivaron.

El Congreso finalizó con la elección del Consejo Nacional, cuyo escrutinio fue interrumpido para que Azaña pronunciase su discurso a la hora prevista. Tras los apoteósicos aplausos al líder del partido -que fue recibido con una ovación que duró quince minutos- se procedió a escrutar las papeletas. Este fue el Consejo elegido:

Presidente:	Manuel Azaña	275 votos
Vicepresidente:	Mariano Ruiz Funes	270 "
Secretario:	Manuel Alvarez Ugena	185 "

Vocales:

M. Martínez Risco	272	votos
Arturo Cortés	269	"
A. Velao Oñate	269	"
Carlos Esplá	259	"
Leonardo Gorrochategui	251	"
Honorato de Castro	225	"
Valentín Alvarez	206	"
Claudio Sánchez Albornoz	204	"
Julio Diamante	201	"
José Estruch	201	"
José Sánchez Covisa	195	"
José Giral	190	"
Ramón Bengaray	174	"
Enrique Rodríguez Mata	165	"
Francisco Carreras	162	"
Manuel Andrés Casáus	148	"
José Royo Gómez	133	"
Amós Salvador	130	"
Andrés Torre Ruiz	118	"
Enrique Ramos	115	"
Javier Tubi6	111	"
Miguel Cuevas	108	"

5. ELECCIONES GENERALES A CORTES (NOVIEMBRE DE 1933)

A. PLANTEAMIENTOS POLITICOS ANTE LAS ELECCIONES

PLANTEAMIENTOS POLITICOS ANTE LAS ELECCIONES

A las elecciones generales se llegó, como consecuen
cia de los acontecimientos de septiembre y octubre, con los
ánimos encrespados entre republicanos y socialistas. Sin em-
bargo la razón acabó prevaleciendo entre los primeros. Ciertó
que para ellos era forzado entrar en razón, puesto que su po-
sición electoral era incomparablemente más débil que la de los
socialistas. No contaban como éstos con una base disciplinada
(especialmente la base sindical de la UGT), cuyo voto era ine
vitablemente socialista; y en cambio su posición política tras
los dos años de gobierno estaba mucho más desgastada, pues la
base social de su electorado era susceptible de inclinarse a
la izquierda, pero también a la derecha, siguiendo opciones
como las del Partido Radical o el Conservador de Maura, y estos
grupos habían realizado una oposición tan feroz que forzosamen
te había impresionado a numerosos sectores. Los socialistas su
frían también el desgaste de su paso por el poder: pero su des
gaste era más ante sectores que no eran "suyos", como la cla-
se media y alta, que en un principio toleraron aparentemente
su presencia en el gobierno, pero que en cuanto los sectores
conservadores y oligárquicos se reorganizaron (por medio de la
atracción a la derecha del partido Radical y sobre todo a tra
vés de Acción Popular y la Ceda) y desencadenaron su oposición
absoluta a toda medida reformista por muy tímida que fuese,
fueron oscilando primero en parte y luego mayoritariamente ha
cía un "antimarxismo" visceral e irracional (contra la "polí-
tica socialista" del Gobierno Azaña (1), la "impronta socialis

ta", etc. -frases frecuentes en la prensa de la época (1). Por su izquierda y respecto a su auténtico electorado, los socialistas sufrían efectivamente el embate anarcosindicalista y comunista, pero el riesgo no era apremiante, como lo demuestra el que los comunistas solo sacasen un diputado en estas elecciones, y por otra parte los anarcosindicalistas llegaban al fin del bienio reformista, pese a toda otra apariencia, en proceso de decadencia, consecuencia de su política de oposición intransigente, suicida para ellos a largo plazo y gravemente peligrosa para la República.

Por todo ello los republicanos de izquierda comprendieron muy bien que solos iban al desastre; pero no era mero oportunismo electoral; su postura, encarnada en su máximo representante, Manuel Azaña, se basaba en la comprensión de que no sólo ellos iban al desastre, sino también los socialistas, y la política desarrollada hasta ahora: esto es, la izquierda en su totalidad y todas las realizaciones conseguidas en dos años de República. La Historia les dio cumplida razón. Como veremos, las llamadas a la unidad fueron varias, públicas y oficiosas; la última apelación de Azaña fue en su discurso del 16 de octubre y, como él mismo recuerda en su diario (2), el mismo día los socialistas madrileños acordaron ir a las elecciones en candidatura cerrada. Las restantes agrupaciones pro-

(1) *El Sol* dedicó tras el cambio ministerial de septiembre, toda una serie de artículos a la "huella socialista" que los gobiernos Azaña habían dejado.

(2) Azaña, OC. IV, p. 649.

vinciales no tardaron en seguir el precedente.

Las razones de la posición republicana eran bien claras: la ley electoral había sido aprobada con la idea de una coalición y el no ir unidos era no sólo renunciar a las ventajas de la prima a la mayoría sino regalárselas a las de rechas, cuya reorganización era patente y cuyo proceso de con vergencia con los radicales era también cada día más claro.

Según el propio testimonio de Azaña, que se empleó a fondo en conseguir la coalición, todo fue inútil. Prieto apoyaba la postura republicana; pero al igual que sucedió con la postura colaboracionista con la dictadura de Primo de Rivera, el partido seguía fielmente a Largo Caballero. Este (1) había sido quien más había apoyado al tiempo de elaborar la ley electoral el mantener el sistema mayoritario vigente (recordemos que Prieto había propuesto incluso un sistema que agrandaba el predominio de la mayoría).

Y sin embargo, por el testimonio de Vidarte sabemos que Largo ya entonces era contrario a la alianza con los republicanos. Desconocemos si De los Ríos llegó a advertir a Azaña de la posibilidad de que no hubiera coalición electoral, pero lo que sí aparece claro es el ambiguo doble juego de Largo (quien todo lo más afirmó que "no podía oponerse" a que De los Ríos hiciera tal advertencia a Azana): aprobar una ley mayoriz

(1)

Azaña, id. id

taria concibiendo ya la posibilidad de no ir a las elecciones junto con los republicanos de izquierda. Lo que sin duda le impulsaba a esta "maquiavélica" actuación no era sino el creciente -y erróneo- convencimiento de una victoria socialista en las urnas aún yendo aislados, o por lo menos de un aumento del número de escaños conseguidos en las Constituyentes.

Según Azaña la justificación de los prohombres socialistas era que la actitud de las masas les forzaba a su postura de total intransigencia. No hay por qué dudar de que esta presión existiera, especialmente en las zonas donde la lucha de clases era más violenta (Extremadura, Andalucía, etc.), a la vez lógicamente feudos socialistas. Pero lo que parece claro es que la dirección del partido - salvo excepciones - coincidía con esa postura de la base, y no fue en modo alguno una política en contra de su voluntad. Largo lo reconoció expresamente (1) al propugnar un frente obrero cuando se estaba discutiendo la Ley Electoral en julio. Otra prueba más próxima la tenemos en la forma en que los socialistas madrileños decidieron el 16 de octubre ir en candidatura cerrada. En la asamblea de la agrupación madrileña, tras leerse las cartas de Acción Republicana y de los radical-socialistas independientes invitándoles a la coalición, el comité de la agrupación combatió dicha postura, aprobando la agrupación la tesis aislacionista del comité (2). Por otra parte se siguió el criterio de dejar

(1) Vidarte, *Las Cortes ...*, p. 620.

(2) *El Sol*, 17-10-33.

a las agrupaciones que decidiesen por sí mismas, desechándose la proposición de Prieto, que invirtiendo el proceso, consistía en darles la consigna de alianza con los republicanos en base a consideraciones de política nacional y pedir que las federaciones que no estuviesen de acuerdo justificasen su criterio, sin perjuicio de que fueran ellas las que en definitiva decidieran por mayoría.

Si la ejecutiva se abstuvo de adoptar esta resolución es porque estaba conforme, mayoritariamente al menos, con lo que sabía de antemano que iban a ser las decisiones locales: la ruptura de la coalición, pues ya conocían informes de éstas y la situación de conflictividad, local, social o política con los republicanos, incluidos en numerosos casos los de izquierda (que no olvidemos, eran frecuentemente una izquierda bastante moderada).

Según Rivas Cherif, los republicanos llegaron a ofrecer a los socialistas madrileños 15 puestos, reservándose 5 para ellos; según el mismo Rivas, los socialistas presentaron la contrapropuesta de una candidatura íntegramente socialista en encabezada por el expresidente Azaña. Contrapropuesta rechazada por poco equitativa por los republicanos. El cuñado de Azaña sostiene que tal propuesta no era tan injusta pues destacaba a Azaña en su valía y porque los socialistas presentaban por Madrid un plantel de primeras figuras que superaban en mucho a los candidatos republicanos. En segundo lugar porque siempre hubiera cabido la compensación con el reparto de puestos en

provincias. Y por último porque al no llegarse a un acuerdo en Madrid, el resto de las organizaciones provinciales seguirían el mismo ejemplo (1).

Salvo una recomendación general de la directiva que garantizara un acuerdo en las organizaciones provinciales es difícil que los republicanos pudieran aceptar la oferta, siendo como eran dichas organizaciones contrarias al acuerdo y teniendo además que compensar ellas en sus listas la exigencia de los socialistas madrileños.

Para "remachar el clavo" como escribiera Azaña años después, los catalanes no supieron unirse entre ellos tampoco, ocasionándoles ésto asimismo la derrota frente a la Lliga.

Hubo otro intento de coalición en sentido inverso al anterior; en efecto, en el Gobierno -de mayoría radical- se discutió, parece que a instancias de los representantes de Oruga, Acción Republicana y radical socialistas independientes, la posibilidad de ir coaligados a las elecciones. Esto era más difícil si cabe, pues significaba presentarse unidos al electorado quienes hasta hacía días se habían despedazado materialmente. La propuesta fue rechazada por los radicales (2).

(1) Rivas Xerif, *Retrato...*, p.212. Hay que advertir respecto a la obra de Rivas Xerif que incurre en frecuentes errores al hablar de cuestiones políticas concretas.

(2) *El Sol*, 12-10-33.

Nos parece atinada la observación de Tussell de que las masas concebían una unión republicana en mayor medida que los políticos (1). Sin embargo nuestra opinión es que incluso ante la opinión republicana hubiera sido difícil de justificar una coalición tras los fuertes antagonismos de la víspera; aunque la opinión republicana no estuviese tan enfrentada como sus organizaciones, estaban ya separadas a muerte y la lucha acabaría con la desaparición tres años después de una de ellas, el Partido Radical. Creemos superficial la opinión de Madariaga de atribuir a la incapacidad de entendimiento de Azaña y Lerroux una gran importancia; sin negar que alguna tuviera, dicho entendimiento solo hubiera sido posible al comienzo de la República. Una vez entrado el bienio reformador, había intereses materiales y una consiguiente actividad legislativa ante los que las divergencias de radicales y azañistas eran de fondo: o una solución reformista u otra conservadora. Véase si no cómo el conservadurismo de Lerroux acabó echando fuera del campo radical a alguien que sí se había entendido con él a nivel personal, Martínez Barrio. Y esto ocurrió meses tan solo después del momento que comentamos.

Antes de entrar a analizar el desarrollo de las elecciones conviene recordar el sentido de las modificaciones del sistema electoral introducidas por la ley Electoral de julio del 33. En efecto, conforme con el acuerdo existente en el Gobierno de conservar, e incluso acentuar, las características del sistema en vigor, se reforzaron determinados rasgos que

(1) Tussell, *La Segunda República...*, p. 97.

hacían más imprescindible el presentarse a unas elecciones en grandes coaliciones.

Mientras que antes para resultar elegido en la primera vuelta hacía falta tan sólo obtener un 20% de los sufragios emitidos, ahora se exigía un 40% por lo menos a alguno de los candidatos de cada lista, y el 20% a los restantes candidatos. Si ninguno alcanzaba ese 40% no resultaría elegido nadie de esa lista, y en caso de que uno o varios si lo obtuviesen, resultarían elegidos además sólo los que superasen el 20%, siempre claro que les correspondiese por número de votos recibidos.

Además se establecía otra nueva condición, permitiendo presentarse a la segunda vuelta tan sólo a aquellos candidatos que hubiesen logrado en la primera por lo menos un 8% de los votos emitidos. Y en el caso de que en dicha situación estuviesen solamente un número de candidatos igual al número de escaños por disputar, resultarían proclamados aquéllos directamente. El conjunto de estas disposiciones imponía aún más que antes la necesidad de no ir aislados, y refuerza los razonamientos hechos sobre el error que suponía la división con que las izquierdas fueron a las elecciones.

B. CAMPAÑA ELECTORAL

CAMPAÑA ELECTORAL

Para conocer la orientación que Acción Republicana dio a estas elecciones cara a sus electores, nos vamos a remitir a un análisis de los mitines dados por Azana durante su campaña electoral. Tanto en ellos como en los restantes actos de propaganda del partido en los que no intervino Azaña, el planteamiento se puede resumir con facilidad: el *leit motiv* de la campaña fue la defensa de la labor reformista realizada en dos años de gobierno. Dentro de esta tónica general la diversa situación de la política provincial -evidenciada en último término por coaliciones distintas- imponía una cierta diversidad de matices, especialmente en torno al tema de la defensa o no de la continuidad de la coalición gubernamental con los socialistas. Pero por lo demás, la defensa de la política realizada en todos los campos (religioso y docente, militar, social, regional, etc.) constituye la materia prima de los discursos.

Nos evidencia esto una campaña electoral de carácter defensivo, muy distinta a la realizada en 1931. Mientras que entonces dominaba la agresividad frente al statu quo existente y se anunciaban reformas en todos los campos, ahora que éstas se encontraban realizadas o iniciadas, lo que aparece es la alarma ante el peligro de que sean desmontadas. Pero es defensiva también desde el punto de vista de que en muchas ocasiones se trata de desmentir las interpretaciones que veraces o no, había propagado la derecha en su oposición al Gobierno.

Se niega por tanto que hubiera habido persecución religiosa, que se hubiera realizado política socialista, que se hubiera arruinado la economía nacional, etc. etc.

Azaña realizó dos giras importantes antes de las elecciones. Una hacia el norte, al País Vasco, pronunciando discursos en San Sebastián, Pamplona y Logroño, y otra por el Levante, hablando en Alicante, en Játiva y en Castellón. Por último en los días inmediatos a las elecciones volvió al norte a presentarse ante los electores bilbainos circunscripción por la que se presentaba candidato en unión de I. Prieto y M. Domingo (1).

Confirmando lo que ha escrito Elorza respecto a las campañas electorales de la República (2), la de Acción Republicana, al igual que en junio del 31, se basó fundamentalmente en la realización de mitines y giras como las realizadas por Azaña, y en las que los propagandistas del partido entran en contacto directo con la masa de electores.

La participación de los líderes era por supuesto lo que más aliciente proporcionaba a estos actos de propaganda. Probablemente las ingentes concentraciones de masas que acudieron en 1935 a escuchar a Azana constituyera el ejemplo más destacado del principal medio propagandístico utilizado en la Re-

(1)

Vid. algunos de los discursos, no recogidos en las O.C., en el Apéndice II, 3.

(2)

Las elecciones de febrero de 1936.

pública.

Pues bien, en estos discursos de 1933, Azaña se es forzaría, con un tono más mesurado que en 1931, en justificar la necesidad de las reformas realizadas, presentando su política como la única que interpretaba fielmente las ansias de renovación que habían traído la República. Especialmente insis tió en tres aspectos de su política: la autonomía concedida a Cataluña y abierta para las demás regiones, la solución de la cuestión religiosa y la política social religiosa.

Insistió Azaña en mostrar cómo la solución dada fi nalmente al problema religioso por iniciativa suya había sido una transacción respecto a dos posturas excesivamente distantes, y que había evitado la solución más radical propuesta por los socialistas. También señaló como esta cuestión estaba en la base de las mayores dificultades con las que ahora se enfren taba la República, pues había dado armas a los adversarios de la República para movilizar a un porcentaje importante de la opinión pública. Mantenía, en cambio como una solución óptima e imprescindible la dada al problema de la enseñanza, pues en ella estribaba la seguridad futura de la República.

Respecto a la política social afirmó que constituía el mínimo en un país civilizado y que en modo alguno podía con siderarse como especialmente radical.

Y repitió frecuentemente que todas las leyes aproba das habían sido presentadas durante el Gobierno Provisional ,

con aquiescencia por tanto de los radicales.

Falta en cambio cualquier referencia en los discursos que hemos localizado a la política militar, quizás porque prefiriese evitar que se polemizase sobre ella y conseguir así que no se deshiciera lo ya realizado. Sin embargo sus correligionarios sí que tocarían el tema, atribuyendo al partido y a Azaña el mérito de haber logrado la transformación del Ejército tanto desde el punto de vista de su organización como de su papel en la sociedad.

Otro punto merece la pena de sacarse de los discursos pronunciados por Azaña, y es la lamentación porque no se hubiera mantenido la política electoral conjunta de los partidos que habían apoyado sus Gobiernos, poniendo en grave peligro a la República.

Pues la llamada al voto que realizaba Azana se acompañaba con la afirmación taxativa de la gravedad de la situación política. La derrota en las elecciones, arriesgaba según él la subsistencia de toda la obra de gobierno realizada, y del único rostro que la República podía tener si su implantación había sido algo más que un cambio en la Jefatura del Estado.

C. COALICIONES ELECTORALES Y RESULTADOS EN

LA PRIMERA VUELTA

COALICIONES ELECTORALES Y RESULTADOS EN LA PRIMERA VUELTA

El análisis de las coaliciones en la primera vuelta nos indica con claridad la ausencia de una directriz general: fracasada la coalición con los partidos de los Gobiernos Azaña, en cada circunscripción se realizaron las alianzas que la situación local permitía, lo cual, dados los inevitables conflictos interpartidistas locales, llevaba en muchos casos a la multiplicidad de las candidaturas.

En el cuadro de alianzas de Acción Republicana es muy indicativo observar que hay aproximadamente un número parecido de coaliciones de tres tipos: de centro-izquierda, de izquierda republicana y republicano socialistas.

La coalición con los socialistas se mantuvo en el País Vasco, por influencia de Prieto, excepto en Guipúzcoa; en el Levante (Castellón, Valencia, Baleares), en Aragón (Huesca y Logroño) y en Cádiz. En general se puede encontrar un rasgo común entre todas estas provincias: la escasa posibilidad de conseguir escaños que tenían los socialistas yendo aislados; la fuerza de radicales autonomistas y derechas en Levante, y de derechas y nacionalistas en el País Vasco hacía que pudieran repartirse entre ellos mayorías y minorías; ésto fue sin duda lo que explica (aparte la ya mencionada influencia de Prieto) las coaliciones republicano socialistas en dichas zonas.

Las alianzas de izquierda republicana adquieren un rasgo característico en Cataluña, donde el exclusivismo de la

Esquerra forzaba a todos los demás grupos republicanos a unirse, incluyendo, cosa infrecuente, a partidos no exclusivamente catalanes. No hay que olvidar sin embargo que en Lérida fue con la Esquerra con quien se coaligó Acción Republicana, permitiéndole a Bello conservar su escaño de diputado.

Puede sorprender que no fuese más generalizada la coalición entre Acción Republicana y los radical socialistas independientes, pero no hay que olvidar que en muchas de las provincias en las que Acción Republicana no se presentó, sí lo hizo el grupo de M. Domingo, seguramente con el apoyo de Acción Republicana: ambos partidos preferirían presentar, conscientes de su debilidad, una candidatura por minorías con miembros del grupo de más arraigo en la circunscripción. En la situación inversa se encontrarían seguramente varias de las circunscripciones en las que Acción Republicana presentaba aisladamente algún candidato por minorías. Pero a pesar de que probablemente fuera así nos limitamos a afirmar la existencia de coaliciones cuando nos consta probadamente que se dieron.

Sólo a través de un exhaustivo estudio de la prensa de provincias podrá conocerse el régimen de alianzas de forma completa.

Más infrecuentes fueron las alianzas de centro izquierda, con radicales o radicales socialistas de Gordón. Las provincias en las que se dio fueron contadas, siendo la mayoría de Castilla la Vieja y norte: Avila, Burgos, León, Oviedo, Guipúzcoa y Toledo.

Coaliciones de Acción Republicana en la primera

vuelta:

	Centro	Izquierda	Republicano
	<u>izquierda</u>	<u>republicana</u>	<u>socialistas</u>
Almería		Rad.soc.ind.	
Alicante		Rad.soc.ind.	
Ávila	Radic.y progres.		
Badajoz		Rad.soc.ind.	
Baleares			Rad.soc.ind.y social.
Burgos	Radic.y rad.soc.		
Cáceres	Rad.socialistas		
Cádiz			Rad.soc.ind.y soc.
Castellón			Rad.soc.ind.y soc.
<u>Cataluña</u>	}	Acció Cat.Rep.,PNRE y federales	
Barcelona cap.		A.CR, PNRE y rad.soc.	
Barcelona prov.		Esquerra Republicana	
Lérida		PRSI y ACR.	
Tarragona			
Ciudad Real		PRSI	
Córdoba		PRSI	
Granada	PRS e independientes		
Huesca			PSOE y PRSI
León	P.Radical y PRS		

Centro izquierda	Izquierda republicana	Republicano socialistas
---------------------	--------------------------	----------------------------

Logroño		PSOE y PRSI
Madrid cap.	PRSI y federales	
Madrid prov.	PRSI y federales	
Oviedo	PRS	
Pontevedra	Orga, P.R. Vigués, PG y agrarios	
Toledo	P.Rad.y P.Rep.Conservador	
Valencia cap.		Federales, PSOE, PRSI,
Valencia prov.		AVR, Republic.social.
Zaragoza cap.	PRSI	
Zaragoza prov.	PRSI	
País Vasco.Alava		PSOE y PRSI
Vizcaya cap.		PSOE y PRSI
Vizcaya prov.		PSOE y PRSI
Guipúzcoa	PR, federales y Federación de Círculos Republicanos	

En las siguientes provincias Acción Republicana presentó candidaturas abiertas, aspirando a todos o parte de los puestos por minorías: Albacete, Guadalajara, Málaga provincia, Murcia cap. y prov., Orense, S.C. de Tenerife, Santander, Segovia y Valladolid.

Y no presentó candidatos en las siguientes circunscripciones, aunque como dijimos en muchas de ellas se debieron

apoyar candidaturas abiertas por minorías de partidos afines, especialmente radical socialistas independientes: La Coruña, Cuenca, Gerona, Huelva, Jaén, Lugo, Málaga cap., Navarra, Palencia, Las Palmas, Salamanca, Sevilla, Soria y Zamora.

Vamos ahora a exponer los datos que tenemos sobre la composición de algunas candidaturas provinciales. Seguimos por orden alfabético las provincias y regiones en que Acción Republicana se presentó coaligada y aquellas en que presentó candidatura abierta.

ALBACETE:

En Albacete Acción Republicana presentaba por mino rías dos ex diputados de la provincia, Velao y Mirasol, quedando por encima de ellos las candidaturas radical-cedista y socialista que se repartieron los puestos (1).

ALMERIA:

En Almería los radicales fueron aliados con agrarios y Ceda. Frente a ella se presentaron socialistas, los republicanos de izquierda (Acción Republicana y radicales socialistas independientes), y alguna otra candidatura marginal.

(1) Sobre los resultados pormenorizados y las causas de la derrota -principalmente la división de los republicanos entre sí y con los socialistas- vid. Sánchez Sánchez y Mateos R., *op.cit.*p.130 y ss.

La conclusión de Mateos Rodríguez sobre los resultados obtenidos por los candidatos de Acción Republicana se resume en las siguientes palabras: "El azañismo, del que Albacete fue un gran feudo, resultó ampliamente derrotado. En ello influyeron varios factores, desde las alianzas electorales a los fracasos en su etapa de responsabilidad en el poder. Pero no fueron barridos sino que se replegaron a sus zonas de dominio en la administración provincial para resurgir en febrero de 1936".

Acción Republicana consiguió un puesto por mayorías para Barcia. Desconocemos la composición exacta de la candidatura (1).

ALICANTE:

En Alicante se presentaron unidos Acción Republicana y RSI por mayorías. La candidatura incluía dos miembros de Acción Republicana, Carlos Espiá y José Estruch y seis radical socialistas independientes, entre los cuales Botella ministro de Justicia -que dimitió tras su derrota-. Una candidatura republicano socialista hubiera triunfado sin duda alguna, por lo que la DRV se esforzó, con éxito, en lograr la alianza con los radicales para la segunda vuelta, consiguiendo así ganar las mayorías y dejando las minorías para los socialistas. Los candidatos de Acción Republicana no participaron en la segunda vuelta. Hay que observar que el reparto de candidatos entre la izquierda republicana era muy desfavorable a Acción Republicana (2 puestos frente a 6 radical socialistas) y sin embargo fueron sus candidatos los que mejor votación obtuvieron (2).

(1)

Casares, *La Ceda...*, p.71; *El Debate*, 2-2-36; en este número el periódico católico incluyó un estudio sobre las elecciones de 1933, que utilizado con precaución es útil. Lo utilizamos como fuente general en unión de *El Sol*, *El Liberal* y *El Debate* del 21-11-33 y ss., por lo que ya no citamos estas fuentes en lo sucesivo.

(2)

El Sol, 21-11-33; Chapaprieta, *La paz fue posible*, p.159; las cifras de votos de la prensa son resultados muy parciales, por lo que sólo damos cifras de votos en los casos en que nos basemos en estudios monográficos previos. Los datos de la prensa nos sirven fundamentalmente para saber los triunfadores y aproximadamente la diferencia relativa entre unas candidaturas y otras, aparte de la composición de alianzas y candidaturas.

ASTURIAS:

En Asturias se presentaron unidos radical socialistas y Acción Republicana, obteniendo un 2% de los votos, por debajo de comunistas (4%), centro (Radicales, conservadores, 9%), socialistas (20%) y derechas (31%). Los seis candidatos de Acción Republicana eran Saturnino Escobedo, Valentín Álvarez, Adolfo Alas Arguelles, Jesús Morán García, César Milego Díez, y Angel Pérez Pérez. En la candidatura de centro se presentaban también los dos diputados pertenecientes a la minoría de Acción Republicana en las Constituyentes, Menéndez Suárez y Sarmiento, como pertenecientes al bloque Campesino que les había elegido el 31 (1).

AVILA:

Sánchez Albornoz consiguió su reelección por Avila, siendo el único de la candidatura conjunta con radicales y progresistas que resultó elegido, logrando el puesto por minorías. Sánchez Albornoz fue también incluido en la candidatura centrista de Burgos (2).

CATALUÑA:

En las cuatro provincias catalanas hubo diversas candidaturas de izquierda republicana, participando en alguna de ellas Acción Republicana (el PCAR) en todas las circunscripciou

(1) Girón, *Elecciones en Historia* 16 n.º Extra II, p.118 da los porcentajes.

(2) Ruiz Manjón, *El partido republicano...*, p.392.

nes menos en Gerona (1). En Barcelona capital Faustino Ballvé representaba a Acción Republicana en la Coalició d'Esquerres Catalanes , que incluía a ACR, PNRE (2) y dos federales de "El pacte". Recibieron entre 41 y 26 mil votos, siendo Ballvé el que menos recibió de la lista, 26.145. Hubo también una lista republicana presentada por *El Diluvio* en la que se incluía a Azaña quien recibió 12.202 votos. La Lliga (132-108 mil) y la Esquerra (151-121 mil) se repartieron los puestos.

En Barcelona provincia se presentaron las mismas coaliciones, pero aquí la triunfadora fue la Esquerra (143-141 mil), llevándose la Lliga (132-129 mil) las minorías. La coalición de izquierdas incluía a ACR, PNRE, un federal y a E. Isern Dalmay del PCAR, quien obtuvo el sexto puesto de la candidatura con 9.620 votos. El máximo y mínimo de la lista eran 10 y 8 mil votos.

En Lérida Bello fue incluido en la lista de la Esquerra, no presentando la Coalició candidatura, obteniendo el 4^a puesto de las mayorías, siendo los restantes para la Unión de Derechas, y para la Esquerra otro por minorías. Bello obtuvo 52.579 votos. La candidatura de la Esquerra obtuvo entre 52 y 51 mil votos frente a 53-51 mil de la Unión de Derechas.

En Tarragona Acción Republicana volvía a presentar un candidato con la Coalició, junto con el PRRS y ACR. José So

(1) Molas, *El sistema de partidos...*, p.157 y ss.

(2) Acció Catalana Republicana y Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra respectivamente.

ronellas Coll obtuvo 27.506 votos, el último puesto de la lista (35 a 27 mil votos). También aquí triunfaron las derechas (61-57 mil); obteniendo la Esquerra las minorías con 35-27 mil.

En Gerona, como dijimos, ni la Coalición ni Acción Republicana presentaron candidato alguno.

CASTELLON:

En Castellón se presentó por mayorías una candidatura republicano socialistas con dos candidatos de Acción Republicana, Royo Gómez y Casas Sala, un radical socialista independiente y un socialista. Fueron superados tanto por las derechas como por los radicales (1).

EXTREMADURA:

Badajoz fue otra de las provincias en que la separación de republicanos de izquierda y socialistas fue la causa de su derrota pues aquellos obtuvieron unos 7.000 votos mientras que los socialistas fueron derrotados por las derechas por tan solo 4.000 de diferencia (2). En Cáceres una candidatura junto con los radical-socialistas por minorías obtuvo muy pocos votos. El candidato de Acción Republicana era Giral.

(1) Según una Memoria elaborada posteriormente por la organización de Acción Republicana de Castellón ante estas elecciones debieron abundar las discordias con los RSI e incluso con algún miembro de Acción Republicana. Como base de la derrota se apunta que Acción Republicana, "fuerte en el alto y bajo Maestrazgo, era débil en la Plana y nula en el Espadén".

Sobre la organización de Castellón vid. infra cap. VII, 3 c.

(2) Azaña, OC. IV, p. 649.

GALICIA:

De las cuatro provincias gallegas tan sólo en Orense y Pontevedra se presentaron candidatos de Acción Republicana (1). En Orense se produjo una gran dispersión de candidaturas. Frente a la cedista y al radical-conservadora, que se repartieron todos los puestos hubo numerosas candidaturas abiertas o por minorías: Radical socialista, socialista, PRG, partido Galleguista y una, con un solo nombre, de Acción Republicana (Pedro Seijas Guerra). Aunque el elector de izquierdas pudiera sumar todas estas candidaturas abiertas, la mayoría de las cuales incluían pocos candidatos, la dispersión restaba fuerza a todas ellas, recibiendo algunas y entre ellas la de Acción Republicana una votación ridícula.

En Pontevedra en cambio iba a concurrir una coalición de izquierdas que incluía a la Orga. Posiblemente influyera para ello la alianza de melquiadistas, radicales y conservadores que podía recibir una fuerte votación, y en segundo lugar la fuerza de Acción Republicana en la provincia, que equivalía a la debilidad de la Orga. Centristas y derechas se repartieron los escaños; los socialistas rechazaron ir en coalición con los republicanos de izquierda cuya candidatura estuvo integrada por 3 de Orga, 1 del Partido Radical Vigués, dos galleguistas, dos agrarios y dos de Acción Republicana, Alejandro Viana y Telmo Bernárdez Santomé. La candidatura obtuvo una buena

(1) A. Alfonso Bozzo, *Los partidos...*, p.372 y ss. 89 y 126 y ss.

votación y hubiera conseguido algún puesto probablemente de ir junto con los socialistas.

GRANADA:

En Granada Acción Republicana se coaligó con los radical socialistas de Gordón, obteniendo unos votos inútiles que sumados a los socialistas hubieran podido alterar el resultado; los dos candidatos que pertenecían a Acción Republicana eran Joaquín García Labella y Francisco A. Rubio Callejón.

GUADALAJARA:

En Guadalajara se presentó por minorías el ex diputado de la provincia Serrano Batanero sin obtener acta.

HUESCA:

En Huesca, una de las provincias donde se mantuvo la coalición con los socialistas, el representante de Acción Republicana fue Ruiz Funes, ex diputado por Murcia, siendo superados por agrarios y radicales. Una coalición similar en Logroño logró el puesto de las minorías, resultando elegido el vicepresidente de Acción Republicana Amós Salvador.

MADRID:

En Madrid, capital y provincia, donde la fuerza de los socialistas era tradicional y reconocida, las izquierdas republicanas carecían de toda posibilidad de éxito. Es por lo tanto lógica la falta de moral de victoria percibida por Tussell.

Los resultados confirman también en ambas circunscripciones el error socialista. Pocos, muy pocos votos hubieran aportado los republicanos de izquierda, pero bastantes para dos cosas: evitar la segunda vuelta en la capital y, más importante, lograr las mayorías por la provincia, en vez de conformarse los socialistas con las minorías.

En la capital la candidatura de los republicanos de izquierda (Acción Republicana, RSI y federales) obtuvieron una votación que oscila entre los 46.000 votos de Azaña y los 16.000 del radical socialista Galarza (1). La diferencia entre Azaña y el segundo, Barnés (radical socialista independiente) es ya considerable: Barnés recibo 28.500 votos; los doce mil votos de diferencia entre el segundo y el último es ya una diferencia más habitual dentro de una misma candidatura. Tal como nos ha indicado Tussell (2) la candidatura azañista es la que menos diferencia de porcentaje sufre de un barrio a otro, siendo por lo tanto la más interclasista, en Madrid capital por lo menos. Es una de las causas para dicho autor de que sea Acción Republicana un partido reducido.

La diferencia se reduce a un 3% (Acción Republicana alcanza en los diversos barrios entre un 7 y un 10%). Por supuesto y a pesar del presunto interclasismo, la votación más

(1) Cifras en Tussell, *La segunda...*, p.104 y 105, 210 y ss.

(2) Tussell, *La segunda...*, p.109.

alta se recibe en los distritos populares, disminuyendo algo al aumentar el nivel social medio.

La política socialista no tuvo consecuencias en Ma
drid capital debido a que aunque el partido radical se retiró en la segunda vuelta para no perjudicar a la candidatura dere
chista , sólo parte de su electorado votó a ésta. La candidatura dere
chista recibió en la segunda vuelta de 32 mil a 36 mil votos más que en la primera, mientras que la candidatura radical había recibido entre 80 y 65 mil votos. Por el contra
rio el electorado republicano izquierdista sí votó a los socia
listas en su totalidad: recibieron éstos de 25 a 40 mil votos más, que se corresponden aproximadamente con los obtenidos por los republicanos (de 16 a 40.000).

La prensa republicana izquierdista hizo activa pro
paganda por los socialistas; el semanario de las *Jar* repitieron con insistencia que votar socialista era votar por la Repú
blica. Más si el electorado radical hubiera votado disciplinadamente a las derechas, el resultado en la capital hubiese sido parecido al de la provincia, mientras que en la primera vuel
ta los votos republicanos sumados a los socialistas hubieran permitido alcanzar los 155.000 necesarios para el 40%.

En la provincia los 4.000 votos de los republicanos de izquierda hubieran bastado para alcanzar el 40% a la candidatura socialista que resultó triunfante con 58 mil votos (el 40% eran 61 mil votos) en la primera vuelta, mientras que en la segunda, unidos radicales y derechas dejaron a los socialis

tas con las minorías.

En lo que se refiere a la base social, no hay que olvidar que la candidatura no es exclusivamente de Acción Republicana, sino una coalición de los tres partidos republicanos que habían participado en los Gobiernos de Azaña; presumiblemente todos ellos tenían y apelaban fundamentalmente a los mismos sectores sociales, clases medias, pequeña burguesía, profesiones liberales y en general a los sectores populares, aunque estos fueran predominantemente socialistas. También los grupos republicanos conservadores aspiraban a representar a los mismos sectores, (además de al conjunto de la burguesía), aunque con una opción política antagónica.

Los representantes de Acción Republicana en la candidatura de la capital eran Azaña (46.027), Castrovido (27.665), Hinojar (19.283), Ruiz Funes (20.780), Amós Salvador (18.790) y Leandro Pérez Urria (17.806). Los radical socialistas independientes tenían 5 candidatos -entre los cuales M. Domingo- y dos los federales.

Por la provincia Acción Republicana presentaba a Roberto Escribano, y L. Fernández Clérigo, junto con tres radicales socialistas independientes y un federal (1).

(1)

Jar, 4 y 11-11-33.

MALAGA:

En Málaga provincia se presentó sin éxito por mino
rías Enrique Ramos, mientras que por la capital Acción Republii
cana no presentó ningún candidato.

MURCIA:

En Murcia capital se presentó por minorías Ruiz Fuu
nes, mientras que por mayorías se presentaba una coalición del
PSOE con el RSI, que obtuvieron las minorías. Por la provincia
se presentaba como de Acción Republicana, A. García Alemán que
obtuvo pocos votos . Como independiente se presentó el ex di-
putado de Acción Republicana Figueroa O'Neill separado en 1932
del partido sin lograr ser elegido.

SEGOVIA:

También presentó candidatura abierta en Segovia, con
Pedro Romero y el independiente E. Onrubia, sin éxito.

TENERIFE:

En Tenerife Acción Republicana presentó a Fernández
Pajares por minorías.

SANTANDER:

En Santander una candidatura abierta de tres nombres,
R. Ruiz Rebollo (ex diputado), Daniel Luis Ortiz y José Luis
Duro.

TERUEL:

En Teruel, en candidatura republicano socialista (4 puestos) representaba a Acción Republicana Luis Doporto. Uno de los dos radicales socialistas era Marcelino Domingo.

TOLEDO:

Por Toledo Alvarez Ugena era el representante de Acción Republicana, que recibió una aceptable votación, junto con 4 radicales, un RSI y dos republicanos conservadores. Derechas y socialistas se repartieron mayorías y minorías.

VALENCIA:

En Valencia se mantuvo la coalición republicano socialista, sin que lograsen evitar la derrota, dada la fuerza de la DRV y de los radical autónomos. El Frente de Izquierdas obtuvo de 24 a 21 mil votos y el candidato de Acción Republicana Alvarez Pastor, el 4^a puesto de su lista con 23.427 votos.

Los radical autonomistas obtuvieron entre 65 y 58 mil votos y la Derecha Regional Valenciana (Ceda) entre 57 y 51 mil. El Frente de Izquierdas incluía además un candidato por cada uno de los siguientes partidos: PSOE, PRSI y AVR (1). En la circunscripción provincial se repetían las mismas coaliciones y resultados, aunque desconocemos la composición detallada del Frente.

(1)

Aguiló Lucía, *Las elecciones...*, p.107.

VALLADOLID:

En Valladolid, Acción Republicana presentó una candidatura abierta con Isidoro Vergara, ex diputado a Cortes por la provincia; agrarios y socialistas lograron mayorías y minorías.

PAIS VASCO:

En el País Vasco la coalición republicano socialista se mantuvo en Alava y Vizcaya. En la primera provincia el partido Republicano Autónomo, RSI, PSOE y Acción Republicana apoyaron a F. Susaeta (radical socialista independiente) sin lograr el puesto por minorías. En Vizcaya capital y gracias a la actitud de Prieto, logró Azaña conservar su escaño. Compusieron la candidatura Prieto y Zugazagoitia por los socialistas y Azaña y M. Domingo por los republicanos de izquierda, consiguiendo Azaña y Prieto los puestos por minorías. En la provincia la misma coalición apoyaba la candidatura de Ernesto Ercoreca (Acción Republicana) y un socialista, siendo derrotados por los nacionalistas y el Bloque de Derechas. En Guipúzcoa en cambio hubo coalición republicana de centro, concurriendo juntos radicales, federales, la Federación de Círculos Republicanos y Acción Republicana (Nicolás Bizcarrondo). Nacionalistas y Unión de Derechas se repartieron las actas, yendo aislados los socialistas quienes lograron mejor votación que los republicanos.

ZARAGOZA:

En Zaragoza capital, Acción Republicana y RSI apoyaron un candidato conjunto por minorías, Mariano Tejero, de Acción Republicana. En la provincia mientras agrarios y radicales se repartieron mayorías y minorías, una coalición de izquierdas y los socialistas concurrían separados; componían aquella tres radical socialistas independientes y Honorato de Castro y J. M. Lamana Ullete por Acción Republicana.

Resumiendo el resultado alcanzado por Acción Republicana, el partido de Azaña consiguió tan sólo 5 escaños, 4 de ellos por minorías. Fueron los siguientes: Augusto Barcia, por Almería (candidatura de izquierda republicana); Sánchez Albornoz, por Avila (candidatura de centro izquierda); Bello por Lérida (candidatura de izquierda republicana); Amós Salvador por Logroño (candidatura republicano socialista) y Azaña por Vizcaya capital, en candidatura republicano socialista. También aquí, dentro del exiguo número de diputados alcanzado, tenemos los tres tipos de coaliciones en las que participó Acción Republicana.

D. SEGUNDA VUELTA

SEGUNDA VUELTA

La segunda vuelta no palió en absoluto los resultados de la primera, sino que ratificó la oscilación a la derecha; la razón fundamental fue que no hubo rectificación alguna de alianzas, sino que éstas se afianzaron; los radicales estrecharon la suya con cedistas y agrarios, consiguiendo así superar, y ahora sí con suficiente mayoría de votos a los socialistas, y por supuesto a los republicanos de izquierda en la medida en que estos concurrieron. Lo que no sucedió la primera vuelta, que radicales y derechas fueran estrechamente unidos, fue una realidad ahora, a la vista ya del equilibrio del electorado y siendo demasiado tarde para alterar las coaliciones; el reforzamiento de la unión de radicales y derechas era obligado si querían superar a todos los partidos izquierdistas.

Así en la segunda vuelta frente a los 28 socialistas, 1 radical socialista y 1 comunista, triunfaron 29 derechistas, 25 radicales, 4 conservadores y 2 republicanos progresistas. Acción Republicana no consiguió ninguna nueva acta.

De las coaliciones en las que Acción Republicana participó en la primera vuelta solo se mantuvo la de Castellón, republicano socialista, que volvió a ser batida por las derechas y los radicales autonomistas unidos. En Baleares se deshizo una coalición similar.

En otras provincias en las que Acción Republicana presentaba candidaturas por minorías, se retiraron ante la au-

sencia de posibilidades o por no haber alcanzado el ocho por ciento exigido (Guadalajara, Málaga provincia, Murcia capital) o se presentaron por idénticas razones solo parte de los integrantes de la candidatura (por ejemplo en Alicante, donde sólo se mantuvo el representante radical socialista). En general la postura de Acción Republicana en esta segunda vuelta fue recomendar votar a la candidatura más afín.

Recordemos el caso ya citado de Madrid donde se recomendó el voto socialista; otro caso similar fue el de Córdoba. En otras provincias en cambio la relación con los socialistas se deterioró más; así en Almería, al repetir estos la candidatura cerrada (1), cuando era una de las provincias en las que la división había llevado al parecer a la derrota, Acción Republicana y radical-socialistas independientes publicaron un manifiesto en el que culpaban a los socialistas de la derrota por haberse negado a la coalición, retiraban su candidatura y aconsejaban la abstención.

Ante la segunda vuelta hubo otro intento a nivel gubernamental de lograr un acercamiento entre todos los partidos republicanos y el socialista, pero como se ha señalado, ya era muy tarde; posibilidad que aún irreal, fue planteada por el ministro Palomo, y provocó un furibundo ataque de *El Debate* contra ella (2); la intención del editorial era deshacer cualquier

(1) *El Sol*, 1-12-33.

(2) *El Debate*, 22-11-33.

veleidad que los radicales pudieran tener de aceptar una alianza a su izquierda llegando a los socialistas: se les advierte de que les llevaría a la misma ruina política que a los demás partidos republicanos. Por lo demás no parece que el Partido Radical tuviera la más mínima intención de ello: el mismo día 22 *El Sol* traía un desmentido rotundo de Lerroux de la posibilidad de ir con los socialistas "ni por dignidad política ni personal podría hacerlo". Una cosa parecida Habrían contestado sin duda los socialistas.

Martínez Barrio confirmó que tales gestiones estaban siendo realizadas por el ministro de Comunicaciones, aunque negando que fuese una cuestión del Gobierno, pues éste seguía siendo solamente una mesa electoral.

El Partido Radical, rechazando la aproximación, acordó dejar en libertad a sus organizaciones provinciales, lo que se tradujo en la práctica en un estrechamiento de las alianzas con las extremas derechas.

Por su parte, los socialistas, el mismo día, ratificaron su criterio electoral de permitir a las federaciones provinciales realizar los acuerdos electorales que considerasen oportunos, lo que significó en general repetir las alianzas de la primera vuelta.

E. RESULTADOS GLOBALES

RESULTADOS GLOBALES

Muchas veces hemos comentado los desastrosos efectos de la dispersión con la que los partidos de izquierda fueron a las elecciones.

Si bien no parece que una coalición republicano socialista generalizada hubiera invertido el sentido de las elecciones, si hubiera evitado el triunfo derechista; esto es, frente a una derecha más reducida, aunque con una importante minoría, hubiera estado presente probablemente una izquierda de fuerza parecida, en vez de la absoluta minoría a que se quedó reducida al perder los socialistas 50 escaños y prácticamente desaparecer los republicanos de izquierda (1). Solo contando con datos exactos o muy aproximados de los resultados de las elecciones se podría demostrar fehacientemente esto; algo sin embargo podemos decir en base a los datos parciales que hemos manejado.

En efecto, con estos datos se puede comprobar que en ciertas provincias la izquierda hubiera alcanzado las mayorías en vez de limitarse los socialistas a conquistar las minorías -como hemos visto en el caso de Madrid provincia-, o hubiera logrado por lo menos más puestos, repartiéndose las mayorías

(1) Este era el cálculo de Azaña, que 50 ó 60 escaños hubieran pasado de la derecha a la izquierda, OC. IV, p. 649.

con las candidaturas derechistas, y en otros casos hubiera evitado la derrota total consiguiendo las minorías.

Otro ejemplo sobre el que se puede operar con datos firmes es el catalán. Si la coalición de izquierdas que se presentó en Barcelona (capital y provincia) y Tarragona hubiese votado conjuntamente con la Esquerra, hubiesen alcanzado las mayorías completas en Barcelona capital (lo que significaba 9 diputados más de los que consiguieron) y en Tarragona (tres diputados más), pues sumando las votaciones de ambas candidaturas hubiesen obtenido en la primera entre 192 y 147 mil votos frente a los 132 y 108 mil de la Lliga y en la segunda 86 y 74 mil frente a los 61 y 57 mil de la Unió Ciutadana (derechas); En Barcelona provincia ganó la Esquerra a pesar de la duplicidad de candidaturas izquierdistas y en Lérida tan sólo con una alianza con el Boc se hubieran logrado las mayorías, pues la izquierda republicana sólo presentó la candidatura de la Esquerra, en la que se incluyó a Bello.

A pesar de lo inseguro que es hacer hipótesis de este tipo en un sistema electoral como el republicano, cuando los mínimos suman dos de ambas candidaturas superan al máximo de la candidatura rival, como en el caso que hemos expuesto, no cabe duda razonablemente de que el resultado hubiera sido el citado.

Sí se podría alegar que en muchas de las provincias en las que se diera tal situación, sumando los votos de las candidaturas radical y derechista, se hubiera conservado el triunfo para las derechas, como de facto pasó en la segunda vuelta

en Alicante; desde luego esto es cierto en algunos casos, pero no pueden equipararse ambas hipótesis.

La alianza de los radicales con las derechas, de forma clara y abierta era algo nuevo, que provocaba incluso serias resistencias en el interior del partido radical (1). La prueba es que como ha demostrado Ruiz Manjón y en contra de la opinión que creía que la alianza Ceda-Radicales había sido general en la primera vuelta, sólo se produjo en diez circunscripciones (aunque lógicamente se reforzara en la segunda vuelta en la que de todas formas sólo se produjo en otras catorce).

Por el contrario, republicanos de izquierda y socialistas, por muy conflictivas que sus relaciones fueran a nivel local, habían gobernado juntos durante dos años y juntos habían hecho aprobar una ley electoral que "exigía" dicha coalición ; ésta era por lo tanto lo consecuente, políticamente hablando, y a nadie hubiera extrañado; el que los dirigentes socialistas se decidieran a dar un giro a la izquierda incluyendo (lo que no era necesario ni lógico: piénsese en febrero de 1936) la ruptura de la coalición, precisamente ante el trance de unas elecciones, fue lo extraordinario. Sin especular con lo que hubiese ocurrido si la coalición se hubiese mantenido, lo que sí nos interesa destacar es que sin duda, desde los propios planteamientos socialistas y en la coyuntura aquélla, la actitud socialista

(1)

Ruiz Manjón, *El partido...*, p. 399 y ss.

fue un error craso, si por tal entendemos el ir a un fracaso que en las mismas circunstancias y en una hipótesis históricamente coherente se podía haber evitado o paliado. Error que sólo se puede comprender si como parece Largo Caballero creía que iba a ganar o por lo menos a mantener su fuerza parlamentaria íntegra.

No nos parece muy exacto afirmar que el resultado sea expresión de la creciente impopularidad de la política azañista; una conclusión de ese tipo tendría que sostenerse incluso sumando los votos recibidos por los socialistas, puesto que son votos que desde luego apoyaban dicha política, estimándola en todo caso insuficiente. Pues lo grave de las afirmaciones como esa, muy frecuentes en la bibliografía, es que sirven de apoyatura a la tesis de un brusco giro del país a la derecha, descontento de una política de tipo izquierdista, y esto es erróneo (1); tal giro a la derecha en comparación con 1931 existió, pero no tan grande ni mucho menos como la comparación de la composición de ambas legislaturas podía hacer suponer.

(1)

Tussell, *La segunda República...*, p.109. La alegación como prueba de la impopularidad de Azaña del testimonio de Fernández Flórez (*Acotaciones de un oyente*) es inaceptable. Si hubiera tomado *El Debate*, todavía demostraría mejor su tesis (id. p. 87).

Su afirmación posterior del "rechazo de la política izquierdista dentro del campo republicano" (p.114) es más aceptable, aunque hay que completarla con la consideración de la división organizativa de la izquierda republicana. Lo que queremos decir en definitiva es que la popularidad de la política azañista no se puede calibrar en base a los votos de las candidaturas republicanas de izquierda solamente.

Y tampoco la magra votación de los republicanos de izquierda es índice de dicha evolución a la derecha, o de la impopularidad de la política de Azaña; si tal fuera, el cambio habría sido realmente impresionante. Para saber qué apoyo podría contar una política como la realizada en el primer bienio (o más radical) hay que sumar, repetimos, los votos socialistas, sin olvidar además que los candidatos socialistas moderados eran los que mayor cantidad de votos recibieron, y que no cabe equiparar la hegemonía caballerista dentro del partido con la distribución en tendencias del electorado socialista, donde cabe suponer que la relación de fuerzas fuera inversa.

Está también el factor no despreciable de la abstención anarquista como otro de los que motivaron las exiguas votaciones de los republicanos de izquierda, tradicionalmente beneficiarios de los votos anarcosindicalistas en la medida en que los hubiera. La cerrada campaña abstencionista tuvo que dar sus frutos, pero está sin precisar en términos cuantitativos la exacta amplitud del abstencionismo específicamente anarquista, distinto del amplio abstencionismo estructural existente entonces. No se puede en efecto sobrevalorar el abstencionismo anarquista generalizándolo a todas las provincias; por ejemplo en Tarragona Molas atribuye la mayoría del abstencionismo a errores del censo y sobre todo al nuevo electorado femenino, teniendo en cuenta que la CNT no tendría en la provincia más de dos mil afiliados (1).

(1) Molas, *La Lliga...*, p. 289.

Pero en otras circunscripciones el anarquismo si influyó notablemente en la abstención de gran número de votantes, lo cual es comprobable constatando el descenso de abstenciones en 1936 -aunque también cabe un aumento de la participación temenina-; entre las circunscripciones en las que se da esta variación entre ambas elecciones se encuentran Cádiz, Málaga capital, Sevilla capital y provincia, Ceuta, Zaragoza capital, Barcelona, La Coruña. Tuñón calcula en 350.000 el número de posibles votos substraídos por influencia directa de la CNT (1). Fue en cualquier caso un importante elemento que hay que tener en cuenta al analizar los resultados de noviembre de 1933, antes de hablar de la "desaparición" de los republicanos de izquierda o incluso de su falta de popularidad por la gestión gubernamental; pues el choque con los anarquistas era inevitable, una vez dominada la CNT por la FAI, fuese cual fuese la orientación que la República hubiese tomado: no cabe achacarlo a la política específicamente reformista del primer bienio; la prueba está en que ese mismo electorado, tras conocer otro "mal peor", los Gobiernos radical-cedistas, votaron masivamente en

(1)

Tuñón de Lara, *La segunda República*, II, p.9. Las altas votaciones socialistas no justifican sin embargo la afirmación de Ballcells (*Crisis y agitación...*, p.120) de un abstencionismo obrero más amplio que el cenetista, por la desilusión ante la ineficaz política de los republicanos de izquierda; por lo menos como característica general, aunque pudiera darse en alguna provincia de alta conflictividad agraria, vid. sobre esto Maurice, *La reforma agraria...*, p. 49.

el 36 a una coalición parecida a la que gobernó del 31 al 33. Y un hipotético gobierno socialista hubiera chocado con la central anarquista con tanta o mayor fuerza.

Por último el voto femenino. Poco se ha estudiado y poco se puede llegar a conocer en términos cuantitativos sobre el voto femenino; la hipótesis unánime es que los seis millones de electores femeninos fueron un factor, si no decisivo, si contribuyente a inclinar la balanza hacia las derechas, así como también engrosarían el volumen del abstencionismo; Capel ha calculado en unos 500.000 los votos femeninos de izquierda (en base a la mano de obra femenina), principalmente socialistas (1).

(1) Tuñón de Lara, *La segunda República*, II p.11; Capel, *El sufragio femenino...*, p.245; Molas, *La Lliga...*, p. 289.

6. LOS PARTIDOS REPUBLICANOS TRAS LA DERROTA

LOS PARTIDOS REPUBLICANOS TRAS LA DERROTA

El resultado electoral iba a provocar fuertes tensiones en el Gobierno tan difícilmente conseguido. A pesar de que era obvio que una vez constituidas las Cortes, dicho Gobierno no dimitiría para dar paso a otro que respondiera a los resultados electorales -y de hecho fue así como se desarrollaron los acontecimientos- hubo toda una serie de maniobras por parte de los partidos de izquierda que colaboraban en el Gabinete, encaminadas a retirarle su apoyo antes incluso de dicha presentación ante las Cortes. En realidad la única razón para hacerlo así que se puede deducir es el despecho ante el resultado de las elecciones, abandonando a un Gobierno al fin y al cabo de color radical, y una vez realizado el cometido electoral para el que le concedieron su apoyo. Sin embargo también hubo, según cuenta Alcalá Zamora, algunas propuestas al Jefe del Estado de escaso respeto a la legalidad constitucional, ante la victoria derechista que, dado el escaso republicanismo cedista, ponía para muchos en peligro a la República.

Ya antes de la segunda vuelta se empezó a rumorear sobre la posibilidad de que los republicanos de izquierda abandonasen el Gabinete antes de su presentación a las nuevas Cortes. El ministro de Justicia, Botella Asensi, dimitió efectivamente acusando al Gobierno de falta de limpieza ante las elecciones (1). El Socialista acusó inmediatamente a los restantes

(1) Con dicho motivo pretendió que se anulasen las elecciones realizadas, a falta todavía de la segunda vuelta; al no ser apoyado por nadie en el Gabinete dimitió. Alcalá Zamora, *Memorias*, p. 260.

partidos de complicidad con la actuación ministerial, que juzgaban parcial, por no dimitir al mismo tiempo que Botella (éste pertenecía a la Izquierda Radical socialista, una temprana escisión por la izquierda del PRRS, de nula existencia organizativa). Por parte de *El Sol* se interpretó, con cierto regocijo, y deformando algo los acontecimientos que los ministros de los partidos republicanos de izquierda habían desobedecido a sus partidos manteniéndose en el Gobierno, interpretación que también siguió *El Socialista* (1).

Por lo que sabemos a través de las notas que los partidos dieron a la prensa, y en lo que se refiere especialmente a Acción Republicana las cosas sucedieron de la siguiente forma. Ya con ocasión de la dimisión de Botella se debieron reunir los líderes de los republicanos de izquierda, sin llegar a ninguna decisión. A Azaña le atribuyó *El Sol* la advertencia sobre la inutilidad y los inconvenientes de la retirada de los ministros, más que una oposición a la medida. Se atribuía una postura favorable a la retirada a Marcelino Domingo y a Casares (2).

Tras este revuelo ocasionado por la dimisión de Botella y durante los primeros días de diciembre, se siguieron reuniendo los prohombres de la izquierda republicana para debatir la conveniencia de hacer caer al Gobierno de inmediato.

(1) *El Sol*, 30-11 y 7-12-33; *El Socialista*, 30-11 y 6/7-12-33.

(2) *El Sol*, 30-11-33.

De estas reuniones debió surgir también la propues
ta que según Alcalá Zamora (1) hicieron Azaña, Casares y M. Dom
mingo a Martínez Barrio, por medio de una carta, instándole a
anular las elecciones.

Según Alcalá Zamora, Martínez Barrio se negó a se-
cundar sus planes que de todas formas hubieran sido totalmen-
te rechazados por él.

Para discutir el mismo tema se reunió el 2 de di-
ciembre el Consejo Nacional de Acción Republicana (2). Se de-
cantó una mayoría partidaria de retirar del Gobierno a Sánchez
Albornoz, aunque no se adoptó resolución alguna. Parece que la
minoría contraria resaltó el que tal retirada sería más espec-
tacular que positiva, y que el retirar al ministro de Estado
tan sólo podía tener el efecto político de empeorar las relac-
ciones entre los partidos republicanos y acrecentar si es que
había, la hostilidad entre Acción Republicana y el Partido Rad
dical.

Lo que sucedía era que posiblemente los sectores más
radicalizados de Acción Republicana no debían ver mal una rup-
tura absoluta de relaciones con los radicales, como podrá ob-
servarse en la Asamblea nacional de octubre.

También se trató sobre el otro asunto que ocupaba
por entonces la atención del partido, la fusión de los republii

((1) Alcalá Zamora, id. id.

((2) *El Sol*, 3-12-33.

canos de izquierda, proceso que tratamos en el siguiente capítulo.

Si en dicha reunión no se decidió al cabo nada sobre el apoyo prestado al Gobierno fue probablemente por no adoptar decisiones unilaterales e intentar adoptar posturas conjuntas por parte de todos los partidos republicanos (1).

Finalmente, el 3 de diciembre los líderes de éstos acordaron provocar la crisis de forma inmediata al día siguiente.

Parece que no pretendían ir contra Martínez Barrio, sino al contrario incluso solicitar su asentimiento con el objeto siguiente: provocar la crisis antes de la reunión de Cortes de forma que "en la evacuación de consultas se pudieran compulsar todos los pareceres y para que los sectores de derecha que han de colaborar en el futuro gobierno definieran claramente su posición con relación a la situación, sin estar a la espera de un debate político".

No es fácil con estas escuetas palabras ver todas las implicaciones de la actitud de provocar la crisis antes de la reunión del Parlamento.

Su intención era, al parecer, que antes de dar estado parlamentario a la crisis y de que las derechas cedistas pu

(1)

Es curioso reseñar que en estas reuniones participaban también los líderes de la derecha y el centro republicanos (Gordón, Ordás, Maura), asustados ante la victoria de las derechas "no republicanas".

dieran ejercer plenamente la fuerza parlamentaria adquirida con las elecciones, éstas hiciesen una expresa declaración de republicanismo, o que por lo menos, manifestasen al Presidente de la República nítidamente sus posiciones ante la República. Así interpretaba por ejemplo *El Liberal* la posible retirada de los ministros.

Sin embargo, la operación se frustró por dos motivos. El primero porque no se logró que los radicales diesen su consentimiento al plan, y en particular Martínez Barrio; el Consejo de ministros se reunió el mismo día 4 y el Presidente manifestó que creía que su deber era presentarse a las Cortes y entonces dimitir ante el Presidente de la República, como si duda procedía en términos parlamentarios.

Pero en segundo lugar, Martínez Barrio logró por el contrario persuadir a los presuntos dimisionarios de que precisamente en esos momentos no debían abandonar sus puestos, pues en base a las noticias sobre un próximo levantamiento proyectado por la FAI, era necesario declarar el estado de Prevención en toda España; ante la gravedad de la situación los ministros dimisionarios (Sánchez Albornoz, Palomo, Pita Romero, Gordón y Pi y Suñer, quien secundaba la postura colectiva) volvieron sobre sus acuerdos y la crisis que se llegó a plantear en Consejo quedó de nuevo conjurada.

El mismo día los ministros dieron cuenta a sus partidos de lo ocurrido en Consejo; todo quedaba entonces pendiente de lo que los partidos decidiesen ante las informaciones de

Los ministros.

El día 5 tuvo lugar la prevista reunión ampliada de Acción Republicana, tras la que se reunió a solas el Consejo Nacional. En ella la mayoría se mostró partidaria de que la decisión de Acción Republicana se tomase a la vista de la del resto de los partidos republicanos de izquierda, cuyos representantes se iban a reunir aquella noche de nuevo para tratar sobre la debatida cuestión. Pero bajo el común acuerdo de dejar la decisión en manos de Azaña, hubo partidarios tanto de mantener a Sánchez Albornoz como de que los partidos de izquierda retirasen inmediatamente a sus representantes del gobierno, provocando la crisis en el inmediato Consejo de ministros.

En la reunión definitiva de los líderes republicanos mantenida el mismo día 5, se debió acordar, la permanencia de los ministros de izquierda en el Gabinete, pues Sánchez Albornoz, en unas declaraciones a *El Sol*, desmintió los rumores de que los partidos republicanos de izquierda hubiesen decidido retirar sus ministros y éstos hubieran desobedecido la orden. El ministro de Estado alegó que en la Asamblea de Acción Republicana se decidió por mayoría la continuación y que en esta última reunión de los líderes republicanos se había acordado igual postura.

Por último, el día 6 se reunió de nuevo el Consejo Nacional de Acción Republicana pero ya para tratar cuestiones programáticas y organizativas. Sobre la situación política *El Sol* afirmaba que la impresión del Consejo Nacional era que el

Ministerio Martínez Barrio se presentaría a las Cortes con su composición actual al día siguiente y que el mismo día quedaría planteada la crisis.

Como sabemos ésta tardaría algún día más en producirse pues Martínez Barrio dimitiría el 16 de diciembre, una vez superada la intentona anarquista (1).

(1)

El Sol, 2, 3, 6 y 7-12-33; *El Liberal*, 1, 5 y 6-12-33.

7. HACIA UN UNICO PARTIDO REPUBLICANO DE IZQUIERDAS:

FORMACION DE IZQUIERDA REPUBLICANA.

HACIA UN UNICO PARTIDO REPUBLICANO DE IZQUIERDAS: FORMACION DE
IZQUIERDA REPUBLICANA

Tras la crisis gubernamental de junio se había vuelto a hablar, sin mencionar ya a la FIRPE, de la posibilidad y conveniencia de un bloque de izquierdas (1). Pero en realidad la idea todavía no había madurado, pues se insistía en uniones de tipo electoral y parlamentario, y que tenían frecuentemente la intención de superar las discordias republicanas, lo cual se traducía en que se englobaba en el posible bloque desde los radicales hasta los radicales socialistas. Esto evidencia que no se pensaba todavía en una fusión, sólo posible entre partidos sumamente homogéneos. Aunque tras la crisis de septiembre esporádicamente se hablaba ya de la necesidad de un único partido de izquierdas, tampoco parece que se considerase seriamente o como cuestión inmediata. Toda la atención de los partidos republicanos estuvo concentrada en conseguir la colaboración electoral socialista.

Tan solo las juventudes de los partidos comenzaron desde julio a mantener contactos con vistas a una posible fusión. Pero era más bien una voz minoritaria que expresaba una urgencia juvenil que estaban lejos de sentir sus mayores.

Alguna iniciativa local apareció ya sin embargo; así por ejemplo *El Liberal* insertó un manifiesto publicado en Manzanares (Ciudad Real) por una comisión provincial constituida

((1)) Sobre estos primeros intentos, *El Sol*, 7 y 21-7-33, 10-8-33.

con el objeto de trabajar por la unión de Acción Republicana y el grupo de M. Domingo (1). Es tan sólo un caso que no debía ser único de iniciativas locales por fusión.

A partir del fracaso electoral de los republicanos de izquierda el tema va a dar un giro de ciento ochenta grados. Las noticias sobre uniones locales, las cartas de republicanos a la prensa urgiendo la imprescindible unión y los contactos entre los grupos presuntamente afectados van a abundar.

En diciembre se generalizaron los contactos entre los republicanos de izquierda. La característica más destacada del proceso que finalizara con la fusión efectiva de tres de los más caracterizados de ellos será la coincidencia entre las conversaciones al más alto nivel con las fusiones espontáneas de muchas organizaciones locales, una coincidencia entre dirigentes y bases que sin duda facilitó lo que siempre es algo arduo, la completa fusión de organizaciones y permitió que se realizara en un plazo breve.

En nota publicada el 3-12-33, los comités municipales madrilenos de Acción Republicana, federales, radical socialistas de izquierda y radical socialistas independientes acordaban proponer a sus asambleas locales la fusión o federación de sus respectivos partidos. El mismo día el Consejo Nacional

(1)

El Liberal, 29-10-33.

de Acción Republicana trataba el asunto, acordando dejar para una reunión próxima el decisivo aspecto de si había de irse a una federación o a una fusión (1). En su reunión del día 6, el Consejo Nacional trató de varios problemas organizativos (2).

Se acordó en ella realizar una extensa campaña de propaganda a partir de enero por toda España. Se decidió proceder a una integración de las ponencias aprobadas en las últimas Asambleas con otras recientemente elaboradas para sintetizar y poner al día el texto programático del partido. Se nombró otra comisión para las gestiones de publicación de un diario que se venían realizando y por último se trató del tema que nos ocupa, la fusión de los partidos de izquierda. No se tomó sin embargo ningún acuerdo pues, según el Consejo Nacional, dado el proceso irreversible de abajo arriba que se había iniciado para lograr la fusión, se decidió esperar a que los organismos locales se reuniesen e hiciesen las propuestas de unión a los organismos nacionales respectivos.

La misma decisión da claramente a entender que el proceso era contemplado con buenos ojos. Por lo demás la impresión de pasividad que dicha referencia parece indicar debía encubrir la existencia de negociaciones ya en curso; el testimo-

((1)

El Sol, 3-12-33.

((2)

El Sol, 7-12-33.

mio de Azaña sobre su dedicación a la tarea de la fusión basta para comprender que en modo alguno fue solo un proceso de abajo a arriba. Formalmente fue este el procedimiento que se siguió, lo cual como también respondía a una realidad confería una mayor solidez a la unión.

No todo fue fácil sin embargo. Los radical socialistas independientes opusieron reparos a la fusión, mostrándose más partidarios de una federación. Acción Republicana en cambio bien pronto se decidió por una fusión absoluta, negándose con buen criterio a un intento que ya había fracasado a nivel parlamentario con la FIRPE. La ORGA en cambio aceptaba la fusión incondicionalmente, como los federales que seguían a Araúz. Estos problemas fueron tratados en la reunión del Consejo Nacional del 2-2-34 (1).

Otra cuestión confusa fue la amplitud que iba a tener el proceso unitario. En las gestiones previas de esta época intervinieron los federales en conjunto, la izquierda radical socialista, los radical socialistas de Gordón... Sin embargo poco a poco fueron quedando fuera varios de estos grupos. Respecto a los últimos se dijo en esta reunión de febrero del Consejo Nacional que no se les había invitado por ahora, pero que se haría una vez fusionados los partidos que habían colaborado con Azaña. Tras los primeros contactos generalizados se fue cerrando el círculo sólo a los partidos más cercanos y que

((1) *El Sol*, 3-2-34.

estuviesen dispuestos a la plena fusión. De esta forma quedaron marginados el grueso de los federales quienes declararon ser contrarios al procedimiento de fusión y calificaron de "pequeña minoría concejil" a los federales que participaban en la fusión. Mientras en los primeros momentos sin embargo los partidos que quedarían fuera reclamaban la unión de todas las izquierdas republicanas con frecuentes notas a la prensa, más tarde, cuando por la citada u otras divergencias (que se basaban fundamentalmente en cuestiones políticas de fondo) se hizo evidente el carácter limitado de la fusión, dichos partidos respondieron constituyendo una federación de partidos, como habían propugnado siempre los federales. En ella quedaron incluidos éstos, los radical socialistas ortodoxos y la izquierda radical socialista. La federación se limitaba sin embargo a Madrid, y dudamos que tuviese alguna vigencia o que se extendiese a otras provincias (1).

Es de suponer también que por parte de los tres partidos que fueron a la fusión no se propiciase la participación de estos otros para no restar homogeneidad al nuevo partido, y teniendo en cuenta que al fin y al cabo habían combatido duramente la política de los gobiernos Azaña. Hubiera sido sorprendente que Azaña hubiera visto sin recelo a la izquierda Radical socialista que con tanto ardor le habían combatido con ocasión de Casasviejas ingresar en el nuevo partido, o a Marcelino Do-

(1)

El Liberal, 28-3-34.

mingo ver a su gran oponente en el antiguo PRRS y promotor de las diferencias que acabarían con el partido (Gordón Ordás) sentarse ahora de nuevo en la dirección de la misma organización. Tanto más cuanto que el nuevo partido nacía como impulsor de una política semejante a la realizada, con un programa resultado de los dos años de experiencia gubernamental y con una orientación semejante.

En concreto el PRRS denunció el hecho de que no se le hubiese invitado a las reuniones oficiales con el objeto de la fusión, y manifestó públicamente por ello su disgusto. Parece claro por tanto que hubo una marginación de los sectores que no se consideraban muy identificados políticamente.

El PRRS insistió también en otro documento sobre su desacuerdo programático y sobre el enjuiciamiento de la labor de los gobiernos Azaña como explicación de la no participación en la fusión final. Parece más bien una manera discreta de paliar el efectivo marginamiento sufrido y denunciado por ellos mismos (1).

También la Izquierda Radical socialista en un extenso comunicado denunció la marginación de que habían sido objeto y la duplicidad de conversaciones pro unión que habían desembocado en la fusión de tan sólo parte de los partidos de izquierda, por medio de contactos restringidos entre ellos (2).

((1)) Sobre la actitud radical socialista, *El Sol*, 8, 9 y 16-2-34.

((2)) *El Sol*, 20 y 22-2-34.

Mientras tanto, llegaban noticias de provincias sobre la fusión en ellas de las organizaciones locales de Radical socialistas independientes y Acción Republicana y en al gun caso de otros partidos de los que a nivel nacional quedaron fuera de la unión. Podemos citar entre otras localidades a Bilbao, Valencia, Granada, Badajoz, Novelda, Valdepeñas, Burgos, Guadalajara, Alava, San Sebastián, etc. (1).

En otros casos las organizaciones locales de los partidos se declararon autónomas en espera de la fusión y constitución del nuevo partido a nivel nacional.

A mediados de febrero ya habían llegado a un acuerdo sobre la fusión Acción Republicana, RSI y ORGA (sin decidirse todavía los federales autónomos), comenzando una comisión de enlace a trabajar en la redacción de Estatutos del nuevo partido y en el texto programático (2). Este sería hecho público el 11 de marzo (3):

Los representantes de Acción Republicana en la comisión fueron Velao, Esplá y Ramos, y por los radical socialistas independientes, Salmerón, Muñoz Martín y V. Kent.

((1)) Abundan tales noticias en *El Sol* y *El Liberal* de febrero y marzo.

((2)) *El Sol*, 14-2-34; estos sectores federales se debieron separar al final del proceso de fusión pues a partir de finales de febrero solo aparecen los otros tres grupos como partícipes del mismo.

((3)) *El Liberal*. *Vid. infra*, cap.

Según afirma el propio Azaña (1), tras la derrota electoral el único tema que le ocupó tiempo y gestiones fue el conseguir esta fusión. El fue uno de los más firmes defensores y probablemente el decisivo de que se llegase a una fusión y no se quedase en una mera federación; ya hemos visto que este fue el criterio de Acción Republicana frente al inicial de los radical socialistas independientes y es fácil que el acuerdo incondicional de la Orga con la propuesta de fusión debiera bastante a la amistad personal de Azaña con Casares. El unir organizaciones ya formadas es algo en todo caso difícil; aquí se dieron como era de esperar frecuentes obstáculos de desconfianzas y personalismos que hubo que vencer y en cuya superación suponemos que debió ser decisiva la autoridad de Azaña sobre unos y otros. Según él mismo cuenta, los de Acción Republicana desconfiaban de los radical socialistas por su demagógica actuación en las Cortes Constituyentes, además de su habitual indisciplina que al cabo les había llevado a la división del partido. Por parte radical socialista era natural que se viera aparejada la unión a una "posible pérdida de importancia, porque bien claro estaba que la dirección del nuevo partido no iría a ellos" (2).

Acción Republicana celebró su última Asamblea nacional el 31 de marzo. Cumplidos todos los trámites reglamentarios

(1)

Azaña, OC. IV, p. 660.

(2)

Azaña, *ibid. ibid.*

(aprobación de actas, etc.) sin ningún contratiempo se leyó por el secretario de la mesa el documento político elaborado por el Consejo Nacional que fue aprobado por unanimidad. El documento cuyo texto reproducimos viene a presentar la fusión como un acto imprescindible dadas las circunstancias, aunque el partido, dada su trayectoria política, podía mirar sin preocupación el futuro (1).

Para la discusión del ideario y Estatutos del nuevo partido el procedimiento que se siguió fue el de nombrar tres comisiones entre los delegados de la Asamblea de Acción Republicana para la Asamblea conjunta. La designación de estas tres comisiones fue el último acto de la Asamblea. A continuación se reunieron dichas comisiones, presididas por Esplá la de Estatutos, Ramos la de Ideario Político, y Ruiz Funes la encargada del proyecto de declaración política del nuevo partido.

Los delegados para la Asamblea conjunta venían nombrados en ciertos casos por las asambleas provinciales respectivas (procedimiento que suponemos que sería el regular), y en los restantes casos se acordó que fuese la mesa y el secretario general -Alvarez Ugena- quien los designase.

Simultáneamente a esta Asamblea de disolución se reunía el congreso extraordinario del Partido Radical Socialista

((1))

Vid. Cap. I, 1 a.

Independiente con la misma finalidad. El PRG había decidido la fusión en su Asamblea del 26 de marzo (1).

El número de representantes de cada partido en la Asamblea conjunta debió ser una por provincia, pues el número máximo de votos que recibieron los miembros del Consejo Nacional del nuevo partido fue de 81.

Sabemos además que el PRG había designado 4 representantes, uno por provincia (2); Acción Republicana y PRSI se repartía por tanto los 77 delegados restantes.

Los días 1 y 2 de abril tenía lugar la tan ansiada Asamblea de fusión entre las tres organizaciones políticas. Como normas de procedimiento para la asamblea se habían acordado previamente unas reglas; de acuerdo con ellas se nombró la mesa y la comisión dictaminadora de actas, compuesta por los secretarios de los Comités ejecutivos, los de la Comisión organizadora y tres miembros de ésta. Por Acción Republicana eran respectivamente Alvarez Ugena, Antonio Velao y F. Carreras. Por los otros partidos fueron Barnés, Martínez Fortela, Muñoz, González López, Villarías e Insua.

Dicha comisión aprobó todas las actas sin dificultad excepto dos, precisamente de Acción Republicana, la de Cáceres y la de Alicante, por problemas formales, siendo aprobadas ti-

((1)) Alfonso Bozzo, *Los partidos políticos...*, p. 129.

((2)) *Ibid.*, p. 131.

nalmente por aclamación al constar a la Asamblea que no había mala fe

Tras nombrarse las necesarias mesas y comisiones se discutieron a lo largo de los dos días las ponencias sobre ideario político, estatutos, declaración de afiliados y declaración política. Las comisiones estuvieron compuestas por los siguientes delegados:

Ideario Político:

Barcia	A.R.
Fernández Clérido	A.R.
Doperto	A.R.
Carreras	A.R.
Puig	
Vela	
Lezama	
García Becerra	
Joven	
Gutiérrez Somoza	
Varela	

Estatutos:

Polanco	A.R.
Serrano Batanero	A.R.
Viana	A.R.

Escobedo

Montilla

A.R.

Ballester

Jaén

Aguado

Vargas

Acosta

Maquieiera

Núñez

Saura

Declaración de afiliados:

Escribano

A.R.

Vergara

A.R.

Rodríguez Mata

A.R.

Granados

Montellano

Teijeiro

Caamaño

Saura

Declaración Política:

Gil Esquerdo

Andrés Casáus

A.R.

Bengaray A.R.

De Castro A.R.

Osorio Tafall A.R.

Cremades

Puig

Villarías

Pérez Xambó

Insúa

Xesteira

El día dos, por la tarde, terminadas de discutir las pponencias, se eligió al Consejo Nacional de Izquierda Republicana, que al igual que el primitivo de Acción Republicana contaba con 25 miembros. Quedó constituido así:

Presidente: A.R. Manuel Azaña 81 votos

Vicepresidente: Marcelino Domingo 79 "

Secretario general: José Salmerón 78 "

Vocales: Casares Quiroga 81 "

A.R. Ruiz Funes 81 "

A.R. Sánchez Covisa

A.R. Gabriel Franco

A.R. Valentín Alvarez

Gregorio Vilatela

J.M. Díez Villamil

Tomás Martín Hernández

Manuel Muñoz Martínez

Emilio Artal

Francisco P. Carballo

Teófilo Sevilla 80 votos

R. Seijas 80 "

Manuel García Becerra

A.R. Ramón de Viguri

Salvador Quiemades

A.R. José Palanco Romero

Juan José Cremades

A.R. Luis Bello 78 votos

Santiago Pi y Suñer 78 "

A.R. Manuel Andrés Casáus 77 "

Felisindo Alvarez Xesteira 77 votos

La ponencia sobre declaración política fue defendida con un discurso por Ruiz Funes, quien fundamentalmente propugnó la consubstancialidad de la República que ellos, los republicanos de izquierda defendía, con los ideales laicos y de progreso social impuestos el 14 de abril y ahora postergados. Lo que procedía era la reconquista de la República.

Como es natural las reacciones suscitadas por la consecución de la fusión fueron muy distintas en los diferentes sectores políticos. Entusiasmo y aplauso en la prensa más afectada como *El Liberal*, que había alentado la fusión en todo momento tras la derrota de noviembre, dando siempre noticias optimistas sobre el proceso que desembocó en la unión final.

Con escepticismo y una cierta indiferencia por parte de *El Sol*, quien afirmaba en su editorial del 1 de abril que sólo en la medida que consiguiese transformarse en un nuevo partido diferente de los anteriores podría aportar algo positivo al panorama político y adquirir vigor. *El Sol* basaba su postura en la continuación de la crítica a la política que en su día propugnaron los líderes del nuevo partido. Dado que éstos adoptaban precisamente la postura inversa de reivindicar frente a la situación presente aquella política, el editorial adoptaba una actitud reservada frente al intento.

Por otro lado añadía con razón que lo hecho era sólo un primer paso a partir del cual empezaba la difícil tarea de formar un instrumento de gobierno. La ausencia de renovación personal en sus líderes, aumentaba las desconfianzas del periódico. Su conclusión era "¿Qué conseguirán con estar un poco más juntos los que siempre lo han estado mucho en el Gobierno y fuera del Gobierno, en las elecciones y aparte de las elecciones?".

Los socialistas aplaudieron la unión y la contemplaron como un posible recomenzar de los republicanos. En los editoriales de aquellos días, sin dejar de marcar las diferencias que les separaban, confiaban en que la rectitud política y moral que concedían sin regateos a Azaña, sirviera para encauzar al nuevo partido en la tarea común de rescatar la República. Parece que tras el discurso de Azaña del 11 de febrero -encarecidamente elogiado (1)-, y ante la reorganización de los republi-

(11) *El Socialista*, 13 y 14-2-34.

canos de izquierda parecían conceder de nuevo un cierto crédito a éstos para posibles tareas comunes (1). Aunque las reticencias, las acusaciones de pasadas debilidades, etc. subsistían, el tono era otro del de los editoriales y artículos de noviembre, diciembre y enero, en los que se daba por imposible cualquier relación entre republicanos de izquierda (2) y socialistas.

Por último y como se podía suponer *El Debate* contemplaba con marcada hostilidad la unión de los republicanos, como ya había hecho con la coalición electoral de los republicanos para las municipales catalanas de enero del 34 (3).

(1) *El Socialista*, 27, 28, 30 y 31-3-34.

(2) *El Socialista*, 25, 26 y 30-11-33; 7, 27 y 28-12-33; 3 y 13-1-34.

(3) *El Debate*, 9-1-34.

TE 1921-2

SEGUNDA - PARTE
=====

CAPITULO - VI
=====

PROGRAMA Y COMPORTAMIENTO PARLAMENTARIO
=====

DE ACCION REPUBLICANA
=====



1. ACCION REPUBLICANA, UN PARTIDO REFORMISTA

ACCION REPUBLICANA, UN PARTIDO REFORMISTA

En la primera Asamblea nacional de Acción Republicana, en mayo de 1931, se aprobó un programa en el que se tocaban, aunque muy sumariamente, todos los puntos de una política a desarrollar desde el poder (1).

A pesar de su brevedad nos permite juzgar sin equívocos cuál era el planteamiento del grupo ante los diversos problemas nacionales de mayor trascendencia. Desde luego se le puede considerar como un programa reformista bastante avanzado -dentro del contexto español de la época- que aborda la reforma social y agraria, la democratización del Estado y de la política, un laicismo absoluto, el reconocimiento de las autonomías regionales, la reforma del Ejército y un programa de impulso de la economía. Podemos avanzar, ya que luego lo comprobaremos al analizar la actuación parlamentaria efectiva en torno a estos puntos, que aunque muchas de las soluciones esbozadas difícilmente podrían considerarse hoy de izquierdas, sino más bien como propias de un Estado moderno, para la España de 1931 era un programa realmente progresista e incluso audaz en ocasiones.

Desde un punto de vista político general era un reformismo burgués que podía constituir una política transaccional, dentro del sistema de partidos republicanos, entre una política conservadora defendida por una derecha moderada y la impulsada

(1)

El Liberal, 29-5-31. Vid. Apéndice I, 1 a.

por el partido socialista. Decimos una derecha moderada, no reaccionaria a ultranza -que es lo que efectivamente llegó a ser la Ceda-, pues con ésta no había transacción posible. Y la razón de ello es que el enorme atraso de la sociedad y el Estado español exigían, incluso para los planteamientos de una derecha moderna, ciertas reformas ineludibles; la posición ultraconservadora de rechazo total a una modernización de las estructuras sociales y políticas que la derecha católica se empeñó en mantener y a la que arrastró al partido Radical, posibilitó la polarización antagónica que desembocó en la guerra civil.

Frecuentemente se ha caracterizado la política desarrollada por los gobiernos Azaña, que a duras penas pudieron lograr el cumplimiento cabal de algunos de los puntos de su programa, como llena de extremismo y radicalismos inútiles. Pronto veremos que en efecto había aspectos en los que se pudo actuar con cierto sectarismo innecesario, pero que globalmente no pasó de ser un intento de plasmar de forma moderada y progresiva el programa que comentamos, una reforma progresista, de un izquierdismo avanzado para el contexto español de la época, pero en modo alguno una política de carácter socialista, como se le achacaba entonces.

Con estas apreciaciones globales estamos intentando situar el programa que iba a inspirar la política española -aunque escasamente podían imaginar los que participaban en mayo de 1931 en esta Asamblea que iba a ser así- durante los dos años siguientes, desmarcándolo de dos caracterizaciones frecuentes,

entonces y ahora, tanto en obras de propaganda política como en la bibliografía científica. Por un lado la que situa la política azañista en una extrema izquierda lindando con unas reformas plenamente socialistas. Esta fue una "inculpación" que Azaña hubo de rebatir frecuentemente en las Cortes, ante los ataques de radicales y extremas derechas. Pero lo curioso es que en parte de la bibliografía conservadora sigue manteniéndose con pretendida seriedad tal idea, tachando la política de Azaña, los autores más extremos, de antipatriota, disolvente, etc. (1).

Sin entrar a considerar pseudo argumentaciones de esta índole, considerar la política de Azaña como radical es desconocer la enorme distancia entre un programa socialista y el de Azaña. Esta era en realidad una transacción entre las reformas más inevitables y las propuestas socialistas, que en ningún caso llegaban a alcanzar.

Y por el otro extremo tenemos la posición inversa de calificar todo el programa azañista como una pacata reforma, excepto en una cuestión en la que incluso pudo excederse, la religiosa. Las críticas desde este punto de vista suelen referirse a los aspectos sociales y económicos de su política.

(1)

Un ejemplo típico es la pseudo historia de Arrarás; pero también autores como Robinson, *Los orígenes...* por ejemplo, pág. 148, tachando de "antipatriótica" la reforma militar de Azaña.

Son obras que no alcanzan un nivel mínimo de rigor histórico.

Hay que distinguir aquí entre programa y resultados. Dada la generalidad de los términos programáticos aprobados por Acción Republicana en 1931 -programa que podemos considerar un avance de lo que sería la política de Azaña en el poder- no cabe juzgarlo como excesivamente moderado ni radical. Con pocas precisiones se venía a afirmar la necesidad de la reforma agraria, de mejoras sociales, reforma de los impuestos, etc.

Sí en estas materias las críticas de la insuficiencia de la política republicana son más frecuentes y agudas es porque su solución era más urgente y a la vez más decisiva para la estabilización de la República.

Frente a estas dos posiciones, la tesis que sustentamos es que con todas sus insuficiencias -que las tenía sin duda- la política desarrollada en 1931-33 era un intento de aplicar, en medio de grandes dificultades, uno de los pocos programas posibles para la reforma y modernización de España que podían darse en aquella coyuntura nacional e internacional.

Vamos a estudiar los pocos textos programáticos de Acción Republicana con que contamos y simultáneamente la actividad de los diputados de Acción Republicana en las Cortes, deteniéndonos en sus principales intervenciones y enmiendas tanto a la Constitución como en la posterior actividad legislativa. La escasez de ministros de Acción Republicana (la cartera de Guerra, a cargo de Azaña, el marginal ministerio de Marina, Giral, y el breve paso por Hacienda de Viñuales), y las caracterísis

ticas de un gobierno de coalición, nos impiden analizar la obra de los distintos ministerios como intentos directos de aplicación exclusiva del programa de Acción Republicana (1).

Nos centramos por tanto en la influencia de los diputados en el plano parlamentario para hacer luego unas consideraciones sobre el significado global de la política del gobierno en la materia de que se trate. Es necesario precisar a este respecto que a pesar de la importancia de los plenos en el régimen parlamentario de la II República, en numerosas ocasiones las transacciones y las influencias de partido tenían lugar en los pasillos y en las comisiones, por lo que sólo observamos una parte del proceso, si bien la más decisiva; para los tramos oficiosos de la actividad legislativa son inapreciables los testimonios del diario de Azaña.

En último lugar, dentro de cada epígrafe, comentamos el texto programático fundacional de Izquierda Republicana, de marzo de 1934, donde puede observarse el efecto de la experiencia gubernamental de dos años sobre los objetivos políticos que Acción Republicana y más globalmente el republicanismo de izquierdas se planteara en 1931 (2).

(1) En un Gobierno de coalición ni siquiera los ministerios ocupados por los miembros de un partido pueden considerarse plasmación exclusiva de las concepciones programáticas de ese partido. Sin embargo en este caso hay que considerar que la política general de los gobiernos de Azaña venía a coincidir considerablemente con el programa de Acción Republicana.

(2) *El Sol*, 11-3-34.

Un estudio a fondo de la política gubernamental en los diversos departamentos ministeriales queda fuera de los objetivos y alcances de esta investigación.

Por ello nos limitamos a los aspectos de esta política más característicos y que han suscitado mayor polémica: política religiosa, enseñanza, política militar, regional y agraria. En todos ellos seguimos el esquema indicado: programa de 1931, y posteriores si los hay, actuación parlamentaria de Acción Republicana, juicio sobre la política gubernamental y programa de Izquierda Republicana.

2. CUESTION RELIGIOSA Y DOCENTE

A. PROGRAMA DE 1931

PROGRAMA DE 1931

El programa de mayo de 1931 enunciaba brevemente los objetivos globales de una laicización completa del Estado y de la enseñanza. Ambas cosas las examinamos juntas pues su planteamiento y resolución fueron unidos, bien entendido que el nexo de unión era la situación de la enseñanza española, a cargo en su mayoría de los institutos religiosos. Una política laica a ultranza como la republicana se plantearía como cuestión de supervivencia a largo plazo la necesidad de crear ciudadanos a partir de la escuela, en la medida en que la enseñanza impartida por las órdenes religiosas se consideraba no sólo deficiente sino políticamente comprometida en la defensa de valores conservadores; la hostilidad que pronto surgió entre la República y la Iglesia vino a hacer más acuciante el problema.

El programa decía: "Estado laico. Separación de la Iglesia y el Estado. Secularización de instituciones y órdenes religiosas.

Monopolización de la enseñanza por el Estado para la defensa de la República y en interés de la cultura. Escuela única. Primera y segunda enseñanza gratuitas".

Si para distinguir entre política laica y política anticlerical nos basamos en que la primera trata únicamente de separar las actividades de Iglesia y Estado, siendo aquella, o mejor dicho las diversas confesiones religiosas, instituciones que con status jurídico especial o no, quedan sometidas a las

normas generales del Estado pero sin sufrir privación de derechos por su especial naturaleza religiosa, es indudable que ciertos aspectos de la política republicana cabe calificarlos de anticlericales. En el enunciado programático citado se evitaba sin embargo ese carácter, si bien se propugnaba no laicización absoluta.

Lo único que resalta en el primer apartado es la secularización de órdenes e institutos, esto es su sometimiento a la legislación común y por lo tanto con sus mismos derechos y obligaciones sin que se propugne régimen especial alguno (1).

Más polémico sería sin embargo la calificación de la absorción por el Estado de todas las actividades docentes. Viene a ser aceptado sin contradicción que la ~~co~~alición de grados sea una función exclusivamente estatal.

No sería sin embargo unánimemente admitido el que la enseñanza estuviese exclusivamente a cargo del Estado, lo que excluiría no sólo a instituciones religiosas sino también a las privadas y laicas. Es algo indudablemente no liberal, en el sentido ideológico tradicional del término, aunque en la medida en que puede considerarse más igualitario, es simultáneamente más democrático. Punto al fin y al cabo en el que liberalismo y democracia divergen, no podemos adentrarnos nosotros en la dis-

(1)

Sobre el régimen jurídico de las confesiones religiosas, vid. Castells, *Las asociaciones* ...

cusión del problema, y lo hemos planteado con el único objetivo de clarificar de forma explícita la distinción entre laicismo y anticlericalismo. Nosotros vamos a considerar una política así, de un estatismo radical, como meramente laica, en tanto en cuanto no implicaba discriminación respecto a la Iglesia católica por su carácter de confesión religiosa, aún siendo en la España de 1931 la más afectada (1).

En este sentido las breves alusiones del programa de Acción Republicana las podemos calificar de laicistas radicales pero no de anticlericales. La razón de la monopolización estatal de la enseñanza viene sintetizada en dos argumentos que resumen la posición progresista desde todo el siglo XIX español: necesidad de elevar el nivel de la enseñanza y socialización política a cargo del Estado con la finalidad de que de la escuela surgiesen ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes cívicos (2). Esa tradición era la recogida aquí al afirmar la necesidad de tal monopolio como medida de defensa de la República, pues se desconfiaba de la actitud proselitista de la Iglesia en su labor docente, inculcando más unos valores de sumisión que de civismo. El argumento lo explayaría en detalle Azaña el 13 de octubre.

(1) Los ambientes cercanos a la Institución Libre de Enseñanza habían criticado siempre esta tendencia estatista de ciertos sectores progresistas españoles, y criticarían la solución dada finalmente al artículo 26 de la Constitución. Azaña lo sabía y en su discurso del 13 de octubre al anunciar su propuesta de prohibir la enseñanza a las órdenes religiosas advirtió que "iba a disgustar a los liberales españoles".

(2) Sobre esta tradición pedagógica progresista española como antecedente de la política republicana, vid. Pérez Galán, *La enseñanza...* y Samaniego Boneu, *La política educativa...*

No quiere esto decir que el partido de Acción Repu**u**blicana y sus planteamientos ideológicos estuviesen carentes de elementos anticlericales. En mayor o menor medida en todo el republicanismo de izquierdas latían rasgos anticlericales, reacción obligada al clericalismo efectivamente vigente, a la absorción por la Iglesia de funciones propias del Estado y a la intransigencia de que haría gala frente a la política de la República. No olvidemos que incluso los sectores más abiertos de la Iglesia católica -representados como es sabido por monsenor Vidal y Barraquer y por el nuncio Tedeschini- rechazaban de plano, en consonancia con las posturas doctrinales de la Iglesia católica de entonces, el principio del laicismo del Estado, la libertad de cultos y otros principios hoy indiscuti**u**dos (1).

El partido de Acción Republicana no era ninguna excepción al respecto, como tampoco Azaña, y ello lo veremos al analizar su actuación legislativa. Pero hemos querido resaltar la naturaleza no estrictamente anticlerical de los en**u**nciados del partido, pues ello ha de servir para distinguirlo de otros partidos republicanos que hacían gala de sus posturas abierta-

(1)

Para la actitud de Vidal y Barraquer en especial y para la política religiosa de la República es básico el archivo del arzobispo de Tarragona, espléndidamente editado por M. Batllori y V.M. Arbeloa. Res**u**pecto a cómo enfocaba Vidal la inicial situación de la República véase su carta al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pace**u**lli, op. cit. p. 79, donde pueden advertirse con claridad forzosos límites de la moderación del prelado más dúctil y político de la Iglesia española de la época.

mente anticlericales (1).

Digamos por último que la actitud conciliante de ciertos sectores de la Iglesia, así como de la derecha católica en un primer momento (las negociaciones de los dos citados prelados con el Gobierno Provisional, el inmediato acatamiento de *El Debate* a la República (2) se pueden calificar así, sólo en comparación con otras posturas hostiles y teniendo en cuenta la antes aludida intransigencia como actitud global ; la postura de Vidal y Tedeschini era escasamente compartida por el papa Pío XI, lo que explica esta intransigencia posterior de la Iglesia (3). No hay que olvidar además que asimismo las actitudes moderadas en el campo republicano eran tales en comparación con una tónica general de anticlericalismo que también en los sectores moderados afloraba en alguna medida.

(1)

Para conocer el distanciamiento de Azaña del pensamiento religioso tradicional propio del catolicismo de su época es imprescindible "*El jardín de los frailes*".

(2)

Editorial de 15-4-31; pronto desaparecería esta actitud, vid. Montero, *La Ceda...*, vol. II.

(3)

Vid. AVB, II, p. 36.

B. DISCUSION DE LA CONSTITUCION

DISCUSION DE LA CONSTITUCION

Acción Republicana desempeñó un papel importante en el proceso de aprobación de los artículos constitucionales que se referían a la situación jurídica de las Confesiones religiosas en general y de la Iglesia católica y las órdenes religiosas en concreto. En efecto un grupo de diputados del partido encabezados por Enrique Pamos había presentado -el 29 de septiembre- (1) una enmienda que era una solución de transacción bastante moderada para el ambiente parlamentario existente.

El proyecto que había elaborado la Comisión constitucional estipulaba la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. Frente a ello la enmienda de Acción Republicana decía:

"Se establece la separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia Católica será considerada como Corporación de Derecho público: Igual calidad podrán tener las demás confesiones religiosas que lo soliciten, si por su constitución y el número de sus miembros ofrecen garantías de permanencia. El Estado no podrá sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Un Estatuto, votado como complemento de esta Constitución, establecerá el régimen aplicable a la Iglesia católica".

Si bien Azana había sido partidario a partir de los sucesos de mayo de la expulsión o disolución de los jesuitas ,

(1)

DS, n.46, ap. 2.

para evitar que hacerlo bajo presión popular en caso de que se repitieran incidentes de ese tipo (1), y había insistido posteriormente en algún consejo de ministros cuando el tema ya había dejado de preocupar al Ministerio, nada de esto se reflejaba en la postura actual de Acción Republicana. La enmienda es a todas luces más moderada que la propia enunciación programática del partido. Era una separación entre Iglesia y Estado suavizada por un régimen especial para las Confesiones religiosas -por lo menos a la Católica- que quedaba para ser elaborado en el futuro y sin que se incluyese ningún condicionamiento de su contenido; desde luego cortaba constitucionalmente el paso a cualquier acción contra las Órdenes religiosas, fuera de las leyes comunes vigentes. Fue probablemente este carácter "excesivamente" conciliador para el ambiente de la Cámara el que obligó a la minoría por medio de otro grupo de sus diputados encabezados también por Ramos, responsabilizado de esta materia, a presentar días después -el 6 de octubre- la misma enmienda con un añadido que endurecía su contenido a la vez que conservaba la aportación característica de la enmienda, la consideración de la Iglesia como una corporación de Derecho Público. El último apartado quedaba así:

"Un Estatuto, votado como complemento de esta Constitución, establecerá el régimen aplicable a la Iglesia Católica y sus ministros. Asimismo las Cortes Constituyentes determinarán en una ley qué Órdenes religiosas serán disueltas y las

(1)

Azaña, OC.IV, p. 51.

condiciones especiales aplicables a cada una de las que subsistan" (1).

Con esta modificación se dejaba la puerta abierta a la disolución de las órdenes religiosas que se estimase oportuno, quedando dicha posibilidad como una espada de Damocles sobre ellas. Este agravamiento estuvo producido por la falta de apoyo que la primera enmienda había sufrido. Por el contrario esta segunda enmienda fue favorablemente acogida. Tras las consultas parlamentarias estaban inclinados a votarla radicales, gallegos, federales, catalanes e incluso los vasconavarros como mal menor, aunque el último párrafo les pareciera, lógicamente, inadmisible (2).

Pese a que Vidal la calificase de inaceptable como solución de verdadera concordia, probablemente no la hubiera rechazado de estar en su mano, pues la posible disolución de órdenes religiosas quedaba para una ley posterior que incluso podría no venir.

Sin embargo la enmienda la hizo imposible Fernando de los Ríos. Es difícil comprender qué movió a éste a abortarla; siendo él contrario a la disolución de las órdenes, tal como pretendía el dictamen que su partido apoyaba, la enmienda era al fin y al cabo una solución más acorde con el espíritu moderado de su intervención. Es más difícil todavía de comprenu

(1) DS, n.50, ap. 2, 6-10-31.

(2) Declaraciones de Ramos a *El Sol*, 8-10-31, cit. en Arbeloa *op.cit.*p.91 n.69.

der las razones que le impulsaron a torpedear la enmienda de Ramos y Acción Republicana si consideramos que tenía de su partido el encargo de limitarse a realizar un discurso informativo, sabiéndole contrario al dictamen. También el Gobierno había acordado que el ministro de Justicia pronunciase un discurso meramente informativo. El caso es que en su intervención (1) la crítica de la enmienda Ramos estuvo basada en argumentos jurídico políticos, considerando que precisamente la corporación de Derecho público atentaba contra el principio de separación entre Iglesia y Estado al concederle éste parte de sus atribuciones a aquélla; en su opinión se atentaba incluso a la soberanía estatal, haciendo dejación de ésta en beneficio de la Corporación que se tratase.

Tras la intervención del ministro de Justicia el panorama varió considerablemente. La enmienda Ramos estaba hundida pues el Congreso ya no era partidario de la figura de la corporación pública. También Albornoz hizo alguna alusión a dicha solución insistiendo en los argumentos de De los Ríos. Poco pudo hacer Ramos cuando habló, inmediatamente después de aquél, el día 9 (2). Defendió la oportunidad política de la enmienda que dejaba al Estado un magnífico instrumento para controlar la actuación de la Iglesia. No era ninguna dejación de soberanía, pues a la corporación pública eclesial se le concederían

(1)
DS, n.52, p.3.

(2)
La intervención de Ramos en DS, n.53, p. 21.

cuantas atribuciones el Estado quisiese y no más. Rabatió asimismo otros argumentos de De los Ríos, negando por ejemplo que la Iglesia hubiese sido hasta ese momento corporación de Derecho público.

Para Ramos lo decisivo era la concesión por el Estado "de una cierta autonomía a una entidad o Corporación encargada de un servicio público o de un fin de interés público, marcándole la frontera dentro de la cual tiene que desenvolverse y reservándose el Estado la inspección y el control supremo sobre esa institución". Terminó Ramos haciendo una advertencia; la enmienda no reflejaba la posición de su partido sino que había sido elaborada con espíritu de transacción para buscar el mayor número de coincidencias posibles en la Cámara. La Constitución que como ley fundamental debía permitir gobernar a las diversas opciones políticas, había de contar con los máximos asentimientos.

El rechazo de la enmienda como consecuencia de la intervención del ministro de Justicia irritó a Azaña quien se lo reprocharía por dos veces en su posterior intervención del día 13, lamentando la "perdigonada" con que antes de nacer la había inutilizado (1), y posteriormente deplorando que con el

(1)

Azaña, OC.II, pags. 49 y 53, IV. 170 y 178. También irritó a Ortega, partidario de la solución propuesta por Acción Republicana, *ibid.*

argumento de autoridad de la palabra del ministro de Justicia hubiera perdido la Cámara todo interés en la enmienda, prestando poca atención a la respuesta de Ramos.

El cambio que decíamos se había producido tras la intervención de De los Ríos, no se limitaba a la inutilización de la enmienda Ramos. Del 8, día de la intervención de De los Ríos, hasta el 13, día en que habló Azaña, las negociaciones habían conducido, tras quedar abandonada la solución de la Corporación de Derecho público, a un nuevo dictamen "moderado" elaborado sobre la base de un texto de Maura (1) y que había sido apoyado en la Comisión por todas las minorías que antes se mostraban propicias a la enmienda Ramos. El antiguo dictamen, convertido en voto particular, seguía recibiendo el apoyo de socialistas y radical socialistas.

El mismo día 13 quedó aprobado el nuevo dictamen, presentado también a la comisión por un miembro de Acción Republicana, Ruiz Funes, quien consultó el texto con Azaña antes de hacerlo. En realidad según afirmaba Azaña, le era indiferente la solución final con tal que se evitase la expulsión de todas las órdenes.

El nuevo dictamen sometía a las confesiones religiosas a una futura ley especial; en esta se habrían de disolver los jesuitas y además aquellas cuya actividad fuera peligrosa para la seguridad del Estado. Entre otras limitaciones se les

(1)

Azaña OC. IV, p.173 y 74; Arbeloa, *La semana...*, p.102, 164 y *passim*.

prohibía la práctica de la industria y el comercio.

La relación de fuerzas era dudosa pues en esta materia los diputados no seguían con frecuencia las posturas de sus minorías. Era probable que el antiguo dictamen, mantenido ahora por los socialistas y apoyado por los radical socialistas resultase aprobado, obteniendo incluso con el apoyo suplementario de miembros de otras minorías, mientras que posiblemente algunos radical socialistas evitarían el votarlo.

En esta situación fue cuando se produjo la intervención del líder de Acción Republicana tras una reunión con su grupo en la que les exployó las ideas globales del discurso (1). Azaña defendió en éste la existencia de una disociación entre la dirección de la cultura y el pensamiento españoles y la religión católica, que le hacía concluir que España ya no era católica, de la misma manera que sí lo había sido en la época imperial española cuando todos los aspectos de la vida de la nación, y en primer lugar su cultura, estaban enraizados con el pensamiento católico. Como vimos no era la primera vez que Azana desarrollaba esta tesis, pero ahora por las circunstancias del momento y por los efectos políticos del discurso adquirirá una divulgación espectacular, divulgación que la derecha sabría manipular para presentar la frase "España ha dejado de ser ca-

(1)

Azaña, OC.IV, p. 176 y II p.49 y ss.

tólica" fuera de su contexto y referida a un absurdo nivel cuantitativo y panfletario.

Las consecuencias de esta interpretación de la historia española, aplicadas al problema político que se discutía, le dictaban a Azaña la solución que proponía, y que se concretaba en la separación de la Iglesia y el Estado -defendiendo la formulación del dictamen- y además la absorción por el Estado de la enseñanza a cargo de las órdenes religiosas. Esta era otra idea de larga gestación en su pensamiento, como lo indican varias alusiones en su diario, además de haberla expuesto en su discurso de Valencia, y estaba incorporada al programa del partido, aunque de una forma estatista, no anticlerical. Ahora sí adquiría un carácter anticlerical, de prohibición específica a las órdenes religiosas. (Es evidente por otra parte, como vimos, que a pesar de la formulación generalizada del programa, la finalidad del mismo era también privar a la Iglesia de la enseñanza). Así pues de las dos agravantes que Azaña introdujo para persuadir a los socialistas a votar el nuevo dictamen, era ésta la que más raíces tenía tanto en su propio pensamiento como en el programa de su partido. La otra consistía en disolver en la propia Constitución a la Compañía de Jesús, en vez de dejarlo para una ley especial. Pero la razón de incluirla fue más de conveniencia política que de convicción; a pesar de que había defendido la expulsión meses atrás, no pensaba hacer alusión al tema, pero un encuentro con Zulueta poco antes de intervenir le persuadió de que, a más de facilitar el cambio de opinión de los socialistas, evitaría desde el principi

pio todo el juego de presiones y de intereses que se movería para evitar que dicha ley especial se dictase (1).

La actuación de Acción Republicana en esta materia fue pues de carácter moderador. En primer lugar por medio de las enmiendas Ramos, y cuando estas se frustraron, a través de la intervención del ministro de la Guerra que zanjó a su favor una batalla probablemente perdida para el nuevo dictamen. No hay que olvidar que la disolución de la Compañía no fue introducida por Azaña, sino que lo único que éste hizo fue incluir la en la Constitución; la verdadera aportación de Acción Republicana por medio de Azaña y el auténtico endurecimiento de su discurso fue la prohibición de enseñanza a las órdenes religiosas. En conjunto la actuación del partido fue de carácter más moderado que su programa, aunque el resultado final del artículo, como consecuencia de la relación de fuerzas existentes en la Cámara, adquiriese un tono parcialmente más radical y teñido de anticlericalismo -por la disolución de los Jesuitas y por la prohibición de enseñar sólo a las órdenes religiosas, que estuvo ausente de la primera intervención del grupo (2).

(1) Azaña, OC. IV, p. 178.

(2) Esta labor de transacción no ha sido reconocida por todos los autores. Ruiz Funes llegó incluso en las discusiones de la Comisión a proponer la supresión de los párrafos que se referían a la no asistencia económica a las Iglesias y a la disolución de las órdenes. Apud F. Meer, *La cuestión religiosa*, p. 75.

No todos los diputados de Acción Republicana estuvieron conformes con las posturas de su partido. En la reunión que el grupo mantuvo antes de la intervención de Azaña, en una tensa discusión, Castrovido, Esplá, Alberca Montoya, y dos o tres más se mostraban de acuerdo con la postura socialista. Las razones de su postura oscilaban entre el convencimiento de que el voto particular socialista era atinado (Castrovido) y la mera conveniencia de votar a su favor para no quedar desmarcados por la derecha (Esplá). Tras prometer abstenerse, por disciplina y no votar la postura socialista, quedaron muy conformes con las líneas generales del discurso de Azaña, excepto Alberca Montoya quien todavía se reservó hasta oír el discurso (1).

Alberca había hablado brevemente el día 10, para defender el texto del primitivo dictamen, que todavía lo era cuando él habló. Fue un discurso confuso en el que sostuvo la necesidad de liberar al niño de los efectos perniciosos que para su espíritu se derivaban de la enseñanza de las órdenes religiosas, afirmando que al tiempo se liberaba de la influencía clerical al verdadero espíritu religioso, de afán por la verdad. No le debió parecer satisfactoria a Alberca la solución

(1)

Azaña, OC.IV. p. 176; aunque no le cita por su nombre es indudable que se refiere a él; en otros pasajes le viene a llamar "loco" y otros epitetos parecidos. Abandonaría Acción Republicana para unirse a la Izquierda Radical Socialista en 1932.

Su discurso en DS, n.54, p. 43.

propuesta el 13 por Azaña, pues votó la enmienda radical socialista -que reproducía el voto particular socialista, retirado tras la intervención de Azaña- y se abstuvo de votar el artículo en su redacción definitiva. Castrovido se abstuvo en ambas ocasiones; Esplá votó siempre con el resto de Acción Republicana (1).

(1)

Sendas votaciones en DS. n.55, p. 62 y 78. Hay que advertir que no siempre que no aparece el nombre de un diputado en una votación nominal significa una abstención deliberada, pues rara vez asistían a las discusiones todos los diputados pertenecientes a una minoría. Sin embargo la asistencia durante la discusión de la Constitución fue en general elevada y especialmente en los temas políticos como lo era el religioso.

C. LEGISLACION POSTERIOR

LEGISLACION POSTERIOR

El artículo 26 de la Constitución exigía una ley especial que regulara la situación jurídica de las Confesiones religiosas. La Compañía de Jesús había sido disuelta a comienzos de 1932 -Azaña hizo coincidir su discusión y aprobación con la represión subsiguiente a la intentona anarquista de enero, para compensar la dureza a que se ^e ~~ve~~ía forzado contra la extrema izquierda (1)- y quedaba por regular lo que en definitiva era más importante, que era el status a que se verían sometidas las Confesiones religiosas, el resto de las órdenes, con las consecuencias que necesariamente conllevaba sobre la enseñanza, que habría de pasar al Estado.

La ley, sometida a la obstrucción de radicales y derechas tuvo una larga andadura parlamentaria, desde que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 7 de octubre de 1932 hasta su promulgación el 2 de junio de 1933. La mayoría se vio forzada a aplicar la guillotina al artículo 31 -luego art. 30- aprobando la Cámara una proposición por la que se declaraba suficientemente debatido dicho artículo, y a refundir los restantes en un solo a efectos de eliminar las discusiones y votaciones de cada artículo; este último artículo sería finalmente el 31 y también se le aplicó la guillotina (2). Como

(1) Azaña, OC.IV, p.313. Un análisis del decreto de disolución y de la normativa que lo desarrolla en Castells, *Las asociaciones...*, p.412-424.

(2) Azaña, OC.IV, p.514, 516 y *passim*. DS n.335, p.18 y ss.; 35 y ss., n.339 p.19 y ss.

remate el Presidente de la República apuró el plazo de 15 días que le concedía la Constitución para promulgar la ley, con gran irritación de la mayoría parlamentaria (1).

En la ley -denominada de Confesiones y Congregaciones religiosas- se desarrollaban las prescripciones de los artículos 26 y 27 de la Constitución.

Establecía la libertad de conciencia y de culto, con necesidad de permiso gubernativo para actos públicos; respecto a las Confesiones religiosas se les concedía libertad para establecer su régimen interior, se declaraban de propiedad pública los templos, edificios y objetos dedicados al culto, aunque siguieran afectados a los servicios religiosos, se prohibía subvencionar económicamente a las Iglesias, se limitaba su capacidad de poseer bienes a lo necesario para atender sus necesidades religiosas y de mantenimiento, y se les autorizaban únicamente a mantener instituciones docentes para la enseñanza de su doctrina religiosa o para la formación de sus miembros. Para las Congregaciones y Ordenes religiosas se regulaba la prohibición de dedicarse a actividades políticas, a la industria, comercio o explotaciones agrícolas, y a la enseñanza -excepto para sus propios miembros-; se estipulaban asimismo una serie de controles sobre sus actividades, bienes, contabilidad, etc., y de acuerdo con la Constitución, permitía la disolución

(1)

Arrarás, *Memorias*, p. 58.

de aquellas que por dedicarse a actividades políticas constituyeran un peligro para la seguridad del Estado.

La ley era, de acuerdo con el espíritu de la Constitución de carácter indudablemente restrictivo, pero no persecutorio, como incansablemente afirmó la derecha y ha repetido cierta bibliografía. Se la puede calificar de anticlerical por la serie de limitaciones que establece a las actividades económicas y docentes de Confesiones y de Ordenes religiosas pero no se puede afirmar que limitase la libertad de culto -a pesar del permiso gubernativo para actos públicos- ni la libertad religiosa.

Azaña tuvo que estar constantemente al cuidado de la discusión parlamentaria, generalmente forzando las transacciones en los pasillos y en la Comisión. En su mismo grupo hubo de lograr que Fernández Clérigo retirase el voto particular que había presentado por el cual se incapacitaba personalmente para la docencia a los ministros y sacerdotes de las Iglesias, así como a los miembros pertenecientes a las Ordenes o Congregaciones, incluso a los que hubieran pertenecido a las disueltas (1). Dicha modificación agravaba notablemente el texto, y su autor no tuvo inconveniente, a instancias de su jefe, en no defender el voto particular y permitir que fuese retira-

(1)

DS, n. 287, ap. 10.

do (1). Como miembro de la Comisión de Justicia, representando a Acción Republicana, Fernández Clérigo intervino en numerosas ocasiones defendiendo el texto de la ponencia frente a las enmiendas presentadas por los diversos grupos.

Otros proyectos consecuencia del laicismo del Estado fueron la ley de secularización de cementerios y la de Divorcio. Aquella establecía el sometimiento a la jurisdicción civil de todos los cementerios, respetando los privados existentes y ordenando que los municipales fueran comunes a todos los ciudadanos sin distinciones confesionales.

Fernando de los Ríos había llevado al Consejo el proyecto incluyendo la autorización de cementerios confesionales. Azaña suprimió dicha posibilidad por el temor de que no se resolviese nada, pues opinaba que se acabaría de nuevo en la utilización de los mismos incluso contra la voluntad de los fallecidos, a pesar de la obligación legal del que el entierro civil fuera forzoso para los fallecidos mayores de veinte años que no hubieran dispuesto lo contrario, de manera expresa. De nuevo vemos asomar un rasgo anticlerical como directa consecuencia de la situación de abuso que existía con anterioridad, en la que el entierro civil venía a tener un carác

(1)

Azaña, OC.IV,p.509; Alcalá Zamora afirma en sus *Memorias* que se opuso terminantemente a que dicha pretensión fuese adelante, amenazando incluso con utilizar el veto presidencial, lo que decidió al Gobierno a intervenir. De todas formas no parece que Azaña fuese partidario de la incapacitación docente de los clérigos; Alcalá Zamora, *Memorias*, p.195.

ter denigrante (1).

Respecto a la ley de Divorcio, Fernández Clérigo presentó una larga serie de votos particulares, en general de carácter técnico jurídico, viendo desechados la mayoría de ellos. La ley aceptaba el divorcio por mutuo disenso.

Recordemos que en el programa de 1931, se incluía la implantación del divorcio vincular, junto con la reforma del Código Civil para modernizar el régimen jurídico y económico de la familia española.

En lo relativo a enseñanza fue Bello quien más se destacó por su preocupación por el tema. Representó a su partido en la Comisión de Instrucción Pública, aunque apenas tiene intervenciones en el pleno referidas a esta materia. En la Asamblea de Acción Republicana de marzo de 1932, se aprobó una ponencia (2) sobre enseñanza, en la cual se pedía en las conclusiones referidas la primera enseñanza "una sólida preparación en los maestros y una mejor dotación económica a sus trabajos; separación en los establecimientos benéficos entre los niños normales y anormales; creación de cantinas, roperos, bibliotecas, y atender de manera eficiente a las actuales clases

(1)

Cfr. el duro artículo de otro miembro de Acción Republicana, Castrovido sobre los abusos cometidos por la Iglesia, en *El Liberal*, 11-2-31.

(2)

No sabemos si en su elaboración participo Bello; posiblemente no, pues presentó una ponencia alternativa.

de adultos hasta que desaparezca el analfabetismo en España"

(1). Todas ellas eran reivindicaciones antiguas de los sectores interesados en las cuestiones de enseñanza; a través de estas fragmentarias conclusiones se puede adivinar una ponencia en línea con la actuación ministerial del primer bienio en el ministerio de Instrucción Pública (2): una racionalización pedagógica, mejora de las escuelas y de la situación profesional de los maestros.

Bello presentó por su parte en esta misma Asamblea otras conclusiones de mayor repercusión política, solicitando que desde el 1 de octubre cesaran las Ordenes religiosas en el ejercicio de la enseñanza, siendo substituidas por el Estado, Municipios e Instituciones privadas, y que se crearan 25.000 escuelas más.

Como sabemos, la substitución tendría que esperar todavía más de un año, hasta la presentación de la ley de Confesiones y Congregaciones, acordándose en ella que fuera el 1 de octubre del 33, excepto la primaria para la que se fijó el 31 de diciembre.

Aunque desconocemos si las conclusiones presentadas por Bello se aprobaron, son muestra del interés por cumplir la

(1) *El Sol*, 29-3-32.

(2) *Vid.* para esta materia las obras citadas de Pérez Galán y Samaniego Boneu.

Constitución en todos sus términos que latía en el partido. En las diversas consultas que los representantes de la Iglesia hicieron a Azaña, éste siempre les contestó que sin ningún deseo de agravar las disposiciones constitucionales se proponía cumplirlas lealmente.

Quizás lo más destacado de la actuación de Bello fue la campaña periodística que emprendió en su breve paso por la dirección del diario *Luz*. Bello escribió sobre diversos aspectos de actualidad de la política de Instrucción Pública; un problema era sin embargo el que atraría toda su atención, coincidente con la proposición que presentara a la Asamblea de Acción Republicana: la substitución de la enseñanza de las órdenes religiosas y la necesaria construcción de numerosas escuelas. Sus artículos eran una llamada de atención sobre la necesidad de acelerar la substitución y de proveer los fondos presupuestarios imprescindibles. Afirmaba Bello: "Habría que contrastar despacio las dos maneras de ejecución hábiles para dar realidad al artículo 26; la manera rápida, que yo defiendo. La manera lenta, que tiene también sus partidarios; unos por convicción, otros cediendo a la fuerza de la circunstancias". Bello, continuaba el artículo reclamando dinero, imprescindible para revolucionar la enseñanza (1).

En enero de 1933 escribió una serie de artículos

(1)

Otros artículos en *Luz*, 15-10, 5-11, 5 y 7-12-32.

(25, 26, 27 y 28) en los que criticaba acremente la política ministerial relativa a construcciones escolares, denunciando la existencia de despilfarro económico. Los artículos provocaron una polémica parlamentaria en la que Llopis y B. Giner de los Ríos rebatieron con cifras los datos proporcionados por Bello. Terciaron también el periódico socialista, defendiendo la gestión ministerial de De los Ríos, y los radicales que aprovecharon la ocasión para criticar la labor gubernamental, ya que fueron ellos quienes dieron a la cuestión estado parlamentario (1).

(1)

Para la polémica vid. Pérez Galán, *La enseñanza...*, p.105 y ss., quien la comenta en detalle.

D, PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

Por último veamos los términos en que las cuestiones del laicismo y la enseñanza se plasmaron en el programa de Izquierda Republicana (1). El punto 6^a, denominado "Laicismo del Estado", decía así: "No basta haber estampado el principio de la Constitución y haber comenzado a implantarlo en la enseñanza; debe hacerse lo necesario para que sea plenamente realizado sin retrasos ni simulaciones. Si las organizaciones confesionales, fuera de su área dogmática, donde se les garantiza la libertad necesaria, se comportan como enemigos de la República, así serán tratadas. La Constitución es la garantía de todas las actividades sociales; pero es, sobre todo y por esencia, garantía del propio Estado republicano. En la República nada sobre ella más que el pueblo".

Parece observarse en este texto un mayor realismo y cautela que en 1931. Se reconoce que el camino por recorrer es todavía muy grande, y que la legislación implantada, empezando por la misma Constitución no es sino una declaración de principios que apenas se ha empezado a aplicar. A la vez se advierte la decisión de defender la aplicación estricta de la Constitución, frente a la política iniciada por las fuerzas derechistas entonces en el Gobierno de obviar dicho cumplimiento; la advertencia a las organizaciones confesionales se inser

(1)

Texto completo en *El Sol*, 11-3-34; ap. I, 1 a.

ta en la línea del laicismo agresivo propio del republicanismo de izquierdas frente a la hostilidad de la Iglesia católica.

El punto 10^a, referido a la enseñanza rezaba así:

"La enseñanza, como deber público, es función privativa del Estado. La escuela será única y obligatoria. La enseñanza se irá haciendo gratuita hasta llegar a los grados superiores. Creación, mientras tanto, de becas numerosas para los alumnos modestos y aventajados. Concebimos la popularización del saber, el cultivo elevado de especialidades y el fomento de la cultura superior, que deben impulsarse con estímulo cuidadoso, más que como preocupación como sentimiento de la República. Substitución acelerada, en cumplimiento de la Constitución de la segunda enseñanza".

De nuevo y aparte los enunciados de carácter ideológico, se vienen a repetir, con algo más de detalle los objetivos plasmados en el programa de Acción Republicana de 1931, y repetidamente defendidos dentro y fuera de las Cortes por la mayoría gubernamental. Pero se observa de nuevo, como resultado de la experiencia gubernamental, una gradación de estos objetivos; es indicativo por ejemplo que al hablar de la substitución acelerada de la enseñanza se haga referencia por lo pronto tan sólo a la segunda, cuando en un texto programático de esta naturaleza, tan proclives a las afirmaciones dogmáticas no hubiera extrañado la pretensión de una sustitución inmediata, tanto de la primaria como de la segunda (algo que según la ley de Confesiones y Congregaciones debía haber sucedido el 1

de enero, aunque el mismo Azaña hubiera considerado dicha fecha como sumamente optimista) (1).

(1)

Azaña, OC. IV, p. 520.

3. POLITICA MILITAR

POLITICA MILITAR

La política militar del primer bienio fue la obra personal, primero como ministro de la Guerra y luego además como presidente del Consejo, del jefe de Acción Republicana. Si bien es claro que su política traducía en la realidad las concepciones que sobre el ejército tenían los republicanos de izquierda, y más en concreto su partido, es cierto que estas concepciones fueron lo suficientemente generales como para que la labor de Azaña trascienda la política de partido para pasar a ser una obra personal.

Por otra razón es importante además el estudio de esta cuestión: me refiero a la controvertida que dicha política fue y ha sido posteriormente. Entonces la discusión se centró en los naturales intereses afectados por la radical transformación del Ejército, y por la violencia de la lucha política en la que no se desaprovechaban los argumentos y apoyos que una cuestión tan delicada como la política militar pudiera proporcionar. Posteriormente, y de forma similar a lo que vimos respecto a la política religiosa, porque las posturas de entonces se han perpetuado en críticas, tachando las reformas tanto de insuficientes por un lado como, especialmente, de "destructoras" del Ejército por otro. En este caso sin embargo sin base alguna y con un cariz que benevolamente se podría calificar a veces de tendencioso.

Obviamente no es nuestra intención (pues ello desbordaría los objetivos de este estudio) hacer una investigación en

profundidad de las reformas introducidas por Azaña en la estructura del Ejército, pero sí lo es analizar sus líneas generales, las principales disposiciones y sobre todo estudiar las intenciones y características de la política desarrollada. Es decir, intentar calificar de una forma no partidista los objetivos de las reformas de Azaña, que como dijimos al comienzo no eran sino una plasmación de los planteamientos ideológicos de una burguesía y pequeña burguesía progresistas en la tarea de democratizar las instituciones fundamentales y la estructura del Estado.

A, PROGRAMA DE 1931

PROGRAMA DE 1931

El programa de mayo del 31 estipulaba: "Siendo España una nación que no siente impulsos imperialistas, sus instituciones marciales deberán reducirse a lo necesario para la defensa nacional en caso de una agresión. Se acomodará el Ejército a la capacidad económica del país, con servicio igual para todos los ciudadanos aptos y limitado al tiempo preciso para una preparación militar adecuada a la eficacia que deben tener los ejércitos. El Ejército colonial será voluntario".

En este breve texto se expresa la idea esencial que tenía Acción Republicana respecto del Ejército que necesitaba España. Se trataba de lograr un Ejército proporcionado a dos variables, las necesidades militares del país y las posibilidades económicas. En cuanto a las primeras bastaba con un Ejército capaz de defender al país de una agresión exterior; como sabemos la ideología anti-imperialista de las fuerzas políticas ahora en el poder se plasmaría en la Constitución al renunciar a la guerra como instrumento de política nacional (art. 6^a). Ello implicaba un ejército reducido pero eficaz. Y en segundo lugar se pretendía un ejército que cumpliendo dicha finalidad supusiera el mínimo peso para el presupuesto. El excesivo número de oficiales en activo todo a lo largo del siglo había representado siempre una enorme carga presupuestaria que impedía precisamente la asignación de recursos para las necesidades de dotaciones, armamentos, etc.

Pero además de un ejército reducido y eficaz la po-

lítica militar desarrollada por Azaña implicaba una transformación más profunda. Pretendía además rehacer completamente la estructura del Ejército, democratizar y republicanizar la oficialidad y eliminar las atribuciones extramilitares de sus mandos (lo cual implicaba suprimir la jurisdicción militar y reducir la influencia social y política del Ejército); trabajó en suma por lograr un ejército profesionalizado, alejado de la política y sometido al poder civil, como no podía menos de ser en un Estado moderno de naturaleza democrática y parlamentaria. Ahora veremos brevemente de qué manera lo intentó y con qué éxito (1).

(1)

De parecida forma sintetiza Salas Larrazabal los objetivos de la política militar de Azaña en el prólogo a la obra de Payne, *Ejército y Sociedad...*, pag. XXX:

- Reducir el personal para limitar el costo de la defensa adecuándolo a los recursos del país y a las posibilidades del presupuesto.
- Lograr una importante disminución del gasto público.
- Dotar a España de la capacidad defensiva de un pueblo libre.
- Republicanizar las filas del Ejército democratizando la institución.
- Replegar a las unidades a sus cuarteles, y
- Reducir la influencia política, social y económica del Ejército".

Las páginas que Salas Larrazabal dedica a las reformas de Azaña suponen un análisis serio aunque sumamente crítico y adverso, y con algunos errores de importancia. Es con todo muy superior a las páginas que el propio Payne les dedica, viciadas por la visible parcialidad de sus juicios.

Vid. también sobre el pensamiento militar de Azaña, Ramírez, *Las reformas...*, p. 51.

B. REFORMAS MILITARES DE AZAÑA

REFORMAS MILITARES DE AZAÑA

El 23 de abril publicó *La Gaceta* un decreto por el que solicitaba para todos aquellos militares que desearan continuar en el Ejército la promesa de fidelidad a la República. La instauración de esta, afirmaba el preámbulo del decreto había extinguido el juramento de obediencia a las instituciones desaparecidas. Subsistía su misión básica de sostener la independencia de la Patria. Organizada la Nación en forma republicana, sólo podían servir a la República desde puestos de confianza los que acatasen sin reservas el régimen; retirar del servicio activo -con los derechos pasivos que les correspondiesen- a los que no prestasen tal promesa de fidelidad "no tiene carácter de sanción, sino de ruptura de su compromiso con el Estado" (1).

Fue una medida tendente a que pidieran la baja del ejército aquellos generales, jefes y oficiales irreductiblemente hostiles a la República, que no impidió que la absoluta mayoría de los militares que mantenían dicha actitud prometiesen fidelidad a la República (2).

(1) Decreto de 22-4-31.

(2) Es ingenuo pensar que Azaña o el Gobierno Provisional esperasen que al exigir la promesa de fidelidad se iba a lograr que abandonasen el Ejército todos los militares adversos al régimen; en el mismo caso estarían las frecuentes afirmaciones públicas de Azaña a lo largo de sus dos años de gobierno respecto a la fidelidad y adhesión del Ejército a la República cuando diariamente sabía de conspiraciones o reticencias de los altos mandos; pero como ministro de la Guerra, y pretendiendo apartar al Ejército de las murmuraciones se veía obligado a desmentir tales rumores que lo único que lograban era enrarecer más el tema. A este respecto es muy indicativo su diario. Respecto a la promesa de lealtad es evidente que era un requisito necesario para romper con el pasado, de forma que se pudiera exigir al Ejército a partir de ese momento acatamiento a las decisiones del Gobierno Provisional sin que se pudieran alegar reservas de fidelidad.

Otra disposición de ruptura con el pasado fue el decreto de 17 de abril, por el que se abolía la ley de Jurisdicciones de 1906, una de las manifestaciones más destacadas de la influencia del Ejército en funciones que no le corresponden en una sociedad moderna (1).

Por ella quedaban bajo jurisdicción militar todos los delitos contra la unidad de la patria y los de ofensas al ejército, correspondiendo en muchos casos al Ejército, como tantas veces se ha señalado, los papeles de ofendido y de juez. Su derogación había constituido una perpetua reivindicación de las fuerzas liberales, desde su misma implantación, sin que por unas causas u otras se hubiese logrado.

Significaba para el Gobierno de la República un primer e imprescindible paso en la tarea de subordinar el Ejército al poder civil. En el preámbulo Azaña razona o innecesario de la ley, tanto por la vigencia de las leyes comunes como porque la mejor forma de defender "los altos intereses de la Patria y los elevados y respetables de las instituciones armadas" eran la cordialidad entre las diversas regiones españolas y la penetración entre la nación y sus fuerzas armadas, alejadas éstas de las contiendas políticas.

(1) Como consecuencia de ciertas alusiones al Ejército de la revista humorística *Cut-Cut*, de Barcelona, un grupo de oficiales asaltó la redacción. Como consecuencia última de este incidente se acabaría promulgando debido a las presiones del Ejército dicha ley de 23 de marzo de 1905.

Como consecuencia de la derogación de la ley de Jurisdicciones se modificó el art. 7 del Código de Justicia militar, para restringir la jurisdicción militar a su ámbito (1); la disposición de mayor importancia en esta materia fue el decreto de 11 de mayo del 31 por el que se completaba la limitación de la jurisdicción a sus propios términos, reduciéndola a los hechos o delitos esencialmente militares por razón de la materia, desapareciendo su competencia basada en la calidad de la persona o lugar de ejecución. Asimismo se derogaba la ley de 8-1-1877 y todas las posteriores leyes penales especiales que hubiesen atribuido a la jurisdicción militar delitos de los que conocía la ordinaria.

La medida de mayor trascendencia, de carácter análogo a la supresión de las capitanías generales, fue en este mismo decreto la supresión del Consejo Supremo de Guerra y Marina, traspasando sus atribuciones a una sala de Justicia militar que se creaba en el Tribunal Supremo. Lo justificaba Azaña en el preámbulo al considerar la reducción que el fuero militar había sufrido. Indudablemente también latía el sentido de equilibrio en la estructura interna de las instituciones del Estado, que debía basarse de acuerdo con la política republicana en el predominio del orden civil.

El 27 de abril publicó *La Gaceta* el conocido decreto de 25 de abril por el que se procedía de una manera indirecta-

(1)

Orden de 20-4-31.

ta a reducir las plantillas de oficiales. Se ofrecía el pase a la reserva con la integridad del sueldo a aquellos generales, jefes y oficiales que lo solicitasen en el plazo de treinta días. En el artículo 7 se advertía sobre la posibilidad de que el ministerio procediese a reducir las plantillas de forma forzosa y sin los beneficios ofrecidos en el decreto, una vez visto el número de los que se retirasen voluntariamente.

Así se presionaba a aceptar la oferta mediante la posibilidad de un pase a la reserva en peores condiciones, en función de las plantillas definitivas.

El éxito del decreto fue indudable, 88 generales y 5.000 jefes y oficiales en números redondos pasaron a la reserva, representando un hecho importante en el camino de solucionar la tradicional macrocefalia de nuestro Ejército, dado que todas las plazas sin excepción eran amortizadas, factor éste que era el de mayor importancia (1).

El extenso preámbulo del decreto consta de dos partes bien diferenciadas. En la primera se hace una extensa enumeración de la serie de reformas que el ministro del ramo pensaba necesarias para la reorganización del ejército, y que como tales pensaba someter a las Cortes, para que estas fueran

(1)

Cifras de oficiales según Salas Larrazábal en Payne, *op. cit.*, p. XXX.

las que sancionasen la nueva estructura del ejército. Ley constitutiva, ley de Reclutamiento e Instrucción, Armamento, Justicia militar, etc. etc., de forma que la nueva estructuración fuese un marco en el que quedasen excluidas la arbitrariedad que en el pasado poseía el ministro. Esta enumeración era una exposición de las intenciones del ministro, de forma que los militares supiesen a qué atenerse en cuanto a la naturaleza y profundidad de las reformas que iban a venir.

En la segunda parte se explicaba la intención del decreto en particular, que pretendía solucionar el problema ya citado del excesivo número de oficiales, a la vez que significaba un futuro ahorro presupuestario. Era una medida previa a la auténtica reforma proyectada, aunque en sí misma fuese revolucionaria.

La drástica reducción que se logró a través del decreto fue y ha sido alabada prácticamente con unanimidad incluso por los más radicales enemigos de Azaña. El exceso de oficiales era tan patente y había sido tan denunciado por los mismos militares que no podía ser de otro modo (1). Pero también se le han dirigido críticas que merecen ser examinadas.

(1)

Para Mola sin embargo no era sino un signo más de la famosa "trituration", aunque en una ocasión concede: "A pesar de todo, ni el decreto sobre retiros, ni siquiera la reducción del ejército permanente a ocho divisiones y una de Caballería, constituyeron la verdadera "trituration"; es más, uno y otra pudieron ser la base de un Ejército más potente y eficaz, como estuvo en el ánimo del general Primo de Rivera hacerlo, si la rapidez con que se sucedieron los acontecimientos políticos no lo hubieran impedido". Esta obra del general Mola (El pasado, Azaña y el porvenir) en lo que se refiere a la política de Azaña es útil tan sólo como muestra del odio que algunos militares del antiguo régimen llegaron a concebir por Azaña, dado su feroz apasionamiento. El libro está escrito por añadidura en un estilo indecoroso. *Vid. por ej. pags. 158-159 184 et*

Las críticas a que hacemos referencias consisten en que no se hiciera ninguna selección de los militares que se retiraron, con lo que la reducción fue indiscriminada. Sin embargo las soluciones alternativas al retiro puramente voluntario adoptado por Azaña discrepan en función del origen de las críticas. Por parte de los militares republicanos y de un sector de la bibliografía, se achaca al ministro el que no se seleccionase antes de ofrecer el retiro en tan ventajosas condiciones, unos mandos fieles a la República, postergando los de dudosa lealtad y los adversos a la nueva situación; esto hubiera logrado tanto el poner en manos fieles al Ejército como el que los oficiales hostiles postergados solicitasen un retiro ventajoso al ofrecérseles tras la selección de los nuevos mandos, reteniendo en cambio a una gran cantidad de oficiales republicanos que se acogieron al decreto de retiro (1).

Por otro lado, desde una pretendida visión aséptica del problema, se achaca el que no se intentase una selección de acuerdo con los criterios profesionales (2).

Sin que nosotros vayamos a defender ninguna de las

(1)

Ejemplo entre los militares republicanos lo constituye Cerdán, *Trayectoria*, p. 165 y ss., entre la bibliografía, González Muñiz, *Problemas...* p. 64, 84.

(2)

Entre estos últimos destaca Salas Larrazábal, en Payne, *op. cit.*, p. XXXI.

opciones sí es forzoso reconocer las dificultades que implicaba cualquier intento de selección hecha por parte del ministerio. La inevitable subjetividad en la apreciación de méritos -ya fuesen políticos o estrictamente profesionales-, los muy probables errores, etc. hubiesen levantado muchísima más enemistad y recelo que las diversas combinaciones de mandos que Azaña hizo a lo largo de sus Gobiernos. Las acusaciones de persecución, purga, etc. no se hubieran hecho tardar. Si en sectores adversos al ministro se llegó a hablar de venta de empleos por parte de su gabinete militar, con ocasión de atribuciones ordinarias de los mismos (1), es fácil imaginar lo que se hubiera propalado de depender del ministro la selección de los que habían de quedarse en el Ejército y los que habían de pasar a la situación de segunda reserva o retiro. A lo que habría que sumar el descontento de los que hubieran querido marcharse y fuesen retenidos (2).

Un paso más allá van las críticas que se basan en la necesidad de haber disuelto el Ejército y edificar otro de

(1)

Azaña, IV, p. 71.

(2)

Un ejemplo de estas dificultades lo tenemos en que por ejemplo ni siquiera tras el 10 de agosto del 32 se atrevió Azaña a poner en práctica un plan de "saneamiento" republicano de la oficialidad de Aviación preparado a petición suya por un grupo de aviadores leales y con el que al parecer estaba conforme; Hidalgo de Cisneros, *Cambio...* II, p.59 y ss.

nueva planta para asegurar la seguridad de la República (1). Dos observaciones pueden hacerse ante tamaño despropósito. Una y principal la de que difícilmente el Ejército la hubiese tolerado. En segundo lugar que medidas de tal radicalidad solo son factibles -e incluso obligadas- en situaciones de guerra civil, insurrección armada, etc. -piénsese en la reconstitución del Ejército republicano tras la sublevación de julio del 36- pero raramente en situaciones de paz, sin que quepa trasponer una situación a otra, por lo que no es posible poner como ejem plo julio del 36 como muestra de que era posible realizar tal transformación. Y por último que es absurdo pretender que un Gobierno de cualquier tendencia política adopte medidas que chocan con su ideología y concepciones. No es concebible que un gobierno con participación de sectores burgueses de ideolo gía progresista se plantease medidas semejantes.

Por otra parte creemos equivocada la afirmación que hace Salas Larrazábal (2), de que al prescindir de todo tipo de selección se posibilitó que militares que se encontraban en la situación de reserva creada por la ley de 1918 o ya fuera del servicio quedaran como estaban pero pasando a cobrar inte gros sus haberes, con el consiguiente gasto y resultando una

(1)

De la época es la crítica en este sentido de Falcón, desde posiciones comunistas, *La Revolución ...*, p.180; más sorprendente es la de Vidarte, *Las Cortes ...*, p. 271.

(2)

Op. cit. p. XXXI.

disminución del número de oficiales más aparente que real. Pues según el art. 1, a los oficiales generales se les concedía el pase a la segunda reserva "con el mismo sueldo que disfruten en su empleo de la escala activa", y en el artículo 2 del decreto se concedía el retiro a todos los jefes y oficiales que se encontrasen en situación de actividad o en la de reserva retribuida "con el mismo sueldo que disfruten actualmente en su empleo", lo que excluye dicha posibilidad (1).

Quizás la más factible de todas estas alternativas hubiera sido una amplia combinación de mandos con militares afectos antes de hacer el ofrecimiento de retiro, en la línea de las críticas de González Muñiz, sobre todo al constatar que la considerada actuación de Azaña no supo evitar que la derecha instrumentalizase a su favor un sentimiento de oposición a su obra renovadora; insistiendo en las dificultades de ello conviene recordar que el número de cuadros del Ejército absolutamente leales eran minoría entre sus compañeros y no más competentes que ellos. El problema de la competencia de los oficiales era, como veremos más adelante, otra dificultad suplementaria

(1)

En un decreto aclaratorio del 29-4-31 se especificaba que se entendería como sueldo "el que en el presupuesto vigente figura como de actividad, incrementado en el importe de los premios de efectividad que se disfruten en el momento que se conceda el retiro", lo que refuerza la tesis de que se concedieron los retiros con los sueldos exactos que cobraban en el momento de la concesión.

con la que toparía Azaña.

Otro punto importante de las críticas a la reducción de oficiales consistía en afirmar que no solo no se produjo el ahorro previsto sino que los presupuestos militares aumentaron considerablemente entre 1931 y 1933, teniendo en cuenta el aumento de la dotación para clases pasivas, donde iba a parar precisamente el coste del retiro de todos los militares que se acogieron al decreto en cuestión. Más adelante tratamos *in extenso* el tema.

El siguiente paso de la reforma, consecuencia ineludible del decreto de retiros de 25 de abril, lo constituyó el de 25 de mayo de reorganización del Ejército. Por él se establecían las plantillas que se consideraban necesarias y suficientes en consideración a las exigencias de la defensa nacional y a las posibilidades económicas.

En el preámbulo, Azana expone las tesis que en sus "Estudios de política militar francesa" había razonado extensamente y estudiado en su aplicación en Francia. Un Estado moderno no necesitaba un ejército permanente numeroso sino tan sólo los cuadros necesarios para organizar la movilización de reservistas "preparar la movilización, entretener el material, ejercer los mandos superiores, instruir los contingentes y ser vir de base al encuadramiento de las unidades. El tiempo de servicio no debe pasar de lo indispensable para la instrucción, que habrá de facilitarse con una preparación adecuada fuera de filas". En esa dirección el decreto se limitaba como primer paso

a reducir a ocho las dieciseis divisiones existentes de infantería -y en la artillería en proporción a las necesidades de la nueva estructura-. Es aquí, en esta reducción, donde adquiere concreción el ahorro relativo que suponía el decreto dado el mes anterior.

La intención era además el que las divisiones fueran realmente tales, con las necesarias dotaciones y hombres, y no como las anteriores que en muchos aspectos no existían sino sobre el papel. La nueva organización era la base imprescindible para conseguir la eficacia del ejército, y en sí misma la había necesariamente de mejorar en alguna medida; el resto dependería de los recursos disponibles, no de la voluntad del ministro. La reducción se completaría con el decreto de 3 de junio, relativo a la reducción de efectivos en Marruecos.

Por el decreto de 4 de mayo Azaña impuso el criterio de la antigüedad para la provisión de destinos, excepto de aquellos que consideraba imprescindible que permaneciesen dentro de las facultades discrecionales del ministro. Estos eran todos los que debieran recaer en oficiales generales y los mandos de las unidades, Cuerpos, Centros, Establecimientos y Gobiernos militares; el resto se proveería por rigurosa antigüedad. Más que una ampliación de las facultades discrecionales del ministro parece una delimitación de las mismas en base al principio general de la antigüedad, lo cual era una solución conservadora como se ha señalado, probablemente acorde con la opinión mayoritaria del Ejército entonces, y que en cambio con

trariaba al sector africanista que, partidario de la escala abierta para los ascensos, preferiría probablemente la elección por méritos como sistema de provisión de destinos.

Complemento de esta medida, en la misma línea de consagrar el principio de antigüedad, fue el decreto de 18 de mayo por el que se derogaba el Real Decreto de 26 de julio de 1926 por el que Primo de Rivera había introducido el sistema de elección para los ascensos. Era la vuelta al principio de escala cerrada, que dentro del Ejército tenía los mismos partidarios y adversarios que la medida anterior. El arbitrario uso que Primo de Rivera había hecho de los ascensos -más que de los ascensos por méritos de guerra en Marruecos-, como demuestra Payne en lo relativo a los ascensos a general (1), y dentro de esa categoría, había contribuido probablemente a desprestigiar todo sistema de ascensos que no fuera por rigurosa antigüedad, consolidando la preferencia generalizada en el Ejército por la escala cerrada. Si bien justifica que se tache la medida de conservadora y en ese sentido de contradictoria con el sentido general de las reformas de Azaña, impide que se le acuse de intentar ampliar al máximo las facultades ministeriales; fue sin duda el sentido de la prudencia el que impulsó a Azaña a actuar así; estricta antigüedad para ascensos y destinos, y discrecionalidad para la provisión de destinos de importancia resume el sistema impuesto provisionalmente por Azaña.

(1)

Vid. Payne, *op. cit.*, p. XXXII y 329 y ss.

Este decreto tenía una segunda parte consistente en rectificar los ascensos concedidos por elección por la Dictadura, en la medida en que hubieran alterado los efectos de la antigüedad. Lo cual aparte de que pudiera satisfacer al ejército metropolitano, rival de los africanistas, era una consecuencia de la anulación de todo lo actuado por la Dictadura, política general del Gobierno Provisional y que excedía el marco de la política de Guerra.

También en la línea de revisión de actos de la Dictadura se procedió a revisar los ascensos por méritos de guerra, anulando aquellos que habían prescindido de alguno de los requisitos legales que exigían las leyes anteriores a la Dictadura (decreto de 3 de junio de 1931).

Probablemente una de las cuestiones que mayores descontentos produjeron entre parte de los militares, aparte la revisión general de los ascensos logrados en la Dictadura que no fueran por antigüedad, fue la cuestión de la asignación de los destinos. Azaña organizó como principal organismo asesor del ministro un gabinete militar (1). Tradicionalmente se

(1) Según Ramírez, los componentes del gabinete militar fueron: Juan Hernández Saravia, jefe del gabinete; comandante de Caballería Germán Boaso Román; comandante de Artillería Antonio Vidal Lóriga; comandante de Infantería Andrés Fuentes Pérez; comandante de Estado Mayor Angel Riaño Herrero; comandante de Ingenieros Enrique Escudero Cisneros; comisario de Guerra de segunda José de Armas Chirlanda; capitán de Caballería Pedro Romero Rodríguez -diputado de Acción Republicana por Segovia- y capitán de Intendencia Elviro Ordiales Oroz.

El comandante Fuentes fue destituido del gabinete militar al averiguar Azaña sus arbitrariedades en la atribución de destinos antes del 16 de septiembre del 31. Azaña, OC. IV, p. 135.

acusó a este equipo de asesores del ministro de sectarismo y parcialidad en la provisión de destinos . Es difícil saber lo que de cierto hubiera en esta acusación, pero no hay motivos para achacarla a una deliberada actuación sectaria de Azaña, quien con mucha frecuencia se quejó en su diario de la escasez de militares competentes para proveer los cargos; precisamente los militares republicanos le reprocharon que se limitase a promover los cargos con criterios profesionales indiferentes a las ideas políticas de los afectados -fuera de los casos de manifiesta desafección y especialmente cuando esta tenía una proyección externa-. Que hubo abusos parece claro, a tenor de las propias anotaciones de Azaña (1), y probablemente difíciles de evitar, pues por fuerza el ministro había de basarse en los informes de sus organismos asesores, y la división y rencillas personales en el ejército eran abundantes. Pero es sin duda inexacto una pretendida actuación conscientemente parcial fuera de las circunstancias reseñadas.

Es por lo demás desconocer absolutamente el pensamiento de Azaña acusarle como a veces se ha hecho, de favoritismo hacia los junteros, pues siempre había condenado el fenómeno de las juntas, incluso en los primeros momentos cuando muchos confiaron en ellas como un posible movimiento renovador.

(1)

Por ejemplo en OC, IV, p. 78, 135.

Sus concepciones sobre la función del ejército le impedían aprobar cualquier tipo de actuación política de los militares, y su actuación gubernamental no es sino una confirmación de ello (1).

Otra ley de interés para la republicanización del ejército fue la de 4 de marzo del 32. Tres objetivos cubría en sus correspondientes artículos, todos ellos encaminados a someter resistencias a la política republicana. El primero permitía pasar a la reserva a aquellos oficiales generales que llevasen más de seis meses en situación de disponibles, cuando durante ese tiempo se hubiese provisto algún destino de su categoría. Si bien este artículo cubría también un objetivo sancionador no hay que olvidar las argumentaciones de Azaña ante las Cortes. En primer lugar no era una facultad del ministro sino del Gobierno. Y en segundo lugar no era una novedad, pues to que continuaba en la línea de la ley de 1918, que facultaba asimismo al Gobierno a pasar a la reserva a ciertos jefes postergados en determinadas circunstancias, posibilidad ahora impracticable por las reformas llevadas a cabo. Y añadía que mientras no se pudiera llegar a la perfección de otros ejércitos en que órganos del propio ejército decidían sobre el destino de ciertos jefes según su competencia -sistema que él afirmaba tener intención de implantar- radicaba en el mando del ministro

(1)

Vid. por ejemplo, OC. I, p. 545.

de la Guerra la responsabilidad de seleccionar el mando.

Los otros dos artículos tenían una finalidad específicamente represiva, pero no por ello se pueden tachar de incoherentes ni sectarios: supresión de la llamada prensa militar de opinión, foco de propaganda adversa a la política republicana, prohibiendo toda publicación que por cualquier medio aparentase representar la opinión de institutos armados; y por último se especificaba una posible aplicación de la ley de Defensa de la República, permitiendo al Gobierno dar de baja temporalmente en sus haberes pasivos a aquellos militares acogidos al decreto de retiro que cometiesen actos definidos por el art. 1 de dicha ley.

Dentro de las medidas tendentes tanto a la reestructuración organizativa del ejército como a su estricta limitación a funciones militares, alejándole de cualquier posible competencía a las autoridades civiles, se cuenta la supresión de las regiones militares y de la adscripción territorial de los generales en jefe. Se suprimía el cargo de capitán general y las dignidades de capitán y teniente general, quedando como la de mayor rango la de general de división. Azaña justifica la supresión de la territorialidad por la necesidad de evitar la confusión que se producía en el "equilibrio interno del Estado" al ser los capitanes generales las únicas autoridades con mando interprovincial, que les hacía asemejarse a los antiguos Virreyes y que les habían habituado a una frecuente intervención en cuestiones de índole social y política. Además militarmente

ya no se concebía en la posibilidad de teatros de guerra independientes por lo que adscripción territorial era innecesaria desde el punto de vista técnico militar. Para Salas Larrazábal dicha medida fue un error sectario (1).

Otra medida significativa fue la reducción del número de academias militares. Lo más resonante fue la supresión de la Academia General Militar de Zaragoza, creada por Primo de Rivera y cuyo primer y único director había sido el general Franco. Las razones expuestas por Azaña atañen únicamente a motivos económicos, resaltando el excesivo gasto que implicaba su mantenimiento. En torno a esta disolución se ha adivinado también la intención de cerrar un centro impregnado de espíritu de casta y de sentimientos "africanistas" como consecuencia de la actuación de su director. Sin poder afirmar nada seguro a ese respecto -podían haberse cambiado sus mandos-, lo cierto es que la razón alegada por Azaña era verídica como lo prueba la simultánea supresión de otras academias particulares. Por un decreto de la misma fecha el número de academias quedaba reducido a tres; una para Infantería, Caballería e Intendencia, otra para Artillería e Ingenieros y otra para Sanidad Militar.

Sin embargo Salas Larrazábal duda de la sinceridad del propósito de economizar puesto que en su opinión tal motivo

(1)

Decreto de 16-6-31; la opinión de Salas en op. cit. p. XXXII.

le debía haber llevado a suprimir todas las restantes academias y conservar una sola común (1); es interesante observar en cualquier caso que Azana afirmaba en el preámbulo que sería útil el gasto en caso de coincidir el servicio que prestaba con la futura orientación de la enseñanza militar, para añadir a continuación "es innecesario resolver desde ahora este último punto y decidirse por la unidad de origen de la oficialidad de carrera o por su temprana especialización, así como tomar en cuenta los demás problemas que sobre el caso se presentan, porque clausurado el ingreso en la Academia y habiendo de transcurrir algunos años hasta que en los cuadros del nuevo Ejército se coloque los centenares de alumnos que cursan en ella y en los colegios especiales, se antepone a toda otra consideración la muy perentoria de no poder utilizarse aquel Establecimiento" (2); esto es, que el propio Azaña reconocía no tener resuelto lo que a largo plazo pudiera ser más conveniente para el nuevo ejército, un origen común o especializado de sus oficiales, y la solución por tanto era provisional.

Importante fue asimismo en la labor reorganizadora la reestructuración del ministerio, con el restablecimiento del

(1) Parece excesivo en todo caso atribuirlo a la finalidad "de perpetuar las rencillas existentes entre las diversas Armas y Cuerpos", op.cit. p.XXXIII. Son estos procesos de intención, de los que no se libran los autores más objetivos, los que vician la mayor parte de las críticas que se han hecho a la reforma militar de Azaña por gran parte de la bibliografía.

(2) Se había suspendido el ingreso en las diversas academias hasta integrar los alumnos existentes en las nuevas plantillas, muy reducidas en comparación con las antiguas.

Estado Mayor Central como órgano cuya función consistía en man tener actualizada la doctrina militar, y la creación del Conse jo Superior de la Guerra como máxima autoridad militar y ór gano de conexión entre las funciones militar y de gobierno, con objeto de "poner los recursos de la técnica al servicio de la política militar adoptada por las Cortes y el Gobierno" o a la inversa adoptar como política de gobierno las sugerencias y conclusiones de los técnicos (1).

Dependiendo del Estado Mayor Central se crearía un Centro de Estudios militares superiores con el objeto de desarrollar los cursos de preparación de coroneles para el ascen so, cursos estos que habían comenzado a desarrollarse a partir de 1927 (2).

Se suprimió asimismo la escala de reserva retribuída, incorporando a la escala activa a los jefes y oficiales en situación de actividad de la misma, lo cual, dado que la escala suprimida se integraba de oficiales procedentes de las clases de tropa de segunda categoría, era un avance en la democratización del ejército, a la vez que una medida de racionalización en el reclutamiento de la oficialidad. La medida suscitó numerosas protestas entre los oficiales de la escala activa, pero

(1)

Decreto de 3-7-31.

(2)

Decreto de 21-7-31.

Azaña no se arredró (1). En el preámbulo anunciaba ya algunas ideas respecto al futuro sistema de reclutamiento de oficiales.

Con ocasión de la defensa ante las Cortes del proyecto de creación del Cuerpo de Suboficiales, Azaña pergeñó una exposición general de las reformas que llevaba a cabo en su departamento, detallando los objetivos que venimos analizando con ocasión de algunos de sus proyectos. El proyecto en cuestión era importante en cuanto que reservaba para los suboficiales y sargentos el 60% de las plazas que fueran convocadas en las Academias, lo que significaba una substancial democratización del futuro cuerpo de oficiales.

La ley de Reclutamiento y Ascensos de Oficiales se aprobó en septiembre de 1932 (2). Incluía la prometida reserva del 60% de las plazas de las Academias militares a los suboficiales y sargentos, con el consabido objetivo de democratizar el cuerpo de Oficiales. También se introducían novedades importantes como exigir determinados estudios universitarios a los que ingresasen de nuevas en las academias, así como exigirles seis meses de servicio en filas, con lo que se tendía a poner en contacto a este sector de la oficialidad con la juventud universitaria a la par que se aumentaban sus conocimientos ;

(1)

Decreto de 13-7-31; sobre las reacciones en el ejército, vid. Azaña, IV, p.30, entre otras.

(2)

Ley de 12-7-32.

asimismo se exigía la realización de determinados estudios para posteriores ascensos, rectificándose el escalafón al evaluar sus resultados, lo que constituía una atenuación de la escala cerrada. Se disolvía el Cuerpo de Estado Mayor, medida que subsistió a la República. Para Salas la ley es inferior al nivel general de la reforma (1); creemos sin embargo que a pesar de sus insuficiencias los principios generales que hemos citado eran altamente positivos.

También las industrias militares fueron objeto de la reorganización emprendida por Azana. Quedaron englobadas en un consorcio que aún conservando la dependencia del ministerio de la Guerra y por lo tanto bajo control oficial, se regiría con la suficiente autonomía como para permitirle guiarse en su actividad industrial por criterios de rentabilidad económica, y con una contabilidad fuera de la rigidez del presupuesto estatal.

Representantes de los Ministerios de Guerra y Marina de Hacienda e Industria, así como un representante obrero integraban junto con representantes de las fábricas militares englobadas en el consorcio, el consejo de administración; a la vez se creaba un comité en el que participaba la industria privada para asesorar y cooperar con el consorcio oficial en sus even-

(1)

Op. cit. p. XXXIII.

tuales actividades industriales no específicamente militares. También se abría paso a que los ingenieros civiles pudieran trabajar en el consorcio, aunque en igualdad de condiciones tendría preferencia los oficiales de artillería (art. 7), cuerpo que venía proporcionando hasta el momento el personal técnico a las empresas de industria militar (1).

Un problema clave de la situación en que la República encontró al ejército era la ausencia absoluta de una dotación suficiente, de armamentos, etc. El resolverlo era la segunda parte imprescindible para lograr realmente ese ejército moderno y eficaz, capaz de defender el país en caso de agresión exterior que perseguía Azaña. Sin embargo poco se pudo hacer en este sentido. La razón fue la inexistencia de dinero suficiente para permitir iniciar un programa de dotación del ejército. No porque las reformas hubiesen costado mucho dinero sino porque los incrementos masivos del presupuesto fueron a otros sectores que se consideraban -y realmente lo eran- prioritarios en la política republicana, como Instrucción Pública, Obras Públicas (2).

(1) Ley de 4-2-33; vid. las intervenciones de Azaña en OC, II, p.145 y ss.

(2) La razón del excesivo coste de las reformas era la tesis de Salas. La de Payne, cuyo juicio global de la política militar de Azaña parece ser la de que fue la obra alocada y frívola de un civil rencoroso con intención de vengarse de unos militares reaccionarios a los que despreciaba, se resume en las siguientes palabras: (Azaña estaba más interesado por los aspectos políticos y morales del ejército) "pero no puede demostrar se que Azaña hiciese mucho para mejorar el equipo de combate o la capacidad técnica general del Ejército" ... "Azaña tenía poco interés por los tanques o por la artillería, pues estaba convencido de que España nunca se vería obligada a luchar en una guerra importante", y frases semejantes, que deben cotejarse con las palabras de Azaña transcritas

Al presentar a las Cortes el presupuesto de 1932 afirmaba Azaña: "Hay, además, en el ejército la cuestión de la dotación. En este Presupuesto no se atiende apenas a este problema porque no hay bastante dinero para atenderlo; lo digo desde ahora, pero es menester atenderlo y pronto, porque el armamento del ejército, que hay que hacerlo de nuevo, no es una cosa que se hace en dos o tres presupuestos; requiere una labor de años y probablemente requerirá que un día traiga aquí el Ministerio un plan de armamentos del ejército, un proyecto de ley, un presupuesto, y que las Cortes, cuando lo estimen oportuno o el estado de la Hacienda lo permita, voten un programa para desarrollar en seis, ocho o diez años, única manera de que esto se haga con seriedad, porque en ninguna nación del mundo se ha conseguido dotar al ejército del material que necesita con los recursos del Presupuesto ordinario. Esto no puede ser; esto será autorizando a los gobiernos para aumentar equis gastos en el Presupuesto normal de cada año, o como fuera, que en eso no me meto; pero habrá que hacer un plan general de armamentos del ejército, serio, meditado y eficaz".

No hay declaración ni pública ni privada de Azaña que desmienta tales intenciones, ni su política efectiva contradice en un ápice el planteamiento hecho ante las Cortes.

(1) cont. pág. anterior

en el texto. Destaca sin embargo la siguiente opinión de Payne: "En realidad, Azaña no conocía ni le interesaban los asuntos exteriores ni el mundo moderno en general (?), y creía que España no necesitaba una política exterior ni un ejército moderno". (*Op. cit.* p. 381).

Cualquiera diría que están publicados cuatro gruesos volúmenes con las obras completas de Azaña que permiten estudiar su pensamiento.

El problema se hacía dramático si se consideraba la situación de la aviación. Al discutir los presupuestos de Guerra ante las Cortes expuso la absoluta carencia de dotación y la imposibilidad de enorme dificultad de proveer a cualquier programa de aviación militar ante el tremendo coste del más económico que el ministerio le habían presentado. Por su interés reproducimos a pie de página las referencias que hizo ante las Cortes para poder juzgar el planteamiento de Azana (1).

(1)

La desenvoltura de Payne llega a su límite en este punto. Afirma el autor americano "... el presupuesto de Aviación se elevó hasta el 7% del total de los gastos de las fuerzas armadas, aunque Azaña señalaba que el país, en realidad, no tenía ni la menor necesidad de una fuerza aérea", y cita como fuente el volumen I de su recopilación de discursos, "En el poder y en la oposición" pags. 119-161; pues bien, en dichas páginas se incluye el discurso referido a la defensa del presupuesto de Guerra de 1933 -pronunciado el día 18-12-32-, *en el cual no se hace ninguna referencia al problema de la Aviación* (aparte una alusión marginal en la que Azaña rebate al diputado radical Peyre, afirmando que no se podría aumentar el presupuesto de Aviación reduciendo el tiempo de servicio en filas porque esto no ocasionaba ahorro alguno, OC.II, p.511). Donde sí se hace es en el discurso de marzo del 32, al defender el presupuesto para 1932 (OC.II,p.201), en el que afirmó: "Hay, además, que resolver otro problema: el problema de la aviación militar en España. Yo os aseguro que esta cuestión es la que más quebraderos de cabeza me ha proporcionado en el ministerio y no encuentro manera de resolverla; no hay manera de resolverla, repito, y no la hay, porque el primer modestísimo programa de aviación militar que se han presentado los servicios del Ministerio importa 70 millones de pesetas; el primer modestísimo programa, porque los aparatos cuestan muchísimos millones y sostener el servicio, si ha de ser eficaz y ha de estar vivo, cuesta mucho dinero. Por otra parte, sin aviación militar estamos en absoluta indefensión, porque las otras naciones, con quien España pudiera estar en conflicto, tienen poderosa aviación militar; todas las naciones de Europa tienen cientos y cientos de aparatos de guerra con escuadras poderosísimas, frente a las cuales las antiguas escuadras navales son un juguete, y en España, en este particular, está poco menos que en mantillas. Pero este es uno de los problemas más serios que tenéis que resolver y vais a resolverlo vosotros, porque yo os traeré aquí los datos de lo que existe, de las necesidades indispensables, y las Cortes, con su soberanía, acordarán lo que bien les parezca, reparando con el Gobierno la responsabilidad de lo que acuerden, porque no hay Gobierno que quiera o pueda cargar sólo con la responsabilidad de

Para finalizar habría que recordar que la situación de absoluta carencia de medios provenía del régimen anterior. Es por lo tanto sorprendente que se achaque como fracaso de la coalición republicano socialista que no lograse solucionar el problema [en dos años]. Pues a veces se olvida que Azaña estuvo en el poder dos años escasos, a los que habría que sumar medio más bajo la presidencia de Alcalá Zamora, y de que sus gobiernos sólo son responsables de dos presupuestos, el de 1932 y el de 1933. Puede sin duda afirmarse, como de tantas otras parcelas de gobierno que se hizo más por el Ejército en este breve plazo, a pesar de los inevitables errores cometidos, que en todo el régimen de la Restauración, aunque algunos individuos tanto de dentro como de fuera del Ejército pudiesen por delante de los generales de la nación, sus intereses particulares.

(1) cont. pág. anterior

encauzar la política de España en uno u otro camino".

También en su discurso de 2 de diciembre del 31 (OC, II, p. 85) había aludido Azaña a la Aviación, exponiendo la deplorable herencia recibida por el régimen en cuanto a la dotación del Ejército.

Por último Azaña dedicó un breve discurso íntegramente al problema de la Aviación con ocasión de una interpelación sobre el decreto de 6 de abril de 1933 que reorganizaba los servicios de Aviación, tanto civiles como militares; las ideas expresadas por Azaña en este discurso van en la misma línea que las que hemos transcrito aquí, y no se encuentra en él ninguna afirmación como la atribuida por Payne. (OC. II, p. 783).

Pueden compararse tales ideas con la afirmación taxativa del señor Payne.

Antes hemos afirmado que las reformas militares que sucintamente acabamos de reseñar constituían dentro de los planteamientos generales de los republicanos de izquierda, casi una tarea personal de Azaña. Dos razones fundamentales avalan esta afirmación. La primera el procedimiento utilizado por Azana para sacarlos adelante: frente a la lenta tramitación parlamentaria de la Reforma Agraria o del Estatuto, los decretos y leyes sobre el Ejército se fueron sucediendo sin apenas polémica y casi sin oposición pública. En pocas ocasiones fueron objeto de debates parlamentarios, y en general con motivo de la discusión del presupuesto de Guerra.

La segunda razón es el hecho de que fuera él personalmente el ministro encargado de realizarla incluso después de hacerse cargo del Gobierno, al conservar la cartera de Guerra.

Esta indudable personalización de las reformas militares en Azaña merece un par de precisiones. Por un lado es cierto que Azaña consideraba de vida o muerte para la República -para la democracia española- una reforma atinada del Ejército español. Pero no hay que ver en la eficacia de esta reforma frente a la lentitud de las restantes, que minusvalorase la trascendencia de éstas. Pues si la reforma militar pudo hacerse con rapidez fue porque lo permitieron varias circunstancias. La primera de ellas que todos los grupos republicanos estaban de acuerdo en ellas, incluida la derecha republicana (1). Así

(1) La oposición del Partido Radical fue posterior y como consecuencia del antagonismo global de carácter político a los Gobiernos Azaña. Lerroux no opuso jamás durante el Gobierno Provisional el más mínimo reparo a la política militar de Azaña.

fue posible comenzarlas ya en los primeros días del Gobierno Provisional. Esta misma unanimidad es la que explica la ausencia de oposición parlamentaria; no puede caber la duda de que si el tema hubiera despertado la enemiga abierta de algún partido republicano el tema hubiera pasado por las Cortes con frecuencia.

La segunda precisión se refiere a la actitud del partido de Acción Republicana ante la reforma. Si bien, como consecuencia de la ausencia de debate parlamentario y por ser Azaña el ministro de la Guerra se puede decir que la participación del partido fue nula en la elaboración concreta de las medidas de reforma y en su aprobación, no significa que fuera indiferente ante las mismas.

Todo lo contrario. El apoyo del partido a la labor realizada por su líder fue siempre incondicional; si fuera posible hacer un estudio temático de carácter cuantitativo de la gran cantidad de mítines dados por Acción Republicana en todas las provincias, veríamos sin duda cómo el apoyo y la alianza a las reformas militares alcanzaba una de las cifras más altas. Y no sólo en la actividad propagandística extraparlamentaria es perceptible esta identificación. Es casi más significativo que una de las condiciones que el partido puso en las sucesivas crisis de 1933 para prestar su apoyo a diversos Gobiernos de coalición fue el mantenimiento de la política militar "realizada por Acción Republicana desde el advenimiento de la República"(1).

(1) Vid. supra. cap. V, 1 y 3.

La obra de Azaña se veía como propia y se exigía su continuación para que el partido ofreciese su concurso al Gobierno; las reformas militares, precisamente por estar completamente personalizadas en Azana, se consideraban más "propias" que los otros aspectos de la política de los Gobiernos republicano socialistas cuya permanencia era necesaria para que Acción Republicana participase en cualquier otro gobierno, como la política laica, el Estatuto, etc., a pesar de que en todas ellas el peso del Presidente del Gobierno había sido relevante.

C. BALANCE DE LAS REFORMAS MILITARES

BALANCE DE LAS REFORMAS MILITARES

Una crítica global que se suele hacer al conjunto de reformas emprendidas por el ministro de la Guerra (y paralelamente por el de Marina), es que su elevado coste contradijo el objetivo de Azaña de economizar gastos y de lograr que el ejército pesase menos al erario. Sin embargo tal afirmación, a más de ser errónea, supone un planteamiento asimismo equivocado.

Ciertamente dentro de una política económica gubernamental de reducción de gastos y de equilibrio presupuestario, de acuerdo con las doctrinas económicas imperantes todavía en las Haciendas de todos los países, a pesar de la situación económica deflacionaria, Azaña pretendió también como ministro de la Guerra reducir todo gasto innecesario. Pero eso no significa que el ahorro fuese un objetivo prioritario de su política militar en mayor medida que lo fuese en otros departamentos. Ese objetivo era general. Si luego se dedicaron aumentos substanciales a otros departamentos fue porque en el campo de la evaluación de las diversas necesidades nacionales se les consideró prioritarios, como sería el ejemplo de Instrucción Pública. Y además, como ahora demostraremos, en términos globales redujo los gastos de Guerra, a pesar de las reformas -estas no fueron por lo tanto caras-, y originó un enorme ahorro a largo plazo con la reducción de plantillas.

Ante las Cortes expuso su planteamiento sobre este problema al defender el presupuesto de Guerra de 1932: "Debo

advertir, señores diputados, que en ninguna especie de servicios del Estado me dejaría guiar nunca por el simple criterio de hacer economías; esto sería un puro disparate, porque por economizar acabaríamos por suprimir el Estado y los servicios públicos. Economizar por economizar no es criterio. El buen criterio es que los servicios necesarios, los servicios útiles, los servicios fundamentales se doten con lo que sea preciso; pero no economizar por economizar. He de añadir a este respecto, que el criterio que he seguido al reformar el ejército, no ha sido el de buscar economías; de ningún modo. Si la reforma que se ha hecho en el ejército hubiera costado más dinero, yo hubiera venido a decir al Parlamento: "Esto cuesta más dinero y hay que hacerlo". Como no costaba más dinero, como producía economías, porque la situación lo daba de sí, he podido hacerlo sin contar con el Parlamento, porque no necesitaba pedir créditos..." (1). Y explicaba que el ahorro se había logrado gracias a la eliminación de gastos inútiles.

En primer lugar para esclarecer el problema de los gastos de Guerra hay que dejar bien claro el presunto gasto ocasionado por el decreto de retiro. Todos los oficiales que se acogieron al mismo originaban de forma automática una importante suma de haberes pasivos. En los presupuestos de la Monarquía -y por lo tanto en el de 1931, con el que la República

(1)
Azaña, OC.II, p. 202.

tuvo que transcurrir su primer año-, estos haberes pasivos en vez de ir a la sección del presupuesto de Clases pasivas (1) como se hacía con los demás ministerios, lo conservaba el presupuesto de Guerra. Azana acabó con esta anomalía, traspasándolos a dicha partida. Es evidente que los gastos de los haberes de dichos oficiales no desaparecieron por tanto sino que fueron traspasados a otra sección del presupuesto.

Sin embargo dado que el hecho de que esos haberes fuesen pasivos y no sueldos activos -esto es, el hecho de que tales oficiales se hubieran retirado- ocasionaba un impresionante ahorro a medio y largo plazo al erario, es correcto no computarlos, al hacer un análisis comparativo de los presupuestos de los diversos años, en los gastos de Guerra como coste de la reforma. El ahorro, incontrovertible, es el que se obtiene de comparar el montante de esos haberes pasivos hasta que falleciera el último de los oficiales afectados -dado que eran haberes pasivos que no se reproducían pues las plazas habían sido amortizadas-, y el que hubieran ocasionado de permanecer activos, y esto independientemente del número exacto de oficiales retirados: siempre hubiera habido el ahorro que ocasionaba el que ya no ascendieran ni percibiesen gratificaciones de alguna clase. Azaña, basándose en un estudio encargado a compañías

(1)

Englobado dentro de las Obligaciones generales del Estado.

de seguros, afirmaba que el ahorro se cifraba en 650 millones de pesetas. Fuera exacta dicha cantidad o no (pues todo dependía de que fuese exacto el número de oficiales a partir del cual se hubiese hecho el cálculo, pero en principio no hay por qué dudarlo; nadie en las Cortes le contradijo, ni que se pamos en la prensa) ahorro tenía que haber (1).

(1)

Azaña, OC. II, p. 203: "Son 11.000 ó 12.000 jefes y oficiales, no lo se, una cosa así. Si se pone en una columna todo lo que estos jefes y oficiales van a percibir por sus emolumentos desde el mes de agosto de 1931 hasta que fallezca el último de estos jefes y oficiales acogidos a este decreto, dentro de treinta o cuarenta años, cuando sea, y en otra columna lo que estos jefes y oficiales hubieran recibido del Tesoro público permaneciendo en activo, la diferencia a favor del Tesoro son 650 millones de pesetas. Esta operación no la he hecho yo, porque no estoy fuerte en matemáticas; la han hecho profesores técnicos, actuarios de las compañías de seguros, a quienes he encargado este estudio y le he traído un día a las Cortes. Es de 650 millones de pesetas, en números redondos, el ahorro para el Tesoro público por este sencillo traspaso de la situación de actividad a la de pasivos. Y la razón no es ningún misterio: es que esos jefes y oficiales que se retiran ya no ascienden más, ni perciben gratificaciones de mando, ni de filas ni de ninguna otra clase. Esta diferencia de las ventajas que habían de alcanzar en su carrera, de permanecer en activo, a las que han perdido al pasar a clases pasivas, produce al Tesoro esta economía.

De modo que la operación, por sí misma es ventajosísima para el erario; y es tan ventajosa, señores diputados, que las compañías de seguros no la pueden mejorar".

Continuaba Azaña exponiendo cómo no era rentable traspasar el pago de los haberes pasivos a una compañía de seguros por medio de una prima anual.

Es por lo que resulta en todo punto inadmisibile sumar los gastos de tales haberes pasivos a los costes de las reformas de Guerra, cuando eran unos gastos que en la realidad producían ahorro: el hecho de que no se materializase a corto plazo en el papel -el ahorro era por gasto no emergente- no le priva de un ápice de su valor. Deben quedar al margen por lo tanto del cómputo de los gastos de Guerra.

Todo lo más se podía pensar, para que la comparación entre el presupuesto de 1931 y el de 1932 fuese homogénea, en suprimir del primero lo referente a clases pasivas del presupuesto de Guerra, ya que así se hace en el segundo. De tal forma computaremos nosotros los presupuestos de 1931, para que sea más evidente el coste real de las reformas.

También restamos de los gastos de Guerra de 1931 lo referente a los gastos ocasionados por el presupuesto de cría caballar (1), que Azana traspasó a Fomento en el presupuesto de 1932, por considerar inadecuado que dependiese de Guerra.

(1)

Aunque Azaña afirmó en más de una ocasión (OC,II,p.91 y 147) al explicar la transformación del presupuesto de Guerra, que había eliminado del mismo el que correspondía a las fábricas militares, que calculaba inicialmente el 2 de diciembre ante las Cortes, quizás con exceso, en unos 30 millones, no hemos encontrado en el presupuesto de 1931 sino una partida referida a Establecimientos de industria militar, que importaba sólo 2.854.614. Dado que en los presupuestos siguientes subsiste una partida semejante (que importaba 714.000 en 1932, y 1.145.154 en 1933) no eliminamos dicha partida de 1931. Azaña, al volver sobre el tema en enero del 32, afirmaba que se "consignaban unas cantidades, generalmente sin especificación", por lo que es posible que se aplica se más dinero del citado a las industrias militares en 1931; la subsistencia de esas partidas en los presupuestos posteriores quizás se deba a la dependencia del ministerio de Guerra de gran parte del personal de las fábricas (en el de 1933 la partida es específicamente para "personal de establecimientos de industria").

Incluimos por el contrario en los presupuestos de los tres años los gastos de "Acción militar en Marruecos" y a "Obligaciones a extinguir del ministerio de Guerra" que en los presupuestos se incluyen en secciones distintas; es decir, lo que nos interesa es averiguar con exactitud los gastos dependientes del ministerio de Guerra, con las precisiones anteriores, para conocer el coste real de las reformas realizadas.

Lo que no tiene sentido por las razones expuestas, es globalizar como hace Salas las clases pasivas con el presupuesto de Guerra y Marina. Y menos todavía afirmar que en realidad habría que cifrar el aumento de los gastos de Gobernación, del que dependían las fuerzas de seguridad: son problemas distintos al de la reforma del Ejército, y tan incoherente es sumarlos como lo sería sumar los gastos de construcción de escuelas con el presupuesto de Guerra, pues los diversos cuerpos de seguridad y la Guardia Civil siempre habían dependido de Gobernación y así continuaron durante la República.

Que hubo dichos aumentos es un problema y las reformas militares es otro (1). Por otro lado tampoco es cierto que la reorganización de la Aviación bajo la dependencia de Presidencia implicase disminución de los gastos de Guerra (2).

(1) En el mismo caso estaría lo que hace Payne de compensar los ahorros de la acción militar en Marruecos con el incremento de gastos de la acción civil, pues son gastos independientes, pudiendo aumentar o descender simultáneamente o no, según la política desarrollada allí. Ni se puede citar aisladamente el aumento de una partida concreta del presupuesto como hace el mismo autor con la correspondiente al cuerpo de suboficiales, pues carece de representatividad respecto al total de presupuesto. *Op. cit.* pags. XXXI y 389.

En la tabla damos las cifras de los tres presupuestos que nos interesan.

TABLA

Gastos dependientes del Ministerio de Guerra (en millones).

	<u>1931</u>	<u>1932</u>	<u>1933</u>
Sección 4 ^a :			
M ^a de Guerra	473.394	416.078	460.633
Menos:			
Cría caballar	11.142		
Clases pasivas	25.063		
	<u>437.189</u>		
Sección 14 ^a :			
Acción en Marruecos			
(M ^a de la Guerra)	170.264	142.980	121.313
Sección 16 ^a :			
Obligaciones a extinguir			
(M ^a de la Guerra)	20.391	10.258	8.257
Total. . .	<u>627.844</u> =====	<u>569.316</u> =====	<u>590.203</u> =====

Las cifras están tomadas de los Anuarios Estadísticos de 1931, 1932-33 y 1934 respectivamente; pertenecen a las liquidaciones provisionales hechas al 31 de diciembre de los

(2) pág. anterior

La razón es muy sencilla. En primer lugar dicha reorganización se efectuó por el decreto de 5-4-33, por lo que no afectó al presupuesto de 1933, el cual en su artículo tercero decía: "Se autoriza al Presidente del Consejo de Ministros para reorganizar los servicios de Aeronáutica

años correspondientes, y son cifras por lo tanto que incluyen créditos extraordinarios y demás tipos de alteraciones que pueden experimentar las cantidades previstas en un principio, en los presupuestos generales. Son pues las cifras que con más exactitud nos indican los gastos reales. Para mayor precisión tomamos las cifras de la columna "Créditos líquidos deducidos del total los anulados y transferidos". (Vid. AEE 1931, p. 368 y ss.; 1932-33, p. 406 y ss. y 1934, p. 474 y ss.)

El significado de las reformas consistió en racionalizar la estructura del Ejército de modo que pudiera resultar eficaz. Ese objetivo se logró sin que el coste fuera ni mucho menos excesivo. Ahora bien, es evidente que los efectos difícilmente podían hacerse palpables en un bienio, durante el cual a lo que dio tiempo fue únicamente a ir articulando las medidas reseñadas.

Es por lo tanto inexacto afirmar que Azaña no alcanzó los objetivos que se había planteado en su política militar. Otra cosa es que desde un punto estrictamente técnico militar determinados aspectos de sus reformas sean más o menos mejorables; una crítica detallada de este tipo, que nosotros no es-

(2) cont. pág. anterior

nacional dentro de los créditos incluidos para los mismos en el presente presupuesto en las secciones correspondientes a los Ministerios de Guerra, Marina y Gobernación". Gracias a este artículo pudo hacerse dicha reorganización por decreto, pero en base a las partidas relativas a la Aviación de los ministerios que tenían servicios de aeronáutica. Por lo tanto la aviación militar en 1933 siguió gravando el presupuesto de Guerra, como puede verse por lo demás en el correspondiente desglose en capítulos y secciones en *La Gaceta*.

tamos capacitados para realizar, no se ha hecho. Las que se han hecho son, como la nuestra, análisis globales de sus principales orientaciones, y desde ese punto de vista es indudable que constituyeron una importante mejora para el ejército español.

Otra cuestión es la situación moral del ejército.

Ha sido una posición frecuente afirmar que lo decisivo de las reformas de Azaña no fue su contenido sino la manera de realizarlas. A pesar de la publicidad que rodea la actuación política y la ideología de Azaña, con inmejorables elementos para su estudio (sus discursos en las Cortes, bien explícitos, un diario que es una fuente inapreciable de datos, las propias leyes que impulsó, sus otras obras escritas, toda una tradición bibliográfica ha persistido en presentar a Azaña como un intelectual antimilitar, cuya actividad en el ministerio de la Guerra no fue sino la de "humillar" al ejército. Esto, que fue la propaganda que la derecha española se complugó en difundir durante los años republicanos, es un puro depropósito que se repita en una bibliografía pretendidamente científica.

La política azañista levantó numerosa oposición, tanto dentro como fuera del ejército. Pero la oposición que existió dentro de los militares fue debida no tanto al contenido de sus reformas, aunque muchas de estas levantaron descontento en los sectores afectados, sino al significado político de la coalición en el poder. Es indudable que el paso de un ejército con determinados privilegios y con una influencia en la vida

política y social del país muy superior a la que le corresponde en un Estado moderno, a un ejército que no había de tener voz en la política de la nación -excepto en lo concerniente a su ámbito, doctrinas militares, etc.- y que había de permanecer absolutamente sometido al poder civil, único representante de la nación, tenía que provocar la enemiga absoluta de tantos oficiales habituados a los antiguos usos. El problema era pues político en el estricto sentido de la palabra.

Así nos parece absolutamente correcta la conclusión a la que llega Salas Larrazábal en el sentido de que "los problemas profesionales apenas tuvieron influencia determinante en la postura política de los militares. Fueron otras incitaciones, de carácter nacional y superior jerarquía, las que produjeron la lenta y creciente politización de los militares y en su coincidencia con los grupos políticos de derecha e izquierda". Bien entendido que una más de esas incitaciones fue el papel que correspondiera jugar al ejército en la sociedad (1).

Y parece cierto que muchos militares no especialmente monárquicos, e incluso algunos de tendencias republicanas, reaccionaron contra las reformas emprendidas al comprobar las

(1)

Aunque dicha opinión es contradictoria con que dos páginas antes se afirme que los altibajos y contradicciones de las reformas ocasionaros que los militares, al comprobar que el ejército no mejoraba pasaran "al convencimiento de que los fines del legislador eran puramente trituradores", como explicación de la animadversión a Azaña.

Op. cit. pags. XXXIII y XXXV.

consecuencias que para la función del ejército comportaban. Pero no porque Azaña se complaciera en provocar hostilidades. Lo que sí es cierto es que no aceptó ir por un camino pragmático del tipo que Payne presenta como antagónico (el de Bethencourt en Venezuela), de halagar a los altos mandos, para de esa forma interesarles y comprometerles con el nuevo régimen. Pero tampoco cabe calificarle de doctrinario: intentó ejecutar la transformación del ejército con los máximos miramientos posibles respecto a los intereses existentes pero sin transigencias. Lo que no se puede pretender es que no se sancionaran las actividades conspirativas o que se ofreciesen o conservasen en los puestos de responsabilidad a militares de dudosa fidelidad al régimen.

¿Significaron las rebeliones militares de 1932 y 1936 que la política iniciada por Azaña fracasó rotundamente? Creemos que la cuestión no está bien planteada en esos términos. La obra de Azaña en el bienio reformador fue crear la nueva planta sobre la que había de crecer el nuevo ejército. Y tal surgimiento era, forzosa y obviamente, una cuestión de tiempo, de años. De que los militares procedentes del antiguo régimen se "resignasen" definitivamente tanto a su nueva situación en la sociedad como a la permanencia de un régimen republicano en el que no sólo las clases conservadoras sino también las populares tenían acceso al poder. Y en segundo lugar que surgiesen nuevas promociones de oficiales formados en esas convicciones. Ambas rebeliones, la triunfante a costa de una guerra civil y la fracasada de agosto de 1932 eran índice de que tal -

transformación no había sucedido, porque no podía ser de otro modo; pero sería un error concebirlas como un fenómeno predominantemente militar por el hecho de que el ejército las protagonizase; porque lo que sucedió fue que el sector militar de uno de los dos bandos en los que la sociedad española se dividía antagónicamente se lanzó por el camino de la violencia en defensa de la concepción de la sociedad que defendía, concepción que repetimos, sólo como un factor más, incluía un determinado tipo de ejército. Ambos levantamientos militares serían un fracaso imputable a la política de Azaña si el objetivo de ésta hubiese sido el de disolver el antiguo ejército en la línea expuesta páginas atrás; otra cosa es la afortunada o desafortunada política llevada a cabo en el ministerio de la Guerra en los meses anteriores al movimiento subversivo de julio de 1936 en lo que se refiere a la confianza en la actitud de ciertos militares.

Respecto a las famosas intenciones "humilladoras" o "trituradoras" del ministro de la Guerra, lo menos que se puede hacer si se consideran reales es probarlas con hechos concretos, en la medida en que sea posible. Pues no basta con reproducir las afirmaciones de un representante típico del antiguo ejército, Mola, que tenía motivos muy fundados para ver con antipatía todo lo relacionado con el nuevo régimen. El diario de Azaña es una continua prueba de lo contrario (y la confirmación la constituye la propia política desarrollada, con todos los errores que se quieran advertir). Ya explicamos lo que había tras la frase de "triturar al ejército". A pesar de

ello en las tantas veces citada obra de Payne se puede leer textualmente "El dirigente republicano carecía por completo de tacto político, y se vanagloriaba de haber sido capaz, como él mismo aseguraba, de "triturar" al Ejército". La frase, de ser cierta, más que impolítica, hubiera sido de orate. Y no tiene sentido afirmar que efectivamente su reforma más que tal fue "un ataque revolucionario -un intento de debilitar, de humillar y de degradar el antiguo espíritu del Ejército" cuando cabalmente toda la política militar de Azaña fue encaminada a suprimir y transformar dicho espíritu. El que fuera subjetivamente recibida como "humillación" por muchos militares es una cara más de las resistencias políticas con que tropezaba la transformación del ejército, una manifestación más de ese espíritu que consideraba ofensivo que los militares dejaran de tener influencia en la política interna del Estado, esto es, en la política de los gobiernos.

D, PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

Si algo refleja la breve mención del programa de Izquierda Republicana de 1934 es la discreción con que Azaña prefería que se tratasen los temas relativos al Ejército. En efecto, se hace tan sólo, se afirma escuetamente lo siguiente:

"Defensa Nacional:

11. Política militar.- España ha de mantener la integridad de su territorio y conservar, en casos de guerra, la libertad de sus determinaciones. Su política militar se limitará a preparar y sostener el instrumento eficiente para aquellas necesidades".

Lo cual es simplemente una sucinta e impecable definición de la política militar de un Estado moderno sin ambiciones imperialistas, concepción que la República intentó plasmar en el primer bienio.

4. POLITICA REGIONAL

A. PROGRAMA DE 1931



PROGRAMA DE 1931

En el esquema programático de mayo de 1931 la referencia a la cuestión regional, tema del que se sabía desde la misma implantación de la República que iba a constituir un eje clave de la política republicana, es sumamente breve. Decía así: "Apoyamos una República parlamentaria democrática y una estructuración nacional que sobre la base de una amplísima autonomía a los municipios reconozca la personalidad jurídica de las regiones".

Si no fuera por su misma brevedad se estaría tentando de ver en esa formulación una posición más bien reticente respecto al problema de la autonomía regional, y que no hace prever en absoluto las posiciones firmemente autonomistas que adoptaría el partido. Parece resaltar más la autonomía "amplísima" que se promete a los municipios que una amorfa "personalidad jurídica" para las regiones que, lo mismo puede significar una autonomía política que una mera descentralización administrativa.

Sin embargo, el carácter esquemático del texto programático, así como el hecho de que ya en marzo de 1930 el líder del partido hubiese adoptado públicamente en Barcelona posiciones autonomistas claras, nos impide darle mayor trascendencia a esta ambigua formulación. Tampoco suponemos que a esas alturas el partido naciente estuviese cohesionado en torno a un programa autonomista elaborado, sino únicamente resaltarnos la imposibilidad de establecer nada fijo sobre las posiciones exis

tentes en este momento en el seno de un partido en formación, aunque nuestra opinión iría en el sentido de suponer una gran división respecto al contenido de una autonomía que no creemos que fuera discutida. Tal sería como veremos la situación posterior, aunque agravada probablemente por el hecho de la adhesión a la minoría parlamentaria de diputados con una menor compenetración con el ideario de Acción y con escasa tradición de disciplina.

La posición de Azaña era conocida, como decimos, desde hacía más de un año, desde marzo de 1930. En el viaje que los intelectuales castellanos realizaron a Cataluña en dicha fecha, invitados por sus colegas catalanes como correspondencia a la defensa que aquéllos había realizado de la lengua catalana en tiempos de la Dictadura (1), Azaña había leído unas cuartillas en la sobremesa de uno de los banquetes. El breve discurso parece que causó una fuerte impresión (2); más adelante los catalanes se lo recordarían cuando recabarán apoyos para el Estatuto. En él Azaña exponía en bríosas palabras la solidaridad que unía a Cataluña y a Castilla en la lucha por la libertad. La Dictadura había oprimido tanto a Cataluña como al resto de España. Y el dolor castellano era mayor pues para oprimir a

(1) En torno a este viaje y a las relaciones entre intelectuales castellanos y catalanes, vid., Ventalló, *Los intelectuales...*

(2) Amadeu Hurtado, *Quaranta anys...*I, p.572 y Azaña, OC.IV, p. 27.

aquella se había alegado la unidad de España y se había empleado la lengua castellana. La consecuencia política era clara: la libertad de ambos pueblos iba unida y su lucha era común.

Y para una futura convivencia Azaña se mostraba liberal al máximo: se habría de basar en "la federación" y llegaba a reconocer el derecho a la separación en caso de que tal voluntad se impusiera en Cataluña (1). No cabe duda de que tal afirmación era más de carácter propagandista que otra cosa, pues para Azaña la autonomía, con el grado de amplitud que fuese, era, no sólo de justicia, sino una manera de resolver un problema político (tendencias centrífugas en diversas reuniones) de la única manera en que simultáneamente se podía contribuir a la solidaridad de los diversos pueblos españoles: la concesión de un autogobierno para aquellos que lo desearan.

En modo alguno hubiera colaborado Azaña en una política de favorecer una separación de Cataluña: su españolismo -abarcador de todos los pueblos y naciones englobados en España- no se lo hubiera permitido (2).

(1)
Azaña, OC. III, p. 573.

(2)
Sobre este nacionalismo español de Azaña, vid. por ejemplo su negativa a firmar en 1939 un documento de los republicanos españoles exiliados por aludirse en su texto a "españoles, catalanes y vascos", como entidades diferentes. OC, III, p. 533; vid. también en este sentido Jackson, *La República* ..., p. 71.

Respecto al tema federal creemos que Azaña no estaría especialmente apegado a una solución de tal carácter, pero que tampoco sería adverso. De hecho, la Alianza Republicana llegó a adoptar posiciones federales por esta misma época, pero la postura de Azaña era política y pragmática, no doctrinaria, y para resolver el problema regional hubiera adoptado la solución más hacedera, que en su momento fue indudablemente la autonomista, tal como se acordó en San Sebastián.

B. DISCUSION DE LA CONSTITUCION

DISCUSION DE LA CONSTITUCION

Fue con el comienzo de la discusión constitucional cuando Azana pudo comprobar la amplitud y variedad de las opiniones existentes sobre el tema en la minoría parlamentaria. Ante el deseo de Sánchez Albornoz de hablar en el turno de la discusión de totalidad del proyecto, se trató en una reunión del grupo el contenido de su discurso. Tras largo debate se logró homogeneizar las posturas. Azaña resume así aquella discusión: "Después tanteamos el debate sobre la Constitución. Sánchez Albornoz, que es castellano y unitarista, quiere pronunciar un discurso basado en sus conocimientos de historiador. Que en España nunca hubo naciones. Antifederalista. Gabriel Franco también es unitarista, y defiende la igualdad tributaria. Ansó, alcalde de Pamplona, protesta. Defiende la ley paccionada de 1839, y sostiene, con los derechos de Navarra, la teoría de que Navarra fue independiente hasta ese año. Unos son autonomistas, otros federales como Palanco, que quiere hablar en las Cortes para introducir esa palabra en el artículo 1º. Las diferencias son grandes. Gran discusión, hasta que se consigue convencer a unos y otros para que adopten la línea general del partido, y se sometan a ella. El más duro es Sánchez Albornoz, que tiene sus convicciones de sabio, y cree que no puede pasarse sin decirlas, y decirlas redondamente, como en una disertación académica, sin reparar en las consecuencias políticas. Yo les digo que no deben hacer nada que comprometa el porvenir del partido, innecesariamente, adelantándose a adop

tar posiciones hostiles al autonomismo" (1).

Al cabo, en su breve discurso pronunciado el 27 de agosto , junto con la rectificación de días después (2), Sánchez Albornoz defendió el autonomismo de la Constitución a la par que hacía un canto castellanista, sin decir nada que disonase, para alivio de Azaña, con la línea del partido (3).

La discusión del tema regional en la Constitución iba a estar determinada por la enmienda presentada por el Presidente del Gobierno -todavía Alcalá Zamora- tras arduas negociaciones con la minoría catalana. A pesar de que todos los partidos republicanos aceptaban -de acuerdo con el pacto de San Sebastián- el principio autonómico, no dejaban por ello de ser reticentes y restrictivos ante el contenido de la autonomía, considerando inaceptable la amplitud del texto elaborado en Nuria, mientras que los catalanes venían con la pretensión de que dicho texto fuese aprobado sin ser retocado en su contenido fundamental. La enmienda de Alcalá Zamora intentaba abordar dicha situación mediante un acuerdo que alcanzaba la mayor parte de los puntos discutidos y en la que había logrado

(1)

Azaña, OC. IV, p. 102.

(2)

DDSS de 27-8-31 y 8-9-31.

(3)

Azaña, IV, p. 105.

transacciones de importancia por parte de los catalanes, casi únicos interlocutores en la cuestión regional.

A pesar de ello, según Azaña, la enmienda había causado mal efecto en la Cámara. Principal característica de ella era la división tripartita de competencias entre el Estado y la región, incorporando al texto constitucional las competencias de cada parte, así como las compartidas (legislación a cargo del Estado y posible ejecución por la región). Se argumentaba al parecer, que la enmienda venía a introducir el Estatuto en la Constitución, prejuzgando la cuestión. Aparte de que como escribiera Azaña, también el texto del proyecto prejuzgaba la cuestión de forma opuesta al ser incompatible con el Estatuto, no sería nada extraño que tanto el Presidente del Gobierno como el ministro de la Guerra, vieran positivo el que el texto constitucional fuera lo más explícito posible en esta materia tan polémica, pues así se ponían al margen de la futura contienda partidista sus aspectos esenciales. Sin embargo, como decimos, la mayor parte de los grupos parlamentarios eran hostiles por esa razón a la enmienda, y probablemente por considerar todavía excesivas las atribuciones a las regiones autónomas.

El caso es que en la misma situación se encontraba Acción Republicana. A duras penas logró su jefe lograr que el grupo parlamentario acordara que el representante suyo en la comisión constitucional, Ruiz Funes, recibiese el encargo de votar a favor de la admisión de la enmienda, y ello con la re

serva de que se hacía así con la intención de discutir luego punto por punto las facultades de la región autónoma. "En mi partido predomina la hostilidad al Estatuto y a la enmienda", comenta Azaña en esta ocasión; no está claro de todas formas si se refiere al partido globalmente o a la minoría parlamentaria, aunque creemos que más bien a esta última (1).

Dicho estado de ánimo, junto con la todavía incipiente disciplina de voto existente en Acción Republicana, iba a provocar el fraccionamiento del grupo a la hora de votar las atribuciones respectivas del Estado y de la región. Con ocasión de una enmienda de Largo Caballero por la que se reserva ba al Estado la ejecución de la legislación social -los socialistas temían, dado el predominio cenetista en Cataluña, que no fuera aplicada en caso de atribuirla a la región (2)-, el Gobierno, por boca de su Presidente anunció la intención de votar en contra. El texto base de la discusión era una nueva redacción de la enmienda de Alcalá Zamora a la que se había llegado tras un acuerdo de los diversos partidos -excepto las derechas antiautonomistas-, incluidos claro los catalanes, quienes respecto a la enmienda de Largo habían amenazado con visos de seriedad protagonizar una retirada del Parlamento en caso de que fuese aprobada. La razón era que si por un lado los so

(1)

Azaña, OC. IV, p. 131.

(2)

DDSS, 25-9-31, nº 45, p.43, y Azaña, OC.IV, p. 152.

cialistas tenían la fuerza sindicalista en Cataluña, los catalanes no podían perder la baza de la ejecución de la legislación laboral puesto que electoralmente dependían en gran medida de los sindicalistas.

Dadas instrucciones a los miembros de Acción Republicana para votar contra la enmienda, la mayoría de sus miembros abandonaron sin embargo, el salón en el momento de votar, acompañados de numerosos radicales; la enmienda resultó aprobada por 132 votos 118 (1). Tan sólo votaron en contra Carreras, Giral, Peñalba, Royo Gómez, Ramos y Franco; incluso votaron a favor dos diputados: Sacristán y Romero (2).

Muchos se consideraron justificados para salirse al ver a Azana abandonar el banco azul, quien actuaba así para no votar contra su compañero de gobierno. El hecho ocasionó que Azaña les dirigiera una airada reprimenda por su irresponsabilidad ante el riesgo de que los catalanes efectivamente llevarsen a cabo su amenaza, advirtiéndoles que en tales circunstancias de indisciplina no podía continuar en el cargo de presidente del Consejo Nacional del partido (3).

(1)

En las votaciones, al referirnos a los diputados de Acción Republicana tomamos en cuenta como es natural, sólo a los que en ese momento estaban incorporados a la minoría.

(2)

La argumentación oficial de Largo se basaba en que existiendo tratados internacionales sobre condiciones de trabajo era imprescindible que el Estado pudiese garantizar su cumplimiento.

(3)

Tras la aprobación de la enmienda se logró una transacción entre unos y otros permitiendo a la región la ejecución de las leyes sociales y atribuyendo en tal caso al Estado un derecho de inspección.

La firme actitud de Azaña le llevaría con rapidez a lograr una disciplina efectiva -una actitud decidida en este sentido es la que echaba él de menos por parte de los ministros radical socialistas, que frecuentemente no se atrevían a enfrentarse a sus diputados, como lo probaría la actitud del grupo en otra enmienda de Prieto, reservando para el Estado la regulación de las Bolsas de valores; en este caso, menos Franco, que había firmado la enmienda con Prieto, todo el grupo votó con el Gobierno y contra la enmienda (1).

Pocas intervenciones hubo de los miembros de Acción Republicana en la discusión de los artículos referidos a esta materia. Prácticamente todas ellas fueron en sentido restrictivo de la autonomía, reforzando las facultades estatales.

Así una enmienda firmada en primer lugar por Pedro Rico y con él por Fernández Clérigo, Mirasol, y Ramos de Acción Republicana, junto con Rodríguez Pérez, Domínguez Barbero y Armasa ajenos al grupo. La enmienda, referida al número 11 del artículo 14, reservaba al Estado "La organización judicial, salvo las atribuciones que se reconozcan a los poderes regionales". El texto del dictamen, finalmente aprobado, únicamente reservaba al Estado la jurisdicción del Tribunal Supremo -también salvo las atribuciones que se reconocieran a los poderes regionales-; Fernández Clérigo, al defender la enmienda alegó una

(1)

Azaña, OC. IV, p. 154; DDSS n.º 45, p. 64.

razón política básica, arguyendo que la función judicial era principalmente atributo de la soberanía y por lo tanto no se debía delegar de manera irreversible nada que atañera a la organización judicial, como se hacía en el dictamen con todo lo no referido al Tribunal Supremo. El argumento de la soberanía sería continuamente utilizado en la discusión por los adversarios o reticentes a la autonomía. Los inconvenientes prácticos de una diversa organización de los tribunales en diversas regiones y la contradicción del dictamen con la uniformidad de los tribunales exigida en el artículo 96 fueron otros argumentos utilizados por Fernández Cárigo (1).

Más importante sería la actuación de Sánchez Albornoz en el tema relativo a la lengua. Como dijera Azaña, en general los diputados solían ser muy autonomistas en materias ajenas a las suyas, pero se volvían intransigentes en las propias. Así en su partido mientras Vergara o Franco, hacendistas, no toleraban apenas la autonomía en esta materia, el tema que más preocupaba a Sánchez Albornoz, historiador y catedrático, era la lengua. Presentó diversas enmiendas que fue modificando según evolucionaba la discusión, hasta que logró un texto que aceptaron los catalanes y los restantes partidos re

(1)

DDSS nº 45, p. 60.

publicanos, enmienda que fue aceptada por la Comisión y que convertida ya en dictamen acabó siendo aprobada por la Cámara.

El texto de la enmienda era el siguiente: "Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República".

Fue el mismo Sánchez Albornoz, que tenazmente había perseguido este texto que a su juicio garantizaba tanto la perpetuación de la enseñanza del castellano como el respeto a las minorías de dicha lengua en las regiones autónomas, quien defendió la enmienda.

El primer aspecto se alcanzaba al establecer no sólo que el castellano fuese obligatoriamente estudiado sino también que fuera utilizado como instrumento de enseñanza. Y se garantizaba el derecho de las minorías a recibir la enseñanza en su lengua materna pues la redacción del texto dejaba suficientemente abierto el camino en su primer inciso para que en los estatutos quedase expresamente regulado y reconocido.

A continuación se pasó a discutir una enmienda de

Unamuno. La enmienda, que la firmaban también Maura, Sánchez Román, Novoa Santos, F. Rey, E. González y uno de los más centralistas diputados de Acción Republicana, Antonio Sacristán, trataba de que el Estado mantuviese forzosamente centros de enseñanza en castellano a todos los niveles, en vez de ser una potestad facultativa, y dejaba a las regiones la facultad de organizar la enseñanza en su lengua respectiva.

Defendida por Unamuno, lo fue también por Maura en un apasionado discurso en el que defendía como imprescindible el carácter forzoso del mantenimiento de la enseñanza en castellano por el Estado, si se quería conservar la cultura castellana en Cataluña; políticamente hizo un intento de que los radicales se volvieran atrás en su apoyo al texto de Sánchez Albornoz, que Lerroux había prometido a Azaña tras una conversación entre ambos. Acusó al Gobierno de cambalaches y enredos, así como de desinterés por la cultura castellana.

La intervención de Maura provocó una de las intervenciones parlamentarias más airadas de Azaña, acusándole de buscar banderas españolistas de carácter demagógico y defendiendo la necesidad de no prejuzgar el Estatuto, dejando para éste la regulación detallada de la materia. Justificó asimismo la necesidad de llegar a acuerdos que facilitasen la labor parlamentaria y el derecho a votar contra la enmienda de Unamuno sin que ello implicase desinterés por la cultura y lengua castellanas. Además le hizo repetidas alusiones a que él, por su colaboración en el Gobierno hasta hacía pocos días no estaba

legitimado para actuar de aquella forma intentando quebrar la solidaridad de la mayoría gubernamental -la discusión tuvo lugar el 22 de octubre- (1).

Se podrían citar asimismo dos breves intervenciones de Ansó y Ramos. La primera, no en nombre de Acción Republicana sino del conjunto de los diputados republicanos y socialistas del País Vasco, defendiendo el quorum exigido para la aprobación de los Estatutos, los dos tercios de los electores de la región (2). La de Ramos para, aún retirando una enmienda suya en tal sentido, basándose en el arcaísmo del derecho de aquellas regiones que habían conservado el derecho foral, y considerando un atraso la diversidad del derecho privado español, proponer que a través de comisiones mixtas y de una manera plenamente voluntaria se fuese hacia la unificación de dicho derecho; la propuesta sería recogida por Carner con interés y aplauso (3).

Y como muestra de la actitud de un sector de la minoría de Acción Republicana se podría recordar el que frecuentemente acompañasen con sus firmas enmiendas de otros diputados y con la misma orientación restrictiva para la autonomía.

(1) DDSS nº 61, p.8 y ss., de 22-10-31; Azaña, OC.II, p. 71 y IV, p. 196.

(2) DDSS nº 45, p. 37.

(3) DDSS nº 45, p. 74 y 85.

También alguna otra enmienda firmada en primer lugar por diputados de Acción Republicana, retiradas ante acuerdos posteriores o por ser ya incoherentes con el curso que había tomado la discusión, iban siempre en el sentido de garantizar la supremacía estatal; así la enmienda firmada en primer lugar por Franco y también por Fernández Clérigo, Sacristán, H. de Castro y algún miembro de la Asociación al Servicio de la República al artículo 21 que establecía que "el derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas", retirada sin ser defendida por ninguno de sus firmantes.

C, DISCUSION DEL ESTATUTO DE CATALUÑA

DISCUSION DEL ESTATUTO DE CATALUÑA

La discusión del Estatuto catalán fue lenta y difícil. Podía pensarse que establecido en la Constitución el marco límite de atribuciones de las regiones autónomas, a la hora de elaborar un Estatuto se concederían todas ellas sin excesivas restricciones ni regateos. Eso esperaban los catalanes por ejemplo.

Sin embargo el ambiente político de las Cortes, influidas por un lado por la continua propaganda antiautonomista de las derechas y por otro reticentes los propios diputados a conceder una autonomía amplia, hizo que se iniciase un largo camino del que sólo se saldría gracias a la habilidad del Jefe del Gobierno y a las consecuencias favorables para la solidaridad de los grupos republicanos del triunfo sobre la rebelión de Sanjurjo.

Los socialistas eran especialmente adversos a la autonomía dentro de la mayoría gubernamental. En ello influyó no sólo el tradicional centralismo que ha impregnado hasta muy recientemente a los movimientos socialistas y comunistas sino como ha señalado Varela (1), el temor a que dicha autonomía fuese utilizada por fuerzas políticas distintas. Fue un elemento importante en la actuación de todos los grupos políticos, aunque especialmente en la de aquellos que se opusieron a la

(1)

Varela, *El problema regional* ..., p. 32.

autonomía. Un ejemplo evidente dentro del grupo socialista lo constituyó la actitud de Prieto, furibundo antiautonomista e incluso anticatalanista, basado en no poca medida en el temor a un País Vasco gobernado por los nacionalistas católicos.

Si bien Azaña tenía que confiar en los medios habituales de control de su mayoría parlamentaria para lograr la cohesión de los grupos republicanos, arguyó un medio suplementario para lograr que los socialistas votasen el Estatuto catalán, y fue el simultanear su discusión con la de la Reforma Agraria. Fue una fórmula de intereses cruzados con la que empujaba tanto a los socialistas a votar la autonomía, como a los catalanes a votar la Reforma Agraria, pensada fundamentalmente para las provincias latifundistas todas ellas de predominio socialista (1).

El mismo Varela ha estudiado detalladamente los procedimientos utilizados por la oposición y por el Gobierno, y más ampliamente por los autonomistas y los antiautonomistas en la discusión del Estatuto catalán. En ella la función de Acción Republicana, dadas las tendencias imperantes en la minoría parlamentaria, que ya conocemos a través de su actuación durante la discusión de la Constitución, no pasó de ser sino un instrumento más, instrumento imperfecto, en manos de su jefe, como Presidente del Gobierno, para ir imponiendo la aprobación del

(1)

Azaña, OC. IV, p. 358.

Estatuto. Podríamos analizar la intervención de Acción Republicana en la discusión y aprobación a través de los siguientes canales: 1) la actuación de Azaña como Presidente del Gobierno, 2) la actuación de Bello como presidente de la comisión que dictaminó el estatuto, 3) las intervenciones de los diputados de Acción Republicana defendiendo las soluciones gubernamentales o exponiendo el criterio oficial del partido (ambas cosas solían coincidir), y 4) las intervenciones de diputados de Acción Republicana que intervenían en defensa de un criterio personal.

1) En una división como la citada es indiscutible que correspondería al primer apartado, a la actuación gubernamental de Azaña, el peso fundamental de la tarea, constituyendo los apartados 2) y 4) más un obstáculo que una ventaja.

La táctica parlamentaria del Gobierno -de Azaña por tanto- la sintetiza Varela en cuatro puntos (1): a) el intento de lograr la máxima homogeneidad del Gobierno y de la mayoría parlamentaria, mediante frecuentes discusiones en el seno del gobierno e instando a los ministros a que controlasen y se reuniesen con sus respectivas minorías para lograr la aceptación de los puntos de vista gubernamentales.

Es indudable que el compromiso a fondo de la política gubernamental y de su mayoría parlamentaria en sacar el Es-

(1)

Varela, *op. cit.* p. 111 y ss.

tatuto adelante evitó que hubiera en Acción Republicana una dispersión mayor de actuaciones, conociendo el estado de ánimo antiestatutista que abundaba entre sus miembros. Y por ello mismo una de las primeras tareas que Azaña llevó a cabo fue el conseguir un consenso dentro de su grupo. A comienzos de mayo Azaña reseña en su diario alguna reunión con su grupo en las que poco a poco se va consiguiendo homogeneizar las posturas, lo que se manifestó en la práctica ausencia de actitudes discrepantes durante la discusión parlamentaria (1). A la hora del voto definitivo de la ley, Acción Republicana votó en bloque a favor excepto A. Sacristán y por supuesto Figueroa (que había dejado ya de pertenecer al grupo) que votaron en contra (2).

b) Las negociaciones directas con los principales líderes catalanes a través de Carner, ministro de Hacienda y con reconocida autoridad entre sus colegas catalanes. Para las pretensiones de Azaña, Carner gozaba de una posición privilegiada, pues el hecho de que estuviese en el Gobierno le permitía "ver las cosas desde dentro", como decía Azaña, pudiendo comprobar las dificultades con las que se enfrentaba el Gobierno y la necesidad de que los catalanes facilitasen su labor aceptando las transacciones que se les ofrecían. Sin que Azaña hubiese hecho estas consideraciones a Carner expresamente, creía

(1) Azaña, OC.IV, p. 376 y 380.

(2) DDSS, nº 233, p. 15.

ver en la actitud más flexible de los catalanes la intervención en ese sentido de su ministro de Hacienda, de quien tenía un alto concepto -poco frecuente en Azaña- y a quien estimaba sobremanera por su valía personal (1).

c) El tercer aspecto de la actuación de Azaña, el control sobre la comisión de estatutos, que debía haber resultado una tarea sencilla al tener un miembro incondicional de su partido en la presidencia, fue complicada por la incapacidad de Bello para desempeñar con acierto su difícil cargo. Las frecuentes consultas de Bello con Azaña, así como la aludida incondicionalidad de aquél para con el Presidente del Gobierno y líder de su partido paliaron en alguna medida la dificultad a costa de recargar la labor de Azaña. Este además optó en algunos casos por utilizar a otros diputados más capacitados y no pertenecientes a la comisión, evitando la actuación de ésta.

d) Por último se encontraría la necesaria neutralización de las continuas maniobras dilatorias de la oposición, sin recurrir a procedimientos extremos -la guillotina- que Azaña se negó en todo momento a utilizar. Si recurrió en cambio a la celebración de sesiones nocturnas, a imponer un ritmo de trabajo agotador, así como a simplificar los trámites parlamentarios reduciendo al máximo el número de artículos, con lo que

(1)

Azaña, OC. IV, p. 381.

se eliminaban intervenciones y votaciones.

En esta actitud de Azaña se translucía su absoluta convicción, expresamente consignada en su diario y en más de un discurso de que si lograba solucionar la cuestión regional habría realizado una contribución de primer orden a la historia española (1). Por ello no quería que bajo ningún concepto se le pudiese acusar de haber silenciado a los oponentes de la autonomía; quiso que la posibilidad de discusión fuera siempre ilimitada, dentro de los límites parlamentarios habituales claro, y por ello optó por agotar a los obstruccionistas con sesiones intensivas antes que callarlos con el peso de los votos.

Si esas fueron las vías de actuación gubernamental a lo largo de toda la discusión, en los momentos decisivos se les sumó la intervención parlamentaria directa del Presidente del Gobierno. Gracias a tales intervenciones se superaron momentos de bloqueo de la discusión. En primer lugar estaría el extenso discurso con el que se intentaba clausurar el debate de la totalidad. Durante tres horas Azaña expuso los antecedentes históricos inmediatos del problema catalán, un planteamiento político actual de la cuestión y unas líneas generales sobre el contenido del Estatuto, tocando los aspectos más espinosos.

(1)
Azaña, OC. II, p. 256.

Respecto al primer punto, para Azana el problema catalán existe a partir del momento en que surge y se consolida un malestar en Cataluña respecto a su forma de integración en el Estado español, y eso sucede con el régimen canovista. Ocultación y desconocimiento del problema, regateo a una solución aceptable y luego con la Dictadura, una represión indiscriminada, habían conducido a la deteriorada situación con que se topó la República. Justificó el pacto de San Sebastián como un simple acuerdo en el que, en lo que al problema catalán tocaba, tan sólo había consistido en argüir unas normas procedimentales para algo que era la intención previa de todos los partidos allí representados, es decir, dotar a las regiones que lo solicitasen, especialmente a la catalana, de un régimen de autonomía. Y por lo tanto era clara la necesidad de que la República acometiese entonces dicha tarea.

Rechazó los que denominó complejos de agresión y dispersión. El primero sería el complejo de que Castilla habría agredido y tiranizado a Cataluña; para Azaña no cabía confundir a Castilla o al pueblo castellano con la política de la corona de los Austrias y Borbones, despótica y asimilista respectivamente. Por otro lado, combatía el complejo de dispersión el temor a que la autonomía significase la desintegración de la patria. Bastaba comparar la unión meramente personal en los monarcas de los diversos reinos españoles en los tiempos de esplendor de la Monarquía con la autonomía máxima que se podía conceder según la Constitución para desvanecer semejantes temores.

Respecto a puntos concretos del Estatuto, Azaña habló de los restos de la concepción federal del Estatuto traído por los catalanes que subsistían en el dictamen; trató así mismo de la Hacienda, el orden público, la legislación social, Justicia, enseñanza y de la revisión del Estatuto, exponiendo la posición gubernamental global en dichos temas. Destaquemos como ideas fundamentales: revisabilidad periódica de la materia de Hacienda y necesidad de aceptar el principio de cesión de tributos a la región; unidad de mando y de responsabilidad en la ejecución de las órdenes en materia de orden público (cuando el Estado tuviese que asumir el restablecimiento del orden público, todas las fuerzas estarían bajo su mando); en lo relativo a justicia necesidad de conservar para el Estado la casación de las materias cuya legislación le pertenecía; en enseñanza repudio del sistema de la doble universidad y mantenimiento por parte del Estado de su organización escolar de primera y segunda enseñanza en castellano (con enseñanza del catalán a quien lo pidiese) y posibilidad de que la Generalidad crease las instituciones que deseara; necesidad de evitar duplicidades en los servicios, y por último garantía de reformabilidad del Estatuto, tanto por el sistema que el propio Estatuto estableciese como por la posibilidad de reformar los artículos de la Constitución referidos a la autonomía.

Haría también Azaña una referencia a la actitud de Lerroux intentando extraer unas consecuencias políticas de sus palabras, consecuencias que desafortunadamente Lerroux no siguió. Azaña se complugó en resaltar que la aceptación declara

da por el líder radical del Estatuto le comprometía en la defensa del régimen autonómico para el futuro, quedando de esta manera la política autonómica en sí misma a salvo de las contiendas de partido. Más que Azaña creyera o desconfiase de que eso fuera realmente así (bastante conocía ya la ambigüedad de Lerroux) creemos que el significado de su alusión era literalmente comprometer de manera abierta a Lerroux con sus propias palabras. Como es conocido, con ocasión de la rebelión de la Generalidad en 1934, Lerroux, en vez de limitarse a sancionar a los responsables personales del desatino arremetió contra las instituciones, suspendiendo provisionalmente la vigencia del Estatuto (1).

Antes de dar por finalizado el debate de totalidad tuvo Azaña que intervenir en dos ocasiones más, el 2 y el 3 de junio (2) principalmente para contestar a Melquíades Álvarez, a Ortega y a Maura, limitándose a insistir en los puntos de su primer discurso así como a polemizar con dichos parlamentarios. En la segunda intervención volvería a apeiar a la coherencia futura de Lerroux, exponiendo también, una vez más, el correcto funcionamiento del sistema parlamentario y los requisitos

(1)

El discurso en OC. II, p. 249; sobre éste último pasaje, Vid. Ramírez, *Las reformas...*, p. 224.

(2)

Azaña, OC. II, pags. 287 y 301.

para determinar una crisis de gobierno, requisitos impersonales y que no consistían en que Azaña y Lerroux se pusiesen de acuerdo en cuando éste debía substituir a aquél. Haría además una advertencia importante y que vimos cumplida en la crisis de octubre de 1933, que determinó la disolución de las Cortes Constituyentes. Decía Azaña: "... así como ahora no se nos puede pedir que gobernemos interpretando las ideas y las opiniones ajenas, porque no somos mandatarios de nadie, también sería difícil o penoso pedirnos que después colaborásemos en una política que viniese resuelta y profundamente a transformar las nuestras", lo cual levantó prolongados rumores en la Cámara a la que no pasó desapercibida la trascendencia de lo dicho. Esa circunstancia, no limitada a la política autonomista, sino extendida a más materias, daría al traste con el primer gabinete Lerroux.

Aparte alguna otra brevísima intervención, Azaña tuvo que hablar de nuevo en dos ocasiones, para allanar la discusión en dos de los puntos más polémicos del Estatuto, la Hacienda y la Enseñanza. Respecto a ésta última se trataba de justificar el nuevo texto en el cual, cediendo en su criterio, el Gobierno venía a aceptar como base la existencia de la doble Universidad, pero abriendo la posibilidad de que ambas se fusionaran en una única Universidad con un estatuto autónomo y bilingüe, regida por un patronato con participación catalana y del Estado (1). En su otra intervención, el 31 de agosto, Azaña en

(1) Conviene insistir en que estos acuerdos se plasmaban fuera del hemiciclo en reuniones entre los diversos grupos y el Gobierno, y se concretaban en la mecánica parlamentaria, por medio de la aceptación por la

contestación a las objeciones de diversos diputados y en particular de Alba, explicó los criterios en que se basaba el texto apoyado por la mayoría en materia de Hacienda: revisibilidad periódica ordinaria -aparte la extraordinaria de tipo legislativo- del título de Hacienda del Estatuto; cesión íntegra de algunos tributos (contribución territorial y derechos reales) y participación eventual en otros, en caso de que aquellos tributos no cubriesen el montante necesitado por la Generalidad, facultad íntegra del Estado para crear otros tributos, etc.

2) La falta de talla de Bello para la tarea que tuvo a su cargo provocó que la labor de la comisión fuera más obstaculizadora que resolutive. A juicio de Azaña, quien se lamenta repetidas veces en su diario del hecho, la incapacidad de Bello se basaba por un lado en su absoluto desconocimiento de leyes -Bello era maestro y periodista-, lo que le hacía no percibir toda una serie de problemas de interpretación, de consecuencias de una u otra redacción, etc. Por otro, el puesto exigía unas dotes excepcionales para lograr que las diversas partes llegaran a un acuerdo sin deterioro de la coherencia y aceptabilidad del texto, dotes de las que Bello a pesar de su buena intención carecía. Consecuencia de ello fue que el dictado

(1) cont. pág. anterior

Comisión de las enmiendas que incorporaban dichos acuerdos. Ambas intervenciones en OC. II, p. 371 y 397.

men de la comisión resultó ser excesivamente autonomista para el ambiente de la Cámara y para juicio del Gobierno, además de técnicamente defectuoso (1); a lo largo de la discusión la comisión fue aceptando las enmiendas en las que se plas-
maban el resultado de las negociaciones de los partidos. Tam-
poco se dio la comisión mucha habilidad para defender los tex-
tos de los dictámenes, por lo que Azaña se vio obligado en
varios casos a encargar la defensa de los textos negociados
a otros diputados.

3) Respecto a enmiendas e intervenciones de dipu-
tados de Acción Republicana en defensa de los acuerdos a los
que se llegaba, fueron, junto con intervenciones similares de
otros diputados de la mayoría, un recurso inestimable ante la
mediocridad del trabajo de la comisión; se puede citar por
ejemplo la enmienda firmada por Ruiz Funes y otros seis dipu-
tados, cuatro de ellos de Acción Republicana, que se conver-
tiría en el primer inciso del artículo 1 "Cataluña se consti-
tuye en región autónoma dentro del Estado español, con arreglo
a la Constitución de la República y al presente Estatuto" (2).

(1)
Azaña lo calificó de "inadmisible", OC. IV, p. 385.

(2)
DDSS, nº 180, p. 35.

Peñalba presentó una enmienda junto con otros seis diputados de Acción Republicana, que también pasaría al texto definitivo, al párrafo 2 del art. 2: "Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña, deberá ser publicada en ambos idiomas. La notificación se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada" (1). Como índice del apasionamiento y lentitud del debate baste decir que ante la aceptación por parte de la comisión de esta enmienda la minoría de ella mantuvo el primitivo texto que tuvo que llegar a ser rechazado en votación nominal (196 v. 131).

Ruiz Funes -a quien junto con Jiménez de Asua recurrió en más de una ocasión Azaña para intervenir en defensa de los textos negociados- se encargó en otra ocasión de la defensa del voto particular de San Andrés, por el que se regulaba todo lo relativo a Justicia, frente a enmiendas de Sánchez Román, que fueron rechazadas (2).

4) Por último, tenemos que citar las intervenciones de los diputados de Acción Republicana con carácter meramente personal y al margen o contrarias al criterio sustentado por el Gobierno. En primer lugar, habría que citar a Antonio Sacristán, el más empecinado centralista de todos los diputados

(1) DDSS, n.º 188, p. 21.

(2) DDSS, n.º 218, p. 45.

de Acción Republicana, -excepto Gonzalo de Figueroa, quien de
jó de pertenecer al grupo precisamente a consecuencia del dis
curso de Azaña sobre la totalidad del 28 de mayo-, y que votó
con frecuencia contra las posturas gubernamentales. El mismo
defendió por ejemplo una enmienda al art. 1, firmada en primer
lugar por Unamuno y con él por Sánchez Román, y algunos de sus
fieles, de evidentes connotaciones españolistas en su redacción,
aunque no tuviera consecuencias orgánicas (1).

Fernández Clérigo defendió a título exclusivamente
personal -sobre la materia de Justicia en la que Ruiz Funes
había llevado la postura gubernamental y de Acción Republicana-
dos enmiendas sosteniendo posiciones muy cercanas a las que ha
bía mantenido Sánchez Román, razón por la que la comisión ape-
nas intervino para rechazarlas, retirándolas su autor sin ne-
cesidad de pasar a votación; puede observarse en esta actitud
una manera de demostrar la lógica ausencia de intención de di
ficultar la discusión prolongándola inútilmente (2).

Un último episodio del Estatuto catalán durante los
Gobiernos Azaña fue la lenta tramitación del traspaso de servi-
cios, fundamentalmente debido a la dificultad para ponerse de
acuerdo los técnicos de la Generalidad y del ministerio de Ha
cienda en la valoración de los mismos. Ante las reclamaciones

(1)
DDSS nº 181, p. 15.

(2)
DDSS nº 218, p. 59.

catalanas Azaña justificaba el retraso por el deterioro progresivo de la situación política en los primeros meses de 1933, en la medida en que el tema no podía ser objeto de atención preferente por parte del Gobierno (1). Sin embargo, con la remodelación ministerial de junio, y el nombramiento de nuevo ministro de Hacienda, Viñuales, que subsistitufia al enfermo Carner, el problema lejos de solucionarse se encontró (2).

En efecto, Viñuales, perteneciente a Acción Republicana, mantuvo posturas sumamente rígidas, rechazando incluso soluciones acordadas por la comisión mixta Gobierno-Generalidad, compuesta por igual número de miembros de ambas partes. Tras numerosas gestiones catalanes-Azaña-Viñuales, el Presidente del Consejo adoptó una posición firme que manifestó mantener por encima de las presiones de unos y otros. Lo cual dio lugar a un tenso consejo de ministros -en los días posteriores al 17 de agosto- en el que ante la irritación de Azaña, Viñuales mantuvo sus puntos de vista, llegando aquel a decirle a su ministro que lo que decía "estaría bien en boca de Royo Villanova". Como era lógico, Prieto apoyaba incondicionalmente al

(1)

Pi Suñer, *La república...*, p. 129; sobre el proceso de traspaso de servicios, vid. Arias Velasco, *La Hacienda ...*, p. 158.

(2)

Es interesante la descripción que Pi Suñer hace del nuevo ministro de Acción Republicana: "El nuevo ministro de Hacienda era Agustín Viñuales, técnico más que político. Azaña lo había escogido porque creía que se adaptaría con más facilidad a sus directrices en la cuestión de las valoraciones de los servicios. Y se engañó por completo. Viñuales, hombre frío, cerrado, intransigente, en vez de facilitar la solución de los problemas pendientes, los agravó, convirtiéndolos en serios conflictos". *Op. cit.* p. 129.

ministro de Hacienda en sus posturas. El conflicto significaba la crisis al verse forzado Azaña a prescindir de Viñuales, aunque los hechos se precipitaron con las elecciones a vocales del Tribunal de Garantías y la crisis de origen presiden
cial (1).

Aunque en palabras de Pi Suñer, la fórmula de Azaña sobre este problema de la valoración de servicios no entusiasma a los catalanes, la firme decisión de Azaña de imponer una solución por lo menos aceptable para ellos aún a costa de provocar una crisis en un momento ya harto delicado para su Gobierno probaba la inquebrantable decisión de poner en funcionamiento el régimen autonómico. Ya en su discurso de 27 de mayo del 32, ante los rumores de un sector de la Cámara, había afirmado: " ... me sorprende la sorpresa de algunos señores diputados, que, por lo visto, habían creído que hemos estado hablando de autonomía en broma" (2).

(1)

La versión del consejo de ministros en Pi Suñer, *op. cit.* p. 131, en base a una narración por escrito que el ministro Companys le envió.

(2)

Azaña, OC. II, p. 275.

D. OTROS ESTATUTOS REGIONALES

OTROS ESTATUTOS REGIONALES

Sí en la elaboración del Estatuto catalán para conocer cuál fue la actitud de Acción Republicana podemos limitarnos a su actuación en las Cortes, ocurre lo contrario para las gestiones que en otras regiones españolas se realizaron en pro de la obtención de estatutos de autonomía. En efecto, en el primer caso, la consecución del Estatuto catalán fue una tarea de primera hora del régimen, como lo probó el que prácticamente toda la elaboración del texto constitucional relativo a las regiones fue una negociación con los diputados catalanes. Pocos meses después comenzaría la discusión parlamentaria de un texto estatutario que había sido triunfalmente plebiscitando en Cataluña antes de que Acción Republicana hubiese logrado una implantación siquiera mínima en aquella región.

Por el contrario en otras regiones todo lo que se logró durante el primer bienio fue la realización de tareas previas, reuniones y asambleas de partidos, etc., y que tan sólo en Euzkadi culminaron con el plebiscito de un texto que fue ya a parar a la segunda legislatura republicana. Por lo tanto, para ver la actuación de Acción Republicana en estas regiones hay que referirse a la participación de las organizaciones provinciales de Acción Republicana en el movimiento autonómico, protagonizado generalmente por grupos de carácter regionalista o nacionalista cuyo primer y fundamental objetivo era precisamente lograr un estatuto de autonomía.

En lo que se refiere al País Vasco la actitud de Acción Republicana viene marcada por la ambigüedad que caracterizó la actuación de toda la izquierda en el tema de la autonomía vasca. Si ya aludimos al temor que Prieto sentía respecto a un País Vasco autónomo gobernado por los nacionalistas católicos, estos temores había que hacerlos extensivos a toda la izquierda vasca. La oposición entre nacionalistas e izquierdistas a lo largo del primer bienio fue aguda y no exenta de incidentes violentos. La cuestión religiosa, hecha bandera por ambas partes fue el punto clave que les separó; pues fente al laicismo no ausente de ribetes anticlericales que caracterizó la política gubernamental republicano socialista, el PNV basó su política al tiempo que en la cuestión regional en la defensa a ultranza de los intereses y posturas de la Iglesia, cayendo a veces en el juego de aquéllos para los que la cuestión religiosa (así como la autonomía vasca) no era sino una coartada para la oposición frontal a la República (1).

La actuación de Acción Republicana osciló entonces entre los dos polos que constituían el apoyo a una política autonomista que era parte destacada de su programa y la oposición

(1) Aguirre recriminaría frecuentemente la postura del todo o nada de tradicionalistas, integristas, etc., como postura hipócrita que no perseguía en realidad la obtención de un régimen de mayor autonomía para el País Vasco; *Entre la libertad ...* p. 255 y *passim*.

a la fuerza política que era la principal protagonista de la lucha por la autonomía. Lo que sí parece poder afirmarse es que las reticencias y pasos atrás del partido en lo que se refería a su participación en la lucha por la autonomía no deben ser atribuidas a convicciones centralistas como acontecía con varios miembros de la minoría parlamentaria sino a la evolución de sus relaciones con las fuerzas derechistas y nacionalistas del País Vasco. Pues si la política autonomista estaba asumida oficialmente por el partido, su aplicación efectiva era una cuestión que atañía fundamentalmente, mientras no llegase al Parlamento, a las organizaciones provinciales.

Sabido es que en un primer momento el movimiento autónomico vasco estuvo encauzado por el movimiento de ayuntamientos, protagonizado por el PNV, frente a la inactividad, recelo y desbordamiento de los partidos republicanos y de las comisiones gestoras que substituían a las Diputaciones dominadas por ellos.

Un ejemplo de esta actitud la mostraron dos destacados republicanos de Acción Republicana que por la época eran alcaldes de dos capitales vascas, Ercoreca, de Bilbao y Ansó, de Pamplona. Ni uno ni otro se sumaron al movimiento de alcaldes, quienes ofrecieron la dirección del movimiento a los de las capitales (1).

(1) Aguirre, *op. cit.* p. 29 y 30. En realidad Ercoreca se integraría en Acción Republicana al hacerlo el Partido Republicano Autónomo de Bilbao.

El recelo de los partidos republicanos aumentó con la adición al proyecto de estatuto elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos de una enmienda por la que se reservaba al País Vasco las relaciones con el Vaticano. La iniciativa había partido de los tradicionalistas y probablemente no con intenciones de favorecer la obtención de la autonomía. Dicha separación progresiva entre las fuerzas nacionalistas y las izquierdas determinó que éstas no acudieran a Estella (donde se aprobó el proyecto de Estatuto por los ayuntamientos), y las izquierdas reivindicarían a partir de ese momento el originario estatuto elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos (1).

Una vez aprobada la Constitución, incompatible con el texto aprobado en Estella, y dictadas por el Gobierno las normas de procedimiento para aprobar un nuevo proyecto de estatuto con el decreto de 8-12-31, se produce una confluencia entre gestoras y ayuntamientos al movilizarse aquellas de forma efectiva en orden a la plebiscitación del estatuto. Aunque las relaciones entre izquierdas y nacionalistas atravesarían variadas fases, esta nueva etapa de colaboración finalizaría con el plebiscito de 5-12-33. Se designó una comisión para la redacción de un nuevo proyecto el 15-12-31, compuesta por cuatro representantes de las comisiones gestoras, tres de los ayuntamientos y tres por el partido socialista; entre los pri

(1)

Vid. Castells, *El Estatuto ...*, p. 50-53.

meros se encontraba uno de los más destacados autonomistas de Acción Republicana, D. Luis Castro Casal, que había sido gobernador de Vizcaya y Guipúzcoa y era a la sazón presidente de la gestora de la última provincia.

Sería Luis Castro quien mediante su actitud propagandista facilitaría que su partido y los restantes republicanos de izquierda apoyasen definitivamente la aprobación del texto elaborado por la comisión de la que él formaba parte, en la asamblea de ayuntamientos de 19 de junio de 1932. A ese objeto pronunció un discurso que al parecer tuvo amplio eco, en San Sebastián, el 13 de marzo de 1932 (1), a los dos días de que la comisión finalizase su trabajo. Sin embargo, el camino habría de reiniciarse de nuevo ante la negativa de los ayuntamientos navarros al estatuto, consecuencia de la propaganda tradicionalista y carlista.

Reanudado el proceso estatutario (2), y superando las violentas relaciones de nacionalistas y partidos gubernamentales encrespadas como consecuencia de la discusión en los primeros meses de 1933 de la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, se logró la adaptación del proyecto anterior y su aprobación el 6 de agosto por una asamblea de ayuntamientos en Vitoria -en la que ya no estaban presentes los ayuntamientos navarros-. Luis Castro fue de nuevo una figura clave

(1) Aguirre, *op. cit.* p. 256.

(2) Castells, *op. cit.* p. 74.

para lograr que los republicanos superasen las reticencias ha
cia el estatuto que volvieron a aparecer con ocasión de dichos
enfrentamientos con los nacionalistas. Para lograrlo llegó a
escribir una carta abierta en la que reconocía la necesidad
imprescindible de obtener pronto el estatuto para evitar el
progresivo avance de las fuerzas nacionalistas (1).

En este contexto de tensiones políticas que provo-
caban la ambigüedad de los partidos republicanos respecto al
estatuto vasco se inserta el hecho de que hacia abril de 1933
decidiesen los partidos republicanos de Guipúzcoa no votar el
estatuto, aunque posteriormente rectificasen su postura. Esta-
blecido finalmente el día 5 de noviembre para la plebiscitación
del estatuto, se iba a ver mezclada dicha votación con los pre
parativos electorales para las elecciones generales a Cortes
del día 19. La falta de un acuerdo electoral con los naciona-
listas -cuyo cambio de alianzas se consumaba progresivamente-,
determinó para Castells (2) la llamada a la abstención en el
plebiscito ahora en la provincia de Vizcaya de los partidos
republicanos y el socialista. Para Aguirre era una maniobra
electoral clara, pues si la votación pro estatuto era mediocre
redundaría principalmente en perjuicio de los nacionalistas y

(1) Aguirre, *op. cit.* pags. 350 y 362.

(2) *Op. cit.* p. 76.

el triunfo de la candidatura republicano socialistas (Prieto, Azaña, Domingo y Zugazagoitia) estaba asegurado. La justificación de los partidos que adoptaron esta actitud fue la imposibilidad de organizar el control partidario en las mesas de votación al haberse aprobado el decreto que establecía las normas para la celebración del plebiscito el 29 de octubre. Este control había sido reivindicado por los partidos republicanos, y rechazada por innecesario -alegando que todos los partidos que la reivindicaban apoyaban el estatuto- por los nacionalistas.

Es difícil comprender las razones del rechazo de la intervención por parte de los nacionalistas, y según Tussell, algo de razón debía haber en la exigencia de los partidos de izquierda respecto a la posibilidad de abusos en la realización de la votación (1).

El caso es que ante la enmienda del plebiscito se reunieron los representantes provinciales (de Vizcaya), de Acción Republicana, PSOE, PRRSI y UGT, reunión tras la que publicaron el acuerdo de propugnar la abstención, en nota que insertaba *El Liberal*, y firmada por los presidentes de los tres partidos. Por Acción Republicana habían acudido a dicha reunión el presidente del consejo provincial, Acha y los miembros del

(1)

Tussell, *Historia de ...* II, p. 57.

consejo local de Bilbao, Alonso y Ruiz B. (1).

Esta solución iba a provocar una tempestad en la organización provincial de Acción Republicana vizcaina. En el consejo local de Bilbao Garbizu impugnó (en una reunión del 2-11) con éxito el acuerdo adoptado, puesto que los delegados no llevaban un acuerdo oficial para adoptar una resolución de tanta trascendencia; podían haber expresado su protesta, pero una decisión de esa naturaleza debía haber sido aprobada en asamblea; el acuerdo -aseguró- sembraba la división entre los partidos e iba en contra del programa del partido.

Por su parte el alcalde de Bilbao, Ercoreca y la minoría municipal de Acción Republicana publicaron una nota en la que anunciaban su intención de votar el estatuto, sirviendo así mejor a sus convicciones. Ante el apoyo obtenido en el consejo local por Garbizu se convocó una asamblea general extraordinaria para el día 3. En esta asamblea se debió ratificar de alguna forma la actuación del presidente provincial, puesto que en los días siguientes abundaron las dimisiones y bajas de destacados miembros del partido, alegando que el partido había actuado en contra de sus postulados y de su historia.

(1)

Libro de actas del Consejo local de Bilbao de Acción Republicana, AS, Bilbao-C. 124. Los datos sobre lo ocurrido en Acción Republicana de Bilbao en base a esta fuente.

Por su parte la minoría municipal puso sus cargos a disposición del partido mientras éste no resolviera declarar correcta su actitud ante el plebiscito.

Por lo demás en Alava y Guipúzcoa, Acción Republicana y los restantes partidos de izquierda apoyaron el Estatuto, y Azaña, que habló el día 4 en Pamplona, recomendó votar el estatuto. Aprobado éste por aplastante mayoría, aunque en la provincia de Alava no se alcanzase el 50% de votos favorables, comenzaría pronto su vida parlamentaria que en la nueva legislatura estaba condenada a fracasar.

En la Región Valenciana y en Galicia la actitud de Acción Republicana fue favorable y de colaboración en las gestiones estatutarias, aunque sin que constituyese una tarea primordial del partido. En las provincias valencianas la actitud de los hegemónicos blasquistas y radicales en el campo republicano bloqueó el camino hacia el estatuto, al querer llevar ellos en todo caso el papel principal y comportarse además de manera ambigua (tanto como lo era la postura del Partido Radical en la cuestión regional); el cambio de situación política con las elecciones de noviembre del 33 significaría el relegamiento absoluto del tema (1).

En Galicia la escasa fuerza de Acción Republicana le priva de ser un elemento importante en la lucha por el es-

(1)

Vid. Cucó, *El valencianisme ...* especialmente pags. 210, 220.

tatuto que llegó a ser aprobado por los ayuntamientos. El Gobierno por su parte dictó un decreto (de fecha 27-5-33, anterior al decreto correspondiente vasco) sobre la celebración del plebiscito; en opinión de Alfonso Bozzo (1) lo hizo ante el temor de una caída del Gobierno, para dejar la puerta abierta a la actuación de los autonomistas gallegos. Aquí también el fin de la coalición republicano socialista significaría el archivo de la cuestión; sin embargo Acción Republicana en la medida de sus fuerzas colaboró en el proceso estatutario dentro de sus concepciones autonomistas, siempre más restringidas que las de los nacionalistas.

Martínez Risco, único diputado gallego de Acción Republicana en un primer momento actuó en diversas ocasiones en representación de su partido en las gestiones pro estatuto. Con la incorporación de el PRG de Pontevedra a Acción Republicana, el carácter autonomista de Acción Republicana se vio considerablemente reforzado; Fernández-Osorio Tafall, diputado que se incorporó a Acción Republicana como consecuencia de esta fusión, había sido una de las personalidades gallegas más activas en la lucha por el estatuto, especialmente desde la presidencia que ostentó del Comité Central de Organización y Propaganda del Estatuto (2).

(1)

Vid. Alfonso Bozzo, *Los partidos políticos ...* p. 302.

(2)

Ibid. pags. 285, 298, 300.

E. PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

Finalmente añadamos que no aporta ninguna novedad el texto de las bases del ideario de Izquierda Republicana en 1934; sin duda se estaba lejos de adivinar los futuros contratiempos con que el régimen de autonomía iba a tropezar en Ca-taluna. Decía así: "9ª Política respetuosa con la voluntad de las regiones.- Es decir: libertad para que las regiones puedan pedir y lograr una organización autónoma para sus fines privativos en armonía con los intereses del Estado republicano, y cumplimiento respetuoso de los Estatutos que vayan poniéndose en vigor".

Tan solo un estudio monográfico sobre Izquierda Republicana podría aclarar hasta qué punto se habían superado las ambigüedades que hemos visto a lo largo de la actuación de Acción Republicana, tanto en el Parlamento como fuera de él. El segundo bienio tiene el interés de ofrecer un conflicto crucial para conocer la auténtica posición de los partidos políticos ante el hecho autonómico, que es la sublevación de la Generalidad en octubre del 34, y la inadecuada respuesta del Gobierno de Madrid suspendiendo la aplicación del Estatuto.

En cualquier caso el texto programático de Izquierda Republicana sí es por lo menos y en comparación con el de 1931 de Acción Republicana más preciso. Desaparece la ambigüdad que existente en éste, substituída por la alusión concreta al respecto a la voluntad autonomista de las regiones y al

cumplimiento de los Estatutos ya aprobados. Y no podía faltar evidentemente, la expresa mención de la necesaria armonía de esa voluntad -que afecta a los intereses *privativos* de las regiones- con los intereses del Estado.

En resumen, el texto ofrece la posición autonomista que siempre había mantenido el partido a nivel programático, en una formulación más precisa y que trasluce la concepción de que la autonomía, para Acción Republicana tanto como para Azaña, no era sino una forma de cimentar la unión entre los intereses regionales y los nacionales.

5. CUESTION AGRARIA

CUESTION AGRARIA

En la política republicana es especialmente importante el papel desempeñado por el problema campesino. Por un lado debido a que la Reforma Agraria llegó a ser un auténtico *leit motiv* de las pretensiones sociales de la República, y por otro lado porque su deficiente resolución -o su no resolución- fue, en opinión unánime de la literatura una de las causas fundamentales del fracaso republicano. Y al fin y al cabo el fracaso republicano es el fracaso de la política encarnada en el primer bienio por la coalición republicana, única que dotó a la República de un contenido positivo.

Al estudiar la actuación de Acción Republicana en la gestación de la política agraria republicana, hallaremos ocasión de intentar aportar datos que permitan esclarecer lo que de fundado haya en las críticas que se han dirigido contra los republicanos de izquierda en general y contra Azaña en particular, por su desinterés hacia lo que posiblemente fuera el principal problema republicano. Críticas que son a juicio de muchos las de mayor gravedad que se pueden formular a la política del primer bienio.

A, PROGRAMA DE 1931 Y PRIMEROS PROYECTOS DE
REFORMA AGRARIA

PROGRAMA DE 1931 Y PRIMEROS PROYECTOS DE REFORMA AGRARIA

Es en los primeros meses del régimen republicano cuando el sentimiento de urgencia del problema agrario era más vivo. La posibilidad de una movilización masiva del campo y de una agitación generalizada que pudiese llevar a los campesinos a ocupaciones incontroladas de tierras, alentados por la esperanza que comportaba la implantación de la República, impulsaría al Gobierno Provisional a considerar de máxima urgencia la cuestión. Sobre la base además de que existía un consenso entre sus componentes respecto a la necesidad de una reforma agraria de mayor o menor intensidad.

Por ello es especialmente curiosa la cautelosa fórmula que se aprobó en la Asamblea Nacional de Acción Republicana de mayo sobre el problema agrario, en la que ni siquiera se hablaba de "reforma" agraria: "Solución del problema de la tierra, atendiendo a sus diversas modalidades, llegando si precisa (sic), al cooperativismo agrario. Fomento del crédito agrario".

Aquí se ve claramente a través de tan pocas palabras el apoyo a que la reforma se encaminase hacia el asentamiento de campesinos individuales rechazando fórmulas colectivas de cultivo. Tan sólo como posibilidad límite se acepta el cooperativismo. Por otro lado ninguna referencia a la urgencia de la cuestión; contrasta su brevedad con el tratamiento de otros temas, inclusive aquellos referidos a cuestiones sociales, tributarias, etc. Es decir que más que (o además de) moderantismo

parece percibirse una cierta minusvaloración del problema.

Sin embargo la posición de Azana en estos momentos era claramente decidida a una acción rápida y eficaz. Se inclinaba por una reforma que en base a los plenos poderes de que gozaba el Gobierno Provisional, zanjase por decreto los aspectos más urgentes de la reforma agraria sin excesiva oposición ni debate público; esto es, una reforma realizada de manera similar a lo que él estaba haciendo en Guerra (1). Pero parece que tan sólo durante los primeros meses mantuvo una posición semejante.

Todavía el 17 de julio apoyó públicamente Azaña una aplicación inmediata de la reforma, a reserva de su aprobación definitiva por las Cortes, en el discurso pronunciado en el banquete de Acción Republicana a los candidatos a diputados del partido. Azaña calificó repetidas veces la cuestión agraria como la más urgente que tenía planteada la República y afirmó: "Este es el problema más urgente que tiene planteado ahora la República: acudir de una manera inmediata, generosa, a resolverlo, tal como la Comisión encargada por el Gobierno de confeccionar el proyecto ha concebido el primer paso de la reforma en Andalucía". Si Azana hablaba así porque desconocía el tenor concreto del proyecto de la Comisión, hecho público tres días más tarde, es imposible de saber, aunque no es improbable que

(1)

Azaña, OC. IV, p. 77.

así fuera, dada su actitud moderada en las discusiones que el Gobierno mantuvo en agosto sobre el proyecto gubernamental (1).

Es también difícil de sabersi por esa fecha realmente creía todavía posible una aplicación inmediata de la reforma que fuese aprobada a posteriori por las Cortes, como dijo en dicho discurso en el que llegó a afirmar que él estaría dispuesto a acometer tal responsabilidad, o si era una mera concesión verbal, pues tan sólo tres semanas después exteriorizaría su disgusto cuando el proyecto de la Comisión se discutíó en Consejo por considerar que se iba ya muy por detrás de los acontecimientos.

En efecto, tanto este proyecto de la Comisión como el que elaborara el Gobierno le parecen al ser discutidos en Consejo excesivamente radicales e impracticables. Si en los primeros momentos y por decreto podían haber cumplido sus objetivos, ahora ya no era posible con la expectación e intranquilidad -y consiguiente oposición- levantada en los medios agrarios (2).

A favor de una aplicación de la reforma en los primeros momentos, siquiera de manera provisional, debía haber

(1) Azaña OC.II, p. 24; la hipótesis sobre el desconocimiento de Azaña del texto de la Comisión, en Malefakis, *Reforma ...*, p. 211, n. 41.

(2) Azaña, OC. IV, p. 75 y ss., p. 322.

operado el que el tema había sido ya discutido en las reuniones conspiratorias del Gobierno Provisional de antes de abril. Sin embargo, posiblemente por la imprevista proclamación de la República en abril, no se había llegado a un acuerdo suficiente como para permitirlo, como se manifestó en las discusiones de agosto sobre el proyecto de la Comisión antes citado (1).

En cualquier caso el 21 de abril optó el Gobierno Provisional por postergar la solución hasta que las Cortes es tuviesen reunidas y pudiesen elaborar una ley, aunque Azaña, y quizás alguno más, se opusiera por entonces a este aplazamiento (2).

Es importante resaltar este hecho, porque se suele pasar por alto: cuando la Comisión Asesora entregó su proyecto al Gobierno (20 de julio) éste ya había decidido mucho antes no aplicar la reforma por decreto sino a través de una ley de Cortes.

Por lo tanto la discusión sobre la aplicación rápida y por decreto de la reforma es muy anterior al proyecto de

(1) Vid. por ejemplo M. Domingo, *La experiencia ...*, p. 219 y ss.

(2) A pesar de que la materia caía dentro de las atribuciones de N. d'Oliver debía ser Fernando de los Ríos quien fuese responsabilizado del tema, y él sería quien más tarde elaboraría junto con el presidente Alcalá Zamora el proyecto gubernamental de 25 de agosto.

Vid. Malefakis, *Reforma ...*, p. 199 n. 7.

la Comisión. Ciertamente el presidente de ésta, Felipe Sánchez Román recomendó su aplicación por decreto y su posterior aprobación por las Cortes. Pero esa cuestión ya había sido zanjada. Además si el Gobierno Provisional hubiera estado dispuesto a actuar así, probablemente no hubiera convocado con tanta rapidez las elecciones a Cortes, pues una vez éstas en funcionamiento era muy difícil evitar ya el procedimiento legislativo ordinario.

Tal como habían ido las cosas y con la composición efectiva del Gabinete -no con especulaciones históricas- el proyecto de la Comisión no tenía posibilidades reales de ser aceptado. Ciertamente lo más sorprendente es que los socialistas no hubieran hecho una mayor presión en su favor, si no con la intención de que el contenido de la ponencia de la Comisión fuese aceptado, sí por lo menos para urgir una solución inmediata, aunque hubiera que prescindir de la vía de decretos.

Pero con una actitud poco clara criticaron el proyecto como insuficiente cuando sus ministros conocían que la dificultad para ser aceptado por el Gobierno estribaba en su carácter excesivamente radical. Para Malefakis, la causa real de la postura socialista era que preferían una reforma más templada con tal de evitar la provisionalidad en la ocupación de las tierras entregadas a los campesinos, y lograr una solución al abrigo de una contrarreforma de un hipotético gobierno derechista; pues en esos momentos, con la revitalización de la Alianza Republicana tenían una alianza estable de Lerroux y

Azaña. En cualquier caso, incluso si fue esta la causa, el que no hubiesen apoyado dicho proyecto, sobre todo su carácter de urgente, aunque luego hubiesen cedido sobre el contenido, constituye uno de los principales errores tácticos que cometieron los socialistas en el primer bienio, asintiendo a que el proyecto fuese desechado sin apenas discusión, si bien se utilizó como base para la elaboración del gubernamental.

El proyecto de la Comisión era en efecto excesivamente radical para que lo aceptase el Gobierno Provisional, o más bien su ala más conservadora. Sobre su base sin embargo se discutió en consejo de ministros -el 10 de agosto- el contenido del proyecto que el Gobierno había de entregar a las Cortes (1); a partir de los acuerdos adoptados elaboraron el proyecto Alcalá Zamora y De los Ríos, negándose Azaña a trabajar en la ponencia a pesar de haber sido incluido en ella. La razón de esta actitud era su escepticismo sobre un proyecto que le parecía demasiado ambicioso y tardío.

De las discusiones sobre el proyecto que el Gobierno iba a presentar a las Cortes tenemos alguna referencia gracias a Azaña. La ocupación temporal fue algo unánimemente rechazado. En palabras de Azaña ni atenuaba la expropiación ni por su denominación de temporal podía satisfacer a los campe-

(1)
Azaña, OC. IV, p. 75 y 322; Alcalá Zamora, *Memorias*, p. 172.

sinos. Consecuentemente se acordaría ir directamente a la expropiación definitiva de las tierras donde se asentaran los campesinos.

Hubo discrepancia y votación sobre si se indemnizaban las tierras de señorío o no, acordándose conceder una indemnización mínima. Ante la cuestión Azaña, partidario en un principio de no indemnizar, impresionado por los argumentos del ministro de Economía Nicolau d'Oliver sobre la influencia negativa que dicha decisión tendría sobre el crédito y el cambio, pretendió abstenerse.

Al cabo tuvo que apoyar al Presidente en pro de la indemnización pues éste le urgió a definirse ante lo equilibrado de las posiciones entre los ministros, aunque lo hizo "con salvedades de ulterior mudanza, nada acordes con la fijeza de opinión sobre un problema cuyos términos eran todos claros y conocidos", según Alcalá Zamora (1).

Un punto hubo en el que Azaña intervino con ardor, enfrentado a Fernando de los Ríos, el límite de la propiedad no expropiable. En el fondo el problema era el de la diversidad de condiciones de la propiedad rural. Azaña defendía al agricultor castellano que a lo mejor superaba las trescientas hectáreas, cifra en que se había fijado el límite, divididas

(1)
Ibidem.

en fincas numerosas, sin que dicha extensión significase que era un propietario rico.

Al fin, dada la limitación de las tierras expropiables a sólo tres tipos (1) y la exclusión explícita de ellas de las cultivadas directamente, la hipótesis planteada por Azaña quedaría fuera.

El proyecto, una vez entregado a la Comisión correspondiente de la Cámara, fue objeto por parte de ésta de una transformación profunda que lo convirtió en otro de radicalismo parecido al de la Comisión Asesora (2).

La dimisión de Alcalá Zamora y Maura evitó que se pasase a discutir el proyecto tal como había quedado tras su paso por la comisión de Agricultura, pero hay que descartar totalmente que la dificultad de la solución del problema fuese la "causa profunda" de la dimisión presidencial. Su dimisión frustrada del 6 de octubre no fue ni mucho menos la primera. Tanto Azaña como Maura nos han narrado con detalle las frecuentes "dimisiones" de Alcalá Zamora, las cuales se remontan al

(1) Para un estudio técnico de los sucesivos proyectos vid. Malefakis, *Reforma... Maurice, La Reforma ...*

(2) Las fincas localizadas en zonas de regadío y no regadas, las sistemáticamente arrendadas y las de origen feudal; Malefakis, *op. cit.* p.214.

mismo abril. No hay razones para suponer que la continuación de la coalición bajo Alcalá Zamora no pudiera haberse mantenido más tiempo por la dificultad de las transacciones necesarias para resolver el problema agrario. Si alguna cualidad destacaba en Alcalá Zamora era su innegable capacidad y habilidad negociadora, demostrada cumplidamente en los artículos de la Constitución dedicados a la cuestión regional.

A pesar de que pueda parecer "politicista" o incluso "psicologista" y mientras no se aporten pruebas en contra, aunque sea mucho más atractivo el suponer profundas causas sociales -el conflicto entre la burguesía representada por Alcalá Zamora y Maura y los intereses socialistas- como origen de la ruptura, hay que admitir en base a las razones aportadas anteriormente que la causa de la dimisión fue la vanidad herida de Alcalá Zamora y su sentimiento de haber sido tratado desconsideradamente por su ministro de la Guerra y por su Gobierno en conjunto (1).

(1)

Cfr. Malefakis, *op. cit.* p.221; la pseudo dimisión del 6 de octubre fue completamente accidental y sin relación con el fondo de la discusión relativa a la regulación sobre la propiedad; fue un simple malentendido, narrado por extenso en Azaña, OC. IV, p. 165.

B. DISCUSION DE LA CONSTITUCION

DISCUSION DE LA CONSTITUCION

Con ocasión de la discusión de los artículos en los que se hacía referencia a cuestiones agrarias (44 y 47 de la Constitución, 42 y 45 del proyecto) tenemos una vez más ocasión de comprobar la escasa coherencia ideológica existente por aquellas fechas en la minoría de Acción Republicana así como la ausencia de una disciplina que permitiese paliar aquella. Sobre esta materia tan sólo había procedente de Acción Republicana un voto particular de Ruiz Funes al art. 42 del proyecto, que suavizaba notablemente el párrafo segundo y quinto (1).

(1)

El artículo 42 del proyecto parlamentario decía así: "La propiedad de las fuentes naturales de riqueza, existentes dentro del territorio nacional, pertenece originariamente al Estado en nombre de la Nación.

El Estado, que reconoce actualmente la propiedad privada en razón directa de la función útil que en ella desempeña el propietario, procederá de un modo gradual a su socialización.

El Estado tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las transformaciones que convengan al interés público.

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social, que la ley definirá, determinando asimismo la forma de indemnización.

En los casos en que la necesidad social así lo exigiera, el Parlamento podrá acordar la procedencia de una expropiación sin indemnización.

Los servicios públicos y las explotaciones que afectan al interés nacional deberán ser nacionalizados en el más breve plazo".

El voto particular redactaba así el párrafo 2º: "El Estado protege el derecho de propiedad individual y colectiva, en cuanto fundamento de la riqueza general y del bien común" y adicionaba al 5º "...a iniciativa de la cuarta parte de los diputados que lo compongan y por medio de una ley, decretada por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Entre la iniciativa y la votación de la ley habrá de mediar un período de seis meses. Si durante ese tiempo se disolviera el Parlamento o terminara su vida legal, la iniciativa deberá reproducirse en la Cámara nuevamente elegida".

Antes de votar este voto particular de Ruiz Funes se había rechazado un voto particular de Samper y Villanueva que pretendía asimismo moderar el texto del proyecto; la Alianza Republicana, todavía viva, había acordado votar a favor del mismo. Sin embargo varios diputados de Acción Republicana votaron en contra, resultando rechazado tan sólo por diez votos: esto significaba que los seis rebeldes de Acción Republicana dieron la victoria a los socialistas y radical socialistas. Votaron en contra Bello (de quien al parecer había partido la iniciativa de romper la disciplina de voto, convenciendo a sus correligionarios), Alberca Montoya, Romero, Martínez Risco, Sacristán y Sánchez Albornoz. A favor votaron 13 (1).

En realidad es difícil saber si votaron en contra por oponerse al fondo del voto particular o por seguir a la Agrupación al Servicio de la República quien votó en contra con objeto de defender su propia enmienda, en el mismo sentido de moderación. Desde luego es lo más probable que ese fuera el caso de Sacristán, quien frecuentemente votaba con dicha agrupación. Los demás seguirían probablemente la maquinación de Bello en aras de un mayor radicalismo.

El incidente -agravado por el hecho de que Alcalá Zamora mismo había intervenido antes de la votación para apoyar el voto particular derrotado- dio origen a que una vez más Giral presentase la dimisión como jefe de la minoría y a que

(1)

DDSS, n.50, p.27; Azaña habla tan sólo de cinco diputados rebeldes; quizás olvide a Sacristán.

Azaña les recriminase su comportamiento, no por el fondo del asunto sino por la ruptura de la disciplina, que contaba con todos los agravantes, puesto que se había infringido al tiempo un compromiso de la Alianza Republicana (1).

Inmediatamente después como decimos, se sometió a votación el voto particular de Ruiz Funes, del cual sólo mantenía su autor la exigencia, para los casos de expropiación sin indemnización, de que fuese a iniciativa de la cuarta parte de los diputados que compusieran la Cámara y de que resultase aprobada con un quorum de las dos terceras partes de la misma. El voto particular fue igualmente rechazado y esta vez con algunos votos más de diferencia a pesar de que como era lógico Acción Republicana votó en bloque a su favor: por 161 votos contra 146. Votaron a favor 17 diputados de Acción Republicana y Sacristán volvió a votar en contra; Bello, Romero y Alberca Montoya, más discretos, se abstuvieron y Sánchez Albornoz y Martínez Risco votaron con el resto de sus compañeros.

Cuando al cabo se puso a votación la enmienda de la Agrupación al Servicio de la República, por fin se pudo aprobar un texto que suavizara el dictamen. Acción Republicana

(1)
Azaña, OC. IV, p. 165.

votó a favor, excepto Alberca Montoya que lo hizo con socialistas y radical socialistas. Fernández Clérigo retiró a continuación otra enmienda suya por ser similar a la que se había aprobado (1).

Así pues, en lo que a estos artículos se refiere Acción Republicana formó frecuentemente mayoría con radicales y progresistas, apoyados por las minorías regionales y otros grupos minoritarios (minoría vasconavarra por ejemplo en ciertas ocasiones) frente a socialistas y radical socialistas ,

(1)

DDSS, n. 50, p. 51 y ss.

El artículo 44 de la Constitución quedó finalmente así: "Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afectada al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes (antiguo art. 45 del proyecto).

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.

Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.

Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.

El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional.

En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes".

Puede observarse que desapareció el antiguo 2º párrafo, enmendado por Ruiz Funes.

aunque los frentes eran muy variables.

Las indisciplinas resultaban especialmente arriesgadas, pues las votaciones eran a veces muy igualadas. En los artículos referidos a los derechos sociales Acción Republicana mantuvo posiciones similares (1).

(1)

Por ejemplo, respecto al art. 46 (de la Constitución) la Alianza Republicana, por boca de P. Rico apoyó una enmienda presentada por la Agrupación al Servicio de la República que daba al artículo una formulación más genérica y que sería derrotada.

C, LA LEY DE REFORMA AGRARIA

LA LEY DE REFORMA AGRARIA

A tenor de lo escrito por Azaña en su diario parece claro que una vez en la presidencia del consejo de ministros no urgió a la pronta presentación de un nuevo proyecto ni por supuesto a que se discutiese el presentado por el Gobierno en agosto -al que califica de "fantástico"- que en su doble paso por la comisión había quedado completamente alterado, resultanto tan radical como el de la Comisión Asesora.

Dos razones parece que le empujaron a actuar así como Presidente del Consejo a uno de los pocos ministros que habían defendido la aplicación de la reforma por decreto en los primeros momentos y que todavía el 17 de julio creía posible su aplicación por la vía rápida. Una el querer simultaneizar su discusión, con la del Estatuto catalán para forzar como vimos a los socialistas, fervientemente antiautonomistas, a votarlo. Y otra la consideración de que antes estaba el problema "inmaduro para una solución sensata"; esto es que los radicalismos de primera hora parecían ya pasados y se podría obtener de las Cortes un proyecto aplicable en la realidad. Muy poco queda aquí del gobernante jacobino que con ocasión del tema agrario -sobre el que además Azaña no hizo ninguna "frase famosa" que fuera tergiversada- han visto muchos autores (1).

(1) En este sentido coincidimos con los motivos que a juicio de Malefakis (*op.cit.*p.231) hicieron a Domingo retrasarse en presentar su proyecto: la desaparición del sentimiento de urgencia y el dar tiempo para que se aplacasen las reacciones provocadas por los proyectos anteriores; respecto al tercer motivo citado por dicho autor, la necesidad de llegar a una transacción entre republicanos de izquierda y socialistas sobre la profundidad de la reforma, aludimos más adelante.

En el proyecto, traído a Consejo por M. Domingo, parece que debió tomar parte importante Vázquez Humasqué, ingeniero agrónomo y miembro de Acción Republicana. Por influencia de Azaña había sido nombrado jefe de los servicios del ministerio de Agricultura encargados de la Reforma y tras su creación sería nombrado presidente del Instituto de Reforma Agraria. Vázquez Humasqué había publicado en julio de 1931 un proyecto de reforma agraria en forma de folleto que salió a la luz cuando ya era público el de la Comisión Asesora (1).

El proyecto de ésta pasó a ser discutido en consejo de ministros. En la discusión Azaña desempeñó una función esencialmente moderadora de los puntos más radicales de la ley. Así decidió prescindir de la contribución especial sobre la propiedad rústica, apoyado fuertemente en este punto por Carner; dicha supresión ha sido de las características de la ley de septiembre más criticadas por la bibliografía al eliminar una fuente de financiación de la reforma. La necesidad de una ley para aplicar la reforma en más provincias de las que la ley de Reforma consignaba; el suprimir el cupo fijo de familias que se habían de asentar, y algún otro punto son citados expresamente por Azaña como materias en las que intervino limando "las cosas más duras y alarmantes" del proyecto.

(1)

Vázquez Humasqué, *Mi proyecto* ...

Los dos ministros radical socialistas estuvieron fácilmente conformes con la moderación del proyecto, viniendo M. Domingo muy influido por Vázquez Humasqué. En cuanto a los socialistas tampoco opusieron, salvo F. de los Ríos, grandes resistencias. Así pues parece que la diferencia de criterio entre republicanos de izquierdas y socialistas sobre la profundidad de la reforma no fue en realidad una causa del retraso en discutir la reforma agraria; esta diferencia, que se había hecho patente -apoyados los socialistas por los radical socialistas- en lo sucedido en las Cortes con los anteriores proyectos, persistía cuando se inicia la discusión del proyecto Domingo, y fue salvada a lo largo de su discusión en el consejo de ministros.

El siempre pesimista Prieto afirmaba que "nunca creyó en la reforma agraria" y que entonces empezaba a ser viable (1).

(1)

Azaña, OC.IV, p. 322; cfr. Malefakis, *op. cit.* p. 231.

1. DISCUSION DEL PROYECTO

DISCUSION DEL PROYECTO

Así como en la discusión del Estatuto Azaña utilizó a los miembros de su grupo para llevar al salón de sesiones los acuerdos tomados y para defender las posiciones de la mayoría gubernamental, no fue así en la discusión de la Reforma Agraria. En este caso prácticamente todas las intervenciones de los parlamentarios de Acción Republicana fueron en defensa de enmiendas particulares defendiendo soluciones que por una u otra razón les parecían más razonables.

Dos diputados y de los de mayor peso en la minoría destacaron por el número de intervenciones de este tipo, Sánchez Albornoz y Fernández Clérigo. El representante de Acción Republicana en la comisión fue Palanco Romero, diputado por Granada provincia. No se puede generalizar sobre el sentido de las enmiendas presentadas por los diputados de Acción Republicana, pues iban tanto en un sentido de mayor moderación como de mayor radicalismo, consecuencia clara de ser enmiendas producto del criterio personal de sus autores y no de partido, por lo general; por otro lado también se presentaron enmiendas que respondían a las condiciones e intereses concretos de las provincias que representaban.

Nada menos que cuatro diputados de Acción Republicana intervinieron en el debate de totalidad, Sánchez Albornoz, Menéndez Suárez (1), Serrano Batanero y Fernández Clérigo, y

(1) Desconocemos el momento de 1932 en que Menéndez Suárez se sumó a Acción Republicana.

ninguno de ellos en representación del partido.

Menéndez Suárez habló para plantear algunos problemas específicos de Asturias y reivindicar que se aplicase a esa región la reforma, teniendo en cuenta sus específicos problemas, de los que mencionó la necesidad de incluir un nuevo régimen de arriendos que permitiese adquirir las tierras que los labradores venían trabajando desde tiempo inmemorial, el abuso de ciertos sistemas de aparcería obligatoria, la reoblación forestal y la necesidad de una concentración parcelaria; Menéndez Suárez habló en nombre de la Federación Agrícola Asturiana, de la que era secretario general y con cuyos votos había logrado salir elegido diputado (1).

Igualmente Serrano Batanero utilizó su intervención para plantear problemas de la provincia de Guadalajara hablando en representación, dijo, de sus representados. En un retórico discurso vino a hablar de la necesidad de atender al problema del minifundio, del crédito agrícola, y de la expropiación de todos los señoríos aunque hubieran pasado a terceros (2).

Sánchez Albornoz pronunció un extenso discurso tras aclarar que no llevaba la representación de Acción Republicana, aunque sí hablaba con su autorización. Haciendo gala de sus co

(1)
DDSS, n. 174, p. 30, 31-5-32.

(2)
DDSS, n.174, p. 36, 31-5-32.

nocimientos históricos solicitaba que se expropiasen todos los señoríos, aunque hubiesen cambiado de dueño, en contra del proyecto gubernamental, respetado en el dictámen de la comisión (1). Pero en cambio solicitaba que se indemnizasen aquellos señoríos que además de ser tales fuesen realmente propiedad de sus señores, frente a los que unicamente eran señoríos antes de 1837 pero que a través de un fraude quedaron bajo la propiedad privada de los antiguos señores.

Defendió los asentamientos sin que se concediese la titularidad dominical a los labriegos, la necesidad de reconstituir los bienes comunales, incluso en los casos que no existieron y por último solicitó que se subviniese a las necesidades crediticas de gran cantidad de campesinos castellanos que habiendo sido inducidos en tiempos de la Dictadura a adquirir grandes fincas con el auxilio del Estado se encontraban ahora con grandes apuros para devolver los créditos que habían necesitado para completar la ayuda estatal.

Fernández Clérigo defendió el tratamiento dado en el dictamen a la expropiación de los señoríos (frente a lo que había defendido su correligionario Sánchez Albornoz); en cambio pretendía introducir un distinguo en las expropiaciones por razón de la extensión de las fincas, proponiendo que sólo fueran

(1)

DDSS, n.167, p. 9, 18-5-31; el proyecto respetaba a los adquirentes a título oneroso excepto aquellos que lo fueran en los últimos diez años.

expropiadas aquellas que estuviesen mal explotadas y no las que estando adecuadamente cultivadas superasen cierta extensión. En este punto criticaba la postura que Sánchez Román había sostenido, del carácter pernicioso para la economía de la excesiva concentración de tierras. Por último habló sobre la necesidad ineludible de terminar radicalmente con los subarriendos (1).

Como puede verse el hecho de que el reglamento de las Cortes permitiese con gran magnanimidad el uso de la palabra provocaba un rosario de intervenciones sobre la totalidad en el que los diputados, incluso de un mismo partido, desgarraban sus opiniones particulares matizando puntos y aspectos de una ley forzosamente tan compleja como esta. En lo que respecta a Acción Republicana parece percibirse una discusión previa notablemente inferior a nivel interno de la minoría parlamentaria, que la efectuada con el Estatuto. El hecho de que hubiera tres o cuatro intervenciones en la discusión de la totalidad por un grupo de treinta diputados, que para mayor contradicción era el más fiel integrante de la mayoría, creemos que es suficientemente expresivo; lo lógico hubiera sido una única intervención en representación de Acción Republicana -que no hubo quizás para compensar la locuacidad de la generalidad de los diputados- y dejar para posteriores enmiendas la

(1)

DDSS, n. 179, p. 10; 8-6-32.

defensa de esos puntos de vista personales. Pero este fue un defecto que aunque agravado quizás en el caso de la reforma agraria se dio en mayor o menor medida a lo largo de todo el bienio reformista.

Respecto a las enmiendas presentadas durante la discusión del articulado, vamos a hacer una breve enumeración de las mismas.

Fueron Sánchez Albornoz y Fernández Clérigo los dos miembros de Acción Republicana que más activamente participaron en la discusión del proyecto presentando numerosas enmiendas, muchas de las cuales fueron aceptadas. En ocasiones eran enmiendas de carácter técnico de escasa relevancia política.

El primero de ellos intervino más de una vez cuando se discutían temas referentes a los señoríos apoyando o criticando enmiendas ajenas. Su criterio -no aceptado por la Cámara- ya nos es conocido por su intervención en el debate de totalidad. Por lo demás fracasó en dos enmiendas en las que puso mucho interés. En una de ellas pretendía que se fuesen expropiables las tierras adquiridas por medios usurarios. El problema de la usura era una lacra tradicional del campo castellano. Apoyado por algún otro diputado y habiendo obtenido la aceptación por la comisión de que se estudiaría una nueva base que recogiese el problema, vio llegar el fin de la discusión sin que los propósitos de la comisión se hubiesen plasmado en la

realidad. Propuso entonces una base adicional pero no logró que fuese aceptada.

El otro punto que ya había mencionado en la intervención sobre la totalidad era el apoyo a los campesinos castellanos enfeudados en tiempos de la Dictadura al comprar sus tierras. Sánchez Albornoz propuso que se saldasen sus deudas con deuda agraria, pero su propuesta fue rechazada alegando que era materia ajena a la ley que se discutía el resolver problemas crediticios debidos a malos negocios hechos por los pueblos en otra época; se añadieron razones económicas: era recargar más el exiguo presupuesto con que se iba a contar para la reforma. Por lo demás el Instituto de R.A. tenía facultades bastantes para intervenir en ese problema si lo consideraba oportuno sin necesidad de que lo ordenase una base (1).

Fernández Clérigo intentó restringir el ámbito territorial de aplicación de la reforma siendo rechazada su enmienda. Pretendió en primer lugar que a efectos de todas las finalidades de la reforma enumeradas en la base 12 se aplicase sólo en las 14 provincias expresamente citadas en el proyecto. Ni esto ni una fórmula intermedia fue aceptado por la Comisión (2).

(1)

DDSS, n. 187, ap. 1; n. 195, p. 53, 6-7-32.

(2)

DDSS, n. 194, ap. 5; n. 201, p. 24, 15-7-32.

Serrano Batanero presentó una enmienda por la que también serían susceptibles de expropiación los señoríos que habiendo sido enajenados lo hubiesen sido "a riesgo y ventura" del comprador y alguna otra fórmula jurídica por las que el vendedor no venía obligado a la evicción (1). La enmienda fue aceptada por la Comisión y pasó al texto de la ley.

Además de los diputados citados presentaron enmiendas Ansó, solicitando que la reforma se aplicase plenamente a Navarra, respetando a sus órganos forales, Franco, Mirasol, Castro, Ruiz Rebollo y Bello. La de este último merece especial atención pues se refiere a la expropiación de los bienes rústicos de los nobles.

Ya algunos días después del intento de golpe de Sanjurjo, el radical socialista Botella Asensi había presentado una enmienda en este sentido sin que hubiese prosperado. Ahora iba a ser distinto, pues lo que se presentaba no era una enmienda producto de la iniciativa personal de un diputado, sino del Gobierno.

Por lo demás la idea no había sido de Azaña sino nada menos que del Jefe del Estado, el cual propuso en consejo

(1)

De las numerosas enmiendas e intervenciones de Sánchez Albornoz, citemos las siguientes, nº 210, ap.4, 218 ap.6, 219 ap.10, 226 ap. 11 (textos de enmiendas) y los números 201, 202, 218, 227, 232 (intervenciones).

(13-8-32) al Gobierno que la nobleza debía pagar las concomitancias habidas con los sublevados, acordándose presentar un proyecto de ley al efecto (1). Hay que suponer que la razón de que el Gobierno y la mayoría no apoyase la iniciativa de Botella se debió a que se encontraba en preparación un proyecto propio. Dispuestos el Gobierno a apuntarse ese tanto no iban a darle el éxito parlamentario a una iniciativa de un diputado ajeno a la mayoría (2).

La aprobación de la enmienda siguió un proceso distinto al que algún autor ha expuesto (3). No sufrió una atenuación como consecuencia de la oposición levantada, que forzase

(1)

Arrarás, *Memorias*, p. 47. Alcalá Zamora en sus memorias lo cuenta así: "Aconsejé al Gobierno que una vez conocidos los gastos que ocasionara el estado de rebelión los cubriese con un impuesto o recargo especial sobre las clases altas y ricas para que ni aristocracia ni plutocracia se aficionaran a perturbaciones parecidas. Me avergonzó luego ver convertida tal fórmula en una mezquina, vengativa y deshonrosa incautación de pequeñas propiedades pueblerinas de enemigos políticos" (*op. cit.* p. 225). Como se ve Alcalá Zamora le da a su propuesta una interpretación muy concreta y restringida; sin embargo su recriminación parece encaminada hacia la incautación de los bienes rústicos de los rebeldes más que a la expropiación de la grandeza.

(2)

Botella había abandonado ya el partido Radical Socialista para formar un minúsculo grupo de existencia meramente parlamentaria (la Izquierda Radical Socialista),

(3)

Cfr. Malefakis, *op. cit.* p. 238 y ss.

a Azaña a buscar una solución de compromiso. El compromiso consistente en restringir la expropiación a los grandes de España -siempre que hubiesen ejercido sus prerrogativas- se alcanzó *antes* de la discusión de la enmienda en el pleno, de forma que el debate comenzó con la aceptación por la comisión de la enmienda con la limitación indicada, y el asentimiento asimismo por parte de los firmantes de la enmienda respecto a esta limitación.

Tras lo cual, el partido radical por boca de Pascual Leone manifestó su conformidad con la enmienda (aclarando que siempre que se refiriera a los grandes que hubiesen ejercido sus prerrogativas, interpretación que confirmó la comisión), con lo que virtualmente estaba aprobada. Las escasas intervenciones a favor (Botella) o en contra (Ossorio y Gallardo, Alba) eran obviamente irrelevantes. Así como en último término la de Azaña quien acudió, más a que a salvar la enmienda, a recoger el triunfo y a dar relevancia política a una medida cuya trascendencia era evidente.

Pues la enmienda significaba que a los afectados se les expropiaba considerando todas sus tierras en todas las provincias como una unidad, permitiéndoseles por tanto, retener una sola vez los mínimos de tierra que la base 5 n.º 13 -número referente a expropiación por extensión- admitía para cada municipio e indemnizándoles tan solo las mejoras útiles. Por otro lado desde el primer momento la comisión había interpretado la enmienda de Bello como referida a los bienes rústicos.

cos ya incluidos en la ley, según aclaró Palanco a instancias de Ossorio y Gallardo. O sea que de nuevo, si esto era una transacción respecto a la intención original de la enmienda de Pello -lo que habría que comprobar-, a ella se había llegado ya en el seno de la comisión y antes del debate. La diferencia fundamental, el agravante, como dijeron Palanco y Azana en sus dos elocuentes intervenciones (1) consistía en la ausencia de indemnización y en la consideración unitaria de todas las tierras de los afectados.

Es pues una rectificación parcial de los criterios de la ley que significaba contar con un considerable número de tierras de las que se podía disponer de forma inmediata sin necesidad de dinero para las indemnizaciones, que serían suficientes para poner en marcha la reforma; no tiene sentido afirmar que el medio millón de hectáreas (a las que habría que sumar las 150 ó 200 mil Ha. de las tierras de señorías) eran cifras muy pequeñas para las necesidades totales de la reforma pretendida pues es una obviedad; no hay que olvidar que hasta 1935 se había asentado 12.183 campesinos en 48.806 Ha. lo que da idea de la importancia potencial de estas tierras susceptibles de expropiación sin indemnización (2). Y es completamente incomprensible la afirmación de Malefakis de que la

(1) DDSS, n.232, p.33, 35 y 37; la segunda intervención de Azaña no viene recogida en las obras completas. Vid. apéndice II, 2.

(2) Cifras en Malefakis, *op. cit.* p. 398 y 401.

incorporación de la enmienda a la ley "iba, a largo plazo, a socavar las posibilidades de la reforma agraria", afirmación no justificada, pues de ningún modo la oposición a la reforma tuvo su motivo principal en este endurecimiento. Ni creemos que tuviera trascendencia alguna a los efectos de su efectividad o de la enemiga que levantara la ley el que se quebrasen determinados principios iniciales de la misma como el de la indemnización en todo caso -los señorios se justificaban por ser consideradas propiedades ilegítimas-. Estas "desagradables consecuencias", de la enmienda en palabras del citado autor no lo eran más que el conjunto de la ley, y naturalmente para aquellos a los que la ley parecía ya desagradable (1). La base por la que se incorporaba la enmienda, luego incluida en las bases anteriores referidas a la expropiación e indemnización fue aprobada al cabo por 227 v. 25 votos en votación nominal (2).

Al día siguiente, el 9 de septiembre se votaba definitivamente la ley por 318 votos contra 19, en votación nominal, votando a favor, al igual que en el caso de la enmienda de Bello no solo la mayoría gubernamental sino también los restantes grupos republicanos, votando en contra tan sólo los

(1)

Cfr. Malefakis, *op. cit.* p. 240.

(2)

DS, n. 232, p. 38.

agrarios. La votación obtenía el quorum exigido por el artículo 44 de la Constitución para los casos de expropiación sin indemnización, esto es, la mayoría absoluta de las Cortes (1).

(1)

DS, n. 233, p. 12.

2. APLICACION DE LA REFORMA

APLICACION DE LA REFORMA

Es sin duda la aplicación de la reforma el blanco de todas las críticas a la política agraria de la República y según muchos donde se encuentran la clave del fracaso no sólo de esa política sino incluso de la misma República. Pues en efecto el fracaso de la reforma tendría una doble manifestación, por un lado en la no creación de un campesinado como base social del nuevo régimen y por otro lado en que ese mismo campesinado no sólo no pasó a ser fervientemente republicano sino que tampoco permaneció neutral, pues su descontento se manifestó en una continua hostilización al orden público de la República y en una progresiva desilusión respecto a las posibilidades de mejora dentro de su marco legal.

Vamos a ver brevemente el papel que le cupo a Azaña en la aplicación de la reforma, más como Jefe del Gobierno que como líder de Acción Republicana, para luego hacer unas consideraciones generales sobre el curso que llevó dicha aplicación. Nos interesa dilucidar no ya la responsabilidad de Azaña y su partido, o de los republicanos de izquierda y la coalición republicano socialista sino la posibilidad misma de la reforma en el contexto republicano.

Es evidente que como máximo responsable de la política gubernamental hay que hablar en primer lugar de Azaña. Tradicionalmente se le ha achacado una culpable falta de interés tanto en acelerar la aprobación de la ley como posteriormente en urgir su aplicación. Ya vimos que respecto a lo pri-

mero había más de táctica política encaminada a facilitar su aprobación parlamentaria -procedimiento ya ineludible cuando Azaña recibe el Gobierno- y a permitir una solución no excesivamente radical -única a su juicio factible- que a otra causa.

No nos parece tan evidente como se ha querido pre-sentar el supuesto desinterés de Azaña por las materias socia-les y económicas. Vimos su intervención en la discusión del proyecto de ley al ser discutido en consejo. Y nos parece vano discutir si su gusto personal le inclinaba o no hacia tales materias. Es claro que no, y que la afición que hacia ellas pudiera sentir era tan sólo en la medida en que constituyeran un problema político: él era y se consideraba un político. Pe-ro esto se daba también en Azana en aquellas materias que se han presentado como las que absorbían toda su atención: la re-ligiosa, la militar o la regional; su interés por el Estatuto catalán por ejemplo no procedía de su mayor o menor autonomis-mo -sin que vayamos a negar que lo fuera sinceramente-, sino de la inclinación por resolver un problema acuciante de la po-lítica española.

Así si esa falta de afición pudiera explicar la au-sencia de intervenciones ante las Cortes, el mayor o menor in-terés *político* de Azaña hay que medirlo refiriéndose más bien a la política realizada a lo largo de los dos años de Gobiernos presididos por él.

Por lo demás a la hora de valorar la menor interven-ción personal del Jefe del Gobierno en las tareas parlamentarias

no hay que olvidar que mientras Agricultura constituía un ministerio y tenía un titular no sucedía lo mismo con la cuestión catalana, de la que tuvo que ocuparse él más directamente. Por sus tomas de postura vistas hasta ahora creemos sin duda alguna que Azaña sí apreciaba la trascendencia de resolver el problema campesino no de una forma vaga y sentimental, sino de manera concreta e inmediata.

La exigua atribución presupuestaria del IRA si indica algo es fundamentalmente las dificultades financieras unidas a una equivocada política económica -punto al que ya hemos aludido- que confluyeron en la República. Pero no se puede deducir de ahí so pena de tergiversar la realidad la falta de atención a la situación agraria. Parecidas estrecheces sufrían otros departamentos -recordemos los apuros del ministro de la Guerra- y tampoco cabe achacarlo a falta de interés. Las cifras del presupuesto hay que manejarlas además en términos relativos, en comparación con las cantidades de los presupuestos anteriores.

Va vimos a este respecto como Azaña tuvo el mérito de poner el presupuesto mucho más en consonancia con los intereses generales reduciendo en términos proporcionales el peso del presupuesto militar en los generales del Estado (1).

(1) Malefakis (*op.cit.*p. 295) señala la dotación del IRA como índice del limitado compromiso de Azaña con el problema agrario.

En sus apuntes Azaña alude en varias ocasiones a sus llamadas de atención a Domingo, a su desolación por la debilidad y poca eficacia y a las peligrosas consecuencias de un fracaso en esta materia de éste (1). Quizás entonces su máxima responsabilidad, dada la imposibilidad de substituir a un ministro como Domingo por razones de política general, residiría en no haber tomado más de su mano la gestión agraria o de no haber forzado la inclusión en el ministerio de Domingo de personas eficaces y de su confianza (2).

Este tipo de crítica coincidiría con la que le dedica Alcalá Zamora en sus *Memorias* al afirmar el feudalismo de los ministerios en los Gobiernos Azaña, quien dedicado preferentemente a la política general y salvo en los problemas más acuciantes, dejaba gran autonomía a sus ministros; no habría que olvidar sin embargo que es parecida crítica a la que el propio Azaña le hace a Alcalá Zamora... (3).

Respecto a la actuación de Domingo poco habría que añadir a los juicios emitidos por Azaña mismo y al análisis hecho por Malefakis. Falta de preparación, debilidad, empañaron su labor a pesar de su indudable deseo de acierto. Un enér

(1) Vid. por ejemplo Arrarás, *Memorias* ..., p. 90-93.

(2) Algo no tan sencillo por la escasez de cuadros capaces, así como por la influencia de los partidos para ocupar puestos en el aparato gubernamental.

(3) Alcalá Zamora, *Memorias*, p. 212.

gico ministro del ramo hubiera desempeñado probablemente mucho mejor la difícil tarea. Como veremos y para colmo de desdichas del líder radical-socialista, el fin del bienio le restó las buenas perspectivas de recoger algún fruto de las labores preparatorias de la reforma.

Dos personas más merecen ser citadas como personales corresponsables de la política agraria republicana. Son el director del IRA, Vázquez Humasqué, de Acción Republicana como ya dijimos y el secretario general del mismo Instituto, el periodista Cacho Zabalza. El primero cuenta con gran cantidad de testimonios de coetáneos que le califican de persona competente y entendida, firme defensor de la reforma y decidido a llevarla a cabo en el menor tiempo posible. Contaba con la confianza de Azaña -quien le llevó al puesto que ocupaba y que consideraba que dirigía a Domingo por caminos razonables apartándole de soluciones excesivamente radicales- y de los socialistas (1). Los inconvenientes con que se tropezó fueron por un lado la ineficacia del Instituto debida en gran parte a la composición colegiada del Consejo Directivo que bloqueó en gran medida la adopción de decisiones y por otro lado la labor del secretario general del Instituto.

Al contrario que en el caso de Vázquez Humasqué, del secretario general del Instituto Cacho Zabalza se tienen referencias sumamente negativas tanto de ineficacia como de

(1) Vidarte, *Las Cortes* ... p.478; Azaña, OC.IV, p. 322.

mala voluntad y escasa lealtad para la labor que desempeñaba. Al parecer había sido nombrado por recomendación de Prieto, a quien había cortejado para obtener el puesto; acabaría en la Ceda y posteriormente con Franco (1). Y como es evidente su puesto era de enorme importancia para el funcionamiento del Instituto.

Mientras se mantuvo en su puesto, Vázquez Humasqué fue un eficiente director dentro de las limitaciones con que topó, pero fue cesado en febrero de 1933. Tras la publicación de las *Memorias de Alcalá Zamora* sabemos la razón de su cese. Este se produjo por la publicación subrepticia en *La Gaceta*, con suplantación de las firmas del ministro Domingo y del Presidente de la República de un decreto no aprobado por el consejo de ministros, relativo a la expropiación sin indemnización de antiguos bienes comunales; tal decreto fue enviado a *La Gaceta* para su publicación por Vázquez Humasqué y el socialista Martínez Gil, impacientes ante las dificultades que dicho decreto había encontrado para su aprobación en consejo. El cese perjudicó la actividad del Instituto que hasta varios meses después no pudo contar con otro director general estable (2).

(1) Vidarte, *ibid.*; Madariaga, *España*, p.388; las veces que alude Azaña a este Cacho Zabalza lo hace en su calidad de periodista de *El Sol* para orientarle sobre cuestiones políticas, sin ninguna referencia a su cargo en el IRA.

(2) En relación con el cese de Vázquez Humasqué, Alcalá Zamora, *Memorias*, p. 237; sobre los sucesivos directores del IRA, Malefakis, *op.cit.*, p. 290.

La equivocada estructura orgánica del IRA, que lo convirtió en un pequeño parlamento fue un importante obstáculo contra el que Domingo no supo adoptar resoluciones adecuadas. Por lo demás si desde la aprobación de la ley de Reforma se fue preparando el aparato necesario para comenzar la aplicación en gran escala, es cierto que se retrasó la presentación a las Cortes de varios proyectos de ley complementarios a la reforma, y que quizás no se aguraron las posibilidades de asentamientos inmediatos de campesinos en tierras que no necesitaran indemnización -aunque no se pueden minusvalorar las dificultades en infraestructura y personal de la que se partía, pues hay que tener en cuenta, como reconoce Malefakis, que una vez situados en septiembre de 1932, fecha de aprobación de la Reforma, no se podía pretender una transformación radical de la estructura de la propiedad de un día para otro (1)-. Por parte de Azaña el intento más firme para encauzar la reforma fue su pretensión de substituir a M. Domingo en la crisis de junio del 33, intento frustrado por el empeño del ministro de proseguir su labor. Sin duda veía cercano el momento (a partir del próximo septiembre) en el que se podría empezar una aplicación acelerada de la reforma, tanto por la labor infraestructural ya realizada como por la época propicia para los asentamientos. No queda claro sin embargo en las *Memorias* de Azaña

(1) Para un análisis crítico de los errores y deficiencias de la actuación de Domingo, vid. Malefakis, *op.cit.* p.286 y ss. No obstante la afirmación citada de este autor, él juzga muy severamente la responsabilidad personal tanto de Domingo como de Azaña, insistiendo en el tópico, a nuestro juicio erróneo, de su falta de interés, como de los republicanos en general, por el problema agrario.

en quien pensaba para substituir a Domingo.

Un juicio global sobre la reforma agraria, comenzada más que hecha en el bienio, tendría que tener en cuenta las enormes dificultades de Gobierno con las que tropezó la coalición en el poder. Y por supuesto, no olvidar que se trataba de un modelo de transformación de tipo reformista, aunque por las consecuencias y dado el atraso de la estructura agraria española cabría calificarlo de revolucionario. No cabe pues criticar la actuación del Gobierno Azaña según las pautas de un modelo revolucionario no parlamentario, que nadie se planteó en la realidad (1).

Hecha esta precisión no siempre tenida en cuenta hay que añadir que el plazo con el que se contó fue realmente breve para la enorme tarea de una reforma hecha sin salirse de la legalidad. Los problemas que su puesta en marcha iban produciendo sólo podrían ser resueltos con tiempo y conforme fuesen apareciendo, pues cualquiera de los proyectos que se discutieron hubieran provocado consecuencias y problemas imprevistos en un primer momento. Lo más dramático es que lo que pudo hacerse en este plazo fue fundamentalmente la labor infraestructural previa.

(1)

Los comunistas no tenían por aquella época peso alguno en la vida política nacional y los socialistas sólo a finales de 1933 comenzarían a plantearse seriamente un modelo de actuación directamente revolucionario.

A pesar de los obstáculos con que tropezaba el Gobierno, sus componentes sin duda esperaban ocupar el poder durante un plazo más largo. Azaña, interpretando en toda su pureza el régimen parlamentario vigente esperaba que bien la coalición gobernante, bien una coalición puramente republicana alcanzara a ser el término del plazo de una legislatura ordinaria (1). La creencia en que a pesar de su animadversión hacia la política gubernamental Alcalá Zamora no se atrevería a disolver las Constituyentes siendo estas capaces de apoyar a más de una combinación gubernamental les hacía contar con más tiempo para proseguir la política iniciada. Pues aunque una coalición puramente republicana desarrollaría una política más moderada, no atenuaría probablemente el ritmo de la Reforma Agraria: la permanencia de los republicanos de izquierda en el poder sería garantía de que se administrarían con lealtad las reformas legalmente implantadas en el primer bienio, y a su vez esta política sería condición inexcusable para la colaboración de dichos sectores.

Y no es argumento en contra de las expectativas de la coalición republicano socialista el negar representatividad a las Constituyentes debido a su composición por consecuencia del sistema electoral -como tampoco sería acertado el mismo juicio respecto a la segunda o tercera legislatura. Que este

(1)

Las Cortes Constituyentes en puridad no tenían plazo de vigencia; podrían haber aspirado a la duración de una legislatura ordinaria sin que pudiera considerarse un abuso de sus prerrogativas.

fue desatentado nos parece obvio. Pero no por ello se puede restar legitimidad a las sucesivas Cortes que de él resultaron, salvo que se rechacen el conjunto de ficciones que constituyen un sistema de democracia representativa. Por supuesto que cabe considerar más democrático un sistema electoral proporcional y más representativa una cámara parlamentaria que recoja adecuadamente las tendencias políticas de una nación.

Cabría añadir que las circunstancias de la política española, fuertemente antagónicas, apoyarían dichas conclusiones. Sin embargo es bien conocida en Ciencia Política la polémica entre representatividad y eficacia a la hora de juzgar regímenes políticos y sistemas electorales. Si los gobernantes republicanos utilizaron un sistema electoral fuertemente mayoritario fue porque se inclinaron por los argumentos de favorecer una mayor estabilidad gubernamental proporcionando a la mayoría un margen amplio en la Cámara. Que fallaron en su opción es claro, pero lo es a posteriori. Prueba de ello es que ninguna coalición en el poder se decidió a reformarlo, a pesar de que la derecha había sido tradicionalmente partidaria de un sistema proporcional; no cabe duda de que en la segunda fase del segundo bienio si la Ceda hubiese querido la ley electoral hubiese sido modificada. La aceptación del sistema por izquierdas y derechas -aunque por supuesto pensando cada bando en que las ventajas podían ser para él, como es de rigor en un sistema mayoritario- resta todo fundamento a las críticas de ausencia de representatividad de las sucesivas Cortes republicanas. Respecto a la conveniencia de haber disuelto las Cortes Constitu-

gentes en diciembre del 31, ya aludimos más arriba, y cae también bajo las anteriores consideraciones.

Respecto a la carencia de apoyo social que minaría las decisiones adoptadas por un Parlamento que no se correspondía con la correlación de fuerzas existente en la sociedad parece claro que tanto la votación de junio de 1931 como la de noviembre de 1933 mostraban un apoyo social suficiente como para emprender la tarea de alterar el *statu quo*, a mayor o menor ritmo, aunque las segundas elecciones, por las razones ya vistas forzarán a un alto y posteriormente un retroceso en el camino reformista.

Al igual que vimos respecto a Azaña también es un tópico distorsionado el escaso interés republicano por el problema agrario. Se confunde aquí de forma parecida la afición personal de la mayoría de los diputados con la valoración de los mismos respecto a la importancia de la cuestión. Lo que sí es cierto es que en muchos casos habían intereses sociales opuestos a que la reforma fuese muy profunda. Esta circunstancia se daba en los diputados radicales fundamentalmente, y su actuación parlamentaria fue congruente con este hecho; y en menor medida se daba en parte de los diputados pertenecientes a los sectores republicanos de izquierda. El mismo Azaña se refiere con sorna a este hecho en sus apuntes (1).

(1)

Azaña, OC. IV, p.

Entre los factores que influían en la menor afluencia de diputados a las discusiones sobre estos temas se encuentran también su carácter más especializado, el exceso de trabajo que pesó en todo momento sobre las Constituyentes y ya en el verano de 1933, el desánimo de la mayoría ante la difícil situación política.

En lo que respecta a Acción Republicana no se puede decir que sólo participaran en los debates diputados de segunda fila. Ya vimos que Sánchez Albornoz y Fernández Clérigo fueron los más asiduos enmendantes, y eran de las figuras más destacadas del grupo; no fueron además los únicos que intervinieron en las discusiones, aunque quizás la asistencia del grupo en general fuera efectivamente menor que en otros proyectos.

Una breve comparación con lo ocurrido con el Estatuto catalán, tanto en su discusión como en la puesta en marcha de sus organismos autónomos, demuestra a las claras lo superficial y subjetivista de la transposición que se hace de los presuntos gustos y preferencias de los republicanos a su interés político. Pues lo incontrovertible es que el Estatuto y la ley de Reforma Agraria fueron votadas el mismo día y ambas antes que ciertas leyes de desarrollo de las prescripciones de la Constitución relativas a materia religiosa. Y si hemos comprobado los retrasos y deficiencias en la puesta en marcha de la Reforma, no es difícil compararlo con la lentitud en la transferencia de servicios a la Generalidad catalana, con los obstáculos que dicha operación encontraba en los propios funcionarios

del ministerio de Hacienda, etc., de forma que en los últimos días de agosto del 33 ocurre una crisis por dicho motivo. Para ser consecuentes habría que concluir o la incapacidad gubernamental -o falta de interés por los problemas con que se enfrentaban- general de la coalición republicano socialista (lo que reputamos absurdo e injusto) o reconocer las enormes dificultades en las que se desenvolvía su actuación, a lo que habría que sumar por supuesto los errores e insuficiencias personales de los dirigentes republicanos. Pero no hay que olvidar, como recordará el propio Azaña en sus notas que "enseñar el gobierno a una democracia es habituarle a prescindir del genio" (1). Y por muy revolucionarias que fuesen las consecuencias de las reformas emprendidas -que lo eran- la República nunca dejó de ser una democracia a pesar de sus crisis y su inestabilidad.

La tesis política subyacente a desmesurar la responsabilidad de la coalición republicano socialista en el fracaso de la Reforma Agraria es, como ha señalado Maurice (2) tanto presentarla como algo poco menos que imposible, como exculpar a los Gobiernos de centro derecha que tras frenarla -pues no la aplicaron al ritmo que *ya era posible*- la desmontaron después de octubre del 34. Y más allá todavía se pretende la ne-

(1)

Azaña, OC. IV, p. 389.

(2)

Maurice, *Problemas de la reforma agraria en la II República*, en *Sociedad ...*, p. 215.

gación de la posibilidad de una reforma dentro de los cauces de un sistema democrático. Aplicada esta conclusión con coherencia al caso español implica la futilidad de los esfuerzos reformistas republicano socialistas y la implícita defensa de una alternativa compuesta por dos opciones antagónicas, la gestión sin reformas significativas de la sociedad -aunque se reconozca su atraso e injusticia- o bien una reforma violenta y radical. Dado que esta última vía es difícilmente defendible queda tan sólo la primera como deseable y como única política sensata en el marco español de los años treinta; esa opción tiene, además, un nombre, Lerrox, que viene a ser la ineludible conclusión de las críticas de gran parte de la bibliografía -especialmente la anglosajona- sobre la República.

Frente a semejante tesis nos esforzamos en defender la de que frente a semejante política estabilizadora, de por lo demás dudosa oportunidad en una sociedad tan antagónicamente dividida y de tan anticuada e injusta estructura, y quizás de escasa eficacia pacificadora, existía la posibilidad real de una política reformista como la encarnada por la coalición republicano socialista, y que su fracaso, debido como hemos dicho a errores y dificultades no implica, que fuera imposible, salvo que cayéramos en un fatalismo histórico a posteriori.

Y no habría que imputar su fracaso durante el primer bienio tan exclusivamente como se ha hecho a los dirigentes de la coalición; no puede uno limitarse a juzgar los proyectos más moderados de radicales y otros grupos republicanos durante la

legislatura constituyente y desconocer que en puridad su principal labor fue obstaculizadora y encaminada a hacerse con el poder sin reparar en bloquear el sistema parlamentario. Es de una gran ingenuidad -o mala fé- confundir las críticas que estos grupos planteaban a las iniciativas gubernamentales -votos particulares de Hidalgo o Díaz del Moral por ejemplo- con una hipotética política agraria de dichos grupos en caso de que estuvieran en el poder. De hecho no aplicaron siquiera con firmeza la legislación reformista cuando pudieron hacerlo en el segundo bienio, cayendo progresivamente bajo la influencia de la ultrarreaccionaria Ceda.

Es comprensible entonces que M. Domingo indignado protestase vehementemente preguntando dónde se encontraban las protestas a la pasividad del Gobierno una vez que él había abandonado el ministerio de Agricultura, si es que acaso la Reforma se había acelerado o en qué país había ido realizado una reforma agraria más rápidamente (1).

Es muy expresivo que en toda una serie de autores la agudeza crítica respecto a la actuación de los Gobiernos del primer bienio se transforma a la hora de enjuiciar la labor de

(1)

La experiencia ..., p. 230. El hecho de que se asentasen más campesinos en el segundo bienio está suficientemente explicado y conforme toda la bibliografía sobre el tema, en que no es especial mérito de los ministros de Agricultura posteriores a Domingo.

los gobiernos radical cedistas en una benévola justificación de su inactividad y de la política cada vez más inclinada hacia la mera reacción, especialmente tras la rebelión de octubre.

Sí bien somos opuestos a efectuar prognosis históricas de carácter retrospectivo, merece la pena contrarrestar la discutible afirmación del tantas veces citado Malefakis, quien se ocupa de "descartar explícitamente el enraizado mito de que el gobierno Azaña, de haber continuado en el poder, habría acometido durante el otoño de 1933 una masiva reforma agraria" (1). Todas las afirmaciones con las que intenta defender semejante tesis son futuribles absolutamente insostenibles con semejante radicalismo.

Es indiscutible la labor técnica y burocrática previa realizada no significaba ni mucho menos que estuviesen solventados todos los problemas. Pero de ahí a afirmar que la desunión de la coalición, los problemas financieros de la reforma, la confianza limitada que el Presidente de la República concedía al Gobierno y la presión campesina imposibilitaban de forma absoluta que la reforma agraria diera un avance substancial, es por completo gratuito (tanto como afirmar taxativamente lo contrario). La coalición había dado suficientes muestras de superar situaciones políticas harto comprometidas, como la obs-

(1)
Malefakis, *op. cit.*, p. 326.

trucción, y es vano imaginar en qué medida hubieran podido su
perar las dificultades con las que tropezaban supuesta -es la
base de la hipótesis-la confianza del Jefe del Estado.

Pero lo cierto es que no hay por qué quitar respon-
sabilidad al cese presidencial de un Gobierno que todavía era
capaz de hacer aprobar su política por las Cortes. La experien-
cia política europea ha mostrado además de entonces acá nume-
rosos casos de mayorías de más escaso margen que el que conta-
ba Azaña como para poner en duda la posibilidad de gobernar
a pesar de la poco confortable última votación de confianza
que éste recibió. Lo único incontrovertible es que el cese de
Alcalá Zamora vino en el momento de todo el bienio en que la
reforma agraria tenía más posibilidades de progresar, sin que
nos aventuremos a juzgar su máximo ritmo posible ni sus posi-
bles efectos pacificadores que indudablemente no hubieran sido
inmediatos. Igualmente no se puede paliar tampoco la correspon-
sabilidad en las consecuencias de la política radical cedista.

D. PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

El apartado que dedica a la Reforma Agraria el programa de la Izquierda Republicana muestra a pesar de su brevedad las enseñanzas del bienio del Gobierno.

17.- Reforma agraria.- Activa aplicación con las modificaciones que su estudio aconseje en atención:

a) A los agricultores medios y modestos que cultiven con esmero.

b) A la necesidad de establecer un plan de aplicación de la ley, señalando los plazos de su desarrollo e indicándose las fincas a que haya de alcanzar en relación con los medios que el Estado puede destinar a este servicio, a fin de que que den libres para la contratación y el crédito las fincas no afectadas.

Para asegurar el cumplimiento de la ley se simplificarán los trámites burocráticos y se creará el Banco Nacional de Crédito Agrícola.

Varios puntos de los más criticables de la ley aprobada en septiembre del 32 son tocados con indudable acierto:

- En primer lugar el salvar de la aplicación de la ley a pequeños y medios propietarios que sin añadir gran cantidad de tierras expropiables incrementaban inútilmente la oposición a la Reforma. A través de la inclusión en el catálogo

de tierras expropiables de las tierras próximas a los pueblos -las tierras de riego- muchos propietarios de esta clase habían sido afectados por la Reforma.

- Delimitar con claridad las fincas susceptibles de expropiación así como los plazos en los que esta sería efectiva como forma de obviar la inevitable devaluación de la propiedad rural en tiempos de reforma agraria. Situación agravada de manera innecesaria por ciertos rasgos de la ley como su aplicabilidad a todas las provincias -aunque no hay que olvidar que para extenderla fuera de las expresamente mencionadas era necesaria una ley-.

- Simplificación de trámites burocráticos. Ya hemos aludido a la composición del Consejo del IRA. Asimismo en los trámites necesarios para la expropiación y asentamientos previsto en la ley de bases podían introducirse mejoras que facilitasen los procedimientos.

- Creación del Banco Nacional de Crédito Agrario, imprescindible pieza para el buen funcionamiento de la reforma.

Aunque evidentemente se alude tan sólo a algunos aspectos de la reforma, puede observarse que ya no se hace una afirmación genérica sobre la necesidad de solucionar el "problema agrario" como en 1931, sino que se especifican varios puntos concretos que constituyen los puntos débiles de la reforma en marcha y que responden a los planteamientos políticos

de los republicanos de izquierda.

Frente a las preocupaciones socialistas que hubieran hecho hincapié en una aceleración del ritmo de la reforma y más centradas en los problemas de los jornaleros, aquí late la preocupación por restar enemigos innecesarios a la reforma defendiendo los pequeños y medios agricultores y en sanear en lo posible el mercado de tierras; en normalizar en suma el campo a la vez que se aceleraba la reforma.

Es interesante constatar que aunque se transluce efectivamente el deseo de acelerarla ("activa aplicación, simplificación de trámites burocráticos") no se refleja ningún sentimiento de urgencia inmediata. Esa sensación de los primeros meses de la República no se volvería a dar, y esta vez con efectos palpables en la acción de gobierno, hasta el 36, como consecuencia del drástico bajón del nivel de salarios agrícolas en el segundo bienio y del agravamiento consiguiente de las tensiones políticas y sociales posterior al octubre del 34. Quizás sea debido sencillamente al carácter programático del texto que comentamos, pero creemos que a pesar de la división ya irreversible de los partidos republicanos y de la cada vez más aventurera política socialista, no existía en los republicanos de izquierda, ahora en la oposición -como tampoco en los gubernamentales- impresión alguna de peligro para la República por consecuencia de tensiones sociales.

¿Era esto una ceguera para aquel momento? Visto retrospectivamente ofrece pocas dudas de que sí. Pero quizás en

febrero de 1934 la situación de los campesinos todavía no era tan grave como llegaría a serlo. Y sobre todo -ya volveremos sobre este punto- la continua crisis de la República sería sobre todo política. Y desde este punto de vista el planteamiento republicano no era irreal, pues los efectos positivos de la aplicación de la Reforma sólo serían palpables a medio plazo y además si la República peligraba seriamente era, como todo régimen democrático en España, por los elementos de fuerza de la derecha ultrarreaccionaria. Tres levantamientos campesinos podían haber deteriorado una coalición y podrían como mucho derribar un gobierno, pero en modo alguno amenazar la persistencia de la República.

6. UNA COMPARACION INELUDIBLE: EL RADICALISMO FRANCES

UNA COMPARACION INELUDIBLE: EL RADICALISMO FRANCES

Conviene quizás tras haber estudiado el contenido programático y la concreta actuación parlamentaria de Acción Republicana hacer una breve referencia a los puntos de coincidencia que pudiera tener el partido de Azaña con el radical socialismo francés. Un análisis detallado de la relación e influencias que el radicalismo francés haya tenido sobre la política republicana española exigiría estudiar a todos los partidos republicanos, desde el Radical hasta el Radical Socialista, pasando por Acción Republicana. Nosotros vamos a limitarnos aquí a ver someramente lo relativo al partido que estudiamos, que quizás -y por eso hemos hecho la anterior advertencia- no sea el que más refleje la influencia francesa, a pesar del interés intenso que Azaña tuviera por la cultura y la política del país vecino.

En lo que toca al aspecto organizativo, Acción Republicana se diferencia notablemente del partido radical socialista francés. Este es, durante los años treinta un típico partido de cuadros, de notables, estructurado en comités (1). Frente a esto Acción Republicana será un partido mucho más moderno. Acción Republicana pretenderá ser desde su transformación en partido al advenimiento de la República un partido de masas, y lo conseguirá en la medida en que se implante progresivamente; esto es, por sus intenciones, por su regulación y por la práctica allí donde logre implantarse, Acción Republicana será un

(1) Para lo referente al radical socialismo francés, Touchar . *La gauche...*
p. 102-138.

partido de masas aunque desde luego un partido menor, dada su reciente aparición. Ciertamente que en algunas zonas y localidades podrá parecer un partido de cuadros a la antigua, pero será precisamente allí donde el partido no logre, o no le de tiempo arraigar. En el capítulo referido a la organización del partido veremos esto con más extensión.

Un partido pues más moderno, probablemente debido a su reciente creación, lo que desmiente la calificación de partido decimonónico y anticuado que con carácter general se ha atribuido a los partidos republicanos sin un análisis concreto que lo fundamente. Un partido que a pesar de su estructura más moderna no contaría desde luego con la fuerza electoral del partido francés, el cual había logrado desde su aparición a principios de siglo un arraigo provincial y una cobertura de prensa envidiable.

Más puntos de contacto pero también diferencias notables encontramos al extender la comparación a la ideología y programa de ambos partidos. En efecto, los principales elementos de la ideología de quien fue la encarnación del radical socialismo francés, Herriot, coinciden en gran medida con el ideario de Acción Republicana y de Azaña personalmente: la democracia, la razón y el buen sentido, el pueblo, la justicia social, la paz (1). También son comunes la exaltación de un

(1)

Ibid. p. 117.

Estado eficaz, un patriotismo no conservador, una cierta idea comunitaria del partido, el laicismo radical, la defensa de la República "amenazada" por las derechas, etc.

Pero la diferencia clave la encontramos en su programa económico y social, y consecuentemente en su actitud hacia los socialistas. En ambos aspectos Acción Republicana, de la mano de Azaña, fue más lejos. A pesar de la moderación que las medidas de Azaña tenían en estos terrenos, para la España de la época implicaban consecuencias revolucionarias. Un problema distinto es que por errores y dificultades no lograran implantarlas sólidamente en el primer bienio. Lo que no cabe duda es que estaban dispuestos a ello, y la consecuencia era una política de colaboración y buenas relaciones con los socialistas -a nivel de política de gobierno - especialmente hasta que estos oscilaron hacia posiciones revolucionaristas- e incluso después.

Los radical socialistas franceses serían más conservadores en cuestiones económicas y sociales (¿no serían más homologables desde este punto de vista con los radicales españoles o por lo menos con los radical socialistas de Gordón Ordás?) (1); sus relaciones con los socialistas eran, y especialmente por parte de Herriot, difíciles: el líder radical francés era más inclinado a coaliciones de centro que con los socialistas, justo lo contrario que Azaña. ¿Era Azaña esclavo de las circunstancias españolas? ¿Hubiera actuado en un país con unas diferen

(1)

En su estudio sobre el Partido Radical Español, O. Ruiz Manjón considera que la réplica del radicalismo francés fue precisamente el azañismo, *El Partido ...*, p. 13.

cias sociales no tan acentuadas y menos atrasado en todos los aspectos, más en conservador? ¿Hubiera sido menos inclinado a colaborar con los socialistas de poseer un gran partido? No podemos entrar aquí en tales hipótesis. Lo que indudablemente hay que concluir en la sumaria comparación que realizamos es que Acción Republicana realizó, sin duda gracias al firme liderazgo de Azaña, una política más avanzada, más "radical-socialista" que los franceses, que utilizaban tal etiqueta. La coincidencia y las influencias del radical socialismo francés se centran pues en los aspectos más puramente ideológicos y políticos (laicismo, concepción del Estado).

Pero lo que a nuestro juicio es esencial, el instrumento político para realizar las reformas proyectadas y que en el caso español solo podía ser la coalición republicano socialista, y el alcance mismo de estas reformas, de mucha mayor trascendencia en el caso español, constituyeron una diferencia fundamental con la política de los Gobiernos Herriot de los años treinta.

C A P I T U L O - V I I

ESTRUCTURA DEL PARTIDO

ESTRUCTURA DEL PARTIDO

Ha sido frecuente al hablar de los partidos de la época republicana el considerar a los dos grandes de aquella época, el socialista y la Ceda, como los dos únicos partidos de masas. Frente a ellos estaría el resto de los partidos que -excepto los de carácter obrero- tanto por su escasa relevancia como por su naturaleza burguesa serían partidos de cuadros, estructurados en base a comités y de poca o nula vida partidaria.

Ya Molas ha observado que en realidad, la generalidad de los partidos republicanos, con las excepciones antes citadas, contaban con un tipo intermedio de encuadramiento entre el comité y la sección. Siendo originariamente partidos de comités, la necesidad de contar con más seguidores les impulsó a dar importancia al aspecto cuantitativo y fomentar la afiliación. El crecimiento cuantitativo conllevaba una mutación cualitativa, produciéndose una coexistencia de comités que contaban con escasa afiliación, con centros en los que la afiliación era numerosa. Para Molas estos centros y comités constituirían un tipo de encuadramiento distinto de los tradicionales enumerados por Duverger (comité, sección, célula y milicia). De este modo afirma: "Ni sus características ni su ámbito de actividad coinciden con los del comité o la sección. Del primero le separa su concreción en municipios y barrios, con el fin de buscar una afiliación amplia; de la sección le distinguen su carácter todavía, de hecho, selecto, y su preocupación casi exclusiva por la actividad electoral (excepto, quizá, en períodos de gran tensión política)". (1).

(1)

Molas, *Liga* .. II p. 10

Así pues respecto a la estructura de un partido de ma sas se cumplía por ejemplo el requisito de afiliación masiva, pero por otro lado no existía periodicidad de reunión, ni formal mente las adhesiones de los miembros eran individuales, sino que se realizaban a través de entidades por lo general no exclusivamente políticas, etc. Pues bien, si la Ceda, a pesar de su carácter de partido de masas, coincidía con estos caracteres típicamente republicanos, -estructura indirecta, coexistencia de comités y secciones, diversidad de esquemas organizativos-, vamos a comprobar como AR, a pesar de su carácter minoritario contaba en todos sus aspectos con la estructura típica de un partido de masas.

En efecto, AR nace con vocación de partido de masas, y conforme se estructura se va dotando de unos organismos y de un modo de funcionamiento propios de este tipo de partidos. No pode mos confundir entonces el hecho de que un partido sea pequeño y tenga pocos afiliados con que organizativamente no sea o no pueda ser un partido de masas. Sin duda existe una relación entre número de miembros y estructura organizativa, como ha notado Molas al observar que esos caracteres que hemos denominado típicamente republicanos surgen al aumentar la afiliación de partidos originariamente más próximos a los de cuadros. No es este el caso de A.R. A pesar de que sus orígenes se remonten a 1925, su trans formación en partido data como sabemos de 1931. Cuando se procla ma la República es por lo tanto, un partido incipiente, y que na ce ya con el signo de la nueva política: la necesidad de movili zar a las masas no solamente en los períodos electorales sino

también con la continuidad suficiente como para suscitar un apoyo constante a una determinada política. Lo cual se plasma de manera clara en los estatutos elaborados en septiembre de 1931.

Lo que sucede es que su carácter de partido incipiente puede inducir a confusión. En efecto, esa forma híbrida de encuadramiento que en la Liga Catalana o en la CEDA puede deberse a su carácter conservador y en el Partido Radical tanto a su creciente conservadurismo como a su larga tradición de partido de cuadros escasamente estructurado, cuando se encuentra en AR se debe a que la organización del partido está dando sus primeros pasos. Si en algunas provincias existe durante largo tiempo sólo un comité en la capital o en algunas ciudades importantes, si algún organismo no se reúne con la periodicidad necesaria, etc., no es porque esa sea la naturaleza del partido que surge sino porque en esos casos todavía no habían adquirido tales organizaciones provinciales la fuerza necesaria para mantener una vida regular. Pero los cuatro años que van desde comienzos de 1930 a marzo de 1934 son una progresiva adecuación de la realidad del partido a lo prescrito en los estatutos y a la práctica efectiva de las organizaciones más activas de AR. en suma, a las características de un partido de masas. Así pues estos datos -estatutos y práctica- nos reconducen a un partido de masas todavía minoritario y no a un partido mixto, al estilo de los antes aludidos, con entidades que tenían tanto de comités como de secciones.

Sin duda Duverger tiene razón cuando afirma que la burguesía, pequeña, mediana o grande, gusta poco de la acción colectiva, lo que provoca que en los partidos que representan a estos

sectores sociales la sección como órgano de encuadramiento de bases es más teórica que real (1). Pero habría que matizar que no es lo mismo el que un partido sea progresista o conservador, de derechas o de izquierdas. En este último caso esas tendencias genéricas burguesas y pequeñoburguesas se ven contrarestadas por la mayor beligerancia que proporciona la existencia de un programa ideológico reformista por realizar. Lo que en partidos conservadores se da excepcionalmente cuando por el contexto político ven peligrar intereses vitales de las clases por ellos representadas, que es movilizar activamente a sus soportes sociales, -éste sería el caso precisamente de la Ceda, es mucho más hacedero en un partido muy marcado ideológicamente, por burgués que sea; esta situación -un partido de base social burguesa muy comprometido ideológicamente- es típica de la mayor parte de los partidos reformistas y progresistas.

Por ello en AR cuando nos enfrentamos con casos en los que se incumplen los estatutos, creemos que hay que enfocarlo fundamentalmente como algo debido a la imperfecta organización. Por lo demás, a lo largo de estos cuatro años, ésta se fue perfeccionando progresivamente, la articulación fue fortaleciéndose (2) y los organismos intermedios fueron entrando en funcionamiento.

(1) Duverger, *op. cit.* p. 55. Estudia ahí Duverger como en la mayoría de los partidos conservadores y centristas que adoptan el sistema de la sección, éste es más teórico que real. Duverger habla de burguesía pequeña, mediana o grande como de tres sectores de una misma clase. Sobre la distinción, más acertada, entre pequeña burguesía, y burguesía (media o grande), como dos clases distintas, con comportamientos políticos diferenciados vid. Poulantzas, *Les classes sociales*.....p. 207 y ss.

(2) Sobre el concepto de "articulación" de un partido, Duverger, *op. cit.* p. 70, *infra*, cap. VII, 7.

AR se constituyó como un típico partido de afiliación directa, cuyos organismos de encuadramiento eran los grupos locales, los cuales se reunían periódicamente (todos los meses) y eran dirigidos por comités elegidos democráticamente. Ni siquiera en Madrid o en alguna otra localidad con importante número de afiliados se llegó a dividir el grupo local en subsecciones. Estos grupos locales, cuyo funcionamiento veremos luego, constituyen las "secciones" de AR, en la terminología habitual de Ciencia Política que venimos utilizando.

Esta dualidad de órganos deliberantes con reuniones periódicas y órganos rectores previamente elegidos por aquellas, es el esquema que se repite a todos los niveles territoriales del partido. Las relaciones internas entre los diversos órganos, constituían un partido de estructura aceptablemente democrática, con una estricta delimitación de competencias entre ellos.

Para el análisis de la estructura organizativa y de la evolución de las organizaciones provinciales hemos tropezado con la dificultad de la escasez documental. La ausencia de archivos de Izquierda Republicana -que hubieran conservado con toda seguridad el anterior archivo de AR- como consecuencia de la guerra civil así como la ausencia de publicaciones del partido -por lo menos que hayan llegado a nuestras manos- ha provocado por ejemplo que no contemos sino con escasos y muy parciales documentos internos. Sin embargo a través de las fuentes hemerográficas y de los documentos conservados en el AS, hemos podido reconstruir sin excesivas lagunas el esquema orgánico del partido.

Contamos para ello con el texto de los estatutos del partido y de los reglamentos provinciales y locales. Igualmente son útiles las referencias de prensa donde se da cuenta de las asambleas en las que se discutieron los estatutos.

Menos completo es el programa obtenido de la vida interna de las diversas organizaciones provinciales. Tan sólo de algunas de ellas hemos podido trazar su evolución política y organizativa a lo largo de la época estudiada (1).

(1)

Unicamente con un análisis exhaustivo de la prensa provincial podría abordarse dicha evolución en todas las provincias, pero ello queda fuera de las posibilidades de esta investigación, a la espera de estudios monográficos de ámbito provincial.

1. ORGANIZACION LOCAL

ORGANIZACION LOCAL

El grupo local de Madrid aprobó su reglamento en dos asambleas, el 25-9 y 1-10-31 (1).

Este reglamento, editado por la organización del partido, fue adoptado posteriormente por organizaciones locales de toda España.

Suponemos que se generalizaría sin dificultad, tanto por la actitud favorable a ello de la dirección al imprimirlo (constituía una manera de homogeneizar el funcionamiento del partido), como por el hecho de que ahorra a las agrupaciones locales el tener que elaborarlo ellas.

Con todo, muchas agrupaciones locales contarían con su propio reglamento, que en algunos casos fue substituido por el de Madrid, como en la localidad castellonense de Burriana.

A pesar de que el reglamento de 1931 de esta agrupación (que adoptaría el madrileño en julio de 1933)

(1)

Boletín de información ..., nº 6, p. 994. Texto en ap. I, 1 b.

es un ejemplar aislado y no puede considerarse representativo, vamos a analizarlo brevemente por ser un texto elaborado independientemente por una agrupación local y para compararlo con el general en Acción Republicana (1).

El reglamento de Burriana de 1931 (2) atribuye el papel fundamental al comité directivo, reduciendo al mínimo en un partido democrático las funciones de la asamblea general, a la que denomina junta general. El comité, compuesto de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y tres vocales, tenía las funciones habituales de dirección (hacer cumplir el reglamento y las decisiones que se adoptasen) así como las tareas presupuestarias. El comité, elegido por la Junta general por dos años se renovaría por mitad anualmente. Se debía reunir con una periodicidad mínima quincenal. El presidente recibía las atribuciones directivas y ejecutivas usuales.

Su importancia resalta al analizar el régimen establecido para las Juntas generales. Sólo se preven cuatro juntas generales ordinarias al año para "rendición de cuentas". Aunque también podían celebrarse juntas extraordinarias con un orden del día distinto por decisión del comité, de su presidente o a petición de diez socios, el hecho de que las asambleas ordinarias de socios se limitase al control económico cuatro veces al año, y con un sistema de debates enormemente restrictivo (tres turnos a favor y tres en contra para la discusión de un asunto)

(1) Hemos localizado por ejemplo los reglamentos de tres localidades de la provincia de Castellón, una de las que se han conservando más documentos en el AS: el de Ludyente (fechado el 1-2-33), Los Calpes (15-4-33) y Bu-
rriana (8-7-33).

(2) Vid. ap. I, 1 b

convierte el funcionamiento del grupo en poco más que en el pro
pio de un partido de cuadros, equiparable al de las organizacione
nes de tipo mixto a las que nos hemos referido anteriormente.

Habría que añadir respecto a los socios que se exige una edad mínima de 18 años, una cuota anual de al menos seis pe
setas y "ser de buena conducta, tener profesión y domicilio cono
nocido", así como "declarar su adhesión a los ideales democrático
cos, aceptando la República como única forma de gobierno".(art. 4).

Como muestra de la ideología y concepciones del parti
do es interesante también reseñar los dos primeros artículos, so
bre el "objeto" del mismo: "Este Partido es esencialmente Democr
crático tanto en lo social como en lo político" (art. 1) y "Este
te Partido en todos sus actos políticos, buscará y aceptará siem
pre los pactos con sus afines, siempre que de salvar la República
ca se trate" (art. 2).

Los artículos citados muestran el carácter combativamente
te republicano y su pretensión de progresismo social y de firmeza
za democrática, no especialmente destacada en lo que a funcionam
miento interno se refiere, muy distinto del reglamento madrileño que tratamos a continuación.

Como ya dijimos el reglamento de Madrid no era en modo alguno preceptivo que lo adoptasen todas las agrupaciones loca
les de AR. Las agrupaciones locales podían, en asamblea extraord
dinaria, elaborar sus propios reglamentos y modificarlos cuantas veces quisieran. Bastaba con ajustarse a las prescripciones de los Estatutos generales y los reglamentos provinciales del par-

tido. El art. 25 del reglamento que ahora analizamos establece en consecuencia el procedimiento citado de una asamblea extraordinaria convocada al efecto para su reforma.

En los artículos referidos a la asamblea local se percibe ya una regulación diferente al reglamento anteriormente comentado. Hallamos en primer lugar una definición dogmática de los grupos locales: "De acuerdo con el principio democrático del Partido, la Asamblea local de -- que constituye uno de los Grupos o núcleos primordiales del mismo, de los que dimana toda autoridad, estará constituida por cuantos afiliados existen en la localidad..."

Se acepta un radicalismo democrático como principio organizativo: la autoridad dimana absolutamente de los afiliados: los sucesivos órganos directivos, emanados de elecciones directas o indirectas derivan su autoridad de la base del partido. Es importante que explícitamente se afirmen tales convicciones democráticas en la letra de los reglamentos, pues un primer elemento que favorece el que se cumpla efectivamente en la práctica.

Los Estatutos, al indicar que los consejos directivos de todos los escalones del partido quedan sometidos a la autoridad de las asambleas respectivas, confirman esta soberanía democrática de la base.

Más determinante es desde luego el que se establezcan reuniones mensuales de las asambleas como periodicidad ordinaria, periodicidad que los Estatutos dejaban indeterminada. Las

reuniones mensuales significan una continuidad en la actividad política de los socios propia de un partido de masas, en la medida en que efectivamente se cumpla. Este punto es por supuesto difícil de verificar sin estudios de la prensa local. En base a los datos que nosotros hemos podido recoger, la impresión es que efectivamente las agrupaciones locales se reunían con regularidad. De todas formas la situación debía variar considerablemente de unas provincias a otras y estar en función de la fuerza y tradición no ya sólo del partido, sino incluso del republicanismo de antes de la República de izquierdas, ambos datos por lo demás íntimamente correlacionados.

Podemos afirmar que el grupo madrileño se reunía todos los meses, apareciendo puntualmente la convocatoria en toda la prensa republicana; sin embargo tan solo se había debatido algún tema especialmente interesante reseñaban después el desarrollo de la reunión. No es desde luego representativo el grupo de Madrid, tanto por su número como por su carácter militantemente izquierdista dentro del partido. También el grupo local de Pontevedra parecía reunirse regularmente, tal como puede constatarse en El País, diario oficioso en esa provincia de AR.

En los pueblos pequeños la situación debía ser sumamente variable, y muy posiblemente muchas agrupaciones llevaban una vida lánguida. En un pequeño pueblo de Castellón del que se ha conservado el libro de actas del comité local, -Sierra Engarcerán (1) tan solo dos veces al año se reunía la junta general

(1) Por lo general eran los partidos quienes enviaban las reseñas, apareciendo a veces varios días después de celebrada la reunión.

de socios, sin que parezca que se acogiesen al reglamento elaborado por los madrileños. Tampoco puede considerarse este ejemplo como representativo, aunque no se puede esperar que la vida política partidista en un pueblo fuese semejante a la de una ciudad de importancia. El carácter más personalizado de las actividades políticas hacía quizá innecesario el reunirse formalmente para discutir políticamente. Por lo demás en dicho pueblo el comité se reunió con gran regularidad semanalmente al comienzo y luego más espaciadamente (1).

Es posible también la convocatoria de la asamblea por el Consejo local o por el 10% de los afiliados (9). El procedimiento de discusiones pierde toda rigidez ("el corriente en esta clase de discusiones"). Respecto a las atribuciones se remite a los estatutos generales.

De acuerdo con éstos corresponde a las asambleas la elección del consejo local y de los delegados para las asambleas provinciales. Aprobar las cuentas y balances y en general controlar al consejo aprobando o censurando su gestión. Decidir las cuestiones relativas a los afiliados. Designar los candidatos a concejales, y "en su caso", a diputados provinciales y a Cortes, controlando y orientando la gestión de dichos cargos. (art. 24).

(1) En AS, Castellón, C-99.

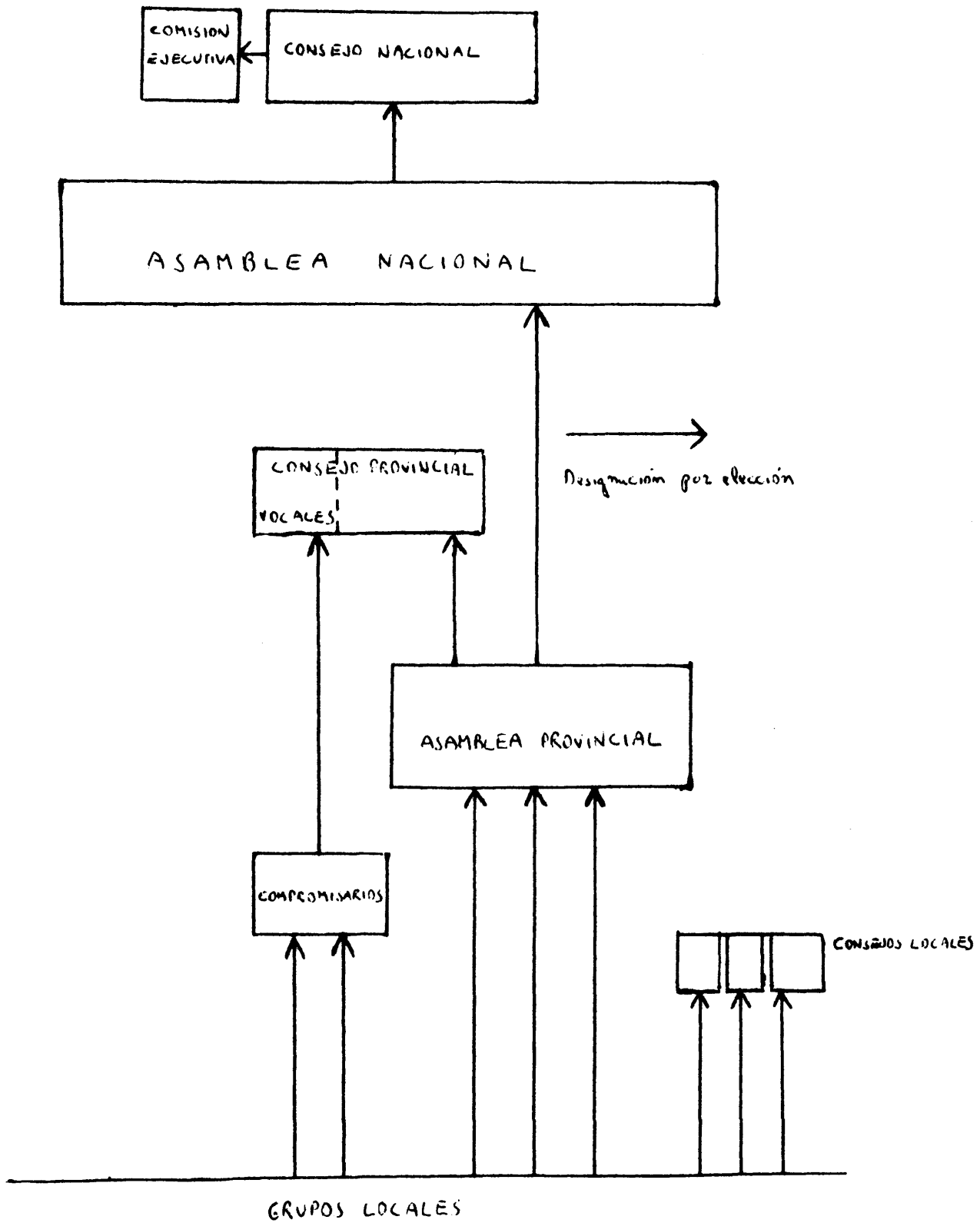
(2) En el reglamento de Madrid se exigía una cifra absoluta de miembros, 50. (art. 19). En el texto editado para que lo adoptaren los restantes grupos locales se substituyó por ese porcentaje del 10% de socios, más razonable dada la enorme variedad existente en el número de afiliados de las agrupaciones locales.

La precisión respecto a los diputados provinciales parece deberse a un doble motivo. El primero que en los casos de las capitales que constituían circunscripciones electorales autónomas, dicha designación correspondía lógicamente a las agrupaciones locales respectivas. Y en segundo lugar, a que en los restantes casos se trata de una atribución subsidiaria para cuando no exista organización provincial, o como mucho es una atribución concurrente con la asamblea provincial, órgano que en definitiva es el decisorio puesto que los diputados a Cortes corresponden a su ámbito territorial. Por lo demás lo que hacen tanto las asambleas locales como las provinciales es una propuesta al Consejo nacional (art. 25) (1)).

El consejo local, elegido por la asamblea en votación directa y secreta es definido como encargado de la gestión administrativa y de gobierno y como organismo ejecutivo de la asamblea local. Se componía de nueve miembros, presidente, dos vicepresidentes, secretario, tesorero, y cuatro vocales (los estatutos exigían primero un mínimo de tres, y tras la reforma de 1933, de cinco) y se renovaría por mitades cada dos años. Se había de reunir por lo menos dos veces al mes con carácter ordinario, y de forma extraordinaria a propuesta del presidente o de tres miembros del consejo.

(1) Una formulación incorrecta en el primitivo texto de los estatutos originó una rectificación en la reforma de 1933. En efecto al establecer que las asambleas locales podrían designar "en su caso" los candidatos a diputados a Cortes no se especificaba que era tan sólo una propuesta al Consejo nacional, precisión que si se hacía en cambio al atribuir dicha competencia a las asambleas provinciales. En 1933 se reformó el artículo 24 en el sentido de especificar el carácter de propuesta que tenía asimismo la designación por las asambleas locales de los candidatos a Cortes.

ORGANIGRAMA DE ACCION REPUBLICANA



Respecto a las facultades del consejo el reglamento se remite asimismo a las estipuladas en los Estatutos generales, añadiéndoles de forma genérica aquellas que se le encomendasen por la asamblea local y la de tomar resoluciones por razones de urgencia que serían ejecutivas provisionalmente hasta tanto no fueran refrendadas por la inmediata asamblea local.

En los Estatutos generales se dedican cuatro artículos a los consejos locales. El artículo 7 es el referente a las facultades del consejo. A lo largo de nueve apartados se le atribuyen la dirección política de la agrupación, la gestión económica y administrativa, mantener una relación constante con el consejo provincial y actuar de máximo organismo ejecutivo en la localidad velando por la aplicación de Estatutos y reglamentos, así como de las decisiones adoptadas por las diversas asambleas del partido.

También se encomienda al consejo local con arreglo a sus posibilidades, la creación y fomento de instituciones "que tiendan no solamente a favorecer las aspiraciones políticas del partido, sino también a los intereses generales de la cultura y del progreso social" (art. 9).

Conviene señalar también que los Estatutos remiten directamente al Consejo nacional los conflictos que pudieran surgir entre los consejos provinciales y locales

En los restantes artículos del título III relativo al consejo local el reglamento especifica detalladamente las funciones administrativas de los diversos miembros del consejo. Son de

interés aquí tan solo las del presidente, al que se le atribuye la responsabilidad de dirección y control general "ejecutando y haciendo cumplir todo lo establecido en Estatutos y Reglamentos, así como los acuerdos de la Asamblea Local".

Algunos puntos más debemos comentar del reglamento lo cal. En primer lugar los términos del artículo 1, único del Título denominado "Finalidad política de "Acción Republicana", y que refleja ese mismo republicanismo ferviente y socialmente progresivo que veíamos en el reglamento de Burriana: "Con el nombre de AR queda constituida en --- una entidad local de carácter político que actuará con arreglo a las normas generales que determina la organización nacional a que pertenece y cuya finalidad es la defensa de la República como forma de Gobierno de España y la aspiración a que las leyes Fundamentales de ésta y los actos de sus gobernantes, cumpliendo la ideología que en las Asambleas Nacionales se fije, desenvuelvan los principios de justicia y política social".

En lo relativo a los afiliados es interesante resaltar que el reglamento reservaba la atribución a los grupos locales de privar del derecho de voto a los afiliados con posterioridad al 14 de abril hasta pasados seis meses de su ingreso, y del de ostentar cargos públicos o representativos hasta los dos años desde el momento del ingreso con estatutos aunque reservaban a las asambleas locales de admisión de socios, no hacía referencia a estas limitaciones. Tal peculiaridad se debe al movimiento de defensa que ya habíamos comentado, general entre los partidos republicanos ante la avalancha de ingresos de los primeros meses

de la República con el fin de intentar conservar su homogeneidad política e ideológica y desanimar a los arribistas. Fue un tema debatido como se recordará en la Asamblea nacional de marzo de 1932. Se establece sin embargo una gran flexibilidad pues se exceptúa de esta limitación a quienes demostrasen haber pertenecido a la FUE o a cualquier partido antidinástico y asimismo a quienes por excepción se la levantase la asamblea local a propuesta del consejo.

La admisión de afiliados, que habían de ser mayores de 18 años, quedaba sometida primero a un plazo de 15 días por si algún afiliado presentaba objeciones tras el cual el consejo podía acordar provisionalmente el ingreso y luego a la decisión definitiva de la asamblea. Se perdía el carácter de miembro por renuncia, ingreso en otro partido, falta de pago de tres cuotas y por sanción reglamentaria. En este último caso se añadía, "a la baja debe acompañar la renuncia y el cese en los cargos que por elección popular desempeña por designación del Partido". Naturalmente esta previsión no pasaba de ser un intento de compromiso de honor con los afiliados para que actuasen así en caso de darse tal situación, pues legalmente no había forma de obligar a nadie a dimitir. Es cierto que en algunos casos sí era posible forzar dicha dimisión, por ejemplo en las corporaciones locales o provinciales, cuando el número de votos de que dispusiera el partido fuese mayoritario o parte imprescindible de la mayoría.

Los fondos de los grupos locales se basaban en tres tipos de ingresos. Sólo el primero, las cuotas de los afiliados,

tenía carácter de regular. Se citaban además las cuotas extraor
dinarias acordadas voluntariamente por la asamblea y las dona-
ciones de afiliados o cualquier otro tipo de ingresos.

Tiene interés el que se dedicase un artículo (el 24)
a aconsejar que el grupo local tuviese un órgano de prensa, o
en su defecto que cooperase a que el partido poseyese un periód
ico oficial. Era la eterna preocupación que obsesionó con ra-
zón a los dirigentes de AP y más en general a los republicanos
de izquierda, de contar con prensa adicta no sometida a los
avatares financieros de la prensa republicana.

2. ORGANIZACIÓN PROVINCIAL

ORGANIZACION PROVINCIAL

La organización provincial quedaba regulada en AR por los artículos de los Estatutos referentes a los órganos provinciales y por el reglamento provincial. Con este no se produjo la adopción del reglamento madrileño por la mayoría de las provincias , quizá por el hecho de que la organización madrileña tardó más de un año desde que se aprobaron los Estatutos en elaborar su reglamento, pues no lo hizo hasta diciembre de 1932 (1).

Hemos localizado también el reglamento de otra provincia, de Castellón, aprobado en mayo de 1932(2). El contar con dos reglamentos provinciales nos permite comprobar, por encima de diferencias accesorias, cual era el esquema organizativo de las organizaciones provinciales. La razón de la semejanza entre estos dos reglamentos (y asumimos que con los de las restantes provincias) es clara, pues debían basarse en los artículos pertinentes de los Estatutos.

Por lo demás ambos se inspiran en el reglamento local aprobado por Madrid, repitiendo literalmente algunos artículos. No hay que descartar tampoco la posible influencia de uno sobre el otro, pues la asamblea madrileña tendría a la vista el de Castellón a la hora de redactar el suyo, así como es probable que las organizaciones provinciales que aprobasen su reglamento con posterioridad utilizasen los ya vigentes.

-
- (1) *Boletín de inf...*, nº 6 p.992. El reglamento consta de 36 artículos de los que sólo reproducen 16, y fue aprobado en la asamblea provincial extraordinaria de 3 de diciembre de 1932.
- (2) Aprobado en la asamblea provincial extraordinaria de 29 de mayo de 1932 y presentado al Gobierno civil de la provincia el 28 de junio, a los efectos del art. 4 de la ley de Asociaciones vigente entonces.

Del reglamento madrileño no contamos con el texto completo sino tan solo con aproximadamente la mitad de los artículos, es entre ellos se encuentra lo más importante de la regulación, lo relativo al consejo provincial y a la asamblea.

Los artículos referidos a los afiliados -solo conocemos los del reglamento de Castellón-, al reglamento local y en ambos casos integran el Título II. Pero ahora los afiliados no son individuos sino grupos locales. Exceptuadas por tanto las disposiciones aplicables tan solo a personas físicas, el resto (cauces de afiliación y de baja) coinciden. Ello nos fuerza a deshacer el posible equívoco de considerar que estamos en presencia de un partido indirecto, cuyos componentes eran los partidos locales. La peculiaridad de tratar en el reglamento provincial a los grupos locales como afiliados individuales tiene que ver simplemente con el hecho de que era frecuente en el periodo de constitución del republicanismo de izquierdas el que agrupaciones locales republicanas ya constituidas, a veces de carácter no exclusivamente político, núcleos que constitúan "el partido republicano" de la localidad, las más de las veces como ya hemos visto ligados de manera laxa al partido radical, se adhiriesen a uno u otro de los nuevos partidos republicanos que iban surgiendo. Se ofrecía así un cauce de integración que respetaba bastante la autonomía del grupo que se adhería, sin intervenir en su vida interna salvo el hecho de quedar sometido a la disciplina política del partido y a los estatutos generales y reglamento provincial, que organizativamente permitían una amplia autonomía y eran impecablemente democráticos.

De acuerdo con los principios que informan los estatutos, la asamblea provincial es el máximo órgano de su ámbito territorial. Las asambleas se componían de una delegación por grupo local, delegación que los reglamentos, tanto de Madrid como de Castellón especificaban que fuera de dos miembros, más el consejo provincial en pleno. Los estatutos la definen como "el organismo fiscalizador de la labor del Consejo provincial" y como "el contacto inmediato de las fuerzas organizadas del partido en cada provincia para adoptar las normas conducentes a una eficaz organización política". (art. 25). Su autoridad por lo tanto se impone a los grupos locales, como explícitamente afirma el reglamento madrileño ("fiscalizar la labor de los consejos locales"), y su labor de dirección no hay que entenderla limitada a cuestiones meramente organizativas, sino que se extiende a la política provincial (1).

Las atribuciones conferidas a la asamblea provincial confirman esto con toda claridad. En primer lugar la ya citada de dirección política y de control de los consejos provincial y local -más expresamente señalada tras la reforma estatutaria de 1933-. Y después la designación -por votación- de los candidatos a diputados provinciales y a título de propuesta al CN de los diputados a Cortes.

(1) Que en el reglamento madrileño se repite además de en el artículo que contiene las facultades de la asamblea, en el referido a la convocatoria de las asambleas ordinarias, en las cuales "se examinará la conducta del Consejo, el estado de cuentas, el movimiento del partido en la provincia y todas las proposiciones de interés general para la organización provincial" (art. k); dado que los 16 artículos reproducidos no indican numeración, los ordenamos con la letras del alfabeto a efectos de citas). El art. 26 reformado en 1933 afirmaba explícitamente entre sus atribuciones. "Dirigir la política provincial".

Respecto a estos últimos ya vimos como también las asambleas locales podían elaborar propuestas de candidatos, aunque con carácter subsidiario o por lo menos no forzoso -salvo en las capitales que constituyeran circunscripción electoral propia-. En el reglamento madrileño se articula esta facultad concurrente, estipulando que las candidaturas elaboradas por los grupos locales deberían obrar en la secretaría del consejo provincial con diez días de antelación a la asamblea provincial. Así pues se subordinan explícitamente las candidaturas de los grupos locales a la decisión de la asamblea provincial, eliminando la ambigüedad de una posible relación directa de los grupos locales con el Consejo nacional. En la práctica, cuando había organización provincial, era su asamblea la que elaboraba dichas candidaturas; en ellas los delegados locales defenderían eventualmente los candidatos decididos por sus agrupaciones. Además, hasta nuestras manos ha llegado alguna instrucción de consejos provinciales ordenando que toda comunicación con la organización central pasase reglamentariamente por la secretaría provincial.

Por supuesto a la asamblea competía asimismo la elección por sufragio directo y secreto del consejo provincial, excepción hecha de los vocales elegidos por las organizaciones locales de cada partido judicial. También era competencia de la asamblea la designación del representante provincial en las asambleas nacionales.

Los Estatutos no especificaban periodicidad alguna a las asambleas provinciales, dejándose por lo tanto la cuestión al reglamento (1). De los dos que tenemos, el de Madrid establece dos asambleas ordinarias anuales, en enero y junio, mientras el de Castellón exigía tan solo una anual, sin especificar fecha. Podían convocarse asambleas extraordinarias por decisión del consejo provincial, o en el caso madrileño también la tercera parte de los organismos locales de la provincia (2).

En la práctica si las asambleas se convocaron con cierta frecuencia, pues aparte cualquier otro problema político que pudiera surgir a nivel provincial, las elecciones de los diversos tipos de representantes encomendadas a la asamblea provincial podían ocurrir en cualquier momento del año.

Una importante modificación respecto al funcionamiento de la asamblea provincial se produjo en la reforma de 1933. Pues si antes no se hacía ninguna discriminación a la hora de votar entre los delegados de los grupos locales, ahora se atribuye un voto a cada delegación local, excepto cuando su censo de afiliados excediera de 500 en cuyo caso contarían con un voto por cada 500 socios o fracción de éste número. Tiene su importancia puesto que era una forma de restablecer el equilibrio

(1) Aunque de forma indirecta se exige una reunión mínima anual, al tener que designar el representante de la provincia en la Asamblea nacional.

(2) En el reglamento de Castellón la remisión al artículo 11 parece exigir para la convocatoria extraordinaria de la asamblea provincial los requisitos necesarios para una reunión extraordinaria del propio consejo provincial, esto es que lo solicitara el Comité ejecutivo del Consejo o la mitad más uno de los miembros del pleno.

de fuerzas real a favor de las localidades numerosas, principalmente las capitales de provincias, que serían de las pocas que superarían dicho número de afiliados.

Como conclusión respecto a la asamblea provincial podríamos calificarla de órgano soberano del partido en su ámbito territorial, como en el local lo es la asamblea local, aunque con una finalidad más de orientación de las líneas generales de la política provincial que de discusión periódica de ésta, dada la periodicidad anual o semestral de sus reuniones. Es decir, que se acerca más a la naturaleza de la Asamblea nacional, también de periodicidad anual y máximo órgano soberano del partido que a la local, que con sus reuniones mensuales podía seguir de cerca la política y tener una función de discusión ideológica constante. Conforme se asciende de nivel los órganos ejecutivos cobran más relevancia política en comparación con los asamblearios.

En cuando al consejo provincial Los Estatutos, al igual que a los consejos locales, le califican de organismo ejecutivo sometido al órgano deliberante de su nivel, de asamblea provincial, los reglamentos provinciales precisarán más de finiéndole como órgano ejecutivo de la Asamblea provincial y encargado de la gestión administrativa y de gobierno del partido provincial. Su composición era de un Presidente, dos vicepresidentes, secretario y vicesecretario, tesorero, contador y un vocal por cada partido judicial. Estos vocales serían designados por los delegados de los grupos locales del partido judicial respectivo según el reglamento madrileño; estos delegados

tendrían a la hora de elegir su vocal, un voto por cada veinte afiliados con que contase su grupo, necesitándose mayoría absoluta de votos para la elección, así como para su eventual cese (art. d).

Por último y al igual que en la asamblea provincial se introdujo una desigualdad de representación a favor de los grupos locales más numerosos, también éstos tendrían a partir de la reforma de octubre del 33, además de la representación que les correspondiese en el consejo por el partido judicial, un representante cada quinientos socios o fracción de este número (1).

Los cargos del consejo provincial eran compatibles con los de los consejos locales (art. 11 de los estatutos).

Como atribuciones expresas del Consejo provincial, el artículo 12 de los estatutos le encomienda la resolución de las solicitudes de los grupos locales dentro de su competencia y el velar por la disciplina y buena organización del partido en la provincia, proponer las medidas que considere oportunas al Consejo nacional, el remitir a éste mensualmente la relación de altas y bajas y el 25% de la recaudación por cuotas de los grupos locales, y la convocatoria de las asambleas provinciales, tanto ordinarias como extraordinarias como ya dijimos (2).

(1) Art. 11 reformado.

(2) Estas atribuciones se repiten con pocas o nulas variaciones en los reglamentos. Como veremos al tratar de la financiación del partido, en la reforma estatutaria del 33, el tanto por ciento de la recaudación a remitir al CN se redujo a un 20%.

También se le hace una atribución genérica de facultades, encomendándole las que la asamblea provincial de y con carácter provisional las que el consejo considerase necesarias a expensas de ser refrendadas por una posterior asamblea provincial (1).

Al presidente del Consejo provincial se le encarga expresamente de la vigilancia sobre todos los grupos locales, en orden a ejecutar y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos así como los acuerdos de la asamblea provincial. En los restantes artículos dedicados al consejo provincial se especifican las atribuciones de los restantes cargos del mismo (2).

Al igual que los consejos locales, el provincial se renueva por mitad cada dos años, ostentando por lo tanto cada consejero su cargo por un espacio de cuatro. Las vacantes que por cualquier causa se produjeran eran cubiertas tan solo para el tiempo que le restase en el cargo al substituido.

Menos los vocales, designados como se ha dicho, los restantes componentes del consejo eran elegidos por votación directa y secreta en asamblea provincial. Según el reglamento castellonense, estos siete miembros constituían el comité ejecutivo del consejo provincial, y había de reunirse quincenalmente por lo menos. A los vocales, que junto con aquéllos constituían el pleno, se les atribuye simplemente una misión fiscali-

(1) Según el art. 12 del reglamento de Castellón. Dado que el texto que tenemos del madrileño es incompleto, desconocemos si incluían un artículo semejante, aunque es probable que así fuera.

(2) Respecto a todos estos artículos vale lo dicho en la nota anterior.

zadora, debiéndose reunir el pleno un mínimo de cuatro veces por año. En cambio el reglamento madrileño estipulaba que el consejo en pleno se había de reunir en los diez primeros días de cada mes (1).

Mientras al presidente del consejo se le encomienda la dirección del partido, al secretario (2), aparte de otras tareas más de trámite, se le encarga de la importante función de "organizar los trabajos políticos del partido provincial", siguiendo las instrucciones del consejo. Hay pues un deslinde entre presidente y secretario, dándole a éste un carácter más organizativo y al primero de dirección superior y responsabilidad.

Por último, a nivel provincial se crea -en los Reglamentos de Castellón- un organismo organizativamente importante e inexistente a nivel local, y que deja bien claro que la importancia atribuida a la organización provincial dentro de los esquemas orgánicos del partido. Se trata de la secretaría administrativa, a cuyo frente se ponía a un secretario administrativo retribuido (3).

(1) Arts. 11 y 9 respectivamente.

(2) Vid. nota pág. anterior nº 1

(3) Vid. nota pág. anterior 1; sin embargo creemos que este organismo es más improbable que fuera adoptado por la organización madrileña, dado que fue pensado *ex novo* por la organización de Castellón, y no se inspira en los Estatutos. Todos los artículos citados a partir de ahora hacen referencia al reglamento de Castellón.

Analizando las funciones que expresamente se le atribuyen a la secretaría podemos extraer interesantes observaciones respecto a la naturaleza, de un partido político que aspirase en los años treinta a representar a las clases medias y populares en unión de la intelectualidad progresista como lo era Acción Republicana.

No son por supuesto las funciones propias de toda secretaría las que llaman la atención, tareas como llevar los ficheros de socios, correspondencia entre centros locales y, regional y nacional, asuntos internos de trámite o realizar las gestiones políticas que le encomendase el secretario político por acuerdos de los órganos de dirección correspondientes. Lo que nos interesa resaltar son los apartados b) y d) del artículo 19, -en el que se detallan todas las atribuciones-, en los cuales se encomienda a la secretaría de "cuantas gestiones particulares le sean encomendadas por mediación de los Comités Locales que redunden en beneficio de sus afiliados, tales como pasaportes, licencias de caza, certificados, etc. etc." y también de "acompañar a los Centros Oficiales a los individuos y comisiones de los pueblos que lo soliciten por conducto del Comité Local correspondiente".

Como podemos comprobar, a través de los pocos libros de actas que han llegado a nuestras manos de diversos comités locales o provinciales, dichas tareas eran efectivamente desempeñadas y otras similares como intentar proporcionar trabajo utilizando los cargos de que se disponía en las corporaciones municipales y provinciales. En una sociedad de baja cultura, con

una profunda crisis económica y social, un partido podía desem
peñar si tenía arraigo una verdadera función tuitiva de sus
miembros o simpatizantes, orientándoles en sus relaciones con
la burocracia oficial y a veces en problemas como el laboral,
que en el aspecto individual escasamente es una tarea de un par
tido político en la actualidad. Ni que decir tiene que hoy día
se concibe menos todavía que una secretaría provincial de un
partido se encargase de resolverle a uno de sus militantes la
obtención de un certificado de cualquier tipo, de un pasaporte
o de acompañarle a un Gobierno Civil a resolver cualquier asun
to particular.

El que oficialmente un partido reconociese como suyas
esas tareas es creemos un índice de la conciencia de la enorme
indefensión de amplias capas de población de escasa o nula cul-
tura frente a un aparato estatal tradicionalmente hostil, en
una sociedad sumamente atrasada y de unas enormes diferencias
de clases en esta sociedad cual todas estas clases medias y po
pulares habían desconocido en gran medida sus derechos y la po
sibilidad de exigirlos antes de la instauración de la Repúbli-
ca. Los avances sociales de ésta, la legislación laboral, etc.,
ofrecían una serie de cauces que para ser debidamente utiliza-
dos exigían una labor formativa muy amplia y en la que además
de los sindicatos, organizaciones encargados más específicament
te de esta tarea, también un partido político como AR ofrecía
posibilidades para cooperar en esa función asesora.

Ni que decir tiene que lo de menos es aquí la efica-
cia de dicho ofrecimiento. Esto dependía de la fuerza del parti

do en la región que fuera. Lo que queríamos resaltar es lo que esos apartados significaban como tareas de un partido político. Es de suponer que conforme creciese un partido, más importante sería esa labor educacional y asesora en materias no estrictamente políticas, labor parecida -salvando las distancias- a ese localismo de los partidos americanos en los que el *boss* se encarga de resolver muchas de las papeletas que sus electores tienen en sus relaciones con la Administración. Por lo demás y como antes dijimos, en las provincias como Vizcaya, Valencia o Castellón de las que hemos conservado libros de actas, hay indicios de que en efecto y a pesar de ser AR un pequeño partido, las disposiciones que comentamos no eran letra muerta.

El personal de la secretaría administrativa, si bien no se le exigía pertenecer a AR, cesaría en su cargo en caso de afiliarse a otro partido. Respecto al secretario, su designación correspondía a la asamblea provincial; tendría voz pero no voto en las reuniones del consejo provincial, y no era incompatible con la condición de miembro de dicho consejo. La designación del resto del personal de la secretaría se hacía por el consejo a propuesta del secretario administrativo y previa conformidad del consejo provincial. El secretario dependía de la secretaría política, del partido provincial y del consejo provincial (art. 28), y aparte la labor general de dirección de la secretaría debía asesorar al secretario político y al consejo provincial en todos aquellos asuntos para los que fuera requerido que afectasen a la marcha política y administrativa del partido (art. 29).

En realidad desconocemos en cuantas provincias se llegó a deslindar el cargo de secretario administrativo de las tareas del secretario político del consejo. Indudablemente es un desdoblamiento pensado para el caso de un exceso de trabajo del secretario del consejo provincial, que no creemos que se diera en muchos casos. Lo más frecuente debía ser que el personal de la secretaría administrativa fuese el personal a disposición del secretario para el desempeño de sus tareas tanto políticas como administrativas, acumulando él ambas facetas.

Por encima de las organizaciones provinciales se admite en los estatutos la posibilidad de un organismo, el consejo regional. La redacción del artículo (el 13) parece presuponer que se habrían de constituir necesariamente "cuando se organicen...", aunque sin indicar plazo.

Se habrían de componer de representantes de las provincias afectadas, atribuyéndoseles las funciones que estas desearan, siempre que no se invadieran las competencias del Consejo nacional. Es por lo tanto un órgano de autoridad delegada de las provincias, presumiblemente ideado para la coordinación de la política en una región, y que no tiene competencias propias, sino las que voluntariamente le cediesen las organizaciones provinciales por unanimidad. Parece por tanto que su creación debía ser iniciativa de estas, más que de la dirección nacional.

No se llegó a constituir ningún consejo regional durante la existencia de AR, ni siquiera en regiones en las que había movimientos en pro de un estatuto de autonomía más o me-

nos decididamente apoyados por AR, como Galicia, el País Vasco o en menor grado la Región Valenciana. No hay que confundir por otra parte estos consejos provinciales que no llegaron a existir con el PCAR (Partit Catalá D'Acció Republicá), que era un partido autónomo con una estructura orgánica propia, y que prescindía de las organizaciones provinciales, substituyéndolas por otras de ámbito comarcal.

3. ACCIÓN REPUBLICANA EN LAS PROVINCIAS

ACCION REPUBLICANA EN LAS PROVINCIAS

Vamos a examinar los datos fragmentarios que poseemos respecto a la importancia y a las actividades de las organizaciones provinciales de AR. No podemos hacer por esa insuficiencia de datos que sólo estudios monográficos sobre la vida política provincial podrá paliar, un análisis de todas las provincias como sería nuestra intención. Nos limitamos por tanto a aquellas provincias y regiones de las cuales poseemos algún dato de interés; por supuesto dejamos al margen los datos de carácter electoral que hemos incluido en los capítulos dedicados a las diversas elecciones.

Estudiamos primero Cataluña y el País Vasco y luego por orden alfabético las 4 provincias de las que hemos localizado datos.

A. CATALUÑA. EL PARTIT CATALÀ D'ACCIÓ REPUBLICANA

CATALUÑA. EL PARTIT CATALÀ D'ACCIÓ REPUBLICANA

Es conocida la débil posición de los partidos no exclusivamente catalanes en Cataluña. La fácil crítica de ser partidos sucursalistas, poco interesados en los problemas específicos de Cataluña, no catalanistas en suma, los ha inutilizado con frecuencia como agentes políticos a lo largo de este siglo. Sin embargo las especiales características del mecanismo electoral republicano hacían que no bastase el ser partido autónomo e incluso con fuerza y tradición en Cataluña para alcanzar representación parlamentaria (considérese al respecto el hundimiento de partidos con raigambre catalana y con prometedoras perspectivas en 1930-31, como Acció Catalana); por ello no es claro hasta qué punto la escasa relevancia de ciertos grupos políticos en Cataluña durante la República (como el PCAR que nos ocupa) se debía a no ser específica o exclusivamente catalanes, a su posición política o a ambos factores.

A estas dificultades de la relación con los partidos catalanes se refiere Azaña en su diario, primero en relación con Acción Republicana y luego, tras la fusión con los radical socialistas, respecto a Izquierda Republicana, aludiendo a las protestas que recibía de sus correligionarios catalanes por la "sorda hostilidad" de la Esquerra para con ellos (1). Con nula

(1)

Azaña, OC. IV, pag. 660.

fe en su eficacia hizo a veces Azaña algunas gestiones sobre el problema cerca de los dirigentes catalanes, especialmente de Companys. Para colmo de males, los dirigentes de Acción Republicana en Cataluña, según Azaña, no debieron ser especialmente capaces, pues afirma que ni a Acción Republicana ni posteriormente a IR les acompañó la suerte en su elección (1).

Lo cierto es que los partidarios de Azaña en Barcelona y Cataluña prefirieron organizarse como partido autónomo con nombre propio, que a efectos de la política española general siguiera por ejemplo la política y la disciplina de Acción Republicana, y que en lo específicamente catalán elaborara su propia política.

E. Isern Dalmau, uno de los fundadores, hizo unas extensas declaraciones a *El Sol* el 5 de junio de 1932 en las que se refería a la posición política del partido recientemente organizado: autonomía plena en la política catalana y política uniforme a la de Acción Republicana en el resto de España. Aprobado el Estatuto, decía I. Dalmau, ya no había razones para una política catalanista fuera de Cataluña, y por lo tanto había que concurrir al Parlamento adscritos a un partido nacional. Las diversas políticas en torno a los problemas catalanes se di

(1)

Azaña, *ibid.*

lucidarían en el marco catalán; tan solo en caso de opresión a los derechos y sentimientos catalanes se veía como positiva, una vez lograda la autonomía, la formación de un bloque catalán para actuaciones coyunturales en el Parlamento español.

La estructura organizativa del PCAR contaba con algunas variantes respecto a la organización de Acción Republicana en el resto de España. No contamos con ningún texto estatutario sino tan sólo con las explicaciones que el dirigente catalán antes citado dio al redactor de *El Sol*. En cada municipio habría comités locales con plena autonomía para la política municipal y para designar a sus representantes en el ayuntamiento.

Por encima de estos comités locales habría comités comarcales que substituirían a los provinciales; la vida catalana se estructuraría por comarcas naturales, y no en las cuatro provincias. Estos comités serían los que llevarían el peso de la política interior catalana.

Por último estaría un comité general, como órgano ejecutivo supremo del partido, al cual se le reservaba la designación de los representantes en el Parlamento español. Los que fuesen diputados en éste no podrían ser mayoría en dicho comité. Era sin duda una forma de garantizar la primacía de los puntos de vista catalanes, frente a la política, alianzas, etc.,

desarrolladas en Madrid (1).

Damos por descontado que a estos comités les corresponderían respectivamente asambleas de forma análoga al resto de Acción Republicana, sin que creamos que debiera haber excesivas diferencias en el funcionamiento interno del partido. La referencia exclusiva del dirigente catalán a los comités, creemos que hay que atribuírla exclusivamente a que al fin y al cabo son los órganos permanentes y representativos de un partido. Según el Sr. I. Dalmau, la organización interna del partido era "muy democrática".

El partido lo presidía D. Faustino Ballvé (quien llegaría a ser diputado por Izquierda Republicana con el Frente Popular (2).

Otros dirigentes del partido catalán fueron J. Gili Ferrán, Eduardo Albors, Eduardo Albert (3).

La fuerza del PCAR debió ser en todo momento muy escasa, y se debió limitar especialmente a Barcelona. En esta provincia parece que a comienzos de 1934 debía contar con 2.123

(1)

Mientras que la disposición análoga de los estatutos de Acción Republicana para el Consejo Nacional tiene por fundamento el someter a los parlamentarios a la autoridad del partido, en este caso el objetivo es garantizar la autonomía, pues Dalmau no alude límite alguno respecto al número de miembros del consejo que pudieran pertenecer al Parlamento catalán.

(2) *El Sol*, 5-6-32.

(3) Molas, *El sistema...*, pag. 72. El último de los citados, según *El Sol* de 13-12-32, era vicepresidente del PCAR.

afiliados (1).

En Vich contaban con un grupo local desde 1930 (2) y en Barcelona capital llegó a tener por lo menos 3 locales (3). En Tarragona donde el republicanismo simpatizante de los partidos nacionales siempre tuvo más fuerza que en el resto de las provincias catalanas, sobre todo por el núcleo que se se guía a M. Domingo (4), no disponía en 1933 de comité local ni provincial; en octubre de 1933 ofrecía Simó y Bofarull, líder de los Radicales autónomos de la provincia de Tarragona, a Giral, la unión de su grupo a Acción Republicana, siempre que se les respetasen determinadas condiciones de autonomía. La constitución de IR debió absorber a este grupo en caso de que no hubiese alcanzado previamente la fusión con Acción Republicana (5).

Dos semanarios editó Acción Republicana catalana: "Acción" en Barcelona, en 1932, y "El Pobre" en Hospitalet de Llobregat, en 1933 (6).

(1) *Boletín de información...*, nº 7, p. 187.

(2) *El Sol*, 24-4-30.

(3) *El Sol*, 24-7-32 y 9-8-32.

(4) Vid. Molas, *El sistema...*, p. 73.

(5) Carta de Simó y Bofarull a Giral de 15-10-33 (AS, Madrid-99, L.1125). En realidad la autonomía reivindicada por el dirigente catalán era un principio programático consubstancial con el PCAR. De todas formas sin conocer los estatutos del PCAR, no sabemos si la autonomía llegaba al punto de negar al Consejo Nacional de Acción Republicana toda posibilidad de rechazar los candidatos a Cortes designados por el PCAR, como solicitaba Simó y Bofarull.

Es necesario advertir también que el hecho de que no existiese comité

Como hemos visto al tratar de las elecciones legislativas al Parlamento español, el PCAR, así como los radical-socialistas catalanes tendieron a coaligarse electoralmente con Acció Catalana Republicana. También en las elecciones al Parlamento catalán (noviembre de 1932) se produjo una coalición de este tipo, aunque sólo en Gerona fue incluido en las listas un candidato de Acción, Isern Dalmau; alcanzó el cuarto puesto de la lista con 6.191 votos (6.704 - 4.366 eran las votaciones máxima y mínima de la lista con sólo siete candidatos) frente a los 36 mil - 27 mil de la lista triunfadora de la Esquerra.

Mientras que en Gerona los restantes candidatos eran de Acció Catalana, en Tarragona integraban la lista miembros del PCR, PRRS, federales y PSOE; en Lérida la coalición no presentó lista, y en las dos circunscripciones barcelonesas las integraron sólo candidatos catalanistas (1).

(5) cont. pág. anterior

local en la capital ni comité provincial, aunque es un índice indudable de debilidad, no implica que no hubiera otros núcleos locales organizados en otros pueblos de la provincia, como lo debía haber en Hospitalet de Llobregat, puesto que el PCAR editó allí el semanario *El Poble*.

(6) pág. anterior

Datos de Molas, *ibid.* No hemos podido localizar ninguna de las dos publicaciones.

(1)

Molas, *op. cit.*, p. 73 y 140 y ss.

Cataluña fue una de las regiones donde más tardíamente se constituyó IR (junio de 1935) (1), debido al parecer a obstáculos que suponemos se referirían a las relaciones entre radicales socialistas y PCAR, aunque al mencionarlos Azaña no especifica en qué consistieron tales conflictos (2).

(1) Molas, *op. cit.*, p. 73.

(2) Azaña, OC. IV, p. 660.

B. PAIS VASCO

PAIS VASCO

Hay que destacar que en el País Vasco y frente a lo que sucedió en Cataluña, no se llegó a establecer ninguna coor
dinación regional -prevista por los estatutos-; sin duda la causa residió en el atraso del proceso autonómico en el País Vasco, y en el reticente autonomismo de los republicanos vascos ante el carácter conservador del nacionalismo del PNV. Por ello nos limitamos a examinar brevemente la evolución de las provincias vascas, excepto Navarra de la que apenas tenemos datos.

En realidad, de ellas tan sólo tenemos datos organiza
tivos de interés en Vizcaya, al haberse conservado en el AS el libro de actas del comité local de Bilbao.

De Alava por ejemplo tan sólo sabemos que se consti
tuyó hacia marzo de 1932 (1), en la capital Vitoria.

En Guipúzcoa, en cambio, se creó en la capital en fe
brero de 1930 un núcleo de Acción Republicana, a partir de ele
mentos de la juventud republicana del partido republicano local. Tal constitución se hizo al parecer a pesar de los esfuer
zos del partido republicano (probablemente ligado al partido radical) por evitar que se independizase un sector de sus miem

(1)

El 18 de marzo del 32 recibió el comité local de Bilbao una carta de ofrecimiento del comité local de Vitoria con ocasión de la constitución de Acción Republicana.

bros, pretendiendo que constituyeran una sección dentro del mismo partido (1).

Sin embargo parece que no debió cuajar dicho grupo -quizás por la citada oposición del partido republicano- pues bastante tiempo después se volvió a hablar de la "constitución" de Acción Republicana en San Sebastián.

En efecto, dos años y medio más tarde, a mediados de octubre de 1932 se produjo una incorporación importante a Acción Republicana de un grupo organizado, la Unión Republicana Autonomista, la cual en reunión celebrada el día 16, decidió por mayoría disolverse y adherirse a Acción Republicana. Probablemente la UPA constituía todavía una organización al viejo estilo y no estaba adscrita a ninguno de los diversos partidos republicanos, optando en este caso por Acción Republicana. Así pues, la Acción Republicana donostiarra, cuya primera aparición en la ciudad derivaba asimismo de una escisión de los sectores más dinámicos del viejo partido republicano, engrosaba ahora sus filas con otros sectores republicanos de tradición en la ciudad (2).

Si su constitución había sido tardía, fue quizás una de las organizaciones provinciales que antes se fusionaron, en

(1) *El Sol*, 18-2-30 y 28-2-30. AS (Madrid), carta de Ramón Viguri (miembro de primera hora de Acción Republicana) a Eduardo Ortega y Gasset, comunicándole que Acción Republicana se acababa de constituir en San Sebastián con gran éxito absorbiendo a los anquilosados miembros del partido republicano. (Carpeta 1539, legajo 3. 091).

(2) *El Sol*, 18 y 21-10-32. Esta vez sí debió ser una constitución definitiva pues el comité local de Bilbao recibió el 13-11-32 una carta en la que se le notificaba la formación de la agrupación local de San Sebastián.

1934 en el nuevo partido de IP. En efecto, para finales de marzo de 1934, antes de la disolución a nivel nacional de los tres partidos que participaban en la operación, ya la habían acordado las respectivas organizaciones provinciales de Guipúzcoa, estando prevista la asamblea de constitución de Izquierda Republicana para el 27 de dicho mes. Lo más interesante es que en esta provincia iban también a la fusión los radical socialistas ortodoxos de Gordón Ordás, que se desgajaban de su organización nacional; asimismo se integraban numerosos partidos republicanos autónomos que hasta ese momento o bien se habían integrado en alguno de los partidos republicanos nacionales, o bien se habían mantenido independientes.

La vida de Acción Republicana en la provincia de Vizcaya parte de la integración al partido nacional de Acción Republicana del ya arraigado Partido Republicano Autónomo de Bilbao a comienzos de 1932. La prensa madrileña subrayó al recoger la noticia que el partido contaba con más de dos mil afiliados, lo que significaba una fuerza política considerable (1). El primer presidente del nuevo grupo local de Acción Republicana fue Fermín Solozábal.

A través del libro de actas del comité local se puede seguir la evolución de la agrupación bilbaina, aunque sin

(1) *El Liberal*, 22-1-32.

excesivo detalle, principalmente porque en la mayor parte de los casos no se alude al fondo de los temas en discusión. Pero si algo resalta son los continuos enfrentamientos y antagonismos personales entre los componentes del consejo que provocaron frecuentes dimisiones y posteriores asambleas extraordinarias para cubrir los cargos vacantes.

El consejo se organizó internamente en diversas comisiones: de Propaganda y Prensa, administrativa y de distritos (1).

Progresivamente se fue completando la estructura organizativa tanto a nivel local como a nivel provincial. El consejo provincial se debió constituir hacia mayor de 1932 (2). También por estas fechas se acordó por ejemplo crear delegaciones de distrito locales, siguiendo la división electoral y con funciones electorales; delegaciones que serían nombradas por el consejo local, con quien deberían estar en contacto los delegados nombrados (3).

(1)

En la reunión del comité de 15-2-32.

(2)

En la reunión del consejo local del 27-5-32 se remitió el problema de propaganda pro Estatuto al consejo provincial por ser materia de su competencia según se afirmó.

(3)

Reunión del consejo local de 30-5-32.

El reglamento local -que por varias alusiones a su articulado parece coincidir con el comentado más arriba- debía haber sido modificado en el sentido de espaciar más las asambleas ordinarias, pues se acordó en enero del 33 convocar una asamblea extraordinaria para modificar el art. 19 y establecer que se celebrasen asambleas ordinarias mensualmente (1), como efectivamente se acordó.

De todas formas, y esto es algo que debió ocurrir en más casos como consecuencia de acceder a la presidencia del consejo provincial en enero de 1933 E. Acha, éste comunicó a la inmediata asamblea provincial que las labores organizativas realizadas hasta ese momento por el anterior consejo provincial eran inexistentes, no existiendo libros, habiéndose desatendido la correspondencia, etc. Es decir que si a lo largo de estos tres años se fue completando formalmente el esquema organizativo previsto por estatutos y reglamentos, se fue iniciando si-multáneamente la práctica política interna del partido. Era necesario para ello que fueran surgiendo cuadros capaces que se dedicasen al partido de una manera más intensa que los antiguos prohombres del viejo republicanismo (que no eran sino "figuras" políticas conocidas, pero no hombres de partido).

De las discusiones políticas surgidas en el consejo local apenas se reseñó nada en las actas. De alguna de ellas

(1)

Reunión del consejo local de 11-1-33.

como la mantenida acerca del comportamiento del partido respecto al referendun sobre el estatuto de autonomía ya aludimos al tratar de esta cuestión anteriormente.

Fueron sin embargo frecuentes las asambleas extraordinarias para tratar problemas de índole política, como por ejemplo la del 21 de septiembre del 33 para decidir sobre la conveniencia de que Acción Republicana colaborase o no con el gabinete Lerroux (1).

En el proceso de fusión en Izquierda Republicana, tras algunas vacilaciones ante la propuesta de los radical socialistas de proceder a una fusión inmediata se siguieron las fechas del proceso nacional, procediéndose a la fusión después de la constitución nacional de IR (2). En relación con la fusión, el PRRSI y Acción Republicana hicieron un llamamiento a todos los partidos republicanos de izquierda españoles, acordando constituir una comisión mixta para dicha misión, en enero de 1934. Era una de tantas gestiones que tenían lugar en todas las provincias de forma paralela a las negociaciones que a nivel central llevaban los organismos directivos en Madrid, y que constituían indudablemente una presión para que éstos llegasen a un acuerdo definitivo (3).

(1) Libro de actas del consejo local, hoja 60.

(2) Vid. las reuniones del consejo local a partir de marzo del 34.

(3) Texto del llamamiento en ap. I 1b

Otro punto que hay que mencionar con respecto a la organización bilbaina de Acción Republicana es la ambigua situación del diputado a Cortes Aldasoro. Es indicativo del confusionismo que persistía en los nuevos partidos republicanos respecto a la formalidad de los lazos de afiliación a una organización política. Aldasoro perteneció durante toda la legislatura constituyente a la minoría radical-socialista, y como tal habría que considerarle políticamente. Sin embargo, en Bilbao se le consideraba perteneciente a la agrupación local de Acción Republicana. Sin duda esta situación provenía de que Aldasoro debía ser miembro del Partido Republicano Autónomo, de donde surgió Acción Republicana, y probablemente se le siguió considerando perteneciendo a ésta tras su constitución. Como consecuencia de su participación en algún acto radical socialista y suponemos que en general de su ambigua situación, se planteó la discusión sobre ésta en el consejo local de Acción Republicana. A pesar de las afirmaciones taxativas de algún miembro del consejo sobre su pertenencia a Acción Republicana, Aldasoro envió una carta en la que afirmaba encontrarse plenamente identificado con Acción Republicana pero que prefería no afiliarse para evitar suspicacias partidistas; en una conversación con un miembro del consejo provincial había afirmado asimismo que jamás había pertenecido al PRRS como afiliado. A pesar de esta preferencia por la independencia organizativa y de su encuadramiento parlamentario en la minoría radical socialista, en la Acción Republicana bilbaina se le siguió considerando como afiliado (1).

(1) Libro de actas, hojas 18 bis, 39, 48 bis, y 51 bis.

Algunos datos sobre Acción Republicana en Vizcaya

Presidentes de los consejos locales de Bilbao y del consejo provincial de Guipúzcoa. (Entre paréntesis, las fechas de nombramiento).

Consejo local de Bilbao:

Fermín Solozábal (enero-1932).

Florencio Grijalba (agosto-1932).

Eduardo Acha (septiembre-1932).

Demetrio Martín Alonso (enero-1933).

Consejo provincial de Vizcaya:

Fermín Solozábal (hacia mayo-32).

Eduardo Acha (enero-1933).

F. Solozábal abandonó la presidencia del consejo local ante una propuesta de D. Martín Alonso para evitar que ambos cargos recayesen en una misma persona. F. Grijalba, elegido para subsituirle renunció de forma inmediata alegando falta de tiempo, dado que era gestor de la Diputación provincial (1).

(1)

Datos en una carta de Demetrio Martín Alonso (presidente del consejo local) a la secretaría general de Acción Republicana de 3-10-33.

AS, Bilbao-171, hoja 249.

Movimiento de afiliados de la agrupación de Bilbao (1):

	1932		1933		1934	
	altas	bajas	altas	bajas	altas	bajas
enero	-	-	-	1	2	6
febrero	54	2	56	1	5	1
marzo	-	3	22	3	3	-
abril	29	3	14	1		
mayo	-	-	50	2		
junio	20	1	8	-		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total	103	9	150	8	10	7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
julio	10	2	20	-		
agosto	9	-	11	-		
septiembre	14	-	9	6		
octubre	19	-	6	4		
noviembre	39	-	-	-		
diciembre	24	2	-	1		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>		
Total	135	4	46	12		
	=====	=====	=====	=====		

(1)

Cifras tomadas del libro de actas del consejo local.

Las cifras de altas y bajas creemos que son muy indicativas respecto a la evolución del partido, y a expensas de más datos, no solo de Acción Republicana de Bilbao sino de la probable evolución a nivel nacional. En efecto se observa una afluencia lenta pero muy constante mientras el partido es tá en el poder, para cesar bruscamente tras la crisis ministerial de septiembre del 33. En los tres semestres que van de enero de 1932 hasta junio del año siguiente, el aumento es re gular: 103, 135 y 150 frente a sólo 9, 4 y 8 bajas; en el segundo semestre de 1933 la relación es ya de 46 - 12, y viendo la evolución por meses vemos que todavía julio y agosto tienen una afluencia normal de miembros, 20 y 11 frente a ninguna baja, mientras que la situación varía ya en el mismo septiembre 9 - 6 y más aún en los meses posteriores.

Esto confirmaría nuestra tesis antes explicada de lo importante que era la función de intermediario entre la población y el poder (entiéndase la administración, organismo oficiales, etc.) que desempeñaban los partidos republicanos, apar te la carrera política propiamente dicha. Es obvio que para am bos tipos de expectativas el hecho de que el partido estuviese o no en el Gobierno era esencial; eso explicaría en parte el parón absoluto en la afluencia de militantes perceptible en septiembre de 1933.

No se percibe en cambio ninguna alteración en la afluencia de miembros entre enero y septiembre de 1933, meses de progresivo deterioro de la situación política, y según se

ha afirmado siempre, de la popularidad de Azaña y los partidos integrantes de la coalición gubernamental. Tampoco se observa en los primeros meses de este año de 1933 el posible impacto del escándalo Casasviejas.

En cuanto al número total de socios, al ingresar en Acción Republicana el partido republicano autónomo de Bilbao, la prensa habló de que contaba con más de dos mil afiliados, lo cual es una cifra importante para una agrupación local de la época. Aceptando esa cifra base el número absoluto de miembros sería aproximadamente el siguiente:

enero 1932	2.000
junio 1932	2.094
diciembre 1932	2.225
junio 1933	2.367
diciembre 1933	2.401
marzo 1934	2.404

C. CASTELLON DE LA PLANA

CASTELLON DE LA PLANA

La provincia de Castellón es una de las pocas de las que contamos con algunos datos sobre su evolución hasta 1934 debido a que se han conservado diversos documentos en el archivo de Salamanca repetidas veces citado. En efecto, contamos con el libro de actas del comité provincial, así como con otros varios documentos (1).

En 1930 se reúnen en una asamblea un cierto número de grupos locales que se habían ido creando bajo la denominación de Acción Republicana, gracias a la actividad del republicano Matías Sanguesa, quien logró extender estos núcleos organizados de republicanos por la parte norte de la provincia. El partido Republicano Autónomo, otro grupo republicano de la provincia, dirigido por el Sr. Gasset, con el que esta Acción Republicana autónoma se encontraba en buenas relaciones estaba en cambio tradicionalmente arraigado en las cercanías de la capital.

La implantación de la República iba a traer tanto la conexión entre la Acción Republicana tarraconense con la Acción Republicana nacional como las disensiones en el seno del republicanismo provincial. En efecto, apoyado por algunos distritos y

(1)

Los datos proceden casi en su totalidad del libro de actas citado y de una Memoria política elaborada en 1936 por el consejo provincial, para elevarla al Consejo Nacional, en la que se hace historia de la organización provincial. AS, Castellón-101 y 102, folio 119 respectivamente.

Vid. ap. I, 1 b, donde reproducimos el fragmento de la Memoria que afecta a Acción Republicana.

con una cierta oposición dentro del grupo, Acción Republicana y su líder Sangüesa defendieron con firmeza la relación que ya se había iniciado de la Acción Republicana tarraconense con los organismos nacional de Acción Republicana, e impulsaron asimismo la candidatura para las constituyentes del catedrático Royo Gómez.

Estas posturas se impusieron en una asamblea preelectoral realizada por los partidos de la conjunción republicano socialista -a pesar de que el segundo punto fuera estrictamente particular de Acción Republicana- con la abierta oposición de algunos miembros de Acción Republicana -Castelló Soler y Peña Massip (1)-, quienes se separaron del grupo y presentaron incluso candidatura aparte en las elecciones a Cortes constituyentes.

El 29 de mayo de 1932 tiene lugar la primera asamblea provincial del partido. En ella se aprobaron los reglamentos que hemos comentado. Se eligió asimismo el consejo provincial, del que resultó presidente D. José Fibla Fresquet (2). Fue elegido vicepresidente Matías Sangüesa Guimerá.

Merece la pena mencionar las decisiones siguientes: establecer una cuota mínima de 5 céntimos mensuales por afiliado; crear "intereses de partido", por ejemplo encomendado los

(1) Ambos acabarían ingresando en el Partido Radical Socialista, *Memoria*, p.3.

(2) Fibla Fresquet permaneció en su cargo hasta la asamblea provincial de febrero del siguiente año, en la que dimitió por motivos de salud.

apoderamientos y trabajos de los ayuntamientos en los que contasen con mayoría en la corporación a favor de los agentes de negocios del partido -de nuevo una función no política-; esto se recomendaba al tiempo que se exigía velar por la pureza de la gestión municipal -y precisamente como forma de hacerlo-, pureza que no consideraban empañada por este partidismo de su gestión. La decisión de más importancia política era la de solicitar del Gobierno la destitución de los ayuntamientos elegidos por el artículo 29 y que se hubieran hecho acreedores de tal medida, substituyéndolos por comisiones gestoras (1).

Durante el año que media entre esta asamblea y la siguiente de febrero del 33 Acción Republicana publicó, irregularmente debido a las dificultades económicas, un semanario titulado "Izquierda". Dos miembros del partido ejercieron en este período el cargo de gobernador civil, Francisco Escola y Antonio Navarro Sánchez.

En la asamblea de febrero de 1933, se eligió como nuevo presidente a F. Casas Sala. Se estableció una cuota mínima mensual para los grupos locales de cinco pesetas, exonerables en caso de imposibilidad comprobada por el delegado de distrito. Se adoptó asimismo una importante decisión respecto a las próximas elecciones (las municipales de abril) concediendo a

(1)

Hoja de conclusiones de la asamblea (AS, Castellón-101) y libro de actas.

los grupos locales libertad para concertar las alianzas que consideraran convenientes con los grupos de izquierda; igual que ocurriría a nivel nacional en las inmediatas legislativas hubo proposiciones en la asamblea (las hizo la delegación de Burriana) de que se excluyera de las alianzas al Partido Radical en toda la provincia, índice de la creciente rivalidad entre ambos partidos.

De esta fecha aproximadamente (entre febrero y junio de 1933) debe ser un informe político enviado por el consejo provincial al Consejo Nacional sobre la situación de la provincia, parece que cara a las elecciones municipales (1).

En el informe se alude a la política electoral adoptada, añadiéndose que, a pesar de la libertad dada a los grupos, se aconsejó ir en unión de los socialistas. Añade el informe que en la capital iban a hacer lo posible por ir con éstos, excluyendo por completo debido a razones locales, la unión con los radical socialistas (la razón era la oposición a Castelló Soler, ex miembro de Acción Republicana y ahora dirigente de los radical socialistas). Respecto a su actitud frente a los radicales, sólo aceptarían la unión en caso de órdenes expresas del Consejo Nacional o en caso de "peligro para la República" (que probablemente habría que entender como peligro de que triunfase la derecha católica). Vemos pues una notable coinc

(1)

AS, Castellón-104, fol. 201. *Vid.* I, 1 b.

cidencia con la política nacional.

Con carácter confidencial se solicitaba el traslado del secretario del Gobierno civil, como persona conocedora de toda la red caciquil de antaño, actualmente al servicio de los radicales. Con ello se ayudaría enormemente al partido en las próximas elecciones y en la política general de la provincia, según los autores del informe. Es una muestra de que el caciquismo no era algo plenamente superado.

En el informe se traza una perspectiva sobre la fuerza de los diversos partidos en la provincia, según la cual los radical socialistas contaban tan sólo con unos pocos grupos locales fuertes y apoyarían a sindicatos cenetistas. Los radicales estaban presentes en todos los pueblos, con gran fuerza en la capital y una red de intereses que sostenía su presencia en la provincia más que la laxa organización; contaban además con un diario y dos semanarios. Los socialistas tenían fuerza en algunos pueblos importantes y en la capital y la Derecha Regional Agraria poseía un apoyo de prensa considerable y desarrollaba una gran actividad propagandista especialmente por pequeños pueblos.

Frente a este panorama político resumían de la siguiente forma la situación de Acción Republicana en la provincia: "Ochenta y tres comités en la provincia con unos diecisiete mil afiliados. (No podemos precisar por estar confeccionando el fichero y preferimos dar una cifra baja). Mayoría de Acción Republicana en unos 42 Ayuntamientos. Hacemos la salvedad de que

Republicana por la repetición de los mismos temas en todo tipo de asambleas. Casas Sala recogió todos estos temas para trasladarlos a la asamblea nacional, así como los referentes a política provincial. (Se solicitó por ejemplo la revisión de los secretarios de ayuntamiento, acusándoles de ser reaccionarios en su mayoría).

En la asamblea se insistió en el carácter izquierdista del partido, llegándose a afirmar que en esos momentos se encontraban más cercanos al PSOE que al Partido Radical.

En febrero de 1934, al tiempo del proceso iniciado a nivel nacional se acordó en Castellón comenzar las gestiones para la unión de los republicanos de izquierda. Se decidió incluso, si no se llegaba a la fusión nacional, proceder en abril a la constitución en la provincia de un nuevo partido que uniera a las izquierdas republicanas (1).

El 19 de mayo tendría lugar la asamblea de disolución del partido provincial de Acción Republicana como se había pensado desde febrero darle al nuevo partido un carácter regional.

El 20 tuvo lugar la asamblea conjunta de los partidos que concurrían a la fusión: Acción Republicana y los RSI. Estos, acaudillados por Peña Masip "aportaron unas pocas orga-

(1)

Libro de actas, hoja 35.

nizaciones locales". También se sumó a la fusión el Grupo Valencianista que encabezaba Huguet, y que al decir de los autores de la Memoria era en realidad inexistente y utilizado por su único líder como plataforma política personal.

En esta asamblea se acordó en primer lugar el ingreso en Izquierda Republicana; no resultaba inútil afirmarlo da da la efectiva autonomía de que gozaban las organizaciones pro vinciales, y especialmente porque se trataba ahora de otorgarle un carácter regional. En segundo lugar el darle la denomina ción de Esquerra Republicana del País Valenciá, basándose en los artículos 19 a 22 de los estatutos de Izquierda Republicana. Conviene resaltar que si bien se pretendía dar al nuevo partido en la provincia un tinte valencianista, era una inicia tiva exclusivamente castellonense, aunque quepa suponer que as piraran a constituir un partido regional a semejanza del catalán PCAR. Por último se acordó redactar un programa -un ideario, como se solía decir- en base al de Izquierda Republicana y al Manifiesto-programa del grupo local de Castellón (grupo donde residiría la principal fuerza de los valencianistas, y con el que surgirían los problemas tras la fusión, al dominar allí los amigos de Huguet, Segarra y Peña Massip) (1).

(1)

Acta de constitución de Esquerra Republicana del País Valencia, AS, Castellón-101, folio 327.

Aunque recoge las conclusiones de dicha asamblea de 20 de mayo, la cons titución oficial del partido, por medio de este acta presentada al Gobierno civil, no se produjo el 1 de agosto.

Presidente del nuevo partido fue elegido el que lo fuera desde el año anterior de Acción Republicana, Francisco Casas Sala.

Por los términos en que está redactada la Memoria se advierte que la fusión se producía con un fuerte recelo por parte del grupo más potente, Acción Republicana, respecto a los restantes, cuyos líderes en muchos casos no eran sino antiguos disidentes de Acción Republicana, por temor a que estas ocasiones de nuevo rencillas y discrepancias en el seno del nuevo partido.

La muestra más clara de este ánimo con el que fue a la fusión Acción Republicana lo constituye la carta que Royo Gómez, ex diputado por la provincia, envió a la asamblea provincial de disolución de Acción Republicana; en ella afirmaba en substancia que aunque había que ir a la fusión decididamente, no cabía olvidar que ésta significaba reconstituir la primitiva Acción, reingresando los antiguos escindidos; y en toda la carta se percibe el temor, luego confirmado, de que surgiesen de nuevo conflictos internos (1).

Efectivamente estos se produjeron, haciéndose fuertes los disidentes en la organización local de Castellón frente a

(1)

AS, Castellón-103.

la organización provincial, a cuyo presidente lograrían cesar. No es posible sin embargo, aparte de que queda fuera de nuestro ámbito temporal de estudio, seguir los términos de aquella que rella, por la generalidad y partidismo con que es narrada en la Memoria, escrita desde el punto de vista del consejo provincial.

Digamos tan sólo que el grupo disidente, entre otras posibles razones parece que pretendió una actuación más radicalmente valencianista; de tal modo que los reglamentos aprobados fueron rechazados por el Consejo nacional de Izquierda Republicana. Quizás fuera ésta la causa de que la constitución definitiva de la ERPV se retrasase hasta agosto de 1934. El nombre y la estructura orgánica de carácter regional serían abandonados en 1935 aunque es dudoso que llegara a suponer algo más que el mero cambio de denominación.

Algunos datos numéricos sobre la Acción Republicana en Castellón

Fechas asambleas provinciales: Mayo 1932 Febrero 1933 Octubre-33

Nº de grupos locales: (82) 83 (89) 96 (94)

Nº de afiliados:	22.000	17.000
------------------	--------	--------

Nº de concejales: 500 (244)

Grupos locales.- Las cifras entre paréntesis proceden de una lista (1) de todas las organizaciones de Izquierda Republicana,

(1) AS, Castellón-103.

en la que viene la fecha de constitución de las antiguas organizaciones de Acción Republicana y la de su transformación en Izquierda. Dado que hay correcciones y tachaduras cabe la posibilidad de error en el cómputo que hemos realizado. Además se han considerado como de Acción Republicana Radical Socialista, con lo que es dudoso si serían de Acción Republicana o del PRRS luego unidas a Izquierda Republicana. Las otras dos cifras proceden, la de febrero de 1933 del informe político y la de octubre del libro de actas del consejo provincial (hoja 33).

Afiliados.- La cifra de mayo del 32 procede del libro de actas y es con seguridad superior a la real. La de febrero del 33, procedente del informe político, y creemos que algo más realista que la anterior, nos sigue pareciendo excesivamente elevada; aunque de buena fe creyesen estimarlo por lo bajo, la reconocida inexistencia de fichero puede ser la explicación del error. Repartidos entre los 83 comités daría una media de 205 afiliados por grupo, lo que es muy elevado para pueblos pequeños, y conviene recordar que carecían de fuerza en la capital.

Para que tales datos puedan apreciarse en lo que significan diremos que el número de municipios de Castellón era de 141 (1), y el número de electores según los censos de 1931, 32 y 33 era de 96.495, 195.715 y 201.985 respectivamente (2).

(1)
AEE, 1931, p. 480.

(2)
AEE, 1931, 1932-33 y 1934.

Las dos cifras dadas de afiliados para 1932 y 33 serían respecto a los censos respectivos un 11% y un 8%; dado que el censo incluye ya a las mujeres, las cuales en muy escasa medida participaban en la política hasta el grado de afiliarse a un partido, puede comprenderse lo elevado de estos porcentajes.

Concejales.- Lo mismo cabe decir de la cifra de 500 concejales dada en la asamblea del 32. La cifra que hemos colocado en la columna de febrero del 33 procede de una lista sin fecha en la que se indican los concejales de Acción Republicana y de los radicales. Acción Republicana contaría con concejales en 53 pueblos, y de ellos en 37 superaba a los radicales en número. Si en el informe afirmaban tener mayoría en 42 ayuntamientos, esta lista debe ser anterior (1).

(1)

Los radicales tenían según esta lista, concejales en 99 municipios, de los que en 83 superaban a Acción Republicana en número de concejales. El total de concejales de la provincia ascendía a 1.288 (AEE, 1931, p.480).

La lista citada en AS, Castellón-101.

D. MADRID

MADRID

La evolución a grandes rasgos de la organización madrileña se puede seguir, como es lógico, sin dificultad, gracias a la exhaustiva consulta realizada de la prensa madrileña.

Dado que en un primer momento, aunque pudiera haber núcleos iniciales en otras capitales, Acción Republicana se identifica con la organización madrileña del mismo nombre, tomaremos para evitar repeticiones la evolución de ésta a partir del momento en que ambas, organización nacional de Acción Republicana y organización local y provincial de Acción Republicana, se desdoblan, lo cual ocurre a lo largo de 1931 (1).

Ya desde antes de mayo de este año, fecha de la transformación de Acción Republicana en partido, la prensa liberal y republicana de Madrid insertaba puntualmente todos los meses la convocatoria para su junta mensual ordinaria. El grupo tenía ya por estas fechas una cierta tradición organizativa, con reuniones periódicas mensuales. Vimos también como durante 1930 y 1931, años de vigencia efectiva de la Alianza Republicana, en las reuniones del grupo madrileño se elegían los representantes de Acción Republicana en los organismos locales y nacionales de aquella.

(1) Para las actividades anteriores de Acción Republicana de Madrid, *vid. supra*. Cap. II.

El reglamento local madrileño fue discutido y elaborado trabajosamente en varias reuniones del grupo en septiembre de 1931. En los días 5, 11, 26 de septiembre y 1 de octubre (1).

Una vez aprobados los reglamentos se procedió a la elección del consejo local el 5 de octubre, el cual tomó posesión diez días después en asamblea extraordinaria celebrada al efecto. Estaba integrado por:

Presidente honorario: Roberto Castrovido; presidente: Pedro Rico; vicepresidentes 1ª y 2ª: Juan Serrano y Emilio Morayta; tesorero: Roberto Escribano; secretario: Leandro Pérez Urria; vocales: Juan J. Jáuregui, Gregorio Marañón Torres, Rodrigo de Rodrigo y Julio Diamante (2).

En Madrid se completó pronto la estructura organizativa provincial. Ya el 6 de noviembre, en la reunión mensual del grupo de la capital se eligieron los representantes en los futuros organismos provinciales: un vocal para el consejo provin-

(1)

El proyecto elaborado en las primeras dos sesiones fue reelaborado y aprobado finalmente en las dos últimas, celebradas ya después de la 2ª Asamblea Nacional de mediados de septiembre. La razón sería probablemente la adaptación de los reglamentos discutidos primeramente a los estatutos nacionales aprobados en dicha asamblea. Los reglamentos del grupo madrileño son los analizados más arriba, y como dijimos se imprimieron por el partido para su utilización -optativa- por los grupos locales de toda España.

El Liberal, 5, 11, 25 y 30-9-31. *Boletín de información bibliográfico...* n.º 6, p. 994.

(2)

El Liberal, 3, 15 y 20-10-31.

cial, Luis Fernández Clérigo, y dos representantes para la asamblea provincial: Francisco Vighi y Enrique García Subero. El presidente del grupo y alcalde de Madrid, Pedro Rico presidió la reunión (1).

La primera asamblea provincial que se celebró en Madrid tuvo lugar el 5 de marzo de 1932, con objeto, a más de la discusión de una comunicación del Consejo Nacional, de elegir los tres representantes madrileños para la inmediata Asamblea nacional que se celebraría en cumplimiento de los Estatutos recientemente aprobados (2). La elección recayó sobre Fernández Clérigo, Francisco López y Díez de Bedoya y Francisco Carreras Reura. Es notable que se elija a este último que procedía de otra provincia, Baleares, de la cual era diputado. También obtuvieron numerosos votos Fernández García, García Cuevas, Vighi, Coca y Vázquez Humasqué, los tres últimos figuras conocidas del partido.

En estos primeros meses de 1932 se comenzaron a utilizar los carnets de afiliados del partido. Es un elemento si se quiere secundario, pero que representa un cierto grado de formalización de la militancia imprescindible en un partido de masas; también en otras provincias hemos podido constatar la

(1) *El Liberal*, 8-11-31.

(2) *El Liberal*, 4-3-32.

utilización de este clásico instrumento partidista, que posee un valor simbólico e incluso propagandístico en la vida política. En Madrid se exigía regularmente para la participación en asambleas y reuniones del partido la exhibición del mismo al corriente de pago (1).

Más adelante intentaremos una apreciación cuantitativa de la afiliación en Madrid y provincia. Pero junto a este aspecto numérico hay otro problema no menos importante, y es el de qué número de afiliados solía asistir a las reuniones mensuales (juntas generales como se denominaban) del grupo madrileño. En la reunión de mayo del 32, con ocasión de una resolución, la votación arrojó el resultado de 89 contra 34. Ello implica una asistencia aproximada de unos 120 afiliados. Aunque el número de afiliados creemos que debía ser muy superior, y a pesar de ser un dato aislado, es indicativo de una escasa militancia por esta época.

Además, el objeto de la votación era de escasa relevancia política, por lo que no es un índice muy significativo. En efecto, ya aludimos anteriormente a la avalancha de afiliaciones que los partidos republicanos sufrieron tras abril del 31 y la consiguiente reacción de estos tomando medidas precautorias respecto a los nuevos socios, con objeto de luchar con

(1)

El Liberal, 31-5-32.

tra el inevitable oportunismo, así como de preservar la pureza ideológica de su ideario.

Pues bien, la votación a que ahora hacemos referencia trataba sobre la posible separación de un miembro del partido por sus antecedentes políticos durante la Dictadura; separación que se acordó efectivamente por el claro margen de votos reseñado. Puede tomarse como una prueba de la seriedad con que los "nuevos" partidos republicanos se tomaban la ruptura frente a las personas implicadas en el régimen anterior, así como con los procedimientos caciquiles, frente a los republicanos históricos -fundamentalmente los radicales-, cuyas organizaciones se convirtieron en refugio de intereses y personas de la vieja política.

Lamentablemente ni siquiera la prensa republicana madrileña informaba sobre las reuniones periódicas de los diversos partidos republicanos, por lo menos, respecto de Acción Republicana, hasta 1933; quizás por el curso cada vez más apasionado que iba tomando en este año la situación política y las crisis internas de muchos de los partidos de la coalición gubernamental, comenzaron a aparecer reseñas a veces extremadamente detalladas de estas reuniones.

Hay que señalar también que en Madrid los afiliados de Acción Republicana pertenecientes a los diversos distritos mantenían asimismo, e independientemente de las juntas generales, reuniones de periodicidad mensual, como puede comprobarse por las convocatorias insertas en la prensa republicana.

Hasta diciembre del 32 no se aprobaron los reglamentos provinciales. Fueron discutidos y aprobados en la asamblea provincial que tuvo lugar el 3 de diciembre (1), y entraron en vigor un mes después. Con ello quedaba ya tanto a nivel real como a nivel formal estructurado el partido en la provincia de Madrid.

En marzo del 33 tenemos ya datos concretos sobre el nivel de afiliación del grupo local madrileño (2). El número de afiliados cotizantes se elevaba a 2.712, lo cual nos parece una cifra bastante aceptable para un grupo político de las características ideológicas y sociales -reformismo burgués- de Acción Republicana en aquella época. Tiene también interés el movimiento de altas y bajas habido en el mes anterior, febrero: 198 frente a 73; ello da un saldo a favor de 125 altas en el conflictivo mes de febrero.

En este mes, ya en pleno escándalo Casasviejas, se había producido la adhesión en Madrid de un nutrido grupo de ex reformistas, que creemos que constituye uno de los varios indicios de que el efecto desprestigiador de dicho asunto fue probablemente menor del que se ha afirmado tradicionalmente; ya dijimos que probablemente fue mayor su efecto desmoralizador

(1) *El Liberal y El Sol*, 3-12-32; *Boletín de información* ... p.992.

(2) *El Liberal*, 22-3-33.

sobre la mayoría parlamentaria que sobre el potencial electorado de republicanos de izquierda y socialistas.

Según las noticias de prensa se trataba de un centenar de personas, que es de suponer que militasen en el Partido Liberal Democrático, nombre que adquirieron los seguidores de Melquíades Álvarez durante la República. Acompañaban la nota los nombres y profesiones de algunos de ellos (de 27), dividiéndose éstas por mitad entre profesiones liberales (14) y trabajadores (12). Destacaba el hecho de que uno de estos, ferroviario de profesión, era presidente del Sindicato profesional de ferroviarios, que contaba con unos 7.000 miembros (1).

En la junta de marzo a la que corresponden estos datos se adoptaron diversas decisiones de carácter político, electoral y organizativo. Las primeras fueron las siguientes: -Expresar a Azaña la satisfacción por sus últimas intervenciones parlamentarias, con las que se sentían plenamente identificados. No había pues por el momento ningún tipo de resquebrajamiento ideológico en Madrid. - Se aprobó también por aclamación pronunciarse en el sentido de que Acción Republicana estaba dispuesta a utilizar los medios a su alcance para impedir la propagación del fascismo. Pocos días atrás, las juventudes de Acción Republicana habían aprobado algo similar, y el hecho determinante de ambas resoluciones era la reciente aparición de

(1)

El Sol, 22-2-33.

El Fascio, ligado a las J.O.N.S.

Además de ciertas medidas de menor interés para recaudar fondos electorales (como sugerir a Azaña la posibilidad de dar una charla), se tomaron algunos acuerdos de carácter organizativo como crear una bolsa de trabajo para los afiliados en paro forzoso, o manifestar el desagrado que producía a la asamblea el que casi ningún afiliado de los que ostentaban cargos representativos asistiesen a ella. También se acordó y es curioso que todavía en 1933 se polemizase sobre esta cuestión, el que no pudiesen pertenecer a Acción Republicana aquéllos que procediesen de la Unión Patriótica de Primo de Rivera o del Somatén, y que si algún afiliado estuviese en tal situación lo hiciese constar, so pena de ser dado de baja en caso de haber ocultado tal circunstancia.

En los meses siguientes se realizó una intensa campaña de propaganda por la capital cara a las elecciones municipales, según se dijo en la reunión de mayo, tenida bajo la presidencia del presidente Rico (1). En ella se acordó expresar la solidaridad con la actitud del Gobierno ante la conducta de las oposiciones, y manifestar la incompatibilidad de la agrupación con cuantos practicasen la obstrucción, lo que era ya una plasmación a nivel local del antagonismo con otros par

(1)

El Liberal, 26-5-33.

tidos republicanos.

Se solicitó del Consejo Nacional organizar una campaña de propaganda por los pueblos; respecto a la política municipal se decidió elaborar un programa que sirviese de guía a la actuación de los concejales del partido; siendo el presidente de la agrupación el alcalde, es evidente que una decisión así suponía una crítica velada respecto a su gestión.

Las altas en el mes anterior (abril) había sido 134, aunque al no tener el número de bajas, es un dato poco representativo.

El deterioro de la situación política y la progresiva debilitación del ministerio Azaña iban a provocar tanto una radicalización de la agrupación madrileña como una creciente actitud crítica respecto a la dirección nacional del partido. Ya a partir de la caída del Gobierno de coalición izquierdista tenemos abundantes referencias de las reuniones que mantuvo la agrupación madrileña.

A los pocos días de producirse dicha caída, el 15 de septiembre, celebró el grupo madrileño una asamblea de carácter extraordinario (1). El orden del día era el propuesto por el numeroso grupo de afiliados que había solicitado la convo-

(1)
El Liberal, 16-9-33.

catoria de la asamblea, y versaba sobre la actuación de la mi noría parlamentaria en las recientes discusiones parlamentarias y de la misma y el Consejo Nacional en relación con la reciente crisis y su solución. Era pues una reunión de carácter fundamentalmente político. La asamblea estuvo muy concurrida y contó al parecer con la presencia de numerosos diputados (entre ellos estuvieron, desde luego, Giral, Castro, Fernández Clérigo, Rico y Martínez Risco). Por las cifras dadas en la vota ción de una de las proposiciones debía haber cerca de cuatrocientas personas.

El primer punto del orden del día fue la discusión de la nota en la que se expresaba el disgusto del grupo por la inasistencia de los diputados a las Cortes, inasistencia que desde luego había perjudicado notablemente el crédito de la mayoría y que tanto había criticado el propio Azaña. La exten sa proposición decía así:

"Los afiliados que suscriben proponen a la asamblea general del grupo local de Madrid la aprobación de la siguien te proposición: Primera. La asamblea manifiesta su profundo disgusto por la inasistencia de los diputados del partido a las sesiones de las Cortes constituyentes, inasistencia que se ha hecho manifiesta durante la aprobación de una de las leyes más importantes de entre las sometidas para su aprobación a es te Parlamento, como es la de Arrendamientos rústicos, cuya im portancia y urgencia no es necesario que recalquemos. Creemos, por tanto, los abajo firmantes que no tienen justificación es-

tas ausencias, ausencias siempre reprobables, pues a nuestro juicio los diputados tienen la obligación de asistir sin excusa a todas las sesiones del Congreso, ya estén en la mayoría o en la oposición; pero en este caso verdaderamente lamentable. Y, por tanto, encarga al Consejo local remita un escrito en que este disgusto se manifieste al Consejo nacional y al jefe de la minoría parlamentaria.

Segunda. Que para el próximo Congreso nacional del partido, por la delegación del grupo local de Madrid se lleve la siguiente proposición:

a) El grupo local de Madrid propone al Congreso se comunique a los diputados a Cortes el disgusto con que el partido ha visto la falta de asistencia de los diputados de Acción, sobre todo en las sesiones estivales, a las sesiones de las Cortes constituyentes.

b) Con objeto de evitar que en lo sucesivo esto se repita, se propone que por el jefe de la minoría se remita diariamente al Consejo nacional, relación de los diputados que han asistido a la sesión y causas de las bajas. El Consejo nacional sacará las copias necesarias para que sean remitidas a los consejos locales.

d) (sic) Cuando un diputado falte, sin justificación, veinte días en el año o a dos sesiones para las que sea requerida su presencia por el jefe de la minoría, se comunicará al interesado, que de no justificar debidamente sus faltas ante

el Congreso del partido (ordinario), no podrá ser presentado candidato por el partido de Acción Republicana".

La proposición, de gran dureza en el fondo, pero irreal quizás para su cumplimiento efectivo por la formalidad de sus requisitos, fue aprobada por aclamación. Es un dato muy revelador del estado de ánimo existente en la base del partido, muy sensible a la progresiva debilitación que se había observado, hasta su caída, en la fortaleza del Gobierno. Dos procesos paralelos y contradictorios se habían dado: por un lado el progresivo amilanamiento de los diputados de Acción Republicana (y de la mayoría en general) ante la dura campaña de prensa y de las oposiciones, el resquebrajamiento del PRS, el cansancio de una labor prolongada, etc., amilanamiento que se había manifestado en la inasistencia a las sesiones y en la falta de entusiasmo en el apoyo a su Gobierno. Por otro lado se había producido una progresiva radicalización de la base del partido. Esta base sufría con menos paciencia la campaña contra el Gobierno, y en vez de vacilar en su apoyo resaltaban más su carácter izquierdista. Esto no resulta extraño si consideramos que fue Azaña quien había conducido, con no pocas dificultades, a las primeras figuras de su partido por una senda decididamente reformista que sin él hubiera sido impensable en hombres como Sánchez Albornoz y tantos otros.

En algunas intervenciones previas a la aprobación de la proposición, se destacó el hecho de que la inasistencia de los diputados se hubiera acentuado en la discusión de la ley

de Arrendamientos rústicos, de gran importancia política y social. Con ello parecía aludirse a la probable escasa convicción izquierdista de los diputados, que fallaban precisamente en una ley decisiva en la defensa de intereses sociales populares.

La proposición que se aprobaba que fuera elevada por el consejo local al próximo congreso era un intento de controlar a los diputados y fortalecer la disciplina del partido y la autoridad de éste y del jefe de la minoría sobre aquellos. Independientemente del procedimiento para llegar a ella, era interesante la sanción ideada para los diputados que incumpliesen su deber de asistir a las sesiones de Cortes, la imposibilidad de poder ser designado de nuevo candidato del partido.

Más interés incluso despertaba el siguiente punto del orden del día sobre la colaboración concedida por Acción Republicana al gobierno de Lerroux. En la discusión que se entabló se ve con mayor claridad la radicalización izquierdista producida.

Aunque al fin y al cabo la posición de la base madrileña no se puede decir en forma alguna que fuera discrepante con la continuada referencia al carácter izquierdista de la política de Acción Republicana en la propaganda del partido y en los discursos de su presidente.

La proposición sobre este punto que se discutió finalmente había sido aprobada por las JAR y decía así: "La Juventud de Acción Republicana propone lo siguiente a la asamblea

de afiliados al (sic) grupo local de Madrid: Primero. Considerar el acuerdo adoptado por el Consejo nacional y la minoría de colaborar en el Gobierno presidido por el Sr. Lerroux como atentatorio al curso izquierdista de nuestro partido, y por ello solicita del Consejo nacional y de la minoría las explicaciones pertinentes.

Segundo. En el caso de que estas explicaciones no fuesen satisfactorias o se nos negasen, la asamblea local del partido propondrá al Congreso nacional del mismo las sanciones adecuadas.

Tercero. La asamblea local acuerda mostrar, de manera resuelta, su oposición al actual Gobierno y no considera que el partido de Acción republicana esté representado en él.

Cuarto. La asamblea acuerda asimismo solicitar del Consejo nacional del partido que se retire la colaboración lo más pronto posible al nuevo Gabinete".

Defendida la proposición ardientemente por Ruiz Rey, presidente de la Juventud y por varios más (entre ellos Vázquez Humasqué), el afiliado Sr. Sanz pidió que se explicase con precisión cuál había sido la postura adoptada por minoría parlamentaria y Consejo nacional. Para ello hablaron dos diputados y miembros del Consejo Nacional, Fernández Clérigo y Pedro Rico. El primero, en una intervención conciliadora, para destacar la implícita hostilidad de la nota respecto a los diputados y el Consejo Nacional, asegurando que sometiéndose siempre

a la disciplina convendría antes de actuar contra ellos analizar serenamente los problemas para evitar errores perjudiciales. Pero Rico intervino también, aunque resulta curioso que lo hiciera él precisamente para defender una posición tan delicada como la de la dirección del partido en una asamblea tan claramente predispuesta en contra, dado que su propia popularidad en su grupo era como sabemos harto escasa.

Su intervención fue continuamente interrumpida. El único argumento de fondo que podemos encontrar en la referencia de prensa de las palabras de Rico fue la necesidad en que se encontraron de dar facilidades al Jefe del Estado para la resolución de la crisis. Los demás argumentos son reflexiones sobre la conveniencia de que la dirección del partido no actúe se por motivos pasionales, etc., apelaciones para que no se tomaran resoluciones sin escuchar la posición de los dirigentes (1).

La intención de Fernández Clérigo y Rico era que no se pasase a votar la proposición y se aplazase la resolución a la Asamblea nacional, donde el Consejo Nacional defendería su posición, sin entrar en esta ocasión en el fondo de la cues

(1)

Muy probablemente Rico explicaría con más detalle los motivos que indujeron a la dirección a apoyar al Gabinete Lerroux, pero la referencia de *El Liberal* es sumamente breve. En cualquier caso su intervención estuvo encaminada al parecer más a aplazar la discusión que a entrar en el fondo del tema.

ción. Postura lógica puesto que en la Asamblea nacional las posturas de los delegados siempre serían más moderadas. Los efectos políticos de la resolución en caso de ser aprobada, eran a todas luces empeorar las difíciles relaciones con los radicales y debilitar el gobierno de Lerroux, antes de que se hubiese presentado siquiera a las Cortes.

Pero la asamblea se mostró partidaria de votar inmediatamente la proposición, la cual resultó aprobada por 250 votos a favor frente a 97 en contra y 6 en blanco. P. Rico, precaviéndose del resultado, había advertido en su intervención que lo que el grupo de Madrid decidiera no implicaba que el criterio de la dirección hubiera de rectificarse, puesto que requería una decisión de todas las agrupaciones provinciales del partido.

Días después, en la asamblea ordinaria de septiembre, celebrada "con gran afluencia de afiliados" (1), se aprobó de nuevo, una proposición sobre el gobierno Lerroux que decía así: "La agrupación de Acción Republicana de Madrid protesta pública y expresamente contra el acuerdo del Gobierno de aplazar su presentación a las Cortes hasta el día 2 de octubre próximo, ya que dicho acuerdo además de atentar contra otras razones de ética política, significa la negación rotunda de la vigencia del estatuto jurídico, que como complemento de la ley de Reforma agraria había de traer la liberación y el bienestar

(1)

El Liberal, 22-9-33.

a los humildes trabajadores de la tierra". Se insistía en la interrumpida ley de Arrendamientos rústicos efectivamente tan trascendente para la alteración del statu quo legal en el campo.

El 12 de octubre se celebró asamblea provincial preparatoria de la nacional (1), eligiendo los delegados para ésta, que resultaron los siguientes: L. Fernández Clérigo, Roberto Escribano, L. Pérez Urría, Baínez, Bravo, Ruiz Rey (presidente de las Jar), Olmedilla y García Hita.

La única noticia que hemos localizado contraria a esta tendencia a la radicalización izquierdista es la referente a la agrupación de Chamartín de la Rosa, la cual celebró en octubre una asamblea para tratar sobre la separación del partido central y la no colaboración con los socialistas y sus aliados (2); desconocemos el resultado de la asamblea, aunque en la provincia de Madrid creemos que sería un caso aislado de conservadurismo, puesto que la política de Acción Republicana cara a las elecciones de mantener en la medida en que fuera posible la alianza con la antigua coalición. Como ya vimos, en una asamblea extraordinaria se acordó ir a las elecciones en una alianza republicana de izquierdas, al negarse los socialistas a ir en unión de sus antiguos aliados. En correspondientes

(1)
El Liberal, 13-10-33.

(2)
El Liberal, 20-10-33.

ante votaciones fueron seleccionados los candidatos incluidos en las listas de ambas circunscripciones madrileñas, según el número de puestos atribuido a Acción Republicana en las negociaciones con RSI y federales.

Tras el fracaso electoral y como consecuencia de la declaración del Estado de alarma en diciembre, hasta entrado enero no tenemos noticias de nuevas reuniones del grupo madrileño. En la celebrada el 18 de este mes (1) el secretario dio cuenta del gran incremento que había experimentado el grupo en el último trimestre de 1933, aunque sin dar cifras, lo que le resta valor al dato, pues contradice otros según los cuales tras la caída del gobierno Azaña disminuyó el número de afiliaciones (recuérdese el caso de Bilbao); sin embargo la actitud crítica del grupo hacia las contempORIZACIONES de la dirección del partido con los radicales pudo atraer a una clientela izquierdista procedente de otros partidos republicanos en crisis (RSI por ejemplo).

La fusión ya en marcha con los restantes partidos republicanos de izquierda era el punto central tratado en esta asamblea, aprobándose por aclamación la necesidad de la fórmula de la fusión (frente a federación) e instando a que prosiguiesen las negociaciones. Se aprobó también una censura (más

(1) *El Liberal*, 18-1-34.



teórica que otra cosa) al ex afiliado y ex jefe del grupo local, P. Rico, que antes de las elecciones había abandonado el partido para unirse a los radicales; Rico había dejado de pertenecer a la agrupación antes de que se llegase a discutir una moción de censura que había pendiente contra él.

Inmediatamente después se celebró una asamblea provincial en la que se adoptó idéntico acuerdo, por aclamación, de comunicar al Consejo Nacional el firme propósito de la organización provincial de ir a la fusión de los partidos republicanos de izquierda, sin admitir fórmulas intermedias -federación- que en lugar de favorecer la unión la podían entorpecer; llegándose incluso al acuerdo de no pactar con los partidos que pudiesen dificultades para una fusión completa (1).

La agrupación de Madrid tendría el 17 de febrero otra asamblea en la que se aprobarían las gestiones hechas hasta el momento por el Consejo Nacional (2).

La última asamblea provincial de la agrupación de Madrid se celebró el día 29 de marzo con carácter extraordinario para nombrar representantes en la nacional -de disolución de Acción Republicana- y delegados para la Asamblea conjunta

(1)

El Liberal, 31-1-34.

(2)

El Liberal, 25-2-34.

con los restantes partidos republicanos para la constitución de Izquierda Republicana. Para la primera se eligió a Pérez Rubio, Gaspar, Marañón, Reynals, Noguera, Bravo, Carrillo , Barroso y Alcaide, y para la segunda a L. Fernández Clérigo como delegado propietario y a Roberto Escribano como delegado suplente.

E. PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

El Partido Republicano Gallego venía arrastrando, desde antes de su constitución como tal (su primitiva denominación era la más conocida de ORGA), abiertas disensiones en su seno por la actuación caciquil que se achacaba a la dirección del partido, y muy especialmente a Casares (1).

En Pontevedra esta discrepancia fue siempre más activa y acabó por provocar una crisis definitiva que desgajaría a la mayoría de la organización de la provincia, la cual se sumó a las filas de Acción Republicana.

Esta experiencia escisionista, que duraría no mucho más de un año (pues la fusión del 34 volvería a reunir como en otras provincias a los antiguos correligionarios), daría una fuerza a Acción Republicana en Pontevedra de la que hasta entonces había carecido.

La razón de esta debilidad es bastante clara. ¿Qué espacio político podía quedarle a Acción Republicana, existiendo un partido restringido al territorio gallego, con el mismo matiz izquierdista, apenas más autonomista que Acción Republicana y que asumía a nivel nacional sus mismas posiciones? (2).

(1) Para la ORGA-PRG, vid. fundamentalmente Alfonso Bozzo, *Los partidos...* p. 98 y ss.

(2) Vid. sobre este punto, Alfonso Bozzo, *op. cit.* p. 119.

El marcado carácter nacionalista de los grupos catalanes en Cataluña y el derechismo de los partidos vascos en Euzkadi permitían en alguna medida la existencia de una cierta base social a los partidos nacionales, mientras que en Galicia la diferencia entre el galleguismo de Orga-PRG y el autonomismo de Acción Republicana era escaso. El auténtico nacionalismo gallego era mucho menos potente que en las otras dos regiones.

Durante marzo de 1933 se producen los hechos que dan lugar a la ruptura. El sector que había de separarse del PRG, venía denunciando desde el órgano de que disponían, *El País*, diario de Pontevedra, que en la constitución realizada poco antes del comité provincial del partido en Pontevedra, se habían cometido numerosas irregularidades. En aquella reunión constitutiva se había creado una mayoría ficticia aceptando credenciales de delegados en personas que no podían ostentar tal representación y una vez creada tal mayoría se eligió el comité provincial y ejecutivo con un número de personas inferior al reglamentario. Más adelante se había concedido el ingreso a comités municipales "paralelos" y se había dado de baja a organizaciones locales desafectas, y sobre todo ello se había destituido a los representantes provinciales en el comité regional, nombrando a otros (1). Para resolver el contencioso

(1)

Esta destitución es la descrita por Alfonso Bozzo, op.cit. p.124. La explicación oficial a esta "reestructuración" fue que la base del partido había reaccionado frente a un nombramiento de delegados hecho de acuerdo con un reglamento no aprobado por la sección pontevedresa y que además no permitía la fiscalización por la base de tales nombramientos.

originado por tales hechos, el comité provincial había convocado una asamblea del PRG en Villagarcía el 9 de marzo (1). Ante esto los sectores discrepantes del grupo pontevedrés comunicaron en una nota en *El País* que tal comité carecía de legitimidad y que a la asamblea no asistirían ni los diputados a Cortes ni algunos diputados provinciales ni muchas organizaciones del partido, para no legitimar a tal consejo "faccioso"; pues dicho comité provincial se encontraba pendiente del recurso ante el comité regional que había elevado el grupo de Pontevedra (2).

Así las cosas este grupo se reunió el 6 de abril, tomando importantes acuerdos por gran mayoría de votos, aunque no faltaron quienes defendieron la legitimidad del consejo provincial y de sus decisiones:

1.- Se acordó declarar la ilegalidad de la constitución del comité provincial y la consiguiente nulidad de todos sus acuerdos, y

2.- Consecuentemente no se enviaban delegados a la asamblea de Villagarcía (3).

(1)

Alfonso B. afirma que la convocatoria de la asamblea de Villagarcía procedía del Ejecutivo regional. *Op. cit.* p. 124.

(2)

El País, 4-4-33.

(3)

El País, 8-4-33.

Tales propuestas fueron apoyadas por el diputado Poza Juncal; la decisión, que se veía venir por las notas que el grupo pontevedrés insertó por aquellos días en *El País*, era claramente rupturista, y probablemente estaba ya tomada la decisión de ir hasta el final.

Las organizaciones locales que adoptaron esta misma postura firmaron una nota conjunta, alegando asimismo las irregularidades antes mencionadas de la constitución y acuerdos del comité provincial y anunciando su ausencia a la asamblea de Villagaría. Tales organizaciones, base inicial de la escisión, eran las siguientes: Pontevedra, Puentesampayo, Arcade, Pazos de Borbén, Mós, Redondela, La Lama, Domayo, Salceda de Caselas, Rodeiro, Arbo, Puenteacaldelas, Vilaboa, Meis, Dozón, Campo Lameiro y Fornelas de Montes.

El 21 de abril, aparece al fin en *El País* la noticia de que los dos diputados disidentes del PRG habían ingresado en Acción Republicana, incorporándose a la minoría parlamentaria y que el Consejo Nacional de Acción Republicana les había encomendado organizar el partido en la provincia. Ni en esta nota ni en el editorial que sobre el surgimiento de Acción Republicana dedica el periódico el mismo día, hay la más mínima alusión a ningún núcleo de Acción Republicana que viniese actuando con anterioridad en la provincia. Incluso se afirmaba que "existen aún desperdigadas por muchos pueblos, gentes que no se han enrolado en ningún Partido, porque sus simpatías estuvieron siempre al lado del Sr. Azaña ...". Tanto en la nota

informativa como en el editorial se augura un brillante porvenir a Acción Republicana, que surgía contando con importantes y numerosas organizaciones locales, pues tenían intención de ingresar en ella los centros del PRG de la provincia opuestos a los acuerdos adoptados en la impugnada asamblea de Villagarcía.

En el editorial que comentamos se subraya el prestigio que rodea a Acción Republicana, por las destacadas personalidades con que cuenta y por la orientación que Azaña le había dado, haciendo realidad los objetivos republicanos. Pero además, añadía, Acción Republicana era, gracias a Azaña, el campeón de la autonomía, pues a él se debía el que Cataluña contase con un estatuto; consecuentemente la aparición del partido en Pontevedra reforzaba la causa de la autonomía gallega. Desde luego, frente a ORGA-PRG, Acción Republicana podía competir sin desdoro en autonomismo.

Otro editorial dedicaría *El País* a la naciente Acción Republicana el siguiente día, 22 de abril. En él se justifica la incorporación de Poza Juncal y B. Ossorio Tafall a un partido distinto de aquél que les eligió diputados, en base a la identidad de programa entre ambos y sobre todo por no ser un acto personal: lo hacían respaldados por "la mitad, por lo menos, de las organizaciones del partido, y entre ellas las más fuertes...", las cuales se habían separado asimismo del PRG; a estas organizaciones era a las que debían el grueso de sus votos.

Hay un factor interesante en este editorial y es la total exculpación que respecto a los conflictos que habían llevado a la escisión se hace de Casares Quiroga. Frente a las acusaciones de caciquismo que se le hacían a éste con frecuencia, se achaca precisamente al alejamiento de Casares de la "pequeña política" local el origen de los conflictos (1). Esta actitud facilitaría sin duda, de ser sincera la afirmación, la posterior fusión del PRG con Acción Republicana un año más tarde, y por lo tanto de los sectores escindidos ahora.

La organización del partido en la provincia tendrá una primera fase en la que sucesivamente las organizaciones locales que siguieron a Poza Juncal y Fernández-Osorio T. celebraron asambleas en las que decidieron ratificar su negativa a aceptar los acuerdos de la asamblea de Villagarcía y optaran por lo tanto separarse del PRG y al igual que ambos diputados ingresar en Acción Republicana. Los acuerdos del "ilegal" comité provincial y de la asamblea de Villagarcía se habían convertido en definitivos al limitarse el comité regional a ratificar los acuerdos tomados en Villagarcía (2).

(1) El editorial afirma textualmente, "y hemos de hacer constar, para cortar malévolos comentarios, que estimamos que el Sr. Casares Quiroga está por encima de los ataques que se le dirigen aprovechando estas cuestiones de orden interior que han surgido dentro del partido que acaudilla. En todo momento el Sr. Casares ha demostrado una gran altura de miras, y precisamente su austeridad y pulcritud políticas, han sido la causa de estas disensiones, porque a la sombra de su alejamiento de las pequeñas y pobres cuestiones de partido, los ambiciosos han especulado e introdujeron en el seno de las Organizaciones el virus de la discordia".

(2) En la asamblea del grupo de Pontevedra se informó de esta postura del comité regional que para los escisionistas le hacía incurrir asimismo en una postura "ilegal", *El País*, 26-4-33.

Así fueron ingresando en Acción Republicana, tras la correspondiente asamblea local las siguientes organizaciones: Pontevedra, (en abril); Valga, Puente Sampayo, Lalín, La Estrada, Dozón, Puente Caldelas, La Lama, Vilaboa, Arcade, Meis, Salceda de Caselas, Rodeiro, Catoira (en mayo); Domayo, Mondáriz Balneario, (en junio); Cambades, Mos, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Tuy, Redondela, Vigo (en julio); Geve, (agosto).

Una consecuencia inmediata de la escisión fue la rápida destitución por el gobernador Sr. Castelló (frecuentemente criticado en El País) de los tres diputados provinciales que habían abandonado el PRG pasándose a Acción Republicana: Rey, Orge y Rodríguez Seijo (1). El País criticó este acto negando que la proporcionalidad en el reparto de puestos entre los partidos lo justificase.

En la junta general que el grupo local de Pontevedra celebró el 29 de Junio. (2), aparte las cuestiones de trámite (aunque no se dan cifras de afiliados, se habla de la satisfacción por el gran número de solicitudes de ingreso), se discutió la necesidad de realizar una asamblea provincial, dado el número de localidades en que se había organizado el partido, con objeto de constituir el consejo provincial, articular un plan de propaganda política, etc.,: en definitiva estructurar el partido a nivel provincial. Además se preveía cercana la próxima Asamblea nacional. Se acordó celebrarla el 30 de Julio.

(1) *El País*, 30-5-33

(2) *El País*, 30-6-33

Poza Juncal dio cuenta por su parte de la tramitación de la reciente crisis gubernamental, y del interés con que el partido de Acción Republicana y el Consejo Nacional seguían la problemática de la nueva organización provincial.

Así el 30 de Julio tuvo lugar la primera asamblea provincial de Acción Republicana de Pontevedra (1). El orden del día incluía, una exposición sobre la labor realizada por la Comisión organizadora del partido, discusiones sobre política nacional y sobre política regional y provincial, y la elección del consejo provincial.

Fernández-Osorio expuso dentro del primer punto citado las causas de la separación suya y de Poza Juncal del PRG y su adhesión a Acción Republicana. La causa de fondo de la separación había sido el caciquismo imperante en el PRG; el programa del PRG expuesto en Lugo en un discurso de Casares en Octubre de 1932, les pareció en su momento positivo; pero no se había llevado a cabo, vulnerando los estatutos que por aquella época se aprobaron. En cuanto a sus diferencias con los organismos superiores del PRG habían recurrido al propio Casares, quien les había aconsejado apurar los cauces regulares organizativos; pero agotados estos sin resultado alguno y no interviniendo directamente Casares, decidieron separarse del PRG. A esta situación interna se sumaba la desafortunada actuación del gobernador Sr. Castelló.

(1) *El País*, 31-7-33

Una vez decidida la separación de la organización del PRG, si se quería proseguir una labor política eficaz, no les quedaba otro remedio que sumarse al partido más afín. Tras asistir al acto de AR en Bilbao en el mes de abril de 1933, se iniciaron conversaciones con Azaña, Giral y otros. Azaña trató el caso incluso con Casares, lo cual, afirmaba Fernández-Osorio, era completamente normal dada la relación política e incluso personal de amistad existente entre ambos. El informe de Casares, había sido, añadía, plenamente elogioso respecto a los afectados.

Al explicar todo este proceso el orador hizo un cumplido elogio de la personalidad de Casares, lamentando que su digna postura de mezclarse en rencillas intrapartidarias diese ocasión a que se produjesen caciqueos de toda índole. Como puede observarse es una versión de la actuación de Casares en el partido radicalmente contrario a la que habitualmente se expone.

Respecto a la fuerza y extensión del partido en este momento las juzgaba con optimismo, puesto que en tres meses se contaba con 23 organizaciones locales, ya constituidas, habiendo más en tramitación. Por esta fecha, entre unas y otras debía haber cerca de treinta.

Sobre política nacional se aprobó una noción pidiendo la implatación del impuesto progresivo sobre la renta, para posibilitar el equilibrio presupuestario perseguido sin incrementar el peso fiscal sobre las capas humildes.

La discusión fue más viva al tratar la política regional, sobre la que se tocaron dos puntos, la autonomía y los problemas de las clases populares gallegas.

Respecto al primero, parecía haber dos polos. Uno, reticente ante una autonomía amplia, defendido por el Sr. Bernardez, que consideraba que un traspaso de servicios abundante a una Galicia autónoma podía resultar más caro y no encontrar a Galicia preparada para ello; defendía que si bien Acción Republicana debía apoyar la autonomía, posición que correspondía a su programa, no debía convertirse en la cabeza visible del movimiento autonomista.

Poza Juncal y Fernández-Osorio T. defendieron la posición contraria respecto al hipotético coste de la autonomía, la cual facilitaría además la eliminación del caciquismo. Fernández-Osorio y Tafall añadió que el que una sola región gozase de autonomía era un privilegio, defendiendo la proliferación de regímenes de autonomía. Aclaró también, que al igual que lo ocurrido con el Estatuto catalán, el texto del proyecto era una base que podía ser distinta del aprobado en definitiva. El apoyo al plebiscito no suponía por tanto identificación con el texto del proyecto. Es una posición interesante frente a los grupos gallegistas más radicales, dado que es la asunción por parte del sector más autonomista de AR de la postura oficial del partido.

Respecto a otras cuestiones de la política regional se trató de los intereses gallegos en relación con la ley de

Arrendamientos Rústicos, la oposición al tratado sobre importación de carnes con el Uruguay, y la actuación caciquil del gobernador Sr. Castelló y la diputación provincial.

Las conclusiones dadas a la prensa reflejan fielmente esta amplia referencia que había insertado el periódico oficioso del partido.

El consejo provincial elegido fue el siguiente: presidente, Alejandro Viana Esperón, (precedente de la organización Vigo); vicepresidente, Telmo Bernardez Santomé y José Fondevila; secretario, Paulo Novas Souto; tesorero, Ernesto Pedrosa Paz; vicesecretario, Salustiano Jorge Franco y Contador Guillermo Vicente de Santiago, a los que se sumaban 11 vocales por los partidos judiciales (1).

El consejo provincial, una vez elegidos todos los vocales por las organizaciones locales de los diversos partidos judiciales, se reunió el 27 de agosto para tratar entre otros temas la cuestión de las próximas elecciones para vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales; como ya dijimos, ante la desunión reinante entre los partidos republicanos, Acción Republicana de Pontevedra presentó un candidato propio a vocal suplente como muestra testimonial de su fuerza.

Según una nota de la secretaría provincial aparecida en *El País* el 5-9-33, el partido contaba en ese momento con 36 organizaciones locales.

(1) *El País*, 22 y 23-8-33

Como en todas las organizaciones provinciales de Acción Republicana se celebró una nueva asamblea provincial antes de la nacional de octubre. La de Pontevedra tuvo lugar el 8 de este mes. En ella se nombró la delegación que habría que acudir a la asamblea nacional y que resultó compuesto por A. Viana Esperón, T. Bernández Santomé, A. Rey Juncal, Alfredo Lorenzo, Florencio Soto y Antonio Ruiz.

Tras la Asamblea nacional tuvo lugar una asamblea provincial (el 19 de octubre) con objeto de dar cuenta de los acuerdos adoptados en aquello (1). También se trataron el tema electoral, sobre el que se acordaría proponer una coalición republicano socialista y se designaron los candidatos del partido (2).

De nuevo tras las elecciones se realizarían reuniones en las agrupaciones locales y posteriormente una asamblea provincial con objeto de hacer un balance de resultado. En la reunión de la agrupación local de Pontevedra (el 28-12-33) (3) se afirmó que el crecimiento del partido era considerable en todas las agrupaciones, destacando que desde la constitución del consejo local de Pontevedra el número de socios se había duplicado. Poza Juncal sería el delegado del grupo local elegido para la asamblea provincial y en la nueva directiva elegida pa-

(1) *El País*, 20-10-33

(2) *El País*, 26-10-33

(3) *El País*, 29-12-33

1934, el presidente del grupo local era B. Fernández-Osorio Tafall) (1).

En dicha asamblea provincial (2), reunida el 31-12-34, se dio cuenta por Poza Juncal de todo lo relacionado con la gestión del comité electoral, de las alianzas concertadas, y según afirmó, de la deslealtad de algunos de los aliados (3). Aunque correspondía elegir nuevo comité provincial, dado el poco tiempo que llevaba en funciones, se decidió que continuase el elegido en julio y puesto que su gestión fue juzgada como muy positiva. Se dio cuenta también del plan de propaganda acordado por el CN en su reunión del 6 de diciembre.

Hasta el 24 de febrero no aparece en el periódico oficioso del partido la primera referencia al tema de la fusión, informando que el CN había solicitado la opinión de las organizaciones provinciales al tiempo que informaba de las gestiones realizadas hasta el momento. Para tratar este tema y los delegados que habían de ir a la asamblea nacional para decidir el futuro del partido, se convocó una nueva asamblea provincial.

En ésta que tuvo lugar el 4-3-34 (4), tras leer las

(1) El anterior, elegido en abril, era Maximiliano Pérez Prego.

(2) *El País*, 1-1-34

(3) Se mencionó un escándalo electoral que se había producido en Rodeiro, cuyo alcalde era de Acción Republicana, el cual alegó su irresponsabilidad; prueba del espíritu anticaciquil que reinaba en el partido es la resolución tomada de investigar los hechos y expulsar a cualquier afiliado que hubiera participado en ellos.

(4) *El País*, 5-3-34

circulares del CN todos los oradores se mostraron conformes con la necesidad de la fusión. Viana, presidente provincial, argumentó la necesidad de que fueran a la fusión no sólo las organizaciones que ahora estaban dispuestas sino también las restantes: diversas fracciones radical socialistas y los seguidores de Sánchez Román entre otras. También expresó la opinión de que el representante de la provincia se pusiese de acuerdo con los de Orense y Lugo para todo lo referente a la fusión en la región, única en la que era tripartita, al estar presente la Orga-PRG. Parece esto indicar que se carecía de organización en La Coruña.

En consecuencia se acordó por unanimidad contestar al CN que la provincia se decidía por la fusión, eligiendo como representante suyo para la Asamblea nacional al propio Viana, a quien se le encomendaba el contacto con las restantes organizaciones provinciales gallegas del partido. El diputado Poza Juncal publicaría el 8 de Marzo en *El País* un artículo defendiendo ardientemente la necesidad de la unión de los republicanos.

Aunque no han llegado hasta nosotros pruebas tangibles de carácter orgánico interno, como en el caso de Castellón, sobre reticencias a la fusión con los mismos de quienes que se habían separado hacía un año escaso, tales reticencias debieron existir. Prueba de ello lo constituye al fin y al cabo el editorial del 27 de marzo en *El País* en el que dos días antes de la fusión se criticaba todavía acremente a la ORGA, como preferían seguir llamando al PRG. Se afirmaba que éste tan sólo aportaba a la fusión maltrechos restos de un partido, minados por el caciquismo y la politiquería y prometían permanecer vigilantes para impedir toda contaminación.

F. VALENCIA

VALENCIA

Acción República comenzó su existencia en Valencia semanas después de la proclamación de la República, con la constitución en la capital de un grupo de profesionales, concretamente de médicos y catedráticos de Instituto y Universidad, que fueron el núcleo organizador del partido. Entre ellos estaban los que dirigirían Acción República en los siguientes tres años, como Alvarez Pastor, José Pubhe, etc. (1).

No sería sin embargo hasta cerca de un año más tarde, en abril del 32, cuando se celebró la primera asamblea del partido, con carácter de asamblea constituyente; ante ella dimitió el comité provisional, que no había sido elegido, y se eligió nuevo consejo, resultando presidente el señor Alvarez Pastor (2).

A lo largo del año siguiente se estructuró la organización provincial, produciéndose una serie de conflictos, cuyos detalles desconocemos y sólo superados con la reestructuración realizada a partir de la asamblea provincial de 28-10-33. No conocemos las causas, pero el hecho es que el consejo provin-cial presidido por D. Enrique García Torres, que tomó posesión en abril de 1933 fue destituido por el Consejo Nacional del partido (3).

(1) *El Sol*, 20-6-31. *Diario de Valencia*, 19-6-31, cit. en Aguiló Lucía, *Las elecciones...* p. 73.

(2) *El Liberal*, 23-4-32

(3) Datos del libro de actas del consejo provincial constituido en noviem-
bre de 1933, AS, Madrid-611, Legajo 4004.

Tras el mandato provisional de un consejo nombrado desde Madrid y que presidió don José Puche, catedrático fundador del partido en la capital valenciana, se llegó a la asamblea citada de octubre en la que se procedió al nombramiento de nuevo consejo provincial, del cual resultó elegido presidente J. Alvarez Pastor, se aprobó asimismo el reglamento provincial. La situación en que se encontraba el partido y que salió a la luz en ésta asamblea era desastrosa; el secretario y tesorero del consejo cesado no habían hecho entrega de los libros de actas ni de fondo alguno, por lo que la secretaría quedaba completamente por rehacer. Durante el tiempo en que "ejerció" su función el consejo citado no se habían recaudado los aportaciones de los grupos locales; aproximadamente debieron ser dos meses, pues en julio ya estaba designado por el Consejo Nacional el consejo provincial provisional; es difícil de imaginar cómo se eligió a un consejo semejante que tan catástrofico resultó para el partido. Creemos que estos conflictos internos, no infrecuentes como estamos comprobando tenían bastante que ver con la ambigüedad ideológica de muchos republicanos, que en un determinado momento, a veces por intereses políticos personales (en este caso puede ser una hipótesis, la creencia en una próxima caída de Azaña), eran capaces de pasarse a otro partido republicano sin excesivos escrúpulos.

En cualquier caso, si pensamos que ese era el estado del partido a un mes de las elecciones generales, pues el consejo provisional no parecía haber iniciado la reorganización, se comprenderá lo grave de la situación. Se acordó comunicar a to-

dos los grupos locales la constitución del consejo provincial, solicitando su adhesión por escrito al nuevo organismo y acatamiento a la disciplina del partido y al reglamento aprobado en esta asamblea. Respecto a la situación económica se decidió que los grupos locales entregasen las cuotas que adeudasen hasta la suspensión del anterior consejo provincial y a partir de julio.

Ante esta situación sumada a las perspectivas nacionales, la opinión del consejo provincial frente a las elecciones era bastante pesimista. El dos de noviembre acordó aceptar el número de candidatos del partido que le asignase el comité de enlace del bloque de izquierdas; no debían ser muchas las esperanzas ni estimar en exceso sus fuerzas pues decidieron que incluso en el caso de no asignárseles ningún puesto en las listas se apoyaría con todo entusiasmo dicha candidatura de izquierdas; desconocemos hasta qué punto la debilidad del partido era debido a su escaso arraigo o estaba ocasionada por la crisis organizativa que había sufrido en los últimos seis meses. Esta situación resalta más si se recuerda que por Valencia había sido elegido diputado Azaña en 1931.

Tras las gestiones realizadas, a Acción Republicana le fueron atribuidos dos puestos, uno por la capital -Alvarez Pastor-, por donde la lucha la daban por perdida de antemano, y otro por la provincia, Donat; lo que más interesaba al partido era conseguir un puesto en la lista por la provincia, donde podía haber alguna posibilidad, aceptando la inclusión de la pri

mera figura del partido por la capital, con tal de que se le cediera un lugar en la circunscripción provincial. Ya vimos los resultados en el capítulo correspondiente (1).

La efectiva reorganización provincial y el restablecimiento de los lazos con las organizaciones locales, sin duda por haberse echado encima el periodo electoral, no se llevó a la práctica hasta diciembre. El 9 de éste mes el consejo envió una circular a los 44 grupos locales que antes de la crisis interna pertenecían a Acción Republicana, para saber con cuantos de ellos se contaba, y decidió visitar a los que no contestasen en un plazo de diez días. La repetida utilización del término "disolución" para calificar la destitución del antiguo consejo provincial, junto con la situación y reestructuración que estamos describiendo, nos hace adquirir la convicción que eso fue lo que efectivamente se realizó con la organización provincial: disolverla, como consecuencia de la crisis y sus resultados, para permitir su reconstitución; extraña tan sólo que esta labor no fuera ya acometida por el consejo provisional en el verano.

Tan sólo la cuarta parte de los grupos contestaron a la circular adhiriéndose de manera "franca y leal": 11. Otros contestaron de diversas maneras, condicionando su unión a la integración de los grupos de izquierda, dándose de baja, etc. la cifra de los adheridos aumentaría a 14 pueblos en febrero del 34 y en marzo del mismo año, antes de la fusión en IR, se sumaron 21 pueblos más, gracias a las gestiones al parecer del

(1) Vid. *supra* cap. V. 5

Sr. Manteca (1). Aunque parece que hubo ciertas reticencias ante estas adhesiones, pues se acordó realizar una investigación sobre antecedentes políticos de los directivos de los grupos, y recabar más datos sobre éstos al cabo se les admitió, pues días después se acordó enviar una relación de los mismos al Consejo nacional. Con ello, al tiempo de la constitución de Izquierda Republicana, Acción Republicana contaba con 35 grupos locales.

A partir de enero se produciría otra renovación del consejo provincial, al dimitir el elegido en octubre por disensiones internas. En nueva asamblea fue elegido presidente don José Puche (2).

Respecto a la fusión en IR, las negociaciones tuvieron lugar a lo largo de los meses de febrero y marzo, participando en ellas los RSI, y ciertos federales estableciendo contacto también con algunos grupos valencianistas que podían estar interesados, aunque ignoramos si alguno de ellos se acabó sumando al nuevo partido.

Repetimos aquí lo que ya avanzamos al hablar de la organización de Castellón, y es la absoluta falta de contactos, que sepamos entre las dos provincias valencianas (y suponemos que lo mismo ocurriría con Alicante). Lo cual prueba la poca asunción

(1) Reunión del consejo provincial de 7-3-34.

(2) El presidente Alvarez Pastor había dimitido por cambio de domicilio a comienzos de enero. El 31 del mismo mes dimitía el resto del consejo por discrepancias con la actuación del vicepresidente Sr. Orozco. Libro de actas, hojas 11 y 15.

que del tema regional había en Acción Republicana de estas pro
vincias, como ocurría en general con los partidos republicanos,
excepción hecha de los expresamente valencianistas. Ya vimos
la participación sin embargo de Acción Republicana en las ta-
reas proautonomistas. Ahora bien no como una iniciativa propia
de Acción Republicana, que hubiera conllevado la relación de
las organizaciones de Acción Republicana de las tres provin-
cias para la coordinación de sus trabajos y la presión sobre
el partido en Madrid para acelerar la obtención de la autono-
mía. La Esquerra Republicana del País Valencia quedo como una
experiencia aislada del partido en Castellón y que se saldó
con un rotundo fracaso y la vuelta de aquella al molde uniform
e de Izquierda Republicana.

G. ALGUNOS RASGOS GENERALES

ALGUNOS RASGOS GENERALES

Se pueden trazar algunos de los rasgos generales a partir del desarrollo político y organizativo de las organizaciones provinciales que acabamos de exponer. El estudio de las provincias vistas podemos considerarlo casi como un muestreo fiel de las restantes, creemos que es así porque las noticias aisladas recogidas respecto a provincias de las que no contábamos con suficiente material como para intentar seguir su evolución, coinciden con los rasgos que ahora vamos a enumerar. Conviene precisar que no tratamos ahora determinados puntos que veremos en otros epígrafes, como la relevancia de los diputados en el seno de sus respectivas organizaciones provinciales.

- Como un dato indiscutible hay que considerar la existencia de una efectiva vida partidaria interna. Tanto los órganos ejecutivos como las asambleas se reunían aproximadamente con la frecuencia estipulada por los Estatutos y reglamentos. El juego entre ambos tipos de órganos funcionaba asimismo con normalidad, rindiendo cuentas los comités ante las asambleas y procediendo éstas a la elección de aquéllos.

- En todas las provincias se observa una progresiva consolidación del partido, creciendo numéricamente las organizaciones locales ya existentes y creándose donde no existían. Un crecimiento lento pero que en general no es contradicho en ninguna provincia. Otro aspecto de esta consolidación es la paulatina puesta en funcionamiento de los órganos intermedios entre las organizaciones locales y los órganos centrales: la

organización provincial (asamblea y consejo), entra progresivamente en funcionamiento por lo general a lo largo de 1932, siempre con posterioridad a la creación de un determinado número de organizaciones locales.

- Se puede constatar la abundancia de enfrentamientos de tipo personal, las más de las veces sin que advirtamos motivaciones ideológicas. Esto provocaría frecuentemente dimisiones y renovaciones de los consejos directivos, y en algún caso aislado (Valencia), la necesidad de reorganizar toda la organización provincial. Se trata, a nuestro modo de ver, de conflictos producto de usos de la vieja política. No hay que olvidar que aunque Acción Republicana nazca en 1931 como un moderno partido de masas, muchas veces las organizaciones locales existían ya previamente, y necesitaban por tanto adaptarse a una vida orgánica a la que no estaban acostumbrados. Incluso en los casos en los que la organización local fuese de nueva creación muchos de los prohombres serían republicanos "históricos" habituados a otros usos políticos más personal.

- Existía una gran homogeneidad ideológica, por encima de que las interpretaciones del programa fuesen más o menos progresistas. Tal homogeneidad se comprueba en los temas discutidos en las asambleas, en las propuestas aprobadas, etc. Machaconamente todas insisten en puntos de vista semejantes. Sin duda si pudiésemos hacer extensivo el estudio a la totalidad de las organizaciones provinciales encontraríamos algunas dívergencias, especialmente en aquéllas más conservadoras (Ávila, Cáceres); pero en cualquier caso no hay motivos para pensar que las

discrepancias fuesen de importancia.

- Insistir en las funciones no específicamente políticas que cara a los militantes hemos constatado que asumían las organizaciones locales de Acción Republicana, funciones en relación con las crisis económica (búsqueda de trabajo por ejemplo) o de asesoramiento en las relaciones con la administración, etc. Sin que podamos considerarlas como tareas especialmente importantes en Acción Republicana, es interesante que fuesen asumidas en alguna medida por una organización política.

4. ORGANIZACION CENTRAL

A. ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS

ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS

"La Asamblea Nacional de Delegados es el órgano supremo y soberano del partido. Sus fallos y acuerdos son inapelables". Así reza el artículo 26 de los Estatutos, el primero de los dedicados al órgano donde reside la soberanía del partido. La Asamblea se compone de dos tipos de miembros, los integrantes del Consejo Nacional, que forman parte de ella por propio derecho, y los representantes provinciales, elegidos por las respectivas organizaciones.

Los miembros del Consejo Nacional eran elegidos, como veremos, por la misma Asamblea nacional, cada cuatro años. Los representantes provinciales lo eran en asambleas provinciales, sin que se especifique un número preciso de delegados por provincia; pero lo importante es que cada representación provincial posee un número de votos determinado, en proporción al número de militantes de su provincia, a razón de un voto por cada quinientos afiliados o fracción de ese número. Aunque en el artículo 27 en el que se regula esta materia no se especifica con claridad parece deducirse que el voto de la delegación de una provincia ha de ejercitarse en bloque en un sólo sentido. Desde luego así se hizo en la práctica en las Asambleas nacionales realizadas.

De esta forma una representación provincial debería decidir primero en su seno para luego votar en la Asamblea. Es un sistema que facilita la adopción de decisiones al favorecer la formación de mayorías claras en la votación final en la asam-

blea, especialmente cuando la mayoría a favor de una decisión es escasa en el seno de cada representación provincial. Tiene como contrapartida el ocultar la fuerza de la minoría adversa a la medida de que se trate, salvo que esta minoría tenga suficiente fuerza como para ser mayoritaria en el seno de algunas representaciones provinciales. Por otra parte el que una delegación provincial representase las corrientes que pudiera existir en la organización provincial depende del procedimiento que se hubiera seguido para su elección, procedimiento que los estatutos no estipulaban y que dependía de las asambleas provinciales.

Se establece una periodicidad anual para la celebración de Asambleas nacionales ordinarias, que habrían de ser en enero. Con carácter extraordinario se podrían convocar cuantas fuesen necesarias, bien a iniciativa del Consejo nacional bien de seis consejos provinciales. Esta periodicidad anual de reuniones ordinarias se cumplió en el corto período de tiempo en que estuvieron en vigor estos estatutos. En efecto, Acción Republicana celebró cinco Asambleas nacionales. La primera mayo de 1931 fue la Asamblea fundacional, a pesar de que la constitución en partido ya había sido decidida previamente en la cual se aprobó el programa y se eligió el Consejo Nacional. La segunda (septiembre de 1931) fue en la que se aprobaron precisamente los estatutos; en los dos años en que estos estuvieron en vigor se celebraron sendas asambleas, aunque sin respetar la prevista fecha de enero: en 1932 se celebró en marzo y en 1933, tras sucesivos aplazamientos a los que ya hicimos referencia

se celebró en octubre. Esta Asamblea en realidad era también extraordinaria, pues en ella se reformaron los Estatutos, además de contar con un punto en el orden del día de carácter efectivamente extraordinario como eran las elecciones legislativas. En lo referente a la regulación de la Asamblea nacional la única modificación que sufrieron los estatutos en esta reforma fue precisamente suprimir la fecha del mes de enero como fecha fija en la que había de celebrarse la asamblea anual, prescripción que se había mostrado imposible de cumplir por diversas circunstancias. La quinta y última Asamblea nacional fue la de disolución, en marzo de 1934.

La convocatoria la había de efectuar el presidente del partido a los consejos provinciales con veinte días de antelación, para que estos a su vez convocasen las correspondientes asambleas provinciales con objeto de elegir sus delegados, y para dar tiempo a que las organizaciones provinciales estudiaran las ponencias preparadas por el Consejo Nacional para discutir en la asamblea. El no haber contado con ellas con la debida antelación fue frecuentemente un motivo de queja en las Asambleas nacionales. Con objeto de garantizar la regularidad del nombramiento de los delegados se establecía un sistema de credenciales como requisito para participar como tales en las Asambleas.

En el artículo 31 se enumeran las atribuciones que corresponden a la Asamblea, y que ratifican el carácter soberano de la misma.

El acordar la disolución o fusión del partido, así como la posibilidad de concertar o disolver alianzas con otros partidos afines es la máxima expresión de ello (art. 31,1ª). En el segundo apartado se le atribuye la capacidad de modificar total o parcialmente el programa ideológico y los Estatutos. En estos dos apartados citados se concede a la Asamblea potestad para hacer y deshacer en los aspectos fundamentales de un partido, su propia existencia o independencia y sus objetivos políticos.

En los tres restantes apartados se configura la Asamblea como máxima instancia del partido para controlar y juzgar a los restantes organismos, y especialmente al Consejo Nacional, y para decidir sin ulterior recurso todo asunto relacionado con el partido. Así, ha de aprobar o desestimar la labor del Consejo Nacional (nº 3), lo que implica una fiscalización mínima actual de la gestión del supremo órgano ejecutivo del partido. De igual manera es función de la Asamblea nacional aprobar o censurar la labor política de los representantes en Cortes del Partido, estableciendo de esta forma un control sobre los parlamentarios propio de un partido de masas surgido al margen del parlamento, control que la regulación del Consejo Nacional reforzará como veremos; de todas maneras por razones especiales la minoría parlamentaria de Acción Republicana tendrá a lo largo de la corta historia del partido una importancia superior a la pretendida por sus Estatutos.

Por último se atribuye a la Asamblea de delegados la misión de resolver en última instancia cualquier conflicto o cuestión que se le someta y decidir todo lo que se refiera al partido (nº 5).

La reforma de los Estatutos era función exclusiva como dijimos de la Asamblea nacional, pero con ciertos requisitos, pues había de ser "convocada al efecto, a petición de diez consejeros provinciales, cuando menos" (art. 32) Atribuimos a una errata el que se hable de "consejeros provinciales", pues no tiene sentido exigir que la solicitud provenga de diez consejeros provinciales. Caben dos posibilidades: que debieran solicitarla diez *consejos* provinciales, o bien diez consejeros *nacionales*. Parece más representativo que la solicitud proviniera de diez consejos provinciales.

Por otra parte de facto fueron reformados en una Asamblea nacional que era en realidad la ordinaria varias veces aplazada que debía haberse realizado en enero de 1933; probablemente se contaría con el consentimiento de los consejos provinciales para incluir la reforma en el orden del día, requisito éste que en cualquier caso sí resultaba imprescindible.

En los artículos referidos a los organismos deliberantes en general, se establece como único procedimiento de votación para todos ellos la mayoría de votos, sin que se exija ningún tipo de quorum para ninguna clase de votaciones. Bastaba pues la mayoría simple de votos para adoptar decisiones sobre alteración del programa, estatutos, etc.

B. CONSEJO NACIONAL

CONSEJO NACIONAL

Constituía el Consejo Nacional la máxima autoridad ejecutiva del partido. Se componía de 25 miembros que habían de ser elegidos en su totalidad por sufragio directo y secreto en Asamblea nacional. El consejo tendría su sede en Madrid, y once de los consejeros habrían de residir forzosamente en la capital; los catorce restantes habían de ser representantes provinciales con residencia obligada en provincias. También se exigía un requisito de difícil cumplimiento, pues se debía *procurar* que los representantes provinciales se repartieran geográficamente de modo que estuviesen representadas en el Consejo todas las regiones. Esta preocupación por la distribución geográfica es una consecuencia de la postura proautonomista del partido (art. 14).

La duración del cargo de consejero por muy extraordinario que parezca no aparece regulada directamente en los estatutos, y muy probablemente por su errónea redacción. En efecto lo único que regulan los estatutos es que el cargo de miembro del Consejo nacional "no podrá ser reelegible hasta pasados cuatro años de su mandato" (art. 14). A través de éste inciso y gracias al texto de los estatutos reformados en 1933, sabemos que la intención era establecer en cuatro años la duración del cargo, estipulando que no fuera inmediatamente reelegible. Además también en los reglamentos provinciales y locales el cargo de consejero tenía una duración de 4 años.

Esta deficiente regulación fue corregida en 1933, estableciéndose con claridad en cuatro años la duración del cargo de consejero, manteniendo la no inmediata reelegibilidad. Sin embargo para evitar la renovación total del consejo se establecía que la elección se haría por mitades cada dos años, determinándose por sorteo los consejeros que habían de ser cesados por vez primera.

A pesar de esta precaución de estipular una renovación por mitades no deja de chocar un ultrademocratismo tan arraigado como la no reeligibilidad de los máximos cargos del partido sin excepción. En primer lugar porque la renovación necesaria de doce o trece miembros puede significar la alteración completa de una línea u orientación del partido, atentando innecesariamente contra su coherencia política, pues la gestión de los consejeros cesados podía ser satisfactoria a ojos del máximo órgano del partido, la Asamblea nacional. El riesgo de alteraciones en la línea del partido es claro ~~pues~~ aunque sea la Asamblea nacional la que decide sobre la orientación política general, la interpretación concreta y diaria de una política puede dar lugar -casi siempre da lugar- a posiciones totalmente antagónicas (apoyo o no apoyo a un Gobierno, por ejemplo).

En segundo lugar si la persistencia de las mismas personas a la cabeza de una organización política es algo habitual y comprobable, el combatirla mediante la necesaria renovación de todo o de la mitad del máximo organismo directivo puede tener consecuencias más graves que los inconvenientes que

se pretenden evitar. Además del mencionado de alterar de forma brusca la política del partido, el de fomentar la lucha de camarillas, propiciando las ambiciones personales, al poner en juego con frecuencia cargos para los que son necesarias personas distintas. La no reelegibilidad es un intento de romper una tendencia natural de las organizaciones, y no se puede asegurar que no sea perjudicial.

Por último sorprende que en un partido con un líder absolutamente indiscutido no se respete por lo menos la reelegibilidad del presidente del Consejo Nacional y del partido. Salvo modificaciones, que en este punto no se produjeron en la reforma de 1933, hubiera debido abandonar forzosamente la dirección del partido -y con él todo el núcleo fundador- a los cuatro años. La constitución de Izquierda Republicana impidió ver si se hubiera llevado hasta el fin esta normativa.

Los cargos de presidente, vicepresidente y secretario general habían de ser designados expresamente por la Asamblea nacional, al tiempo de elegir el Consejo nacional. Si eran necesarios más cargos los podría designar el propio Consejo. En uno y otro caso se trata de cargos entre los venticinco consejeros nacionales. Los tres cargos mencionados habían de residir forzosamente en Madrid y junto con otros cuatro vocales, también con residencia en la capital constituirían la comisión ejecutiva permanente. En 1933 se ampliarían a seis el número de los vocales que constituían esta comisión además de los tres primeros cargos.

Otra prescripción respecto a la composición del Consejo era exigir que el máximo número de consejeros que ostentasen representación parlamentaria fuera de siete, constituyendo como mucho una clara minoría dentro del Consejo. Como hemos visto al estudiar la Asamblea nacional, se pretendía al menos formalmente, que la minoría parlamentaria estuviese subordinada por completo a las directrices del partido. El mismo art. 16, además de la limitación numérica añade que la minoría parlamentaria "será mandataria del partido".

El Consejo había de reunirse regularmente una vez al mes, durante los diez primeros días de cada mes. Podría tener asimismo reuniones extraordinarias por convocatoria de la comisión ejecutiva o a petición de tres consejeros. La comisión ejecutiva a su vez debía reunirse dos veces al mes como mínimo. En la reforma de 1933 se estableció una periodicidad semanal para la comisión ejecutiva.

A la hora de especificar sus atribuciones el artículo 18 de los estatutos define al Consejo de una doble manera, como mandatario directo de la Asamblea nacional por un lado y como supremo órgano directivo por otro. Todas sus funciones se pueden reconducir a estas dos facetas del Consejo: órgano rector con capacidad para llevar una política determinada -dentro de las directrices generales dadas por la Asamblea general- y órgano ejecutor de las resoluciones concretas adoptadas por las Asambleas generales del partido.

Con relación a estas últimas se le encomienda ejecutar los acuerdos de la Asamblea nacional y preparar su celebración, tanto en reunión ordinaria como extraordinaria así como presentar a la asamblea las ponencias y proposiciones necesarias. Como órgano directivo, "dirigir la actuación política de partido dentro de las normas acordadas en las Asambleas nacionales", "resolver las cuestiones que se susciten entre los Consejos locales y provinciales" y "realizar, en suma, como organismo directivo del partido, todas aquellas gestiones que considere necesarias".

En este último caso, y cuando las decisiones sean de importancia, dando cuenta, en su día, a la primera Asamblea nacional que se celebre, cuando las urgencias o la gravedad de las circunstancias no permitan convocar una Asamblea extraordinaria. En suma y como ha de ser inevitablemente en un partido democrático, el control de la actuación de los órganos rectores elegidos es a posteriori, por medio de una rendición de cuentas ante el órgano asambleario soberano, quien emite un juicio político global sobre la gestión de la dirección.

El consejo podría solicitar el asesoramiento de personas entendidas en las materias sobre las que se discuta, pudiendo éstas personas asistir a las reuniones del Consejo a que se les citen, pero sin estar presentes en el momento de la decisión.

La comisión ejecutiva tiene a su vez una función de dirección permanente, pues no hay que olvidar que la mayoría

del Consejo Nacional (catorce miembros) tenían necesariamente su domicilio en provincias. Así en el art. 15 se le atribuye la misión de "resolver los asuntos de máxima urgencia, a cuyo efecto asumirá provisionalmente las facultades que competen de ordinario al Consejo Nacional, pero con la obligación de rendir inmediatamente al pleno del mismo cuenta de su gestión". En la reforma de 1933 se le añadiría a este párrafo un breve inciso que le confiere a la comisión ejecutiva un carácter de máximo órgano directivo sin reducirse a las cuestiones de decisión inaplazable, pues se le atribuye la "misión de resolver los asuntos de trámite y aquellos de máxima urgencia..."; al establecerse al tiempo una reunión semanal se convertía indudablemente en el verdadero órgano directivo del partido.

Sin embargo se procuraba compensar sus atribuciones con un severo control tanto por el pleno del Consejo como por la propia Asamblea nacional, pues a continuación en el artículo 20 -que permaneció intocado en 1933- se añade, "en casos urgentes o graves, la comisión ejecutiva podrá, previa citación de los demás consejeros que se encuentren en Madrid, tomar acuerdos; pero habrá de someter sus decisiones al Pleno del Consejo, primero, y, en definitiva, a la Asamblea Nacional".

Con lo cual queda en resumen algo confusa la regulación de la auténtica competencia de la comisión ejecutiva. Tal como resulta de los estatutos de 1931 y completando los arts. 15 y 20 su única función sería resolver los asuntos de máxima urgencia, convocando a los restantes consejeros que pudieran ha

llarse en Madrid -con lo que en realidad no funcionaría con autonomía como tal comisión ejecutiva-, y con la obligación de rendir inmediatamente cuentas al pleno o si la importancia del caso lo requiriera, a una Asamblea nacional. Y esto a pesar de que según el primero de dichos artículos se le atribuye precisamente en cuanto tal comisión ejecutiva el resolver las cuestiones inaplazables.

A partir de la reforma de octubre de 1933 mientras que para los asuntos graves y urgentes el mecanismo y atribuciones de la comisión ejecutiva son los mismos, si se le encomienda a en cuanto tal el resolver los asuntos de trámite, entre reunión y reunión mensual del Consejo.

Por último en el artículo 21, una vez más, se establece la responsabilidad del Consejo ante la Asamblea nacional de delegados, bien en la ordinaria del mes de enero -esta alusión al mes de enero se olvidó suprimirla en 1933- o en una extraordinaria convocada al efecto a petición por como mínimo de la cuarta parte de los consejos provinciales constituidos.

5. MANUAL AZAÑA Y LA MINORIA PARLAMENTARIA

A. EL PAPEL DE M. AZAÑA

EL PAPEL DE MANUEL AZAÑA

La figura de Manuel Azaña desborda el papel de líder de un partido político. Partidarios y adversarios de la política que él representó concuerdan en que si se puede hacer una afirmación de esta índole, la República fue Azaña. Que si la República representó un cambio de escenario respecto a la Monarquía y significó una renovación política y social, se debió sobre todo a la actuación y capacidad de Azaña.

Para una comprensión cabal de la relevancia de un personaje tan incomprendido y denigrado, y sin embargo a nuestro juicio uno de los más claros entendimientos políticos de este siglo en España, es imprescindible analizar no solamente el papel que desempeñara respecto a su partido, al fin y al cabo un partido minoritario, sino también su repercusión como valor político propio en el sistema de partidos y en el sistema político de la República. Por ello deberemos hablar nuevamente de él en el capítulo referente al sistema de partidos; ahora sin embargo nos limitaremos a la función de Azaña en relación con Acción Republicana, en el plano político y en el organizativo.

Si ha sido posible hablar de la identificación de Azaña y la República, cuanto más podría decirse lo mismo de Azaña y Acción Republicana. Acción Republicana era "el partido de Azaña", tanto como el Radical lo era de Lerroux. Ambos fueron líderes incontestados de sus respectivas organizaciones políticas. Sin embargo la actuación de ambos en el seno de éstas fue substancialmente distinta en el aspecto organizativo, aunque

más parecida desde un punto de vista político.

Respecto a Acción Republicana en cuanto organización, Azaña se despreocupó siempre todo cuanto pudo, y en ocasiones absolutamente. Si bien estuvo entre los fundadores y redactó el manifiesto inicial, no se puede decir en modo alguno que el partido fuese creación suya. Las dos figuras que se encargaron de la tarea de dar a luz una organización política fueron Giral y Martí Jara. El núcleo de amigos políticos del primero, la Escuela Nueva, etc. fue de donde surgió la actividad organizativa. Y lo que es seguro es que si bien Azaña participaba en las decisiones políticas, no debió apenas hacerlo en las organizativas.

1925, el año de la creación del partido fue en palabras retrospectivas de Azaña "el más triste de su vida", encontrándose muy desanimado y "en desacuerdo con casi todo el mundo, porque casi todo el mundo ~~acataba~~ la dictadura de Primo de Rivera, o la encontraba muy buena", según sus propias afirmaciones. No sólo no se trasluce ningún entusiasmo por la tarea emprendida sino que reconoce abiertamente, que sus amigos tenían que llevarle a rastras a las reuniones, tanto del partido como de la Alianza Republicana; cuando Martí Jara le proponía para representar al partido era "con la extrañeza de algunos o con desdén de otros" (1). No hay ni rastro de actividad espontánea: era arrastrado por los amigos, a quienes habría que

(1) Azaña, OC IV p. 85-86

atribuir el mérito de que él hubiese superado su tendencia a inhibirse que en otras épocas de su vida había prevalido.

Pasando por encima de los años de la Dictadura, de escasa actividad política y proselitista de una organización como la incipiente de Acción Republicana, habría que llegar a la etapa Berenguer y a la República. La tónica de la actitud de Azaña entonces es similar. Participa en las reuniones del grupo madrileño -y no en todas-, pronunciando discursos de tipo político, pero ni es él quien lleva la iniciativa organizativa ni el tema parece interesarle mucho. Por último, ni siquiera tras la implantación de la República se altera esta pasividad ante las tareas organizativas tanto más necesarias cuanto se había decidido convertir Acción Republicana en un auténtico partido político, y se imponía cara a las elecciones la tarea de extender el partido por las provincias.

Azaña estaba dispuesto a participar en las tareas propagandistas necesarias para una campaña electoral, en participar en actos de afirmación ideológica del partido, pero no a encargarse de planificar y controlar tales labores organizativas. Así, a lo largo de la República, vemos cómo Azaña realiza efectivamente extensas giras electorales en las dos campañas electorales y cómo va a diversas ciudades a pronunciar discursos políticos de importancia, en actos montados por las organizaciones provinciales del partido.

Pero él no se va a inmiscuir en las cuestiones de política provinciana de carácter interno del partido. A través de

las anotaciones que va haciendo en su diario se puede comprobar un desinterés absoluto por dichas cuestiones; en una ocasión, tras una reunión del Consejo Nacional del partido apunta simplemente "Muchas historias politico-provincianas" (1) sin ocultar su escaso gusto por dicho tipo de historias, por lo demás abundantes como hemos podido comprobar al analizar la evolución de algunas provincias.

Así como Lerroux (2) tomaba frecuentemente partido en tales cuestiones internas, desde labores de reorganización hasta enfrentamientos internos, desplazamientos de unos dirigentes por otros, etc., todos los indicios que poseemos son de que nada más lejano a los deseos y actuación de Azaña.

No quiere esto decir, naturalmente, que Azaña no participase en la discusión de tales problemas en absoluto. El cumplió puntualmente con su función de presidente del partido participando en las reuniones de su Consejo Nacional, de frecuencia quincenal; por lo tanto suponemos que intervendría y daría su opinión en caso necesario. Pero es dudoso que se tomase mucho interés por estas cuestiones, según, repetimos sus propias afirmaciones. Otro ejemplo clarísimo es su actitud ante la inactividad de la secretaría del partido siendo secretario general Coca, que llegaba al extremo de no comenzar con asiduidad las reuniones del Consejo nacional. No consideró necesario urgir a dicha secretaría para que se pudiese en funcionamiento y tras la Asamblea nacional de septiembre de 1931 en que fue nombrado nuevo secretario general (V. Gaspar Soler) comentaría: "Por la tarde, Consejo de Acción Republicana, que, con el cam-

(1) Arrarás, *Memorias...* p. 322

(2) Para el partido radical vid. Ruiz Mangón, *El partido...*

bio de secretario, parece que va a entrar en actividad" (1).

O bien recordarsu irritación cuando el secretario del Ateneo, miembro del CN y diputado de Acción Republicana, de Castro le entretuvo durante una hora advirtiéndole del carácter conservador que estaba adquiriendo el partido y la necesidad de que Azaña personalmente lo encaucase y reorganizase a lo que le respondió "Le aseguro que estoy resuelto a no ocuparme de la dirección del partido, para lo que no tengo gusto ni tiempo; y que yo no he fundado nada todavía"; se refería a que Acción Republicana no era "su" partido y que él no lo había creado (2).

Ejemplos como estos tendríamos muchos, y no contamos con datos que muestren intervencionismos personalistas de Azaña en el interior de Acción Republicana. Diríase que esa fobia que Azaña sentía hacia los pasillos parlamentarios en opinión de Marichal, cuando estos servían sólo para sustraer sus funciones de publicidad a la cámara, se manifestaba también en esta aversión hacia las mequindades de la pequeña política provinciana e intra partidaria (3).

Esta despreocupación de las tareas organizativas del propio partido, centrado como estaba en su labor gubernamental ocasionó quejas por parte de algunos sectores del partido. Por

(1) Azaña, OC IV p. 137

(2) Azaña, OC IV p. 97

(3) vid. *La vocación* ... p. 191

ejemplo en junio de 1932 se encontraban quejosos los miembros del Consejo local de Madrid por el poco caso y atención que Azaña les dedicaba. Ante lo que éste anotaba irónicamente en su diario "Estos señores creen que yo tengo tiempo y atención sobrantes para hablar con los comités" (1).

Digamos por último que Azaña propio lo reconocía públicamente en septiembre de 1933 cuando declaraba a sus correligionarios que si hasta entonces las labores gubernamentales le habían impedido dedicarse a la organización del partido, pensaba hacerlo a partir de ese momento (2). Desconocemos si ya formada Izquierda Republicana Azaña participó más activamente en la reorganización del partido, aunque sí sabemos que se reunió semanalmente con el Consejo Nacional del partido, igual que había hecho mientras fue presidente de Acción Republicana (3).

Desde luego no hay que olvidar que la justificación que en dicha ocasión utilizó Azaña frente a sus correligionarios no era una simple excusa. Es posible que sin tanta labor gubernamental ininterrumpida -y a cargo de dos ministerios, Presidencia y Guerra-, se hubiese ocupado más del partido. En cualquier caso era desde luego una tarea poco de su agrado y a la que tampoco antes de la República prestó mucha atención.

(1) Azaña, OC IV p. 402

(2) *El Liberal*, 15-9-33

(3) Azaña, OC IV p. 660

Si respecto al aspecto organizativo Azaña se desentendió en la medida en que su cargo de presidente del Consejo nacional se lo permitía, políticamente en cambio fue un líder que influyó profundamente en la línea y actuación política de su partido.

Es precisamente desde el punto de vista de la dirección política, desde el que se puede hablar de "el partido de Azaña". Como ya señalamos en la primera parte de este estudio sin él no se explicaría la orientación ideológica del partido durante la etapa republicana, pues gran parte de sus componentes, sobre todo en el seno de la minoría parlamentaria, como veremos a continuación, era personas de talante sumamente moderado.

La decisión de luchar por la supervivencia de las Congresos, como se hizo con éxito, puesto que eran unas Cortes que permitían tanto coaliciones exclusivamente republicanas como republicano socialistas, y en donde existía una cómoda mayoría de izquierdas, fue una directriz suya. La opción republicano socialista, una vez que Lerroux -por error político de cálculo- renunciase a presidir una coalición republicana en diciembre del 31, y el contenido de esa opción (un reformismo avanzado), se debió a la claridad de juicio de Azaña, quien comprendió todas las posibilidades de gobierno que daba de sí.

Indudablemente estas opciones de gran política encajaban dentro de los planteamientos ideológicos de Acción Republicana, pero dada la generalidad de estos, no eran algo inevi-

table; sobre todo considerando la heterogenidad que el partido podía mostrar tras las elecciones a Cortes Constituyentes, el haber concretado por medio de la práctica política el problema de Acción Republicana en un avanzado reformismo de izquierdas se debe a las directrices políticas de Azaña. Pues no hay que olvidar que tras la implantación de la República se produjo el tantas veces mencionado aluvión de afiliados sobre todos los partidos republicanos; y no sólo a nivel de base, sino que también se produjo la afiliación a diversas minorías parlamentarias de los numerosos diputados que carecían de partido. Este nuevo ingrediente, desde militantes hasta diputados era el que podía provocar problemas -y de hecho en Acción Republicana los causó- tanto por su escasa homogeneidad ideológica como por su falta de costumbre de sometimiento a una disciplina partidaria.

Pues bien fue Azaña, a través de su papel de máximo líder ideológico y político del partido, quien fue el artífice de la homogeneidad de esos nuevos elementos incorporados a la dirección del partido, así como de que dicha homogeneidad se concretase en una interpretación avanzada e izquierdista de los postulados políticos del partido.

En el diario de Azaña tenemos abundantes testimonios de esta labor orientadora y directiva que Azaña desempeñó entre los prohombres de su partido. Así como al aludir a reuniones en las que los temas a tratar eran de carácter organizativo, jamás explicó el contenido de las discusiones, en aquellas

en las que la materia era política y había disensiones -recuérdese lo referente a la cuestión regional, o los restantes temas tratados en el cap. VI -Azaña explica frecuentemente cómo tenía que emplearse a fondo para persuadir a los reticentes a aceptar los planteamientos del partido, para lograr limar diferencias y obtener planteamientos comunes.

Es imprescindible notar que no se trataba en estos casos de adoptar una resolución estrictamente política, de forma que cualquiera de las opciones escogidas pudiese encajar dentro de unos mismos planteamientos ideológicos, sino de discusiones sobre diversas soluciones ideológicamente distintas, y en ocasiones antagónicas (pro y antiautonomistas, por ejemplo). En tal situación el homogenizar las posturas hasta reconducirlas a una común que se ajustara a los planteamientos programáticos del partido, era una tarea árdua que llevaba a veces numerosas reuniones.

Y si bien hemos afirmado antes que Azaña se inhibió casi de manera radical en todo lo referente a cuestiones organizativas, habría que hacer una excepción en lo relativo a la disciplina del grupo parlamentario. En efecto. unas discrepancias ideológicas tan marcadas no podían por menos de provocar indisciplinas en las votaciones parlamentarias, que, como ya vimos, traían la consecuencia de frecuentes intentos de dimisión del jefe de la minoría parlamentaria, que en esos primeros momentos era Giral.

Para evitar las indisciplinas en el comportamiento parlamentario si intervino Azaña con cierta frecuencia en los primeros tiempos, teniendo algunos asperos encuentros con diputados de su partido. Con el tiempo este problema fue aminorándose, conforme el partido fue adquiriendo una mayor homogeneidad y se fue produciendo una forzada identificación de la mayoría parlamentaria con el Gobierno como consecuencia del enfrentamiento parlamentario entre mayoría gubernamental y las oposiciones republicana y derechista.

También en cuestiones ideológicas, conforme la coalición republicano-socialista fue adquiriendo sus contornos precisos sobre lo que estaban en condiciones de hacer y los límites que no iban a traspasar en sus reformas, Acción Republicana fue consiguiendo asimismo una coherencia que hacía innecesaria una intervención tan destacada de Azaña en la labor de uniformación ideológica.

Sin embargo su papel de líder efectivo que toma o inspira las decisiones políticas fundamentales que atañen al partido no decayó en un sólo momento. Todas las decisiones a lo largo de las crisis gubernamentales, sus relaciones de Acción Republicana con los restantes partidos etc., estaban basadas en los juicios y decisiones de Azaña.

Sus concepciones sobre lo que debían ser las relaciones adecuadas entre un Gobierno y las organizaciones políticas que lo sostenían parlamentariamente favorecían además ese papel determinante en las decisiones políticas de su partido. Pa

ra Azaña, un Gobierno no podía ser en modo alguno un mandatario de los partidos que le apoyaban. El gobierno gobernaba con plena autonomía dentro de la orientación política de la mayoría en que se basaba, sin que se tuviera que someter a líneas de actuación detalladas o programas, como el que Galarza, en nombre de la FIRPE le presentó con gran irritación suya en mayo de 1933, sin que le concediese la más mínima atención(1).

Dentro de la media ideológica y política de la mayoría y de los pactos más o menos detallados, elaborados por sus componentes el Gobierno había de elaborar con independencia su propio programa y su prelación de objetivos. Con él se presentaba a las Cortes y si se le otorgaba la confianza, al Gobierno sólo correspondía ir poniendo en práctica la línea de actuación elaborada. Por supuesto en las Cortes, o más exactamente en los integrantes de la mayoría parlamentaria, residía en último término la posibilidad de considerar que los pactos programáticos previos o la línea ideológica de la coalición no se veía fielmente reflejada en la actuación gubernamental y en consecuencia de negar al Gobierno su confianza. Pero insistentes, Azaña exigía una auténtica independencia de los partidos en la función gubernamental.

Así pues incluso ante exigencias de los partidos relativas a la interpretación de un programa de coalición, Azaña reivindicaba su derecho a hacer caso omiso y plantear la cuestión de confianza, explícita o implícitamente; los partidos te

(1) Azaña, OC IV p. 536

nían la posibilidad, si estimaban que el Gobierno no era suficientemente aceptable, de hacerle caer.

Esta concepción sobre las funciones que corresponden al gobierno dentro del sistema parlamentario favorecía en gran medida la estabilidad gubernamental. A reserva de que posteriormente analicemos más profundamente este fenómeno, podemos afirmar que Azaña de forma intuitiva procuraba aplicar una interpretación del sistema parlamentario que la moderna Ciencia Política propugna como medio de garantizar la estabilidad gubernamental, al primar la personalidad del Gobierno y, como veremos, de su Jefe, otorgando al Parlamento una función meramente instrumental, la de plasmar en medidas legales la política del Gobierno, siempre claro está, que éste cuente con su confianza.

Pues bien, la importancia que Azaña concedía a la labor de discusión y transacción intragubernamental tenía forzosamente que fortalecer su posición como líder político de un partido. En efecto, Azaña tendía a adoptar las decisiones políticas importantes más en el seno del Gobierno, donde al fin y al cabo era donde había otras partes representadas y donde podía haber una verdadera oposición, que en el seno del partido.

Por supuesto repetimos que se trataba de proyectos de ley y decisiones que significaban una aplicación más o menos precisa del programa de Acción Republicana, pero ésta como organización de la cual era presidente Azaña, se veía de alguna forma forzado a aceptar decisiones tomadas por aquél como Presidente del Gobierno, más que ser el centro donde se gestaban

las decisiones gubernamentales. Mientras que un Jefe de Gobierno con menos personalidad y con una conciencia de su función menos independiente que Azaña estaría mucho más subordinado a las decisiones de su partido (piénsese en el ejemplo, aunque sea a nivel de simples ministerios, de Albornoz y M. Domingo, sobre los que su partido tenía mucho más ascendiente que en el caso de Azaña), en el caso nuestro eran las decisiones del partido las que estaban determinadas por las previas resoluciones gubernamentales que en definitiva lo eran de Azaña.

Se podría indudablemente argumentar que esta situación se debía a que Acción Republicana era, desde un comienzo, un partido personalista basado en la figura de Azaña y sin consistencia ideológica y organizativa, lo que le haría ser una mera plataforma de apoyo de las decisiones de un líder. Esa imagen sin embargo no se corresponde con la realidad. Ya conocemos el escaso papel personal de Azaña en la creación y organización del partido. Mientras un partido fuertemente personalizado suele poseer una débil articulación, estando todas las relaciones intraorgánicas subordinadas a la autoridad del líder hemos visto como tal situación no se daba en Acción Republicana, donde Azaña se mantuvo durante toda la vida del partido alejado de los problemas organizativos internos.

Ideológicamente tampoco se puede decir que fuera inconsistente, aunque sus planteamientos adolecieran frecuentemente, sobre todo en una primera etapa, de vaguedad. Pero la orientación reformista de carácter burgués estuvo siempre cla

ra. Al contrario del partido de Lerroux, cuya falta de elaboración ideológica permitió un considerable viraje hacia la derecha, Acción Republicana se mantuvo siempre en la misma posición del espectro político.

Acción Republicana se transformó, a partir de la República, en un auténtico partido, y si bien era un pequeño partido, creció de manera ininterrumpida -aunque lenta- hasta su transformación en Izquierda Republicana. Fusión que por la historia y situación de los partidos que participaron fue más una etapa del crecimiento de Acción Republicana que una fusión entre iguales.

Así pues, la naturaleza del liderazgo de Azaña sobre Acción Republicana fue de carácter estrictamente político. Y el papel de apoyo que el partido desempeñó, a veces con cierta pasividad en lo que a la toma de decisiones se refiere, se debió fundamentalmente a que su principal líder desempeñaba el cargo de Presidente del Consejo de Ministros. En esa medida las decisiones escapaban del ámbito del partido que se veía reducido a actuar como una plataforma de apoyo gubernamental.

Desde luego esta función se veía favorecida por la existencia de aspectos indudablemente personalistas e incluso carismáticos en la figura de Azaña, tanto *ad intra* de su partido como hacia el exterior.

En efecto, si bien hemos negado que Acción Republicana fuese un partido personalista, en el sentido de ser una

mera plataforma política personal de Azaña, sin entidad política ni organizativa, no cabe desconocer que independientemente de su efectivo liderazgo político, Azaña representó por sí mismo como consecuencia del prestigio enorme que fue adquiriendo, un papel de elemento cohesionador de su partido y de la mayoría republicano socialista.

Este prestigio de Azaña llegó a su punto más elevado en 1935-36, ya fuera del período por nosotros estudiado, como consecuencia del renacimiento del fervor izquierdista, por reacción ante la etapa derechista del segundo bienio y la desmedida represión tras la revolución de octubre. Para Azaña personalmente, su arbitrario encarcelamiento en octubre del 34 sirvió de pedestal para su elevación a la categoría de verdadero mito popular, como se manifestaría en las ingentes concentraciones de sus discursos "en campo abierto" de 1935.

La base de ese posterior encumbramiento databa de su gestión al frente del Gobierno en el primer bienio. Si el desgaste del poder y la explotación demagógica que las oposiciones hicieron del escándalo Casasviejas mermaron su popularidad, lo ocurrido durante el bienio radical-cedista sirvió con creces para compensarlo. El prestigio durante el primer bienio como gobernante y político de altura le valió tanto dentro como fuera de su partido una autoridad creciente. Y si bien a partir de enero de 1933 -Casasviejas- disminuyó su popularidad hacia fuera de su partido, en su partido su prestigio se mantuvo incólume.

Esa autoridad se manifestaba tanto en el aspecto organizativo como en el político. En este último le facilitaba el obtener el consenso de su partido cuando debía adoptar decisiones políticas que podían ser polémicas. En varios casos tenemos ejemplos de la seguridad con que Azaña contaba con su partido sin que eso significara que éste careciera de voluntad propia. En la crisis de junio de 1933, cuando el encargo de formar gobierno recaía transitoriamente sobre M. Domingo y al preguntarle éste a Azaña si contaba con él y con su partido, le respondió "sin vacilar que estoy a su disposición para lo que quiera de mí, y supongo que mi partido dirá lo mismo. Giral , que estaba presente, dice: -No sé. Habrá que consultarlos. -Los llamaré, es claro. Pero creo que no se opondrán".

Indudablemente Acción Republicana no veía con agrado que por una operación presidencial motivada por resentimientos personales se desbancase a Azaña para formar un Gobierno prácticamente análogo al anterior. Por ello en la junta de Acción Republicana cuenta Azaña que "Insté vivamente para que se facilitase a Domingo la formación de un ministerio, ya que no debíamos ofrecerle menos que a Prieto. Lo comprendieron así y lo aprobaron" (1).

Lo narrado muestra a la perfección el tipo de relación política que existía entre Azaña y su partido. Con su as

(1)

Arrarás, *Memorias* ..., p. 273-74.

cendencia y autoridad él tenía la seguridad de contar con su apoyo, autoridad adquirida por el reconocimiento de sus correligionarios de su enorme capacidad política e intelectual, así como de su radical integridad. Por varios contemporáneos se llegó a calificar esta admiración hacia Azaña por sus seguidores como de auténtica adoración.

Indudablemente llegó a haber elementos de adhesión carismática de la que el propio interesado se daba cuenta. Por ejemplo cuando en momentos políticos difíciles percibía que todo se esperaba de él, de su actuación ante el Parlamento y de su autoridad (1). Esto, que se refería a la mayoría parlamentaria se daba por fuerza también entre los miembros de su propio partido.

Este elemento de personalismo tenía también su repercusión organizativa, en la medida en que proporcionaba un factor de cohesión que implicaba una cierta garantía frente a escisiones o disidencias. Aparte de los tres diputados que abandonaron el partido no hemos localizado ninguna escisión de importancia; hemos constatado desde luego rencillas y controversias en las organizaciones provinciales, más debidas a personalismos de la política local que a discrepancias ideológicas.

(1)

Azaña, OC. IV, p. 382, cuando la discusión del Estatuto catalán.

Creemos que en parte la existencia en Acción Republicana de una solidaridad partidaria intensa, algo infrecuente en partidos de base social burguesa, se debía a un sentimiento de fidelidad hacia la persona de Azaña. Ya aludimos al tratar de la Asamblea nacional de octubre de 1933, las frecuentes alusiones a la solidaridad interna y a la conveniencia de evitar escisiones, dado que esta asamblea venía tras la colaboración del partido con el efímero Gabinete Lerroux, que había levantado protestas en el ala izquierda del partido, y antes de las elecciones ante las que la opción entre una alianza con los socialistas o los republicanos dividía a las organizaciones provinciales de tendencias conservadoras o progresistas.

La frecuente reivindicación de las organizaciones provinciales de que Azaña fuese a actos del partido en sus localidades, y la expectación con que se le recibía cuando participaba en ellos, las mismas protestas ya mencionadas por su escasa dedicación al partido, etc., son índices de esa adhesión personal al líder que con diferentes matices existió también en el partido radical de Lerroux.

Basta por otra parte leer la revista juvenil *Jar*, del sector como ya sabemos más radical y más crítico hacia la dirección del partido para percatarse de la relación existente hacia Azaña. Por ejemplo, tras la crisis del primer Gabinete Lerroux como consecuencia del enfrentamiento entre éste por un lado y Prieto y Azaña por otro, con la dura polémica personal Azaña-Lerroux que tuvo lugar, *Jar* insertó un artículo titula-

do "Azaña está con nosotros", en el que a pesar de que sutilmente se presentaba la posición de las Juventudes como independiente -era el líder del partido el que estaba de acuerdo con ellos ...-, la ruptura de Azaña con Lerroux era el principal argumento que se utilizaba para justificar la reciente actitud de las Juventudes, las cuales se había opuesto a la decisión del Consejo nacional del partido de ofrecer su colaboración a Lerroux, decisión con la que por supuesto había estado de acuerdo el propio Azaña. Pero lo indicativo es que se recurre al argumento de autoridad con visible satisfacción de poder hacerlo (1).

La admiración hacia Azaña se trasluce frecuentemente en la revista, y ello hubiera sido un freno efectivo en el caso de que en vez de aminorarse tras la derrota electoral, se hubieran ahondado las diferencias de la Juventud con las posiciones políticas de la dirección. Igual actitud abiertamente encomiástica hacia la persona de Azaña se percibe por ejemplo en *El País* de Pontevedra, una vez que tras la organización en la provincia de Acción Republicana, pasó a ser órgano oficioso del partido.

(1) *Jar*, 7-10-33.

B. LA MINORÍA PARLAMENTARIA

LA MINORIA PARLAMENTARIA

Como hemos visto con anterioridad hay en los Estatutos alguna referencia al papel de la minoría parlamentaria. Sorprende en todo caso lo escueto de la alusión, si bien es altamente significativa de lo que hemos afirmado al definir a Acción Republicana como un partido de masas y no como un partido de cuadros.

El artículo en cuestión, el 16, pone un tope a los parlamentarios que pueden formar parte del Consejo nacional, de cuyos 25 miembros tan sólo 7, una tercera parte, podrían ostentar representación parlamentaria. Igual prescripción existía en los estatutos del PCAR, de los que aunque ignoremos su texto, sí sabemos que establecían la necesidad de que los parlamentarios en Madrid fueran minoría en el comité superior del partido. Sin embargo en este caso la explicación posiblemente resida más en una defensa de la efectiva autonomía del partido dentro del partido nacional de Acción Republicana, que en una subordinación de los parlamentarios a la máxima autoridad del partido, pues desconocemos si existía alguna prescripción semejante con relación al Parlamento catalán.

Junto con este tope al número de parlamentarios pertenecientes al Consejo Nacional, el mismo artículo 16 establece claramente el carácter de los mismos al afirmar que la minoría parlamentaria sería mandataria del partido. Si la identificación de parlamentarios y dirección de un partido es una

de las características de un partido de cuadros, en los que la estructura del partido tiene una escasa importancia, una prescripción como esta es típica de un partido orgánicamente potente -o, lo que a nuestros efectos viene a ser equivalente, que pretende serlo- y con una ideología determinada, más o menos definida.

Ello exige y de ahí la regla que comentamos, que los parlamentarios, más propensos por razón de su cargo y del ambiente político en que desempeñan su función, a transacciones y acuerdos en detrimento posiblemente de los postulados programáticos del partido, sean controlados por los órganos elegidos por la base del partido y responsables ante ellos. El problema, importante en los sistemas políticos actuales, de la presunta independencia de los parlamentarios respecto a sus partidos está latente aquí.

En efecto, el principio de la prohibición del mandato imperativo a los parlamentarios viene subvertido por el hecho de que éstos deben su elección prácticamente de forma completa a la organización de un partido. Los miles de votos que le han elegido no son en los actuales sistemas electorales -tanto de lista como uninominales- votos personales, sino debidos a su concreta pertenencia partidaria. Es justo, como contrapartida, que el partido se arroge el derecho de controlar la labor de los diputados elegidos gracias a él, y que los electores no vean traicionados sus votos con actuaciones de los diputados abiertamente contrarias a los postulados bajo

los que le eligieron.

Durante el período republicano que estudiamos tenemos a este respecto lo ocurrido con Unamuno en su distrito sal mantino por el que fue diputado constituyente, elegido en el seno de una candidatura de coalición republicano socialista. Con motivo de su actuación política, independiente y conserva dora, muy alejada de la coalición en el poder a la que cabía esperar que hubiese apoyado y a la que sin embargo criticó acerbamente, publicó la prensa una carta de sus electores de Béjar, en la que se le criticaba por su actuación, tachándola de traición a los que le habían elegido (1).

Disposiciones como la del artículo 16 de los Estatu tos de Acción Republicana están pensadas exactamente para evi tar situaciones de este tipo, sentando bien claramente la autoridad del partido respecto a sus diputados, los cuales no son sino mandatarios de aquél, cuyo deber es aplicar la política elaborada y decidida en los órganos correspondientes del partido.

Ahora bien, insistimos en que esa disposición esta tutaria, al no tener un reflejo legal no pasaba de ser un com promiso personal que la minoría parlamentaria reconociese su posición subordinada a la autoridad del partido, tal como es-

(1)
El Liberal, 6-7-33.

tipulaban los Estatutos; una prueba de ella lo sería la actitud defensiva adoptada por los miembros de la misma al defender su actuación en septiembre/octubre del 33, tras ser criticados por algunos sectores del partido debido a su inasistencia a las Cortes en el verano de ese año, así como por su actitud -en este caso junto con el Consejo Nacional- ante la crisis gubernamental de septiembre.

No evitó, sin embargo que la minoría parlamentaria, pletórica de destacadas personalidades, tuviera una actuación de mayor importancia que la de mera mandataria, como vamos a ver a continuación.

No vamos a repetir aquí el proceso al que ya hemos aludido en diversas ocasiones de progresiva homogeneización de la minoría parlamentaria, en un primer momento con notables diferencias ideológicas así como con una escasa disciplina de grupo. Ya sabemos cómo la discusión sobre los temas polémicos de la Constitución y sobre las leyes que la desarrollaban, la intervención personal de Azaña, las reuniones conjuntas con el Consejo nacional y la comprensión de la responsabilidad de proporcionar un apoyo estable al Gobierno republicano socialista, produjeron la paulatina homogeneización de la minoría parlamentaria de Acción Republicana.

Nos interesa destacar ahora en cambio cómo el papel efectivo de la minoría, a pesar de las prescripciones estatutarias, fue superior al previsto por éstas, sin que ello llegara a significar que se diluyera la distinción entre organis

mos dirigentes del partido y parlamentarios. Pero por las razones que exponemos a continuación sí que desempeñaron éstos un papel muy destacado.

En primer lugar hay que señalar la importante función organizativa que desarrollaron los diputados en sus respectivas circunscripciones provinciales.

En efecto, aunque no todos se dedicaron con la misma intensidad a esta labor organizativa -a veces reorganizadora-, sí fue algo frecuente y ya aludimos a diversos casos. Dado el carácter incipiente, a veces incluso inexistente, de determinadas organizaciones provinciales, corrió frecuentemente a cargo de los diputados el levantar la organización en sus respectivas provincias.

Ellos fueron los que mediante campañas de propaganda, visitas frecuentes a los pueblos de la provincia, constituciones de comités locales, etc. se ocuparon de montar la infraestructura organizativa provincial. Esto sucedía por ejemplo casi en todos los casos en que un diputado procedente de otro partido se incorporaba a la disciplina de Acción Republicana; entonces se sumaba a la tarea de expansión del partido que ya existiera en la provincia la captación de los seguidores del partido de procedencia, prevaleciéndose su ascendencia sobre ellos, normalmente grande. Los casos de los que hemos hablado ya, de Poza Juncal y Fernández-Osorio Tafall en Pontevedra, de P. Vicente Gómez en Cuenca, son paradigmáticos.

No sólo en estos casos de incorporación de nuevos diputados, aunque fuesen los más claros, se producía este protagonismo organizativo de los parlamentarios, que en buena lógica debía corresponder a los consejos locales y provinciales o a comisiones organizativas del partido constituidas desde Madrid en caso de inexistencia de organización partidaria previa. También en otras provincias la iniciativa recae más sobre el diputado que sobre el consejo provincial. La actividad de Anso en Navarra o de Ruiz Funes en Murcia, por ejemplo, serían una muestra de ello (1).

Consecuencia clara de este protagonismo era necesariamente el ascendiente de los diputados sobre las organizaciones provinciales, permitiéndoles una actuación frecuentemente más de líderes de las mismas que de supuestos mandatarios. Contribuiría a que se difuminara algo la distinción entre la minoría parlamentaria y el Consejo Nacional, al asumir los miembros de aquélla, independientemente de su pertenencia al Consejo, tareas organizativas propias de éste, dotándoles a estos diputados de una autoridad organizativa no comprendida en principio en sus atribuciones.

(1)

Respecto a Navarra por ejemplo, en diciembre de 1932 en la asamblea celebrada en Pamplona se le agradecía a Anso su labor de captación de nuevos socios.

El Liberal, 11-12-32.

Un segundo factor sería una consecuencia de la propia función de la representación parlamentaria. Si uno de los cometidos de los parlamentarios es el control del Gobierno y la labor de intermediarios entre éste y los representados, función desempeñada por medio de ruegos e interpelaciones y eventualmente por la presentación de proposiciones de ley, el cumplimiento efectivo de estas tareas provee a los diputados de una enorme autoridad sobre sus organizaciones provinciales, puesto que una acertada actuación del diputado del partido significa una importante baza para la extensión y propaganda del partido.

Los ruegos e interpelaciones ocuparon un importante aspecto de la labor de los diputados, defendiendo siempre intereses locales de sus circunscripciones, lo que no es sino una atenuación, aceptada sin controversias, de la prohibición de voto imperativo que pesa sobre los diputados. En alguna ocasión se quejaba Azaña de que en muchos casos los electores se olvidaban que los diputados lo eran de toda la nación, creyendo en cambio que su obligación era defender los intereses provinciales de forma absoluta sin atender a las razones de justicia u oportunidad política general que debían presidir la actuación parlamentaria.

Entre los diputados de Acción Republicana, hay quienes presentaron abundantes ruegos, como Ruiz Funes, mientras otros lo hicieron en menor medida. En cualquier caso, era un elemento más a la hora de explicar la relevancia de los dipu-

tados en el aparato organizativo del partido.

Un tercer factor común a todos los partidos de la época republicana lo encontramos en el carácter altamente personalizado de la política partidista.

Si bien la República significó la entrada en escena de las masas en la política española, y la destrucción, aunque no total, sí en buena medida del caciquismo local, subsistió una elevada dosis de personalismo en las relaciones políticas.

No nos referimos aquí a la identificación de una ideología y de un programa político en una primera figura de un partido, posible Jefe de Gobierno en caso de triunfo electoral, como pudo darse con Gil Robles, Largo Caballero y con el propio Azaña, personalización del poder que casi se podría definir como típica en la política moderna, sino una personalización más relacionada con la "vieja política"; personalización consistente en fidelidades de naturaleza personal con escaso contenido ideológico -al contrario de la personalización a que antes hemos aludido- y que abundan en la política republicana en cuanto se abandona el marco de las primeras figuras de los partidos (aunque en algunos casos también se dan a estos niveles, como en el Partido Radical).

Encontramos casos como el de alguna carta recibida por Giral de su circunscripción cacereña, con motivo de las elecciones de noviembre de 1933, en las que al tiempo que se le ratifica el apoyo -por fidelidad personal- se pone de mani

fiesto un desacuerdo tan radical con la política de alianza con los socialistas desarrollada por el partido -causa de que la influencia de Acción Republicana en la provincia hubiese decrecido considerablemente en opinión del corresponsal- que es difícil comprender la permanencia en Acción Republicana del remitente (1).

Al hacer historia de aquellas organizaciones provinciales de las que contamos con datos internos, hemos podido constatar asimismo las frecuentes rencillas de carácter personal, que creaban conflictos y enfrentamientos internos sin contenidos ideológicos.

Dicho personalismo se translucía en una mayor importancia de las figuras políticas públicas de un partido como los diputados, y en el surgimiento con el tiempo de unos lazos personales de fidelidad hacia ellos que eran independientes, dentro de unos marcos ideológicos generales, de la posición política concreta de los mismos. Así se explica por ejemplo que el salto de un diputado de un partido a otro lograse frecuentemente arrastrar consigo a gran parte de la organización provincial del anterior partido.

Otro factor que podríamos mencionar a la hora de explicar la relevancia de los diputados en el seno del partido

(1)

Carta de Adolfo Maillo García a Giral de 14-10-33, en AS, Madrid-99, Legajo 1125.

de Acción Republicana, sería la elevada capacitación profesional de gran parte de sus miembros. Muchos de ellos eran profesores universitarios, y casi la totalidad ejercían profesiones liberales. En las circunstancias españolas de la época, la formación intelectual elevada de una mayoría de los diputados de Acción Republicana (tuvo siempre fama el partido de contar con destacados intelectuales) facilitaba la conversión de los mismos en una élite política dentro del partido y en particular en el seno de sus organizaciones provinciales. Su prestigio profesional revertía en prestigio político, tanto fuera como dentro del partido.

Difícilmente podían comportarse como meros mandatarios del partido -lo que en definitiva se traducía en mandatarios del Consejo Nacional o de su comité ejecutivo, órganos permanentes de gobierno- personas no sólo con una formación profesional e intelectual determinada, sino que en muchos casos gozaban de gran prestigio en su campo profesional (un Sánchez Albornoz, un Gabriel Franco, Honorato de Castro, etc.) y de reconocida valía intelectual, que frecuentemente tenían ideas políticas propias y a veces no exactamente coincidentes con las posiciones del partido. Bien en este caso en defensa de sus ideas, bien en aplicación de las directrices del partido, su intervención en el Parlamento y su autoridad interna del partido tenía una relevancia en sí, algo superior a la de meros ejecutores de las decisiones del partido, como vimos al tratar su actuación parlamentaria.

Por último destacaríamos un factor íntimamente ligado al anterior y en parte consecuencia de él, como lo es la elevada proporción de miembros de la minoría parlamentaria de Acción Republicana que desempeñaron altos cargos de la Administración estatal durante el bienio reformista. Como partido integrante de la coalición gubernamental que contaba con abundantes cuadros cualificados profesionalmente, las altas esferas del partido fueron un vivero para cargos de la Administración; tanto más cuanto la coalición gobernante no disponía de excesiva cantidad de personas con la suficiente preparación para ello.

Este hecho, que convertía a varios diputados de Acción Republicana en influyentes miembros del equipo gubernamental, repercutía evidentemente en un aumento de su autoridad intrapartidaria, puesto que a su papel de intermediarios ante el poder sumaban en estos casos la propia autoridad gubernamental; esta circunstancia se mantuvo hasta julio de 1933, fecha en que entró en vigor la ley sobre incompatibilidades parlamentarias, de enorme severidad como consecuencia de la campaña, en buena medida demagógica, de las oposiciones sobre los supuestos "enchufes" de los miembros de la coalición republicano-socialista.

No hay que olvidar, aparte el poder que en sí concede el ejercicio del poder ejecutivo, los aspectos de "autoridad moral", "prestigio", etc., que cara a los correligionarios implicaba el ostentar altos cargos de la Administración.

Igualmente aumentaba el prestigio cara al exterior, tanto por ofrecer a través del partido una vía para el *cursus honorum*, como simplemente por aparecer como un partido responsable y poderoso; estos efectos de prestigio exterior, reforzaban lógicamente la autoridad de los miembros de la minoría parlamentaria frente a los órganos del partido ante los que eran responsables y ante sus propias organizaciones provinciales.

No hay que deducir de todo esto que existiera antagonismo entre organismos directivos y organización del partido por un lado y la minoría parlamentaria por otro. Más bien al contrario, todos ellos facilitaron que con escasas tensiones los miembros de la minoría parlamentaria fuesen a menudo figuras políticas del partido, no sólo más representativas públicamente que otros miembros del Consejo nacional, sino con parecida autoridad interna en las cuestiones políticas decisivas.

Una manifestación de esta relevancia que en las páginas anteriores hemos justificado, lo tenemos en la identificación de las representaciones provinciales con sus diputados, observada en la asamblea del partido de octubre de 1933. En efecto, allí, según informaba la revista *Jar*, en unos breves sueltos relativos al desarrollo de la misma: "Las agrupaciones de provincias poseen la fisonomía política de sus diputados. Allí donde el diputado es reaccionario, la agrupación es reaccionaria; y a la inversa".

Donde se manifiesta de una manera más clara la importancia que desempeñaron los diputados, es en el comportamiento del partido ante las crisis de Gobierno. En principio la decisión sobre la participación del partido en un Gobierno o el apoyo concedido al mismo corresponde al Consejo nacional y en caso de urgencia al comité ejecutivo. A la minoría parlamentaria en cuanto tal no se le atribuyen en los Estatutos papel alguno en la adopción de decisiones políticas.

Parecería natural que la minoría parlamentaria tomase también parte en las deliberaciones, asesorando al Consejo Nacional, reuniéndose con éste antes de adoptar una decisión, etc. Sin embargo lo que efectivamente sucedía era mucho más que eso. En los primeros momentos la minoría venía prácticamente a suplantarse al Consejo Nacional en su papel de decidir la posición del partido. Posteriormente, conforme el partido se fue consolidando, el Consejo fue asumiendo sus funciones, produciéndose entonces una situación en la que ambos organismos compartían la responsabilidad de decidir la participación o no participación de Acción Republicana en un gobierno. Así mientras el Consejo Nacional en un primer momento se había visto relegado más hacia las cuestiones organizativas del partido, luego fue reabsorbiendo las funciones de carácter exclusivamente político que le pertenecían. Si este proceso no llegó a su término, compartiendo como vemos algunas de estas atribuciones con la minoría parlamentaria, se debió probablemente a falta de tiempo. Habría que ver lo sucedido en Izquierda Republicana-

na, partido que puede considerarse prolongación de Acción Republicana, de mucha más fuerza que éste en 1935-36, en el que sospechamos que los organismos del partido serían definitivamente hegemónicos sobre los parlamentarios, como corresponde a un moderno partido de masas.

Otro factor explica también esta suplantación inicial y posterior colaboración de la minoría parlamentaria, y es el hecho de que no todos los miembros del Consejo Nacional residían en Madrid, lo que dificultaba en momentos de urgencia su reunión, y por otro lado el que el comité ejecutivo, órgano permanente residente en Madrid en su totalidad estaba compuesto por parlamentarios. Lo cual implica que en realidad una reunión de la minoría parlamentaria podía ser en ocasiones una reunión ampliada del comité ejecutivo. En definitiva se puede concluir resaltando la escasa diferenciación inicial de ambos organismos, minoría parlamentaria y Consejo nacional, y cómo se fue produciendo dicha distinción con la consolidación del aparato del partido, sin que la minoría parlamentaria llegase sin embargo a quedar relegada a una mera posición de mandataria de éste, sino que conservó un papel destacado en la actuación tanto parlamentaria como extraparlamentaria del partido.

Hagamos por último una alusión al tema de la masonería en relación con la minoría parlamentaria de Acción Republicana.

Según Ferrer Benimeli, gran conocedor de la masonería española, entre los diputados de Acción Republicana eran

1

masones los siguientes: Azaña, Barcia (segunda legislatura), Bello, Esplá, Giral, Palanco y Rico. Azaña se inició en marzo de 1932 sin que volviera a aparecer por las logias. Lo más probable es que intentara utilizar la masonería para restaurar la unidad de los partidos republicanos, como afirma J.S. Vidarte, que narra por extenso la iniciación del entonces Presidente del Gobierno. Fracasó, pues Martínez Barrio, máxima jerarquía del Grande Oriente Español no acudió a su iniciación.

Si no hacemos mayor hincapié en esta materia es debido a la convicción de que si bien constituyó un grupo de presión importante, el hecho fundamental era que se daba una coincidencia considerable entre el ideario masónico y las aspiraciones reformistas de los republicanos de izquierda, sin que quepa admitir, como ha sido frecuente afirmar que éstas fuesen una mera consecuencia de aquél (1).

(1) Por lo demás es un tema no investigado a fondo en la época republicana. Vid. Ferrer Benimeli, en *Historia 16*, Extra IV (nov. 77) p.57-76; Ramírez, *Los grupos ...*, p. 159; Vidarte, *Las Cortes ...*p.363. Entre las obras de la época de tendencia antimasonica, Tusquets, *Orígenes...* y Ferrari Billoch, *La masonería ...*

6. LAS JUVENTUDES DE ACCION REPUBLICANA (JAR)

LAS JUVENTUDES DE ACCION REPUBLICANA (JAR)

Hablar de las Juventudes de Acción Republicana es hablar fundamentalmente de las Juventudes madrileñas de Acción Republicana. En primer lugar porque fueron las primeras en aparecer, tomando la iniciativa de organizar dentro del partido una sección especial para la actividad política de los jóvenes. Tras su creación hacia julio de 1932, se constituyeron en varias otras capitales, sin que a lo largo de 1932 y 33 se extendieran las Juventudes por más de unas pocas capitales de provincias.

Más importante es el hecho de que por su residencia en la capital madrileña sus decisiones adquirirían una relevancia política de que carecían las restantes organizaciones provinciales juveniles. Por esto y por su mayor tradición y experiencia, su estudio es el que más nos interesa; en efecto, al no llegarse a constituir por falta de tiempo para poner en marcha el proyecto, una federación de juventudes como era la intención en 1933 de las JAR existentes en provincias, éstas carecieron de unos planteamientos unitarios, de acciones conjuntas, etc., limitándose a ser más que la organización juvenil de Acción Republicana, las secciones juveniles de las respectivas agrupaciones locales.

Digamos con todo que sabemos de la formación de Juventudes en las siguientes localidades: a lo largo de 1932 (en todo caso después de julio) en Bilbao, Salamanca, Murcia y Car

tagena, Sevilla y Valladolid; en 1933 en Alicante, Barcelona y Guadalajara (1).

Una circular editada por la juventud madrileña (2) para orientar a los jóvenes de las organizaciones locales de Acción Republicana en la tarea de constituir juventudes nos permite conocer cuáles eran las tareas que se asignaban y los procedimientos organizativos utilizados.

El camino que recomendaban para constituir la organización juvenil era el siguiente: Los elementos juveniles menores de treinta años- miembros de pleno derecho del partido, debían constituir con previa autorización del consejo local un comité provisional que se encargase de efectuar la necesaria labor de captación de afiliados y propaganda. A los jóvenes simpatizantes del ideario de Acción Republicana se les recomendaba afiliarse primero a la organización local para seguir el procedimiento indicado de constituir las Juventudes como una sección bajo la estrecha dependencia del consejo local. Dado que para afiliarse a un grupo local, según los reglamentos en vigor, se exigía ser mayor de 18 años, las organizaciones juveniles quedarían integradas por miembros entre 18 y 30 años, ambas edades muy elevadas para las habituales hoy día. Para comprender ambos

(1) *El Sol*, 21-10-32, 29-11-32, 27-1-33; *El Liberal*, 9-10-32, 14-2-33; *Luz*, 5-12-32; *Jar*, 30-9-33.

(2) AS, Bilbao-164.

topes y especialmente el de los 18 años no hay que olvidar que hasta la República el voto se concedía a los 25 años, y tras el 14 de abril a los 23, mientras que en la actualidad oscila en todos los países entre los 18 y los 21 años, siendo la primera cifra cada vez la más extendida.

Una vez que el grupo juvenil contara con un mínimo de treinta afiliados se procedería a la constitución formal de la Juventud en una asamblea en la que se aprobaría el reglamento y se elegiría junta directiva.

A partir de este momento se podría considerar constituida la Juventud y capacitada por tanto para actuar como tal, pero, se añade, "sin perder su carácter de filial" del grupo local del partido, sometiéndose a las deliberaciones de la asamblea general y con subordinación política respecto del Consejo Local"; esto es que en todas las cuestiones primaba la soberanía de la asamblea local, en la cual los miembros de las Juventudes participaban como miembros de pleno derecho que eran, pero como tales jóvenes su organización quedaba sometida a la autoridad de la asamblea.

Creemos que en definitiva lo que se transluce es una ausencia de autonomía real. Aunque la práctica sería en último término la instancia decisiva, según las orientaciones del grupo juvenil de mayor actividad, las Juventudes no pasaban de ser una sección de los grupos locales con pleno sometimiento a éstos, lo cual no es extraño, pues en los Estatutos no hay

como hemos dicho alusión alguna a ellas.

Es comprensible por tanto que en la Asamblea nacional de octubre de 1933 las organizaciones juveniles ya organizadas pretendiesen unos estatutos autónomos o por lo menos la participación en cuanto jóvenes en los órganos de dirección.

Según las instrucciones que comentamos las Juventudes debían dividirse en varias secciones, bajo control de la directiva: sección de propaganda, de formación política, de acción política, y cultural.

La sección de propaganda se encargaría de actos de la Juventud tanto en pueblos próximos a la localidad (poniéndolo en conocimiento del consejo provincial para la coordinación de las tareas de propaganda) como en el propio pueblo o capital, especialmente en barrios extremos y periféricos. Igualmente, como elementos integrantes del grupo local realizarían cuantos actos de propaganda fueran necesarios.

La sección de formación política se encargaría de organizar un círculo de estudios políticos y sociales para charlas, coloquios y conferencias. Centradas en temas de interés político inmediato, se concebían estas actividades además como medio de formación sobre las materias que se discutiesen, como "medio para el adiestramiento de oradores".

Entre estas dos secciones -propaganda y formación política- debían estudiar la manera de publicar un periódico. Que sepamos tan sólo las juventudes madrileñas llegaron a lan

zar una publicación periódica, el semanario *Jar*.

La sección cultural tendría la misión de organizar una biblioteca sobre temas políticos y sociales, así como actos de carácter cultural no político, sobre literatura, filosofía, etc. En colaboración con la de formación política podría organizar conferencias de carácter científico.

Por último la sección de acción política quedaba con unas tareas más inconcretas, aunque parece que primordialmente de propaganda y activismo político: "aquellas funciones propias de la Juventud y encaminadas a cumplir todos los fines de propaganda y de acción cívica que le son propios".

A. LA JUVENTUD DE ACCION REPUBLICANA DE MADRID

LA JUVENTUD DE ACCION REPUBLICANA DE MADRID

La primera noticia que tenemos de la constitución de una sección especial en Acción Republicana para los jóvenes da ta de mayo de 1932; en efecto, el 6 de dicho mes, *El Liberal* (1) daba cuenta en una breve nota que en asamblea general ordinaria de Acción Republicana de Vallecas (entonces municipio autónomo y por lo tanto con organización local propia) se había acordado la constitución de la Juventud de Acción Republi cana de Vallecas, eligiéndose una primera directiva.

Pero la constitución oficial, a nivel general del partido, data de una asamblea tenida en Madrid el 28 de junio de 1932; en ella se designó una ponencia con la finalidad de que redactase un proyecto de reglamentos y unas orientaciones iniciales sobre las tareas de la Juventud, para ser discutidas en otra asamblea posterior. La comisión quedó integrada por Angel Sanz-Cantos, Vicente Marqués, Alfonso Ayensa, Francisco Rodríguez, Antonio Cabezas, Vicente Torres y Enrique Peiñ ador.

Uno de ellos, Alfonso Ayensa, futuro presidente de las Juventudes, escribió el 8-7-32 un artículo en *El Liberal*, defendiendo la organización autónoma de las juventudes respec to a sus partidos. El órgano directivo de unas Juventudes de-

(1) *El Liberal*, 6 y 12-5-32.

bía ser su junta directiva elegida por ellos mismos y no una junta del partido al que estuvieran unidos, aunque fuese el máximo órgano rector del partido. Juventudes autónomas, pero, venía a concluir, con las doctrinas de los grandes partidos, aunque por razones comprensibles la enunciación y defensa de tales doctrinas fuese siempre más fervorosa por parte de las juventudes. Las Juventudes eran necesarias, afirmaba, para incorporar a los jóvenes a la República.

Firmado por los mismos componentes de la comisión antes citada apareció un primer manifiesto de la Juventud de Acción Republicana el 30-7-32 (1); en los términos habituales de estos manifiestos se llamaba a los jóvenes a la adhesión a la República, ofreciendo un cauce más para ello. Se destacaba en el manifiesto varias ideas: -el carácter de vanguardia que pretendía asumir, propio de las organizaciones juveniles de los partidos; -independencia disciplinada a los ideales del partido; -se resaltan repetidamente la honestidad, el desinterés, la acción decidida, la renovación política, como caracteres inexcusables de su actividad política (2).

Esta comisión provisional fue en parte ratificada (incluyendo su miembro más dinámico, Ayensa) como junta directiva (ya de la juventud de Madrid) en la reunión que el 1 de

(1)
El Liberal.

(2)
Vid. texto íntegro en ap.

septiembre tuvo la recién constituida juventud; la candidatura triunfante, pues se presentaron varias, estaba constituida por los siguientes miembros: presidente, Alfonso Ayensa; vice presidentes, Vicente Marqués y Ubaldo Martínez Marañón; secre tario general, Angel Sanz Cantos; secretario de actas, Angel Izquierdo Pita; tesorero, Francisco Alvarez Castañeira; conta dor, Agustín González Ruiz; vocales: Antonio Ruiz Rey, Pasto- riza, Miguel Díaz Tendero y Carlos Ballesterero Sierra.

Las actividades fundamentales de las Jar madrileñas -tal como sintetizaron en el documento visto antes- fueron los mitines y los ciclos de conferencias, esto es, cumplieron una función de carácter cultural y propagandística. En primer lugar, para organizar las conferencias crearon un "círculo de es tudios sociales, políticos, jurídicos y económicos" anunciado a los pocos días de elegir definitivamente la anterior junta directiva (1). Para cubrir tales actividades pensaban contar, fundamentalmente, con los miembros de relieve del partido; efec tivamente abundaron nombres conocidos en los ciclos de confe- rencias, mientras que el peso de los mitines y actos de propa- ganda recayó sobre los hombres más activos pero de segunda fi la dentro del partido, de la propia organización juvenil.

(1)

El Liberal, 22-9-32.

La radicalización de la política a lo largo de 1933 iba a tener también su repercusión en la JAR. En efecto, a comienzos de julio dimitió la directiva en pleno, para permitir una renovación total de los cargos (1). En realidad se trataba de poner en manos de los afiliados la resolución de la discrepancia existente en el seno de la organización y de su directiva. La división se debía a la existencia de una tendencia contraria a la opinión mayoritaria en la dirección, que exigía una "más acusada y violenta actuación en la calle"; y simultáneamente parece que el criterio de la dirección favorable a la unión entre todas las fuerzas juveniles de izquierdas no era unánimemente aceptada, según una nota de la mayoría de la dirección que defendía tales posturas (2).

La nueva directiva elegida tras esta dimisión fue la siguiente: presidente, Antonio Ruiz Rey; vicepresidentes, Vicente Torres García y Francisco García Muñoz; secretario general, Angel Sanz Cantos; secretario de actas, Félix Casanova; tesorero, José Serrano Rivas; contador, Eduardo Torné Orriols y vocales, Vicente Marqués, Antonio Martín, Valeriano Sanz y

(1)
El Sol, 6-7-33.

La dimisión de toda la directiva se produjo tras la del secretario general (Sanz Cantos), el contador (González Ruiz) y un vocal.

(2)
El Sol, 7-7-33.

G. Soussas (1).

El mantenimiento de Sanz Cantos en el cargo de secretario general y la renovación de prácticamente todos los integrantes de la junta (tan sólo permanecieron Ruiz Rey que de vocal pasó a ser presidente y el antiguo vicepresidente, Vicente Marqués que pasó a ser vocal) nos indica que triunfaron la antigua minoría de la directiva, que propugnaba una línea más radical.

La nueva junta tomó posesión en la asamblea general extraordinaria del 15 de julio (2). En ella se hizo una exposición de los proyectos de la nueva dirección, deseosa de dar a la juventud una mayor pujanza. Hubo incluso una moción pidiendo se sancionara a parte de la anterior junta por haber dado una nota a la prensa, consiguiendo el presidente con espíritu conciliador que dicha propuesta fuese retirada. La nota en cuestión es muy posible que fuera la misma a que hemos hecho antes referencia y que hizo públicas las razones de la dimisión de la junta.

En la misma asamblea se aprobaron dos proposiciones de índole política, una solicitando que el consejo local llevase un programa político de acción inmediata como ponencia a la próxima Asamblea nacional, y la segunda pidiendo la rápida

(1)
El Sol, 12-7-33.

(2)
El Liberal, 19-7-33.

celebración de dicha Asamblea.

La agravación de la situación política, con la caída final de Azaña en la crisis de septiembre, iba a repercutir in tensamente sobre la juventud madrileña, que al igual que el gru po local iba a entrar en una etapa de febril actividad política. Inmediatamente después de la crisis la JAR celebró una - asamblea general (el 12 de septiembre) en la que la directiva obtuvo un voto de confianza tras haber presentado la dimisión. Entre otras decisiones acordaron que la junta manifestase a Azaña la adhesión de la Jar a su política de izquierdas (1).

Esta asamblea tenía lugar por convocatoria extraordinaria de la propia directiva con objeto de enjuiciar el momento político. La proposición de mayor interés que en defini tiva se aprobó, y que es el antecedente de la que aprobaría la asamblea del grupo local de Madrid el 15 decía así: "Los afiliados que suscriben, proponen a la asamblea general que la juventud de Acción Republicana, que tiene siempre como nor te el posibilitar la verdadera revolución, declare solemnemen te que por encima de todas las maniobras de vieja política, ha rá prevalecer en nuestro partido el verdadero criterio democrá tico y para ello se propone luchar hasta el fin, diciendo a la opinión pública que esta juventud hará que nuestro partido sea

(1)

El Sol, 14-9-33.

nuevamente el firme puntal de la revolución española".

Como conclusiones la nota proponía las siguientes:

"1ª.- Que se conceda un amplio voto de confianza a la Junta directiva para que continúe la labor revolucionaria que ha comenzado con el manifiesto que hoy ha aparecido en la prensa.

2ª.- Que esta juventud espera las explicaciones que sobre el acuerdo de colaboración (se refiere al apoyo al Gobierno Lerroux) nos de el Consejo Nacional y la minoría parlamentaria, para una vez oídas y a tenor de las circunstancias, pedir se sancione a todo aquel afiliado cuya conducta en el trámite y solución de la crisis no se haya ajustado al ideal, normas y orientaciones del partido o al mejor servicio y conveniencia de la República y las directrices de la revolución.

3ª.- Que de triunfar un criterio impunista que consagre viejos procedimientos del vergonzoso régimen monárquico, la juventud se separe de la disciplina del partido, y

4ª.- Que esta actitud expectante queda subordinada a que no ocurran hechos con la anuencia del partido, que repugnen la conciencia ética y revolucionaria de los que por encima de todo han colocado la integridad moral y la exquisita espiritualidad que ha de ser simple norma de la República".

La nota, aparte el radicalismo verbalista (es muy in

dicativo la frecuencia de términos como "verdadero", "revolución", o el destacado eticismo de la nota), era muy dura sobre todo porque amenazaba con la separación del partido, en caso de que triunfase lo que ellos denominaban criterio impunista, esto es, que no se sancionase a aquellos afiliados que hubieran transigido con la actuación de "vieja política" que había dado al traste con el gobierno Azaña por medio de una crisis de origen no parlamentario.

Si lo anterior constituía un velado ataque a Alcalá Zamora, la radical oposición a la colaboración con el Gabinete Lerroux muestra hasta qué punto la reacción a la actitud obstruccionista pasada del partido radical había roto ya definitivamente los puentes entre éste y los sectores más radicalizados de los partidos de izquierda, como las juventudes.

Aunque eran posiciones minoritarias dentro de los partidos republicanos de izquierda y desde luego en Acción Republicana no dejaban por eso de ser un síntoma grave del deterioro de la vida política, y fueron creciendo en fuerza a lo largo de 1934, como lo probaría octubre de dicho año.

En esta línea de oposición sin concesiones al Gobierno Lerroux, las diversas juventudes de izquierda republicana madrileñas, cuya actuación conjunta era un hecho desde comienzos de año, lanzaron asimismo un manifiesto expresando dicha oposición en el mismo septiembre (1).

(1) Jar, 30-9-33.

La crisis que había conducido al cambio de directiva en la JAR en julio de 1933 queda mejor aclarada en una extensa carta que Alfonso Ayensa, ex presidente de la JAR, envió a *El Liberal* (1), opinando en torno a la constitución del nuevo Gobierno y a la actitud adoptada por las Juventudes republicanas frente a él. Argumentaba la falta de sentido de adoptar una posición de hostilidad *a priori* frente al gobierno; para él lo que procedía era una actitud vigilante para conservar las reformas alcanzadas en los Gobiernos Azaña, y atacarle en caso de que la anterior política no fuese respetada, pero no antes. Consideraba además que todos, incluidos los propios socialistas, habían considerado siempre que llegado un momento determinado, éstos habrían de salir del Gobierno para dejar paso a una concentración republicana que ejecutase las reform_{as} legisladas. No era procedente entonces considerar expulsados del gobierno a los socialistas y mucho menos adoptar una política obstruccionista desde fuera del parlamento, antes de que el Gobierno comenzase siquiera a actuar, cuando todos habían condenado la obstrucción que radicales y derechas habían realizado tiempo atrás.

Tampoco podía pretenderse que la opinión de Madrid suplantase la opinión del partido a nivel nacional. En suma ve

(1)

El Liberal, 27-9-33.

nía a condenar la postura adoptada por la JAR (e inmediatamente después por el grupo local madrileño) de abierta oposición a la actuación de la dirección del partido ante el desarrollo de la crisis, tachando la postura de la JAR de inutilmente violenta y amenazante, demagógica, injustificada, contradictoria con la posición consecuente del partido y peligrosa, por cuanto favorecía la disolución de las Constituyentes, que era el principal deseo de los enemigos de la República.

La condena no se limitaba a la JAR sino que incluía a otras Juventudes, con toda seguridad a las radicales socialistas y federales, con las que la JAR venía colaborando. Ayensa concluía afirmando que su dimisión se había debido a la práctica de esa política torpe de confusionismo y violencia por sectores pretendidamente revolucionarios e izquierdistas.

En septiembre las Juventudes de Acción Republicana madrileñas lanzaron un semanario, al que denominaron "Jar, Semanario Juvenil de Izquierda". El primer número apareció el 30 de este mes. Era sin duda algo importante dada la caracterización de la prensa en estos momentos, cerradamente antiazañista, aunque es evidente que de poco servía un semanario juvenil cara a esa situación.

La creación del semanario coincide con la postura radicalizada de la recién elegida directiva, y nos ofrece por tanto una muestra excelente del estado de ánimo de la izquierda de Acción Republicana. No se perciben sin embargo diferen-

cias políticas de fondo con las posiciones oficiales como la que defendía Ayensa en la carta que hemos comentado. Era más bien una diferencia de talante y de táctica a utilizar, más o menos intransigente con los radicales, a quienes en general ningún sector del partido toleraba demasiado.

Su primera portada, consecuente con las posturas dominantes en la juventud, insertaba una presentación en la que auguraban una radical oposición al Gobierno Lerroux, y unos comentarios a la escisión recién consumada del PRPS que les sirve de motivo para solicitar una marcha hacia la unidad de los partidos de izquierda republicana.

Posiblemente la mejor prueba de lo que hemos afirmado de la escasa diferencia entre ambos sectores del partido la tenemos en artículos posteriores de la propia Jar. Por ejemplo el artículo "Azaña está con nosotros", insertado en la revista juvenil el 7-10-33. En base al enfrentamiento y ruptura en el Parlamento entre Azaña y Lerroux, saca el articulista la conclusión de que ellos, la Juventud, habían previsto tal actitud por parte de Lerroux (provocar la disolución de Cortes), y por lo tanto se habían limitado a sacar las conclusiones políticas pertinentes.

Frente a esta postura, Ayensa, por ejemplo (y el Consejo Nacional y minoría parlamentaria) habían pretendido cargarse de razón y no imposibilitar *a priori* cualquier unión republicana, por improbable que fuera. La JAR tenía quizás razón

en prever la crisis, pero no en provocarla, anticipando una negativa a la colaboración con el líder radical.

De todas formas si en términos de alternativas políticas efectivamente no había demasiadas diferencias reales, queda la continua apelación a la revolución, los términos violentos, la intransigencia, etc. que veíamos antes como consecuencia del deterioro de la lucha política y que afectaba plenamente a las juventudes aunque fuera por reacción de otros comportamientos previos.

El artículo antes citado que en el primer número de *Jar* pedía la unidad organizativa de los republicanos de izquierda no era mera palabrería esta vez; la unidad de acción entre las Juventudes federales, radicales socialistas y de Acción Republicana, existente desde comienzos de 1933 (1), iban a dar sus frutos de forma inmediata: en una nota conjunta (2) de mediados de octubre las tres Juventudes declaraban su intención de ir próximamente a la fusión; preveían malas perspectivas en las inmediatas elecciones generales, calificando acertadamente de desconcierto la situación de los partidos de izquierda, al haber sido desalojados del poder de manera imprevista ("enga-

(1) *El Sol*, 16-3-33; por esa fecha las diversas juventudes decidieron una actuación conjunta para impedir la incipiente propaganda fascista.

(2) *El Liberal*, 13-10-33.

ñados", dice literalmente la nota) y con un Gobierno del que ellos desconfiaban para una gestión imparcial.

Por ello, afirmaban, los partidos de izquierda republicana debían ir a la fusión, como hacían las Juventudes, amenazando desvincularse de ellos en caso contrario. Las tres organizaciones juveniles madrileñas convocaron asambleas extraordinarias con el mismo orden del día en el que se trataba la constitución de un bloque de las Juventudes de izquierda.

De todas formas, aunque quizás fuera un primer paso en el camino de una auténtica fusión, a lo único que se aspiraba por el momento era a una federación de las tres organizaciones con una directiva conjunta.

Dicho bloque quedó constituido el 13 de octubre, designando ese mismo día el consejo directivo (1). El bloque federaba pues a las Juventudes radical-socialistas, que no debían haber sufrido escisión alguna de partidarios de Gordón Ordás, las Juventudes federales seguidoras de Franchy Roca y las JAR.

En la Asamblea nacional de octubre la JAR, por boca de sus representantes madrileños tuvo una intervención abundante, tanto en lo referido a la ponencia política (2), como en temas organizativos de la Juventud.

(1) *Jar*, 14-10-33.

(2) Vid. *supra* el desarrollo de la Asamblea nacional.

En efecto, por medio de su presidente, Ruiz Rey, presentó una proposición según la cual la juventud tendría una estrutura autónoma paralela a la del partido, rigiéndose por consejos regionales provinciales y nacionales, bajo la dependencia y orientación del Consejo nacional del partido.

Tras su discusión, se aprobó una solución intermedia consistente en que la Juventud tendría representación en el Consejo Nacional (lo cual se había rechazado previamente en la discusión sobre la reforma de los Estatutos) y en los consejos provinciales; podrían redactar además unos estatutos autónomos que someterían al Consejo Nacional, comprometiéndose a aceptar las modificaciones que éste introdujera.

También sobre la Juventud se discutió duramente sobre la edad tope para pertenecer a ella. Triunfó, entre protestas, la de 23 años. Pero no dándose por vencidos los adversarios de esa moción, partidarios al parecer de que no se estableciese un tope tan bajo (Ruiz Funes, Ansó, y Fernández-Osorio Tafall) lograron que la Asamblea aprobase la aplicación del acuerdo.

Tras la derrota de noviembre y sin que sepamos las razones concretas, la JAR de Madrid cambió nuevamente de directiva, eligiendo la que sería la última antes de la constitución de Izquierda Republicana y presidida por Gerardo Saura. Dado que el último número de *Jar* que hemos podido localizar es el de 27-1-34, desconocemos si porque se interrumpió su publica-

ción (1), no tenemos muchas noticias de los últimos dos meses. La última actividad que hemos localizado es un manifiesto publicado por la prensa diaria (2) a finales de febrero de 1934.

En él se hace una apelación a la juventud para que ingrese en la JAR; se insta una vez más a los partidos republicanos a la fusión, y definen a las JAR como hacían habitualmente como izquierdistas. En un curioso párrafo del manifiesto sale a la luz esa incipiente desviación del parlamentarismo, a que antes aludíamos, que desde luego les diferenciaba de sus mayores, y en primer lugar de Azaña y que apuntaba a una legitimación por los resultados antes que un escrupuloso respeto a los cauces democráticos:

"¿Izquierdismo y democracia o democracia e izquierdismo? Sean idealistas los viejos. Para nosotros hay que ser primero izquierdistas; después, a ser posible, demócratas, parlamentaristas, etc. El error de la izquierda ha sido confundir su vida con la democracia y el liberalismo. Nosotros queremos, ante todo, soluciones de izquierda; deseamos vivamente poder desarrollar a la vez la labor armónica y libertadora que supone la democracia y el liberalismo, pero no llevando nuestro amor a la muerte".

(1)

La revista *Jar* la hemos consultado en la Hemeroteca Municipal de Madrid, siendo el número correspondiente a dicha fecha el último allí conservado.

(2)

El Liberal, 25-2-34.

Se diferenciaban por otra parte de los socialistas, afirmando su interclasismo, su no restricción a los límites de una sola clase; en sus postulados sin embargo, se incluía la justicia social y política.

Es de suponer que el bloque de Juventudes formado en octubre pasase a constituir una única organización de las Juventudes de Izquierda Republicana, una vez constituida ésta, aunque no sabemos en qué momento exactamente se formalizó dicha unión.

7. ARTICULACION GENERAL DEL PARTIDO

ARTICULACION GENERAL DEL PARTIDO

Desde la obra sobre los partidos políticos de Duverger es un capítulo obligado del estudio de un partido el análisis de las relaciones internas entre los diversos órganos del partido, entre los órganos de encuadramientos de los militantes de base y los órganos de dirección, etc. A esta estructura de relaciones es a lo que se denomina articulación general del partido (1).

La articulación en Acción Republicana en primer lugar de carácter fuerte. Consiste este tipo de articulación en la regulación precisa, generalmente por medio de estatutos, de la estructura interna del partido y de la composición de los órganos directivos a todos los niveles. Es evidentemente el caso de Acción Republicana.

Desde los grupos locales y sus consejos directivos hasta el Consejo Nacional, pasando por los consejos y asambleas provinciales están minuciosamente regulados por los Estatutos de 1931.

La composición de todos los organismos, tanto deliberantes como ejecutivos, las relaciones de autoridad, dependen-

(1)

En general, para los conceptos utilizados en este capítulo, Duverger, *Los partidos* ...

cia y responsabilidad entre todos ellos están previstos y no dependen por tanto de la mayor o menor personalidad de los miembros que los integren. Por supuesto, la práctica puede alterar las previsiones estatutarias, y hemos visto que así sucedía en algunos casos, pero eso son ya variaciones sobre un esquema preestablecido que en general se cumplía.

Al hablar de la articulación débil o fuerte de un partido se hace normalmente referencia sólo a estos aspectos estructurales de carácter formal (1). Habría que aludir sin embargo también al hecho, que va aparejado con ellos, de la mayor o menor determinación de las atribuciones a los diversos órganos. En un partido de articulación fuerte, como Acción Republicana, no solamente la composición y relaciones entre los diversos organismos viene determinada explícitamente, sino que los estatutos enumeran las competencias de todos ellos. Se completa así un esquema de relaciones internas del partido que incluye tanto la inserción de unos órganos y niveles en los res ta ntes como las atribuciones respectivas.

Con una articulación fuerte, en palabras de Duverger, el partido "se presenta como una comunidad organizada, donde todos los elementos de base tienen un lugar definido que determina su importancia respe ctiva"; creemos que esta importan

(1)

Por ejemplo Molas, *La Lliga* ... II p. 133.

cia viene desde luego determinada por la posición, pero sólo en parte. Para que el criterio de fortaleza-debilidad de la articulación sea realmente representativo hay que contar con que estén especificadas asimismo las competencias concretas de los diversos órganos, sean cuales sean en concreto. Pues vale de poco que se determine la composición de los diversos organismos si sus respectivas competencias quedan indeterminadas. Se produce una situación en la que la práctica es el único criterio que determina las relaciones internas del partido.

Las competencias asumidas de facto por un órgano vendrían a depender de las personas que lo integrasen, y la importancia respectiva de los diversos órganos sería una cuestión en gran medida indeterminada, a pesar de saber por ejemplo la composición de los órganos directivos, quién elige a sus componentes, en qué proporción, etc.

No es este el caso de Acción Republicana, donde como hemos dicho, se regulaban en estatutos y reglamentos las competencias de consejos y asambleas a todos los niveles de la organización.

A. ENLACES DE TIPO VERTICAL

ENLACES DE TIPO VERTICAL

Otro criterio importante es el carácter horizontal o vertical de las relaciones entre los diversos órganos de un partido. Como es sabido se califica de enlaces horizontales a aquellas relaciones que se producen entre órganos del mismo nivel: secciones de una misma localidad, agrupaciones locales , etc. Por el contrario los enlaces verticales son los que unen a organismos de manera jerárquica: superiores con inferiores.

Los enlaces existentes en Acción Republicana eran de carácter exclusivamente vertical, por lo menos los establecidos como regulares por los Estatutos. En efecto, las diversas agrupaciones locales de una provincia -organismos de encuadramiento de base- no tenían entre sí más contacto que el existente a través de una asamblea provincial a las que asistían tan sólo los delegados de las agrupaciones, no la generalidad de los miembros de las mismas. La asamblea es por lo demás un organismo de reuniones anuales. Pero el hecho de que el contacto quede reducido al de los delegados impide considerar la asamblea siquiera como un enlace horizontal indirecto entre las propias agrupaciones (1). Los auténticos organismos de base, las agrupaciones locales, las "secciones" locales si se las quiere denominar técnicamente, no tienen contactos entre sí.

(1)

Duverger, *Los partidos* ..., p. 78.

Igual naturaleza tiene la Asamblea nacional, compuesta por delegados elegidos por asambleas provinciales. Las relaciones existentes son pues de carácter vertical: de los diversos consejos ejecutivos con los consejos de nivel inferior y con las agrupaciones locales (del Consejo nacional con todos los órganos inferiores, aunque de forma regular con los consejos provinciales y locales y de los consejos provinciales con consejos y agrupaciones locales), y luego de las asambleas con los organismos inferiores por un lado (tanto deliberativos como ejecutivos) y con los organismos ejecutivos elegidos por ellas por otro.

Desde luego no se vedaba formalmente los contactos de tipo horizontal; estos eran siempre posibles, lo único es que no se regulaban ni se prevenían. Nada impedía por lo tanto que diversas agrupaciones locales se reuniesen conjuntamente para tratar problemas comunes, aunque en caso de haberse producido los consejos provinciales tenían facultades suficientes como para tomar cartas en el asunto de haberlo considerado necesario, o para prohibirlos incluso, lo que prueba la primacía entre los cauces regulares sobre los horizontales no previstos. Sin embargo no hemos encontrado ningún caso de relaciones de este carácter, ni surgidos de manera espontánea ni impulsados desde arriba.

B. CENTRALIZACION DE ACCION REPUBLICANA

CENTRALIZACION DE ACCION REPUBLICANA

El carácter centralizado o descentralizado de un partido depende de la distribución de competencias entre los organismos centrales y los locales.

Acción Republicana contaba con un grado apreciable de descentralización. La política local se atribuye explicitamente a los consejos locales ("adoptar y proponer iniciativas en cuanto a policía (sic) local", art. 24 de los estatutos), subordinados como se sabe a la autoridad y decisiones de la asamblea local, siendo ésta en definitiva la responsable de la orientación de la política local. Los datos con que contamos respecto a la efectividad en la práctica de esta autonomía confirman que los organismos superiores se inmiscuían poco en la política local, así como los nacionales lo hacían asimismo escasamente en la política provincial.

Sin embargo los Estatutos son más parcos a la hora de atribuirle de forma genérica a los organismos provinciales la dirección de la política provincial, fuera de las cuestiones de carácter organizativo interno. De hecho no hay, al enumerar sus atribuciones, ninguna de carácter general como la que hemos visto respecto de los consejos locales; pero no sólo eso sino que se subordina muy marcadamente su autoridad a la del Consejo Nacional al establecer como una atribución general la de "proponer al Consejo Nacional aquellas medidas que considere beneficiosas" (art. 12).

No debe engañar esta apariencia, pues sin embargo en el art. 25 se caracteriza a las asambleas provinciales como "el organismo fiscalizador del consejo provincial, y su reunión significa el contacto inmediato de las fuerzas organizadas del partido en cada provincia para adoptar las normas conducentes a una eficaz organización política", sin que creamos que se haya de interpretar dicho artículo en sentido estrictamente organizativo. Esto lo confirma el contrastarlo con las funciones que los reglamentos provinciales (que para ser aprobados necesitaban estar de acuerdo con los Estatutos); el de Madrid afirmaba que "el Consejo provincial asume las funciones de gestión, dirección y administración de la organización provincial, dentro de los acuerdos de las asambleas provinciales de las cuales es organismo ejecutivo" (art. b) y el de Castellón en términos parecidos decía que: "la gestión administrativa y de gobierno del Partido provincial se ejercerá por un Consejo provincial que al propio tiempo será el organismo ejecutivo de la Asamblea Provincial" (art. 6).

Pero sobre todo es lo relativo a las designaciones de candidatos a cargos de elección popular la piedra de toque donde se comprueba la realidad de las prescripciones organizativas sobre descentralización. Y en Acción Republicana correspondía a las asambleas locales y provinciales, sin intervención de organismos superiores, la designación de sus candidatos a los municipios y a las diputaciones provinciales respectivamente.

En efecto, el art. 24 atribuye a las asambleas locales "designar por votación sus representates en el Municipio y, en su caso, los diputados provinciales y a Cortes, correspondiendo a las mismas Asambleas orientar y fiscalizar su actuación en el desempeño de sus respectivos cargos".

El artículo siguiente atribuye a las asambleas provinciales "la designación por votación de sus representates en las Diputaciones provinciales; proponer al Consejo Nacional los representantes a Cortes, cuyas propuestas serán aprobadas o rechazadas por aquél justificadamente". Ambos artículos hay que estudiarlos conjuntamente como ya vimos para una cabal comprensión del grado de centralización existente.

Las asambleas provinciales tienen derecho a controlar a sus representantes en las Diputaciones y los representantes a Cortes, con prioridad sobre las asambleas locales, las cuales designan y controlan como atribución propia y exclusiva solamente a los concejales (1).

Por otro lado no se llega a descentralizar por completo la designación de los candidatos a Cortes, los cuales tan sólo serían propuestos por las asambleas provinciales -en su caso por las locales-, y deberían ser aprobados o rechazados

(1)

Vid supra VII 1 y 2, donde analizamos estos artículos y la modificación de 1933, que no afecta al punto tratado ahora.

con exposición de motivos por el Consejo Nacional. Este se reserva por lo tanto la última palabra en la más importante de las designaciones. En realidad hubiera sido excepcional entre los partidos de la República un grado tan acentuado de autonomía en la designación de candidatos.

Sin embargo, por los datos con que contamos, se puede constatar que esta autonomía era efectiva en la práctica, decidiendo las organizaciones locales y provinciales candidatos y alianzas electorales con gran independencia, aunque en el último caso dentro de las directrices generales del partído. Los candidatos se designaban por medio de antevotaciones hechas en las asambleas provinciales y locales correspondentes.

Lo que Duverger ha denominado descentralización federal viene a ser un grado cualificado de descentralización local, existente como dicho autor escribe cuando se refleja la estructura federal del Estado en los partidos políticos, lo cual no sucede en todo caso; en efecto, en ocasiones tan sólo se da en los partidos una descentralización local acentuada (1).

En la II República, la materialización de las aspiraciones catalanistas en un Estatuto de autonomía tuvo su reflejo en Acción Republicana. Cuando el partido decidió implan

(1)

Duverger, *op. cit.* p. 85.

tarse en Cataluña lo hizo por medio de un partido autónomo. Esta autonomía se concretaba en unos rasgos organizativos propios y en una autonomía política. Los primeros implicaban como ya vimos una adaptación a la nueva estructura territorial de la Cataluña autónoma, prescindiendo de las demarcaciones provinciales, substituídas por comarcas.

En el campo político la autonomía hacía referencia a la política interna catalana que sería competencia exclusiva del PCAR, siguiendo en lo relativo a la política nacional las directrices del partido como las restantes organizaciones provinciales. La escasa relevancia del PCAR nos impide comprobar si realmente se materializaba en la práctica esta autonomía respecto a la política catalana, pero suponemos que la especificidad real de los asuntos internos catalanes empujaría a que así fuera.

Por último tenemos que hacer referencia a lo que el mismo Duverger ha tratado como otro tipo de descentralización, la de carácter ideológico, consistente "en otorgar cierta autonomía a las "fracciones" o "tendencias", constituidas dentro del partido, mediante la influencia dada a cada una de ellas en los comités directores, el reconocimiento de una organización separada, etc." (1). También se puede hablar de una cier

(1)

Duverger, *op. cit.* p. 83.

ta descentralización de este tipo si consideramos el sesgo ideológico que adquirieron las Juventudes.

En puridad no había descentralización ideológica alguna en Acción Republicana. Pero la existencia de estructuras diversificadas en un partido, cuya finalidad es la elaboración de políticas sectoriales (en este caso relativa a la juventud), favorece que estas estructuras se conviertan efectivamente en "campo de tendencias" (1). Y esto fue lo que sucedió efectivamente en las JAR, que como vimos se convirtieron en el ala izquierda del partido, adoptando posturas sumamente críticas respecto a la dirección (2).

Tampoco estuvo ausente de esta "espontánea" descentralización ideológica el connatural peligro escisionista que conlleva. Aunque creemos que no pasó de ser una amenaza puramente verbal, sin pretensiones serias de llevarla a cabo, ya vimos como las Juventudes madrileñas amenazaron en el otoño de 1933 con separarse del partido en caso de que se continuase prestando apoyo a Gobiernos como el de Lerroux. El comportamiento de las Juventudes en la Asamblea nacional y las opiniones sobre su desarrollo expresadas en su semanario *Jar* demuestran que el peligro de escisión fue muy remoto, aunque la

(1) Duverger, *op. cit.* p.84, quien señala cómo el fenómeno se da sobre todo precisamente en las secciones juveniles.

(2) Molas, *op. cit.* p.137.

definitiva ruptura con Lerroux en octubre facilitó las cosas al eliminar el principal motivo de discordia.

Aunque las Juventudes no lograron en dicha Asamblea nacional su propósito de obtener una estructura organizativa paralela y autónoma, sí consiguieron por lo menos robustecer su influencia al concedérseles representantes en todos los consejos directivos. Dada la radicalización izquierdista significaba de facto consagrar de forma organizativa una cierta descentralización ideológica.

C. CARACTER DEMOCRATICO DE ACCION REPUBLICANA

CARACTER DEMOCRATICO DE ACCION REPUBLICANA

El caràcter democràtic o autocràtic de un partit depende de una serie de factores de gran variedad. Como ha es crito Molas "arribar a fixar el nivell de democràcia interna d'un partit no es gens fàcil. Per a fer-ho, potser caldria su perposar diversos elements o aspectos i poder analitza-ne la combinació: procediment per a reclutar les direccions polítiques; procediment per a designar els candidats; freqüència de les reunions polítiques dels òrgans de base, d'enquadrament; activitat política dirigida pels simples afiliats; control del partit sobre els parlamentaris i la premsa; procés de formació de les decisions polítiques; pes de la burocràcia política; sig temes de financiació, etc." (1).

Al igual que dicho autor hizo en su brillante estudio sobre la Liga Catalana, vamos a ver algunos de estos factores en Acción Republicana, lo que nos llevará a la conclusión del carácter fundamentalmente democrático del partido de Azaña.

Ya vimos el carácter electivo de todos los órganos rectores, por sufragio directo unos (los consejos locales) y por sufragio indirecto los restantes: de dos grados los consejos provinciales y de tres grados el Consejo nacional.

Votantes eran todos los socios, siendo los miembros de las Juventudes miembros de pleno derecho, puesto que para formar parte de ellas debían afiliarse primeramente al partido.

(1)
Op. Cit. p. 137

Los cargos dentro de los consejos directivos son designados por las propias asambleas, lo que evita un grado más en el proceso electoral. Tan sólo la comisión ejecutiva nacional es elegida entre sus propios miembros por el Consejo Nacional, aunque sus tres cargos primeros (presidente, vicepresidente y secretario general) son escogidos nominativamente por la Asamblea nacional; los otros cuatro vocales de la comisión ejecutiva y cualquier otro cargo designado por el Consejo Nacional constituía una elección en cuatro grados.

Los procedimientos electorales en las respectivas asambleas son por votación directa y secreta, excluyendo pues procedimientos plebiscitarios. No se establece sistema de presentación de las candidaturas para los organismos directivos. Como suele ser habitual la presentación quedaba relegada a la labor de "pasillos", donde se gestaban las candidaturas.

Todos estos factores nos presentan un procedimiento de selección de dirigentes aceptablemente democrático, con las limitaciones diríase que inevitables en las organizaciones políticas. Si Duverger ha escrito "los principios democráticos exigen la elección de los dirigentes en todos los escalones, su renovación frecuente, su carácter colectivo, su autoridad débil" y que "un partido organizado así no está bien armado para la lucha política"(1), podemos constatar como estos requier

(1)
Op. cit. p. 164.

sitos son cubiertos en Acción Republicana, excepción hecha del último, que puede además ser dudoso que sea un requisito de la democracia. Más bien habría que hablar de electividad y control real de los elegidos. Medios organizativos para ello sí existían en Acción Republicana.

No cabe duda que la existencia de varios grados relativiza el carácter democrático de la elección de los dirigentes. Pero es difícilmente evitable por razones obvias de carácter organizativo, y en mayor o menor grado es el procedimiento utilizado por todos los partidos (1). No aceptaríamos de todas formas nosotros el carácter intrínsecamente antidemocrático de la utilización de varios grados en una elección interna de una organización, como se ha afirmado en ocasiones. Siempre que no se sustraiga la elección en ningún escalón, de que éstos no sean numerosos, y de que los compromisarios sean elegidos explícitamente con la finalidad de proceder a la elección del órgano de que se trate, como era el caso de Acción Republicana, no tiene por qué suponer un alejamiento de las opiniones de la base del partido.

La no reelectividad de los consejeros de los tres niveles, local, provincial y nacional, hasta pasados 4 años refuerza el carácter democrático de los órganos de dirección, al

(1)

Duverger, *op. cit.* p. 168.

impedir la perpetuación de los mismos dirigentes.

Los candidatos a cargos públicos electivos eran escogidos por las asambleas del partido directamente, por medio de antevotaciones (1), lo que constituye el más típico sistema democrático, aparte el sistema americano de las primarias. Así las asambleas locales designaban los candidatos a concejales y las provinciales los candidatos a diputados provinciales y a Cortes; respecto a estos últimos, sin embargo, ya hemos visto cómo la dirección se reservaba la posibilidad de aceptarlos o rechazarlos.

Esta reserva de control viene a ser un requisito im prescindible en un partido político para permitir a la dirección velar por el mantenimiento de una mínima homogeneidad ideológica y política; siempre que la dirección sea elegida no puede reputarse esta facultad necesariamente de antidemocrática.

La frecuencia de las reuniones varía según el nivel y el carácter del órgano en cuestión; lo más indicativo para denotar la existencia de una vida orgánica que permita a los militantes participar activamente en la discusión de la política del partido es la frecuencia de las reuniones de los órganos de base, las secciones. En Acción Republicana, las asambleas

(1)

Esto es, con votaciones hechas por tales asambleas para escoger los candidatos antes de las elecciones de que se tratase.

locales se reunían mensualmente, aunque antes de la extensión del reglamento local de Madrid es posible que en algunas localidades fuera menor, como en el caso ya citado de un pueblo de Castellón (1). Es desde luego una periodicidad suficiente para integrar a los miembros del partido en la política de éste.

Las asambleas provinciales y la nacional tenían una periodicidad mínima anual.

Sin embargo, dado que las asambleas provinciales eran necesarias para tomar determinadas decisiones, eran de facto más frecuentes. Un mayor contacto entre las diversas organizaciones locales era la positiva consecuencia de este hecho. Elegir los cargos del consejo provincial (en los que eran abundantes las dimisiones y los relevos), los representantes para las asambleas nacionales, para diputados provinciales o a Cortes, etc., eran circunstancias que exigían varias asambleas provinciales anuales.

Los órganos ejecutivos como es natural se reunían con mayor frecuencia. El Consejo nacional se había de reunir mensualmente, y su comisión ejecutiva quincenalmente según los estatutos de 1931. Tras la reforma de octubre de 1933, la periodicidad de las reuniones de la comisión ejecutiva pasó a ser semanal.

(1)

Se trata de Sierra Engarcerán, con asambleas locales semestrales hasta la adopción de los reglamentos madrileños, vid. supra VII, 3 c.

Los consejos provinciales se reunían con una periodicidad mensual, por lo menos en los dos reglamentos provinciales localizados (Madrid y Castellón), periodicidad que debía ser la habitual.

En los reglamentos de Castellón, el comité ejecutivo del consejo se reunía quincenalmente, al igual que la comisión ejecutiva nacional.

Por último, los consejos locales debían reunirse por lo menos dos veces al mes. Hay que notar que lo relativo a la periodicidad de los consejos provinciales y locales no quedaba regulado en los Estatutos, sino que dependía de los respectivos reglamentos. Por las razones apuntadas antes sobre la genealogía de los reglamentos no creemos que variasen mucho respecto a estas líneas generales.

La conclusión a la que se llega es que tanto la frecuencia de reuniones de los órganos assemblearios como ejecutivos es suficiente índice de una auténtica vida de partido, comprobándose gracias a los libros de actas conservados que en la práctica se mantenía este nivel de reuniones.

Aunque es la frecuencia de reuniones de los órganos de base lo que más nos puede indicar el carácter democrático del partido también la de los órganos ejecutivos es un factor a tener en cuenta, pues implica la dirección efectiva del partido por órganos elegidos. La ausencia de una dirección colegiada que se reuna con una periodicidad suficiente favorece ,

como cualquier rasgo que indique una débil articulación, una dirección incontrolada de las figuras más destacadas del partido, lo que es por principio poco democrático.

Respecto al control sobre los parlamentarios y la prensa ya hemos visto la relación existente entre la minoría parlamentaria y la dirección del partido. A pesar del papel superior al previsto en los Estatutos se puede afirmar que la disciplina de partido operó en los momentos claves, sometándose los diputados a las directrices políticas del Consejo nacional. En cuanto a la prensa lo tratamos más extensamente en el siguiente epígrafe.

Por último, en cuanto a la burocracia del partido, los cargos políticos no eran remunerados. Dado que la mayoría de integrantes de los órganos ejecutivos pertenecían a profesiones liberales, éstas les permitían simultanear las tareas políticas con las profesionales. Sin embargo no había en Estatutos y reglamentos ninguna prescripción que prohibiera la remuneración, ni mención alguna sobre el tema. El reglamento provincial de Castellón, que había insertado la organización de una secretaría administrativa, preveía la remuneración de sus componentes, entre los que el secretario administrativo tenía una cierta importancia, pues no se limitaban sus funciones a tareas estrictamente administrativas. Sin embargo es dudoso que esta figura se hubiese creado en más provincias, y en cualquier caso es tan sólo una excepción en la práctica de Acción Republicana, cuyos cargos no fueron remunerados. El que lo fue

ra eventualmente el personal administrativo carece de importancia, salvo el caso particular aludido.

Ello implica naturalmente un cierto límite a la posible participación en cargos directivos de gran cantidad de miembros que no contaban con la flexibilidad profesional que dan determinadas profesiones liberales. Lo que es más importante conforme el cargo hipotético es más elevado. Factores como la obligada residencia en Madrid de cierto número de miembros del Consejo Nacional y de la comisión ejecutiva en su totalidad, aunque comprensible desde un punto de vista político, imponía indudablemente una limitación de carácter poco democrático su puesta la no remuneración de dichos cargos. Hay que entender, sin embargo, que salvo en un partido de grandes dimensiones que contara con un fuerte apoyo económico, lo que era de difícil consecución en una etapa inicial del partido, tales circunstancias eran casi inevitables.

Resumiendo los rasgos enumerados, puede concluirse, que si bien toda organización es, *per se*, conservadora y manifiesta claras tendencias oligárquicas, las previsiones estatutarias y reglamentarias y la práctica de Acción Republicana presentan un partido aceptablemente democrático.

Elección de los dirigentes por sufragio secreto, renovación periódica, designación de candidatos por medio de ante votaciones, reuniones periódicas tanto de las secciones de base como de los organismos dirigentes, cierto control último sobre los parlamentarios, financiación por los afiliados -este

punto lo tratamos a continuación- etc., representan un saldo positivo frente a la utilización de varios grados en las elecciones internas, pero específico de los parlamentarios superior al previsto por los Estatutos, ascendiente personal de Azaña, no remuneración de los cargos políticos (aunque esto elimina por otro lado la formación de una burocracia interesada en su propio mantenimiento) etc. En el conjunto de los grandes partidos republicanos probablemente, a falta de que sean estudiados algunos de ellos como el Radical Socialista, representa el grado máximo de funcionamiento democrático alcanzado -sin entrar a considerar el PSOE, que sí parecía contar con un funcionamiento democrático-.

En efecto los estudios realizados hasta ahora sobre el Partido Radical, la Liga Catalana y la Ceda muestran una estructura interna y un funcionamiento bastante menos democrático que el que hemos descrito. Bien por la misma articulación del partido, como en el caso de la Liga, o del Partido Radical, bien por la existencia de una autoridad personal indiscutida que interviene en cualquier problema interno, etc., es interesante resaltar que los partidos republicanos no alcanzaban unos niveles mínimos de democracia interna, con todo lo relativa que pueda llegar a ser ésta en un partido político.

También en este aspecto, pretendía Acción Republicana ser un partido "nuevo".

D. FINANCIACION DEL PARTIDO

FINANCIACION DEL PARTIDO

La financiación de Acción Republicana se efectuaba a través de las cuotas de los socios. No se puede descartar que miembros adinerados del partido hicieran aportaciones de cierta cuantía al partido, pero no debió constituir el dinero recibido sino una parte pequeña de los fondos del partido.

Tenemos alguna noticia de aportaciones por afiliados individuales a través de las propias memorias de Azaña, quien menciona incluso alguna forzada aportación suya para sufragar gastos ocasionados por la campaña electoral de junio de 1931 (1). Aunque una campaña electoral es siempre época de gastos extraordinarios, hay que tener en cuenta el incipiente grado de organización del partido por aquella época. Sin descartar pues donaciones esporádicas o aportaciones regulares elevadas pocos datos concretos hemos podido localizar que nos las confirmen. Como veremos al hablar del tema de la prensa, la ayuda privada que de mayor cuantía que recibió Azaña fue de personas ajenas al partido, a través de la financiación de *El Sol*, durante su época azañista, y no para apoyar su partido.

El sistema financiero prescrito por los Estatutos era el siguiente. Los socios quedaban obligados a contribuir con una cuota mensual. Del total recaudado mensualmente por un

(1)

Azaña, OC.IV, p. 15.

grupo local, el consejo directivo debía remitir el 20% al consejo provincial. Este a su vez debía reenviar al Consejo nacional el 25% de la recaudación de las cuotas de todos los grupos locales.

El reparto de los fondos es pues sumamente descentralizado, un 80% lo retenían los grupos locales, un 15% para las organizaciones provinciales y un 5% para la organización central. Todavía se acentuó más este reparto favorable a los grupos locales en la reforma de los estatutos de 1933, estableciéndose que sólo debían remitir el 15% de su recaudación a los consejos provinciales; éstos a su vez solo remitirían el 20% al nacional. La nueva distribución implicada un 85% del total de las cuotas para los grupos locales, un 12% para las organizaciones provinciales y un 3% para el Consejo Nacional.

La reforma debía estar motivada por la débil economía de los grupos locales. La cuota mensual requerida debía variar considerablemente según la localidad. Se establecía una cuota mínima, como es habitual, para permitir contribuciones superiores a los que estuvieran en condiciones de ello.

Sabemos por ejemplo que la cuota mínima exigida por la organización provincial de Castellón, por decisión de la asamblea provincial de 29-5-32, era de cinco céntimos. Sin embargo, en Burriana pueblo numeroso y relativamente próspero, donde Acción Republicana tenía fuerza, la cuota mínima estipulada por su reglamento de octubre de 1931 era diez veces supe

rior, pues se exigía un mínimo de seis pesetas anuales, pagaderas por mensualidades o en períodos superiores, lo que significaba 50 céntimos mensuales.

Tenemos numerosas referencias que indican la dificultad que para pagar las cuotas encontraban numerosos miembros pertenecientes a sectores populares. En algunas fichas aisladas de afiliados localizadas hay a veces bajas por falta de pago. No todas ellas serían por indiferencia al partido; más aún, en alguna se especifica que es por dificultades económicas, por estar en paro, etc., asegurando los afectados su intención de darse de alta en cuanto solventasen sus problemas económicos.

Vimos también como el problema se planteó en la Asamblea nacional de 1932, pretendiendo algunos que para evitar estas bajas se crease un tipo especial de socios sin cuota forzosa, propuesta que no fue aprobada, sin duda por el temor que implicase un aumento de los afiliados que esgrimiesen dificultades para poder pagar la cuota.

De todas formas en las localidades y provincias donde el partido tenía fuerza, había fondos para mantener una cierta actividad propagandística, como lo muestra que las Juventudes en Madrid pudieran editar un semanario, y que lo mismo hiciera el consejo provincial de Castellón, aunque con periodicidad irregular debido precisamente a dificultades económicas.

En épocas electorales el grupo madrileño buscaba medios para recaudar fondos suplementarios, y muy probablemente

fuese una práctica habitual en otras localidades y provincias. Actos políticos en los que se pagaba entrada, emisiones de vales, son ejemplos de estas recaudaciones extraordinarias.

Los procedimientos de financiación de Acción Republicana son los típicos de un partido de masas. Es sobre los proprios afiliados sobre quienes recae el mantenimiento del partido, no dependiendo de las contribuciones individuales, medio más propio de partidos conservadores, y que a su vez condiciona en sentido poco democrático el funcionamiento del partido, por la preeminencia que origina respecto a los individuos que son soporte económico del partido, pertenezcan formalmente a él o no.

8. ACCION REPUBLICANA Y LA PRENSA

ACCION REPUBLICANA Y LA PRENSA

Como es fácil de suponer las posibilidades económicas para un pequeño partido como Acción Republicana de mantener publicaciones periódicas de carácter oficial eran escasas.

A lo largo de toda la historia de Acción Republicana el tema de la carencia de medios de prensa fue un problema que preocupó a los dirigentes de Acción Republicana y que intentaron abordar, sin que pudieran sin embargo resolverlo. Por ello al tratar de la prensa en relación con Acción Republicana, quizás lo más interesante no es el recordar las escasas publicaciones que oficial u oficiosamente representaron a Acción Republicana, sino las relaciones del partido y más precisamente de Azaña con la prensa republicana independiente, tema ampliamente tratado ya en la obra de Redondo sobre la actividad política de J. Ortega y Gasset (1).

(1)

Gonzalo Redondo, *Las empresas políticas ...*

A. PUBLICACIONES OFICIALES Y OFICIOSAS DE

ACCION REPUBLICANA

PUBLICACIONES OFICIALES Y OFICIOSAS DE ACCION REPUBLICANA

A pesar de que como hemos visto, en los reglamentos provinciales y locales se instaba a las respectivas organizaciones a mantener un órgano oficial o un periódico, en contados casos pudieron hacerlo así. Ni siquiera la agrupación local madrileña lo consiguió. Los pocos casos en que sabemos que se publicó algún órgano periódico, los hemos mencionado ya al hacer historia de las respectivas organizaciones provinciales.

Así en Barcelona, el semanario "Acción", publicado en 1932 y en Hospitalet de Llobregat en semanario "El Poble", publicado en 1933 (1).

En Castellón, a lo largo de 1930 había aparecido un semanario publicado por los núcleos de Acción Republicana, por entonces todavía no integrados en la organización nacional, y denominado "Libertad"; suspendido por dificultades con las autoridades provinciales, reapareció meses después como diario vespertino -dirigido por Castelló Soler-, aunque ignoramos el tiempo que duró la publicación en ambas etapas. Este semanario es un antecedente del que aparecería en 1932, ya como órgano oficial de Acción Republicana, "Izquierda", publicado irregularmente por razones económicas a lo largo de 1932-33; en el último año se acordó al fin publicarlo sólo en épocas electo-

(1)

Molas, *El sistema de partidos* ...p. 72.

rales (1).

Y por último en Madrid vimos cómo las juventudes lograron sacar con regularidad un semanario, "Jar", que duró desde septiembre de 1933 hasta por lo menos enero de 1934.

Fuera de estas cuatro publicaciones es posible que en alguna localidad se publicase con mayor o menor regularidad y por un tiempo más o menos largo algún otro semanario más dificilmente diarios, pero la inexistencia de trabajos sobre la prensa del período republicano nos impide localizarlos.

De este raquítico panorama de prensa directamente afecta a Acción Republicana, lo que más preocupa a la dirección del partido era la inexistencia de un órgano en Madrid. Durante todo el primer bienio son frecuentes las referencias a los trabajos pro consecución de un órgano periódico propio en la capital, y a ellas hemos aludido al hacer historia del partido.

Mientras la prensa independiente fue favorable a la coalición republicano-socialista esta carencia quedaba en parte encubierta; pero a partir del verano de 1933, la hostilidad del conjunto de la prensa madrileña hacia el Gobierno fue un factor importante en el deterioro de éste. En el otoño del mis

(1)

El Sol, 18-5-30 y 26-8-30.

mo año estaban al parecer avanzadas las gestiones para lanzar un órgano propio, pero éste habría de esperar todavía un año largo, y aparecería, bajo la denominación de "Política" en marzo de 1935 como semanario, para poco después convertirse en diario, y ya como portavoz de Izquierda Republicana.

Como publicaciones oficiosas de Acción Republicana habría que englobar todas aquellas publicaciones periódicas que sin ser editadas oficialmente por el partido, fuesen en la práctica portavoces suyos. Esta relación se establece normalmente gracias a que las publicaciones son propiedad de miembros del partido o de personas de toda confianza. Con estas características sólo conocemos el ya citado *El País* de Pontevedra, que pasó a ser el portavoz oficioso de Acción Republicana, tras haberlo sido de Orga, al unirse al partido de Azaña la mayor parte de la Orga pontevedresa. Posteriormente pasaría a serlo de Izquierda Republicana. Director del periódico lo era Pérez Prego, dirigente de Orga primero y luego de Acción Republicana en la provincia (1).

(1) Vid. supra cap. VII, 3c y Alfonso Boszo, Los partidos,... p.105

B. ACCION REPUBLICANA Y LA PRENSA REPUBLICANA

INDEPENDIENTE

ACCION REPUBLICANA Y LA PRENSA REPUBLICANA INDEPENDIENTE

Al tratar el tema de la prensa no cabe pasar por alto la relación de parte de la prensa republicana independiente con Azaña y su política. Sin llegar a ser una prensa oficiosa, la orientación que algunos periódicos mantuvieron durante un cierto período de tiempo fue lo suficientemente progubernamental, y más aún, pro azañista como para ser considerada como la prensa "de Azaña".

Hasta mediados de 1932 la prensa republicana fue acoplándose al nuevo panorama político republicano. En algunos casos como *El Sol* y *La Voz*, que precisamente poco antes de la implantación de la República habían pasado de los Urgoiti a manos de capital monárquico, les había sorprendido el 14 de abril sin una línea definida. Ambos periódicos apoyaron la República y con mayor o menor ambigüedad, también al Gobierno de Azaña (1).

Otro periódico como *El Liberal*, mantuvo un apoyo claro y abierto a favor del Gobierno, pero conservando una independencia de criterio que como veremos fue lo que faltó a los dos periódicos antes citados cuando pasaron a manos republicanas ya en 1932. *El Liberal* procuró que su apoyo a Azaña

(1) Sobre todo lo referente a la evolución de *El Sol*, *La Voz* y *Luz*, vid. Redondo, op. cit.

no le opusiese a Lerroux, manteniéndose en un precario equilibrio incluso en la lucha electoral de noviembre de 1933, aunque difícilmente podía ya ocultar sus preferencias por Azaña.

Pero es el periódico *Luz*, el que junto a los dos primeramente citados más nos interesa aquí; *Luz* sucedió en enero de 1932 a *Crisol*, que había sido creado en abril del 31 por los Urgoiti, antiguos copropietarios de *El Sol*, al ser forzados a abandonar éste. A *Crisol* se llevaron al núcleo más afecto de redactores, que permaneció luego en *Luz*, periódico que pasó a ser la nueva plataforma periodística de J. Ortega y Gasset. *Luz* atravesó en su orientación política las mismas alternativas que su mentor Ortega; así desde su fundación apoyó claramente al Gobierno Azaña, aunque sin abandonar una posición centrista, criticando eventualmente los "abusos" de la izquierda (1) -fase azañista de Ortega que durara hasta la discusión del Estatuto, hacia mayo del 32-. La progresiva actitud antiazañista de Ortega se acabó manifestando en los artículos que a partir de junio del 32 insertó en el periódico; la actitud de éste comenzó a su vez a ser reticente hacia el Gobierno (2).

Y es por esta época, en los meses del verano de 1932, cuando se realiza a través de un acaudalado empresario catalán, Luis Miquel, la operación de absorción de los tres periódicos

(1) Redondo, op. cit. p. 441-42.

(2) Ibidem., p. 508.

citados *-El Sol, La Voz y Luz-*, los cuales sufrían una crítica situación económica. La operación, por lo que cuenta el propio Azaña estuvo en gran parte realizada por su amigo personal el mejicano Martín Luis Guzmán, quien debió guiar a Miquel en sus deseos de introducirse en las empresas periodísticas (1).

Miquel logró en efecto su propósito y a partir de entonces los tres periódicos apoyaron sin reservas al Gobierno y a Azaña. En el aspecto económico de la operación Miquel actuó apoyado por un grupo de personas sin que sepamos a ciencia cierta quiénes eran, salvo la segura participación de Carner, el ministro de Hacienda, muy afecto personalmente a Azaña; en cualquier caso eran políticamente adictos al Gobierno, con la excepción quizás del principal partícipe, Miquel, cuyas motivaciones debían ser tanto económicas como políticas, y éstas no demasiado firmes en su orientación. Miquel pensaba probablemente que el dominar la prensa adicta al Gobierno le podía dar determinado ascendiente sobre el mismo (2).

Así, tras el éxito de la operación, la adhesión de *El Sol* y *La Voz* a la política gubernamental se afianzó. En *Luz* entró como nuevo director Bello, cercano colaborador de Azaña y miembro destacado de Acción Republicana, en septiembre del

(1) Ibid. p. 507 y Arrarás, *Memorias* ...p. 326. En todo lo referente a la participación de Azaña y amigos políticos de ésta en la operación de prensa, Redondo se basa en las propias anotaciones de Azaña en su diario.

(2) Tal es la opinión de Redondo, op. cit. p. 508.

mismo año, trocándose la reciente animadversión hacia Azaña por el apoyo que el mismo periódico ya había prestado al Gobierno a comienzos de año.

El rumor de la intervención personal de Azaña en algunos artículos de *El Sol*, al que ya aludimos en la primera parte del trabajo, era sin embargo anterior a la adquisición de los periódicos por Miquel.

El contar con el apoyo incondicional de los tres periódicos iba a durar poco tiempo. El problema económico que todos ellos arrastraban cuando Miquel se hizo con su propiedad se agravó, de forma que a comienzos de 1933 la situación comenzaba a ser angustiosa para él. Al parecer cuando se metió en la operación de controlar los periódicos contaba con que arrancaría un aumento de su precio al Gobierno, cosa que por díversos motivos Azaña no quiso, aún sabiendo que arriesgaba la subsistencia de "su" prensa.

La orientación política de los tres periódicos tenía no poco que ver con la sequía económica, al haber perdido la mayor parte de la publicidad por causa de aquélla (1).

Miquel, por otra parte, se quejaba de que Bello había imprimido a *Luz* un carácter exclusivamente político, lo que ha

(1) Arrarás, *Memorias* ... p. 322.

bía motivado la reducción de su tirada (1). Y para colmo Azaña nunca estuvo satisfecho con la orientación de los periódicos. A su juicio no habían sabido conservar una postura independiente al tiempo que apoyaban la política gubernamental.

Había sido un apoyo excesivamente incondicional y abierto, y además muy personalizado en él. Azaña, en los primeros momentos de constitución del grupo periodístico de Miquel, les advirtió que estampasen su nombre lo imprescindible; no sólo no lo habían hecho así sino que se le había tratado muy frecuentemente como "el hombre de la República". "Aunque fuese verdad, no deberían decirlo", apostillaba Azaña (2).

Bello fue la primera víctima de la crisis. Fue cesado como director de *Luz* en marzo de 1933 al negarse a que el periódico criticase a los socialistas, como quería Miquel (3).

Las cosas se aceleraron y todo el edificio de la prensa azañista se vino abajo en julio. Apurado por la ruina de la empresa en la que había comprometido toda su fortuna, Miquel, tras fracasar en sus intentos de presionar a Azaña (4), hizo

(1)

Azaña, OC.IV, p. 457.

(2)

Arrarás, *Memorias*, p. 326.

(3)

Azaña, OC.IV, p. 457.

(4)

Arrarás, *Historia* ...p. 185, en nota. Miquel llegó a amenazar con iniciar una campaña contra Azaña, por un negocio de terrenos que éste presuntamente le habría ofrecido. Su pretensión parece que debía ser la subida de los periódicos, que Redondo da como seguro que Guzmán se la había ofrecido en el montaje de la operación.

variar de forma radical la orientación de sus periódicos. Nombrando director de *El Sol* a García-Vela, íntimo de J. Ortega y Gasset imprimió al periódico una orientación violentamente antiazañista, y los otros dos periódicos siguieron el ritmo. El cambio fue unánime y radical, pues pasaron de un apoyo incondicional a un hostigamiento absoluto de la gestión gubernamental y de la colaboración socialista, criticando personalmente a Azaña igual que antes se le había alabado.

Para ponerse a cubierto de la quiebra total que le amenazaba, Miquel se aproximó a March en busca de capital (1).

Hubo un intento de evitar la pérdida definitiva de los tres periódicos y que Miquel cayese en manos de March, por parte del núcleo de amigos del Presidente del Gobierno, ofreciendo otros accionistas de *El Sol* y *La Voz* adquirir sus acciones a Miquel, sin que se lograra un acuerdo. En esta reunión junto a dos de tales accionistas estuvieron presentes Guzmán y Ossorio y Gallardo (2).

A los efectos de este trabajo nos basta con constatar cómo en julio de 1933, en uno de los momentos más difíciles

(1) Arrarás, *Historia*, II p.185, nota. Por errata en esta obra Redondo interpreta que las últimas gestiones de Miquel con March se produjeron en diciembre, cuando del propio contenido de la anotación de Azaña se desprende que corresponden a junio -Azaña es todavía Presidente del Gobierno- y Arrarás en la nota que citamos inserta las anotaciones de Azaña por orden cronológico. La que explica las negociaciones de Miquel y March se corresponderían entonces al 28 de junio.

(2) Redondo, op.cit.p.544-45; dicha reunión según conversación del autor Redondo con J.N.Urgoiti, también asistente a la reunión.

del Gobierno Azaña, éste perdió el apoyo de una prensa que hasta ese entonces le había sido adicta, contribuyendo notablemente al cerco que los radicales habían puesto al Gobierno. La necesidad de conseguir un órgano de prensa propio a resguardo de avatares financieros era cada vez más imperiosa.

9. BASE SOCIAL DE ACCION REPUBLICANA

BASE SOCIAL DE ACCION REPUBLICANA

El intento de delimitar con precisión la base social de un partido plantea tradicionalmente al investigador una dificultad casi insuperable cuando ese partido dejó de existir hace tiempo. Dos obstáculos metodológicos son los que surgen inmediatamente: uno, la imposibilidad de utilizar procedimientos de investigación de tipo sociológico como sondeos o encuestas entre militantes o electores del partido. Por otra parte, la normal ausencia de archivos cuando el partido ha desaparecido impide constatar numerosos datos de los militantes que normalmente se incluyen en las fichas de afiliación, medio que podría suplir los métodos directos de investigación.

Por todo ello en nuestro caso nos vemos forzados a reducir el ámbito de la investigación en este punto a la procedencia social de la minoría dirigente del partido, única de la que se pueden obtener datos relativamente completos (1).

Hay que prescindir por tanto de un análisis semejante respecto a los afiliados y los electores. Respecto a los primeros nos haría falta una base documental de la que carecemos. Y en cuanto a la estructura social del electorado de Acción Republicana nos debemos conformar con las precisiones hechas en

(1)

Igual se ve forzado a hacer Molas, *Lliga catalana*, I.p.329. En cambio Ruiz Manjón tiene la fortuna de contar con documentación suficiente, aunque sea parcial, para apuntar la composición social de los diversos escalones del Partido Radical, *El partido* ... p. 594.

los capítulos electorales, pues tan solo estudios monográficos de sociología electoral -como los que nos han proporcionado tales informaciones- podrían aportar nuevos datos de interés, lo cual queda fuera de nuestras posibilidades de investigación.

Naturalmente la procedencia social de los dirigentes de un partido es un dato que sólo en relación con otros factores adquiere su auténtico significado; el considerarlo como el principal factor determinante es un reduccionismo inaceptable. Aspectos más decisivos son el programa del partido, su práctica política, y los ya aludidos de la composición social de militantes y electorado. El programa y práctica política tratados en el Cap. VI junto con los datos que vamos a ver ahora nos permitirá obtener algunas conclusiones sobre quien sustentaba y a quien servía políticamente Acción Republicana; sectores sociales que con seguridad y como en repetidas ocasiones hemos afirmado eran los mismos que apoyaban a otros partidos del republicanismo de izquierdas, y en gran medida los que apoyaban otras opciones políticas de carácter conservador.

Como hemos dicho vamos a circunscribir el análisis a lo que podríamos considerar la cúspide dirigente del partido, su élite política superior: los miembros del Consejo Nacional y los diputados de Acción Republicana. Ampliar más el círculo e incluir por ejemplo a los dirigentes provinciales o a los delegados a los congresos nacionales nos enfrentaría ya con

los aludidos problemas documentales (1). Junto con estos datos vamos a estudiar también la procedencia social de los firmantes del manifiesto de Acción Republicana de enero de 1930. Dicho manifiesto, firmado como vimos (2) por los integrantes de Acción Republicana de Madrid en aquélla época tiene la ventaja de proporcionar un punto de partida sobre el que poder comparar los datos de las élites posteriores, dado que dicho grupo puede tratarse casi como el núcleo fundador. Ver hasta qué punto se mantiene posteriormente la composición social de este grupo tiene un interés indudable a la hora de enjuiciar la definitiva opción ideológica del partido.

(1) Como decimos más adelante esta laguna se podría subsanar, siquiera parcialmente, a base de monografías provinciales sobre la composición social de los partidos republicanos.

(2) En el AS hemos localizado una lista de afiliados del grupo de Madrid, que aún sin fecha, se puede datar con seguridad en septiembre de 1930, pues es una "relación de afiliados para la candidatura de la Asamblea de Alianza"; dicha asamblea se realizó el 29 de septiembre. Son un total de 65 nombres con sus profesiones, y casi todos son firmantes del anterior manifiesto de enero de 1930. En esta lista desaparece la es-casa variedad profesional del manifiesto, ejerciendo casi todos los integrantes profesiones liberales. Indudablemente estos 65 afiliados se identificarían más con el grupo fundador que los 140 del manifiesto. Hemos preferido sin embargo, partir de éste por incluir algo de la futura base del partido.

A. EL MANIFIESTO DE 1930

EL MANIFIESTO DE 1930

El manifiesto venía acompañado por 140 firmas, pertenecientes al grupo de Madrid. Nada extraño sería que fuera la relación casi completa de los miembros madrileños formalmente integrantes de Acción Republicana por aquella fecha (fecha do en enero, fue publicado por *El Sol* el 13-3-30). Todos los firmantes menos uno incluyeron su profesión. Agrupados según éstas, tenemos la siguiente composición:

Catedráticos y profesores	34	24'28
Abogados	16	11'48
Ingenieros	13	9'28
Médicos	13	9'28
Farmacéuticos	12	8'68
Escritores	6	4'28
Periodistas	6	4'28
Otras profesiones universitarias	7	5'08
Estudiantes y licenciados	6	4'28
	<hr/>	<hr/>
Total.	113	80'08
	=====	=====

Comerciantes e industriales	6	4'2%
Profesiones no universitarias	7	5'0%
Empleados	8	5'7%
Obreros	4	2'9%
Sacerdotes	1	0'7%
Sin especificar	1	0'7%
	<hr/>	<hr/>
Total.	27	20'0%
	<hr/>	<hr/>
Total general...	140	100'0%
	=====	=====

Ante esta relación de profesiones se constata que si el grupo afirmaba haber sido fundado en 1925 "por cierto número de escritores, catedráticos, artistas y otras personas dedicadas a trabajos intelectuales", su composición en 1930 reflejaba fielmente la del núcleo primigenio; ya hemos afirmado que en realidad éste debía ser ligeramente aumentado, el mismo grupo fundador. Pero lo más interesante es que se comprueba la justificación del calificativo de "grupo de intelectuales" que acompañó a Acción Republicana desde su origen.

La cifra de 34 profesores y catedráticos (7 y 27 respectivamente, de los catedráticos por lo menos 9 lo eran de Universidad), muestra un predominio abrumador de las carreras docentes, las más típicas representantes de lo que habitualmente se entiende bajo la calificación de intelectuales, junto a literatos y artistas, de los cuales había una representación de

seis escritores. Un número elevado de abogados es algo lógico, y en todo caso es un porcentaje bajo en comparación con la media habitual entre los profesionales dedicados a la política (1). Otras profesiones como médicos (también de frecuente dedicación a la política) e ingenieros alcanzaban un porcentaje elevado. El número, también alto, de farmacéuticos se debe probablemente a la actividad de Giral. Todo este conjunto de profesiones liberales constituyen la absoluta mayoría de los componentes del grupo, que en 1930 en Madrid se puede calificar globalmente como de profesionales e intelectuales, de los cuales se esperaba una política burguesa progresista si hubiera que juzgar sólo por sus dedicaciones profesionales.

Junto a ellos hay tan sólo una modesta representación de clases medias (pequeña burguesía), con esos 15 empleados y profesionales de tipo medio, no universitario, calificación bajo la que hemos englobado una serie de profesiones variadas de tipo auxiliar (delineantes, practicantes, etc.). Y además simbólicas representaciones tanto del mundo de los negocios como de obreros.

En comparación con la estructura social de un partido derechista destaca la escasa representación de industriales y comerciantes, la baja -relativamente- proporción de abogados,

(1) Vid. Molas *op. cit.* I, p. 345 y ss., donde incluye cifras de la Liga Catalana y otros partidos.

y la elevada cantidad de miembros de las profesiones docentes. A su vez de un partido obrero como podía serlo el PSOE le separa la elevada proporción de profesionales y la escasa participación obrera.

Hay que tener en cuenta que este grupo firmante del manifiesto es de naturaleza especial, pues no es un típico grupo de base, ni es una élite dirigente: se podría decir que es una agrupación mixta, muchos de cuyos miembros pasarían a ser posteriormente integrantes del núcleo dirigente, mientras que otros permanecerían en el anonimato de la base, y algunos abandonarían el partido. Tiene sin embargo el interés, aparte del metodológico ya mencionado de suministrar una base de comparación con las élites dirigentes posteriores, el de constatar la imagen que podía dar el grupo en el momento de su aparición pública en Madrid tras la caída del Dictador. Esta imagen es como hemos dicho la de un grupo burgués "ilustrado" del que podía esperarse una política progresista. Recordemos que todavía no poseían programa y que se presentaban aún no como partido, si no como agrupación suprapartidaria para aunar la opinión repúblicana.

B. LA DIRECCION DEL PARTIDO

LA DIRECCION DEL PARTIDO

Damos a continuación los porcentajes de las profesiones ejercidas por los tres Consejos Nacionales de Acción Republicana, elegidos los dos primeros en 1931 y el tercero en octubre del 33, en respectivas Asambleas nacionales. Como los Estatutos aprobados en la de septiembre de 1931 exigían la renovación de por lo menos la mitad del Consejo, el total de miembros computados es superior a lo que podía esperarse dada la estabilidad habitual en la dirección de un partido político.

<u>Profesiones</u>	<u>Mayo-31</u>	<u>Septiembre-31</u>	<u>Ocutbre-33</u>	<u>Total</u>
Catedráticos	7	11	10	18 (35'3%)
Abogados	8	4	2	8 (15'7%)
Médicos	3	1	1	4 (7'8%)
Ingenieros	0	1	3	3 (5'9%)
Arquitectos	1	1	1	1
Periodistas	0	0	1	1
No conocida	6	7	7	16 (31'4%)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total.	25	25	25	51
	-----	-----	-----	-----

Puede observarse como la relativa variedad profesional existente entre el grupo de Madrid de 1930 ha desaparecido por completo. Cuatro profesiones liberales, catedráticos, abogados, médicos e ingenieros, y especialmente las dos primeras suman la absoluta mayoría de los integrantes de los Consejos

Nacionales. Pero lo que llega a sorprender es la abrumadora mayoría constituida por los catedráticos de Universidad (de los 18 catedráticos, sólo uno, Alvarez Pastor, de Valencia, lo es de Instituto). Pocos partidos habrán tenido en su dirección una proporción más elevada de los niveles superiores del profesorado. Constatando este hecho se puede una vez más comprender la fama de grupo intelectual que rodeó siempre a Acción Republicana.

	<u>Minoría Parlamentaria</u> (1931 y 1933)		<u>Consejo Nacional y Minoría Parlamentaria</u>	
Catedráticos	14	(36'8%)	23	(32'4%)
Abogados	9	(23'7%)	12	(16'9%)
Médicos	3	(7'9%)	6	(8'4%)
Ingenieros	1		3	(4'2%)
Arquitectos	1		1	
Economistas	1		1	
Periodistas	3	(7'9%)	3	(4'2%)
Empleados	2		2	
Militares	1		1	
Comerciantes	1		1	
Propietarios	1		1	
Agricultores	1		1	
Desconocidos	-		16	(22'5%)
Total. . .	38	=====	71	=====

Si observamos la composición de la minoría parlamentaria podemos ver cómo existe una mayor variedad profesional, pero manteniéndose el predominio de los catedráticos (1) (entre los 14 catedráticos sólo dos no lo son de Universidad, Osorio-Tafall y Ruiz Rebollo) y a distancia de los abogados.

La suma total de consejeros y diputados, para obtener un cuadro general de las élites superiores del partido, no difiere apenas, como es natural, de las cifras por separado de ambas categorías.

Lo más destacado de estos datos será a nuestro entender lo siguiente:

- La predominancia ya aludida de profesorado, casi todo él perteneciente a la Universidad, base de la reputación intelectual del partido.

- El resto de los componentes de la élite pertenece a profesiones liberales burguesas, lo que ratifica tanto su procedencia burguesa como la cualificación profesional e intelectual. Resulta en conjunto una élite absolutamente homogénea.

- Mínima presencia entre sus componentes de tres sectores sociales: pequeña burguesía, burguesía industrial y comercial y clase obrera. De las tres existía una pequeña representación.

(1)

Entre los 13 "catedráticos y profesores", todos ellos lo eran de Universidad excepto dos, Osorio-Tafall, de Instituto y Ruiz Rebollo, catedrático de la Escuela Superior de Trabajo de Santander.

sentación en el grupo originario madrileño que aquí se reduce aún más.

Es interesante notar la práctica ausencia de condicionamientos de la burguesía económica en la dirección del grupo, sector siempre el más conservador, especialmente si consideramos el atraso de esta burguesía en la España republicana (1). No quiere esto decir que tuvieran que ser necesariamente radicales en sus planteamientos económicos y sociales. Hemos visto que no fue así. Pero las presiones y condicionamientos procedentes de estos sectores sociales eran por fuerza de carácter indirecto, al no tener apenas presencia inmediata en la dirección del partido.

Iguales consideraciones podríamos hacer respecto a la ausencia de trabajadores en la minoría dirigente de Acción Republicana. Y sin que deduzcamos que el programa y la orientación ideológica del partido de Azaña provenga de esta concreta estructura social de la dirección, sí se puede afirmar que ambos factores, programa y composición social, concuerdan. Queremos decir con ello que nada más coherente que un grupo de profesores y miembros cualificados de profesiones liberales pretendiesen poner en práctica un programa de transformación y modernización de la sociedad y el Estado español; que no tuvieran

(1)

G. de Figueroa, que era el que figura como propietario, abandonó el partido a comienzos de 1932.

empacho en aliarse con un partido socialista para lograr el su ficiente apoyo popular, y en considerar que aunque la modernización que ellos se proponían era beneficiosa para la mayoría de la sociedad española la precaria situación de las clases po pulares exigía una atención prioritaria a éstas. De ahí la orien tación popular de su política modernizadora, sus continuas reclamaciones de izquierdismo.

Pero a su vez esta procedencia social coincidía también con los límites por la izquierda de su política. Pese a lo que clamaron las derechas, la prensa e incluso destacados intelectuales, y como él recordó en diversas ocasiones, Azaña no hizo jamás nada que remotamente se pudiera calificar de po lítica socialista. Para Azaña y sus correligionarios no se po día hacer política socialista porque aunque poderosos en el país, los socialistas no eran mayoría. De ahí la necesidad ine ludible de la alianza entre reformadores burgueses y políticos socialistas. Pero había límites que ninguno de ellos hubiera traspasado. A pesar de su concepción idealista sobre el Estado, como aparato neutro por encima de las clases, jamás hubie ra aceptado Azaña un estatismo generalizado -por lo demás, tam poco muchos socialistas-, ni un dirigismo económico absoluto. El Estado lo concebían como un instrumento eficaz para la reforma de una sociedad anquilosada y su posterior gestión, para lo que necesitaba ser modernizado el propio Estado. De lo que se trataba era de restablecer un equilibrio inexistente en la participación de las diversas clases sociales en los beneficios

sociales (1).

Todo lo idealista que se quiera, dicho planteamiento global respaldaba una política progresistas y favorable a las clases populares, a nuestro juicio y dada la correlación de fuerzas existentes entonces, la única política progresistas posible. Y si había un partido que por la composición social de su élite pudiera identificarse con una política semejante como una política "definitiva", esto es, como un objetivo en sí mismo deseable, no como un primer paso hacia una transformación completa de la sociedad, era Acción Republicana.

Su programa podía llevarse a la práctica más o menos completamente -y lo que realizaron en el primer bienio era una pequeña parte del mismo-, pero en cualquier caso su objetivo era una sociedad democrática, con una economía de mercado controlada por el Estado en defensa de los sectores sociales menos favorecidos. Un utópico equilibrio de clases, como diría Araquistain, pero no una "supresión de las clases". Con tales planteamientos se identificaba plenamente una élite política intelectual, profesionalmente cualificada y bastante desligada de intereses económicos, por lo menos de manera directa.

(1)

Vid. sobre este punto la interesante tesis de Aragón Reyes, *La idea del Estado ...*, especialmente p. 105 y ss.

Respecto a la ausencia de la pequeña burguesía, es un hecho probablemente consecuencia de la abundancia de cuadros profesionales con que contaba el partido. Aunque esto habría que comprobarlo con estudios sobre composición social de los partidos republicanos, por los pocos datos muy parciales en las provincias que han pasado por nuestras manos, conforme se baja en el nivel jerárquico del partido comienzan a ser frecuentes las profesiones no universitarias, empleados, pequeños comerciantes y artesanos, etc. Es lógico que la inexistencia de remuneración por el ejercicio de cargos en el partido, el bajo nivel cultural en la España de entonces, la aludida existencia de una abundante reserva -relativa en comparación con otros partidos republicanos- de cuadros profesionales y probablemente otros factores, propiciaran que estos sectores no estuviesen presentes en la alta élite del partido.

En la minoría parlamentaria, donde se obvia el factor económico, es ya ligeramente más variada la composición social, y hay varios periodistas, un militar, etc.

De todas formas no conviene olvidar la provisionalidad de estas conclusiones dado el alto porcentaje de profesiones desconocidas entre los miembros del Consejo Nacional.

Aparte, por lo tanto, de que esta ausencia de las clases medias en la élite del partido quedaría probablemente compensada en los escalones inferiores del partido, si hemos afirmado que Acción Republicana representaba una opción política

para estos sectores -en concurrencia con otros partidos, tanto de izquierdas como conservadores-, no es en función de la existencia de un mayor o menor número de personas de este estrato social militando como cuadros políticos del partido, sino como consecuencia de su programa y práctica política.

No lo decimos sólo por desmentir una vez más un simplista reduccionismo sociológico, sino por refutar una versión que hizo fortuna durante la propia República y se ha traspasado a cierta bibliografía. Se trata de presentar a Azaña especialmente y también a sus correligionarios como oscuros burócratas frustrados, de baja categoría -típica pequeña burguesía funcionarial.

La imagen de un Azaña covachuelista frustrado se ha difundido con fortuna. Y como él mismo hubo alguna vez de aclarar, pertenecía a un cuerpo de alto nivel y prestigio del ministerio de Justicia, el de letrados de la Dirección General de Registros y del Notariado. No era pues un humilde burócrata, sino un alto funcionario de dicho ministerio; perteneciente a un sector que podríamos calificar de alta burguesía profesional, o funcionarial si se quiere (1). Como hemos visto,

(1)

Ricardo de la Cierva niega que Azaña fuera un "alto funcionario" (calificación que le adscribió por vez primera Marichal) alegando que no pasó de jefe de sección, y le describe como un "funcionario medio de un Cuerpo poco conocido aunque muy importante". En realidad la calificación de alto funcionario no depende exclusivamente del rango jerárquico; hay cuerpos que por su prestigio y remuneración confieren a sus miembros, en conjunto, desde un punto de vista sociológico el carácter de alto funcionario, como es el que nos ocupa, que es además numéricamente sumamente restringido. *Vid.* Ricardo de la Cierva, *Historia...* p.151.

algo análogo sucedería con la mayor parte de los integrantes de los organismos superiores del partido.

Es por lo tanto en base a su programa como podríamos definir a Acción Republicana como un partido que pretendía representar primordialmente a las clases medias, así como a los sectores más progresistas de la burguesía -especialmente el más representado en su élite política, la burguesía intelectual- y las clases populares en general, pero sin presentarse nunca como un partido de clase. Y si afirmamos que fundamentalmente representaba a los medios se debe a que los límites ideológicos antes apuntados coinciden con los que tradicionalmente se atribuyen a los sectores sociales medios: aspiraciones de transformación social y rechazo de soluciones radicales que puedan implicar su identificación social con las clases trabajadoras, las concepciones referidas sobre la función del Estado, etc.(1). Y nadie más indicado para la interpretación de un programa progresista típicamente pequeño burgués que un núcleo de intelectuales y profesionales como el que integraba la dirección de Acción Republicana.

En una hipotética caracterización del electorado de Acción Republicana, de la base social a la que ~~representaba~~ ~~debería~~ nos aludir también al posible voto femenino que pudiera haber recibido Acción Republicana. Como dijimos al tratar las elecciones de

(1) Sobre la ideología de la pequeña burguesía, vid. Poulantzas, *Les classes sociales dans le ...* p. 239 y ss., y 307 y ss.

1933, el minoritario sector del electorado femenino que participó activamente en aquellas elecciones no debió favorecer apenas a Acción Republicana. Muy probablemente los grandes beneficiados fueron la derecha y en menor medida los socialistas, los dos sectores que habían apoyado la concesión del voto a la mujer con carácter inmediato, frente a la oposición de los partidos republicanos y entre ellos de Acción Republicana.

Por lo demás en la medida en que el factor religioso fuera el que más condujera al electorado femenino hacia posiciones derechistas, no sería disparatado conjeturar que el partido que más directamente perjudicado pudiera haber resultado fuera Acción Republicana, dada la identificación que las derechas realizaron -aunque no se correspondiese a la realidad- entre sectarismo anticlerical y Azaña. Así, pensamos que el electorado de Acción Republicana debía ser masculino casi en su totalidad.

¿Era el electorado de Acción Republicana exclusivamente o predominantemente urbano? Una respuesta positiva parece ser la opinión mayoritaria en la bibliografía que atribuye a la pequeña burguesía urbana el apoyo básico a los ideales de la República democrática del 14 de abril -al programa que Azaña intentara plasmar desde el Gobierno- y a los partidos específicamente republicanos. Sin base suficiente como para alterar esta imagen, si creemos posible matizarla considerablemente por lo menos en lo que afecta a Acción Republicana. En efecto, si recordamos los análisis hechos con ocasión de las elecciones

municipales de 1933 podemos afirmar que Acción Republicana poseía una base rural no despreciable, fundamentalmente concentrada en algunas zonas, como Levante, Andalucía Oriental y Castilla la Vieja. Y confirmando tal hipótesis los datos que poseemos de algunas provincias nos confirman que la fuerza de Acción Republicana radicaba más en los pueblos que en las capitales (Castellón, Valencia, Albacete).

Cierto que Acción Republicana no era un partido mayoritario y no podríamos considerarlo como una muestra del electorado republicano global. Pero sí es de interés desmentir hasta cierto punto el carácter exclusivamente urbano del republicanismo de izquierdas. Es tan sólo una aproximación de sociología electoral que mostraría su interés si pudiésemos concretar la composición social de ese electorado rural. Desdichadamente está fuera de nuestro alcance; suponemos sin embargo que no se diferenciaría mucho del electorado urbano, coincidiendo ambos con esa imagen de la base social del partido que hemos elaborado basándonos en el programa y práctica política de Acción Republicana. Se trataría de un electorado compuesto por profesionales liberales y sectores progresistas de la burguesía, pequeña burguesía tradicional (artesanos, etc.), clases medias (empleados, bajos funcionarios, etc.) y clase trabajadora que no votase socialista; a lo que habría que añadir un porcentaje de voto anarcosindicalista que por hostilidad hacia los socialistas votaba a la izquierda republicana en caso de participar en los comicios.

Se podría colegir entonces la probabilidad -pues no se puede hablar en términos más categóricos- de que el electorado de Acción Republicana fuese sumamente interclasista (1). Ese conjunto de clases a las que podría representar Acción Republicana, en conjunto forman como se ve un espectro social bastante amplio; las características aludidas del programa, la composición social del núcleo dirigente, el carácter objetivamente popular -el único popular factible de forma inmediata, insistimos- de su proyecto político (que en un país menos atrasado difícilmente podría calificarse que tuviera consecuencias revolucionarias), etc. permitían ese interclasismo que Tusset ha podido verificar parcialmente en las elecciones de Madrid.

(1)

Vid. supra, III 2 y V 5.

C A P I T U L O V I I I

A C C I O N R E P U B L I C A N A E N E L S I S T E M A D E P A R T I D O S

R E P U B L I C A N O

1. EL SISTEMA DE PARTIDOS REPUBLICANO

EL SISTEMA DE PARTIDOS REPUBLICANO

Por sistema de partidos se entiende las relaciones existentes entre el conjunto de partidos de un sistema político (1). Se habla de sistema en la medida en que se hace referencia a relaciones estables, que se mantienen mientras los partidos sujetos de estas relaciones no experimenten transformaciones de importancia. No hay que olvidar además que un sistema de partidos tiende a favorecer, si está consolidado, como toda estructura estable, la congelación de la fuerza relativa de los partidos, esto es, en última instancia su propia permanencia.

A la hora de abordar el sistema de partidos de la II República, no nos interesa un estudio completo del mismo, sino tan sólo, dentro de la finalidad de este trabajo, averiguar cuál fue la posición que en el mismo ocupó el pequeño partido de Acción Republicana. Tenemos así dos límites, uno espacial y otro cronológico. El primero en la medida en que tan sólo pretendemos analizar un aspecto sectorial del sistema de partidos republicano, el papel de uno de los numerosos sujetos del mismo en su relación con el todo. Cronológico en cuanto que sólo estudiaremos el período inicial de formación, el bienio 1931-1933, período en el que se perfilaron los rasgos del nuevo sistema -que no llegó a consolidarse a consecuencia de la violenta ruptura del sistema político en julio del 36- y además

(1) Vid. por ejemplo Duverger, *Los partidos...* p. 231

en el cual se dio un factor del sistema político que faltaría ya hasta 1936, la estabilidad gubernamental; factor como se podrá comprender íntimamente ligado al sistema de partidos imperante.

Es evidente sin embargo que antes de centrarnos en el objeto específico de este capítulo, deberemos apuntar algunas líneas generales del sistema de partidos en su conjunto. Desde luego porque sólo así quedará clara la posición de Acción Republicana en el sistema; pero también y fundamentalmente porque apuntar cuál fue esa posición exige tener formada previamente una idea clara de la estructura básica del sistema en su totalidad.

Vamos por lo tanto a dar un breve repaso al sistema de partidos, comenzando por aludir al polémico tema de la influencia ejercida sobre él por el régimen electoral.

Es tradicional desde que Duverger formulara sus conocidas tesis sobre la influencia de los sistemas electorales en los sistemas de partidos, la polémica sobre el grado y límites de esa influencia, cuando no sobre su misma existencia.

No es nuestra intención proceder ahora a un análisis sobre si esta influencia se dio y en qué medida, en el caso que nos ocupa de la II Republica. Nos vamos a basar en la generalizada opinión de todos los autores que han tratado el tema de que en efecto la influencia del sistema electoral republica-

no sobre el sistema de partidos no sólo existió sino que fue considerable (1).

En efecto el punto de acuerdo al que han llegado los estudiosos del tema es que el sistema de lista en circunscripciones plurinominales combinado con un escrutinio mayoritario con reserva de puestos a las minorías, tal como se utilizó en la República, favoreció la formación de alianzas lo más amplias posibles, con objeto de beneficiarse de la enorme prima a la mayoría que otorgaba el sistema (un 80% de los puestos aproximadamente). El efecto no se percibió en su totalidad hasta las elecciones de 1936 en las que el espectro de partidos se presentó agrupado en torno a dos polos derechista e izquierdista; no sólo los partidos habían aprendido con la experiencia de las dos elecciones anteriores formando dichas coaliciones, sino también los electores, quienes apenas otorgaron votos a las opciones centristas, que se presentaban débiles o desprestigiadas, como el Partido Radical.

Así pues si el sistema de partidos surgido *ex novo* en 1931 y gestado en los cinco años que van de 1931 a 1936 se caracterizó por esta polarización en dos amplios bloques de alianzas, con un fraccionamiento interno grande (aunque en proceso de concentración), se debió en parte no despreciable a la citada influencia del sistema electoral escogido.

(1) Vid. entre otros Linz, *El sistema de partidos* ... p. 113 y ss.

Dos bloques de alianzas sería la máxima simplificación que podríamos hacer del sistema de partidos republicano. Acercándonos algo más a la realidad de tales bloques veríamos que en modo alguno eran homogéneos y unidimensionales. En el interior de cada uno de ellos, veríamos en primer lugar una división en un número considerable de partidos. En segundo lugar la pluridimensionalidad de las alineaciones de todos los partidos integrantes de cada bloque según el problema político que abordásemos (1).

No vamos a insistir en la conocida abundancia de partidos durante la República. Basta con observar la relación de partidos presentes en las tres legislaturas republicanas para comprobar un pluripartidismo exacerbado, a lo que habría que sumar los partidos menores sin representación parlamentaria.

Respecto al segundo aspecto nos referimos a un factor puesto de relieve por Varela respecto a nuestra II República, consistente en que las posiciones de los partidos integrantes de cada bloque no coincidían en las principales cuestiones con que se enfrentaron: cuestión regional, problema religioso, reforma agraria, etc. En cada uno de estos temas los partidarios y adversarios de cada solución concreta variaban, con lo que era siempre un delicado equilibrio el que unía a los partidos integrantes de estos bloques.

(1) Sobre la multidimensionalidad de los sistemas de partidos vid. Sartori, *European Political Parties: The case of Polarized Pluralism*, en La Palombara-Weiner, *Political Parties and...*, p. 137; respecto a su aplicación concreta al caso español, Varela, *El problema regional ...* p. 73 y *passim*.

El nexa que los mantenía unidos, aparte las consideraciones ideológicas de orden general, era el interés que cada integrante de la coalición mantenía por conseguir el aspecto del programa común que realmente le interesaba. Esto lo vió bien Azaña al simultanear como vimos la discusión del Estatuto catalán y la Reforma Agraria para salvar las reticencias de los socialistas hacia el primero y de los catalanes hacia la segunda. Esta pluridimensionalidad, factor de complicación extrema de un sistema de partidos explica también cómo por ejemplo la minoría vasca acabó separándose del bloque derechista al no obtener la autonomía que reivindicaba.

Por último la inexistencia de un único sistema de partidos nacional, o mejor dicho su existencia con subsistemas regionales, principalmente en Cataluña, terminaba por complicar este sistema de partidos que de forma simplificada hemos descrito (1).

Un rasgo común tenían ambos bloques de partidos, y era la existencia en cada uno de ellos de un partido de masas con un apoyo popular grande: los socialistas en el bloque izquierdista y la Ceda en el bloque conservador. Los primeros eran al comienzo de la República el partido más estructurado de todos, pues salían del período dictatorial con una organización incó-

(1) Sistema de partidos que además contaba con el inconveniente de la debilidad inherente a su constitución *ex novo* a partir de 1931, vid. Linz, *El sistema de partidos...*, p. 109.

lume y para lo habitual en España, relativamente desarrollada y a partir de la proclamación de la República experimentó como es conocido un crecimiento acelerado que ya no se detendría.

La Ceda sería el gran partido de masas de la derecha española. Su gran virtud fue la rapidísima constitución a partir de la nada -pues en abril del 31 las derechas quedan completamente desorganizadas- que le permitió ganar unas elecciones dos años después de aparecer; es claro que consideramos, como es habitual, a la Ceda como una etapa más del partido que en un primer momento se llamó Acción Nacional.

La oscilación a la derecha del Partido Radical, junto con los resultados electorales de 1933 hicieron coincidir en una misma coalición, al comienzo meramente parlamentaria y luego gubernamental, a éste partido con el de Gil Robles. Sin embargo, mientras el primero era un partido en decadencia, la Ceda era cada vez más y a pesar de su heterogeneidad y ambigüedad políticas el partido que contaba con el apoyo masivo de la derecha económica, de la derecha clerical y de amplias capas medias, formado alrededor de un líder y en defensa de intereses comunes.

Lo que nos interesa destacar especialmente es cómo su líder Gil Robles, gracias a su enorme capacidad organizativa logró dotar a la derecha de una organización política potente a lo largo del primer bienio.

Si el apoyo de masas procedía básicamente de la Ceda (y conforme se acerca 1936 cada vez más), el eje político de

las coaliciones radical cedistas se situaba inicialmente en el Partido Radical, por diversas razones en las que ahora no podemos entrar. Luego progresivamente el centro político de esta alianza conservadora se desplazó más hacia la derecha, hasta que ante las elecciones de 1936 el Partido Radical quedó desligado del frente derechista y con ello de toda posibilidad de victoria ante la inviabilidad de una alternativa centrista (1).

Por el lado izquierdista eran los socialistas el partido que proporcionaban el principal apoyo de masas, con la ventaja desde un punto de vista gubernamental que el electorado socialista era una gran parte de la clase trabajadora española, lo que permitía en caso de estar los socialistas en el Gobierno una mayor capacidad de maniobra cara a las reivindicaciones sociales.

Si la alianza radical cedista era un matrimonio de conveniencia surgido en 1933 de forma no prevista de antemano, que se deshizo cuando el partido radical se derrumbó, sin excesivo daño para el bloque derechista, (a pesar de la derrota en febrero del 36, el apoyo electoral al frente derechista fue grande, obteniendo pese al sistema electoral una importante minoría parlamentaria), la unión de republicanos y socialistas tenía una larga tradición detrás que se remontaba a la época monárquica anterior a Primo de Rivera, y que se fortaleció en la etapa final de la lucha contra la Dictadura.

(1) Centrista en consideración al espectro político tal como se presentaba ante las elecciones, porque social e ideológicamente, la opción radical era en 1936 y para aquella época claramente conservadora.

Lo más extraordinario es que ante tal situación, la evolución de las relaciones internas de republicanos y socialistas experimentase en el breve período republicano hasta 1936 unos altibajos espectaculares. No es por supuesto que sean inexplicables a estas alturas las causas que provocaron tal inestabilidad (ya hemos hecho alusión a ellas en este trabajo), sino es que en 1933 se rompió una alianza que razones de tipo político apoyadas en una tradición y en una reciente colaboración gubernamental, hacían ver como imprescindible.

El hecho es que tras esta colaboración gubernamental republicano socialista, que significaba el punto más estrecho de colaboración entre ambos sectores en toda su historia, en las elecciones de 1933 se rompe el bloque, originando así su derrota estrepitosa -en actas, no en votos-, Lentamente a lo largo de los dos siguientes años, especialmente de 1935, se van reanudando los lazos que aunque no llegan a ser como en 1931-33 -principalmente por las disensiones internas socialistas-, alcanzan a adoptar la alianza electoral del Frente Popular y mal que bien a apoyar un programa de gobierno.

Dentro del bloque izquierdista, la otra parte la constituían los partidos republicanos. El principal problema del sector republicano era la división de sus filas. Considerando que sólo a partir de la crisis de diciembre de 1931 comienzan a perfilarse los rasgos de lo que iba a ser el sistema de partidos republicano con la separación del Gobierno de los radicales (a quienes en octubre había precedido la Derecha Liberal

Republicana), el sector republicano de izquierdas que mantuvo la alianza con los socialistas se componía de cuatro partidos fundamentalmente, dos de ámbito nacional, el Radical Socialista y Acción Republicana, y dos regionales, ORGA y Esquerra Catalana. Se podría mencionar también al pequeño grupo de los federales, que aunque hasta junio del 33 se mantuvo en una posición ambigua, siguiendo la línea que marcaba el P. Radical, en esa fecha se incorporó al Gobierno, aunque su reducida fuerza (contaba con 11 diputados) le quita toda relevancia.

Esta división en cuatro, con el agravante de que dos de ellos eran partidos específicamente regionales, puede dar idea de la dificultad que podían conllevar la adopción de decisiones en el seno del Gobierno, de forma que se lograra el consenso de una mayoría tan heterogénea (1).

Los partidos republicanos sufrieron a lo largo de la República un proceso de concentración que habla a favor de una hipotética consolidación del sistema de partidos con grandes opciones políticas. Sin aventurarnos en tales hipótesis lo que si cabe constatar es que esos cuatro partidos habían quedado reducidos en 1936 a dos, cuyas relaciones mutuas se habían estrechado. En efecto, radical socialistas, Acción Republicana y Orga se habían fusionado en Izquierda Republicana y aparecían como un partido potente con apoyo de masas; la Esquerra seguía siendo el partido hegemónico en Cataluña.

(1) Sobre el proceso de adopción de decisiones vid. las dos obras citadas de Varela, especialmente, *El sistema de partidos...* p. 234.

El sector radical socialista que seguía a Gordón Ordás, fusionado con los radicales de Martínez Barrio en Unión Republicana, puede considerarse que venía a substituir al Partido Radical en su primitiva posición de 1931 de centro izquierda.

Así pues no se puede acusar a los partidos republicanos izquierdistas de ceguera y de falta de realismo, ya que supieron comprender la imperiosa necesidad de reducir las opciones partidistas republicanas. El gran fallo fue el ritmo lento que llevó dicho proceso de unión. Si hemos visto como Gil Robles logró tener dispuesto para noviembre de 1933 una maquinaria electoral y partidista capaz de ganar las elecciones, no fue así por parte de los republicanos. En ese momento y a pesar de que la opinión pública republicana había reivindicado a lo largo de 1933 la necesidad de la unión la izquierda del republicanismo se encontraba más dividida que nunca.

Y aunque la unión fundamental -Izquierda Republicana- se consiguió tan sólo meses después, ya era demasiado tarde; se veían ya forzados a esperar el desgaste de una legislatura derechista cuya principal labor fue deshacer las reformas del primer bienio. Conviene recordar aquí que aunque sin duda alguna los republicanos de izquierda hubieran conseguido más votos en 1933 de haberse presentado ya unidos en un solo partido (por el simple hecho de la atracción que ejerce un partido grande, más rentable electoralmente que una coalición de pequeños partidos) no fue ésta la causa directa de la victoria derechista, sino la política electoral socialista.

Una vez disueltas las Constituyentes ya no era posible por falta material de tiempo una fusión de los republicanos antes de las elecciones (aparte otros factores subjetivos) y sin embargo sí lo era, y aparecía como la lógica conclusión de dos años de coalición gubernamental una alianza electoral republicano socialista, que hubiese cambiado substancialmente los resultados. Ya vimos cómo no fue posible alcanzarla.

Dado que Izquierda Republicana se constituye en torno al eje de Acción Republicana más como una etapa del lento crecimiento de ésta que como una fusión entre partidos iguales, puede considerarse como un fracaso de la dirección de Acción Republicana y en concreto de su líder Azaña el no haber conseguido la unión con anterioridad, con todo lo que eso comporta.

Desde luego la falta de interés que mostró Azaña por el aspecto organizativo es un factor a considerar a la hora de comprender la lentitud del proceso de crecimiento del partido y de fusión con las restantes organizaciones republicanas. El era la única personalidad política con la suficiente autoridad como para haber intentado forzar una unión antes de cuando se produjo, y de hecho tras la derrota electoral del 33 sí que puso en juego toda su autoridad en conseguirla. No hay que olvidar que algún intento sí hizo con anterioridad, como el discurso de Santander en el otoño de 1932. Pero sin embargo se des-
preocupó por completo de la labor material de llevarlo a la práctica, perdiéndose aquella iniciativa en rencillas personalistas; el resultado fue una federación parlamentaria que nació muerta, según sus propias palabras.

Por otra parte si cabe calificar de lenta y tardía la unión de los republicanos de izquierda es tan sólo en el contexto de la época, esto es, por el hecho de que se produjo tras unas elecciones -anticipadas- y sobre todo al compararlo con la labor ya aludida de la derecha, que pudo crear la Ceda en tan corto espacio de tiempo. Pues dada la dificultad siempre existente en fundir diversas organizaciones por la tendencia a subsistir de toda estructura organizativa, no se puede considerar demasiado largo en sí el período de 1931-34 que llevó la formación de Izquierda Republicana.

No hay que olvidar que la tarea de Gil Robles consistió en levantar una organización política de la nada, y si bien esto exigía quizá una mayor dedicación, no tropezaba en cambio con las resistencias de personas e intereses partidistas. Desde este punto de vista en el campo republicano la proliferación organizativa obstaculizaba la tarea de construir un gran partido sin ofrecer en cambio la ventaja de encuadrar de forma eficaz al electorado republicano.

Todo esto es cierto. Pero queda el hecho fundamental ya suficientemente reseñado. Para las pretensiones políticas de la coalición azañista, y para la propia estabilidad republicana fue fatal el que Azaña no lograra, bien unir a los diversos partidos republicanos de izquierda, bien consolidar el suyo aisladamente como un sólido partido de masas.

2. ACCION REPUBLICANA EN EL SISTEMA PARLAMENTARIO
DE PARTIDOS DE 1931 A 1933

ACCION REPUBLICANA EN EL SISTEMA PARLAMENTARIO DE PARTIDOS DE
1931 A 1933

En las Cortes Constituyentes el sistema de partidos ofrecía, de acuerdo con las líneas generales que hemos esbozado, el cuadro siguiente. Una primera etapa transitoria que duró hasta diciembre del 31 en la que se da una especie de gobierno de todos los partidos, con exclusión de la minoritaria derecha católica -la minoría vasconavarra-; salvo ésta todas las demás minorías apoyaban más o menos explícitamente al Gobierno. Las mayorías podían oscilar según el tema debatido, pero todavía no se había plasmado un sistema de relaciones estable entre las diversas minorías, a pesar de la proclividad cada vez más clara de los radicales a adoptar posiciones conservadoras.

A partir de la crisis de diciembre de 1931 los radicales quedan fuera del Gobierno por propia voluntad. Desde entonces -junto con los federales- oscilarán de una oposición moderada que apoyará no escasas veces al Gobierno a una oposición a ultranza y absoluta a partir de enero de 1933, fase en la que intentarán por medio de la obstrucción parlamentaria un bloqueo del Gobierno. Los radicales, una vez enfrentados a la coalición gobernante, y la derecha católica, constituyen los dos elementos del bloque derechista que será hegemónico en la segunda legislatura, aunque por entonces nadie preveía que la oscilación del Partido Radical fuera a ser tan frande.

Por parte gubernamental la coalición izquierdista se componía de los socialistas por un lado y los cuatro partidos republicanos antes citados, el Radical Socialista, Acción Republicana, la ORGA y la Esquerra catalana. Vamos a ver a continuación cuál fue la función que desempeñó Acción Republicana, partido que osciló entre los 26 y los 34 miembros a lo largo de esta legislatura. Pues a pesar de su carácter minoritario, desempeñó un papel central en la coalición gubernamental.

Hasta diciembre del 31 Acción Republicana se encontraba políticamente en el centro de la coalición, con el PSOE y los radical socialistas a su izquierda y la Derecha Liberal Republicana, radicales y federales a su derecha. Esta posición le permitió durante esos meses ser en ocasiones el arbitro, haciendo oscilar la victoria hacia un sector u otro de las Cortes, en las que a pesar de apoyar todos los partidos al Gobierno Provisional, se ensayaban diversas coaliciones en función de la materia discutida. La falta de unidad interna de Acción Republicana por aquellos meses quizá debilitó su posición, que pudo ser más determinante de haber jugado conscientemente el papel de eje de la coalición.

Esta posición central desapareció con la remodelación ministerial de diciembre, al prescindirse del ala derecha de la coalición. Ahora Acción Republicana, junto con la minoría gallega -en la que la ORGA era mayoritaria- representaba el sector más moderado de la coalición, frente a la Esquerra y los Radical socialistas por un lado y al PSOE por otro. Sin embargo y

a pesar de que el gran partido de la coalición era el socialista, el eje político siguió estando en torno a las posiciones adoptadas por Acción Republicana.

Y si conservó su papel de eje de la coalición fue porque su identificación con todos los aspectos del programa le permitía, aun no ocupando ideológicamente el centro de la coalición, seguir siendo el "pívor" sobre el que se formaban las mayorías para cada decisión (1).

Si bien finalmente todos los partidos de la coalición gubernamental, acababan votando los proyectos legislativos y decisiones del Gobierno, el apoyo era a veces sumamente reticente por parte de algún integrante de la mayoría. Tan sólo en Acción Republicana se encontraba, -no hace falta insistir que tras un proceso de homogeneización interno que llevó varios meses- incondicionalmente detrás de las decisiones gubernamentales. Aunque constituyese el ala moderada de la coalición, era el partido que se interesaba por todos los aspectos de la política gubernamental, y que actuaba con una unidad de la que carecía el Radical Socialista, que podía haber desempeñado ese papel de haber sido un partido menos dividido. Sobre el apoyo de Acción Republicana y del partido o partidos que presionasen a favor de alguna medida se lograba inclinar la balanza de los miembros de la coalición más reacios.

(1) Vid. Sartori, *ibidem* y *Parties and party systems* y López Guerra y Varela, S. Las coaliciones de gobierno en la II República española, ponencia presentada en el Congreso de Ciencia Política de Zaragoza de marzo 1978.

Una primera razón que explica esto es el hecho aludido de que Acción Republicana era con toda seguridad el más identificado con el programa de gobierno de la coalición. Es claro que para los socialistas las reformas realizadas no eran sino una pequeña parte de su programa que aceptaban como un incio de la transformación de la sociedad española que perseguían. Incluso los radical socialistas eran más ambiciosos y radicales en sus planteamientos, y en algunos temas como el religioso de un anticlericalismo maximalista.

Respecto a los dos partidos regionales, si bien podrían identificarse más con el conjunto de reformas planteadas, se veían especialmente ocupados, sobre todo la Esquerra, por la consecución de su propia autonomía. Autonomía que no quedaba resuelta con el Estatuto sino que exigía posteriormente el traspaso de servicios, elecciones al Parlamento catalán, etc. La Orga en cambio, de una autonomismo más tibio, venía a quedar mucho más cerca de Acción Republicana, y de su planteamiento nacional de la política. Como veremos a continuación, por este motivo y por el ascendiente de Azaña sobre Casares, la Orga reforzaría la posición de Acción Republicana en las Cortes.

Otro factor decisivo que tuvo como consecuencia aumentar la importancia de Acción Republicana, fue el hecho de ser durante todo el bienio el partido del Presidente del Gobierno. Una postura de Acción Republicana podía significar que detrás se encontraba la opinión de Azaña, y por lo tanto existía la posibilidad de un apoyo directo por su parte; de ahí la importancia que

para los demás partidos adquiriría tener en cuenta la posición adoptada por Acción Republicana.

A su vez, el ascendiente político de Azaña sobre sus compañeros de Gobierno e incluso sobre líderes políticos afines que no pertenecían a él, repercutía en realzar la relevancia de la posición política tanto del propio Azaña como de su partido, principal instrumento de éste en los trabajos en las discusiones de las Cortes.

Como ha visto Alfonso Bozzo, la relación política y personal que se estableció entre Azaña y Casares Quiroga significó una atracción de la Orga a la órbita política del Presidente del Gobierno. Lo cual implicaba un robustecimiento paralelo de la posición de Acción Republicana por esa vía indirecta. El nombramiento de Casares como ministro de Gobernación, un puesto de gran responsabilidad política, sería el hecho que trasladaría definitivamente los intereses del líder gallego al ámbito nacional, proceso cuya conclusión lógica culminaría en 1934 con la inclusión de la Orga en un partido nacional que incluyera en su programa la defensa de la autonomía, Durante 1932 y 33 frecuentemente se corrieron rumores de la incorporación del partido de Casares a Acción Republicana, lo que es un índice de la identificación política entre ambas organizaciones.

De igual manera aunque en menor medida la influencia de Azaña sobre Domingo y Albornoz suponía una revalorización de Acción Republicana frente al PRRS. La incoherencia y heterogeneidad de este partido, y la posición mucho menos firme de sus dos

principales líderes en el interior del partido que la que podrían tener Casares o Azaña, debilitaba esta influencia. También el mayor radicalismo de sus diputados -por lo menos hasta 1933- les hacía ser menos sensibles a las posturas adoptadas por Acción Republicana o por Azaña.

Pero con todo se puede observar una expectación por parte del PRPS respecto a las decisiones que pudiera adoptar Acción Republicana, ante el temor de quedarse aislados o enfrentados a la decisión del Presidente del Gobierno, que en último término se verían forzados a aceptar.

Lo mismo puede afirmarse respecto de todos los demás partidos de la coalición, e incluso de los partidos republicanos de oposición, radicales y federales. Nos referimos a la circunstancia general de considerar la posición de Acción Republicana ante cualquier tema como de especial relevancia no ya porque fuera a ejercer ninguna influencia sobre las decisiones a adoptar de todos los demás partidos, sino por indicar probablemente la opinión de Azaña.

Esta relevancia de Acción republicana se veía reforzada además por una serie de características del partido que en el panorama de partidos republicanos no era frecuente. Nos referimos por ejemplo a la disciplina que el partido llegó a adquirir, pasados los primeros meses de actuación parlamentaria. Salvo el partido socialista, ninguno de los partidos nacionales, el radical y el radical socialista consiguieron el mismo grado de unidad, si bien hay que considerar que su mayor

tamaño lo hacía más difícil. Tampoco se puede afirmar que la disciplina de Acción Republicana fuese absoluta, o que alcanzase los niveles habituales hoy día, pero en el contexto de las Cortes Constituyentes se le puede calificar de una minoría disciplinada.

Ya al final de la legislatura, en el verano de 1933 fue cuando esta disciplina comenzó a flaquear, no por fraccionamientos a la hora de votar sino por inasistencia a las sesiones, debido al desaliento de la mayoría parlamentaria mencionado ya. Inasistencia que como sabemos ocasionaría fuertes críticas en la base del partido.

Otro factor que coadyuvaba a destacar la importancia de Acción Republicana era la mayor cohesión ideológica existente en su interior. Ya hemos señalado cómo la autoridad de Azaña contribuyó enormemente a conseguir esta homogeneidad, inexistente en los primeros meses; el hecho cierto es que aunque en Acción Republicana siguiera existiendo perceptiblemente diputados más progresistas y diputados más conservadores, nunca se manifestó esta polaridad de una forma abierta, con enfrentamientos o riesgo de escisiones. Esta cohesión es la otra cara de la moneda de la identificación con el programa gubernamental, pues es a través de su función de apoyo a la acción gubernamental y a Azaña cómo Acción Republicana logró su unidad.

Frente a ello, dentro de la coalición gubernamental destacaba la desunión de los radical socialistas, con el sec-

tor más radical en torno a Albornoz y el resto, hasta la aparición de una importante ala derecha, más cercano a M. Domingo. Posteriormente el ascenso de Gorgón Ordás originaría en 1933 la aparición de ese ala derecha que aunque minoritaria en el Parlamento lograría hacerse con el control del partido provocando la escisión del PRRS.

El caso de los socialistas es diferente pues su disciplina era muy superior a la de todos los demás partidos, mientras que las dos minorías regionales poseían este carácter regional que les daba un factor de cohesión superior al ideológico.

Por último habría que considerar, como un factor no despreciable para comprender la posición de Acción Republicana dentro de la mayoría, el prestigio de sus miembros individuales. La cualificación profesional y la reconocida valía intelectual de muchos de ellos convertía a la minoría de Acción Republicana en un pequeño grupo de élite, que durante gran parte de la legislatura constituyente ostentó numerosos cargos de Gobierno.

Esta fama de grupo con prestigiosos intelectuales, servía a Acción Republicana, a pesar de la reticencia con que era con que era contemplado por el Jefe del Estado y por algunas figuras de primer orden (Ortega, Unamuno, etc.), para aumentar la expectación ante algunas intervenciones de sus miembros. Estos factores que hemos enumerado, (ser el partido

del Presidente del Gobierno, con la consiguiente atracción ha
cia sus planteamientos políticos de otras minorías, su grado
de adhesión al programa gubernamental, el prestigio de sus
miembros y el aceptable grado de disciplina parlamentaria y
cohesión interna) aumentaban sin lugar a dudas la importancia
parlamentaria del pequeño partido que era Acción Republicana.

De haber logrado un crecimiento más rápido, a lo lar
go de la misma legislatura constituyente -para lo que el pro-
cedimiento más factible era haber conseguido la fusión con
Orga y radical socialistas-, puede pensarse que no se hubie-
ra producido una disolución tan pronta de la Cámara, evitándo
se muchos conflictos posteriores; pero dicha fusión sólo estu
vo madura una vez que el desastre republicano de noviembre de
1933 se hubo producido. Porque el gran inconveniente de Azaña
fue no contar con un partido lo suficientemente numeroso como
para rentabilizar los logros de una política que aunque crític
ada por ambos flancos era coherente. Un gran partido le hu-
biese permitido además una mayor rapidez en las tareas parla-
mentarias, cuya lentitud es uno de los aspectos más justificad
amente criticados de la labor gubernamental de Azaña. El
principal paliativo a este defecto numérico-que desde luego no
se veía suficientemente compensado por los factores analizados
anteriormente- vino dado por la propia actuación personal de
Azaña, no ya como jefe de de uno de los partidos de la coali-
ción, sino como estadista y Jefe del Gobierno.

Dentro de la evolución del bloque izquierdista a lo
largo del bienio constituyente hay que señalar que en la últim

ma etapa, a partir de 1933, progresivamente Acción Republicana fue recuperando una posición centrista dentro de la coalición con la aparición del sector derechista en el PRRS. En efecto no se produjo una identificación de éste sector con Acción Republicana como pudiera pensarse, al estar los radical socialistas habitualmente a la izquierda de Acción Republicana, sino que la disidencia encabezada por Gordón Ordas pasó a ser la derecha de la coalición. De hecho, a duras penas mantuvieron el apoyo al Gobierno -tan sólo porque en la minoría parlamentaria radical socialista eran minoría-. Los temas de discrepancia eran la necesidad, desde el punto de vista de los partidarios de Gordón Ordás, de acabar con la colaboración gubernamental socialista y un mayor conservadurismo socioeconómico.

Puede pensarse con todo lo dicho hasta ahora que entendemos que la colaboración socialista se limitó a prestar un apoyo de masas que faltaba a los republicanos con una actitud meramente pasiva, sin que políticamente tuviese importancia su colaboración (1). Nada más lejos de la realidad. La colaboración socialista era la base que permitía un programa reformista como el que puso en marcha Azaña.

(1) En este sentido se orientan y las críticas dirigidas desde un punto de vista izquierdista frecuente en algunos historiadores y políticos en la actualidad; respecto a éstos cfr. por ejemplo las críticas comunistas respecto a la actuación socialista en la II República en *El País*, 19-7-77, tropezar en la misma piedra, Simón Sánchez Montero.

Precisamente ese apoyo de masas era el que permitía al Gobierno tener la fuerza política suficiente como para reformar el *statu quo* social y político. No ya por supuesto por el hecho de la imprescindible base parlamentaria, sino por el respaldo social que significaba.

Y este respaldo social implicaba que las reformas emprendidas tenían -pese a su moderación- un carácter más decididamente reformista que el que hubieran tenido en manos de una hipotética mayoría republicana de izquierdas. Por mucho que nos puedan parecer desde nuestro actual punto de vista excesivamente moderadas dichas reformas, el poder social de la derecha era tan grande que difícilmente podía haberse intentado otra cosa. Y la colaboración socialista permitió que esas reformas no se desdibujasen todavía más, y que en muchos casos fueran más allá -sobre todo en la obra de Largo Caballero en el ministerio de Trabajo- de lo que los republicanos de izquierdas hubiesen deseado por ellos mismos en aquellas circunstancias. Esto es lo que explica, no ya la evolución del P. Radical, que muy pronto se convirtió en refugio de intereses sociales conservadores, sino sobre todo de la disidencia derechista radical socialista que hemos visto.

La postura de colaboración de los socialistas no era tan fácilmente criticable como se presenta a veces, pues la alternativa que se les presentaba era, bien contemplar desde una oposición vigilante una reforma mucho más lenta y tímida, (la que hubiera podido efectuar una concentración republicana)

0089:

bien acelerarla como hicieron participando gobiernos republicanos socialistas, ya que no era viable ni parlamentaria ni socialmente un gobierno socialista.

3. ESTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LAS CORTES
CONSTITUYENTES

ESTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LAS CORTES CONSTITUYENTES

La tan repetida inestabilidad gubernamental durante la II República española no es un fenómeno tan evidente como se afirma a menudo.

El plazo de tiempo de las dos primeras legislaturas es demasiado breve como para sacar conclusiones respecto al sistema político plasmado en la Constitución; no cabe por ello más que observar el comportamiento Gobierno-Cortes de 1931 a 1936 sin pretender de hacer afirmaciones taxativas. Nos limitamos nosotros a estudiar la legislatura Constituyente, para con todas las reservas antedichas intentar explicar la estabilidad gubernamental perceptible en el primer bienio.

Cuando se habla de la inestabilidad gubernamental en la República se afirma en general de toda ella sin distinguir entre las dos primeras legislaturas. Y como es habitual al realizar un computo medio de la duración de cada gobierno dado el elevado número de ellos que hubo en 1934-36, se obtiene una impresión falsa sobre el conjunto del período.

Pues de 1931 a 1933 hubo una notable estabilidad gubernamental, muy superior en realidad a lo que puede indicar el hecho de que hubiera cinco gobiernos con una media de 6 meses de duración cada uno de ellos (1). La primera crisis de

(1) Computamos los siguientes Gobiernos: el de Alcalá Zamora, los tres de Azaña y el de Lerroux; no el de Martínez Barrio puesto que su Presidente tenía en su poder el decreto de disolución, por lo que no había ya conflictos con las Cortes. Respecto al tiempo contamos los 30 meses que van desde abril del 31 a septiembre del 33; en octubre se produce ya la disolución de las Constituyentes.

octubre del 31 no impidió que el gobierno perdurase tan solo con la pérdida de la participación de un partido minoritario, la Derecha Liberal Republicana. De más trascendencia, puesto que implicaba reducir la base del Gobierno a la izquierda del mismo fue la de diciembre del mismo año, pero era una crisis obligada puesto que venía tras la aprobación de la Constitución y subsiguiente elección de Presidente de la República.

Durante todo el período posterior de las Cortes Constituyentes, se puede decir que hubo un único Gobierno, el de Azaña. Sin embargo se produjo una crisis en junio del 33, crisis de origen presidencial y que no significó variación alguna de importancia en la composición política del Gobierno, pues no se puede calificar de tal la incorporación a la mayoría de los escasísimos federales. No puede considerarse esta crisis como un incidente en las relaciones Gobierno-Cortes puesto que el Gobierno Azaña no llegó a perder la confianza de las Cortes en ningún momento. El significado de la crisis había que estudiarlo al tratar de las relaciones Gobierno-Presidente de la República, a la que ya aludimos en la primera parte de nuestro trabajo.

Igualmente sucedería con el tercer Gobierno Azaña, que políticamente hemos identificado al segundo, al acabar su vida tras la pérdida de la confianza presidencial; el Gabinete Lerroux que le sucedió ya no pudo gobernar con esas Cortes, siendo substituido al recibir una votación de desconfianza por un Ministerio electoral, el de Martínez Barrio.

Lo que nos interesa analizar ahora es cómo se produjo la estabilidad de los Gobiernos de Azaña, en contraposición a la perpetua inestabilidad de los Gobiernos durante el segundo bienio. Puesto que si estos caían en su mayor parte por dismensiones interpartidistas, en cambio insistimos en que las crisis que hicieron caer a Azaña tuvieron un origen extraparlamentario (1). ¿Qué factores concurren para que las relaciones Gobierno-Parlamento no provocasen en la primera legislatura republicana las crisis que sí existieron en la segunda?

Es evidente que la estabilidad del primer bienio se produjo *a pesar* de la debilidad de los partidos. Si como ha escrito Blondel la fortaleza y el arraigo de los partidos es la base de una posición firme de los gobiernos frente al Parlamento (2), es evidente que esta condición básica faltaba a las fuerzas políticas presentes en las Constituyentes -con la excepción socialista-. Acción Republicana tenía el inconveniente fundamental de que era un pequeño partido, que si bien podía ofrecer un futuro prometedor en aquél momento, no tenía sino una escasa capacidad de iniciativa política. Los factores que enumeramos antes y que en alguna medida atenuaban este hecho podían mejorar su posición en el seno de la coalición gu-

(1) Varela, *El sistema de partidos...* p. 91 incluye un cuadro con las crisis de gobierno habidas a lo largo de la República y sus causas.

(2) vid. *Introducción al estudio ...* p. 434.

bernamental, pero en modo alguno podían llegar a compensarlo, ni siquiera esa función de partido eje ("pivot") de la coalición. Y no bastaba la disciplina de los socialistas para permitir al Gobierno dominar la Cámara, pues los restantes partidos republicanos gubernamentales eran como sabemos de pequeño tamaño o sin disciplina interna.

Para explicar la estabilidad de los gobiernos de Azaña hay que recurrir ya que no a la fuerza de su propio partido, a la personalidad de su Presidente. De manera similar a como veíamos el papel destacado que Azaña representó como líder político en su partido, para el sistema de partidos y el sistema político republicano fue una figura en sí mismo de gran trascendencia. El fenómeno de la personalización del poder como principal sustitutivo de la ausencia de organizaciones partidistas consolidadas ha sido afirmado por el autor antes citado (1). Personalización del poder que puede presentarse tan to como fenómeno positivo en épocas iniciales del desarrollo político de un país, como en una fase tardía de las sociedades democráticas consolidadas (2).

Pues bien, en nuestra opinión fue la autoridad personal de Azaña sobre los partidos integrantes de la coalición, e incluso sobre los restantes partidos republicanos lo que explica que pese a la debilidad del sistema de partidos y del su yo propio se mantuviera durante dos años sin perder la confian

(1) *Ibid.* p. 380.

(2) Sobre la personalidad del poder en las sociedades modernas vease el interesante libro de Schwartzenberg, *L'état spectacle...*, pags. 16-118.

za del Parlamento a pesar de las difíciles circunstancias por las que atravesó.

Azaña fue adquiriendo con el transcurso de los meses en el primer bienio carisma indiscutible. Primero fue tan sólo, el prestigio consecuencia de su gestión como ministro de la Guerra, gestión que mereció el aplauso público en las Cortes de Ortega y Gasset, a pesar de la escasa simpatía mutua que ambos se profesaban. Tras su ascenso a la presidencia del consejo de ministro fue su capacidad para resolver los problemas parlamentarios, para ir sacando adelante leyes que parecían empresas casi perdidas, como en ciertos momentos pareció el Estatuto de Cataluña, sus brillantes intervenciones en las Cortes, etc., lo que le fue creando una aureola de líder político imbatible en las Cortes.

El aplastamiento de la revuelta de Sanjurjo y la inmediata aprobación de la Reforma Agraria y del Estatuto catalán señalan el punto más alto de su gestión como Presidente del Gobierno. De él se esperaba que resolviese cualquier problema, y a través de sus memorias nos ha llegado como ante muchas dificultades los ministros correspondientes preferían que fuese él quien se enfrentase al Parlamento. La fama de imbatibilidad parlamentaria se debía en parte a su justificado prestigio de orador; en realidad, y Azaña era consciente de ello, pocos se atrevían a hacerle frente en las Cortes por temor a salir malparados.

Una atracción menos racional, más estrictamente carismática hacia la figura de Azaña vendría con posterioridad al primer bienio como consecuencia de la persecución y encarcelamiento de que fue objeto en octubre del 34. La figura del ex presidente del Gobierno adquirió entonces un carácter de mito popular -así como de "monstruo" para las derechas- del que Azaña mismo se asustaba por lo que de él se esperaba. La base de esa atracción auténticamente carismática hay que encontrarla en este primer bienio, por la confianza que supo inspirar ante cualquier problema parlamentario o extraparlamentario con que se enfrentó la coalición republicano socialista.

Este carisma, que llegaba en palabras de Prieto a auténtica adoración entre sus partidarios más acérrimos, estaba sin embargo durante el primer bienio más ligado a elementos racionales; junto con la capacidad de superar las dificultades políticas hay que mencionar también el que Azaña se convirtió en el símbolo de una política determinada. Su actuación al frente del Gobierno le valió el personalizar ya para toda la República la política reformista de colaboración republicano-socialista. Sabemos que en la propia mente de Azaña estaba prevista tras la época de colaboración con los socialistas, una etapa de gobierno exclusivamente de los republicanos, para administrar las reformas realizadas; sin embargo la ruptura de los republicanos adscritos a sendos bloques de derecha y de izquierda hizo imposible este proyecto. Azaña sería ya el hombre inevitable para un gobierno de izquierdas, que impli

caba de una forma u otra la colaboración socialista.

Azaña llegó a encarnar así esta política, lo que le facilitaba el vencer las resistencias del Parlamento sobre cualquier tema. Su prestigio y su valor simbólico hacían que difícilmente se atreviesen los diputados -especialmente los más indisciplinados, los radical socialistas- a hacerle frente en el Parlamento abiertamente, o incluso a arriesgarse a derribar al Gobierno. Azaña era insustituible y derrota~~r~~le podía implicar la disolución de Cortes.

Cabría pensar que la inasistencia a Cortes de los diputados de la mayoría durante el verano de 1933, que tanto mal hizo al Gabinete Azaña, hubiese sido menor de imaginar los diputados que iba a debilitar al Gobierno lo suficiente como para permitir al Presidente de la República cesar a Azaña tras las elecciones a vocales del Tribunal de Garantías. Porque con una mayoría que hubiese conservado el entusiasmo de hacía un año, difícilmente se hubiera atrevido Alcalá Zamora a cesar al Gobierno y luego a disolver las Cortes. Pero lo decisivo es que la propia mayoría había perdido la fe en el apoyo social con que contaba la política que realizaban (1).

Este personalismo que pese a su voluntad representó Azaña se manifestaba más allá del panorama parlamentario del sistema de partidos. En realidad era una personalización que ejercía su influencia en el conjunto del sistema político en su totalidad. La persona de Azaña era un eje que aglutinaba

(1) Las quejas de Azaña sobre este desinterés abundan en su diario, por ej. Arrarás, *Memorias*...p. 246 y 247, referidas al 20 de julio y al 22 de agosto. No hay que despreciar tampoco el simple cansancio ante la ausencia de vacaciones parlamentarias como razón de la ausencia, Azaña OC, IV p. 644.

una serie de fuerzas políticas y sindicales en torno a una política. El simbolizaba esa política no sólo ante las minorías parlamentarias, sino ante las fuerzas sociales que respaldaban al Gobierno, aunque no fueran electores suyos. Esto se vería más tarde con toda claridad en los discursos en campo abierto de 1935, con las ingentes concentraciones de masas para estar presentes en sus actos públicos. No es que entonces Izquierda Republicana careciera de base de masas, pero en estas concentraciones es muy posible que el espectro político de los asistentes fuera bastante amplio. En menor grado esto era ya un fenómeno existente en el primer bienio, aunque como consecuencia de la propaganda anarcosindicalista sufriera la imagen de Azaña un cierto deterioro entre los sectores más populares en 1933. Las gestiones que Azaña hizo en ocasiones con líderes de la UGT prueban el ascendiente que podía ejercer sobre las organizaciones de carácter sindical.

Todo esto tenía la consecuencia sobre el sistema de partidos, tal como se presentaba en el Parlamento, de que Azaña era por sí mismo, el más fuerte elemento de cohesión de la mayoría. Por algo él afirmaba que la coalición podría estallar por disensiones extraparlamentarias (conflictos locales entre republicanos y socialistas por ejemplo), pero que en el Parlamento era indestructible (1). Elemento de cohesión de carácter subjetivo, por ese carácter simbólico de la nueva política republicana y por el carisma que llegó a adquirir.

(1) Azaña, OC, IV p. 644.

Ha señalado Varela que "la talla de estadística de Azaña encontró dos limitaciones: la falta de apoyo de una sólida organización partidista y sus propios escrúpulos en personalizar el poder político" (1). Ya hablamos del primer punto. Respecto al segundo tiene razón Varela al afirmar la repulsión que a Azaña le producía la personalización del poder. Para él los motivos ideológicos y políticos, ventilados en el Parlamento como centro donde se plantean y resuelven los asuntos públicos debían constituir lo fundamental de la política. Es cierto también que él no buscó su exaltación personal. Pero no se puede concluir que por todo ello esa personalización no se produjo.

Como hemos afirmado existió una indudable personificación de la política reformista en Azaña. Lo que sí es cierto es que Azaña no utilizó a fondo los recursos que esta situación le proporcionaba (2). Él pudo desde haber intentado forzar la unión de los partidos republicanos antes de 1934, hasta haber fomentado su popularidad personal en el ejército mediante frecuentes visitas a los cuarteles (cuando lo hizo fue siempre un éxito), pasando por todos los recursos que el

(1) *El sistema de partidos...*, p. 177.

(2) Schwartzberg distingue adecuadamente entre la personalización del poder, fenómeno que analizamos en qué medida se dió en Azaña y el poder personal, esto es, la absorción por parte de una persona de todos los poderes. A pesar de las acusaciones de un sector de la prensa a Azaña de ser un "dictador" -en uno de los sistemas más parlamentaristas que ha conocido Europa...- durante 1932-33, y que llegaron a convertirse en una polémica pública, en ningún caso puede hablarse de poder personal en manos de Azaña. *Op. cit.* p. 8.

poder permite para fomentar una imagen pública. Azaña se negó a ir por este camino, esperando, por seguir con los ejemplos puestos que la propia bondad de su reforma militar le acabaría granjeando la estima de los militares valiosos, o que su iniciativa de proponer la unión parlamentaria de los republicanos gubernamentales hecha en Santander a finales de 1932 bastaría para que dicha unión se produjese.

Naturalmente las cosas no eran tan sencillas ni tan racionales. Sin embargo y pese a su inactividad en tal sentido Azaña fue adquiriendo un valor personal difícilmente discutible, del que él era consciente, y que mostró toda su eficacia en 1936.

Conviene precisar una afirmación hecha por Marichal sobre Azaña y que tiene relación con esta pasividad del líder republicano respecto a todo lo que no fueran cauces políticos. Nos referimos a su condena de "los pasillos" parlamentarios. Ciertamente Azaña reivindicaba que la política debía hacerse en el salón de sesiones, y allí, con sus grandes intervenciones jugó las bazas más fuertes de su carrera política. Sin embargo Azaña no era tan ingenuo como para pretender prescindir por completo de los pasillos.

De hecho recurrió a la negociación y al pacto frecuentemente, criticando acerbamente a aquéllos que protestaban por que se llegase a acuerdos fuera del hemiciclo. Así, soluciones de concordia en momentos críticos, como para acabar con la

obstrucción en 1933, transacciones en leyes controvertidas, etc., fueron pactadas en los pasillos y despachos de las Cortes. Es por lo demás difícilmente criticable -y eso es tanto más visible en la actualidad, en que apenas hay grandes enfrentamientos en los plenos de las Cámaras (1)- que se recurra a la negociación para facilitar el desarrollo de las sesiones.

¿En qué se queda pues la condena de los pasillos que hacía Azaña? ¿Era algo propio de cuando el veía los toros desde la barrera y de lo que se vió obligado a prescindir cuando se encontró con la responsabilidad de un gobierno? Hubo ciertos temas que Azaña jamás quiso abordar fuera del salón de sesiones; se trataba de aquellas cuestiones que consideraba inalienables de la soberanía de las Cortes. Por ejemplo el planteamiento de una crisis de Gobierno. Repetidas veces se opuso a aceptar el chantaje radical: cambiar la oposición por una colaboración con la mayoría a cambio del Gobierno a plazo fijo. El podía aceptar negociaciones para mejorar las relaciones con la oposición, pero la permanencia del Ministerio dependía exclusivamente de que gozara de las dos confianzas exigidas constitucionalmente, la de las Cortes -la decisiva- y la del Presidente de las Cortes -subordinada a aquélla (2)-, y no de

(1) En un reciente artículo en *El País*, Marichal apuntaba el riesgo opuesto en el que fácilmente se podía caer en las actuales Cortes, de que el afán de obtener un consenso negociado en todas las cuestiones privase de publicidad a las tareas parlamentarias.

(2) Vid supra capítulo V.1.

ningún cambalache con la oposición. Si esta no tenía fuerza parlamentaria suficiente para forzarle a dimitir no tenía porqué hacerlo.

Igual actitud adoptaba ante los partidos integrantes de la mayoría. Si una cuestión era juzgada por él como algo sobre lo que no podía ceder y si el partido que fuese mantenía una postura similar, que votasen en contra del Gobierno en las Cortes arrastrando el riesgo de hacerle caer; en último término, o el gobierno de coalición seguía contando con la confianza de sus integrantes o no, pero se negaba a transigir sobre temas que él considerase como cuestión de Gabinete.

Todo lo demás quedaba abierto a la transacción, abierta o de pasillos. No era su repugnancia pues tan grande a la inevitable "pequeña política parlamentaria". Por lo demás en sus Memorias nos ha dejado abundantes testimonios de esa labor reservada de búsqueda de acuerdos con las distintas fuerzas políticas. Lo que sí es cierto, volviendo a su reluctancia a ocuparse *personalmente* de tales gestiones, es que si podía evitar las lo hacía; prefería que colaboradores suyos se encargasen de ello, interviniendo él tan sólo cuando era imprescindible. En una palabra, que se mostraba reticente a centrar en él toda la labor política de negociación, lo que no es sino una cara más de su escasa inclinación a fomentar la personalización del poder y a utilizarla en su beneficio político.

C A P I T U L O - I X

=====

CONCLUSIONES

=====

CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas de este trabajo hemos estudiado la actuación de un grupo político, Acción Republicana, desde sus orígenes en la Dictadura de Primo de Rivera hasta su transformación, nueve años más tarde, más que desaparición, en un partido mayor, Izquierda Republicana.

No vamos ahora a aportar ninguna idea ni dato más , sino tan sólo a presentar sumariamente lo que creemos que puede significar la aportación de más interés de nuestro trabajo. En esta labor de síntesis volvemos a encontrar dualidad, a la que nos referíamos en la introducción, al tratar de delimitar el objeto y métodos de la investigación que pretendíamos.

Por un lado, el establecimiento de una serie de supuestos históricos-políticos, cuyo interés no radica sólo en el esclarecimiento histórico, sino asimismo en la base que tales supuestos proporcionan a la Ciencia Política para poder realizar generalizaciones teóricas; nos referimos a las conclusiones sobre la naturaleza y características del partido estudiado, a la base social de su programa y actuación parlamentaria, etc.

Pero, por otra parte tenemos aquellas conclusiones -quizás más importantes- que nos permiten conocer mejor el funcionamiento de un régimen político y de su sistema de partidos; ambos conceptos son esquemas teóricos por medio de los cuales intentamos comprender el funcionamiento de los hechos políticos

y establecer, en la medida de lo posible, regularidades que nos sirvan incluso para una actuación futura. Pues bien, precisamente por ser instrumentos conceptuales carecen de absoluta univocidad y precisión, permitiendo lecturas diferentes, incluso refiriéndonos a una época y país concreto. Por ello aportaciones parciales -como lo es la nuestra- que permitan precisar el funcionamiento concreto de un sistema de partidos nos facilitará el progresivo afinamiento de nuestras hipótesis generales sobre los hechos políticos.

Esa dualidad a que nos referimos muestra por tanto su faceta teórica en aquellas conclusiones sobre el papel de Acción Republicana en el sistema de partidos republicanos: tanto del papel *efectivamente realizado* como del que *podía haber desempeñado* con mejor fortuna para la supervivencia del régimen democrático republicano.

Ambos tipos de conclusiones serían las siguientes:

1.- Acción Republicana llegó a ser un auténtico partido político, a partir del proceso de crecimiento experimentado en 1930-31, y que culminó con la decisión formal de constituirse como tal partido. Hasta entonces -mayo de 1931- había consistido en una agrupación sin apenas estructura organizativa. El elemento ideológico que sirvió de aglutinante a Acción Republicana durante aquella primera etapa fue casi con exclusividad su republicanismo. Acción Republicana era una agrupación política republicana cuya aspiración se agotaba en la im

plantación del régimen republicano de gobierno. Por ello su finalidad expresamente reconocida era fomentar la unión de los partidos republicanos ya existentes, lo que le confería una cierta ambigüedad respecto a sus intenciones últimas; esta de cisión de mayo de 1931 comenzó a dotarse de un aparato organi zativo y a extenderse por las provincias de las que todavía estaba ausente. Aunque el proceso de expansión y consolidación continuó durante todo el período estudiado, desde aquel momento puede considerársele como un partido político, tanto como por su aparato organizativo mínimo, local y nacional, co mo por su ambición de gobernar y aplicar su programa definido.

Pues en efecto fue poco después de decidir transfor marse en partido cuando se aprobó por primera vez un texto pro gramático.

Es pues absolutamente inexacto referirse a Acción Republicana, en base a sus presuntas dimensiones, al ascendien te de Azaña sobre sus correligionarios o a cualquier otro fac tor, como una agrupación de intelectuales o como una simple pla taforma personal de Azaña. Tal ha sido hasta ahora la caracte rización más frecuente de Acción Republicana basada en la au sencia de investigaciones. No se ajusta sin embargo en absolu to a la realidad. Acción Republicana actuó como un partido po lítico, pequeño, pero no marginable -como podía serlo el Par tido Federal- y como tal fue considerado y actuó en las con tiendas políticas, tanto dentro como fuera del Parlamento.

2.- Acción Republicana aspiraba, por su estructura interna y por su forma de funcionamiento a ser un partido de masas. Frente a la imagen tradicional a que hemos aludido, que resultaba abonada por la abundancia de intelectuales entre las primeras figuras del partido, y que pudiera hacer pensar en un partido de cuadros, es necesario afirmar su naturaleza de partido de masas. Por su encuadramiento de los afiliados en las agrupaciones locales, su sistema de financiación, el grado de militancia de los afiliados, y el resto de características organizativas que hemos explicado en el capítulo correspondiente, Acción Republicana fue sin duda un partido de masas.

Cierto que hay que notar dos cosas. La primera que Acción Republicana no llegó a poseer un apoyo electoral considerable, esto es, que fue hasta 1934 un partido pequeño; pero ello no quita que su funcionamiento fuera el propio de un moderno partido de masas, y que sus aspiraciones no residieran en la construcción de un partido radical como el francés, típico ejemplo del partido de notables, sino de un partido que encuadrara el máximo número de partidarios.

En segundo lugar, que por su breve existencia y sus reducidas dimensiones, -ambos factores íntimamente ligados- subsistieron en él abundantes personalismos, carentes de contenido ideológico, especialmente en las organizaciones provinciales, impropios de un partido de masas.

Igualmente, su implantación desigual provocaba que

en ciertas localidades la organización apenas existiera y pudiese asemejarse en ocasiones a un partido, más cercano a una estructura de cuadros. Estos hechos no deben ocultarnos lo principal, esto es el funcionamiento global del partido, especialmente en las zonas donde su implantación permite observar el funcionamiento tal como estaba previsto por sus Estatutos.

Entre otros rasgos de escasa modernidad, habría que recordar esas funciones extrapolíticas que también cubría Acción Republicana -y suponemos que no sólo este partido. Funciones que podríamos caracterizar como de protección y asesoramiento del ciudadano, desde la búsqueda de trabajo hasta su orientación en las relaciones burocráticas con la Administración. Tareas cuya asunción por partidos políticos creemos que era debida al arcaísmo de la sociedad y el escaso nivel cultural existente, que ocasionaba esta multifuncionalidad supletoria de las organizaciones políticas.

Por último, habría que mencionar el carácter considerablemente democrático de su estructura y funcionamiento, que lo diferencia de otros partidos republicanos de mayor peso, pero que por unos u otros factores carecían de un funcionamiento interno mínimamente democrático.

3.- Acción Republicana logró una implantación apreciable, especialmente en algunas zonas, como el Levante o Castilla, y en algunas provincias concretas (Albacete, Pontevedra). Su consolidación fue por lo tanto desigual, y llegó al

final del período estudiado sin cubrir todo el ámbito nacional, aunque sí la mayor parte de las provincias.

Acción Republicana creció ininterrumpidamente hasta marzo de 1934, pero fue un crecimiento *lento*, que frecuentemente dependía más de la adhesión de grupos políticos locales ya organizados que de la expansión organizativa propia. Por lo demás, a pesar de este indudable crecimiento, no dejó de ser un pequeño partido.

4.- Con todas las reservas a que hicimos alusión en su momento, se puede afirmar que si bien Acción Republicana representaba una opción programática y política peculiar de las clases medias, de la pequeña burguesía, su electorado, que apoyaba esta vía reformista, era ampliamente interclasista, cubiriendo desde los sectores progresistas de la burguesía -muy minoritarios y circunscritos en general a los ámbitos profesionales e intelectuales- hasta sectores obreros, pasando por las ya aludidas clase medias y pequeña burguesía.

5.- La opción política reformista impulsada por Azaña y Acción Republicana -una vez implantada la República- era posible en el contexto republicano, en el que desde luego eran inviables tanto un mantenimiento del *statu quo* social y político como una transformación revolucionaria, que no hay que olvidar que *también* fracasó en dos ocasiones (octubre de 1934 y tras la sublevación militar de 1936). En la medida en que he-

mos tocado este punto hemos constatado que las medidas puestas en vigor y comenzadas a aplicar no justifican en absoluto, por su prudencia, la desmesurada reacción a que dieron lugar, reacción que habría que explicar más bien por la resistencia a ultranza a cualquier alteración del *statu quo* por parte de determinados sectores sociales y políticos.

Tampoco consideramos que tuviera mucha responsabilidad la supuesta demagogia verbal empleada: la oposición a las reformas tenía como fundamento intereses materiales que la impulsaban, y que hubieran producido consecuencias semejantes en cualquier caso.

6.- El hecho de que Azaña no contara con un sólido partido de masas detrás, está en la base de gran parte de las dificultades políticas con que se enfrentó la coalición gobernante durante el primer bienio y probablemente también de su fracaso. Varias razones abonan esta conclusión. En primer lugar el deterioro de la mayoría gubernamental, especialmente a partir de 1933, se produjo por el resquebrajamiento del partido republicano de izquierdas más numeroso de la coalición, el Radical Socialista, carente de una dirección homogénea y con suficiente autoridad interna. Este resquebrajamiento, junto con la desmedida oposición del Partido Radical y la derecha parlamentaria influyó en una progresiva desmoralización de los partidos republicanos de la coalición, incluida Acción Republicana.

Por otro lado, si bien las dos crisis que dieron al traste con el 2º y 3º Gobierno Azaña por falta de confianza presidencial no debieron quizás producirse, es indudable que si el Gobierno hubiese tenido como soporte un único partido republicano de izquierdas, la posibilidad de desencadenar dichas crisis hubieran sido mucho menor para el Presidente de la República, quien no hubiera podido alegar el deterioro de la mayoría para otorgar el poder a Lerroux en septiembre de 1933.

La labor parlamentaria hubiera sido también, sin lugar a dudas, mucho más expedita y eficaz de no existir dicha división partidista entre los republicanos. No se puede olvidar que en ocasiones fueron algunos diputados radical socialistas los que *de facto* hicieron que la tramitación parlamentaria de algunas leyes fuese pasmosamente lenta. Y esta lentitud fue un factor importante en el retraso en la puesta en marcha de las reformas emprendidas.

La misma división ideológica que surgió en el Partido Radical Socialista acaudillado por Gordón Ordás, y que defendía una opción social más conservadora no fue en modo alguno inevitable, puesto que los parlamentarios radical socialistas fueron elegidos en 1931, habiendo mantenido posturas avanzadas en su campaña electoral y en muchos casos cercanas a los socialistas. Una dirección firme como la ejercida por Azaña en Acción Republicana hubiera evitado probablemente la escisión que se produjo en este partido.

Y por último frente a las elecciones generales de noviembre de 1933 un partido republicano de izquierdas potente se hubiera encontrado en una posición incomparablemente me jor.

Hubieran tenido una base más firme frente a sus alia dos socialistas para forzarles a ir coaligados a las elecciones, pues la expectativa de recibir más votos que los que podrían esperar concurriendo varios partidos hubiese hecho quizás apreciar al Partido Socialista la importancia de mantener la coalición; hubiese sido más difícil que cayeran en el error de pensar que los votos de los republicanos de izquierda eran des preciables por su escasa cuantía.

E incluso, de haber ido separados de los socialistas hubieran evitado unos resultados tan negativos, aunque probablemente las izquierdas hubieran perdido de todas formas las elecciones.

No pretendemos en nuestras conclusiones tratar de ave riguar lo que hubiese sucedido en caso de que algunos hechos hubiesen ocurrido de forma distinta a como se desarrollaron. La intención es tan sólo mostrar cómo en cualquier momento del primer bienio el carecer de un partido de masas, unido como so porte republicano de la actuación reformista del Gobierno, agra vó considerablemente las dificultades. En cualquier coyuntura grave de aquel bienio esa unidad partidista hubiese facilitado las cosas. No se puede probar que los resultados históricos hu

biesen sido radicalmente distintos, que se hubiese evitado el fracaso de la vía reformista y en último término de la República, pero sí dejar establecido, en base a la investigación realizada, que este factor constituyó un obstáculo insalvable en el éxito de tal vía; de no haber existido quedaban suficientes dificultades como para frustrarla, pero este obstáculo fue en sí mismo decisivo.

7.- Si ese fue el papel que Acción Republicana *no logró desempeñar*, el de proporcionar a Azaña una apoyatura de *masas sólida*, la función que sí representó en el sistema de partidos y más en concreto en el seno de la coalición gubernamental fue la de constituir su "eje" político. Era el partido que más identificado estaba con la política desarrollada en los diversos campos, desde el social hasta el político. Si la mayoría parlamentaria podía fallar por la defección de algún partido integrante de la coalición, puesto que los sectores de la mayoría republicano socialistas que apoyaban incondicionalmente cada medida gubernamental, variaban según la materia de que se tratase, era Acción Republicana el único partido que apoyaba el conjunto de propuestas del Gabinete Azaña. Eso sí, tras una necesaria labor de homogeneización interna que en los primeros tiempos fue ardua.

Representaba por tanto, gracias a su posición de centro de convergencia de todas las mayorías sectoriales en que se basaba la coalición gubernamental republicano socialista,

un papel de elemento de cohesión de esta coalición.

Era el punto de unión entre los partidos regionalistas, el partido socialista y los restantes partidos republicanos, y ello determinaba que su influencia parlamentaria fuera superior a la que pudiera esperarse de sus reducidas dimensiones. Además, a su posición en el aspecto político parlamentario se sumaba el hecho de ser el partido del Presidente del Gobierno.

A la función de partido eje de la coalición desempeñada por Acción Republicana coadyuvaba la figura de Azaña, cuyo prestigio servía tanto de elemento de cohesión interno de Acción Republicana como de la coalición gubernamental. Azaña representó, a pesar de su indiferencia hacia el fenómeno, la personalización de una determinada opción política -la vía reformista-, personalización que de haber sido empleada conscientemente, podía haber facilitado también la permanencia en el poder de su Gobierno.

8.- Azaña era consciente de la necesidad de la unión de los partidos republicanos de izquierda y de contar con un fuerte partido que respaldase su política; sin embargo, apenas hizo hasta noviembre de 1933 gestiones en tal sentido.

No se esforzó en potenciar el propio partido tomando a su cargo la tarea organizativa de extender su presencia y de reforzarla, sino que se desentendió absolutamente de ese aspecto de su organización política. Apoyó a su partido y participó

en actos de propaganda, etc., pero su dedicación a las tareas de gobierno y su poca afición a la vida partidista interna le apartó de tomar en su mano la cuestión.

Tampoco empleó durante ese período su creciente autoridad para forzar la fusión de los partidos republicanos de izquierda ya existentes. La apelación que en tal sentido hizo en el otoño de 1932 fracasó en una inútil federación de minorías parlamentarias; el abandonar su realización a los líderes parlamentarios de los partidos, entre los que no escaseaban las ambiciones personalistas, siendo él la única persona con suficiente autoridad para haber llevado a buen puerto la idea, era arriesgar la idea al fracaso, como en efecto sucedió. Si su actuación en esta federación fue tímida, nada hizo en cuanto a apremiar a sus colegas de gobierno republicanos en la necesidad de fusionar los partidos respectivos.

No es necesario insistir más en esta inactividad y sus razones que hemos explicado ampliamente a lo largo de la tesis. Interesa en cambio resaltar sus consecuencias. La importancia de la existencia de varios partidos republicanos que se disputaban el mismo espacio político, y por lo tanto a un tiempo aliados y competidores, condujo -en concurrencia evidentemente con otros factores- a la desorganizada y desmoralizada situación de diciembre de 1933, tras la derrota electoral. El desastre al que se había llegado sirvió al menos para galvanizar las fuerzas y la responsabilidad de los líderes republicanos. Ya vimos cómo Azaña, saltando por encima de sus prejuicios

y reticencias centró entonces su actividad política en conseguir la unión de los partidos más afines al suyo, lográndolo en tres meses.

Cierto que facilitaron el proceso la existencia de una intensa corriente de opinión favorable a la unión, el que la situación del Partido Radical Socialista se hubiera clarificado con la separación de su ala conservadora, y el que los republicanos se encontraron con la absoluta necesidad de garantizar de algún modo su supervivencia política. Pero aún así, este rápido proceso de unión es un argumento en favor de la tesis de que si Azaña lo hubiese intentado a fondo bastante antes hubiese tenido muchas posibilidades de conseguir su objetivo. El cambio substancial que se había producido tras las elecciones de noviembre no lo constituían los hechos enumerados, sino *la comprensión de la urgente necesidad de la unión*. El no haberlo percibido cuando todavía hubiera facilitado el éxito de la empresa reformista durante el primer bienio es quizás el más grave fallo político de Manuel Azaña.

9.- Digamos por último que Izquierda Republicana no puede considerarse un partido de nueva creación, a partir de los restos de tres partidos fragmentados y derrotados ante las urnas, como pudiera describirse desde una perspectiva general, sino una etapa decisiva en *el proceso de crecimiento de Acción Republicana*. En cuanto a la ORGA su limitación a las cuatro provincias gallegas impiden considerarla en pie de igualdad

con Acción Republicana, tanto más cuanto en una de esas cuatro provincias, en Pontevedra, hacía un año que la mayor parte de la organización de la ORGA se había desgajado de ella y se había sumado a Acción Republicana. Y en cuanto a los radicales socialistas, en este caso sí se trataba de los restos de un partido, puesto que en la fusión participó tan sólo su ala izquierda, encabezada por la figura más representativa del partido, Marcelino Domingo. Pero las disensiones a que había estado sometido el partido y que habían conducido finalmente a la escisión, habían debilitado profundamente la organización, cuyos elementos más caracterizados se sumaban ahora al único partido republicano que no había sufrido crisis graves, Acción Republicana, y que contaba con mayor prestigio y apoyo electoral.

10.- Quizás sea entonces hacia los partidos políticos republicanos, hacia su debilidad, consecuencia de su reciente creación y su falta de experiencia, a donde tengamos que dirigirnos en busca del principal factor del fracaso republicano. No porque desconozcamos que fue la violencia del enfrentamiento social la que agudizara las tensiones de la España de aquellos años, ni porque olvidemos que en último término fue una agresión militar contra el orden constitucional vigente la que pusiese fin a la experiencia republicana. Si nos referimos a los partidos, al sistema de partidos, en busca de ese fracaso es por el convencimiento de que una configuración distinta de éste hubiese permitido dominar mejor las tensiones sociales existentes, quitándole terreno a la posibilidad cumplida para desdicha in

cluso de los que vivimos cuarenta años después, de una rebelión de carácter militar y de una guerra civil.

Nosotros nos hemos referido a un partido, Acción Republicana, mostrando como si hubiera logrado implantarse como un gran partido de masas en un plazo breve tras la implantación de la República, la consolidación de ésta hubiese sido más ha-cedera. Pero igualmente si miramos a los restantes partidos comprendemos cómo efectivamente es ahí donde el régimen repu**bl**icano hizo agua; la ambigüedad en el reconocimiento del régimen por los dos grandes partidos de masas, CEDA y socialistas (éstos a partir de 1933), socavaron finalmente su sustento po**l**ítico. Quizás en la actualidad, cuando en nuestro país se trata por segunda vez en este siglo de construir un sistema demo**cr**ático, el peligro resida de nuevo en la inconsistencia de los dos principales partidos de nuestro espectro político, UCD y PSOE; este no es todavía, a pesar de los votos recibidos en las elecciones generales de 1977, la organización partidaria que fue en la República. La urgencia de ambos en la consolidación de sus organizaciones, así como la de los dos partidos menores que flanquean a aquéllos, permiten albergar la esperanza de que consigan vertebrar la opinión pública nacional permitiendo que las tensiones sociales y políticas queden encauzadas por el sistema político sin que le desborden.

Pues parafraseando las líneas que encabezan este trabajo, no fue la falta de preparación técnica ni de sentido so**ci**al lo que les faltó a Azaña y a las fuerzas políticas que él

00921

acaudilló. Fue más bien una insuficiente -o tardía- percepción de los medios que la moderna política de masas exigía. Al ponerlo de relieve con la esperanza de contribuir a una clarificación de las prioridades políticas en la actual situación española ha estado encaminada, en gran medida, la investigación realizada.

TE 1921-3

APENDICES



NOTA INTRODUCTORIA

NOTA INTRODUCTORIA

Si bien no parece preciso hacer aclaración alguna en torno al Apéndice I, en el que hemos recogido los documentos políticos y organizativos del partido que poseían mayor interés, sí creemos conveniente hacer constar brevemente los criterios de selección del Apéndice II.

En él se reúnen textos de distinta índole y que no han sido recogidos en la edición de las obras completas preparada por Marichal. Las razones de esta exclusión van desde el desconocimiento o la falta de localización de algunos artículos de Azaña, hasta, en lo que a los discursos -parlamentarios o extraparlamentarios- se refiere, el haberse limitado a compilar los discursos que el propio Azaña ya había recogido en varios volúmenes y publicado.

Hemos dividido el Apéndice en seis apartados. En el primero de ellos incluimos tres artículos prácticamente desconocidos, uno de ellos sobre la política francesa de postguerra, que se añade a los numerosos artículos escritos por Azaña sobre el país vecino, y otro sobre la situación española, publicado poco antes de proclamarse la República en el periódico *La Tierra*; además una contestación a una encuesta que la revista Política realizó en 1930 sobre las responsabilidades de la Dictadura.

En todos los demás apartados hemos recogido textos o discursos que nos han parecido de interés, a pesar de ser al

gunos de ellos de gran brevedad, como en general las intervenciones ante las Cortes. De interés en primer lugar porque nos parece que todo lo que haya salida de la boca o de la pluma de la primera figura de la República tiene *per se* un interés indudable. En segundo lugar porque son siempre referencias a la política realizada durante el período que hemos estudiado y por lo tanto un material documental pertinente a esta tesis.

Debemos aclarar que nos hemos limitado estrictamente a los años aquí estudiados (1925 - 1934). Y además que ninguno de esos apartados puede considerarse una recopilación exhaustiva. Respecto a las intervenciones en Cortes y los preámbulos a las disposiciones sobre el Ejército, hemos prescindido de alguna de menor importancia. Para recoger los preámbulos, aparte el interés que tienen para documentar los objetivos de las reformas militares, nos hemos basado en la afirmación del propio Azaña de que los redactó él personalmente (1).

En cuanto a los discursos políticos y alocuciones a los militares, hemos recogido tan sólo aquellos de los que hemos encontrado una versión taquigráfica; en caso de que hubiera dudas sobre la integridad de la transcripción lo hacemos constar. Con una búsqueda detenida por la prensa provincial se lograría hallar posiblemente algún discurso más, recogido íntegramente. Y por último, respecto a entrevistas de prensa hemos

(1) OC.II, p. 935. Esta omisión de las O.C. ha sido ya señalada por M. Aragón en *Manual Azaña, un intento ...*, nota 7.

00926

insertado aquí sólo aquéllas concedidas con exclusividad a al
gún periodista, y no las múltiples declaraciones ocasionales
que Azaña, en cuanto Presidente del Consejo, hacía a los re-
porteros.

I. DOCUMENTOS DE ACCION REPUBLICANA

1. DOCUMENTOS POLITICOS

a. TEXTOS PROGRAMATICOS DEL PARTIDO

DOCUMENTOS Y PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION NACIONAL DEL PARTIDOMANIFIESTO FUNDACIONAL DE ACCION REPUBLICANA

(Azaña, OC, II, p. 4).

Azaña incluyó este manifiesto en su volumen de recopilación de discursos "Una Política", con la siguiente advertencia:

"Inserto a continuación, a título de curiosidad, el manifiesto, primera demostración pública de su existencia, que dio Acción Republicana, en mayo de 1925. La censura prohibió su inserción en la prensa de Madrid y apareció en algunos periódicos americanos".

"Instaurado en septiembre de 1923 un poder personal absoluto que, con la fuerza de una sola clase de Estado, se prometía regenerar a la nación en el término de noventa días, hemos visto prorrogarse una y otra vez aquel plazo, hasta el momento presente en que un régimen declaradamente provisional funda en la ausencia forzosa de toda oposición sus deseos de permanecer como definitivo. Nadie, hasta hoy, ha roto colectivamente el silencio. Aún, la nación parece sumida en el estupor donde cayó al sobrevenir la dictadura. Silencio y estupor que algunos entienden como signos aprobatorios, basando en ellos un plebiscito de nuevo estilo; un plebiscito por omisión. No manifestarnos equivaldría a mantener ese equívoco. No concertar ya nuestro esfuerzo sobre un propósito común, sería una renuncia al porvenir. El mañana estará hecho de lo que acertemos a forjar en los días que corren. Es, pues, llegada la hora de

que España escuche un llamamiento a la libertad y a la justicia; una voz donde lo más del pueblo reconozca su propio sentir y las esperanzas que, hasta hoy, calladamente le agitan. Tomando a la faz de todos nuestra responsabilidad, henos aquí para cumplir lo que el sano aprecio del bien público nos impone como deber.

Oponemos al pretendido asentimiento tácito esta declaración principal: somos republicanos. Sostenemos que la instauración de la República en España no vendrá sólo a colmar los designios de la democracia pura, sino que, además, abrirá el camino, hoy cerrado por los poderes históricos, al gobierno justo, razonable, humano, que cumple a los pueblos libres. Afirmamos que en España el problema político primero consiste en mudar de instituciones. La República también nos permitirá convivir mejor con las democracias del mundo. La República en España es una doble necesidad histórica de política interior y exterior. Nuestra convicción está desde tiempo atrás formada; seguro es que las experiencias acumuladas sobre el país habrán formado la convicción de los demás. Del sentimiento republicano renacido y latente, de las legiones nuevas suscitadas por la severa lección que recibimos; de los militantes antiguos; en fin, de cuantos basan la política del porvenir, inexcusablemente, en la desaparición de la monarquía queremos ser intérpretes y animadores. Añadimos a nuestra declaración de principios una convocatoria de acción. Inauguramos una obra dirigida precisamente a instaurar la República; queremos restablecer la equivalencia, por el momento rota, de hombre libre y ciudadano

español.

De entre los que, suscribiendo estas palabras, proclaman su adhesión a la República, se constituye un grupo más particularmente vocado a la actividad. Embrión de un partido, centro organizador, agente de relación; todo eso, y más que las circunstancias demanden, pretende ser. El grupo comprueba las fuerzas existentes, busca y organiza otras nuevas, aprovecha cualquier voluntad que lealmente se sume a él. Solicita la cooperación de las antiguas organizaciones republicanas, así nacionales como locales; la del proletariado, en sus cuadros políticos y profesionales; la de todos los ciudadanos que perciban con claridad lo que el civismo reclama de ellos. Los límites del grupo son extensibles indefinidamente; mas no pretende absorber a ninguna de las entidades ya creadas o que en lo sucesivo se creen; tampoco consentirá en ser absorbido por nadie. La autoridad a que aspira es de orden puramente moral. Ella se funda en el desinterés, en la falta de compromisos de partido, en el modo como este grupo, ya copioso, nace a la vida pública. Para que su obra sea útil, necesitamos conservarle independiente. Y ejercerá aquella autoridad a que aspira, por el medio único e insuperable de confrontar a cada cual con su deber del momento y preguntarle si le ha cumplido. Nosotros creemos haber hecho hoy el nuestro. Madrid, mayo de 1925".

UN MANIFIESTO POLITICO DE LA ACCION REPUBLICANA

(El Sol, 13-3-30).

"El Grupo de Acción Republicana se fundó en Madrid a fines del año 1925 por cierto número de escritores, catedráticos, artistas y otras personas dedicadas a trabajos intelectuales, algunas de ellas eminentes y todas conocidas.

El vínculo que unía y une a los fundadores del Grupo, y a los que después han venido a fortalecerlo, es la convicción republicana. Nuestro designio es aunar los esfuerzos de todos para restaurar en España la libertad mediante la República. Nada más. Nada menos. Su acción consiste en difundir por cuantos medios estén a su alcance la idea republicana; en afiliar e inscribir en sus censos a los republicanos hasta hoy no militantes y a los que merced a la situación actual (gran propagandista de la República) van aceptando esta verdad: que no hay solución posible para los problemas constitucionales españoles dentro de la monarquía. El Grupo de Acción Republicana asume la función de organizar y preparar, para los fines útiles a la causa común, la creciente opinión republicana del país que no esté ya encauzada y disciplinada en los partidos históricos. Entra en relación con estos partidos para los fines dichos, y contribuye al mantenimiento de la concordia y unidad de miras entre todos los republicanos.

El Grupo de Acción Republicana funciona mediante un organismo central constituido en Madrid y organismos constituí

dos en otras muchas ciudades. No tiene presidente, ni menos jefe. Todos sus afiliados son iguales. Cada organismo delega en uno o más de sus miembros cuando se han de tratar en común cuestiones que afectan a todo el grupo. Lo más urgente es intensificar la propaganda encomendada a cada organismo local, perfeccionar la organización, crearla donde no la hubiese, tener al corriente los censos, activar en lo posible la comunicación de unos organismos con otros. En todas las demás cuestiones de orden político, incluso en lo relativo al problema constitucional de la República que se instaure, el grupo no formula progrma alguno ni pide a sus afiliados una profesión común, ni les estorba que propaguen sus puntos de vista personales dentro o fuera del grupo, manteniéndose en la afirmación republicana.

Todo lo que antecede significa claramente que el Grupo de Acción Republicana no es otro partido republicano. Los fundadores del Grupo y los que han venido a secundarlos, mantienen su conducta sobre estas dos bases: 1^a, que es menester organizar el republicanismo nuevo, o difuso, o latente, e imprmirlo, por el solo hecho de su presencia organizada, una fuerza y un valor que sin esa organización y agrupamiento no tendría; 2^a, que no es posible ni conveniente, en las circunstancias actuales, fundar un partido más. No es posible, porque los partidos deben formarse de abajo arriba, en virtud de un movimiento de opinión suscitado a propósito de las cuestiones fundamentales planteadas en el país. Sin prensa, sin tribuna, sin manifestaciones; en suma, sin libertad de palabra y de acción pública,

no puede llevarse ante la opinión ningún problema vivo, ni puede agitarse el país, ni encauzar sus fuerzas en ningún sentido. En tal situación podrá hacerse otra cosa, pero no fundar un verdadero partido. No sería, no hubiera sido conveniente que a la obra de propaganda y organización realizada por el Grupo de Acción Republicana, se le diese la apariencia de un partido, que sin mejorar lo que de por sí consigue el grupo, habría dado la impresión de dividir el republicanismo en vez de agruparlo, o realmente lo habría dividido sobre cuestiones que por el momento no son urgentes, cuando los esfuerzos de todos son indispensables para el fin común, sin inoportuna dispersión por motivos de doctrina, de táctica, y, menos aún, de personas. El Grupo de Acción Republicana coopera a los fines de todas las fuerzas republicanas organizadas y tiene representación en la Junta Nacional de la Alianza republicana, en el Consejo Nacional de la misma y en sus organismos locales, allí donde el Grupo está ya constituido. Madrid, enero de 1930".

ACCION REPUBLICANA. BASES DE SU IDEARIO POLITICO

Aprobadas en la primera Asamblea Nacional celebrada en Madrid, los días 26 y 27 de mayo de 1931. Parcialmente fue reproducida por El Liberal, 29-5-31. El texto íntegro aquí recogido se encuentra en el Boletín de Información nº 6, p. 985.

"Acción Republicana se fundó en 1925 por cierto número de escritores, catedráticos, artistas y otras personas dedicadas a trabajos intelectuales. El vínculo que unió a los fundadores del grupo y a los que después han venido a fortalecerlo ha sido la convicción republicana. Su designio ha consistido en aunar los esfuerzos de todos para restaurar en España la libertad mediante la República. Su actuación fue la de reunir a los republicanos no militantes, condensar la opinión republicana difusa o latente, establecer relaciones entre los partidos republicanos y mantener la concordia y unidad de miras con vistas a un fin común.

Acción Republicana concibió y creó la Alianza Republicana como un instrumento de inteligencia y cooperación para instaurar la República.

Logrados todos los propósitos que como fines inmediatos perseguía Acción Republicana, el grupo hubiera podido disolverse, dejando en libertad a sus afiliados para dispersarse e ingresar en los partidos republicanos constituídos.

Pero la tarea común impuesta a los componentes de Acción Republicana a lo largo de estos seis años de combate por

la instauración de la República, los sacrificios y riesgos por todos aceptados y sufridos, su participación en el triunfo, el anhelo de seguir contribuyendo a la consolidación del régimen republicano y el sentido de responsabilidad en la preparación y organización de lo por venir, han creado entre los miembros de Acción Republicana una unidad espiritual y aspiraciones constructivas que les aconsejan no separarse y, en vez de inutilizar para la acción política la organización ya formada, transformarse en un partido, resolución que ha sido adoptada como resultado de la consulta hecha a nuestras organizaciones regionales.

Cuando, dictado en las Cortes Constituyentes el Código fundamental del Estado republicano español, los partidos del régimen, empeñados ahora conjuntamente en el compromiso de honor de dar nueva estructura al cuerpo nacional, recobren la libertad de sus movimientos, Acción Republicana formulará el programa que defina su ideología con relación a todos los problemas políticos de España. Pero decidida Acción Republicana a continuar dentro de la Alianza Republicana y a contribuir a que persista la conjunción republicano-socialista que instaura la República como resultado de la pacífica victoria en las urnas, se limitará en estos momentos a formular un programa electoral que, sin agotar ni mucho menos el contenido ideológico del partido, defina su posición, evitando cuanto signifique introducir diferencias de criterio entre los republicanos.

Acción Republicana es un partido de izquierda. No con

siderará antagónicos a los que sostengan idearios político-so-
ciales más avanzados, si admiten las instituciones democráti-
cas. Dentro de la legalidad que la República constituya, cola-
borará con los socialistas en cuanto les sea común o coinciden-
te.

Apoyamos una República parlamentaria democrática y
una estructuración nacional que, sobre la base de una amplísi-
ma autonomía de los Municipios, reconozca la personalidad ju-
rídica de las regiones.

Nuestra política internacional es absolutamente pa-
cifista, de contribución al desarme, al arbitraje y a la con-
ciliación entre los pueblos.

Siendo España una nación que no siente impulsos im-
perialistas, sus instituciones marciales deberán reducirse a
lo necesario para la defensa nacional en el caso de una agre-
sión. Se acomodará el ejército a la capacidad económica del
país, con servicio igual para todos los ciudadanos aptos y li-
mitado al tiempo preciso para una preparación militar adecuada
a la eficacia que deben tener los ejércitos. El ejército colo-
nial será voluntario.

Estimando el impuesto como función de equidad social
y de perfeccionamiento técnico, se desgravarán los que agobian
el trabajo, haciendo progresivos los que pesan sobre rentas y
patrimonios.

Revisión de la política arancelaria y de la protec-

ción industrial. Reversión de los monopolios al Estado.

Estado laico. Separación de la Iglesia y del Estado. Secularización de instituciones y órdenes religiosas.

Monopolización de la enseñanza por el Estado, para defensa de la República y en interés de la cultura. Escuela única. Primera y segunda enseñanza gratuitas.

Reforma del Código civil para modernizar el régimen jurídico y económico de la familia española. Estimación de la propiedad como función social. Implantación del divorcio vincular. Humanización del Derecho sustantivo y adjetivo. Democratización de la justicia. Independencia y responsabilidad de sus órganos.

Multiplicación de los seguros, asignándoles el doble carácter de previsión y justicia sociales. Organización de la asistencia social.

Solución del problema de la tierra, atendiendo a sus diversas modalidades. Fomento del Crédito Agrícola.

Fomento de las obras públicas, especialmente de las vías de comunicación y del abastecimiento de aguas a los pueblos.

Consideración de la Sanidad como función del Estado, estructurándola con independencia y concediéndole los poderes necesarios para su eficaz actuación.

00949

Mejora de la vivienda urbana y rural, acometiendo el problema integral del urbanismo.

Acción Republicana, coincidente con la demanda de la opinión pública, dedicará todo su esfuerzo a la exigencia más severa de todas las responsabilidades en que incurrieron la monarquía y sus gobiernos".

PONENCIA POLITICA APROBADA EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE MARZO
DE 1932.

(El Liberal, 29-3-32).

"La Comisión encargada de examinar las proposiciones políticas presentadas a la asamblea, ha estimado que, dados los términos en que le ha sido encomendada, no debía limitar su labor al dictamen escueto de las mismas, sino más bien a recoger en una nota, que la asamblea podrá convertir en declaración política si lo juzga oportuno, aquellas indicaciones que sirvan de orientación al partido en el porvenir inmediato de su actuación. Habrá de asegurar ésta en lo futuro la continuidad de la obra realizada hasta el momento presente, que a juicio de la Comisión ha sido completamente satisfactoria.

Procede, pues, que en primer término la asamblea manifieste su conformidad con la obra política realizada hasta hoy por los órganos directivos del partido y su solidaridad con la conducta seguida por sus hombres, responsables en los pasados acontecimientos políticos.

Los resultados obtenidos por la actuación de aquéllos merecen la aprobación de la asamblea, y Acción Republicana se felicita de haber prestado a la República servicios muy valiosos.

Para seguir sirviéndola con eficacia y acierto, nuestro partido debe robustecer su personalidad y afirmar su significación dentro del régimen. Acción republicana, que fue en sus

orígenes un grupo de ciudadanos unidos por el vínculo de la convicción republicana, y perfeccionó más tarde su organización, es hoy un gran partido, que asume ante la opinión responsabilidades enormes y al que las circunstancias han impuesto grandes deberes.

Acción republicana es un partido de izquierda, dispuesto a realizar en todo momento una obra de avance social y político en nuestro país. Su carácter izquierdista está definido en las bases de su ideario político y ratificado por su gestión. Para completar este ideario, eliminar lo que, por estar realizado, ya no tiene finalidad que en él figure, y ponerlo a tono con el nuevo orden jurídico creado, la asamblea encomienda al Consejo nacional el encargo de formular un cuestionario, que enviará a las organizaciones provinciales, cuyas contestaciones, unidas a su informe, sirvan de base a las deliberaciones de una futura asamblea.

Al afirmar su personalidad destacándola en la vida pública de nuestro país, Acción republicana quiere también continuar su misión de mantener la concordia entre todos los partidos afines que se consagren dentro de las instituciones democráticas a la republicanización total y efectiva del Estado. Aspira, pues, Acción republicana a hacer más íntima y fuerte la colaboración política con los partidos de izquierda republicana.

Tal fue nuestro propósito al integrar Alianza republicana, sin que de Acción haya partido ni parta desvío alguno

hacia aquella finalidad.

La vida parlamentaria española durante el largo período de organización y perfeccionamiento de nuestra democracia, hará quizá necesaria la colaboración de los diversos partidos republicanos y del socialista en el Poder.

Los posibles gobiernos que adivinamos en el horizonte de nuestra política son -serán, mejor dicho- gobiernos de concentración. Acción republicana no ha de constituir obstáculo, salvada su significación izquierdista, para que tal concentración pueda realizarse, a fin de dotar al régimen del instrumento de gobierno que en cada caso sea necesario para el ejercicio del Poder, con o sin participación directa en el mismo. Para una obra hondamente republicana deseamos, en consecuencia, la solidaridad con los partidos de gobierno de la República.

Estas indicaciones no tienen la ambición de agotar las perspectivas de nuestro partido. Sólo señalan una orientación para su conducta futura.

El Consejo nacional queda encargado de interpretar los deseos de la asamblea, expuestos en esta nota y resolver con tal orientación todas las cuestiones de táctica que se presenten.

La asamblea confía asimismo, en que el Consejo nacional y los consejos provinciales intensifiquen la propaganda del partido, fortifiquen su organización y procedan rápidamente a

00944

una vigorosa campaña en toda España por Acción republicana y
por la República española".

PONENCIA POLITICA APROBADA EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE 1933

Ponencia política presentada por Ruiz Funes y aprobada en la Asamblea Nacional celebrada en Madrid los días 14, 15 y 16 de octubre de 1933.

(Boletín de Información, nº 6, p. 987).

"Acción Republicana es un partido de izquierda constitucional democrático y parlamentario, que afirma entre sus postulados fundamentales principios de justicia social. Estos principios aspiran a superar la lucha de clases, y tienen a crear limitaciones a un concepto liberal de la propiedad y a hacer viables los preceptos contenidos en los artículos 44, 46 y 47 de la Constitución.

En el orden económico nos preocupa, tanto y más que el incremento de la renta y de la riqueza nacionales, su distribución conforme a un moderno sentido de justicia. Ello hace preciso una modificación más o menos amplia de los elementos de la estructura económica del país. Con la Reforma Agraria iniciada se han puesto ya los jalones para una modificación fundamental de los elementos económicos que son esenciales y primarios en nuestra economía. Falta de resolver una serie de problemas anejos y complementarios, a los que hemos de procurar dar solución adecuada, para que aquélla tenga el éxito apete^utecido.

Otros elementos de la estructura económica del país, ya de la producción, ya de la distribución y del cambio que -

tienen intervención del Poder público, que se ha de manifestar con mayor o menor intensidad en todos los sectores o manifestaciones de la actividad económica del país en que se revele un régimen defectuoso o perjudicial para los intereses por los que el Estado está llamado a velar. Esta intervención del Poder público se ha de manifestar, según las circunstancias del caso, unas veces en forma de estímulo; otras, en fin, en forma de gestión directa. Para nosotros, la gran economía organizada ofrece las ventajas de la continuidad, la economía libre, las de la movilidad. Y sólo con la colaboración de ambas formas económicas puede obtenerse la máxima capacidad de prestación.

El saneamiento, en fin, de diversos sectores de la actividad económica, a que hemos de procurar colaborar, hará posible una organización económica robusta, que no equivale , en nuestro sentir, a una organización autárquica de nuestra economía considerada como un todo. Antes, por el contrario, propugnamos una política comercial exterior que tienda a romper las ligaduras del nacionalismo imperante en todos los pueblos, y que a la par valore más equitativamente a ese respecto nuestras posiciones y posibilidades de toda índole, intensificando las relaciones comerciales con los pueblos que nos son afines, y conquistando nuevos mercados".

Alude seguidamente la ponencia al problema de las autonomías. Se preconiza en este punto de la misma la implantación de Estatutos regionales, entendiendo que debe realizarse

por el criterio político y sobre datos económicos.

Aspira Acción Republicana a federarse con otros par
tidos republicanos de izquierda, a los fines de propaganda y
de Gobierno, y pone de relieve su deseo de que en España se
forme un sólo partido de izquierda que constituya un instru-
mento de Gobierno eficaz y disciplinado.

En este deseo incluye la preocupación de que los
partidos regionales significados por su izquierdismo republi-
cano, que tengan como exclusiva razón de ser la realidad de
una autonomía y aspiran a lograrla en sus regiones, vengan a
integrarse con Acción Republicana, cuyos principios autonomis
tas son patentes y cuya colaboración en el Estatuto de Catalu
ña es prueba plena de que sabe traducir en hechos las orienta
ciones de esta clase.

Unidos estos partidos regionales a Acción Republi-
cana por una verdadera comunidad de ideal, pueden continuar sus
propagandas autónomas en sus respectivas regiones, fundiéndose
con nuestro partido para la realización conjunta de una obra
nacional.

Acción Republicana propugna un estatuto de funciona
rios, en el cual se separe la función de la categoría, para po
der llevar a los puestos más delicados y de mayor responsabi-
lidad a los más aptos; se fijen con precisión, abreviándolos,
los trámites administrativos, para corregir la lentitud tradi
cional de la Administración, tan perjudicial a los negocios pú

00948

blicos, y se establezcan con claridad y se hagan exigibles con eficacia las responsabilidades en que incurran los funcionarios que, por negligencia o incapacidad, retrasasen la resolución de los asuntos; se reorganicen los servicios, fijando las plantillas según lo demanden las necesidades de la Administración, no como se hacía en el antiguo régimen en vista de las conveniencias políticas o de los intereses de su cuerpo; se mejore la situación económica del funcionario, exigiéndole, en cambio, que consagre su actividad al servicio del Estado, y, finalmente, se mantenga rígidamente la disciplina, mediante un adecuado sistema de sanciones que haga posible toda actitud de rebeldía por acción u omisión del funcionario contra el régimen."

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL DE DISOLUCION
DE ACCION REPUBLICANA DE 31 DE MARZO DE 1934

(*El Liberal*, 1-4-34).

"El partido de Acción Republicana era una verdadera y auténtica organización política por su disciplina, por su desinterés, por lo arraigado que estaba entre sus adheridos el sentimiento de los deberes jerárquicos; lo era por la pulcritud de sus procedimientos, por la honestidad de sus hombres, porque la minoría directiva merecía de todos los correligionarios ilimitada confianza; lo era por el entusiasmo de sus afiliados, movidos por un ideal constructivo dentro de su credo regulador.

Se daban también en Acción Republicana aquellos lazos morales perennes, tejidos en las horas de triunfo y fortalecidos en las de adversidad y dolor, que transformaron rápidamente nuestro partido en una gran familia espiritual, con unidad de sentimientos y de ideales simbolizados en la confianza y en el afecto a su presidente, en la admiración a sus dotes singulares, en el respeto ilimitado a sus nobles y recias virtudes.

Podía el partido de Acción Republicana por todo ello mirar tranquilo y seguro el porvenir, acrecentada su simpatía y aumentado su influjo entre las masas democráticas y republicanas de nuestro país, que de hora en hora le brindaban mayores apoyos y más fervorosa adhesión.

Pero la crisis honda y profunda de los partidos de Izquierda Republicana, fruto de la desunión y del parcialismo que de ellos se había adueñado, contrastando con la misión de todas las fuerzas que desde los campos enemigos hostilizaban en mil formas el régimen, desfigurándole monstruosamente en sus rasgos más bellos, desnaturalizándole en sus funciones esenciales, nos impulsó a buscar una inteligencia abierta y leal con los partidos afines.

Para lograr este empeño, grande y generoso, no hemos vacilado ni vacilaremos jamás, en realizar los mayores sacrificios, siempre que nos lleven a construir un instrumento de ordenación y de disciplina de un partido que recoja los deseos y los anhelos de la democracia republicana de izquierda.

El más duro y cruel de esos sacrificios es el que hoy os proponemos, con enorme emoción al proponerlo: disolver nuestro partido para fundirlo con todos aquéllos otros que suscriban los grandes postulados de nuestra acción futura, disciplina en la organización, defensa del sentimiento civil de la vida española, libertad plena del régimen para la realización de los ideales de justicia social y de engrandecimiento patrio. El sacrificio es enorme; pero lo impone la salud de la República y el porvenir de España.

Con estos afanes y con la resolución inquebrantable de que no puedan estorbar nuestros empeños las máculas políticas de los partidos populares que los quebrantan y los degra-

00951

dan, con el designio supremo de que el desinterés y la austeridad inspiren nuestros actos, tenderemos las manos a cuantos quieran unirse en la magnífica empresa de restaurar el verdadero significado y el legítimo valor de la República española hoy tan en peligro".

00953

PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

Proyecto de Bases para el ideario de Izquierda Republicana que sería discutido en la Asamblea Constitutiva del Partido del 1 de abril de 1934.

(El Sol, 11-3-34).

"El partido de Izquierda Republicana aspira:

a) A conseguir el triunfo de sus ideales, implantando por medios democráticos los principios de su programa.

b) A atacar la corrupción en la vida pública con toda energía, ofreciendo el ejemplo de procedimientos claros y conducta limpia como norma política.

c) A renovar políticamente a España dentro del cuadro de las instituciones republicanas.

d) A conseguir la transformación económica del país a través del acrecentamiento general de la riqueza y de la elevación del nivel de vida social.

e) A consolidar y perfeccionar los avances sociales.

Y para conseguir estos fines y lograr la asistencia de la opinión formula las

BASES PARA EL IDEARIO DE IZQUIERDA REPUBLICANA

Política

1ª. Defensa de la República y restablecimiento de

su sentido inicial.- El partido de Izquierda Republicana declara su respeto a las instituciones democráticas y se compromete a la defensa del Estado republicano, entendiendo la vigente Constitución como impulso para todo el desarrollo que consiente su espíritu. Sostener, pues, aplicándola con lealtad, la legalidad creada por las Cortes constituyentes, restablecer en el Gobierno el sentido que tuvo la República al nacer y practicar cuanto la Constitución esboza, son postulados de nuestra actuación política.

2ª. Revolución desde el Poder y gobierno de la República por republicanos.- La República vino a España para realizar una revolución política y económica de manera evolutiva y legal, pero revolución liberadora del trabajo y de las conciencias y amparadora de la libertad política. Deseamos Gobiernos de republicanos puros que sientan con amor la República, no que la acaten para mancillarla; sin compromisos con el pasado, libres de cualquiera de los prejuicios que puedan malograr aquel propósito revolucionario. A cuanto quede en nuestra sociedad de espíritu monárquico, a cuantas instituciones o personas necesiten para la imposición de su poderío que se gobierne monárquicamente, hay que obligarlas a que se queden en las afueras del Gobierno de la República, respetadas si son respetuosas, y castigadas primero y deshechas después, como casta política, si atentan contra el régimen.

3ª. La República es intangible. Lucha contra los enemigos de la República y oposición enérgica a la contrarre-

volución.- La República ha de atender ante todo a su propia defensa y con decisión ha de poner fin al daño que la corrupción y la difamación organizadas vienen causando al régimen.

La República ha de ser para todos los españoles; no deben regirla sus enemigos; lo que sustentó a la Monarquía no puede gobernar al nuevo régimen, ni las fuerzas que alentaron la dictadura monárquica pueden apoderarse del Gobierno republicano. Si la República cae en esa abyección, diríamos que fue burlado el pueblo, y afianzaríamos nuestra solidaridad con éste para reconquistarla.

Admitimos que los avances de unos Gobiernos los consoliden otros; pero nos oponemos, y cada día más, a que la República sea antirrepublicana y contrarrevolucionaria. Nadie debe valerse de la República y de sus libertades para combatirlas y anularlas.

4^a. Fortalecimiento del poder del Estado republicano.- La República española, nacida de la voluntad nacional, es el régimen del pueblo español, y su encarnación, el Estado republicano; cuanto vaya contra el Estado republicano va contra el pueblo; cuanto no sirva al Estado republicano es antinacional.

La República necesita disciplinar en servicio del pueblo, que la sustenta, los poderes sociales que fuera del Estado perturban o coaccionan a éste en su función, y reintegrar a aquellos otros que el débil Estado monárquico dejó cre

cer, con tal independencia, que han llegado a constituir fuerzas contra el Estado, y superiores a él en algunos casos. Integrar para el pueblo y por el pueblo esos núcleos de soberanía dispersa que coacciona al Poder público será dar la fortaleza necesaria al Estado republicano, que es la única expresión de la soberanía popular en el área del territorio español.

5^a. Organización de la justicia, a base de eficacia y sencillez. Justicia asequible a los humildes, y en su función, Órgano del Estado republicano.

6^a. Laicismo del Estado.- No hasta haber estampado el principio de la Constitución y haber comenzado a implantarlo en la enseñanza; debe hacerse necesario para que sea plenamente realizado sin retrasos ni simulaciones. Si las organizaciones confesionales, fuera de su área dogmática, donde se les garantiza la libertad necesaria, se comportan como enemigos de la República, así serán tratadas. La Constitución es la garantía de todas las actividades sociales; pero es, sobre todo y por esencia, garantía del propio Estado republicano. En la República, nada sobre ella más que el pueblo.

Administración

7^a. Organización administrativa.- Se reorganizará la Administración racionalizándola e imprimiéndola mayor agilidad y eficacia. Garantías para el funcionario y para el servicio; responsabilidad directa, competencia y buena retribución son los principios de la reforma a acometer por un Estado mo-

derno.

Organización de Cuerpos Asesores y Consultivos

8^a. Autonomía municipal. Formación del patrimonio comunal; rescate de bienes comunales.- La República fue traída por los pueblos. Los partidos republicanos son deudores a los pueblos de un esfuerzo noble, entusiasta y tenaz para que la vida local se tonifique y lleguen los Municipios a ser células activas de un Estado vivo.

La formación del patrimonio municipal, iniciada con el rescate de los bienes comunales, fortalecerá la vida oficial de los pueblos y mejorará la de sus vecinos.

9^a. Política respetuosa con la voluntad de las regiones.- Es decir: libertad para que las regiones puedan pedir y lograr una organización autónoma para sus fines privativos en armonía con los intereses del Estado republicano, y cumplimiento respetuoso de los Estatutos que vayan poniéndose en vigor.

Enseñanza

10. La enseñanza, como deber público, es función privativa del Estado.- La escuela será única y obligatoria. La enseñanza se irá haciendo gratuita hasta llegar a los grados superiores. Creación, mientras tanto, de becas numerosas para los alumnos modestos y aventajados. Concebimos la populariza-

ción del saber, el cultivo elevado de especialidades y el fomento de la cultura superior, que deben impulsarse con estímulo los cuidadosos, más que como preocupación, como sentimiento de la República. Sustitución acelerada, en cumplimiento de la Constitución, de la segunda enseñanza.

Defensa Nacional

11. Política militar.- España ha de mantener la integridad de su territorio y conservar, en casos de guerra, la libertad de sus determinaciones. Su política militar se limitará a preparar y sostener el instrumento eficiente para aquellas necesidades.

Política Económica y Fiscal

12. Organización del crédito y de la riqueza nacional.- Para el mejor aprovechamiento de la riqueza nacional y para que el Estado pueda cumplir su deber de tutela y auxilio de la agricultura, del comercio y de la industria, tendrá que someter los grandes resortes del crédito a sus Directivas financieras. Lo exige también la defensa de nuestra moneda.

La organización nacional del patrimonio público permitirá la reversión de los monopolios y que se ponga al servicio del pleno Estado todos los intereses que sólo son del Estado.

13. Intervención de las industrias monopolizadoras de materias primas y de fuerza motriz, mediante la creación de órganos oficiales que las controlen o nacionalicen, en su caso, y las coordinen en un plan general económico.

14. Las obras públicas formarán parte de un sistema armonizado con la dirección de la economía nacional.- Las obras públicas tienen que ser algo distinto de la inversión anual en comunicaciones o riegos de sumas cuantiosas o de la preocupación creciente y justificada por el paro obrero.

La eficacia del esfuerzo del Estado en este orden se multiplicaría considerablemente si en su mayor parte obedeciera a un plan coordinado con la dirección de la economía del país, en armonía con un fisco flexible, y que diera al erario desde el primer momento las merecidas compensaciones. El paro obrero y cualquiera otra crisis nacional ha de atenderse con remedios que en el porvenir disminuyan su volumen. Una política social que acude siempre a las obras públicas forzando las emisiones de Deuda, con merma del crédito y amenazando el valor de la moneda, no puede tener buenas consecuencias. La coordinación efectiva, dentro de un plan, entre los departamentos de Agricultura, Economía, Hacienda, Obras públicas y Trabajo, es la garantía de que no se harán esfuerzos inútiles.

15. Formación de planes periódicos de obras nacionales, que revaloricen el país, absorban permanentemente a los parados y creen el utillaje nacional. Formación y selección de los equipos para esta labor.

16. Los transportes son un servicio público. Organización armónica con criterio nacional de los distintos medios de transportes.- En función también de la economía nacional, que el Estado tutelaré, habrá de hacerse una política de transportes en la que el apoyo de aquél tenga clara y predominante influencia en la riqueza de la nación mediante el aprovechamiento coordinado de todos los medios de transporte en beneficio fundamentalmente del interés público.

17. Reforma agraria.- Activa aplicación con las modificaciones que su estudio aconseje en atención:

a) A los agricultores medios y modestos que cultiven con esmero.

b) A la necesidad de establecer un plan de ejecución de la ley, señalando los plazos de su desarrollo e indicándose las fincas a que haya de alcanzar en relación con los medios que el Estado pueda destinar a este servicio, a fin de que queden libres para la contratación y el crédito las fincas no afectadas.

Para asegurar el cumplimiento de la ley se simplificarán los trámites burocráticos y se creará el Banco Nacional de Crédito Agrícola.

Ley de Arrendamientos

18. Formación de planes de repoblación forestal, de fomento y defensa de la ganadería e industrias derivadas, así

como de la caza y pesca.- En esta base comprenderemos no sólo la defensa de estos elementos de riqueza, sino el estudio urgente de un plan metódico de repoblación de montes en las cabeceras de las cuencas hidrográficas importantes y de aquellos terrenos poco aptos para el cultivo.

19. Política comercial encaminada a aumentar el consumo interior y fomentar el exterior.- Es indispensable la revisión con criterio nacional de la política arancelaria, haciéndola depender de un plan de ordenación de la producción agrícola e industrial, provocando gradualmente la transformación de las industrias antieconómicas y protegiendo, en cambio, la creación de otros de mejor rendimiento.

20. El impuesto, considerado como palanca de transformación económica e instrumento de perfección social.- Debe cumplir las siguientes finalidades:

a) En el orden hereditario servirá para evitar la formación de nuevas oligarquías capitalistas.

b) En el orden social castigará la inactividad, lanzará a la producción a los capitales perezosos o retraídos.

c) En el orden político producirá aumento del trabajo y de la riqueza.

21. Libertad de la pequeña propiedad agrícola, comercial e industrial, favoreciendo las iniciativas particulares.- El Estado dispensará especial protección a estas activi

dades, fomentando la creación de industrias nuevas, favoreciendo las creadas que con base propia de rendimiento sean insuficientes para nuestro consumo, estimulando el crédito en condiciones que constituyan apoyo normal para el trabajo y para el espíritu de iniciativa.

Se impone también una política que, regulando los precios en atención a los consumidores y a los productores, dé a los beneficios de éstos una cierta estabilidad.

22. Protección al ahorro y garantía para sus inversiones.- El ahorro individual será protegido porque representa un seguro y un medio de colaboración social al desenvolvimiento de la producción y del crédito.

Política Social

23. Legislación social.- El Estado no puede permanecer indiferente en las luchas sociales ni reducir su intervención a la frialdad de un arbitraje en los conflictos. Debe actuar como impulsor de la justicia y del bienestar social en el marco de una economía renovada que no se base en la miseria de las masas proletarias y en su sometimiento a las oligarquías políticas y capitalistas, sino en la prosperidad general y en la democratización de la riqueza, de modo que en la obra creadora del Estado republicano tengan acomodo y defensa todos los intereses socialmente justos.

Propugnamos:

- a) La asistencia social organizada.
- b) La multiplicación de los seguros de tipo social.
- c) La fijación de salarios mínimos.
- d) Contratos individuales y colectivos de trabajo, con bases que tiendan a la normalización de los jornales.
- e) La extensión con garantías del sistema de arbitraje en cuestiones de trabajo y ejecución de los fallos.
- f) El estricto cumplimiento de las disposiciones sanitarias en materia de trabajo.
- g) Y en general, junto al cumplimiento leal de la legislación social de la República y a la adopción de aquellas medidas que aseguren su ejecución, el desarrollo de los principios de este orden que la Constitución ha acogido.

24. Sanidad.- La Sanidad oficial cuidará preferentemente del saneamiento de los pueblos y ciudades. La Sanidad española se ha practicado siempre más como beneficencia -establecimientos para enfermos- que como prevención, atacando los males en su origen. Mientras los pueblos usen agua contaminada porque no la tienen potable, carezcan de servicios higiénicos y tengan viviendas malsanas, se invertirán cantidades, pero no se habrá comenzado ni a plantear siquiera el problema sanitario. La República, sin desatender las actuales plagas ni la difusión de enseñanzas populares prácticas, montará este servicio de abajo arriba, organizando la Sanidad local, y

actuará con enérgico dinamismo donde estén las fuentes del mal.

Política Internacional

25. Pacifismo.- Nuestra política internacional ha de ser pacifista, dando ejemplo, para el desarme, el fortalecimiento de los medios de arbitraje y conciliación.

26. Expansión exterior de nuestra cultura:

a) Colaboración a base de igualdad con los países hispanoamericanos para la defensa de la cultura común.

b) Creación de centros españoles de cultura por todo el mundo.

c) Fomento de intercambios y de toda obra útil para la difusión de nuestro espíritu.

27. Política comercial exterior.- La política arancelaria tiene que ser base de nuestra política de Tratados, encaminada a lograr acuerdos amplios que aumenten nuestra exportación. Propugnamos una política de inteligencia entre los pueblos, que, rompiendo las actuales barreras que separan al mundo, establezca el intercambio entre las naciones.

Parlamento

28. Organización del trabajo parlamentario.- El régimen parlamentario, que es un método de trabajo, tendrá que

ser renovado, adaptado a las necesidades de la moderna vida so
cial, que exige, sobre todo, rapidez y seguridad, o sea eficaa
cia. Sin mengua de la autoridad y prerrogativas del Parlamento,
habrá que disminuir el número de sesiones plenarias e intensi-
ficar el esfuerzo de las Comisiones y el valor de sus acuerdos
e incluso modificar su constitución y funcionamiento.

La labor legislativa en materia económica estará
asistida por las deliberaciones de un organismo que asesore y
estudie en especial los grandes planes nacionales".

b. DOCUMENTOS DE LAS ORGANIZACIONES PROVINCIALES
Y DE LA J.A.R.

00966

INFORME SOBRE LA SITUACION POLITICA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON Y DEL PARTIDO DE ACCION REPUBLICANA

(A.S., Castellón-104, folio 201).

Los partidos políticos de la provincia de Castellón son los siguientes: Partido Socialista, Acción Republicana, Partido Radical Socialista, Radical, Derecha Regional Agraria, entre los grupos importantes y Tradicionalistas y Comunistas sin preponderancia.

DERECHA REGIONAL AGRARIA

Propaganda de prensa intensa; creación de nuevos comités y mítines por pueblos de menor importancia. Poca masa y ésta entre los sindicatos católicos.

RADICAL SOCIALISTA

Sin órgano de prensa. Escisiones en la capital con fuerza casi nula: dos o tres grupos fuertes en la provincia, uno de ellos (Benicarló) no reconoce al Consejo Provincial R.S. y con grandes simpatías por Acción Republicana. Creación de Sindicatos Obreros afiliados a la C.N.T. por el líder del P.R. R.S. en la provincia.

RADICALES

Comités reducidos en cuanto a masa pero en todos los pueblos de la provincia y en algunos de ellos dos y tres

00967

comités como fórmula para aglutinar distintas tendencias políticas en un mismo partido. Gran preponderancia en la capital y dos o tres pueblos importantes de la Plana. Esta fuerza se sostiene por una red de intereses creados. Un diario en la capital y dos semanarios en la provincia.

SOCIALISTAS

Alguna fuera en pueblos importantes y bastante en la capital. Un semanario.

ACCION REPUBLICANA

Ochenta y três comités en la provincia con unos dieciséis mil afiliados. (No podemos precisar por estar confeccionándose el fichero y preferimos dar una cifra baja). Mayoría de Acción Republicana en unos 42 Ayuntamientos. Hacemos la salvedad de que entre estos Ayuntamientos se encuentran los de mayor censo electoral de la parte alta de la provincia como Morella, San Mateo, Albocacer, Cabanes, Cuevas de Vinromá Traiguera, Alcalá de Chisvert, Vall d'Alba, etc. etc. Escasa fuerza en la capital. El elemento neutro de la capital es una incógnita debido a que por su simpatía está con Acción Republicana, pero por intereses, amistades, compromisos y coacciones pudiera inclinarse a los radicales. Un semanario.

COMUNISTAS Y CARLISTAS

Entre todos juntos no sacan un concejal.

SINDICALISTAS

Políticamente son fuerzas diseminadas entre los partidos de Acción Republicana y partido R.S.

Confidencial

Los medios con los que podría ese Consejo Nacional ayudarnos en las próximas elecciones y en la política general de esta provincia, son: Trasladar al Secretario del Gobierno Civil con carácter urgentísimo por tratarse de un funcionario que ha ejercido muchos años en Castellón en los tiempos en que la política se hacía desde el Gobierno Civil conociendo a todos los caciques y con compromisos de amistad entorpece toda política nueva favoreciendo por tanto la política radical que ha recogido todos los elementos de la vieja política.

Trasladando al Comisario que a pesar de la energía demostrada por el Sr. Gobernador en cuanto al juego se refiere, deshace su labor tolerándolo.

Unión de los partidos

Estimamos necesario acudir a la lucha electoral en toda la provincia sin unión reconocida oficialmente con ningún partido, pero dejando a los pueblos en libertad para efectuar aquellas uniones que cada cual estime necesarias, permitiénd^onos únicamente aconsejar que hagan lo posible para ir con los socialistas.

00960

En la capital: Por razones especiales de los dirigentes del P.R.R.S., evitaremos la unión con este partido. Es ta unión solo será posible si el P.R.R.S. desautorizase a alguno de estos dirigentes, principalmente al Sr. Castelló Soler. Haremos lo posible por ir con los socialistas.

No obstante, estas diferencias y nuestra actitud definida de combatir al partido radical, aceptaríamos una unión con todos los partidos caso de peligro para la República, o por órdenes de ese Consejo Nacional en este sentido.

0097.

CARTA DE D. JOSE ROYO Y GOMEZ A LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE
CASTELLON

(A.S., Castellón-101, folio 33).

Madrid, 18-V-934

A la Asamblea Provincial de ACCION REPUBLICANA

Castellón

Queridos amigos y correligionarios,

Con gran sentimiento me veo imposibilitado de asistir a vuestra reunión de mañana 19 en la que se va a tratar de la disolución del Partido para pasar a formar la Izquierda Republicana. Lo siento por muchas razones. Porque hubiera querido saludaros a todos personalmente y cambiar impresiones y además porque en un acto como el que vais a realizar en que va a desaparecer un nombre, el de Acción Republicana, por todos tan querido y al que procuré reanimar y dar vida juntamente con Sangüesa, mi tío Borrás, Sos y otros cuando se puede decir que estaba el partido en realidad deshecho. Creedlo, que no puedo ver la desaparición mas que con algún sentimiento.

Pero es una cosa necesaria por el bien de la República. Hace ya algunos meses, cuando el 16 de diciembre pasado, se reunió por primera vez después de las elecciones a diputados el Consejo Provincial, remití una carta en la cual ya aconsejaba que se procurase llegar a una fusión con los demás elementos de izquierda con el fin de formar un frente en contra de la reacción. Ahora esa unión es más necesaria que nun-

ca y así lo hemos hecho en Madrid y se va haciendo en toda Es
paña. Quizás la provincia de Castellón sea de las últimas en
acordarlo pero esto no importa ya que en ella el núcleo más
importante es el nuestro y en realidad ahí no se va a hacer
más que cambiar el nombre.

Sin embargo, conviene tener en cuenta una cosa. A
toda fusión hay que ir sin ninguna reserva y yo espero que los
que se fusionen con nosotros vengan también sin ninguna reser
va y que nos reciban como nosotros les vamos a recibir, con
los brazos abiertos. También debemos de esperar que no ocurra
como ocurrió con la primitiva Acción Republicana Autónoma , o
sea la primera que se creó en Castellón que métodos políticos
mal entendidos llegaron a destruirla y luego nosotros la tu-
vimos que rehacer con no pocos esfuerzos. Porque fijaron bien,
la formación de la IZQUIERDA REPUBLICANA en Castellón represen-
ta el restablecimiento casi de la primitiva Acción Republica-
na y yo espero y debemos esperar todos que los antiguos elemen-
tos que se separaron y que ahora volverán a unírse nos tendrán
el mismo afán que nosotros o sea el buscar el bien de la Repú-
blica de Izquierdas y que dejarán como nosotros lo hemos hecho
siempre y lo hemos de seguir haciendo, dejarán aparte toda cla-
se de personalismos y todas aquellas ambiciones que no quepan
dentro de un partido democrático. Perdonadme que hable con es
ta crudeza pero creo que hablando claro es como mejor se en-
tiende la gente y con el fin de que nadie nos llamemos a enga-
ño debemos de ser francos.

00972

Debemos de ir y yo os invito a ello, a una fusión franca de manera que haya una gran compenetración, que no haya recelos por parte de nadie que todos no miremos más que una finalidad: Salvar a la República y rescatarla de las manos de los monárquicos y monarquizantes.

Por mi parte seré un soldado de filas más que luche contra todo lo que hemos venido luchando.

Por lo tanto mis queridos amigos, ¡A la fusión, pero con grandes ánimos para seguir luchando contra la reacción y contra todo aquello que vaya contra la República de Izquierdas y Democrática;

Que no decaigan los ánimos y la partida será nuestra.

Un abrazo a todos y Salud

José Royo y Gómez.

MEMORIA QUE EL COMITE EJECUTIVO PROVINCIAL DE "IZQUIERDA RE-
PUBLICANA" DE CASTELLON DE LA PLANA, ELEVA AL COMITE EJECUTI-
VO NACIONAL

(A.S. Castellón-102, fol. 119).

I

CÓMO SE FORMO "ACCION REPUBLICANA"

Los hechos generatrices de "Acción Republicana Nacional" en la provincia de Castellón, señalan la evolución de un grupo autonómico que ganando la vanguardia local del republicanismo histórico culmina en la Asamblea preelectoral del año 1930. Un grupo de jóvenes propagandistas fundan unas organizaciones locales con el nombre de "Acción Republicana"; por mano del incansable republicano D. Matías Sangüesa Guimerá, irrumpe esta por los altos del Maestrazgo adquiriendo figura y cohesión, fuerzas republicanas ingentes de la provincia. El Partido Republicano Autónomo presidido por el Sr. Gasset, estaba de siempre circunscripto a algunos pueblos próximos a la Capital, por excepción y en forma inconexa a Segorbe y Vinaroz. Establecióse contacto entre el nuevo Partido republicano y el antiguo. En el seno de la familia republicana todo marchó bien hasta la fecha gloriosa del 14 de abril de 1931. Esto, por otra parte, habría de considerarse cosa natural. Las distintas tendencias latentes en el seno de la colectividad republicana nada significaba en momentos que solo existía un objetivo: derogar al régimen monárquico.

II

ELECCION DE 1931. DISIDENCIAS

El ímpetu del modo creador del Régimen naciente, perfila el afán de los grupos acentuando sus líneas divisorias que han de imprimirles definitivamente personalidad; Acción Republicana, la obtuvo. Llegamos al período electoral del 31. Distritos hubo como el de Morella y San Mateo que auspiciaron la figura del Catedrático D. José Royo y Gómez atendiendo podría imprimir huella indeleble a la trayectoria de la República, aportando al acerbo de las Constituyentes las esencias de un espíritu selecto y democrático; no faltaron dentro de la naciente organización republicana hombres mezquinos que patentizaron su ruindad, iniciándose sucesivas actuaciones intentando oponerse a los deseos legítimos de dos distritos señeros en las comarcas castellonenses.

En la Asamblea de conjunción republicano-socialista del "Goya" el Sr. Sangüesa mantuvo con firmeza dos puntos esenciales claros y legítimos: uno la candidatura del Sr. Royo y Gómez en el seno de la conjunción; otro la relación ya iniciada por la voluntad expresa de los distintos comités locales de la organización Provincial de Acción Republicana, con las autoridades nacionales del Partido.

A ello se opusieron hombres tan distintos temperamentalmente, pero tan idénticos en sus persistencias en el error, como son el Abogado el Sr. Castelló Soler, y el Médico Sr. Peña

Masip. Momento evidenciador de una falta de capacidad política que podría resumirse así: Hábito de oposición; reminiscencias de sus facultades destructoras, Y una suicida inconsciencia en la labor creadora, que ha estado a punto de producir daños irreparables al republicanismo izquierdista en las horas del mayor peligro.

Consecuencias de la Asamblea del "Goya".- Dichos señores se indisciplinaron contra todo y contra todos; dando el lamentable espectáculo de una candidatura disidente de la conjunción republicano-socialista. El triunfo de esta última puso de manifiesto el sentido político de las masas y la inconsciencia de los indisciplinados.

III

ACERCAMIENTO DE ALGUNOS DISIDENTES.-ASAMBLEA DEL 32

En la primera Asamblea de "Acción Republicana Nacional" de la provincia de Castellón celebrada el día 29 de mayo de 1932, fue elegido Presidente el malogrado D. José Fibla Fresquet, hombre de elevados sentimientos; al frente de los destinos de la organización, se orientó en el sentido de procurar recoger todas las fuerzas dispersas por la desastrosa actuación de los republicanos disidentes, más atentos a sus ambiciones personales que a los intereses generales de la República y de los Partidos llamados a defenderla.

Acción Republicana, adquirió un conjunto de 93 gru-

pos cotizantes, y constituyendo un secretariado que pudo resolver cuantos problemas se suscitaron en el seno del Partido. Bajo la Presidencia del inolvidable Fibla Fresquet, se fundó el semanario de izquierda que mereció elogios de los Diputados de "Acción Republicana" en las Constituyentes, Sres. Ruiz Funes, De Benito, Carreras, Ramos y otros que lo honraron con sus firmas.

Hizo posible con sus fuerzas y disciplina, la labor de dos gobernadores de Acción Republicana, D. Francisco Escola y D. Antonio Navarro Sánchez, y prestigió el Partido.

IV

SITUACION DE LOS PARTIDOS REPUBLICANOS

El Partido Radical intensificaba de continuo su confusionismo con las derechas y Partidos reaccionarios. El Sr. Castelló Soler y algunos otros disidentes acogieron al Partido Radical Socialista (en el que no fueron conocidos hasta que actuaron). Había quien agobiado por el peso de su mala actuación, había renunciado según propia confesión (Sr. Peña y Sr. Huguet) a toda actividad política. Claro que esta renunciación no fue mantenida sino después de una serie de gestiones fracasadas cerca de altas personalidades; recuérdese el viaje célebre a Teruel para entrevistarse con D. Marcelino Domingo.

V

ASAMBLEA DEL 33.- ELECCIONES

Celebróse la segunda Asamblea de "Acción Republicana" el 5 de febrero de 1933. En ella se eligió Presidente del Partido a D. Francisco Casas Sala, por dimisión del Sr. Fibla Fresquet, fundada en motivos de salud. De la situación del Partido dá una idea clara este párrafo que copiamos literalmente del libro de actas, folio 24. Dice así: "El Sr. Royo Gómez saluda a los Asambleístas y manifiesta que se ha inhibido en las discusiones para que no existiera la menor coacción. Habla de política general recalcando la firmeza del Gobierno y de la provincia, cuya organización debe constituir un motivo de orgullo para todos.

El Sr. Martín Portolés cierra la segunda Asamblea de "Acción Republicana" diciendo que a través de las discusiones, se ha puesto de manifiesto que en nuestro Partido es donde existen las verdaderas esencias democráticas, no como sucede en otros donde radica el verdadero caciquismo. Al poco tiempo de esta Asamblea, se inauguró un Casino abierto en la calle de González, Chermá, la más importante de Castellón. Este casino a pesar de ser obra de unos pocos, era de propiedad del Partido.

En estas condiciones y estado de ánimo, llegamos a la lucha electoral de noviembre del año 1933, en coalición con el Partido Socialista, y dando un puesto por acuerdo de Asam-

blea extraordinaria preelectoral al Diputado de las Constituyentes D. Luis López Dóriga.

Al calor de las elecciones volvió a la lucha la fracción representada por los Sres. Huguet y Peña, con la esperanza de nuevos mangoneos a los que se suponían con derecho ostentando la representación de un candidato -el Sr. López Dóriga- que para cabida se le supuso del Partido Radical Socialista Independiente, sin organización efectiva en la provincia de Castellón.

Consigna en la lucha, fue el grito de "Contra la reacción y el caciquismo" frase utópica y fantarrona en el sentir de alguna gente que creía inexpugnable el poder de las fuerzas enraizadas en lo más hondo de la política provincial por la alianza de todos los caciques al amparo del Partido Radical. Fuimos vencidos; nuestra organización, fuerte en el alto y bajo Maestrazgo, era débil en la Plana, y nula en el Espadán; fue no obstante acometida lo suficiente para socabar al enemigo, que perplejo al contemplarnos en segunda vuelta con los cuadros completos e inquebrantables, la disciplina, mantenida a pesar de sabernos de antemano derrotados, le llevó a emplear medios de lucha completamente desleales al socaire de falsos defensores del prestigio izquierdista. Gran victoria moral fue la nuestra precursora de la efectiva del Frente Popular, en la que hemos vencido a la reacción y al caciquismo arrastrando en el derrumbamiento de estas fuerzas, viejos figurones como lo son Gasset (30 años de Diputado a Cortes por

Castellón), Cantos (20 por Lucena) y Lerroux. Sólo deslució aquella gesta heroica del año 1933, la retirada del campo de la lucha del Sr. López Dóriga, cuya actitud no comentaremos y el regreso precipitado a Madrid del Bueno de Royo Gómez, algo desconcertado ante el resultado de la primera vuelta, decaído su ánimo por la ingratitud de algunos pueblos que tan mal supieron corresponder a sus desvelos como Diputado. Solo la figura de D. Francisco Casas Sala, tomó entonces proporciones gigantescas al saberse levantar con voluntad enérgica por encima de contagiosos desfallecimientos empuñando con mayor firmeza la dirección del Partido; no decayó en los meses que se sucedieron llenos de zozobra y justificados temores cuajados de represión, multas, coacciones y otros excesos de la reacción triunfante que actuaba a través del Poder Público, culminó la persecución con la clausura de nuestro centro, y el encarcelamiento de nuestro decidido y honrado Presidente Sr. Casas Sala, que ni por un momento claudicó.

VI

ASAMBLEA DEL 34.- "ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAIS VALENCIA"

Animados por el fervor republicano que enardecía el ansia de lucha en nosotros producida por la exaltación de los sentimientos vejados por quienes maltrataban la República, antes de fusionarse los Partidos Nacionales, a costa de todas clases de sacrificios, propugnamos la unión de todos los que reputábamos (con espíritu de máxima intransigencia) republica

nos eran: "Grupo Valencianista" en el que resultó figura el Sr. Huguet sólo, por no haberle acompañado los que en Castellón representaban el verdadero valencianismo; el Partido Radical Socialista Independiente, representado por el Sr. Peña Masip, que aportó unas pocas organizaciones locales; escasos en fuerza, pródigos en imposiciones y exigencias. Creóse la "Esquerra Republicana del País Valenciá", pretendiéndose el ideario que viene reseñado en el adjunto folleto editado por el Comité Local de Castellón de La Plana.

En la Asamblea del 19 de mayo de 1934, última de las de "Acción Republicana", se toma el acuerdo de fusionarse con los demás Partidos, hecho que se verifica en la que celebraron conjuntamente el 20 de mayo y por la que fue elegida la siguiente Junta Provincial: Presidente D. Francisco Casas Sala; Vice-presidente primero, D. Cayetano Huguet Segarra; Vice-presidente segundo, D. Matías Sangüesa Guimerá; Vicepresidente tercero, D. Juan Manuel Año Esbri; Secretario D. Vicente Roma Alabal; Vicesecretario D. Miguel Peña Masip; Tesorero D. Pascual Albella Cabedo, y Contador D. Santiago Nomdedeu Amador.

Los delegados de "Acción Republicana", Sres. Soriano, Gorritz y Solernou, trataron con los Delegados del Partido Radical Socialista y delegados "único" del Grupo valencianista, la proporcionalidad de puestos, escuchando en boca de estos sabrosos comentarios que vienen a demostrar la intención poco cordial de que estaban animados.

Nace "Esquerra Republicana del País Valencia", nim

bada con el prestigio de los mártires. La gente que no está en el secreto, nos acoge con simpatía por lo que significamos en el terreno de la fusión, de fuerzas de izquierda; pero con recelo por el historial de que vienen precedidos los disidentes reincorporados que figuran al frente del Partido. No es in fundado este recelo. Efectivamente, la actuación de los aludidos elementos empieza por rechazar unas proposiciones que no eran más que el reconocimiento de los intereses que "Acción Republicana" aportaba a la nueva organización, como asimismo sus compromisos mayores en cuantía aquellos que estos.

El hecho principal era la fusión de los Partidos. Por ello toleró "Acción Republicana", admitir con carácter de organización al supuesto grupo valencianista y dio un trato de igualdad al Partido Radical Socialista en aras de una compensación que no fue correspondida. En otras circunstancias, que no hubieran sido las nacionales que aconsejaban la fusión, "Acción Republicana" hubiera hecho pesar sus noventa y tantos Comités.

MEMORIA SOBRE FUSION DE PARTIDOS DE IZQUIERDAS

(A.S., Bilbao-171, folio 198).

MEMORIA Y CONDICIONES QUE LA PONENCIA DE LOS PARTIDOS ACCION REPUBLICANA Y RADICAL SOCIALISTA INDEPENDIENTE PRESENTAN A SUS RESPECTIVAS ASAMBLEAS.

El resultado de la contienda electoral última ha llevado a las masas republicanas de izquierda al convencimiento de que su organización y conducta eran completamente equivocadas; estas organizaciones han constituido un frente harto débil ante el empuje de nuestros enemigos. Las normas electorales, que la misma República ha dado al País, han sido el principal escollo que los partidos republicanos han encontrado para desenvolverse en sus luchas. Los partidos republicanos, desgraciadamente, son organizaciones pobres, que con gran dificultad pueden reunir los recursos necesarios para cubrir sus más perentorias necesidades y nunca se encuentran, por la dificultad de adscribir a ellos grandes masas de afiliados, en condiciones de hacer frente a los cuantiosos gastos que la organización de unas elecciones, fin político que todo partido persigue, lleva consigo, con la modalidad actual de grandes circunscripciones, y si a esta dificultad, que ya es grande e importante, se añade la situación de difícil inteligencia, en muchos casos, entre la gran variedad de partidos y partiditos que en la actualidad existen y que ha dado como consecuencia funesta las luchas intestinas, con beneficio manifiesto para el adversario, se comprende, sin dificultad, la necesidad ine

ludible de variar fundamentalmente la táctica seguida hasta hoy.

Todas estas consideraciones, demostradas de modo palmario por la práctica, han hecho nacer la idea, que simultáneamente ha surgido en distintas Agrupaciones, de estudiar con toda rapidez los remedios adecuados para evitar el mal que los partidos sufren, mal que irá de modo inevitable agravándose, cuanto más tiempo permanezcan nuestras fuerzas divididas. Nuestras Agrupaciones, por iniciativa del Partido Republicano Radical Socialista Independiente, de Bilbao, han abordado con cariño este asunto tan trascendental, destacando de sus Comités una Ponencia para su estudio, que es la que suscribe y se os dirige en estos momentos para daros cuentas de su actuación.

En funciones la Ponencia se han debatido en su seno ampliamente todas las facetas que la solución del caso presenta, pesando sus inconvenientes y ventajas; ha solicitado de los respectivos organismos nacionales de cada partido, al efecto de un mejor asesoramiento, el conocer las orientaciones de éstos, iniciándoles cuál era el sentimiento que aquí recogíamos de nuestros afiliados, y su contestación, como democráticamente debía ser, ha sido que las Agrupaciones deben marcar las orientaciones políticas, libres por completo de las coacciones que pueden suponer el conocer el criterio de los organismos superiores; esto y algunas gestiones personales que se han llevado a cabo en Madrid por mediación de dos de nuestros afiliados, han demorado el someter el asunto a las Asambleas

con el criterio que ya desde los primeros momentos había formado y admitido la Ponencia por unanimidad, que es el reconocer de modo explícito que la única solución, viable hoy, es la agrupación de todos los partidos republicanos de izquierda en un solo Partido, única forma que permite cobijar a todos los buenos republicanos de izquierda, unos que militan en los partidos y otros muchos que no lo están, y constituir un organismo fuerte y que a la vez resuelva el pavoroso problema económico permitiéndole desenvolverse con holgura, lo que favorecerá su crecimiento para alcanzar la importancia verdadera que nuestro sector de opinión tiene.

En resumen, y complementando, los puntos que sometemos a vuestra discusión, son dos:

PRIMERA PROPOSICION

La inmediata fusión de los dos partidos republicanos representados en la Ponencia, haciendo extensiva esta fusión a toda la provincia.

Para el mejor cumplimiento de este acuerdo es necesario realizar los siguientes trabajos:

a) Que se invite a esta fusión a todos los grupos organizados, de las características indicadas, en la provincia y a Unión Femenina Republicana.

b) Que se haga un llamamiento general invitando a afiliarse a todos los que, simpatizando con nosotros, no lo es

tán en ningún partido.

c) Que esta decisión de la asamblea se publique en la Prensa de Bilbao y Madrid y sea comunicado a los organismos nacionales de los partidos.

d) Si se acuerdan los anteriores, que se designe un Comité organizador, como se dirá, para que los cumplimente y haga una activa propaganda entre todas las Agrupaciones de España invitándolas a que secunden nuestros acuerdos y se consiga que éstos sean aceptados por los organismos nacionales, facilitando la formación de un gran Partido Nacional de Izquierdas Republicanas.

e) Que el Comité organizador se forme con cuatro representantes de cada partido que se adhiera, asumiendo dicho Comité las funciones directivas del nuevo organismo.

f) Que las listas de militantes de los partidos se consideren como solicitudes de alta en el nuevo y su admisión sea regulada por el Comité organizador.

g) Que los partidos, al fusionarse, aporten sus bienes y organización mediante un acta que en cada caso se extenderá.

h) El Comité organizador, en un plazo no mayor de ocho meses, redactará un Ideario, tomando los puntos comunes de los actuales, y un Reglamento, que someterá dentro de ese lapso de tiempo a la aprobación de la asamblea, la que elegirá,

00986

con arreglo a los preceptos reglamentarios ya fijados, el organismo directivo.

SEGUNDA PROPOSICION

Se acuerda propugnar por la fusión de los dos partidos y mejor por la formación de un Partido de Izquierdas, comunicándolo a los Consejos provinciales y nacionales respectivos, y organizando una propaganda activa en toda España cerca de las Agrupaciones que componen estos dos partidos, para que todas ellas se dirijan a su vez a los respectivos Consejos o Comités nacionales, obligándoles al señalamiento de Congresos extraordinarios que produzcan la fusión deseada, pero sin realizar previamente la fusión con carácter local.

Para cumplimentar este acuerdo es necesario realizar los siguientes trabajos:

- a) Designar urgentemente una Comisión mixta de los dos partidos que sea la encargada de realizar la gestión cerca de todas las Agrupaciones de España.
- b) Los gastos que ocasionen estos trabajos serán satisfechos a partes iguales por los dos partidos.

En Bilbao, a 27 de enero de 1934.

LA PONENCIA.

ARTICULO SOBRE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES DE ALFONSO AYENSA

(*El Liberal*, 8-7-32).

JUVENTUDES REPUBLICANAS

Para la pujanza de los partidos republicanos es de importancia esencial la organización de las agrupaciones juveniles que presten a las diversas fracciones de la política del régimen su savia nueva, su optimismo, su confianza en el porvenir, su entusiasmo ardoroso y su avidez por infiltrar en el sistema de gobierno recién instaurado ideas, pensamientos y estructuras originales. Precisamente al advenir la República, en un arranque colosal de las energías morales de la patria, en todos los labios surgió la misma afirmación incontrovertible: "Es un régimen que precisa de todos los arrestos juveniles de los republicanos históricos y de los cuidados y de la fe de las generaciones nuevas".

Nada representarán los partidos en esta valoración y contraste de sentimientos políticos, en esta lucha continua por el triunfo de los fundamentales postulados de la sociedad que va forjándose España, sin el hálito vivificador de los hombres jóvenes, y por ello cada grupo debe procurar con exquisito celo formar grandes falanges juveniles, cuidando mucho de no herir susceptibilidades, ni despertar recelos, ni uncir de un modo férreo a los nuevos políticos al yugo de aquellos sectores que por haber traspasado los umbrales de la madurez han de manifestar sus convicciones con las reservas mentales y los

procedimientos de táctica que dicten la experiencia o las circunstancias y convencionalismos de cada momento.

Los organismos juveniles de los diferentes partidos republicanos deben gozar de una amplia independencia para que su actuación sea eficaz: autonomía absoluta en su gestión, en sus campañas, sin otro límite que el marcado por la doctrina del partido. Nada de disciplinas y subordinaciones a entidades de carácter directivo que sean ajenas a la juventud; la juventud de un partido, a mi modo de ver, no puede, no debe acatar otras decisiones que las dictadas por la asamblea de aquél, como único órgano soberano, encarnación plena de las voluntades de todos los afiliados. La juventud debe saber interpretar el programa del partido, y en eso sí que necesita mantener y defender la más estrecha solidaridad y disciplina entre sus componentes; una cosa es el sometimiento a los dictados de una Junta o Consejo supremo de partido -ajeno a la juventud- y otra la obligada subordinación, elemental en todo afiliado, a las determinaciones de la junta general o de la asamblea.

Sería absurdo sostener que los elementos directores de la política de un partido deben ser los que rijan y orienten la campaña de la juventud de ese partido y que sólo a ellos sea dable autorizar o suspender movimientos privativos de las generaciones nuevas, y más inconcebible todavía que se les concediera potestad íntegra a espaldas de la asamblea general de afiliados. ¿Dónde y de qué manera iban los jóvenes a expresar sus puntos de vista, más o menos moderados, pero con sinceri-

dad, con estridencia si se quiere, y en qué trance se colocaba a un partido que no dejando en libertad de acción a los jóvenes, dentro de normas reglamentarias únicas y de ideología bien determinada, diera lugar a disidencias de estos elementos nuevos, que es preciso incorporar a la vida pública si queremos convertir en realidad venturosa los principios revolucionarios preconizados tantas veces?

Es, pues, preciso que los jóvenes se agrupen compactamente en órganos de estructura propia; pero con la doctrina de los grandes partidos. Que sean entidades filiales de esas fracciones republicanas que gobiernan o tienen capacidad de gobierno; que interpreten con su peculiar modo de sentir y de ser las normas políticas de las correspondientes fracciones; que libres del compromiso momentáneo o de la responsabilidad del Poder sean expresión fidelísima de la conciencia del pueblo y orientadores, por tanto, para los directores del movimiento político. Sólo de esta forma se podrá llegar al establecimiento de un nuevo procedimiento, de una moral más vigorosa, de una comprensión y de una compenetración más efectiva entre gobernantes y gobernados.

Juventud sólidamente organizada, ateniéndose a un programa político, como base común y general de todos los desenvolvimientos del partido; pero libre para manifestarse, sirviéndole de único aglutinante el contenido ideológico. A veces es necesaria la estridencia, el fervor apasionado, la defensa de un criterio que, sin contradecir las afirmaciones bá

sicas de cada grupo, señale una posición futura o la justifique cuando menos, y entonces es indispensable la misión de los jóvenes, que sin poner en riesgo la integridad y la solidaridad del partido, pueden pronunciarse como les aconseje su peculiarísimo carácter.

Organicemos las entidades juveniles en aquellos partidos que aún no las lograron; demos a las existentes una estructura moderna, un sentido netamente democrático y captador de todos los anhelos revolucionarios, sin temores infundados, sin recelos, con el alma abierta a las inquietudes nobles y puras de los hombres nuevos, que son, en definitiva, los que han de hacer de la República el régimen fuerte y próspero que necesita España.

ALFONSO AYENSA.

00991

MANIFIESTO FUNDACIONAL DE LA JUVENTUD DE ACCION REPUBLICANA

(El Sol, 31-7-32).

LA JUVENTUD DE ACCION REPUBLICANA, A LA OPINION.

"Constituída la Juventud de Acción Republicana, el núcleo de entusiastas fundadores de la misma se dirige a la opinión afecta al régimen, y muy especialmente a los ciudadanos jóvenes, invitándolos a formar parte y a adherirse a sus trabajos y a colaborar fervorosamente en la campaña que se propone realizar.

Nuestra aspiración dista de ser la de formar una falange directiva que asuma responsabilidades de programa y de ejecución. El partido de Acción Republicana, de gloriosa y actual historia, no necesita ser presentado en estos momentos, ni nosotros podemos encomendarnos esa honrosa tarea; pretendemos únicamente ser su falange de vanguardia irrumpiendo con ímpetu en la vida pública, manteniendo e intensificando los postulados más trascendentales de la revolución, que, sin duda alguna, no son otros que la honestidad de conducta, la fijeza de ideales, el amor a la libertad y la voluntad inquebrantable de servir y amar a la República con toda la intensidad de nuestras generosas y sincerísimas convicciones.

Unidos podemos formar una reserva para el futuro, una esperanza para la patria, un elemento en el cual el partido pueda encontrar hombres capacitados y dispuestos para servir en su día las responsabilidades inherentes a la dirección

de los asuntos públicos.

Formados para la propaganda, forjados en la lucha, podremos representar la savia vigorosa que renovará lo desgastado, si lo hubiere, y reemplazará lo que el tiempo y cualquiera otra circunstancia viniese a imposibilitar o inutilizar.

Nuestra labor llevará por lema una independencia disciplinada a los ideales del partido, adaptada, compatibilizada a la acción general de todos; pero especialísimamente destacada en cuanto se refiere a difusión y afianzamiento de aquellos valores morales, base indiscutible del prestigio de ideas y personas, después de tantos años en que valieron poco y a veces nada.

Es preciso llevar al ánimo del pueblo la convicción de que trabajamos por él y para él. Y que si no es posible resolver de modo satisfactorio y fulminante sus demandas, saciando en forma definitiva y favorable sus aspiraciones, se camina con paso seguro y firme hacia la consecución de tan loable empresa. Que la sensibilidad política de nuestro pueblo bien sabrá comprender, agradecer y secundar nuestro esfuerzo, coadyuvando de su parte para conseguir el designio pronta y felizmente.

Pero para recabar adhesiones de la opinión pública, tan escarmentada, y obtener triunfos señalados tan difíciles, hemos de proceder con la ecuanimidad, la justicia y la sensatez requeridas por las circunstancias. Y si en las virtudes cí

00993

vicas no pretendemos ser los únicos, tenemos ahincado propósito de ser los primeros. Y deseándolo de veras, todo es posible,

Apártense en buena hora quienes no tengan el ánimo dispuesto para el desinterés, el trabajo y aún el sacrificio. Los tiempos exigen mucho y de nada sirven los tímidos, los medrosos, los pusilánimes, los indeterminados y vacilantes, los que, en suma, por ser débiles de carácter transigen con cuantos vivieron al amparo de regímenes viejos y de procedimientos ya caducados por el tiempo o la experiencia. Queremos aportaciones positivas y rechazamos comparsas sin escrúpulos, aglutinados por la ambición política y quizá por apetitos inconfesables.

Los rumbos han variado; ahora servir a España, significa el sacrificio personal en favor del interés colectivo. Así ganaremos arraigo en la opinión y gloria para la República. Quienes se sientan confortados para acompañarnos serán acogidos con el mayor agrado.

Ahora, como siempre, o tal vez como nunca, es preciso nutrir nuestras filas, deslindar los campos, ofrendar con generosidad y contribuir en la medida del respectivo esfuerzo a la misión nobilísima e imperiosa de que no se frustren los destinos de la segunda República española.

Alfonso Ayensa, Angel Sanz Cantos, Antonio Cabezas, Enrique Peinador, Vicente Marqués, Vicente Torres y Francisco Rodríguez".

00994

BASES SOBRE LA ACTUACION DE LAS J.A.R.

(A.S., Bilbao-164).

JUVENTUD DE ACCION REPUBLICANA DE MADRID

La Juventud de Acción Republicana, organismo integrante de este partido, aspira a ser la fuerza más vigorosa y eficaz, si no numéricamente, por lo menos en atención a su fervor en la defensa de las instituciones democráticas, en la propagación del programa del partido, difundién^{do}le entre las muchedumbres, y en el celo y desinterés con que se propone intervenir en la vida pública.

Con el fin de lograr la máxima eficacia para sus planes, el grupo juvenil de Madrid se dirige a sus correligionarios de toda España manifestándoles que es absolutamente precisa la organización de la Juventud de Acción Republicana en cuantas capitales y pueblos importantes alberguen núcleos de afiliados a nuestro partido que sean menores de treinta años de edad.

Para la constitución de la Juventud se observarán las siguientes reglas:

1^a.— Aquellos elementos juveniles que estén identificados con la doctrina de Acción Republicana, deberán solicitar el ingreso en el partido-grupo local correspondiente- si no pertenecieran a él.

2^a.— Una vez que se encuentren en condiciones y con

00995

derechos de afiliado activo, constituirán los jóvenes un comité provisional, previa autorización del consejo local del partido. Este comité provisional, procederá a efectuar la propaganda conveniente para la captación de afiliados.

3^a.- Cuando el número de afiliados sea no menor de treinta, la juventud procederá, de acuerdo con el consejo local, a la convocatoria de una asamblea de la Juventud y en ella se designará por votación la Junta Directiva, previa la aprobación del reglamento.

ORIENTACION PARA LA ACTUACION:

La Juventud, en el momento de la designación de su Directiva se puede decir que ha entrado de lleno en su legalidad para actuar como tal y sin perder su carácter de filial del grupo local del partido, sometiéndose a las deliberaciones de la asamblea general y con subordinación política respecto del Consejo Local.

La Juventud debe dividirse en diferentes secciones bajo la dirección y control de la Directiva:

- Sección de Propaganda.
- Sección de Formación política.
- Sección de Acción política.
- Sección cultural.

00996

La sección de propaganda se encargará de organizar actos de la Juventud en los diversos pueblos próximos a la localidad de que dependa, exponiéndolo antes a la consideración del Consejo Provincial del Partido, con el fin de unificar la labor de los dos organismos. Organizará igualmente actos de propaganda en los barrios extremos de la capital o pueblo donde esté situada, para llevar a las masas populares su orientación. Asimismo realizará cuantos actos, mitines y conferencias le sugieran las necesidades políticas de actualidad, dentro de la disciplina del Grupo L.

La sección de Formación Política consistirá en la organización de un círculo de estudios políticos y sociales en el cual los afiliados expondrán puntos de vista políticos sobre problemas concretos y se mantendrá la controversia a que haya lugar, como medio para el adiestramiento de oradores. También se celebrarán conferencias y actos de tipo científico.

La sección de Propaganda y la de Formación Política conjuntamente puede estudiar la fórmula más adecuada para la publicación de un periódico.

La sección de Acción Política estará constituida por grupos de jóvenes que bajo el control directo de la Junta Directiva se ocuparán de todas aquellas funciones propias de la Juventud y encaminadas a cumplir todos los fines de propaganda y de acción cívica que le son propios.

La sección Cultural formará una biblioteca política

00997

y social y organizará reuniones encaminadas a ejercitar en la crítica literaria y filosófica a los jóvenes que la integren. Organizará también, de acuerdo con la de Formación Política, conferencias de carácter científico, sin matiz político determinado.

2. ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

ESTATUTOS DE ACCION REPUBLICANA

Estatutos aprobados por la Asamblea Nacional verificada en Ma
drid, en el teatro María Guerrero, los días 12 y 13 de septiembr
e de 1931.

(*Boletín de Información...*, nº 6, p. 988).

Título I.-DE LOS AFILIADOS:

Artículo 1.- Acción Republicana es partido que se
rige democráticamente, y tiene como programa el ideario polí-
tico y social aprobado en sus Asambleas Nacionales.

Artículo 2.- La condición de afiliado al partido
de Acción Republicana se adquiere por aprobación de las Asam-
bleas generales locales, previa petición escrita a su Consejo
local, autorizada por los afiliados.

Artículo 3.- Serán derechos de los afiliados: Tomar
parte con voz y voto en las Asambleas generales locales, ordi-
narias y extraordinarias; concurrir con voz, pero sin voto, a
las Asambleas provinciales y Nacionales; conocer de todos los
acuerdos adoptados por los organismos directivos; presentar al
Consejo local de que dependa y a la Asamblea respectiva cuan-
tas proposiciones e iniciativas estime oportuno; recurrir ante
los organismos inmediatamente superiores de los acuerdos adop-
tados por las Juntas o Asambleas con infracción de los regla-
mentos y estatutos del partido; ostentar cargos representati-
vos, tanto de elección popular como del gobierno interior del

partido; utilizar los servicios organizados o sostenidos por el partido; acogerse a las instituciones fundadas por el partido, tales como sociedades culturales, cooperativas, asociaciones de fines benéficos, etc., etc.

Artículo 4.- Serán deberes de los afiliados: Labo-
rar por el triunfo del programa ideológico, así como por el mayor prestigio y robustecimiento del partido; acatar y cumplir los acuerdos de los órganos directivos adoptados con arreglo a estos estatutos y a los correspondientes reglamentos; someterse a las normas y fiscalización de las Asambleas del partido en el desempeño de los cargos políticos; contribuir al sostenimiento de las cargas económicas del partido mediante una cuota mensual.

Artículo 5.- El carácter de afiliado se pierde por baja voluntaria, por ingreso en otro partido o por expulsión, en la forma que determinen los reglamentos, los cuales podrán establecer también la separación por falta de pago. En todos los casos, la baja implicará el cese en los cargos que ostente el interesado por designación del partido.

Título II.- DE LOS ORGANISMOS DIRECTIVOS EN GENERAL:

Artículo 6.- Acción Republicana estará regida, dentro de la esfera a cada uno señalada, por los siguientes organismos: I, Asambleas generales locales; II, Asambleas provinciales; III, Asamblea Nacional. Y como organismos de carácter ejecutivo: I, Consejos locales; II, Consejos provinciales;

III, Consejo Nacional. También podrá constituirse Juntas regionales cuando lo soliciten las provincias interesadas.

Capítulo 1.- DE LOS CONSEJOS LOCALES:

Artículo 7.- Los Consejos locales tendrán por misión general la de cumplir y hacer cumplir sus estatutos y reglamentos y ejecutar los acuerdos adoptados por las respectivas Asambleas; adoptar y proponer iniciativas en cuanto a policía local, dentro de las normas de disciplina del partido; convocar las Asambleas locales ordinarias en los plazos reglamentarios y las extraordinarias cuando proceda; organizar el régimen interior del partido en cada localidad; remitir a la Secretaría general del partido copia del acta de constitución y enviar mensualmente relación de sus afiliados, con expresión de las cuotas suscritas; remitir mensualmente a la Secretaría provincial relación de las altas y bajas ocurridas; mantener una relación constante con su Consejo provincial, comunicándole cuantas incidencias y asuntos de importancia se susciten en la localidad; administrar los fondos del Grupo local y remitir a la Tesorería del Consejo provincial, mensualmente, el 20 por 100 del total del ingreso efectuado.

Artículo 8.- El Consejo local se compondrá a lo menos, de tres miembros: un presidente, un vicepresidente-tesorero y un secretario, elegidos todos por la Asamblea local en votación directa y secreta. El Consejo local será renovado por mitad cada dos años.

Artículo 9.- Cada Consejo, dentro de su localidad y con arreglo a sus posibilidades, procurará la creación y fomento de instituciones que tiendan no solamente a favorecer las aspiraciones políticas del partido, sino también a los intereses generales de la cultura y del progreso social.

Artículo 10.- Las diferencias o competencias que se susciten entre los Consejos locales y provinciales serán elevadas para su resolución al Consejo Nacional.

Capítulo 2.- DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES:

Artículo 11.- El Consejo provincial se compondrá de un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un secretario, un vicesecretario, un tesorero y un contador, además de un vocal por cada partido judicial designado por la Asamblea local del partido respectivo. Sobreentendiéndose que no habrá incompatibilidad en el desempeño de los cargos de los Consejos locales y del provincial.

Artículo 12.- Serán atribuciones del Consejo provincial: Velar por la buena organización y disciplina del partido en el territorio de su provincia; proponer al Consejo Nacional aquellas medidas que considere beneficiosas; atender y resolver dentro de su competencia las peticiones de los Consejos locales; remitir al Consejo Nacional relación mensual de altas y bajas y el 25 por 100 del importe de su recaudación total; convocar las Asambleas provinciales ordinarias y extraordinarias.

Capítulo 3.- DE LOS CONSEJOS REGIONALES:

Artículo 13.- Los Consejos regionales, cuando se organicen, tendrán su residencia en la capital que se designe al efecto; estarán constituidos por representantes de todas las provincias interesadas, y su misión consistirá en las funciones que se señalen en el acto de su constitución, previa unanimidad de las representaciones provinciales, pero sin que en ningún caso puedan invadir las atribuciones reservadas por el presente estatuto al Consejo Nacional.

Capítulo 4.- DEL CONSEJO NACIONAL:

Artículo 14.- El Consejo Nacional es el organismo ejecutivo central del partido. Radicará en Madrid, y estará compuesto de veinticinco miembros, elegidos todos ellos por votación directa y secreta de la Asamblea Nacional de Delegados. De ellos, once, habrán de tener residencia obligada en Madrid, y los catorce restantes serán representantes provinciales con residencia, también obligada, en sus respectivas provincias, procurándose que en la designación de tales representantes provinciales se siga un criterio de distribución geográfica, de manera que, en lo posible, resulten representadas en el Consejo Nacional todas las regiones. El cargo de miembro del Consejo Nacional no podrá ser reelegible hasta pasados cuatro años de su mandato.

Artículo 15.- La Asamblea Nacional designará expresamente los cargos de presidente, vicepresidente y secretario

general, correspondiendo al Consejo el nombramiento de los demás cargos que considere necesarios. El presidente, vicepresidente y secretario general residirán forzosamente en Madrid, y constituirán, en unión de otros cuatro vocales, con residencia también obligada en la capital de la nación, la Comisión ejecutiva permanente, cuya misión será resolver los asuntos de máxima urgencia, a cuyo efecto asumirá provisionalmente las facultades que competen de ordinario al Consejo Nacional, pero con la obligación de rendir inmediatamente al Pleno del mismo cuenta de su gestión.

Artículo 16.- De los veinticinco miembros que constituyen el Consejo Nacional, no podrá haber más de siete que ostenten representación parlamentaria. La minoría parlamentaria será mandataria del partido.

Artículo 17.- El secretario general propondrá al Consejo Nacional el nombramiento de secretario de sección y auxiliares, en el número que sean necesarios.

Artículo 18.- El Consejo Nacional es el mandatario directo de la Asamblea Nacional y el supremo órgano directivo de las organizaciones. En tal sentido, le corresponde: Ejecutar los acuerdos de la Asamblea Nacional y preparar la celebración de la misma, tanto en sus reuniones ordinarias como extraordinarias; presentar a la Asamblea las ponencias y proposiciones necesarias; dirigir la actuación política del partido dentro de las normas acordadas en las Asambleas Nacionales; resolver las cuestiones que se susciten entre los Consejos loca-

les y provinciales; realizar, en suma, como organismo directivo del partido, todas aquellas gestiones que considere necesarias, dando cuenta, en su día, a la primera Asamblea Nacional que se celebre, cuando la urgencia o la gravedad de las circunstancias no permitan convocar a la Asamblea extraordinaria; el Consejo Nacional podrá solicitar los asesoramientos de aquellas personas que, por su mérito, merezcan ser oídas. Estos asesoramientos podrán prestarse por escrito o verbalmente, asistiendo previa citación, a las reuniones del Consejo cuando se estime necesaria su asistencia; en estos casos, se limitarán a ilustrar con su opinión el criterio de los consejeros; cumplido este deber, se retirarán, sin que, en ningún caso, puedan encontrarse presentes en el momento de definir el Consejo sus acuerdos.

Artículo 19.- El Consejo se reunirá, con carácter ordinario, dentro de los diez primeros días de cada mes. Extraordinariamente, celebrará reunión cuando estime preciso la Comisión ejecutiva o lo pidan por escrito tres consejeros. La Comisión ejecutiva celebrará reunión a lo menos dos veces al mes.

Artículo 20.- En casos urgentes o graves, la Comisión ejecutiva podrá, previa citación de los demás consejeros que se encuentren en Madrid, tomar acuerdos; pero habrá de someter sus decisiones al Pleno del Consejo, primero, y, en definitiva, a la Asamblea Nacional.

Artículo 21.- El Consejo Nacional es responsable anu

te la Asamblea Nacional de Delegados, a la cual someterá su conducta en la reunión ordinaria del mes de enero, o en la extraordinaria que para este objeto se convoque a petición de la cuarta parte, por lo menos, de los Consejos provinciales constituidos.

Título III.-

Capítulo 1.- DE LOS ORGANISMOS DELIBERANTES EN GENERAL:

Artículo 22.- Los Consejos locales y provinciales y el Consejo Nacional tendrán, respectivamente, como organismos deliberantes superiores, las Asambleas generales locales, las Asambleas provinciales y la Asamblea Nacional, a cuyos acuerdos supeditarán en todo momento el ejercicio de su función ejecutiva.

Artículo 23.- Los acuerdos de la Asamblea se adoptarán por mayoría de votos.

Capítulo 2.- DE LAS ASAMBLEAS LOCALES Y PROVINCIALES:

Artículo 24.- Corresponde a las Asambleas generales y locales: Nombrar los miembros del Consejo local y los delegados para las Asambleas provinciales; designar por votación sus representantes en el Municipio y, en su caso, los diputados provinciales y a Cortes, correspondiendo a las mismas Asambleas orientar y fiscalizar su actuación en el desempeño de sus

respectivos cargos;deliberar y resolver acerca de la admisión o expulsión de afiliados; aprobar las cuentas y balances; censurar, discutir o anular la gestión del Consejo local.

Artículo 25.- Las Asambleas provinciales estarán integradas por los delegados nombrados por cada distrito y por el Consejo provincial en pleno. Será el organismo fiscalizador de la labor del Consejo provincial, y su reunión significa el contacto inmediato de las fuerzas organizadas del partido en cada provincia para adoptar las normas conducentes a una eficaz organización política. Los debates de las Asambleas provinciales serán dirigidos por una Mesa de discusión, compuesta de tres miembros, que se elegirán por la misma Asamblea en el momento de comenzar sus tareas. Corresponderá a las Asambleas provinciales: La designación por votación de sus representantes en las Diputaciones provinciales; proponer al Consejo Nacional los representantes en Cortes, cuyas propuestas serán aprobadas o rechazadas por aquél justificadamente.

Capítulo 3.- DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS:

Artículo 26.- La Asamblea Nacional es el organismo supremo y soberano del partido. Sus fallos y acuerdos son inapelables.

Artículo 27.- Constituirán la Asamblea Nacional: El Consejo Nacional en pleno; una representación por cada provincia, designada por elección en su respectiva Asamblea provincial. Para los efectos de la votación de las representaciones

provinciales se computará a razón de un voto por cada quinientos afiliados, o fracción de este número. El voto de los consejeros será uno y personal. Dirigirá los debates de la Asamblea una Mesa de discusión, compuesta por cinco miembros, que se elegirán por la misma Asamblea al comenzar sus tareas. Dos miembros de la Mesa ejercerán la función de secretario.

Artículo 28.- La Asamblea Nacional se reunirá ordinariamente una vez al año, durante el mes de enero. Extraordinariamente celebrará cuantas reuniones aconsejen las circunstancias, bien por estimarlo así el Consejo Nacional o por petición de seis Consejos provinciales.

Artículo 29.- La convocatoria, que corresponde haceer al presidente, será dirigida a cada Consejo provincial, para que éste a su vez la transmita a los Consejos locales de su provincia y convoque la Asamblea correspondiente para elección de delegados. Deberá hacerse la convocatoria con veinte días de anticipación; en ella se expresará detalladamente los asuntos objeto de debate, y se acompañará copia de las ponencias preparadas para el Consejo.

Artículo 30.- Los delegados provinciales acreditarán su representación mediante credencial donde conste el nombre y apellidos de los delegados, testimonio del acuerdo de la Asamblea que le confirió su representación y el número de afiliados que representa. Estas credenciales estarán firmadas por el secretario del Consejo provincial y con el vistobueno de su presidente, y de ella se remitirá copia certificada a la Secre

taría general del partido con tres días de anticipación a la fecha de inauguración de la Asamblea.

Artículo 31.- Corresponde a la Asamblea Nacional: 1ª, acordar la disolución o fusión del partido y establecer o disolver alianzas con otros afines; 2ª, modificar en todo o en parte el programa ideológico y los estatutos; 3ª, aprobar o desestimar la labor realizada por el Consejo Nacional; 4ª, juzgar, aprobar o censurar la actuación política de sus representantes en Cortes; 5ª, resolver todas las cuestiones que a ellas se eleven, en apelación, e intervenir, discutir o rechazar todo cuanto afecte a la organización, actuación política y régimen del partido, sin limitación alguna.

Artículo 32.- Estos estatutos solamente podrán modificarse por la Asamblea Nacional de Delegados convocada al efecto, a petición de diez consejeros provinciales, cuando menos".

REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE ACCION REPUBLICANA

Aprobada en la Asamblea Nacional de octubre de 1933.

(A.S., Castellón-101).

DE LOS CONSEJOS LOCALES

Artº 7º.- Varía el apartado 9º que queda redactado como sigue:

"Administrar los fondos del grupo local y remitir a la Tesorería del Consejo provincial, mensualmente, el 15% del total ingreso efectuado".

Artº 8º.- El Consejo local se compondrá a lo menos de cinco miembros: Un Presidente, un Vicepresidente, un secre
tario y dos vocales elegidos todos por la Asamblea local en vo
tación directa y secreta. Si no resultaren personas especialmente elegidas para los cargos de Tesorero y Contador, ejerce
rán estas funciones respectivamente, el Vicepresidente y el Vocal 1º.

El Consejo local será renovado por mitad cada dos años en la forma que establezcan los Reqlamentos.

DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES

Artº 11.- El Consejo provincial se compondrá de un Presidente, un Vicepresidente 1º, un Vicepresidente 2º, un Se
cretario, un Vicesecretario, un Tesorero y un Contador, elegi

dos por la Asamblea provincial en votación directa y secreta, además de un vocal por cada Partido judicial designado por la Asamblea local del partido respectivo. Los Consejos locales de las poblaciones cuyo censo exceda de 500 afiliados tendrán en el Consejo provincial, con independencia de la representación que les corresponde por el Partido Judicial, un representante por cada quinientos socios o fracción de este número, sin que en ningún caso pueda pasar de seis el número de representantes.

Los cargos de los Consejos locales no son incompatibles con los de los Provinciales.

Artº 12.- Varía el apartado 5º que queda redactado como sigue:

"Remitir al Consejo Nacional relación mensual de altas y bajas y el 20% del importe de su recaudación total".

DEL CONSEJO NACIONAL

Artº 14.- Varía el último apartado que quedará redactado como sigue:

"El cargo de Consejero durará cuatro años, renovándose el Consejo, por mitad cada dos. Los Consejeros que hayan de cesar se determinarán por sorteo. Los Consejeros que cesen, no serán reelegibles hasta pasados cuatro años de su mandato".

Artº 15.- Varía el apartado 2º:

"El Presidente, Vicepresidente y Secretario general, residirán forzosamente en Madrid, y constituirán, en unión de otros seis vocales, con residencia también obligada en la Capital de la Nación, la Comisión Ejecutiva Permanente, cuya misión será resolver los asuntos de trámite y aquellos de máxima urgencia a cuyo efecto asumirá provisionalmente las facultades que competen de ordinario al Consejo Nacional, pero con la obligación de rendir inmediatamente al Pleno del mismo, cuenta de su gestión".

Artº 19.- El Consejo Nacional celebrará reunión ordinaria una vez al mes; extraordinariamente se reunirá cuando lo estime preciso la Comisión Ejecutiva, o lo pidan por escrito tres Consejeros.

La Comisión Ejecutiva se reunirá una vez por semana.

DE LAS ASAMBLEAS LOCALES Y PROVINCIALES

Artº 24.- Corresponde a las Asambleas locales: Nombrar los miembros del Consejo local y los Delegados para las Asambleas provinciales. Designar por votación los Candidatos a Concejales, y en su caso a Diputados provinciales, y proponer al Consejo Nacional los candidatos para la representación en Cortes cuyas propuestas serán aprobadas o rechazadas por aquel justificadamente. Corresponde también a las Asambleas orientar y fiscalizar la actuación de sus representantes en el Municipio, la Diputación provincial y el Parlamento.

El resto del artículo no varía.

Artº 25.- La Asamblea provincial estará integrada por los Delegados de cada uno de los Consejos locales de la provincia, nombrados por la Asamblea local respectiva, y por el Consejo provincial en Pleno. A cada Consejo corresponderá en la Asamblea un voto, salvo cuando su censo exceda de 500 afiliados, en cuyo caso tendrán un voto por cada 500 socios o fracción de este número, sin que en ningún caso pueda exceder de diez el total de votos asignado por consejo. Los miembros del Consejo provincial tendrán voto individual.

Artº 26.- La Asamblea provincial será el organismo fiscalizador de la labor del Consejo provincial y su reunión significa el contacto inmediato de las fuerzas organizadas del Partido en cada provincia para adoptar las normas conducentes a una eficaz organización política.

Los debates de las Asambleas provinciales serán dirigidos por una mesa de discusión compuesta de tres miembros que se elegirán por la misma Asamblea en el momento de comenzar sus tareas.

Corresponderá a las Asambleas provinciales: La designación por votación de candidatos a Diputados provinciales. Proponer al Consejo Nacional los candidatos para Diputados a Cortes, cuyas propuestas serán aprobadas o rechazadas por aquél justificadamente.

Elegir el Consejo provincial.

01014

Dirigir la política provincial y resolver en prime
ra instancia las cuestiones que se susciten entre Consejos lo
cales, o entre Consejos locales y provinciales.

DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS

Artº 29.- (Antes 28). La Asamblea Nacional se reunirá ordinariamente una vez al año. Extraordinariamente celebrará cuantas reuniones aconsejen las circunstancias, bien por estimarlo así el Consejo Nacional o a petición de seis Consejos provinciales.

REGLAMENTO DEL PARTIDO DE ACCION REPUBLICANA EN LA PROVINCIA
DE CASTELLON

(A.S., Castellón-102, folios 40 y ss.)

TITULO I

FINALIDAD POLITICA DE ACCION REPUBLICANA

Artículo 1º.- Con el nombre de ACCION REPUBLICANA queda constituido en la provincia de Castellón un Partido de carácter político que actuará con arreglo a las normas generales que determina la organización nacional a que pertenece y cuya finalidad es la defensa de la República como forma de Gobierno de España y la aspiración a que las Leyes fundamentales de ésta y los actos de sus gobernantes cumpliendo la ideología que en las asambleas nacionales se rige, desenvuelvan los principios de justicia y política social. Fija su domicilio en Castellón, Mayor, 102.

TITULO II

DE LOS GRUPOS LOCALES

Artículo 2º.- Podrán pertenecer como afiliados al Partido de la Provincia todos aquellos Grupos Locales que conformes con los fines, ideario y Estatutos del partido, lo soliciten del Consejo Provincial.

El Consejo Provincial, para conocimiento de los afiliados hará público por anuncio en el domicilio social el nom-

bre del Grupo Local durante quince días y si pasado ese tiempo no se recibiera de ningún Grupo Local alguna objeción o reparo a su adhesión, el Consejo Provincial podrá aceptar su ingreso provisional sometiendo la propuesta de admisión definitiva a la primera Asamblea Provincial.

Artículo 3º. - Serán derechos de los Grupos Locales todos cuantos son preceptivos en los Estatutos Generales del Partido.

Artículo 4º. - Serán deberes de los Grupos Locales los generales que señalan nuestros Estatutos y el de contribuir a los gastos del Partido Provincial con una cuota mensual.

Artículo 5º. - El carácter de Grupo Local afiliado se pierde:

a) Por renuncia escrita al Consejo Provincial como consecuencia de acuerdo tomado en Asamblea Local.

b) Por ingreso en otro partido político.

c) Por falta de pago de tres cuotas, previo aviso por escrito del Consejo Provincial al Grupo Local, concediéndole un plazo de ocho días para ponerse al corriente de sus recibos.

d) Por sanción reglamentaria, por faltas cometidas, adoptada en la Asamblea Provincial previa audiencia y descargo del delegado que designe el Grupo.

01017

En todos los casos, a la baja debe acompañar la renuncia y el cese en los cargos de elección popular que por designación del Partido desempeñen sus componentes.

TITULO III

DEL CONSEJO PROVINCIAL

Artículo 6º.- La gestión administrativa y de gobierno del Partido Provincial se ejercerá por un Consejo Provincial que al propio tiempo será el organismo ejecutivo de la Asamblea Provincial.

Artículo 7º.- El Consejo Provincial se compondrá de un Presidente, un Vicepresidente primero, un Vicepresidente segundo, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero y un Contador, además de un Vocal por cada Partido Judicial, designado por los delegados de los Grupos Locales del Partido Judicial respectivo. Sobreentendiéndose que no habrá incompatibilidad en el desempeño de los cargos de los Consejos Locales y del Provincial.

Artículo 8º.- Serán atribuciones del Consejo Provincial:

Velar por la buena organización y disciplina del Partido en el territorio de la provincia.

Proponer al Consejo Nacional aquellas medidas que considere beneficiosas.

Atender y resolver dentro de su competencia las pe
ticiones de los Consejos Locales.

Remitir al Consejo Nacional relación mensual de al
tas y bajas y el 25% del importe de su recaudación total por
cuotas de Grupos Locales.

Convocar las Asambleas Provinciales ordinarias y
extraordinarias.

Artículo 9º.- Los afiliados que componen el Conse-
jo Provincial serán designados, los que ostenten cargos por
votación directa y secreta en la Asamblea Provincial, y los
vocales de acuerdo con el artículo 7º, renovándose por mitad
cada dos años y no pudiendo ser reelegidos hasta pasados cua-
tro años del término de su gestión.

Del primer Consejo Provincial que se elija al fin
lizar los dos primeros años, cesarán en sus cargos el Vicepre-
sidente primero y los Vocales pares, y a los cuatro años de
ejercicio cesará el Presidente, Vicepresidente segundo y Se-
cretario, y los Vocales impares, y así con esta misma distin-
ción irán en lo sucesivo cesando los miembros del Consejo al
cumplirse los cuatro años de su ejercicio en el cargo.

Artículo 10º.- En el caso de que por fallecimiento,
renuncia u otra causa quedase vacante algún cargo, será provis-
to en la primera Asamblea Provincial extraordinaria que se ce
lebre; pero el nombrado en sustitución no podrá ejercer su man
dato por más tiempo que el que para su plazo le faltase cumplir

al sustituido.

Artículo 11º.- Los miembros del Consejo que ostenten cargos, constituirán el Comité Ejecutivo del Consejo Provincial y se reunirá por lo menos dos veces al mes. Los Delegados de los partidos judiciales constituirán el pleno y tendrán misión fiscalizadora reuniéndose con el Comité Ejecutivo en funciones del Consejo Provincial por lo menos cuatro veces al año. También podrá reunirse el Consejo Provincial con carácter extraordinario cuando la urgencia e importancia del asunto lo requiera a petición del Comité o de la mitad más uno de los miembros del pleno. En este caso la reunión se notificará con diez días de anticipación.

Artículo 12º.- Son facultades del Consejo Provincial además de las señaladas, las que se encomienden por acuerdo de la Asamblea cuando las circunstancias lo exigiesen, las que serán ejecutivas en su jurisdicción, teniendo un carácter provisional hasta que sean refrendadas por la Asamblea Provincial que se celebre.

Artículo 13º.- Serán facultades del Presidente:

- a) Representar el Consejo Provincial en los actos oficiales.
- b) Autorizar con su firma los documentos, comunicaciones y escritos de carácter oficial.
- c) Ejercer una activa vigilancia en todos los Grupos

Locales, ejecutando y haciendo cumplir lo establecido en Estatutos y Reglamentos, así como los acuerdos de la Asamblea Provincial.

d) Señalar el orden del día para las sesiones del Consejo Provincial, abrir y cerrar las mismas, dirigir su discusión y autorizar con su firma sus actas.

e) Pasar a las comisiones los asuntos que a cada una corresponda, vigilando el funcionamiento de las mismas.

f) Intervenir en el movimiento de fondos.

Artículo 14^a.- Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en caso de ausencia o enfermedad de este, o cuando por él mismo les sea delegada cualquier función, con las mismas atribuciones y responsabilidades que correspondan a aquél.

Artículo 15^a.- El Secretario tendrá a su cargo la organización de los trabajos políticos del partido provincial, siguiendo las instrucciones del Consejo Provincial.

Son asimismo sus funciones:

a) Informar de cuantos asuntos acuerde el Consejo y realizar los trabajos por sí o por el Secretario administrativo que por aquél o por el Presidente se le encargue.

b) Firmar las comunicaciones, correspondencia y documentos políticos, así como los títulos.

01021

c) Suscribir las actas que celebre el Consejo Provincial. Guardar estrecha relación con el Secretario administrativo.

Artículo 16º.- El Tesorero será depositario de los fondos y realizará los pagos reglamentarios a que esté debidamente autorizado.

Artículo 17º.- El Contador asumirá las siguientes funciones:

- a) Intervenir en el movimiento de fondos.
- b) Dirigir la formación de cuentas y balances.
- c) Llevar cuenta detallada del estado económico del partido.

TITULO IV

DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Artículo 18º.- Son funciones de la Secretaría Administrativa:

a) Entender en todos aquellos asuntos de trámite en los Centros Oficiales y Oficinas Públicas, relacionados con el Partido.

b) En cuantas gestiones particulares le sean encomendadas por mediación de los Comités Locales que redunden en beneficio de sus afiliados, tales como pasaportes, licencias

de caza, certificados, etc., etc.

c) En cuantas gestiones políticas le sean encomendadas por el Secretario Político como consecuencia de acuerdos tomados en el Consejo Provincial o de órdenes dimanantes del Consejo Nacional.

d) Acompañar a los Centros Oficiales a los individuos y comisiones de los pueblos que lo soliciten por conducto del Comité Local correspondiente.

e) Extender y redactar todos aquellos documentos relacionados con el Consejo Provincial.

f) Llevar el fichero Provincial ordenado por Grupos Locales y estos por Partidos Judiciales.

g) Redactar, cursar y contestar la correspondencia de relación con las organizaciones locales, de partido regional y nacional, de la que sacará copia para archivarla.

Artículo 19^a..- La Secretaría Administrativa llevará una contabilidad de Gastos e Ingresos que afecten exclusivamente a la Secretaría Administrativa, practicando mensualmente una liquidación que someterá a la aprobación del Consejo Provincial.

Artículo 20^a..- Llevará un Registro de Gestiones y asuntos de trámite.

Artículo 21^a..- Cursará a los Consejos Locales los

recibos por cuotas que le sean entregados por el Contador del Consejo Provincial. Se hará cargo de estas cuotas y liquidará mensualmente al Tesorero provincial.

Artículo 22º.- Cuando el volumen de trabajos que le son encomendados lo exija, la Secretaría Administrativa se organizará a base de Secciones y personal necesario, retribuido, con arreglo al art. 32 de este Reglamento.

Artículo 23º.- El Personal auxiliar de la Secretaría Administrativa se elegirá a propuesta del Secretario Administrativo y previa conformidad del Consejo Provincial.

Artículo 24º.- Cesarán en el desempeño de su cargo:

a) Por renuncia del interesado.

b) Por faltas cometidas en el desempeño de su cargo, que tratándose del personal auxiliar, bastará la propuesta de cese hecha por el Secretario Administrativo, aprobada por el Consejo, siendo oído el interesado. Y tratándose del Secretario Administrativo a propuesta del Secretario Político, aprobada por el Consejo Provincial y refrendada por la Asamblea Provincial, en cuyo caso se convocaría Asamblea provincial extraordinaria.

c) Por pertenecer a otro partido político.

d) Por disolución del Partido.

Artículo 25º.- Todo el personal administrativo será renovado salvo en el caso previsto en el artículo anterior de este Reglamento, en cuyo caso las vacantes serán cubiertas de acuerdo con el artículo 23, cuando se trate de personal auxiliar, y a propuesta de la Asamblea Provincial, cuando se trate del Secretario Administrativo.

Artículo 26º.- De las determinaciones que en este sentido tome el Consejo Provincial para el personal auxiliar y la Asamblea Provincial para el Secretario Administrativo, no se podrá recurrir ante los Tribunales de Justicia, ni exigir indemnización alguna.

Artículo 27º.- No será de la competencia de la Secretaría Provincial, la resolución de aquellos asuntos que afectan a los Tribunales de Justicia.

DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Artículo 28º.- El Secretario Administrativo depende de la Secretaría Política, del Partido Provincial y del Consejo Provincial.

Artículo 29º.- El Secretario Administrativo asesorará al Secretario Político y al Consejo Provincial, en todos aquellos asuntos para los que sea requerido que afecten a la marcha política y administrativa del Partido.

Artículo 30º.- El Secretario Administrativo tendrá voz pero no tendrá voto en las reuniones que celebre el Consejo

jo Provincial.

Artículo 31^a..- No será incompatible el cargo de Secretario Administrativo con el de miembro del Consejo, si para ello fuese elegido y en este caso como miembro del Consejo tendrá las mismas facultades que cualquiera que lo componen.

Artículo 32^a..- Los Auxiliares que hubiere en la Secretaría Administrativa reconocerán como Jefe Administrativo al Secretario Administrativo.

Artículo 33^a..- El Secretario Administrativo estará retribuido con arreglo a las posibilidades económicas del Partido y con el sueldo que fije el Consejo Provincial. No podrá en ningún caso percibir cantidad alguna de los individuos, comisiones y consejos locales por las gestiones realizadas a exclusión de los gastos propios de las gestiones.

TITULO V

DE LA ASAMBLEA PROVINCIAL

Artículo 34^a..- De acuerdo con el principio democrático del partido, las Asambleas Provinciales estarán integradas por dos Delegados nombrados por cada distrito y por el Consejo Provincial, será el organismo fiscalizador del Consejo Provincial y su reunión significa el contacto inmediato de las fuerzas organizadas del Partido de la provincia para adoptar las normas conducentes a una eficaz organización política.

Los debates de las Asambleas Provinciales serán dirigidos por una mesa de discusión, compuesta de tres miembros que se elegirán por la misma asamblea en el momento de comenzar sus tareas.

Corresponderá a las asambleas provinciales: La designación por votación de sus representantes en la Diputación provincial. Proponer al Consejo Nacional los representantes en Cortes, cuyas propuestas serán aprobadas o rechazadas por aquél justificadamente. Designar el Delegado que represente al partido en la Asamblea Nacional.

Artículo 35^a.- Las Asambleas Provinciales tendrán lugar anualmente con carácter ordinario y con carácter extraordinario en los casos previstos en el Art. 11.

TITULO VI

DE LOS FONDOS DEL PARTIDO

Artículo 36^a.- Constituyen los fondos del Partido:

a) Las cuotas mensuales ordinarias, de los Grupos Locales.

b) Las cuotas extraordinarias que la Asamblea acuerde con carácter voluntario.

c) Los demás ingresos producidos por donaciones de afiliados y simpatizantes o por cualquier otro concepto siempre que su ingreso se verifique directamente en el Consejo Provin-

cial.

Artículo 37^a..- Los pagos e ingresos deberán ser autorizados por duplicado con las firmas del Presidente, Tesorero y Contador. No será admitido ningún pago que no reuna estos requisitos. Uno de los ejemplares quedará en poder del Contador, y el otro servirá de justificante para el Tesorero.

Artículo 38^a..- El Consejero Contador, practicará Balance en el mes de Diciembre de cada año, que será expuesto en Secretaría a disposición y examen de los afiliados durante el mes de Enero. La discusión y aprobación corresponderá a la Asamblea Provincial.

TITULO VII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 39^a..- El Partido de Acción Republicana de la Provincia, en cuanto le sea posible, tendrá un órgano oficial de publicidad o contribuirá en la medida de su esfuerzo para que el Partido de la Nación tenga un periódico oficial que sirva para mantener contacto directo entre todos los órganos y afiliados.

Artículo 40^a..- Este Reglamento podrá modificarse por una Asamblea extraordinaria convocada al efecto.

Artículo 41^a..- En caso de disolverse el Partido, previa liquidación y pago de las deudas, el remanente de bienes y

01028

metálico, si lo hubiera, será entregado a las instituciones benéficas de la Provincia.

Castellón 29 de Mayo de 1932.

REGLAMENTO DE LA ORGANIZACION PROVINCIAL DE MADRID

Aprobado en Asamblea Provincial extraordinaria, celebrada el 3 de diciembre de 1932.

(Boletín de Información..., nº 6, p. 992).

Artículo a.- Se constituye en la provincia de Madrid la organización provincial de Acción Republicana, que actuará con arreglo a las normas generales que determina la organización nacional a que pertenece, y cuya finalidad es la defensa de la República como forma de Gobierno del Estado español, y su aspiración llevar a las leyes y actos de Gobierno el ideario político y social aprobado en sus Asambleas Nacionales.

Artículo b.- El Consejo provincial asume las funciones de gestión, dirección y administración de la organización provincial, dentro de los acuerdos de las Asambleas provinciales, de las cuales es organismo ejecutivo.

Artículo c.- El Consejo provincial se compondrá de un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un secretario, un vicesecretario, un tesorero y un contador, además de un vocal por cada partido judicial, designado por la Asamblea de representantes del partido judicial correspondiente.

Artículo d.- Para designación de vocal en el Consejo, cuando en el partido judicial haya varias organizaciones

locales, cada una de éstas elegirá en sus Asambleas respectivas un representante con un voto por cada veinte afiliados con que cuente el Grupo; los representantes así designados elegirán, por mayoría absoluta de votos, el vocal que ha de formar parte del Consejo provincial. La misma mayoría absoluta de votos será necesaria para decidir el cese del designado vocal antes del término reglamentario de su mandato.

Artículo e.- Los miembros que componen el Consejo provincial, excepción hecha de los vocales, serán designados por votación directa y secreta en la Asamblea provincial renovándose por mitad cada dos años, sin que puedan ser reelegidos hasta pasados cuatro años del término de su gestión. Del primer Consejo provincial elegido se renovarán, al finalizar los dos primeros años de su actuación, los siguientes cargos: Vicepresidente primero, tesorero y secretario; a los cuatro años de ejercicio cesarán: Presidente, vicepresidente segundo, vicesecretario y contador. Los vocales cesarán por mitad a los dos años, y el resto a los cuatro, designándose mediante sorteo el orden en que han de cesar.

Artículo f.- En el caso de que por fallecimiento, renuncia u otra causa quedase vacante algún cargo, será provisto en la primera Asamblea ordinaria que se celebre, siendo sustituidos provisionalmente en la forma que en este reglamento se determina hasta la celebración de dicha Asamblea, pero el nombrado en sustitución no ejercerá su función sino por el tiempo que faltare para cumplirlo al sustituido.

Artículo g.- El Consejo provincial se reunirá con carácter ordinario dentro de los diez primeros días de cada mes, y celebrará las sesiones extraordinarias que considere precisas. El individuo del Consejo que faltare a tres sesiones consecutivas sin causa justificada será declarado dimisio
nario.

Artículo h.- Serán atribuciones del Consejo provincial: Velar por la buena organización y disciplina del partido en el territorio de la provincia, cuidando de que la actua
ción de los distintos Grupos locales se desenvuelvan dentro del ideario del partido; a este efecto podrá designar Comisio
nes inspectoras, dando cuenta del informe de éstas a la Asamblea provincial, que aplicará, si lo estimare preciso, la san
ción correspondiente. Proponer al Consejo Nacional aquellas medidas que considere beneficiosas. Atender y resolver dentro de su competencia las peticiones de los Consejos locales. Remi
tir al Consejo Nacional relación mensual de altas y bajas, y el 25 por 100 de la recaudación total. Convocar las Asambleas provinciales ordinarias y extraordinarias.

Artículo i.- Las Asambleas provinciales estarán cons
tituidas por dos delegados, nombrados por cada distrito local y por el Consejo provincial en pleno.

Artículo j.- Corresponden a las Asambleas provincia
les: Fiscalizar la labor del Consejo provincial y la de los Consejos locales, resolviendo las cuestiones de competencia que éstos susciten, y adoptar las normas conducentes a una ma

por eficacia en la actuación de las fuerzas políticas de la provincia; designar por votación a sus representantes en las Diputaciones provinciales; proponer al Consejo Nacional sus candidatos a representantes en Cortes. Dichas propuestas serán aceptadas o rechazadas por el referido organismo superior justificadamente. Para el debido conocimiento de las distintas candidaturas presentadas por las Asambleas locales, deberán obrar en la Secretaría del Consejo provincial las certificaciones de las actas correspondientes con diez días de anticipación a la Asamblea convocada a tal objeto.

Artículo k.- Las Asambleas provinciales ordinarias se verificarán en los meses de enero y junio; en ellas se examinará la conducta del Consejo, el estado de cuentas, el movimiento del partido en la provincia, y todas las proposiciones de interés general para la organización provincial. Además se procederá también en ellas a la elección de los cargos que hubiere vacantes en el Consejo provincial. Asimismo se convocará Asamblea extraordinaria siempre que el Consejo juzgue de urgencia la resolución de determinados asuntos o cuando lo pidan la tercera parte de los organismos locales de la provincia. No podrá discutirse en estas Asambleas más asuntos que aquellos que las hayan motivado.

Artículo l.- Los debates de las Asambleas provinciales serán dirigidos por una Mesa de discusión, compuesta de tres miembros (un presidente y dos secretarios), que se elegirán por la misma Asamblea en el momento de comenzar sus tareas.

No podrán formar parte de la Mesa de discusión los miembros del Consejo provincial. La obligación de la Mesa es solamente dirigir las discusiones en la Asamblea y levantar acta de la discusión.

Artículo m.- Tendrán vez en la Asamblea provincial todos los afiliados que concurran a la misma, pero sólo tendrán voto aquellos afiliados que, según el reglamento, constituyen la Asamblea.

Artículo n.- Constituyen los fondos de la organización provincial: las aportaciones mensuales de las organizaciones locales; los demás ingresos producidos por donaciones de entidades, afiliados o simpatizantes, o por cualquier otro concepto, siempre que su ingreso se verifique directamente en la organización provincial.

Artículo ñ.- En caso de disolverse esta organización, los fondos que hubiere serán entregados a las organizaciones locales del partido que subsistiesen, y en su defecto serán entregados a las instituciones benéficas de la provincia de Madrid.

Artículo o.- Este reglamento sólo podrá ser reformado por una Asamblea provincial extraordinaria convocada para este objeto por el Consejo provincial o solicitada por la tercera parte de los organismos locales de la provincia.

01034

REGLAMENTO DEL PARTIDO DE ACCION REPUBLICANA

(A.S., Castellón-102).

TITULO PRIMERO

FINALIDAD POLITICA DE "ACCION REPUBLICANA"

Artículo 1º.- Con el nombre de ACCION REPUBLICANA queda constituida en una entidad local de carácter político que actuará con arreglo a las normas generales que determina la organización nacional a que pertenece y cuya finalidad es la defensa de la República como forma de Gobierno de España y la aspiración a que las Leyes fundamentales de ésta y los actos de sus gobernantes , cumpliendo la ideología que en las Asambleas Nacionales se fije, desenvuelvan los principios de justicia y política social.

El domicilio de la entidad se fija en la calle ...
..... núm.

TITULO II

DE LOS AFILIADOS

Artículo 2º.- Podrán pertenecer como afiliados a ACCION REPUBLICANA todos aquellos que, estando conformes con los fines, ideario y Estatuto del Partido, lo soliciten del Consejo Local en escrito avalado por dos afiliados.

El Consejo, para conocimiento de los afiliados, ha

rá público por anuncio en el domicilio social, el nombre del solicitante, durante quince días y si pasado ese tiempo no se recibiera de ningún afiliado alguna objeción o reparo a su adhesión, el Consejo podrá acordar su ingreso provisional, sometiendo la propuesta de admisión definitiva a la primera Asamblea Local.

Será condición indispensable para ser afiliado, tener más de dieciocho años.

Artículo 3º.- Serán derechos de los afiliados, todos cuantos son preceptivos en los Estatutos Generales del Partido. Esto no obstante, el Grupo Local de
..... reserva para sus afiliados que lo sean con posterioridad al 14 de Abril, la limitación a ejercer el derecho de voto hasta pasados seis meses y el de ostentar cargos públicos o representativos hasta pasados dos años, ambas fechas a contar desde su ingreso en el Partido de ACCION REPUBLICANA, exceptuándose a aquellos que en la Asamblea Local demuestren que pertenecieron antes de la proclamación de la República, bien a la F.U.E., bien a cualquiera de los Partidos antimonárquicos, o quienes la misma Asamblea local, en uso de su soberanía, a propuesta del Consejo Local, considere casos de excepción.

Artículo 4º.- Serán deberes de los afiliados los generales que señalan nuestros Estatutos y el de contribuir a los gastos del Partido con una cuota mensual.

Artículo 5º.- El carácter de afiliado se pierde:

a) Por renuncia escrita al Consejo Local.

b) Por ingreso en otro Partido político.

c) Por falta de pago de tres cuotas, previo aviso por escrito del Consejo Local al interesado, concediéndole un plazo de ocho días para ponerse al corriente de sus recibos.

d) Por sanción reglamentaria por faltas cometidas, adoptada en la Asamblea Local, previa audiencia y descargo del interesado. En todos los casos, a la baja debe acompañar la renuncia y el cese en los cargos que por elección popular desempeña por designación del Partido.

TITULO III

DEL CONSEJO LOCAL

Artículo 6º.- La gestión administrativa y de gobierno del Grupo de se ejercerá por un Consejo Local que, al propio tiempo, será el organismo de la Asamblea Local.

Artículo 7º.- El Consejo Local se compondrá de nueve miembros, a saber: Presidente, dos Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y cuatro Vocales, siendo el primero de éstos el que ejercerá también las funciones de Contador.

Artículo 8º.- Los afiliados que componen el Consejo

Local serán designados por votación directa y secreta en la Asamblea Local, renovándose por mitad cada dos años y no pudiendo ser reelegidos hasta pasados cuatro años del término de su gestión.

Del primer Consejo Local que se elija, al finalizar los dos primeros años cesarán en sus cargos el Vicepresidente primero, el Tesorero y los Vocales segundo y cuarto, y a los cuatro años de ejercicio cesará el Presidente, Vicepresidente segundo, Secretario y los Vocales primero y tercero; y así, con esta misma distinción, irán en lo sucesivo cesando los miembros del Consejo al cumplirse los cuatro años de su ejercicio en el cargo.

Artículo 9º..- En el caso de que por fallecimiento, renuncia u otra causa quedase vacante algún cargo, será provisto en la primera Asamblea Local extraordinaria que se celebre; pero el nombrado en sustitución no podrá ejercer su mandato por más tiempo que el que para su plazo le faltase cumplir al sustituido.

Artículo 10º..- El Consejo Local se reunirá por lo menos dos veces al mes. También podrá reunirse con carácter extraordinario cuando la urgencia e importancia de un asunto lo requiera, a propuesta del Presidente o de tres miembros del Consejo. En este caso se solicitará de aquél por escrito y deberá celebrarse la reunión en el plazo de cuatro días, a contar del recibo de dicho escrito.

Artículo 11^a..- Son facultades del Consejo Local aquellas que señalan nuestros Estatutos y las que se le encomienden por acuerdo de la Asamblea Local, así como el de tomar resoluciones siempre que las circunstancias lo exigiesen, las que serán ejecutivas en su jurisdicción, teniendo el carácter provisional hasta que sean refrendadas por la primera Asamblea Local que se celebre.

Artículo 12^a..- Serán facultades del Presidente:

- a) Representar al Grupo Local en los actos oficiales.
- b) Autorizar con su firma los documentos, comunicaciones y escritos de carácter oficial.
- c) Ejercer una activa vigilancia en todos los asuntos del Grupo Local, ejecutando y haciendo cumplir todo lo establecido en Estatutos y Reglamentos, así como los acuerdos de la Asamblea Local.
- d) Señalar el orden del día para las sesiones del Consejo Local, abrir y cerrar las mismas, dirigir su discusión y autorizar con su firma sus actas.
- e) Pasar a las Comisiones los asuntos que a cada una correspondan, vigilando el funcionamiento de las mismas.
- f) Intervenir en el movimiento de fondos.

Artículo 13º.- Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en caso de ausencia o enfermedad de éste o cuando por el mismo les sea delegada cualquier función, con las mismas atribuciones y responsabilidades que correspondan a aquél.

Artículo 14º.- El Secretario tendrá a su cargo la organización y distribución de los trabajos de Secretaría, así como la vigilancia de los mismos.

Son asimismo funciones suyas:

a) Informar de cuantos asuntos acuerde el Consejo y realizar los trabajos que por aquél o por el Presidente se le encarguen.

b) Firmar las comunicaciones y documentos, así como los títulos, nombramientos y correspondencia de la Secretaría.

c) Redactar y suscribir las actas que celebre el Consejo Local.

d) Llevar los correspondientes registros y ficheros de afiliados con detalle de altas y bajas para cumplimentar preceptos estatutarios.

El Secretario será el jefe del personal retribuido.

Artículo 15º.- El Tesorero será depositario de los fondos y realizará los pagos reglamentarios a que esté debidamente autorizado.

Artículo 16º.- Los Vocales sustituirán a los restantes cargos y les auxiliarán en los trabajos que se les encomienden.

El Vocal primero asumirá además las funciones de Contador, que serán las siguientes:

- a) Intervenir en el movimiento de fondos.
- b) Dirigir la formación de cuentas y balances.
- c) Llevar cuenta detallada del estado económico del Grupo.

TITULO IV

DE LA ASAMBLEA LOCAL

Artículo 17º.- De acuerdo con el principio democrático del Partido, la Asamblea Local de que constituye uno de los Grupos o núcleos primordiales del mismo, de los que dimana toda autoridad, estará constituida por cuantos afiliados existen en la localidad y se hallen en posesión de sus derechos reglamentarios.

Artículo 18º.- Son funciones de la Asamblea Local cuantas se encuentran delimitadas en los Estatutos, siendo el orden a seguir en sus deliberaciones y discusiones el corriente en esta clase de reuniones.

Artículo 19º.- Estas Asambleas tendrán lugar mensual

mente en reunión ordinaria y con carácter extraordinario siempre que sea preciso, bien por convocatoria del Consejo Local o a petición del 10 por 100 de los afiliados.

Artículo 20^a.- Las Asambleas Locales serán presididas por el Presidente del Grupo o, en su ausencia, por un Vicepresidente o un Vocal; en todo caso será necesaria la asistencia del Secretario o quien haga sus veces, que levantará acta de cuanto ocurra en la sesión.

TITULO V

DE LOS FONDOS DEL GRUPO

Artículo 21^a.- Constituyen los fondos del Grupo:

- a) Las cuotas mensuales ordinarias de los afiliados.
- b) Las cuotas extraordinarias que la Asamblea acuerde con carácter voluntario.
- c) Los demás ingresos producidos por donaciones de afiliados y simpatizantes o por cualquier otro concepto, siempre que su ingreso se verifique directamente en el Grupo.

Artículo 22^a.- Los pagos e ingresos deberán ser autorizados por duplicado con las firmas del Presidente, Tesorero y Contador. No será admitido ningún pago que no reuna estos requisitos. Uno de los ejemplares quedará en poder del Contador y el otro servirá de justificante para el Tesorero.

01042

Artículo 23º.- El Consejero Contador practicará ba
lance en el mes de Diciembre de cada año, que será expuesto
en Secretaría a disposición y exámen de los afiliados durante
el mes de Enero.

La discusión y aprobación corresponderá en la Asam
blea del mes de Febrero.

TITULO VI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 24º.- ACCION REPUBLICANA de
..... en cuanto le sea posible tendrá un órgano
oficial de publicidad o contribuirá en la medida de su esfuerz
o para que el Partido tenga un periódico oficial que sirva pa
ra mantener contacto directo entre los organismos directivos
del Partido y sus afiliados.

Artículo 25º.- Este Reglamento podrá modificarse por
una Asamblea extraordinaria convocada al efecto por el Consejo
Local o solicitada por la décima parte de los afiliados al Grup
o.

Artículo 26º.- En caso de disolverse la Agrupación,
previa liquidación y pago de las deudas, el remanente de bienes
y metálico, si lo hubiera, será entregado a las instituciones
benéficas de

II. ESCRITOS Y DISCURSOS DE AZAÑA

1. ARTICULOS DE PRENSA

LA POLITICA FRANCESA DE POSTGUERRA

(Política, enero de 1930, nº 1, p. 17).

Durante la guerra, y en los primeros meses siguientes a su conclusión, pareció que la vida pública francesa se asentaría en lo futuro sobre bases nuevas. No fue un sentimiento vago ni el deseo impreciso de quien sueña, corriendo tal borrasca , con tiempo mejor; fue un cálculo basado en la profundidad y violencia de la conmoción, y un propósito que cada cual se forjó , según se movía en el ámbito de un gremio, de un partido o consideraba el porvenir de su oficio. De tan gran calamidad como la guerra, el único bien posible sería el desenlace forzoso de ciertos problemas intrincados que se mantenían vivos por respetos a la paz. El postulado de la paz, interior y exterior, impedía cortar ciertos nudos. Venida la guerra, de los mismos crisoles donde se derretía la fortuna nacional y se abrasaba la mejor sangre francesa, un país rehecho iba a surgir, desembarazado de antiguos gravámenes, apto para emprender un sendero expedito.

Propiamente, la guerra (una guerra como aquélla) significa la crisis de una política insostenible. Conciliar la seguridad y la libertad, el progreso social y la defensa, los designios pacifistas y el poderío bélico creciente agotaba el ingenio y la sutileza de los grupos gobernantes del pueblo francés, aficionado en su mayoría a la paz y a ornamentar la vida, lastimado, no obstante, en su orgullo con poderoso internacionalismo obrero en su ala izquierda y nacionalismo alarmista y révanchard en la derecha; pueblo envuelto en competencias internacionales y rivalidades antiguas, de que podría salir por uno de estos ca

minos: la guerra o la aceptación sumisa de la hegemonía alemana. Tamaña aceptación era imposible, aún por parte de los más inclinados a transigir. La guerra, no ya provocada y buscada, sino simplemente padecida, tenía que parecer útil, en medio de su horror, para algo bueno: sería el fin de una situación insoportable. La propaganda tradujo ese sentimiento: "la última guerra", "guerra a la guerra", y los demás motes con que se sostenía la moral no significaron otra cosa. Como si de una confiagración general hubiera de salir reforzada la paz. La guerra, o por mejor decir, la victoria, antes de saberse su contenido, produjo en el vulgo la esperanza de que la vida por venir sería mucho más fácil. Borrón y cuenta nueva. Graves problemas se resolverían reducidos a otros términos más simples. La Sociedad de Naciones, el pacto americano acabarían con los armamentos. Si el capital del país se había disipado casi entero, bastaba presentar la factura en Berlín. Tiempos nuevos. Todo nuevo: la política y la literatura, la Universidad y el Ejército, la moral, el urbanismo... Por de pronto, donde más novedad hubo fue en la clase de los ricos.

Al año de concluirse la guerra, hubo elecciones. Era lógico suponer que los sentimientos elaborados durante cuatro años calamitosos saldrían de las urnas convertidos en fuerza política innovadora, que la política mudaría de faz. Preocupaba mucho lo que votarían los soldados al regreso de las trincheras. ¡Tenían tales cuentas que pedir! El Gobierno empleó recursos electorales inauditos. Clemenceau desenterró un proceso archivado. En pocos días, un Consejo de guerra condenó a muerte

al hombre que encabezaba la candidatura socialista de París ,
"por inteligencia con el enemigo". (El enemigo era Rusia, con
quien Francia no estaba en guerra). Resultó elegida la Cámara
más conservadora (la Cámara bleu horizon) que ha tenido la Re-
pública francesa desde los tiempos de Mac Mahon. Hasta Leon Dau-
det salió diputado.

Esta sorpresa inauguró una serie. La victoria, en su
primer hervor, producía un retroceso político. Poco después, el
Parlamento daba a la República un Presidente autoritario en el
ponderoso señor Millerand, tráfuga del socialismo, que se ha-
bía adjudicado en la democracia de su país el papel de "hombre
de puños". Viviendo en democracia, que suele asustarse un poco
de su propia libertad, el papel de hombre enérgico y pavoroso
es muy socorrido. En democracias menos auténticas que la fran-
cesa, fenómenos sin sentido moral han logrado reputación de es-
tadistas a fuerza de ademanes violentos y de ahuecar la voz.
¡Flaquezas del animal político, que teme descarriarse si no se
siente bien apacentado; Los conservadores, en auge dentro del
Parlamento, no se negaban a innovar. Querían novedades, pero a
su gusto; querían innovar echándose atrás de la línea media del
gubernamentalismo francés. Querían utilizar la victoria a fondo,
y de paso, al amparo de las ventajas así obtenidas, reforzarían
su posición política interior. Los radicales, puestos en la opo-
sición gubernamental, pensaban que sólo ellos, aplicando el Tra-
tado según los principios generales de su política, podrían con-
solidar la paz y devolver a Francia la prosperidad y la justi-
cia fiscal. Puesto que todos los franceses se habían batido por

la patria común, pretendían los moderados que en la política religiosa se aflojase la tensión anticatólica con el retorno de algunas congregaciones, el fomento de la escuela libre, etc. Los radicales pretendían aplicar urgentemente a las provincias reconquistadas -que son muy católicas- la ley común francesa en el orden religioso y escolar. Estas posiciones prueban que la política, en su estrategia, no adquiriría ninguna novedad, y que los radicales no eran verdadera oposición. Radicales y moderados están dentro del régimen. La victoria afianza y robustece al régimen que la obtiene. Unos y otros tenían que resignarse a contar con el adversario político en la utilización de la victoria. La política parlamentaria ha consistido en un revoltijo de tendencias y en concentraciones inverosímiles, que, cuando más han durado, se sostenían en nombre de la eficacia y de la utilidad, merced al prestigio de un hombre. Los radicales han tenido que renunciar a la política unificadora y asimilista en Alsacia; los moderados han tenido que respetar la escuela y el laicismo.

Los socialistas son la oposición verdadera, hasta donde alcanza su calidad de partido revolucionario y de clase, enemigo del régimen. Los socialistas han podido y debido oponerse a que la victoria fuese algo más que el salvamento de la independencia nacional. El triunfo favorece al que manda, pero no siempre favorece el interés verdadero del país. Una derrota puede ser la salvación, si el régimen es abyecto y corruptor. Los republicanos franceses de 1870 se aprovecharon de Sedán para dar un puntapié al imperio de Badinguet, sin perjuicio de con-

tinuar la guerra, separando, ya un poco tarde, la causa nacional y la política bonapartista. Rusia ganó mucho con sus derrotas de 1916; gracias a ellas, la revolución la libró del zarismo. Lo mismo se ha hecho en otros pueblos. Si en España falló la regla, se deberá a que los españoles y su régimen son inconvencionales. (El punto se deja para los filósofos de la historia). La derrota es la aliada natural del enemigo interior, a quien los hombres de gobierno tachan de mal patriota. El derrotismo no es invento moderno. Resulta de una aspiración política exasperada por el menosprecio o la persecución. En todos los tiempos ha habido derrotistas, y en todas partes. También en España. Los afrancesados eran derrotistas de la causa nacional. Con tal de quitar a los Borbones, se pasaban a un rey extranjero, tildado de "intruso", como si toda realeza no fuese una intrusión. Los afrancesados sabían que, triunfante el alzamiento nacional, la familia de Carlos IV, por mucho que Goya la hubiese desacreditado, volvería al trono con prestigio nuevo. En efecto, fue necesario un Napoleón para que un Fernando VII pudiese decir "¡arre!" a los fieles súbditos enganchados a su carruaje. ¡Es lo más importante que produjo en España el genio del emperador!

Durante la guerra, el socialismo francés no fue derrotista. Incluso algunos de sus hombres participaron en el Gobierno. Esto prueba su moderación. No se aliaron con la derrota de Francia para soltar con su ayuda la revolución social; ésta sería hoy la táctica comunista. Preferían, ante todo, la conservación de Francia. Rescatada la integridad nacional, el socialismo recupera una posición que pudiera llamarse derrotista en

este sentido: se resiste a que el régimen, abundando en su esen
cía, explote a fondo la victoria en el orden militar, económico,
etc., y en el orden internacional. Se opone a una política con-
tradictoria como la anterior a 1914, y a una paz precaria en
cuanto militarizada. En efecto, desde 1870 a 1914, entre Fran-
cia y Alemania no hubo paz, sino suspensión de hostilidades. Y
es hora de que la disputa por las riberas del Rin deje de ser
causa de destrucciones periódicas, no sólo entre Francia y Alema
nia, "tributarias del mismo arroyo", sino en el mundo entero.
Justo es decir que la rivalidad de los dos pueblos se empeña
por cosas más importantes y graves que la posesión de una pro
vincia.

La posición fluctuante del radicalismo caracteriza la
política parlamentaria posterior a la guerra. Vasto y poderoso,
típico de la mentalidad francesa en aquellas partes que preten
den conservar las tradiciones de la Revolución, dueño del poder
durante muchos años, a él se debe que la República francesa sea
verdaderamente republicana. El régimen republicano se identifi
caba con el ideario radical. El radicalismo no quería tener enem
igos a la izquierda. Su propio triunfo le convertía en partido
de conservación política y social. Los resultados de la guerra
y la ordenación de la paz le quitan preponderancia, más que por
falta de gente, por falta de significación. Corre peligro de di
solverse, de desvanecerse, ya por la derecha, ya por la izquier
da. Distanciarse de los moderados, oponerse a ellos, no ser también
un partido de conservación, le cuesta amalgamarse con los
socialistas o depender de sus votos para poder gobernar; enton

ces, los moderados tachan a los radicales de sabotear la victoria y socavar el régimen, en que se ve la alianza de un cierto sentido del régimen con una apreciación determinada de la victoria. Gobernar con los moderados (por ejemplo, en el Ministerio Poincaré - Herriot Marin), o votar siquiera con ellos es todavía más grave, porque consiste en colaborar, no con un adversario que los rebasa, sino con un enemigo que los destruye.

Esta confusión declara la dificultad de un Gobierno du
radero. Hay cierto número de cosas por hacer, nacidas de realidad
des económicas intrangibles o de obligaciones internacionales
pactadas. Difícil ha sido encontrar una mayoría de gobierno en
cada caso; imposible encontrar una mayoría que, con criterio uni
forme y sostenido, los resolviese todos. La razón es que las so
luciones exigidas por los problemas de la paz no caben todas en
el ideario de ningún partido, y que el arreglo de cada cuestión
significa, para los grupos de gobierno, una mengua o una cesión
de los derechos de Francia. Los unos se oponen a toda reducción;
los otros se resignan a que el adversario cargue con la respon-
sabilidad o la impopularidad de ceder. La mayoría que sostuvo a
Poincaré cuando invadió la cuenca del Rhur no era posible que
votase el pago de la deuda a los Estados Unidos. Pero el mismo
Poincaré, que representaba ante la opinión el rigor en la apli-
cación del Tratado, vino, pocos años después, a arrancar de otro
Parlamento la aprobación del convenio de pago. Los Gobiernos se
apoyaban, principalmente, en los centros de la Cámara. Un mismo
Gobierno quería tener dos mayorías cambiables: hacia la izquierd
a, para ciertas cosas; hacia la derecha, para otras. Los Gobieru

nos no podían acomodarse al marco de un partido. Ni los mejores éxitos podían corresponder a los hombres de partido. Los que más han logrado son de tipo muy opuesto: el hombre de prestigio nacional, vigoroso, con autoridad que inspira confianza, y el hombre dúctil, paciente, un poco escéptico, con la filosofía moral del pescador de caña. Su tarea consistía en hacer tragar al Parlamento, a los partidos, a la opinión toda, las amargas realidades de una paz onerosísima, aunque triunfal; realidades que de una en otra conferencia, pasando por una bancarrota, han labrado el desengaño en el ánimo público.

El caso más recio es el de las deudas. Hace por ahora diez años veíamos encaramado en la tribuna de la Cámara francesa -el Sinaí de la burguesía, que dijo Eca de Queirós- al Ministro de Hacienda de Clemenceau. Leía el presupuesto. Formidable cuantía de millares de millones. "Alemania pagará", decía el Ministro, por toda receta contra el déficit. Y un ex diputado socialista, que asistía a la sesión a nuestro lado, rezongaba: Il nous bourre le crâne; Hoy, aquel Ministro está en presidio. No es que Francia se haya costado la fruición de encarcelar a un Ministro de Hacienda. Está preso por trampas personales. Pero su triste aventura en el orden privado es una figuración de sus planes rentísticos en el orden nacional. La historia del espíritu público en estos diez años consiste en el efecto de ese descubrimiento. Alemania no paga los destrozos de la guerra si no en parte que no cubre siquiera la restauración de las provincias arrasadas. Y Francia ha de pagar por la victoria común sumas que los acreedores se niegan hasta ahora a compensar con la

01053

deuda alemana. Igual observación podría hacerse en otras questio
nes. Es notorio, por otra parte, que el empuje, la abundancia y
el vigor con que el país levanta sus cargas fiscales aseguran un
porvenir más despejado.

Basten por ahora estos puntos de vista, preliminares
de una sección de política francesa, cuyos comentarios en lo su
cesivo se plegarán a los acontecimientos.

EL ATENEO Y LAS RESPONSABILIDADES

(Política, septiembre de 1930, nº 8-9, p. 250).

Nadie ignora que al reabrirse el Ateneo de Madrid, en febrero de este año, y volver a su puesto la Junta de gobierno que despóticamente destituyó y encarceló Primo de Rivera, aquella casa recuperó su actividad normal, no sólo en lo literario y científico, sino en lo que de momento se presentaba con más apremio en el espíritu de sus socios: el examen libre y a fondo de la situación creada por la Dictadura. Ocuparon la cátedra del Ateneo algunos hombres eminentes que, en sendas requisitorias contra el régimen personificado por el general Primo de Rivera, coincidieron en apreciar los orígenes del golpe de Estado de 1923 y en designar la clave del sistema que entonces se implantó. Estas apreciaciones obtuvieron la estentórea aprobación de las numerosísimas asambleas que se congregaban en el salón de actos del Ateneo. Que la conclusión fuese siempre la misma sirvió de pretexto a ciertas gentes timoratas para decir que el Ateneo se había convertido en club republicano. Argumento especioso, porque el Ateneo, que nunca ha tomado partido en política, limitándose (y no es poco) a sostener y practicar la libertad de expresión, no hacía más que ofrecer el resguardo de su tribuna a los que, con pleno derecho, querían publicar ciertos sucesos, ciertas conductas, mantenidos hasta entonces en relativo secreto por la fuerza de la tiranía. Que el criterio político de los oyentes se formase de esta o de la otra manera al conocer los hechos denunciados no es imputable a los oradores del Ateneo ni a la sociedad misma, sino a los que incurrieron en ta

manos desmanes. Habrá podido decirse (tonta y estérilmente, si con eso se pretendía restarle autoridad) que el Ateneo se cambiaba en club republicano; pero lo que nadie ha dicho ni podría demostrarlo, aunque lo dijese, es que los hechos allí denunciados ante la opinión sean falsos.

El gran suceso de aquellas conferencias y debates del Ateneo probó que existía un estado de espíritu en lo mejor del país, consistente en violenta irritación por los desafueros padecidos y un fuerte anhelo de que se hiciese en los culpables un escarmiento justo. Pero el resultado de unas conferencias y de unos debates, que forzosamente no pueden perder en el Ateneo su corte académico, no podría pasar de ilustrar el juicio de los oyentes, robustecer su convicción y proveerles de armas polémicas, sin otro efecto positivo en la vida pública. No existía, ni existe aún, el órgano adecuado para recoger eficazmente aquel estado de espíritu; no había tampoco (¿la hay ahora?) una Prensa libre que pudiera difundir entre el gran público las verdades incontrovertibles a que el Ateneo servía de resonador. El esfuerzo realizado, venciendo incluso la resistencia del Gobierno, podía perderse tan pronto como se apagaran los últimos aplausos. De esta manera, cuando en el mes de junio recibí el honor de ser elevado a la Presidencia del Ateneo, me preocupé de dar mayor duración y eficacia a lo que se venía haciendo en aquella casa. Inmediatamente propuse a la Junta general de socios una norma de conducta, para que el Ateneo diese un ejemplo proporcionado a su autoridad. Propuse que el Ateneo reclamase ante los Tribunales de justicia la reparación legal de los daños re

01056

cibidos durante la Dictadura en sus intereses sociales propios; y que tomase en sus manos la causa de las responsabilidades, creando una Comisión para reunir y organizar los datos justificativos de un dictamen acusatorio. Ambas propuestas se aprobaron, y los acuerdos respectivos están en vías de cumplirse, pero sólo del segundo he de hacer aquí particular esclarecimiento.

El Ateneo eligió una Comisión de 21 miembros, socios todos de la casa, en la cual figuran, con algunos individuos de la fenecida Comisión parlamentaria de responsabilidades (tales como Besteiro y Prieto), otros políticos muy señalados (Ossorio y Gallardo, Alcalá Zamora, Domingo), y cierto número de juristas, ingenieros y personas entendidas en economía y hacienda. Constituida sin pérdida de tiempo, la Comisión se dividió en Secciones, encargándose cada una del examen especial de las responsabilidades de la Dictadura en un orden de materias: administración de justicia, enseñanza pública, ejército, obras públicas, derechos individuales, administración municipal, hacienda, etc., etc. Se abrió una información pública por escrito, que ha terminado el día 1º de octubre. La Secretaría de la Comisión ha recibido centenares de documentos, que, ya extractados y clasificados, van a someterse al estudio de las Secciones.

En todo este tiempo, el Ateneo ha dado otro paso importante en la cuestión de las responsabilidades. Aconsejado por la Comisión, se ha mostrado parte, ejerciendo la acción popular, en el proceso que se instruye por supuesto delito de cohecho con motivo de la concesión del ferrocarril Ontaneda Calatayud. Este asunto es muy escandaloso, pero no seguramente tan grave,

01057

por las consecuencias que traerá en la economía y en la independencia nacionales, como la concesión del monopolio telefónico. De todos modos, la presencia del Ateneo en la causa del Ontane da Calatayud prestará al sumario un sesgo, y a lo que resulte del sumario, un valor que acaso no tendrían sin nuestro concur so.

Este es uno de los caminos que el Ateneo señala con su acción en el gran debate nacional de las responsabilidades. No es el único, ni, a juicio mío, el más importante. La Comisión, examinados en sus Secciones los casos particulares que se le se nal en, emitirá dictámenes sobre las transgresiones legales pro ba da s y dirá los medios conducentes a repararlos, cuando la reparación sea posible, y al castigo de los culpables en toda even tu al idad. Así formada la historia interna de la Dictadura, de una fuerza probatoria incontrastable, las conclusiones de la Co mi si ón se publicarán, para hacer de ellas el empleo de orden po lí tico y de orden procesal que su contenido determine. Pero, ade m ás, la Comisión en pleno, con vista de los datos criticados en las Secciones, examinará el conjunto del problema, y sobre la ba se de una propuesta que la Sección especial política formule, elevará al Ateneo, y por su conducto a toda la nación, un fallo, una resultante, la "moraleja" de aquella historia, deducida del encadenamiento de las acciones de los hombres que servían al ré gi men dictatorial y la intracción primera en que se origina. Es te fallo será, en la obra de la Comisión, lo más provechoso para la sufrida clase de aspirantes a la ciudadanía en que nos con ta mos todos los españoles.

01058

REVOLUCION Y REPUBLICA

(La Tierra, 2-4-31).

Desde el 15 de diciembre en España está virtualmente instaurada la república -dice el ilustre presidente del Ateneo.

Un compañero nuestro ha recabado en Pau de don Manuel Azaña unas cuartillas que expresen el pensamiento del ilustre hombre público, firmante del manifiesto revolucionario de diciembre y miembro del Gobierno provisional de la República, sobre el momento político actual y sobre el futuro.

He aquí las briosas cuartillas del señor Azaña, acerca de cuya importancia llamamos la atención de nuestros lectores:

"Hace por ahora un año, cuando, caída la Dictadura de Primo de Rivera, pudo iniciarse la propaganda pública, decíamos que la situación de la Monarquía española se encerraba en esta disyuntiva: o dictadura o revolución. Esto es verdad desde 1923, y ya no puede dejar de serlo. Los hechos lo demuestran. Sería una ilusión dañosa suponer que el régimen se derrumbará sólo, al peso de sus propias culpas. No. El régimen actual no es más podrido que el de Isabel II o el de Fernando VII. Y el régimen continuará si nosotros no lo derribásemos.

La Monarquía caerá por el esfuerzo revolucionario , que trae su origen del pacto llamado de San Sebastián, no para "afirmar" la República como un ideal ni para reclutar electores en víspera de la renovación de Ayuntamientos, sino para implan-

tar el nuevo régimen a fuerza de puños. Esta es la realidad actual. Subsisten los motivos que determinaron la coalición pactada el 17 de agosto último, y se mantiene en todos sus fines, propósitos y medios, como se puntualizan en la proclama lanzada el 15 de diciembre por el Gobierno provisional de la República. Nuestro programa -revolución y República- se dirige a transformar radicalmente el Estado español, no tan sólo a variar la forma de Gobierno ni a sustituir el régimen despótico y policiaco por una oligarquía parlamentaria sin corona. Esto sería ya mucho, reconozcámolo, dada la historia de la dinastía; pero no es bastante para estimar consumada una revolución.

El movimiento revolucionario necesita conquistar el Poder e instalar la República como condición inexcusable de su obra futura. La República será el medio o instrumento de la transformación del Estado. La obra reestructora y orgánica de la revolución -después de consumir cierto número de "destrucciones" que no puedan repararse jamás- traducirá en leyes la voluntad libre de la mayoría del país. Esta labor es propia de las Cortes constituyentes. Pero la voluntad de la nación no puede expresarse libremente, ni, por tanto, cabe pensar en unas Cortes constituyentes más que después de proclamada la República, porque sólo este régimen, traído revolucionariamente, puede destruir las formidables ligaduras, legales y extralegales, que hoy oprimen a los ciudadanos, futuros electores, de las cuales ligaduras y opresión la Monarquía es el resultado, la representación y el baluarte.

La situación es, para los republicanos, victoriosa.

Desde diciembre, la revolución está en marcha. Nadie podrá atajarla. Desde diciembre está virtualmente proclamada la República en España. Desde el 15 de diciembre hay en España un Gobierno provisional republicano, que la voluntad popular aceptó y revistió de su confianza el arrojarse a la revolución respondiendo a nuestra voz. El reconocimiento oficial de ese Gobierno quedó hecho cuando un político, con poderes de la Corona, fue a la cárcel a ofrecer la paz, dando en prenda carteras ministeriales. Pero la revolución no puede pactar ni siquiera un armisticio, con aquello mismo que se propone destruir. A ningún Gobierno que reciba poderes de la Corona, aunque fuese de una Corona mediatizada o desposeída (hipótesis constitucional), podremos prestar no ya colaboración, pero ni apoyo o simpatía, mientras tal Gobierno no se revele republicano, mientras no se disponga públicamente a realizar lo necesario para dar forma legal a la República. Es innegable el derecho de opinar que la República puede establecerse por vías legales, sin violencia. Respeto una opinión, que me parece errónea. Si un Gobierno futuro la hiciese suya y pretendiera ponerla a prueba, necesitaría, para contar con nuestra simpática expectación, que su compromiso con la República fuese explícito y terminante, de ninguna manera tácito o sobreentendido, pendiente de un problemático resultado del sufragio, que en las condiciones actuales, o en las que serían capaces de crear los gobernantes que no se atreven a declarar sus convicciones, no pasaría de ser una ficción más."

Manuel AZAÑA

Pau, 27 de marzo de 1931.

2. INTERVENCIONES EN CORTES

SOBRE EL CUERPO DE SUBOFICIALES

(DS, nº 84, p. 30, 2-12-31; palabras pronunciadas tras la inter
vención recogida en las OC, II p. 85).

El Sr. Presidente del Gobierno y Ministro de la Guerra
(Azaña): Dos palabras para responder a una observación del Sr.
Ortega y Gasset.

En este proyecto no puede consignarse de una manera expresa lo que S.S. pide, porque éste no es un proyecto de orga
nización de las Academias militares ni una convocatoria para in
greso en esas Academias: este proyecto se refiere simplemente a la estructura del Cuerpo de suboficiales y sólo hay que con-
signar en él, por tanto, el derecho de éstos a ingresar en las Academias. Esto tiene su señoría que conjugarlo, primero con una ley votada por las Cortes en 16 de Septiembre, en la cual se di
ce que de las vacantes para cuya provisión se convoque a ingre
so en las Academias militares, la mayor parte será cubierta por las clases de tropa, y después con el proyecto futuro de organi
zación de las Academias, en el cual tendrá el Ministro de la Gue
rra que venir a decir a las Cortes: "estas son las Academias, es
tas son las plazas y este es el número de los que pueden ingre
sar de una procedencia y de otra". Pero decir aquí los que van a ingresar en las Academias, que todavía no están organizadas, para el ingreso en las cuales no hay que hacer convocatoria es
te año porque se ha anulado la anterior, me parece ajeno al pro
yecto y completamente prematuro y extemporáneo. El derecho, no obstante, se consagra aquí, y el principio está votado por las Cortes en cuanto dijeron en su día, a propuesta del Ministro ,

que la mayoría de los ingresantes en las Academias había de ser procedente de las clases de tropa. Esto es lo que he de contestar a esas observaciones del Sr. Ortega y Gasset.

En cuanto a los haberes, S.S. padece un ligero error, porque el haber de los sargentos depende actualmente de los años de servicio y de los reenganches, y aquí no se quita ni se pone nada: a lo que queda reducida la petición de S.S. es a que se aumente el sueldo de las clases de tropa; muy bien, pero eso no tiene nada que ver con el proyecto, puesto que, con arreglo a lo que en él se dispone, continúan como estaban: cuando tienen tantos años de servicio, cobran tanto; cuando tienen menos, cobran menos, y cuando tienen más, perciben más cantidad. Aquí no se hace más que decir que continuarán como están; no se les perjudica absolutamente en nada.

Esto es lo que tenía que oponer a las observaciones de S.S. en lo que tienen de fundamentales.

Ahora yo me permito insistir en la urgencia de la votación del proyecto, adversa o favorable: el proyecto está publicado en el Diario de Sesiones hace muchos días, dictaminado por la Comisión desde la semana anterior, traído a discusión ayer, aplazado a petición de un Sr. Diputado; estamos hablando del proyecto unas cuantas horas y no he visto surgir por parte alguna una observación distinta a las formuladas por S.S., señor Ortega y Gasset; por mucha confianza que se tenga en el reposo de la noche, me permito suponer que a nadie se le van a ocurrir de aquí a mañana ideas que no hayan sido vertidas en

01064

el debate. No quiero, en modo alguno, que se aplique la guillotina al proyecto, pero sí que no se pierda el tiempo mediante aplazamientos que estimo innecesarios y que contradicen la declaración de urgencia que el Gobierno ha hecho ante las Cortes y en la cual el Ministro que os habla vuelve a insistir.

SOBRE LA SITUACION DE LOS FUNCIONARIOS

Palabras pronunciadas durante la discusión del presupuesto del ministerio de Gobernación de 1932.

(DS, n^a 136, p. 20, 16-3-32).

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Señores Diputados, se me permitirá que diga unas cuantas palabras sobre esta cuestión, tomándola en su aspecto general y no en lo que se refiere concretamente al presupuesto del Ministerio de la Gobernación, que ya ha sido brillantemente defendido por el Sr. Ministro y por el señor director general de Administración. Y más que nada me ha decidido a pedir la palabra, a intervenir brevemente en este asunto, el oírle hablar al Sr. Guerra del Río de unos supuestos motivos de la actitud del Gobierno que verdaderamente me desconciertan, Sr. Guerra del Río. Su señoría habla de amenazas. Es la primera vez que yo oigo pronunciar esta palabra - acerca de este asunto, la primera vez, y yo le hubiera agradecido mucho a S.S. que, con la franqueza que debe presidir en las deliberaciones del Parlamento, no se hubiese limitado a preguntar si hay o no tales amenazas, sino que hubiese dicho con toda claridad en qué consisten las amenazas de que ha oído hablar S.S. (El Sr. Guerra del Río: Y ha oído toda la Comisión de presupuestos, que yo creía le había explicado a S.S.) Es la primera vez que oigo hablar de semejante asunto. (El señor Vergara: Pido la palabra, porque no hay tales amenazas.- El Sr. Guerra del Río: Luego lo voy a explicar yo.- Rumores).

Debo decir lo siguiente respecto a esta cuestión de

los funcionarios, que es lo que importa. Al poco tiempo de instalarse la República, en algunos Ministerios se introdujeron reformas de carácter orgánico o reformas que afectaban exclusivamente a las dotaciones del personal. Estas reformas fueron realizadas en dos, tres o cuatro Ministerios, no recuerdo ahora en cuáles. Produjeron, como era natural, mejoras en la situación económica de los funcionarios con el consiguiente aumento de gastos en el Presupuesto que la República tendría que elaborar; pero estas reformas, estas mejoras y estos aumentos, es cosa manifiesta que no respondieron, ni a un plan general de reforma de la Administración pública, ni a una equiparación equitativa de la situación de los funcionarios en unos Ministerios con respecto de los otros, y cuando se produjeron estos aumentos y estas reformas, era natural que en los demás Departamentos ministeriales, en la mayoría de ellos, los funcionarios que no habían sido afectados por reformas equivalentes, pidiesen otras reformas aplicables a ellos que les pusiesen en una situación aproximadamente igual. Cuando el Gobierno se empezó a preocupar -el Gobierno anterior, no éste- de la confección del Presupuesto y de poner en orden, entre otras cosas, la reforma administrativa, se dictó el decreto de 28 de Octubre, decretos acordados en Consejo de Ministros, no por este Gobierno, sino también por el anterior, y este decreto, y sobre todo el segundo que lo completa y amplía, dice terminantemente que la reforma que allí se decreta sobre excedencias, jubilaciones, reformas de sueldo, etc., habría de tener su aplicación en los primeros Presupuestos que formase la República. Y el Gobierno se ha encontrado con esta situación: o aplicábamos a todos los Departamentos del Estado,

no sólo a los Ministerios, sino a otra porción de organismos que también dependen de la Administración central, las mismas reformas, el mismo criterio de retribución y de plantillas que se había aplicado un poco improvisadamente, en ciertos Ministerios, o había que tratar a todos los funcionarios por igual. Hacer lo primero supone un aumento de tal consideración en los gastos del Estado, que la Hacienda no lo podría soportar. Y no hay otra razón, como tampoco hay ninguna razón de equidad ni de capacidad ni de otro género que autorice o aconseje que se haga una reforma de plantillas y una mejora de sueldos, por ejemplo, en el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes -no sé si es éste uno de los favorecidos- y no se haga en Gobernación, en Justicia o en Trabajo. No hay ninguna razón. Y como no es posible materialmente, porque el Tesoro no lo soportaría ni el Presupuesto lo puede soportar este año, y se han hecho en los Presupuestos cercenamientos dolorosísimos para otras clases de personal y servicios del Estado, el Gobierno ha tomado la resolución de dejar a todos como estaban cuando vino la República, con la esperanza de que el año que viene, en el próximo Presupuesto, cuando sea, cuando las Cortes lo acuerden, se pueda hacer una reforma general de las plantillas, de los sueldos y de la organización administrativa.

Este es todo el secreto y no hay otra cosa; imposibilidad de tratar a los funcionarios de todos los Departamentos en la forma que fueron reorganizados en determinados Ministerios, y no siendo esto posible, no siendo equitativo que sufran trato desigual, se ha acordado ponerlos a todos en la misma si.

tuación que estaban el 14 de Abril, y en adelante se verá lo que se puede hacer por ellos. Ese es el secreto, el misterio, y no hay otra cosa que decir.

Ya sé que hay esas leyes del Parlamento que ratificaron esas reformas; pero el Gobierno no pretende violar esas leyes, sino que lo que hace el Gobierno es decir a las Cortes: es to pasa, esta es la situación; aquellas leyes que hemos votado nosotros -también yo, como Diputado- no se pueden cumplir, no hay margen presupuestario para cumplirlas, y el Gobierno ruega al Parlamento y a la mayoría, que en la ley de Presupuestos esas leyes queden derogadas. No hay otra cosa, ni imponemos nada a la mayoría ni a la Comisión, a no ser que se quiera emplear vo cablos un poco estrepitosos para desfigurar el juego normal del régimen parlamentario, que es decir el Gobierno a los grupos que le mantienen en el Poder: este es nuestro criterio; si lo aceptáis, si estáis conformes, se lleva a la ley. No creo que esto sea una imposición, pero entonces de imposiciones vivimos todos.

Eso de las amenazas, Sr. Guerra del Río, yo sigo sin saber lo que es. Por mi parte no sé de esta cuestión más que lo que se ha tratado en Consejo de Ministros. Si el Sr. Guerra del Río o algún otro individuo de la Comisión de presupuestos cree que la resolución de este asunto se ha demorado demasiado, no será porque los acuerdos del Consejo de Ministros no sean anti guos, firmes y valederos. El procedimiento que se sigue con es tas cosas, Sr. Guerra del Río, es bien natural. El Gobierno , después de dictarse el decreto de 28 de Octubre, y cuando se

formalizaron los Presupuestos que las Cortes van aprobando (los compañeros del Gobierno me rectificarán si me equivoco en las fechas), tomó este acuerdo de rogar a las Cortes que aprobasen el Presupuesto quitando las mejoras introducidas en diversos Departamentos ministeriales. Este acuerdo lo tomó allá por el mes de Diciembre; con este criterio se elaboraron los primeros Presupuestos, que hizo ya el Sr. Carner, y este acuerdo se comunicó a la Comisión. Pero nosotros no tenemos la culpa, ni la tiene nadie, ni es culpa, de que las personas interesadas o afectadas por esta disposición del Gobierno y por este acuerdo hayan ido a la Comisión de presupuestos, a los partidos, a los Diputados a hacer valer sus intereses, legítimos y respetables, ¡quién lo va a negar!, y cada gestión que se ha producido en este sentido ha traído como consecuencia una nueva consulta al Gobierno, y nos hemos encontrado ya tres o cuatro veces en el Consejo de Ministros, llevadas por los propios titulares de los Departamentos, por invitaciones de los respectivos Ministerios o de la Comisión de presupuestos, con preguntas como estas: "¿Qué se hace? Se vuelve a plantear esta cuestión. Hay reclamaciones, indicaciones en este sentido". Y el Gobierno, una y otra vez, hasta cuatro, ha ratificado el acuerdo que tomó en el mes de Diciembre. Si ahora se quiere decir que el Gobierno no ha tomado esta resolución hasta ayer, será que, como el tiempo apremia y es ahora cuando hay que decidirlo, lo de ayer es lo que vale; pero el acuerdo del Gobierno está tomado desde Diciembre y ratificado en cuatro Consejos de Ministros sucesivos.

En cuanto a que se aplique o no la reforma decretada por el Gobierno en Octubre me parece que la cuestión es comple

tamente baladí. La reforma que se ha hecho ahora en Gobernación es la aplicación de aquel decreto, como se ha hecho en la Presidencia, y así se explicó al discutirse su presupuesto. No se ha ce una excepción en el presupuesto en aquel decreto, que está en vigor y se va a ir aplicando. Se reducen las plantillas en un tanto por ciento, que el Ministro o el miembro de la Comisión que habló ha dicho cuál es, y que no recuerdo, y en virtud de la reducción de plantillas se aumentan las horas de trabajo de los funcionarios, y a los funcionarios que trabajen más horas, siete diarias, treinta y tantas o cuarenta y tantas semanales, como dispone el decreto, se les dará mayor retribución. Este es todo el secreto. Aumento de plantillas no hay, sino que se reducen, y como consecuencia de esta reducción, con arreglo al decreto, al que trabaje más se le paga más. Este es el criterio que adoptó el Gobierno anterior, que éste ha mantenido, y que al venir el presupuesto se aplica. Este es todo el secreto, que no tiene ningún misterio.

¿Qué sería mejor hacerlo todo a un tiempo? Es posible. Pero hay servicios demasiado complicados; hay los servicios de Hacienda, que tienen una estructura especial; hay servicios nuevos, que se crean ahora en otros departamentos. Pero, ¿quién ha dicho ni supuesto que el Gobierno ha variado de criterio sobre el particular? No ha variado, Sr. Guerra del Río; y lo primero que se va a hacer, en cuanto esté votado el presupuesto, es tratar la cuestión en conjunto otra vez, porque estas cosas difíciles y complicadas no es posible tener la pretensión de que salgan perfectas al primer intento: hay que barajar muchos intere-

ses, muchísimas cifras, contemplar los servicios de una cantidad extraordinaria de personal y contemplar el interés del Estado ; y todo esto requiere una obra larga, difícil, de posible riesgo de error, de seguro riesgo de error; requiere una prudencia de gobernante, de buen administrador, incluso de retoques y rectificaciones; de dar un día lo que no se pudo conceder el anterior, etc.; en fin, que hay que proceder como se gobiernan los asuntos importantes de la vida, no con un criterio político, sino con un criterio de eficacia, de buena administración, de defensa de los intereses públicos, que es lo que el Gobierno tiene que hacer en este particular, como en todos los que están sometidos a su resolución.

Habla el Sr. Guerra del Río de los aumentos anteriores al advenimiento de la República. Señor Guerra del Río, no quiera S.S. que argumente "ad absurdum" diciendo: "Bueno, que se supriman también", que esa sería la consecuencia lógica, absurda, a que nos llevaría la argumentación de su señoría; pero el Gobierno no tiene por qué hacer semejante atrocidad, ni S.S. la propone. Lo que hace el Gobierno es rectificar en este presupuesto, sin comprometer el porvenir, lo que el Gobierno anterior hizo con el voto de estas Cortes, porque si nos ponemos ahora a - desenredar la madeja de todas las modificaciones que hizo la Dictadura desde el año 23 en los Cuerpos de Administración cierto que la reforma de las plantillas de Hacienda sea lo único que hizo la Dictadura con los funcionarios, pues desde el año 23 hasta el año 30 la Dictadura, alrededor de los funcionarios, se entretuvo en dar rienda suelta a su fantasía y cabalmente

una de las obsesiones y preocupaciones que tuvo fue la de no dejar en paz a los funcionarios un solo minuto, empezando por los porteros y acabando por los directores generales. Todos recordaréis la ensalada que armó la Dictadura con los porteros; se entretuvo, con su genio arbitrista, en traerlos, llevarlos y dejarlos, al fin, en la miseria, y si ahora vamos a retroceder en ese camino, no acabaremos nunca. Entre otras cosas, la Dictadura hizo una reforma que todos los funcionarios consideraron muy buena, que fue rebajar los tipos de descuento y se hicieron reformas de plantillas, no en Hacienda solamente, sino en una porción de Ministerios, yo sé de tres o cuatro, en los que se hicieron. ¿Vamos nosotros a deshacer esto? A mí me parece absurdo, ni lo propone S.S. (El Sr. Guerra del Río: No me he referido más que a lo que el Sr. Ministro de Justicia ha dicho antes: que ha estaba deshecho lo de Agricultura). ¿Cuál de Agricultura? (El Sr. Guerra del Río: El Sr. Ministro de Justicia dijo que como en Agricultura no se hizo la rebaja antes, que se haría ahora. Eso ha dicho, y está en las cuartillas).

No es eso. Se habrán entendido mal S.S. y el señor Ministro de Justicia. No es eso. (Risas). Permítame el Sr. Guerra del Río. Lo que pasó con el Ministerio de Agricultura (y aquí está resultando que yo estoy explicando unos presupuestos que, la verdad, no conozco a fondo, pero, en fin, es mi obligación saber de todo) es lo siguiente: En el mes de Julio o de Agosto, no sé cuando, se suprimió el Ministerio de Economía, se hicieron unas reformas de plantillas y de sueldos, parecidas a las que se hicieron en otros departamentos. (El Sr. Gue

rra del Río: ¡Ahí está el autor!, señalando al Sr. Nicoláu). Mi ilustre y querido amigo el Sr. Nicoláu dirá si es exacto. (El señor Nicoláu: Exacto.- El Sr. Guerra del Río: Están muy bien hechas). Perfectamente, como todo lo que hace el Sr. Nicoláu. (Risas).

Cuando se suprimió el Ministerio de Economía, fíjese el Sr. Guerra del Río en la diferencia, pasaron ciertos servicios suyos al Ministerio de Agricultura; el personal que quedó en el Ministerio de Fomento al dividirse en dos ha sufrido las consecuencias de este criterio de Gobierno de no respetar las mejoras introducidas por los decretos anteriores, pero al personal que pasó al de Agricultura, procedente de estas reformas de Economía, y creo que algún otro personal de Fomento, por una inadvertencia, o por lo que fuese, se le dejó como venía de Economía y de Obras Públicas, y ahora, cuando se ha caído en la cuenta de que no se les había tratado con el mismo criterio que a los demás, se ha subsanado esa diferencia para que todos queden iguales. (El señor Guerra del Río: Pues nos hemos divertido). No será divertido, pero es lo justo. Algún detalle que yo no sepa se lo podrá dar el Sr. Ministro de Obras Públicas, si pertenece a su Departamento, o el de Agricultura. Pero este es el criterio general que se ha seguido y la razón de lo que se ha hecho ahora en el Ministerio de Agricultura.

Lo que hay que hacer en esta cuestión, que no puede ser en ningún momento objeto de apasionamiento político ni de diferencias políticas, sino una cosa de interés general del Estado, de buen servicio y de buena administración, es, una vez

que estén votados los presupuestos, volver a reconsiderar el problema general de los funcionarios. Yo tengo constituida en la Presidencia una Comisión interministerial, formada por delegados de todos los Ministerios, que ha hecho un trabajo que nos ha de servir para traer en su día a las Cortes, cuando el Gobierno lo considere, un programa general de reorganización de servicios y dotación de los mismos, partiendo siempre de una base indeclinable e insustituible, que es el que hay que reducir el personal en la mayor parte de los servicios del Estado. Esta es una cosa cierta, y nadie que tenga experiencia de la Administración pública la podrá negar. Se podrá hacer una excepción en tales o cuales servicios, como los de Hacienda, que necesitan extender sus organismos mucho más allá de lo que ahora lo están. Ahora los organismos de la Hacienda pública española se acaban en la provincia, lo que quiere decir que la Hacienda española no tiene organismos ciertos que lleguen hasta el contribuyente, y quizá esto merezca una atención especial, como también algunos otros Cuerpos especiales, por su tecnicismo o por lo que fuere; pero la verdad es que en la Administración pública española, sobre todo en los servicios de la Administración central, hay un exceso de personal que está mal pagado y que la base del contrato tácito entre el Estado y su personal consiste en decir: te pagamos poco a cambio de exigirte poco. Esta es la realidad, por dolorosa que sea, y a esto es a lo que hay que poner inmediato remedio. Que esto sea por el procedimiento que indicaba antes mi eminente amigo el Sr. Pittaluga o por otro cualquiera, yo en eso no me meto ahora; que el Estado necesite poner a su servicio hasta donde sea posible, resistiendo la competencia de las

Empresas particulares o de las profesiones libres, y disponer, si es posible, de los mejores médicos, de los mejores ingenieros, de los mejores abogados, etc., es también una verdad, si queremos que el Estado español algún día esté mejor servido que en tiempos de Larra; pero para esto se necesita una cantidad enorme de dinero, una cantidad de energía y una sagacidad poco comunes para encontrar el método de selección del personal y una gran destreza en la Administración para saber organizar los servicios, atreviéndose a dejar los carriles antiguos de la burocracia española, y haciendo otras cosas que no se parezcan na da a lo actual, ni en sí mismas ni en el modo de hacerlas. Para esto hace falta una gran energía, un gran valor y la colaboración de las Cortes, si es que están resueltas a renovar la Administración del Estado español. Esta es una realidad.

Se ha hablado aquí hasta de los gobernadores. ¡Figúrense los Sres. Diputados si es difícil encontrar un gobernador! Creo recordar que Don Quijote dice que para ser gobernador hace falta saber, por lo menos, gramática. Esto era en el siglo XVI, y para gobernar la ínsula Barataria. ¡Figuraos lo que hará falta ahora para ser gobernador de un Madrid, de un Barcelona, de un Sevilla! Hace falta saber muchas cosas. Cuando se habla aquí del Cuerpo de gobernadores yo me echo a temblar. En esto me permito disentir de la opinión de mi querido amigo el Ministro de la Gobernación (supongo que no será para él una cuestión dogmática), porque en un gobernador hay el jefe administrativo y el gobernador, que no tiene nada que ver con lo otro. Hablarme a mí de un Cuerpo de gobernadores es como si me hablasen de un Cuerpo

01076

de Ministros elegido por antigüedad y ascendiendo por escalafón riguroso. Mientras no se separe la función de gobierno, que le corresponde al jefe de una provincia, de la función técnica, es trictamente administrativa, que consiste en presidir Juntas y en resolver cuestiones de administración, hablar de un Cuerpo de gobernadores es una fantasía. (El Sr. Guerra del Río: Yo no he hablado de eso). Señor Guerra del Río, no estoy refutando a S.S.; estoy hablando en general. (El Sr. Salazar Alonso: Está contestando al Sr. Ministro de la Gobernación). (Risas). Exac-to; estoy contestando al Ministro de la Gobernación (Risas), de quien tengo la elegancia de disentir en las cosas que no nos afectan políticamente y de disentir también de mi querido amigo el Sr. Pittaluga, a quien iba dirigida personalmente mi respuesta.

Creo que estos son, Sres. Diputados, los puntos generales que ha tratado el Sr. Guerra del Río en la cuestión de los funcionarios y que no se refieren de una manera concreta al presupuesto de Gobernación, en el cual ni entro ni salgo.

En cuanto al problema de los funcionarios, este es el criterio del Gobierno, y yo tengo convenido con el Sr. Ministro de Hacienda que así que estén votados los Presupuestos se ha de reconsiderar el problema en su conjunto, para encarrilarlo con conocimiento de la realidad y sabiendo adónde vamos, no sembrando las mercedes un poco a ciegas y por pura simpatía con el personal, que es digno de toda ella, y además, yo no puedo ser sospechoso, porque también he sido funcionario; sabiendo, digo, adónde vamos para llegar a una reforma fundada sobre la capaci

01077

dad, sobre la competencia, sobre la recompensa justa, del traba
jo, y, por encima de todo, sobre el rendimiento de cada funcio-
nario y su responsabilidad, porque ya va siendo hora de que no
sean sólo los que ejercen cargos políticos, sometidos siempre
a la crítica de los partidos y de la oposición, los que tengan
esta responsabilidad inmediata: es preciso que la tengan tam-
bién los que están cobijados en los Departamentos de la Adminis-
tración, lejos del aire libre de la calle y de las críticas del
público y de las Cortes. (Aplausos).

RUMORES SOBRE ACTIVIDADES SUBVERSIVAS EN EL EJERCITO

(DS, n^o 188, p. 5, 23-6-32).

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Señores Diputados, con mucho gusto respondo a las interesantes preguntas del Sr. Valle, que me proporciona ocasión de decir ante las Cortes algunas verdades palmarias, de sentido común, que no es tá de más que la opinión pública no olvide. En efecto, estos días pasados, estas semanas pasadas, han circulado, como decía el Sr. Valle, de boca en boca, rumores fantásticos, suponiendo que la República estaba amenazada por este o el otro peligro, implicándose en la confección de estos rumores y en la participación de estos peligros a estas o a las otras personas, más o menos significadas en el Ejército. Todos estos rumores carecen en absoluto de fundamento. Ningún peligro de este género ha existido nunca en la República ni existe en estos instantes. Las investigaciones y los descubrimientos que la policía ha podido llegar a hacer demuestran palpablemente, en primer lugar, que estos sucesos sólo son graves para aquellos que imprudentemente los incoan, en modo alguno para la República, y además, confirmando la presunción y la convicción del Gobierno, han venido a probar que en modo alguno elementos que tengan a su cargo la defensa del país o una responsabilidad especial por su posición están complicados en nada, ni colectiva ni personalmente.

Yo tengo dicho aquí muchas veces, Sres. Diputados, y aprovecho la ocasión para repetirlo, que cada vez que un Diputado o un ciudadano español, en uso de su perfecto derecho,

quiere emitir una opinión sobre la política militar del Gobierno o sobre la situación del Ejército, a quien debe interpelar y a quien debe nombrar y citar para que comparezca ante la opinión pública a dar las explicaciones convenientes, es al Ministro de la Guerra, que es, constitucionalmente, el responsable de todo lo que se hace y pasa en el Ejército, y es una ligereza, indudablemente sugerida o inspirada muchas veces por la mejor intención, traer y llevar nombres o colectividades, prescindiendo de la responsabilidad constitucional de estas colectividades. Nada hay más temible, señores Diputados, y la experiencia de cualquier gobernante lo acredita, que los excesos de celo. Bien es tá el celo en el cumplimiento del deber, pero el exceso de celo suele a veces crear aquellos mismos peligros que de por sí no existen.

Me complazco, pues, en reiterar ante las Cortes la afirmación rotunda de que la actitud de las instituciones armadas de la República es perfecta, de lealtad, de adhesión al régimen, de cumplimiento estricto del deber y de entusiasmo profesional, resueltos todos a aprovechar los esfuerzos que el país hace para poner sus Institutos armados en las condiciones de eficiencia que la Patria necesita. Esto dicho en general, y de un modo especial y particular, y remachando la afirmación del Gobierno y del Ministro de la Guerra, en este caso concre to digo que la actitud, la corrección de los generales con man do y de todas las autoridades militares que tienen la confianza del Gobierno es irreprochable, y no es sólo irreprochable, sino admirable, porque habiéndose el Ejército restituido, co-

mo era natural y lógico y constitucional, a sus funciones propias profesionales, todos los que tienen la confianza del Gobierno y desempeñan cargos en el Ejército, o todos los que por su categoría tienen en el Ejército una significación especial, cuentan con la absoluta confianza del Gobierno, y el Gobierno no tiene que hacer de ellos más que elogios. El estricto cumplimiento del deber profesional y la lealtad absoluta a las instituciones republicanas no ofrecen la menor sombra de duda, y el Gobierno, y el Ministro de la Guerra de una manera especial, lo hace constar así bajo su absoluta, personal y legal responsabilidad.

Yo rogaría a los Sres. Diputados que tuviesen todos más serenidad, y cuando estos rumores se forjan en las tertulias, o donde fuere, o en las covachas donde se engendran las armas para combatir a la República, cada vez que se tropiecen con una insinuación que pueda referirse al Ejército la rechacen en absoluto; y digo que con la misma confianza que podrían tener en la República deben juzgar los actos o los propósitos o la actuación del Ejército; exactamente igual. El Ejército está plenamente compenetrado con la institución política vigente en España, y debemos nosotros mismos, los republicanos, dar esta muestra de confianza y de seguridad en aquellos conciudadanos que, especialmente revestidos de una responsabilidad, tienen deberes más delicados que los de otro alguno.

Es una política funesta, es decir, no es política, es el acto más impolítico que se puede cometer, proferir palabras, hacer insinuaciones, circular rumores que pueden tender a socavar o menoscabar la autoridad de los jefes del Ejército; porque

además de no poder legal ni profesionalmente salir a su defensa personal ni colectiva, puesto que les está prohibido por la ley, y para eso está aquí el Ministro de la Guerra, además de eso, cuando estas campañas toman cierto cuerpo se socava la autoridad de los jefes del Ejército delante de sus subordinados, y quebrantar la disciplina del Ejército sería la mayor catástrofe que podría ocurrir en España.

Es, por tanto, en interés de la República, del propio Ejército y de la disciplina militar, por lo que yo exhorto a todos -después de reiterar una vez más la cabal adhesión de estos militares a la República, la absoluta confianza del Gobierno en ellos y su impecable corrección- y por lo que insisto en la necesidad de que se tenga pulcritud y cuidado cada vez que se trae y se lleva el nombre o los intereses del Ejército, y que se acuerden todos de que el único que puede responder por el Ejército es el Ministro de la Guerra, que para eso está en las Cortes. (Muy bien.- Aplausos).

VALOR DE LAS DECLARACIONES DE UNA COMISION PARLAMENTARIA

Palabras pronunciadas por Azaña en el curso de la discusión de una enmienda sobre la Reforma Agraria.

(DS, nº 222, p. 35, 2-9-32).

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Sin entrar en el fondo de la cuestión, que no es misión del Gobierno en este momento, me interesa hacer constar que las declaraciones que haga la Comisión de Reforma agraria acerca de la aceptación o no aceptación de una enmienda, no pueden influir en modo alguno en la interpretación y extensión que luego resulte de la Constitución y del Estatuto. No entro en el problema, que no creo sea de una máxima importancia; pero las facultades legislativas que tenga la Generalidad sobre este particular, como sobre cualquiera otro, resultarán del juego de la Constitución de la República con el Estatuto de Cataluña; de lo que allí resulte dependerán las facultades legislativas de la Generalidad en esta materia, como en todas las demás. Creo que no sería de buen procedimiento legislativo dejar constantes unas declaraciones de la Comisión de Reforma agraria como fuente de interpretación nada menos que de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. En este sentido quiero intercalar esta declaración del Gobierno, para que el día de mañana no nos veamos sujetos por el silencio respecto de unas declaraciones que podrán ser aceptables o no, pero que no se pueden dejar sentadas desde ahora como una fuente de tal interpretación.

URGENCIA DE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES

Contestación al Diputado Sr. Algora, el 17-11-32.

(DS, nº 260, p. 11).

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Señores Diputados, a mí me parece que toda la intervención del Sr. Algora, en apoyo de una proposición incidental, se hubiera podido simplificar grandemente, reduciendo S.S. su intervención a dirigir al Gobierno una sencilla pregunta respecto al estado de esta cuestión y, quizás, aunque nos hubiéramos privado del ameno discurso de S.S., y yo un poco de la vanidad de que S.S. me citase, hubiésemos resuelto el problema en pocas palabras, porque, en el fondo, lo que ha hecho el Sr. Algora es emplear un rato en hacer terribles esfuerzos para abrir una puerta que está abierta de par en par.

Recordemos los antecedentes de la cuestión. El proyecto de ley de Incompatibilidades, que ahora no está sobre la mesa, sino en la Comisión, es un proyecto del Gobierno, una iniciativa del Gobierno, anterior a todas aquellas cosas que pasaron o se dijeron dentro y fuera de las Cortes, y, sobre todo, dentro de las Cortes, en aquella sesión, de ingrata memoria, aunque fuese nocturna. Este proyecto de ley de Incompatibilidades lo concibió este Ministerio, apenas tomó posesión del Poder. Los compañeros lo recordarán; en una de las primeras reuniones del Gobierno, en el mes de Diciembre, se habló ya, por iniciativa de alguno de nosotros, de la necesidad política de traer a las Cortes un proyecto de ley de Incompatibilidades;

01084

se encargó a un miembro del Gobierno que hiciese el anteproyecto; se llevó a Consejo y fue aprobado, con estas o las otras modificaciones, y traído al Parlamento. He dicho aquí repetidas veces que el Gobierno, al tomar esta iniciativa, ha obedecido a móviles un poco más elevados y un poco más respetables que salir al paso a la maldedificencia y a las calumnias contra el Parlamento y que, si no hubiera habido otro motivo para traer un proyecto de ley de Incompatibilidades que las simplezas que se han estado diciendo acerca de si los Diputados tienen pocos o muchos destinos, el Gobierno no lo hubiera traído. Eso lo dije cuando pronuncié ese discurso que S.S. ha citado, y lo vuelvo a decir hoy, porque el móvil de un proyecto de esta importancia no puede ser una campana de tan baja estofa como la que se ha estado haciendo para desacreditar el Parlamento. Digo esto porque conviene recordar que el proyecto de que habla S.S. es iniciativa del Ministerio, forma parte de nuestro programa parlamentario y no está, ni mucho menos, abandonado, como al parecer se deduce de las palabras de S.S. El proyecto se puso a discusión en los primeros días de esta etapa parlamentaria; no se ha puesto antes -seguramente los Diputados no lo habrán olvidado- porque hemos tenido hasta el 9 de Septiembre gravísimos y difíciles problemas de orden legislativo que resolver, y aprovechando la relativa holgura del trabajo del Parlamento, al reanudarse las sesiones en Octubre se puso a discusión este proyecto, creo que el primer día de sesión o el segundo. Se puso a discusión, ¿qué? ¿El proyecto íntegro del Gobierno? No, señor, se puso a discusión un dictamen de la Comisión, en el que no sé si había algún voto particular, no lo recuerdo, pero no era ya

el proyecto del Gobierno.

Casi la unanimidad de la Cámara votó la totalidad de los artículos, menos uno: el 5^a , y no votó el art. 5^a porque el Gobierno rogó a las Cortes que no lo votasen. ¿Por qué? Porque al Gobierno le parecía poco el artículo. Podrá el señor Algora u otros Sres. Diputados opinar que no es propio de este proyecto de Incompatibilidades el art. 5^a , que se refiere a los funcionarios; nosotros opinamos que sí es propio y el proyecto de ley es un todo orgánico y es ahí, a nuestro juicio -aceptado por las Cortes- donde se debe establecer la incompatibilidad de los funcionarios. Lo del Estatuto de funcionarios es una cosa de mucho mayor volumen que se dirige a otras cosas, que va a definir derechos, a establecer deberes y a regular situaciones administrativas, etcétera, pero ahora es urgente también, por las razones que di en el discurso, que S.S. ha citado, establecer la incompatibilidad de los funcionarios, y como, a nuestro juicio, a juicio del Gobierno, el dictamen de la Comisión había sido un poco flexible, demasiado benévolo y se dirigía, más que a establecer incompatibilidades, a dar valor legal a una situación que no puede admitirse, rogó entonces el Gobierno al Parlamento que, después de votada la totalidad de la ley, es decir, la totalidad de los artículos, se retirase el proyecto, volviese a la Comisión y en la Comisión se buscara un texto nuevo para el art. 5^a que satisficiera los propósitos del Gobierno, que seguramente son también los de las Cortes.

Y ahora es cuando tiene lugar una culpa mía, exclusivamente personal, por la cual yo pido al Sr. Algora mil perdo-

nes, pero que el Sr. Algora sabrá dispensar por las razones que le voy a dar. La Comisión, que accedió al ruego del Gobierno de retirar el dictamen, para mejor estudio del art. 5^a , me ha citado a mí a comparecer ante ella para informar, recoger el punto de vista del Gobierno y llegar a un texto que pueda ser aceptado por la Comisión y por el Gobierno, y después traerlo al salón de sesiones. Y bien, señores Diputados, yo lo deploro, me declaro culpable; yo no he tenido tiempo absolutamente de ir a la Comisión. ¡Qué le voy a hacer! Si el Sr. Algora quiere que le traiga la nómina de mis ocupaciones de este mes, se la traeré y puede que se haga cargo, puesto que al fin es humano, de que un hombre puede no haber dispuesto de alguna hora para venir al Congreso y reunirse con la Comisión.

Y no hay otro secreto en el retraso del proyecto de ley de Incompatibilidades más que éste: que no he tenido absolutamente tiempo material de venir a informar ante la Comisión y encontrar el texto nuevo para el art. 5^a Esto ha pasado; pero que nadie se imagine, ni el Sr. Algora, ni ningún Sr. Diputado, ni ningún espanol, que el Gobierno ha abandonado el proyecto de ley de Incompatibilidades. Es una cosa que nosotros hemos traído aquí y que forma parte de nuestra política. Yo iré a la Comisión, procuraré poner en primer término, entre mis ocupaciones, el ir a la Comisión, informaré ante la Comisión, encontraremos el texto del art. 5^a -seguramente lo encontraremos; un poco esbozado está ya- , y una vez que esté hecho esto, se traerá el dictamen al Parlamento, y el Parlamento votará lo que bien le plazca.

Es todo lo que hay en el asunto, y no hay más, y yo rogaría al Sr. Algora y a los Sres. Diputados, que no den esta do parlamentario, es decir, si quieren dárselo, que se lo den; pero, en fin, no me parece oportuno dar estado parlamentario a murmuraciones o sospechas o a intenciones que se han formado al rededor del retraso en la votación de este proyecto, que no res ponden a ninguna realidad, ni a la voluntad del Parlamento, ni a la voluntad del Gobierno.

En cuanto a la proposición misma, Sr. Algora, he de decirle a S.S. dos cosas. Una ya se la ha dicho el Sr. Presiden te, con más autoridad que yo. No se puede proceder a votar la totalidad de los artículos ya aprobados por las Cortes, porque el proyecto está en la Comisión y es ella quien tiene que mandar su dictamen, con el artículo 5^a o sin el art. 5^a , a la Me sa, y que la Mesa lo ponga a votación. Esto es verdad, y no se puede interrumpir ni se puede violar la manera de funcionar el Parlamento.

Esto por una parte. Por otra, yo rogaría a su señoría que retirase la proposición, por innecesaria, después de las declaraciones que he hecho, y, además, por esta otra consideración de orden fundamental y que no se refiere sólo al proyecto de ley de Incompatibilidades, sino a todos los proyectos que están pen dientes de discusión y de votación y que sean iniciativa del Go bierno: que la manera de ordenar los debates parlamentarios y la manera de colocar en la atención del Parlamento los proyectos que se van a discutir, es de la incumbencia exclusiva del Ministerio. El Gobierno ruega a las Cortes y a la Mesa que pon

ga a discusión los proyectos que él trae, por el orden que el Gobierno estima procedente, bajo su responsabilidad y contando con el asenso de las Cortes. Si las Cortes no están conformes, darán un voto de censura al Ministerio; si están conformes, nos ayudarán a este desempeño de la función rectora de la obra legislativa, que corresponde de manera esencial al Gobierno.

De suerte que no hablo ya del proyecto de ley de Incompatibilidades, sino en general, sosteniendo una doctrina que ningún Gobierno, sea éste u otro, podrá abandonar, ni deberá abandonar, ni yo pediría a ningún Gobierno que la abandonase, que es ésta: que el Gobierno no puede traer los proyectos de ley a discusión de la Cámara cuanto se lo pida un cierto número de Diputados, sino cuando el Gobierno lo estime necesario, conveniente o útil. Y este proyecto de ley de Incompatibilidades vendrá a las Cortes, dictaminado por la Comisión, en cuanto tengamos hecho el texto del art. 5^a, y entonces los Sres. Diputados podrán pronunciarse sobre la ley de Incompatibilidades en su totalidad, con todas las aplicaciones que las Cortes estimaran convenientes o útiles, o bastantes, en la seguridad de que el Gobierno y su Presidente no se van a oponer en lo más mínimo a que las Cortes tomen las decisiones que estimen más pertinentes.

Creo que el Sr. Algora, tranquilizado con estas palabras mías, accederá al ruego que le hago de retirar la proposición, tomando en cuenta estas declaraciones que hago desde la Presidencia del Gobierno.

— — — — —

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Simplemente para decir dos cosas. Yo he rogado al Sr. Algora que retire la proposición para evitar al Parlamento una fatiga innecesaria, como sería la de una votación; si el señor Algora no la quiere retirar, yo pediré a las Cortes que rechacen la proposición. Esto en primer lugar, y en segundo término, me atengo estrictamente, palabra por palabra, a lo que he dicho respecto al destino y porvenir del proyecto de ley de Incompatibilidades, sin quitar ni añadir punto ni coma.

Por último, el Sr. Algora ha dicho que, si no ha venido el art. 5^a a la Cámara, o el proyecto de ley mismo, será por algo que él no sabe lo que es. Señor Algora, cuando no se sabe lo que se va a decir, lo mejor es callarse. Porque, ¿qué es lo que quiere decir S.S. con eso? ¿Me lo quiere aclarar S.S.? (El Sr. Algora: ¡Ah! Yo no sé.- Rumores en la mayoría). Quede, entonces, bien claro ... (El Sr. Algora: ¿Quiere S.S. que se lo diga claramente?) ¡Claro que sí! (El Sr. Algora: Pues porque de esa ley depende la disolución de las Cortes. Ya se lo he dicho a S.S. con toda claridad). No comprendo; eso es un embolismo de tal naturaleza, Sr. Algora, que renuncio a desentrañarlo. No sé cómo puede depender la disolución de las Cortes de que se vote este proyecto de ley. Es una cosa que no se me alcanza. (El Sr. Ayuso: Porque la mitad de la Cámara es incompatible). Y ¿qué más da? Pero, Sr. Ayuso, si a la Cámara no le gusta la ley de Incompatibilidades votará en contra, y si le gusta, como le ha gustado, votará en favor, según lo hizo; no creo que se pueden hacer suposiciones ante un hecho tan exacto y reciente como es que las

Cortes han votado la ley. Si no les gustase, hubiesen votado en contra; han votado en favor, luego les gusta. (El Sr. Ayuso: Pero falta la votación definitiva). Acabo de decir por qué y cómo, y me parece que después del descubrimiento que hemos hecho acerca de la proposición del Sr. Algora, que parecía enorme y fatídica y resulta que no hay nada en ella, me limito a pedir a las Cortes que si el Sr. Algora no accede a retirar la proposición, se rechace por indicaciones del Gobierno; bien entendido que el dictamen de la Comisión vendrá a la Cámara siguiendo los trámites reglamentarios y se discutirá cuando llegue el momento. (El Sr. Ayuso: El año que viene). Puede ser el año que viene o después de cinco años.

PRIORIDADES DE GOBIERNO

(DS, n^o 292, p. 35, 9-2-33).

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Señores Diputados, se nos había anunciado la presentación de esta proposición del señor Madariaga y otros Sres. Diputados, que se reduce a pedir a las Cortes una alteración del Orden del día. El Sr. Madariaga, como era natural, ha tocado dos cuestiones: una, esta cuestión de procedimiento parlamentario, de ordenación de trabajo parlamentario, mejor dicho, y otra, cuestión de fondo, que se refiere a la utilidad o inconvenientes de la ley de Términos municipales.

Yo no tengo que entrar en esta segunda parte de la argumentación del Sr. Madariaga. Cuando se discuta el dictamen de la Comisión será ocasión de que esto se examine a fondo. Debo decir, sin embargo, que el Sr. Ministro de Trabajo ha estado casi toda la tarde en la Cámara esperando a que esta proposición se tramitara, y el estado de salud del Sr. Ministro de Trabajo, que no es todo lo fuerte que sus buenos amigos desearíamos, le ha obligado a retirarse del Congreso. Pero esto es lo de menos, porque no se va ahora a discutir el fondo de la cuestión, sino el orden de los trabajos parlamentarios.

Nadie desconoce, Sr. Madariaga y Sres. Diputados, la importancia que pueda tener el problema que plantea la ley de Términos municipales, ni se puede decir al Gobierno que hace caso omiso de esta cuestión. Es posible que el criterio del Sr. Madariaga y el criterio de los que han votado la ley de Térmi-

nos municipales no coincidan; es posible que la ley de Términos municipales haya presentado en la práctica estos o los otros in convenientes; pero también es, no posible, sino certísimo, que la ley de Términos municipales ha venido a remediar una situación de carácter político y social, de la cual no estamos descontentos, a pesar de que no se pueda negar... (Varios Sres. Di putados interrumpen).

El Sr. Presidente: ¡Si no hace falta que sus señorías corroboren las palabras del Sr. Presidente del Consejo de Minis tros!

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Yo no ten go la pretensión de que en este particular, ni en ninguno, todas las opiniones coincidan con la nuestra; pero creo que es permitido exponer la que tengamos, sin necesidad de que nadie se altere.

He empezado por decir que esta ley, como todas las leyes, y sobre todo las que afectan a intereses económicos, a situaciones sociales, puede ofrecer en la práctica inconvenientes, y muchas veces el Gobierno, el propio Gobierno, ha atendido con medidas de urgencia a obviar los inconvenientes que la ley de Términos municipales presentaba de una manera inminente, y en muchos casos por decretos del Gobierno se ha suspendido la aplicación de la ley en éstas o en las otras provincias, cuando las necesidades de los trabajos agrícolas han hecho patente la conveniencia de realizar una suspensión en la aplicación de es ta ley, si no estoy trascordado; pero en cuanto al fondo de la

ley, en cuanto a sus líneas y efectos políticos en relación con la libertad profesional y política de la clase trabajadora, esta ley es innegable que ha producido efectos beneficiosos en la inmensa mayoría de los casos. Pero, en fin, este es el problema de fondo que discutirán las Cortes cuando sea oportuno.

¿Cuándo se va a presentar esta oportunidad, Sr. Madariaga? Indudablemente no es hoy ni mañana. El Orden del día de los trabajos de las Cortes se ha fijado de común acuerdo con la Mesa, según los planes políticos del Gobierno, y no vamos a repetir aquí un hecho que ya es demasiado frecuente en este Parlamento, que no tiene nada de particular, pero que no deja de ser un arma de oposición o de polémica. Cada vez que se discute una ley en las Cortes -no me refiero sólo a la de Congregaciones religiosas- no falta un señor Diputado o un grupo de Diputados que dice: "Pero ¿por qué estamos discutiendo esta ley? ¿No sería mejor discutir tal otra?" Esto nos está ocurriendo desde que las Cortes se han abierto, salvo, quizá, cuando se discutió la Constitución, en cuya urgencia todos estábamos de acuerdo; pero desde entonces ningún proyecto de ley importante ha venido al Parlamento en el cual no se nos haya dicho: "Este proyecto no tiene importancia; mejor sería discutir este otro". Y ahora se da también este caso. No quiero atribuir a las palabras ni a la proposición del Sr. Madariaga ninguna intención política; por ejemplo: algún malicioso pensaría que se quería retrasar la aprobación del proyecto de Congregaciones religiosas. (Rumores). No se lo atribuyo; pero reconocerán S.S. y los Sres. Diputados que es al Gobierno, de acuerdo con la Mesa y consultando el estado general de los asuntos políticos y la marcha

de los trabajos parlamentarios, a quien ha correspondido siempre, y creo que le sigue correspondiendo, acordar el orden de los trabajos de las Cortes.

Nosotros estimamos que esta ley de Congregaciones religiosas tiene una importancia capital, una importancia que raya con la constitucional, puesto que se trata de votar una ley que la Constitución pide que estas Cortes voten con urgencia. Tiene esta importancia extraordinaria para el presente y para el mañana. ¿Quién lo va a desconocer? La rapidez con que se apruebe no depende del Gobierno, depende de los Sres. Diputados; esta ley se aprobará con la rapidez con que las Cortes quieran: en un día, en tres días, en una semana, cuando vosotros queráis. No depende de nosotros la lentitud del debate, Sr. Madariaga, sin que esto sea un reproche a que los debates se dilaten, ni mucho menos.

De suerte, Sr. Madariaga, que el Gobierno, sin echar "ad kalendas graecas" ese proyecto ni otros de orden social que hay pendientes de la aprobación de la Cámara y que el Gobierno procurará traer a debate cuando sea oportuno, nosotros tenemos ahora la aspiración de que no se altere el orden de los trabajos parlamentarios; que se discuta y apruebe esta ley, que después está nada menos que la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, por la cual habéis estado clamando año y medio, y ahora, cuando viene el dictamen, que está ahí a disposición de los señores Diputados, ya no os interesa, ya no os corre prisa y atravesáis otra prisa. Es preciso ponerse de acuerdo sobre lo que es importante y sobre lo que no es importante o sobre lo

01095

que es más importante que otras cosas, y nosotros entendemos que acabar la votación de las leyes que completan la Constitución y dejan establecida en sus bases capitales la República, es más urgente que todo, más necesario que todo y más útil que todo, señor Madariaga. Y con este criterio el Gobierno desearía que esta proposición no se aceptase y que el orden de los trabajos parlamentarios continuase como está establecido hasta ahora.

MEDIOS Y RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA LEY DE CONGREGACIONES
RELIGIOSAS

(DS, n^o 336, p. 25, 11-5-33).

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Señores Diputados, simplemente para hacer una breve declaración, que no sé si conseguirá tranquilizar a mi buen amigo el Sr. Royo Villanova, a quien yo siempre oigo con deleite, pero quisiera verlo siempre menos agitado, por lo menos velando por la seriedad de su juicio, declaración que me importa hacer, puesto que el señor Royo Villanova parece que ha puesto en duda la efectividad posible de las palabras que ha dicho el Ministro de Instrucción pública. Señor Royo Villanova y Sres. Diputados, esta ley que estamos discutiendo es una ley absolutamente seria, lo mismo en su forma que en su contenido y en su intención; pero esta ley que regula los derechos de las Congregaciones religiosas en Es paña y el régimen de cultos en España es una ley orgánica, no es una ley financiera ni una ley de Presupuestos y, por consiguiente, hubiera sido absolutamente extemporáneo e impropio de ella, articular los medios o los recursos necesarios para ponerla en vigor. Pero el Gobierno, que toma este problema con la gravedad y la seriedad que el problema merece y con el ánimo con que las Cortes han examinado esta cuestión con tanto despacio, dice que vendrá a las Cortes a solicitar del Parlamento los re cursos financieros y los demás medios que sean precisos para el cumplimiento serio del artículo de la ley que estamos tratando. De suerte, Sr. Royo Villanova, que lejos de haber en el proyec to y en las palabras del Sr. Ministro una pura teoría para un

01097

preámbulo -yo no sé qué idea tendrá S.S. de los preámbulos, en los que, por lo visto, se puede volcar la imaginación novelesca-, hay un propósito serio de cumplir lealmente la ley, contando, como esperamos contar, con el concurso de las Cortes para obtener los recursos financieros y los demás medios que el Gobierno necesita para aplicarla. Esta declaración importaba hacerla para ver si consigo tranquilizar al Sr. Royo Villanova y que no ponga en duda la efectividad de las palabras del Sr. Ministro. (El Sr. Royo Villanova: ¡Cómo voy a dudar de las palabras y de los propósitos del Sr. Ministro!).

POSICION DEL GOBIERNO ANTE LA ELECCION DEL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES

(DS, n^a 370, p. 14128, 13-7-33).

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Yo me li-
mito a manifestar, Sres. Diputados, que el Gobierno en este pro-
blema de la elección del presidente del Tribunal de Garantías
ha adoptado el acuerdo de inhibirse en cuanto a los modos y a
la designación de los que puedan ser aspirantes a este elevado
cargo. Hemos creído deber proceder así por un elemental senti-
miento de inhibición y de respeto al fuero parlamentario y al
texto legal y a la delicadeza de las contiendas o de las opinio-
nes que los partidos puedan tener sobre el particular. De esta
actitud de inhibición, en cuanto a este asunto, no podemos ni
debemos salir. Yo creía que los grupos del Parlamento habían te-
nido ya esos cambios de impresiones a que se refería el Sr. Bo-
tella; estaba en esa creencia. Puede que en este momento apare-
ca yo como un poco forastero por no estar enterado de ello; pe-
ro si es menester que lo hagan, el Gobierno no se opone. El Sr.
Presidente de la Cámara puede recoger las iniciativas de los se-
ñores Diputados y proponer los procedimientos que crea más úti-
les para este cambio de impresiones o designación que pide el
Sr. Botella. En este particular, los Ministros no somos más que
miembros, para los efectos de la votación, de nuestros respec-
tivos partidos. Votaremos lo que salga del acuerdo, si es posi-
ble, de los partidos o lo que cada partido acuerde en su seno
respecto de esta votación.

3. DISCURSOS

EL ATENEO Y LA FUNCION DE GOBIERNO

Intervención pronunciada en la junta general extraordinaria del Ateneo, convocada para discutir una proposición presentada por los socios D. Wenceslao Roces y D. J. Jiménez Siles, en la que se reclamaba que el Gobierno Provisional se constituyese en dictadura revolucionaria y otras reivindicaciones.

(El Sol, 13-5-31; el texto, desde luego, no es íntegro, por lo que insertamos literalmente la referencia de prensa).

"El Ateneo -dijo- debe tener mucho cuidado y meditar lo que va a hacer.

¿Se trata de un programa político o se trata de una exposición doctrinal de ideas? Si es lo primero, aquí no tiene cabida, porque el Ateneo no es un partido, sino una corporación, un club. Si es lo segundo, debe pasar a la Sección de Ciencias Morales y Políticas".

Como algunos socios interrumpieran al orador, éste recordó sus servicios a la corporación.

"Recordad -dijo- como la recogí y cómo la he dejado. Yo os pido solamente que no achiquéis el Ateneo. (Grandes aplausos).

El Ateneo no puede ser un partido político. Debe ser sólo un club. Si se acepta esa proposición se dice que esa es la forma de pensar del Ateneo en política, y el que no esté conforme debe irse. Creo que eso no encaja aquí. De todos modos ,

haréis lo que os plazca. En vosotros reside la soberanía de la Casa. Yo pienso así, y lo digo noblemente. Si hay alguno que sienta más amor por el Ateneo, por la política y por la Republica que lo diga y yo me marchó",

El Sr. Roces, primer firmante de la propuesta, que interrumpió constantemente al presidente, dando lugar a largos incidentes, le dice:

- Usted no puede marcharse ahora.

"Aquí se pide -siguió diciendo el Sr. Azaña- que esta proposición se eleve al Gobierno. El propósito de ella es de ayuda al Gobierno. Su intención, yo lo reconozco, no puede ser mejor. Pero el Gobierno de la República es el Gobierno de los partidos que triunfaron en la revolución, y sólo de esos partidos puede recibir inspiraciones".

Una voz: "El pueblo, entonces, ¿no manda nada?"

Varios: "El pueblo son los partidos".

El Sr. Azaña: "Cuando yo tomé posesión de esta presidencia dije que no aspiraba a la unanimidad en el Ateneo. Menos aspiro a la unanimidad en la política.

Hay que procurar que el deseo de servir a la Republica no nos salga al revés. Esta proposición, con cuyo fondo en muchos aspectos estoy conforme, debe servir para orientar a la opinión, para la Sección de Ciencias Morales y Políticas, para las columnas de los periódicos; pero para el Ateneo, como pro-

01102

grama, me parece mal. La República es de todos; pero la revolución es nuestra solamente. La oposición no me molesta. Estimo todo lo que vale. Pero yo tengo que dirigirme a mis amigos, a los republicanos, y a esos es a los que les pido que mediten, y a los que les pido también que nos dejen gobernar en bien de la República". (Grandes aplausos).

01103

TRESCIENTOS HOMBRES DECIDIDOS

Discurso pronunciado en la Plaza de Toros de Valencia, el 7 de junio de 1931.

(El Pueblo, de Valencia, 9-6-31; el texto insertado en El Sol de Madrid, es incompleto, a pesar de que se afirma que es versión taquigráfica).

Pueblo de Valencia:

Es la primera vez que me presento ante la democracia valenciana y por ser la vez primera me cumple el dirigiros por mi propia cuenta y por cuenta del partido de Acción Republicana, integrante de la Alianza Republicana, un saludo de admiración y de confraternidad política sobradamente justificado ante el sentimiento de civismo y ante el fervor republicano de que ha sido siempre hogar inextinguible esta ilustre capital.

La democracia valenciana es para mí el ejemplo vivo del pueblo en acción. Esta democracia valenciana más viril a todos los correligionarios de España, y este pueblo laborioso, rico, artista, dotado de los mejores privilegios de la Naturaleza y del trabajo, lejos de adormecerse en el bienestar que le proporcionan todas estas cualidades propias del país, se mantiene eternamente en la brecha lo mismo en la oposición que en el triunfo, defendiendo los ideales republicanos, que a todos nos son comunes.

Y si esta es la hora de ensalzar el triunfo de la re

volución, es, por consiguiente, la hora propicia de ensalzar al pueblo republicano de Valencia, que ha estado siempre en la brecha y que ha cooperado como el que más al triunfo de la República.

Triunfó la República, ciudadanos, y nosotros lo celebramos hoy aquí haciendo una recapitulación del pasado, examinando la hora del presente y trazando las líneas generales del porvenir de la nación. Triunfó la República, que ha sido una obra del pueblo, una obra del pueblo revolucionario, y a mi me interesa hacer constar, y me interesa, repito, y lo repito constantemente en los actos públicos a que asisto, que no debemos caer en un error de juicio sobre el origen y la consecuencia que ha de resultar del triunfo de la República en España.

Se dice -yo también lo digo en ocasiones- que la República ha venido a España en virtud del sufragio universal, que la República se ha instaurado en España por un acto de ciudadanía organizado el 12 de Abril y que hemos dado por eso al mundo un ejemplo admirable de civismo, de capacitación para la lucha política dentro de las normas legales y de las normas del derecho. Y todo esto está bien; y es verdad, pero sólo hasta cierto punto; porque si en España hay República, no es porque hayamos conseguido un triunfo electoral el 12 de Abril. Si en España hay República, es porque antes ha habido revolución, si en España ha triunfado la República es porque ha habido hombres revolucionarios, es porque hemos hecho la revolución; y

la acción del sufragio el 12 de Abril no ha sido más que el fa
llo del Jurado popular, llamado a decidir entre la tiranía del
rey y el esfuerzo del pueblo revolucionario, que ya había pen-
sado establecer la República por medio de la fuerza si no se
le abrían los caminos legales. Es decir, ciudadanos, que la Re
pública tiene un origen revolucionario. Y habrá República en
España mientras se gobierne con espíritu revolucionario, y la
República quedará instaurada definitivamente en España cuando
la revolución haya concretado su obra, pero no mientras tanto.
De suerte que el compromiso de los partidos políticos, de los
partidos republicanos, el deber de los caudillos de los parti-
dos republicanos y el deber de los gobiernos que se vayan for-
mando al empuje de la opinión pública, es la permanencia del
espíritu revolucionario en el Gobierno, aún sin limitación, sin
compromiso, llevando hasta el fin, hasta la raíz de la carne
viva la obra de la revolución para que no quede ni la más míni
ma raíz por la que pueda reproducirse el tumor que hemos extir
pado definitivamente.

(Aplausos).

Ha habido revolución. Los fundadores de la Repúbli-
ca no son solamente ni principalmente los electores del 12 de
Abril, que hicieron el papel de Jurado en esa gran contienda
entre la tiranía y el pueblo. Los fundadores de la República,
los iniciadores de la República son los motores que actuaron
con el movimiento revolucionario iniciado en Agosto del año pa
sado y consagrado por la sangre de los mártires de Jaca y por

01106

el sacrificio de todos los que han dado su libertad y hasta su vida en aras del ideal común. Esta es la verdad pura, el verdadero resorte de nuestra acción; y sería un crimen, sería una deslealtad desconocerlo y entregarnos a una acción pacífica, puramente formal, olvidando cuál es nuestro deber, nuestro origen y nuestro compromiso.

Yo hablo de la permanencia del espíritu revolucionario desde el Gobierno. Y os lo dice un hombre de gobierno, os lo dice un hombre gubernamental. Yo soy un hombre gubernamen- tal, pero lo soy de la revolución, un hombre gubernamental de mi Gobierno. Yo soy hombre gubernamental de la revolución triunfante.

La permanencia del espíritu revolucionario en el Gobierno de la República, ¿qué significa? ¿Significa, acaso, el desorden; significa, acaso, la complacencia en los desmanes, la infracción de la ley, el pillaje, la complacencia con los tumultos callejeros? No, todo lo contrario. Nada es más necesario a un Gobierno de la revolución que la energía, la autoridad, el mantenimiento de los resortes del mando, la disciplina de partido y la más enérgica resolución para ejecutar las determinaciones del Gobierno. Por lo mismo que la revolución triunfante no tiene otro estímulo ni tiene otra coacción ni otro freno que los que ella misma se da, es menester que los revolucionarios actuantes y dirigentes tengan la responsabilidad plena, absoluta de sus actos y la decisión irrevocable de llevarlos hasta el fin, pase lo que pase y pese a quien pese. (Muy bien. Grandes

01107

aplausos).

Yo os digo, ciudadanos de Valencia, con la responsa
bilidad que pesa sobre mi en estos momentos y en estos meses,
por mi actuación de hombre gubernamental de una revolución vic-
toriosa, yo os digo que la revolución que hemos hecho y que es
tá en vías de hacerse por los cauces legales de la República
sería una defraudación si nos limitásemos a haber expulsado a
la familia real y si todo este trastorno producido en España
no hubiese servido más que fuese a acabar sus días en el extran-
jero alguna infanta proveya. No; expulsar a la familia real,
castigar a sus cómplices, derrocar su organización, no basta,
porque no nos basta sustituir la tiranía del Borbón por una oli-
garquía caciquil sin corona. Eso no, eso jamás. (Aplausos). Y
mientras permanezcan en el Gobierno los hombres que hoy esta-
mos y, sobre todo, los singularmente significados por nuestro
color izquierdista, podéis tener la seguridad de que eso no ocu-
rrirá. (Aplausos). Y haremos todo lo posible por cumplir nues-
tro deber y para que cualquier obstáculo que nos salga al cami-
no lo arrollemos. (Aplausos).

La permanencia del espíritu revolucionario en el Go-
bierno tiene dos caras: una es la ruptura total, tajante con el
pasado; la otra es la reconstitución del país y del Estado des-
de los cimientos hasta la cima. La ruptura con el pasado es lo
más difícil, es lo más urgente y es lo más necesario. Romper
con el pasado. ¿Qué significa esto? Por una parte significa sa-
tisfacer el anhelo de justicia del pueblo español que tiene que

cobrase una deuda terrible, una deuda que no prescribirá jamás, porque aunque nosotros quisiéramos olvidarla, ahí está el pueblo que nos exigiría cuentas de nuestro olvido. El pueblo tiene que cobrarse esa deuda, una deuda que es de siglos, pero que en sus etapas más próximas comienza el año 1909, sigue por los jalones sangrientos de Africa y concluye con el último crimen del ex rey fusilando alevosamente a los inocentes en Jaca, para colmar la historia de sus crímenes y para que se haya tenido que ir del territorio nacional sin que sea digno, siquiera, de la compasión. Esa deuda terrible hay que cobrarla hasta donde sea preciso, pase lo que pase, porque el pueblo español tiene ansias de esta justicia que se le debe; y el pueblo español, que no ha sido nunca dueño de sus destinos, que para serlo siempre necesita satisfacer ese anhelo, porque si no se sentiría defraudado y nosotros seríamos unos traidores a la causa republicana si no se la concediésemos. (Muy bien. Grandes aplausos).

¿Cómo se va a hacer esto? ¡Ah! Yo estoy oyendo hablar desde los tiempos en que éramos los proscritos los que ahora estamos aquí, desde los tiempos en que las personas llamadas de orden decían de nosotros que éramos el barullo y los del tendido de sol -ahora todo es tendido de sol y aún faltan localidades para los que quieran entrar en él (risas y aplausos). Yo estoy oyendo decir hace muchos años: hay que exigir las responsabilidades, hay que castigar a los culpables de hechos concretos, delictivos, manifiestos.

Y este problema se nos plantea también a nosotros

desde el momento en que somos Gobierno; se nos plantea por la democracia republicana. Yo sostengo por mi cuenta personal que este gran juicio no puede ser objeto de un proceso ante los tribunales de Justicia; eso sería una burla, ciudadanos, porque si nos ponemos a confrontar los actos del ex rey, de sus ministros, de sus tiranuelos, de sus coadyuvantes en los negocios que han saqueado el Tesoro público y la riqueza nacional, si nos ponemos a confrontar estos actos con el Código penal, el nuevo o el viejo, el faccioso o el legítimo, lo que va a ocurrir ya lo sé yo: que los crímenes más horrendos, más nefastos y más negros saldrían, a la larga, penados con una ligera condena y serían una irrisión y un escarnio. No, eso tiene que ir ante el comicio parlamentario de las Cortes Constituyentes. Allí es donde tiene que ventilarse esa cuestión.

Y este es el gran problema que se plantea a las Constituyentes, mucho más importante, a mi juicio, que la elaboración de la Constitución misma.

Ya sé yo que a estas horas, convocadas las Cortes, habrá, por lo menos, unas docenas de hombres estudiosos que estarán en sus gabinetes compulsando libros y afilando la pluma para redactar, a cuál mejor, un texto constitucional. Pero esto tiene muy poca importancia. En realidad, cualesquiera que sea la Constitución escrita, unitaria o federal, con una cámara o con dos cámaras, con iglesia o sin iglesia, todo eso no tendrá más realidad que la que el pueblo español quiera dar a la Constitución. Y para mi gusto, la mejor Constitución será aquella

que consista en la menor cantidad de Constitución posible. Pero el problema no es el de la elaboración del Código constitu
cional; el problema es el otro. Y todos los discursos sabios
que vamos a oír en las Cortes y todas las disertaciones jurídi
cas y todos los temas históricos nacionales o extranjeros y to
dos los textos que vamos a compulsar, yo los regalo por tres-
cientos hombres decididos, por trescientos diputados constitu-
yentes anónimos que entren dispuestos a levantarse y fulminar
con el rayo de la ira popular a los culpables de la tiranía es
pañola, pidiendo su cabeza, si es menester... (Gran ovación que
impide oír las últimas palabras de este párrafo), convirtiendo
el Parlamento más que en una Academia jurídica, en un instru-
mento revolucionario que dé forma legal a las aspiraciones del
país llevadas a las Cortes por medio de los hombres que actúen
en las mismas, elegidos por la voluntad de la nación. Esta es
para mí la primera parte de esa permanencia del espíritu revo-
lucionario que nosotros debemos mantener en el Gobierno; y nos
otros lo mantendremos, porque dentro de nuestro criterio guber-
namental, tal como lo acabo de expresar y me parece que es el
sentir de toda la Alianza Republicana, que aspira a ser en el
Parlamento un instrumento de gobierno parlamentario para encau-
zar la República por estos derroteros, dentro de este criterio,
yo confío, ciudadanos, en la presión constante del pueblo.

Yo admiro a los caudillos, yo tengo fe en los hombres
con quienes colaboro, pero mi fe y mi confianza y mi apoyo, el
apoyo de mis ideas políticas y de mi partido está en la inmen-
sa masa popular, a quien no conozco, pero cuyo corazón siento

latir y de cuyo empuje y lealtad estoy seguro, de la que sale el resorte que nos mueve adelante para conseguir esta obra revolucionaria tal como acabamos de definirla.

La segunda cara de este rompimiento con el pasado consiste en estructurar un Estado nuevo. Una oligarquía sin corona, no. Un pueblo libre; eso es lo que pedimos; una formación española, una España nueva, un Estado liberal que permita, por vez primera a los españoles, vivir según su gusto; lo que no ha ocurrido jamás en España, porque cada vez que se habla de nuestras luchas políticas en el siglo pasado, no hacemos más que rememorar cosas pequeñas.

Vosotros, los valencianos, tenéis iguales motivos que yo, castellano, para saber que la última revolución verdadera de España data de cinco siglos; y que cuando el pueblo valenciano no se levantó contra la tiranía del emperador de Austria y el castellano contra la misma tiranía, lo que entonces pedían los valencianos y los castellanos a su monarca no se ha conseguido aún y ha sido menester que pasen cinco siglos y que haya una revolución y que se derroque una dinastía secular para que pueda por fin lograrse por la promulgación de una ley, lo que nuestros compatriotas de hace cinco siglos, en Valencia y en Valladolid, pedían al rey: simplemente el derecho a elegir las Cortes. Esta es la verdadera Historia de España, esta es la verdadera cruz que ha llevado sobre sí, durante cinco siglos, el pueblo español, merced a la dinastía extranjera, canónica, despótica y papal que nos ha estado rigiendo. (Aplausos).

01112

Una es la República como figura de Estado y otra es la consagración que asegure la libertad de los pueblos para que dentro de la República pueda gobernarse por sí mismo. Porque no basta decir República. Una República puede ser quizá una tiranía; una República puede ser también una oligarquía (lo es en muchas partes). Y yo creo que la obligación esencial de los republicanos es dotar al Estado español de tales órganos, de tal flexibilidad de articulación que el pueblo, el pueblo consiente de sus derechos se capacite para gobernarse por sí mismo. Y que la estructuración del Estado español sea una organización de libertades municipales, regionales, que robustezcan, como se ha robustecido siempre, la obra de la acción puramente nacional.

La República, como figura del Estado, ciudadanos, yo la concibo en unas pocas líneas generales. Primeramente la República significará paz; la paz en el exterior y la paz en el interior del país. La paz en el exterior, porque España no es un pueblo ambicioso, España es más bien un pueblo necesitado de reconstituirse interiormente y sólo anhela trabajar con los pueblos tranquilamente. Nosotros no tenemos ambiciones, nosotros no aspiramos más que a que sea respetada nuestra personalidad en el mundo; por consiguiente, no tenemos ningún compromiso que nos fuerce a entrar en una carrera desenfrenada de ambiciones internacionales como la practicada por otros países que los ha llevado al desastre.

Nosotros acabamos de dar un ejemplo al mundo y el mi

nistro de Estado ha podido decirlo en Ginebra. El primer país en Europa que ha entrado verdaderamente en las vías del desarme ha sido nuestro país y el primer pueblo europeo que ha reducido su ejército a menos de la mitad ha sido nuestra España. Y éste sí que es un título que ofrecer a la admiración del mundo por creerse que esta obra era inaccesible para el pueblo español; y el pueblo español, tranquilamente, inspirándose para ello en unas normas de justicia intangibles que han sido comprendidas por todos los ciudadanos, lo mismo paisanos que militares. (Muy bien. Aplausos).

La República es la paz exterior e interior, y es, por consiguiente, el desarme y es, por consiguiente, el término, la conclusión de aquella pesadilla militarista que durante un siglo ha manejado la monarquía, ha manejado la dinastía para mantener aherrojado al pueblo español.

Yo debo declarar, porque tengo motivos para ello, que el pavoroso problema que representaba durante el siglo XIX y sobre todo en el primer tercio del corriente, por la obra personal del rey, que corrompía el ejército violando sus obligaciones, empleándole en una obra puramente personal, arrancándolo del camino fraternal con el pueblo, como debe estar el ejército, yo tengo motivos para declarar que el ejército español ha dado un ejemplo de civismo que es merecedor del agradecimiento de todos sus conciudadanos, porque éste, consciente de sus deberes, se ha fusionado con el sentimiento nacional, está competrado con el espíritu republicano y su adhesión al régimen re

publicano ha constituido un modelo y un ejemplo que han de imitar en lo futuro los demás cuerpos del Estado, cuando llegue la hora de reorganizar los demás departamentos ministeriales.

Yo hago constar aquí, ante el pueblo valenciano, que el ejército español se ha hecho acreedor, por su conducta, a la admiración, a la gratitud y a los mejores sentimientos de la nación entera. (Muy bien. Aplausos).

La República es la paz en el interior, porque nosotros no gobernamos contra nadie. Nosotros, gobernamos dentro de la ley, dentro de la ley republicana, naturalmente. La República es para todos los españoles. Todos los españoles, todos los ciudadanos, aunque no sean republicanos, están en la República amparados por la ley, pero la República ha de ser gobernada, pensada y dirigida por republicanos, y en pro de la asistencia y consolidación del régimen republicano, hay que distinguir entre la libertad que se concede a todo el mundo, para que todas las aspiraciones políticas hallen su cauce en las vías legales, y la energía y tenacidad necesarias de los partidos gobernantes, para no entregar las riendas del Gobierno republicano a manos enemigas de la República. Esto tampoco lo permitiremos nosotros.

Hablaba nuestro elocuente correligionario señor Alfaro de la necesidad de destruir el caciquismo; es evidente. Mientras queden en los pueblos o en las capitales confabulaciones personales, económicas, bancarias o territoriales de las gentes que, durante más de un siglo han venido monopolizando el

01115

esquilmo de la nación; mientras eso no quede triturado, materialmente triturado, y disuelto por la acción gubernamental de los partidos, no podremos tener la seguridad de que un día no nos han de dar una sorpresa. Dicho, en una palabra: bien destruyendo la organización municipal o apoderándose del Gobierno por algún medio ilícito y corrompido. Eso hay que triturarlo, hay que deshacerlo; y hay que deshacerlo desde el Gobierno.

Y yo os aseguro que si alguna vez tengo participación en este género de asuntos he de triturar, he de arrancar esta organización con la misma energía, con la misma resolución, sin perder la serenidad, que he puesto en deshacer otras cosas menos amenazadoras para la República. (Ovación).

La República es la paz; la República es la paz interior también, pero el camino de la República está en la acción que, naturalmente, tiene que ser obra de todos los partidos y de los partidos de gobierno. Ahora gobierna un Gobierno provisional, un Gobierno de coalición, que tiene sobre sí una responsabilidad formidable, que tiene la obra trazada para desembocar en las Cortes Constituyentes, que tiene sobre sí el inmenso trabajo de organizar la administración, de sanear primeramente los organismos del Estado que no puede ser obra de partido.

Pero sería ilusorio creer que la República puede ser gobernada con eficacia de otra manera que por gobierno de partido. Cuando las Cortes Constituyentes voten el Código fundamento.

01116

tal del régimen y pueda disolverse el ministerio de coalición y el voto popular haya llevado a la Cámara o a las cámaras las indicaciones necesarias para que el presidente de la República pueda designar un ministerio homogéneo, entonces será llega da la hora, ciudadanos, de que quien tome las riendas del poder consume esa obra de llegar hasta los cimientos de las orga nizaciones políticas españolas, arrancando de raíz todo lo que nos estorba y todo lo que actualmente nos preocupa. (Aplausos).

El Gobierno de la República tendrá para esto un medio de acción de efectos distintos, pero irresistibles, aparte de los medios que concede siempre la simple posesión del poder. La República tiene que fiar a lo más hondo de la conciencia na cional: a formar las generaciones venideras. ¿De qué modo? Me- diante la escuela. Jamás podrá la República abandonar la escue la primaria; jamás podrá la República abandonar la enseñanza, que debe estar en manos del Estado y no en otras. Yo no me me- to a discutir cuál puede ser el valor pedagógico o científico de esta función; pero el político estoy completamente seguro, como el sol que nos alumbra, de que jamás un pueblo republica- no, digno de este nombre, podrá abandonar la Escuela, el Insti tuto y la Universidad en otras manos que no sean las de un pro fesional oficial.

(Aplausos).

Esta es la acción que hay que ejercer sobre la con- ciencia española. Porque, ciudadanos, reconozcámoslo. España ha sido un país católico: el español, durante siglos no ha tenido

01117

otro pensamiento que el pensamiento católico. Este pensamiento yo no sé si es bueno o malo, no me importa: se ha retirado ahora del alma colectiva de la nación. Hay católicos en España, pero la directriz del pensamiento no es ya el catolicismo; pero en cambio, por flaquezas del Estado, por mala organización o por no concebir el problema en toda su amplitud, no se ha dado al pensamiento español una dirección orgánica que arranque y sustituya al pensamiento católico olvidado y esto es lo que tiene que hacer el Estado, el Estado republicano en nuestras escuelas y en nuestras universidades, admitiendo en ellas no sólo a los ricos ni principales, sino a los más capacitados, sacando de entre la masa del pueblo a los hombres de talento que en el régimen de enseñanza actual no pueden desarrollar su capacidad. (Grandes aplausos).

Esta es una reforma en la cual estamos conformes todos los que militamos en la Alianza Republicana. Esto lleva consigo la prescripción de la enseñanza por las Ordenes religiosas; esto lleva consigo la resolución del problema de las relaciones de la Iglesia con el Estado que no puede ser más que una, que es la instauración del Estado laico, con todas sus consecuencias. (Grandes aplausos). Lo mismo en el orden civil, en el el orden estrictamente civil, que en el de las instituciones públicas, en las que no hay más religión el Estado, no hay más privilegios para la religión católica o la que sea. El Estado no tendrá más que ciudadanos y todos han de pasar por las leyes comunes, obedientes al régimen republicano. Y nada más. (Grandes aplausos).

01118

Esta cuestión se arregla mediante leyes, se arregla mediante una política sostenida, no se arregla -permitid que os lo diga- quemando conventos. No; de esa manera no se arregla esta cuestión; se envenena. La serenidad de la justicia y la majestad del poder legislativo republicano resolverán el problema dentro de los términos del derecho, sin necesidad de cometer violencias, sin necesidad de que la República se desacredite y de dar armas a sus enemigos que están deseando decir que somos el desorden y la confusión. (Muy bien). Desorden y confusión, ciudadanos, que yo tengo mis barruntos de que ha sido provocado por los mismos que nos tratan de desordenadores y embarrulladores. Yo tengo mis barruntos, porque se produce ahora, en el ánimo público, un fenómeno singular. Cuando se instauró la República, muchas gentes decían: ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a ser el caos. Y como no ha venido el caos, la gente que deseaba que viniera anunció, hace pocas semanas que no sé qué elementos díscolos y revoltosos iban a asaltar los Bancos. Y en vista de que estos elementos díscolos y revoltosos no han asaltado los Bancos, los ricos han asaltado los Bancos llevándose el dinero. (Muy bien. Gran ovación).

De modo que yo tengo mis barruntos, como decía antes; será una consecuencia quizá de mi temperamento cabiloso, pero yo tengo el barrunto de que son esos elementos llamados de orden en el antiguo régimen los que procuran el desorden y sabiendo que el pueblo estaba tranquilo, que no atentaba contra la propiedad ni saqueaba los Bancos, han querido sustituir al pueblo para crear a la República conflictos graves.

01119

Y esto es lo que hay que pedir, ciudadanos, con mano dura. Sobre éstos es sobre los que tiene que descargar el poder público el rigor de su acción.

El Gobierno provisional está seguro -lo decía Pedro Rico y lo repito yo- el Gobierno provisional está seguro de haber cumplido con su deber. Quizá no falte quien eche de menos la conclusión de la obra, quizá no falte quien tache al Gobierno de parsimonioso o de lento, pero yo tengo que hacer una observación a éstos. Cuando éramos el Comité Revolucionario, porque hemos sido Comité Revolucionario, no se os olvidará, cuando éramos del Comité Revolucionario y al mismo tiempo que dirigíamos la conspiración contra la monarquía y contra el rey estudiábamos el programa de Gobierno y los problemas de Gobierno, con una aplicación, con una asiduidad, que yo tenía asemejada a los estudios de un opositor que va a hacer unas oposiciones a una plaza de notario, entonces queríamos o creíamos poder contar con un período de seis meses de Gobierno provisional. Y nos acomodamos, nos trazamos un programa de trabajo, una tal cantidad de problemas como para resolverlos en seis meses. La realidad nos ha enseñado que nada era más urgente que la institución del órgano representativo. Y no se ha dado un ejemplo ni dentro ni fuera de España de que en dos meses se hayan convocado unas elecciones legislativas, a pesar de las necesidades propias de un Gobierno provisional que tanta labor se trazó antes de ir a las Cortes.

Y por eso va a ser tratada por las Cortes una porción

de problemas que si hubiéramos tenido un tiempo más largo, los hubiéramos resuelto por decreto. Y esta lentitud y esta suspensión de la obra del Gobierno que nosotros prometimos realizar, no es más que un signo de respeto al poder legislativo que, dentro de quince días, se va a reunir.

Nosotros, pues, creemos, ciudadanos, que hemos cumplido con nuestra obligación. Pero aquí estamos ante el comicio popular y mañana estaremos ante las Cortes para responder de nuestra obra. Nosotros la hemos acometido llenos de entusiasmo, porque a pocos les habrá sido dado intervenir personalmente en la Historia de España, en una hora tan gloriosa y en una hora tan feliz, tan dichosa como aquella en que a nosotros nos fue dado acudir, en nombre del pueblo, a descargar los aldabonazos de la República en el palacio del ministerio de la Gobernación. (Grandes aplausos). Y esto fue el triunfo; esta emoción, esta felicidad, que es más que personal, porque alcanza a los límites del espíritu nacional, con esto nos basta, ciudadanos, no sólo para estar bien pagados de toda clase de trabajos y sacrificios, sino que nos estimula para dedicar nuestra vida al servicio de la nación y al afianzamiento de la República.

Yo espero, señores, yo creo que la democracia valenciana, que los aquí presentes y los ausentes y todos los que hemos colaborado en esta obra de levantar al pueblo español, podemos confiadamente mirar el porvenir; yo estoy seguro de que ninguno de vosotros participa de las majaderías de los monárquicos, más o menos ocultos, que andan propalando por ahí es-

pecies fantásticas para producir embarullamientos y la desconfianza en la autoridad del Gobierno, que preguntan cómo quemamos el convento de la calle de la Flor y otras majaderías absurdas por el estilo.

De esta manera, ciudadanos, ante la lucha electoral próxima, debéis ir a las urnas en la convicción de que el país va ahora a vivir una hora solmne. Por vez primera, España va a ser dueña de sus destinos; por vez primera, en España veréis un Parlamento dotado de un poder sin límites, que podrá hacerlo todo, que podrá visarlo todo, que podrá ser justiciero, que podrá ser renovador, que podrá hacer un país nuevo. Debéis pensar, antes de depositar vuestro voto, en los intereses de la República e identificaros con el interés de la patria. Debéis poner la mirada muy alta evitando discordias personales y luchas de partido, dando vuestro voto a la gente de cuyo espíritu revolucionario no os pueda caber duda, de cuya adhesión a la República estéis bien seguros y de cuyos trabajos por el país tengáis pruebas ya recibidas y bien patentes. De esta manera, ciudadanos, lograremos que las Cortes Constituyentes estén dotadas del espíritu revolucionario gubernamental de que os hablaba al principio y conseguiremos hacer la obra de la restauración nacional. Levantad el corazón y el espíritu y tened la seguridad de que España va a ser un pueblo grande bajo el signo de la República y, por primera vez, España va a ser libre.

Ciudadanos: ¡Viva la República! (Grandes aplausos).

01122

INAUGURACION DE UN CIRCULO DE ACCION REPUBLICANA

Discurso pronunciado en Valencia en la inauguración de un Centro de Acción Republicana el 6 de abril de 1932.

(El Pueblo, 7-4-32).

"Señores:

Voy a añadir muy pocas palabras a las que hemos tenido el placer de escuchar a los amigos Alvarez Pastor y señor ministro de Marina. Pocas por varias razones: La primera por agobios de tiempo, puesto que a las ocho de la noche tengo obligación protocolaria de estar en otra parte. La segunda, porque viniendo yo, o mejor dicho, estando yo desde ayer en Valencia en viaje oficial por mi cargo, acompañando al presidente de la República, la más elemental delicadeza me impide hacer un discurso político estando en Valencia el jefe del Estado.

Pero yo no deseo privarme del honor y la satisfacción de venir un instante entre vosotros para saludos como correligionarios y amigos, para estimularos en la obra que iniciáis en Valencia y para ponerme personal y políticamente a vuestra entera y total disposición.

Os he de rogar, recogiendo unas palabras del señor Alvarez Pastor y del señor Giral, que nunca, ni ahora ni dentro de muchos años, cuando el partido de Acción Republicana haya dado de sí todo lo que tenía que dar, se os ocurra llamarme jefe del partido de Acción Republicana. Yo no soy jefe de na-

01123

die; sólo soy jefe del Gobierno... por ahora. (Muy bien. Aplausos).

El partido de Acción Republicana, según lo hemos definido en nuestro programa, en nuestras asambleas, no es un partido que tenga jefes ni caudillos. El partido de Acción Republicana realiza la democracia pura; en su organización el partido se rige por sus asambleas, lo dirige un consejo nacional del que yo accidentalmente soy presidente y mañana lo será otro correligionario. Yo deseo que lo sea un día el señor Alvarez Pastor o el señor Giral. Todos somos iguales en el partido y sólo somos desiguales en las cargas y obligaciones que el mandato de los correligionarios nos impone. Yo estoy cumpliendo ahora unaharto pesada, pero la cumplo con buena voluntad, con entusiasmo y con optimismo, mientras vosotros y los demás amigos republicanos de España me acompañen con su confianza y asistencia.

El partido de Acción Republicana es contemporáneo de la República, exactamente contemporáneo de la República. Nació cuando la República no era más que un propósito y la gestación del partido comenzó, poco más o menos, con la gestación de la Revolución. Y estamos tan identificados con la Revolución y con la República, que inmediatamente de instaurarse la Republica, el partido de Acción Republicana tuvo que tomar parte en el Poder, pero el partido de Acción Republicana no gobierna actualmente en la República, aunque tenga en el Gobierno una participación personal tan significada como la presidencia y tan sig-

nificada como la persona del señor Giral. Nosotros, el partido de Acción Republicana, no gobierna en la República, pero aspira a gobernar.

El partido de Acción Republicana comenzó siendo un grupo de inteligencia y de concordia entre todos los partidos que aspiraban a implantar la República, que se ha transformado por el esfuerzo de sus correligionarios, por la autoridad de muchos de sus hombres, por la lealtad con que cumple sus compromisos, por la obra que ha realizado y por la autoridad y austeridad que le guían en sus propósitos y en sus programas políticos que le han convertido en un partido nacional con una fisonomía propia, con una disciplina que no se confunde con ninguna otra disciplina de partido. Y siendo nosotros un partido republicano de izquierdas, que gobernamos en el ministerio de más izquierda que se puede constituir dentro de las Cortes Constituyentes, nosotros, en la más cordial relación con todos los demás partidos republicanos afines nuestros a nuestro ideario, aspiramos a ser un día el partido que gobierne a la República, que puede desempeñar desde el Gobierno todo su ideario, todo su programa, todos sus métodos de gobierno.

Hasta ahora yo creo, amigos y correligionarios, que el país puede estar satisfecho de nosotros y que nosotros, los miembros del partido de Acción Republicana, podemos estar satisfechos de nuestra organización. El pueblo nos lo dice. Nosotros no necesitamos apelar a gacetas oficiosas para saber que nuestra labor es útil o inútil, si es o no aplaudida; nos basta po

01125

nernos en contacto con las muchedumbres y ahora que se está dando el espectáculo primero en la Historia de España de que los gobernantes se pongan en contacto personal y físico con las muchedumbres, que se dejen estrujar por ellas, abrazar por las gentes humildes y estrechar todas las manos por los campos y por las calles, sin miedo a riesgo ninguno de sufrir ningún percance. (Bravos y aplausos). Este contacto directo con el pueblo de que hoy hemos tenido ejemplos magníficos a lo largo de nuestra expedición en que el señor presidente de la República ha sido aclamado, vitoreado y abrazado por la muchedumbre entusiasta, este ejemplo nos basta para saber que estamos en la buena vía, que estamos cumpliendo con nuestros deberes y con nuestra conciencia política. (Muy bien, muy bien).

Notad una cosa. El Gobierno actual, Gobierno de izquierdas, Gobierno al parecer difícil, si nos hubiéramos de atener a las corruptelas del antiguo sistema parlamentario español, resulta por el sacrificio y abnegación con que todos los partidos implicados en el poder han depuesto sus aspiraciones personales y colectivas, legítimas todas ellas, pero a veces contrapuestas en aras del interés nacional- resulta el instrumento de Gobierno más eficaz, más prepotente, más autorizado a que podemos aspirar. Y notad, además, que la principal fuerza de este Gobierno no es su mayoría en las Cortes -que ésta es la base constitucional de todo Gobierno que se forme- no es esa, sino la integridad moral de sus componentes y la limpieza moral de su conducta. Nosotros, desde el Gobierno, apoyados en la mayoría del Parlamento, hemos hecho leyes que no a todos satisfi-

cieron -nuestro propósito no ha sido satisfacer a todos, sino satisfacer al interés nacional y al interés de la República- hemos hecho leyes que han lastimado intereses, que han roto con prejuicios seculares en España para preparar el camino a un porvenir que no tiene límites por ahora en el horizonte y, sin embargo, habiendo sido objeto como es también natural y legítimo, de violenta oposición, de violentas campañas de oposición dentro y fuera de las Cortes, nadie, nadie, ni el más obcecado de nuestros enemigos, ha podido decir jamás, ni insinuar una sospecha que menoscabe o disminuya la autoridad moral del Gobierno, ni uno sólo ha podido insinuar jamás que el Gobierno, en sus decisiones o en sus móviles, atendió a intereses bastardos, a intereses inconfesables, a intereses personales, ni siquiera a intereses que están en perfecta armonía con los intereses de la República y de España. (Aplausos).

Por esta ruta, amigos y correligionarios, queremos nosotros que marche siempre el partido de Acción Republicana y cuando habéis creado en Valencia este primer núcleo de nuestro partido, es preciso decir que esta creación vuestra, que este impulso que yo quisiera daros, responde a una ambición bien natural y bien legítima, porque habiendo nosotros obtenido aquí el honor de que Valencia otorgase su representación parlamentaria al delegado vuestro en el Gobierno, que soy yo, y siendo Valencia con su región un vivero y un ejemplo de republicanismo verdaderamente envidiable y admirable parece muy lógico y natural el querer que nuestra organización quiera, en la región valenciana y en la capital valenciana, echar raíces a que un par

01127

tido nacional como el nuestro tiene derecho y hasta la obligación de tener.

Esto, amigos míos, me importa subrayarlo y añadir además que vuestra presencia aquí, vuestra organización en Valencia y mi presencia en esta casa no significan que entremos en Valencia redoblando el tambor de guerra contra nuestros correligionarios los republicanos, sino que venimos a ayudarles en la obra de consolidación de la República y que nosotros en Valencia y fuera de Valencia y en toda la Península, nunca hemos querido prosperar a costa de los amigos, en menoscabo de organizaciones simpatizantes con nosotros, o afines con nosotros o hermanas gemelas de nosotros para engrandecer nuestra propia organización, sino que marchando todos unidos, por la misma vía y con el mismo fin, ensancharemos el campo republicano sin batir a nadie, sin declarar la guerra a nadie, porque sobre todos los intereses de partido, sobre todas las victorias locales, se encuentran los intereses nacionales y está el interés nacional significado por la República. (Bravos y aplausos).

Esta es nuestra significación de siempre. A todos los republicanos sinceros y leales les tendemos la mano de amistad y nos ofrecemos no a una competencia de partido contra partido, de organización contra organización, sino, remontándonos sobre eso, una colaboración fraternal, mirando al interés nacional de España.

Me interesa decir estas cosas que están en el ánimo de todos, que han presidido nuestra organización aquí, porque

01128

siendo Valencia por fortuna una ciudad donde las pasiones políticas están casi siempre al rojo, por fortuna, y ya lo quisiéramos así para toda España, nos desagradaría que se pudiera pensar por nuestros enemigos que nosotros íbamos a ser un elemento de discordia entre los republicanos de Valencia. Eso, jamás ; porque preferiría que desapareciera mi partido antes de ser nosotros, con mi dirección, con mi consejo, un elemento de discordia entre los republicanos. Y puesto que me oyen amigos muy afectos y queridos que no pertenecen a nuestra organización , quiero que para siempre y desde hoy lo tengan muy presente: que sea nuestra bandera en Valencia una bandera de paz y concordia y colaboración republicana. (Grandes aplausos).

Con esto, amigos y correligionarios, creo que me permitiréis vaya a cumplir mis obligaciones en otro lugar, sintiendo muy de veras que la ocasión y las circunstancias no me permitan hablaros más largamente ni de la política ni del porvenir de nuestro partido. Me remito, correligionarios, al discurso que hemos hecho en la Asamblea nacional de Madrid estos días, donde está contenido, a mi parecer, lo que vosotros queréis que sea el partido de Acción Republicana, del que yo no soy más que un humilde servidor. (Gran ovación)".

01129

ANTE LA PRENSA EXTRANJERA

Discurso pronunciado en Madrid tras un banquete ofrecido al Je
fe del Gobierno por la Asociación de la Prensa Extranjera, el
2 de mayo de 1932.

(El Sol, 3-5-32).

"Debo comenzar ofreciendo el ejemplo un poco inverosí
míl de mi poco acreditada ingenuidad. Cuando yo he venido a
esta comida he creído que venía a departir con unos amigos y
con los demás corresponsales extranjeros. Pero las cuartillas
que ha leído el señor Culinós me han emocionado por el ofreci-
miento que contienen. Agradezco muchísimo lo que acaba de decir
el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera. Lo agra-
dezcó de una forma personal, que quizá no tenga mayor importan-
cia; pero también, de una forma oficial y ministerial, que sí
la tiene. La doctrina que se señala en esas cuartillas, a mi en-
tender, es perfecta. Yo tengo en cuenta que también he emborro-
nado cuartillas para pedirlos, no sólo porque me reuno con va-
rios amigos de todos los días, sino con la Asociación de la
Prensa Extranjera en toda su función, el reflejo constante de
la verdad y para deciros que con mi presencia doy toda la sig-
nificación que queráis a este acto. España, como bien decía mo-
mentos hace el Sr. Corpus Barga, es poco conocida de todos los
países; pero también es cierto que nosotros conocemos poco a
esos países; de modo que la cuenta puede saldarse en paz. Para
vosotros hay una obligación que la determina vuestra profesión,
que es al conocimiento de la verdad, no el conocimiento de la

verdad política, sino al de la pura verdad.

En España se ha temido siempre una leyenda, a la que han contribuido no poco los paisanos del señor Legendre, leyenda que yo amo, incluso cuando es negra, porque me gusta incluso estéticamente; pero sobre ella existe la verdad de la República.

Nosotros no tenemos nada que ver con la leyenda ni con la Historia, puesto que tenemos nada menos que la pretensión de crear un pueblo nuevo; tan nuevo, como es nuevo lo que se hace desde la base hasta la cima. Yo creo que lo último que se renueva en los pueblos es la política y el teatro, ya que la lírica la renueva la mente fecunda de un poeta en un momento dado, cosa que no puede ocurrir con lo otro.

Nosotros somos optimistas, tenemos fe en nuestros propios destinos y venimos a hacer un país nuevo; esto es lo que quisiera que hiciérais ver en el Extranjero, prescindiendo del punto de vista personal.

Yo creo que los hombres de la República acertamos siempre; si no lo creyese así, no estaría yo gobernando. Por eso tenemos optimismo y confianza en nuestra obra y en la labor que España emprendió el 14 de abril. La que se ha realizado hasta ahora se ha hecho con el perfecto sentido y con el convencimiento de que era perfecta, porque existía el convencimiento de que no podía hacerse mejor.

Cuando yo leo alguna Prensa extranjera, y veo que so

01131

bre el fondo del pueblo, que está fuertemente adherido a la obra emprendida, se destaca la nota triste de un suceso cualquiera y se deja opaca toda la inmensa obra realizada en el país, lo que significa una gran diferencia, lo lamento, no por mí, ni por el Gobierno, ni por la República, sino por la verdad. Yo soy hombre que me enorgullezco de vivir indefenso desde el Gobierno; jamás me he acercado a ninguna Prensa para que me halagase ni señalase mi obra; ni lo he hecho ni lo hará vivo, si vive, el Gobierno, sin más defensa que la de sus propios medios. Pienso que España merece la verdad objetiva y, por tan to, todo vuestro apoyo.

Actuamos y queremos que vosotros actuéis. Así os lo pedimos, con la mirada puesta en la verdad, puesto que la República, que es firme y segura, quiere dar una nota jocunda, alegre, y asegurar con su concurso el porvenir de la humanidad.

01132

DISCURSO EN LA CORUÑA

Discurso pronunciado tras el banquete que el Ayuntamiento de La Coruña ofreció a Azaña y Casares Quiroga en la visita de ambos a la ciudad, el 18 de septiembre de 1932.

(El Sol, 20-9-32; como puede observarse el texto no es íntegro, pues falta por lo menos algún párrafo inicial, por lo que es posible que el resto esté asimismo abreviado).

El Sr. Azaña comenzó agradeciendo la cortesía del alcalde y las demostraciones de afecto y adhesión del pueblo coruñés. Después añadió:

- Siento simpatía y preferencia por La Coruña. Esto tiene su lógica. Es una ciudad admirable por su inclinación para divagar y enseñar. Admiro la cortesía de sus habitantes, sé de su ironía sonriente, y conozco su sonrisa y galanteos a flor de labios. Aquí soñé y aquí vine a trabajar por la República cuando todavía éramos pocos los que soñábamos y trabajábamos por un ideal. Allá por el año 24, unos cuantos que habíamos dicho que no a lo de septiembre del 23 -y que diríamos otras cien veces que no a lo mismo-, esos cuantos imprimíamos en La Coruña y difundíamos por España aquel manifiesto titulado "Apelación a la República", primero de una campaña que veníamos realizando. Años más tarde, aquí volvimos a pensar y soñar en la República. Todavía recuerdo a muchos amigos de esta ciudad. De entonces acá han transcurrido algunos años y sucedido cosas trascendentales en el mundo y en la vida española, y cuando voy por vuestras

01133

calles, algunos de aquellos amigos que me habían visto, desconfiados se acercan a mi para comprobar que yo no perdía entonces las horas soñando y pensando cerca de vuestro mar o en las mesas de vuestros cafés.

Lo mismo que uno piensa en el curso de la vida, yo, señores, pensé en gobernar la República; de forma que ahora no me sorprende estarla gobernando. Digo esto por primera vez desde el advenimiento de la República, y no es una pedantería.

La Coruña tiene una vieja solera republicana. Su antigua organización no tiene análogas en España. Había muchas organizaciones en la Península; pero del historial de ésta muy pocas. Yo rindo ahora un homenaje al republicanismo coruñés, que si ha dado impulso al ideal a través de sus actuaciones, también dio un gran ministro de la Gobernación a la República. Casares Quiroga se ha revelado como un gran político, del cual la República espera todavía mucho. (Gran ovación).

LA ACTUALIDAD POLITICA

Se habla mucho de la estabilidad de la República y de la energía con que yo la he defendido. Yo no soy amigo de paradojas; pero creo que el régimen está ahora tan sólido como lo estaba el 14 de abril. Yo no tengo culpa de que las gentes, no acostumbradas a navegar -y yo no he navegado nunca-, se dejen impresionar por un sentimentalismo momentáneo y tilden de demasiada energía lo que no es más que la defensa de las instituciones. La República, señores, no ha necesitado consolidarse;

no hace más que desarrollarse y crecer. ¿Se le podría pedir a un hombre vigoroso y robusto que apaleara a un débil?, ¿o a un ejército que estuviera disparando constantemente si no tiene enemigos a quienes herir ni quebrantar?

La República está sólida, ¡y desdichados los que no lo comprendan así! Sólo no pueden comprenderlo los que pretenden subvertir el orden social. El régimen hay que acatarlo y obedecerlo. Esto es exigible a todos, y se exige a todos porque la República vino para todos los españoles, aunque gobierne a gusto de los republicanos. (Gran ovación). Una de las cosas que no estoy dispuesto a hacer ni a dejar hacer es que la República les guste a los no republicanos. Se puede votar contra ella, porque eso no puede impedirse, pero lo que sí puede impedirse es que se intente socavarla, porque eso sería tanto como querer jugar con la voluntad del país. Lo que puede ocurrir -que ya viene ocurriendo- es que algunos pretendan desacreditar el régimen presentando como un mal los conflictos sociales internos.

Los enemigos de la República nos tienen sin cuidado. No es que los desdeñemos, es que no nos importan, y a mí, personalmente, tampoco. Puede ocurrir que en una catástrofe perezcan los hombres que hoy gobiernan a España y que aquéllos aprovechen la ocasión para encaramarse; pero corren el peligro de que a las veinticuatro horas el pueblo pusiera otros hombres e hiciera la República mucho más fuerte y temible.

Casares Quiroga y yo no toleraremos burlas al régimen. Tenemos el suficiente temple para evitarlo. No hay necesii

01135

dad de tener el país sobre las armas para defenderlo. Lo que hace falta es que todos laboremos para satisfacer la conciencia pública y mantener vivo el valor de los ciudadanos, y así todos laboremos por la patria, por la patria que hemos soñado en nuestra juventud".

01136

ALOCUCION A LOS CATALANES

Alocución al pueblo catalán radiada con ocasión de la aprobación del Estatuto catalán en la visita de Azaña a Barcelona, el 26 de septiembre de 1932.

(El País, de Lérida, 27-9-32).

"Catalanes. El día 9 de septiembre de 1932, fecha de la aprobación del Estatuto de Cataluña, señalaba un punto culminante en la obra de la reconstrucción de España, emprendido por la República. Las Cortes, en su inmensa mayoría, expresión del verdadero sentir de los representantes del pueblo, han votado la ley fundamental que entraña en la realidad de la vida de este pueblo catalán, las normas de justicia y libertad en que la República se inspira. Estoy orgulloso de haber gobernado la República en la etapa que, con la colaboración de los Partidos republicanos y socialistas, se ha llevado a feliz término un empeño, que aún los más optimistas veían difícil de conseguir.

Pasadas las polémicas comprensibles y los momentos de pasión, sólo queda la alegría de haber satisfecho el justo anhelo de Cataluña y la esperanza de que el actual régimen será la base de la reconciliación de todos los españoles.

En nombre propio y del Gobierno que presido, os envío una felicitación sincera y la renovación de los afectos de un buen español que quiere una República robusta, fundada por todos los pueblos hispanos, bajo el signo de paz, trabajo y

01137

justicia.

Catalanes, adelante por la República, por Cataluña
y por España".

01138

DISCURSO ANTE LOS MEDICOS TITULARES

Discurso pronunciado en Madrid, en el banquete ofrecido por la Asociación Oficial de Médicos Titulares Inspectores Municipales de Sanidad al Jefe del Gobierno, el 17 de octubre de 1932.

(El Sol, 18-10-32).

- Breves palabras para recoger en desigual correspondencia a las inspiradas y elocuentes del presidente y del secretario de la Asociación. Hablaré sin ánimo de decir un discurso, porque sería el tercero del día de hoy, y hay habilidades que no se deben estirar tanto. También porque el carácter íntimo de esta reunión excluye la solemnidad de un discurso.

De dos maneras tengo que agradecer el acto y las palabras vuestras. De una manera personal, por cuanto habéis hablado de nuestra amistad y os congratulabais del recibimiento que hice a vuestras aspiraciones. Podéis tener la seguridad de que los lazos de conocimiento y amistad personal que he hecho con vosotros son para mí un galardón inapreciable, base de una amistad leal y sincera por mi parte.

Pero me importa más el otro motivo: el significado que tiene este acto de adhesión y gratitud a una obra de gobierno. Pocas veces pueden los gobernantes realizar las promesas justas que hacen. Yo acogí vuestras aspiraciones y os dije que lo hacía con la reserva natural que me imponía la obligación de confrontarlas con el interés público. La realidad y la voluntad

01130

de las Cortes han permitido al Gobierno deciros hoy que está contento de haber podido recoger vuestras demandas. Las palabras de vuestro presidente y secretario me satisfacen plenamente. Es difícil conciliar el interés de una corporación con los intereses del Estado. Ahora se ha podido hacer, y a mí me satisface subrayar la forma subordinada al bien público en que habéis expuesto vuestras aspiraciones. No se puede admitir que las aspiraciones corporativas rocen el interés del Estado. No se pueden imponer los intereses de una clase sobre el interés nacional.

A vosotros os corresponde, por adhesión al servicio profesional y a la República, una misión capital. Yo he dicho en mis propagandas que la política de la República tiene que estar dirigida por la ciencia y por la moral. La primera, aplicada a la obra de fecundación de España. La segunda, la moral pública, posponiendo al interés del Estado toda apetencia corporativa y personal. Este es mi concepto de la política y del Gobierno.

Vosotros en este problema tenéis una tarea inmensa que cumplir. La ciencia nos dice que el suelo español, la España física está por organizar, por explotar y casi por reconstruir. España, en enormes extensiones, no es sino un montón de ruinas. Parece un bello país destrozado por sus moradores. Se han devorado las fuentes mismas de la riqueza natural. Y esto que pasa con el suelo peninsular, pasa también con el hombre

peninsular.

Hay que reconstruir la vida personal de los españoles. En esto, vosotros los médicos tenéis un papel inmenso que desempeñar. Tenéis que ser una de las piedras angulares de la política republicana. El director de Sanidad sabe cómo el Gobierno de la República ha considerado los problemas sanitarios y sabe también qué dificultades nos acucian y nos ahogan, no permitiendo dar a la política reconstructiva toda la celeridad que necesita; pero estamos dispuestos a acelerar esta política. Hay que hacer de las personas físicas de los españoles lo que deben ser en un país civilizado. Es deber y deseo inquebrantable de la República hacer esto. Atenderemos a estos problemas con toda la amplitud que nos dicta nuestra conciencia de españoles.

Habéis hablado aquí de adhesión a la República. Esto nos parece elemental. ¿A qué se va a adherir un español? ¿Qué le queda a un español que se interese por el porvenir de su país y tienda una mirada al ámbito nacional? ¿Dónde va a colgar la ofrenda de su trabajo sino en la institución republicana? La patria es la República. La República es España, constituida en régimen jurídico. Jamás podrá presentarse ya aquella cuestión metafísica de lo que era España y lo que era su régimen jurídico. La República y España son la misma cosa. Un español se constituye en español en cuanto es patriota. Y cuando hablamos de patria y de República hablamos de una institución culta y libre. La revolución no borra nada del ser espiritual de

01141

España. Más bien lo vivifica y lo restaura. Somos amantes de toda la vida e historia espiritual de España, y la renovamos sin renegar de ninguno de sus valores. No podemos admitir que se objete la consideración de que destruimos nuestra patria. La patria no era ninguna institución política. Se trata de un sentimiento eterno que no lucha con nadie, que no es otra cosa que inscribir el nombre español en el adelanto civilizado de los pueblos. Nuestra obra es esa: despertar el amor hacia la civilización española en el mundo entero.

01142

HOMENAJE A VAZQUEZ HUMASQUE

Discurso pronunciado en Madrid, en el banquete homenaje a Vázquez Humasqué, el 10 de noviembre de 1932.

(El Liberal, 11-11-32).

"Es para mí un honor y un placer llevar en estos momentos la voz del Gobierno, y especialmente la de mi eminente compañero el ministro de Agricultura, para asociarnos al homenaje de admiración y simpatía a nuestro colaborador Sr. Vázquez Humasqué, al que por encima de todos los elogios que podemos hacerle y que nos dicte nuestra buena amistad debemos señalar el justo aprecio de las grandes cualidades de este eminente funcionario. Aún siendo así, no es esto lo que interesa ni lo que al interés público conviene revelar. Que Vázquez Humasqué es un hombre capacitado, todo el mundo lo sabe; pero mi adhesión, mi simpatía y mi amistad están -quizá por esto me perdonará si me entrometo en una definición psicológica- en que siendo Vázquez Humasqué un hombre de ebullición política y de conducta vertiginosa, tiene el dominio impuesto por la técnica profesional perfectamente. Cuando habla se desborda por su fervor cívico, que siempre está dominado por la disciplina técnica de que es maestro y dueño. Y siendo Vázquez Humasqué un político militante, la República prueba sus dotes y sale airoso como pocos han salido, siendo el instante en que se comprueba la eficacia de un militante dotado de técnica profesional. En ese sentido la República tiene que señalar el hecho de la gran utilidad que representa efectuar un servicio en bien de la República y del

01143

Estado. En Vázquez Humasqué hay que considerar, más que su fer
vor republicano, la enorme singularidad y capacidad de adapta-
ción del funcionario a su función. Este gran acierto es lo que
nosotros debemos celebrar.

Los que gobernamos hoy y los que han de gobernar ma-
ñana, la preocupación más constante que deben tener es encon-
trar las personas aptas para cada función. De nada serviría to-
da una obra de gobierno si fuese acertada siempre, ni la ferve-
rosa adhesión del pueblo si el Estado, al cual todos nosotros
vamos a rendir el sacrificio de nuestro esfuerzo, si no se en-
contrase el hombre apto en cada momento, y más que ese hombre,
en este caso, se ha encontrado al funcionario que ejerce su fun-
ción, y qué función y qué obra, lo han dicho el ingeniero agró-
nomo y el Sr. Fernández Clérigo, que me han precedido en el uso
de la palabra.

Nada hay que pueda compararse en la lontananza del
país como la reforma agraria. La República ha hecho grandes co-
sas, magníficas; la principal es la de darse su propia existen-
cia; y después de este hecho, surgido de la espontánea voluntad
popular, ha desplegado la múltiple obra del Gobierno y de las
Cortes soberanas, entre las cuales está la reforma agraria, que
es base y fundamento de la transformación de la sociedad. Por
una experiencia modesta y reducida, como tiene que ser toda ob-
servación personal -haber sido circunstancialmente también agri-
cultor-, he aprendido que el sistema agrario imperante en Espa-
ña era o una explotación indigna o era un vicio que apasionaba

y empobrecía.

De estos dos detestables conceptos hay que sacar al país. La reforma agraria representa una revolución inevitable, indiscutiblemente buscada por los partidos republicanos y socialista, no solamente para redimir una masa, para conseguir una reivindicación social, sino para atender a la economía nacional, y siendo magnífico el empeño, con haber votado esta reforma las Cortes, con haberla propuesto al Gobierno, nada se conseguiría si vosotros no ponéis interés en el acierto de la función. La reforma, que ha de ser atacada por varios flancos, si vosotros no cumplís con vuestro cometido, fracasaría. La técnica al servicio de una política puede hacerlo todo. La ley de Reforma agraria pudo no hacerse, pudo ser otra; pero es un hecho revolucionario necesario y decretado por el Parlamento, al cual hay que poner en su servicio la capacidad profesional.

Yo no dudo del éxito que os acompañará en esta obra. Os compete una función de las más importantes de la vida nacional. Yo no voy a establecer comparaciones; otra función interesante es la de cambiar el aspecto espiritual de España, estableciendo la enseñanza, base que tiene tanta importancia como la que más, no solamente en la primera enseñanza, donde se modela el espíritu de las generaciones nacientes, sino en la segunda, con la que se consigue el nombre en el extranjero y la importancía histórica del país. El Gobierno tiene todo su afán en emplear al funcionario en su función. El Gobierno es el símbolo y la representación del Estado, que ha de hacer cumplir la ley con cau

ce legal, con el sello de la República, empleando la audacia para ensayar y decidido a pulverizar todas aquellas dificultades que surgieran, unas por los elementos interesados en entorpecerla, y otras por los vehementes que quisieran ver implantado por un hecho voluntario lo que se ha de cumplir por una ley de la que es autor el Estado jurídico, reconociendo y haciendo reconocer su autoridad y su soberanía, ante la que todos los españoles hemos de doblar la cerviz y ofrecerle nuestros esfuerzos. Digo esto porque en torno a la aplicación de la reforma agraria se quisieran suscitar dificultades que están previstas, y ante las que el Estado y la República tendrán que decir que ni por la derecha ni por la izquierda se han de encontrar otros cauces que los establecidos por la ley, acatándola y respetando la autoridad del Estado.

El homenaje a Vázquez Humasqué no representa un agradecimiento del Gobierno, que ha visto su obra con gran satisfacción; es más bien un símbolo, un exponente de la consideración con que se tiene vuestro trabajo cuando está debidamente aplicado. Si en esta gran obra trabajáis con fervor, yo estoy seguro de su éxito y habréis contribuido a laborar por un hecho histórico para grandeza de España".

01146

DISCURSO EN SAN SEBASTIAN

Discurso pronunciado el 3 de noviembre de 1933 en el frontón Urumea de San Sebastián, en el curso de la campaña electoral.

(La Voz de Guipúzcoa, 4-3-33; la referencia del discurso es según el periódico "lo más completa posible, a falta de versión taquigráfica").

Ciudadanos:

He aceptado con gusto la invitación de los republicanos de Acción Republicana de Guipúzcoa para tomar parte en este acto solemne, tan conmovedor y lleno de esperanza. Lo he considerado como un deber pensando que debo proseguir una obra, ya larga, que hoy es menester acentuar y fortificar, al servicio del máximo interés de la República y del país, dirigiéndonos a las masas para que de su corazón salgan fuerzas que rindan una obra en pro de lo que es una causa común.

Traigo aquí mi palabra, como a otros ámbitos españoles para daros las esperanzas que a veces os son necesarias, aunque quizá aquí no las necesitéis, porque supongo que vosotros republicanos vascongados, no tendréis miedo.

La República y el País Vasco no necesitan mis alientos, pero yo vengo a ofrecirme para laborar por ambos, continuando así una obra iniciada el año 1931, y aún antes, el año 1930, aquí mismo, obra que si hoy no está amenazada de quebrarse, sí sufre la contingencia de entrar en un período de parálisi

01147

sis y de corrupción.

Y vengo aquí para recibir el aliento de vuestra alma colectiva.

Un país como el vuestro, que en las horas más críticas ha conservado siempre sus hábitos de libertad, mantenidos con la robustez del carácter vuestro, puede encontrar ahora, en la República, el momento propicio para hacer valer su personalidad propia.

MI INTERES POR EL PAIS VASCO

Todo lo que se refiere al País Vasco, en su política, tiene un interés particular para mí. Este país ofrece una totalidad absoluta de facetas económicas sociales y morales, que forman una personalidad robusta. En la agricultura, el País Vasco tiene un tipismo acendrado; en las empresas del capitalismo moderno, se ha creado aquí un proletariado fabril, y en las rutas del mar, en las cercanías del mar, Vasconia ha obtenido días de gloria.

Hay que elevar al País Vasco a miembro de primera categoría en España.

Vuestras agitaciones no me preocupan. Significan vida, vigor, y lo que importa es acomodar la moral política del País Vasco al Estado español.

La República no ha creado el problema que tenéis

planteado los vascos; pero la República debe resolverlo, en servicio de la paz y de la justicia.

LOS ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROBLEMA VASCO

Hace un siglo, el País Vasco aparecía como refractario al progreso que representaba el Estado moderno, liberal y demócrata. Este hecho está consignado en la Historia, pero siempre ha habido aquí liberales ardorosos que han mantenido el amor a sus ideales.

Es justo decir -y esto no es una improvisación, sino el fruto de un estudio añejo- que esa conducta histórica deviene de un equívoco, que también gravita sobre toda la política española del siglo XIX. En ese siglo las contiendas entre dos ramas dinásticas querellas de familia, división borbónica, tal que una disputa entre familias burguesas, trajo ese estado de cosas.

Una de las ramas contendientes hizo como que abrazaba las normas constitucionales, y la otra rama vino aquí, no a fundar una nueva teoría, sino a pretender realizar un acto de fuerza. Y las dos ramas, al fin, os traicionaron, ellas que querían hacer correr un mar de sangre.

Esto es lo que debe España a la Monarquía, y de ahí viene el equívoco sobre la sensibilidad política del País Vasco. (Ovación).

Pasó todo aquello, que está simbolizado en ruinas,

sangre, lágrimas, dispendios económicos. Hundióse una de las ramas contendientes. Desapareció la otra que pleiteaba. Y ahora en el País Vasco, se advierte trabajo, aplicación, esfuerzo colectivo.

Justo es decir ahora que si en el País Vasco hay disidencia, también el régimen pasado identificó el carlismo con lo que de santo y sagrado latía en el mismo país. (Ovación).

Yo vengo predicando contra ese equívoco, y en mis palabras he fundado doctrina y concepción de lo que debe ser la España futura.

Ahora que somos dueños de nuestros destinos, tenemos que buscar, vosotros y nosotros, gobernantes ayer, y quizá gobernantes mañana, el modo de articular al País Vasco con el Estado republicano.

Yo siempre estoy dispuesto a esta tarea, y nuestro deber es explicar a la ciudadanía cuál es su misión, ya que no todo consiste en gritar viva la República. Hay que dar vida al Régimen y saber lo que es la República, y para contribuir a esa labor es por lo que he venido.

NO VENGO EN SON DE CONTIENDA

Yo no vengo en son de contienda, ni para agredir a nadie.

Prefiero ser víctima, a ser agredido. Me pronuncio

01159

por ser engañado antes que engañar. Y opto en suma, porque el error y el ridículo caigan sobre los otros en vez de caer sobre mí.

Yo olvido a mis enemigos y adversarios para pensar sólo en el interés del pueblo y de la República.

LA CONSTITUCION PUNTO DE PARTIDA

Debemos partir de lo hecho en la Constitución, de lo preceptuado en la carta fundamental de España, que es la base del entendimiento entre nosotros, y nos encontraremos con tres puntos vitales y, naturalmente, esenciales:

Principio de las autonomías, nuevo Estatuto religioso y perspectivas de amplia reforma social. Esto es lo sustancial del régimen republicano. Y esto es lo que caracteriza la obra de la República, porque los partidarios del nuevo régimen no podíamos contentarnos con ver fugarse a la familia real y con cambiar los símbolos externos de la nación.

La República es una fuerza interna y entrañable de creación, de adopción de fórmulas para que se desenvuelvan los múltiples pueblos españoles.

LA POLITICA DE LAS AUTONOMIAS

Lo que se refiere a la política de las autonomías, ofrecía, a simple vista enormes dificultades. Grandes dificultades parecían acumularse sobre el texto constitucional referen

te a las autonomías, y grandes dificultades parecían gravitar sobre el proyecto de Estatuto catalán.

Después se ha visto que no era así, que no gravitaban esas enormes dificultades.

¿Qué hicimos al llevar a la Constitución el problema vivo de las autonomías? Pues reconstituimos la fisonomía española, dimos libertad a los pueblos y anulamos el error de los liberales del siglo XIX.

Error, y error profundo, fue el de los liberales del siglo XIX, y la experiencia dice que hicimos bien en deshacerlo. Los esfuerzos de otros países por lograr una unidad centralizadora, que en algunos se ha conseguido, aquí fracasaron. No puede gobernarse humillando los impulsos de un país.

Si los pueblos españoles son muchos y diferentes, y se les puede reconocer y dar libertad, hay que dársela sin perjuicio de nadie y sin mengua del Estado.

Hemos echado abajo al Estado unitario, y nosotros -las Cortes- hemos dado un módulo para que el país pueda organizarse libremente. A vosotros interesa, de un modo particular, aprovecharlo. No es lícito acudir a los recursos extralegales, que en ningún caso son justificables.

La República ha dicho: "Por ahí se va a la recuperación de las libertades"; y por ahí, por el camino señalado, debéis ir.

01152

VUESTRO ESTATUTO

Yo no defiendo ni examino, por ahora, vuestro Estatuto. Hoy no me interesa este menester. A vosotros sí os interesa.

Y yo os digo que la misma disposición de ánimo en que estuvimos al discutirse la Constitución, la misma que observamos cuando se trató del Estatuto de Cataluña tendremos ahora, al llegar al Parlamento el Estatuto vasco. Y cuando las Cortes hayan decidido, vosotros tendréis el Estatuto.

Esto os debe atar, os debe ligar a la República para siempre. Yo me pregunto: ¿es posible que quede un solo monárquico en el País Vasco? Si la Monarquía tuvo el País Vasco como lugar de turismo y de entretenimiento, sin ahondar jamás en la emoción popular... ¿Cómo es posible que quede aquí aún un solo monárquico? (Ovación).

EL PROBLEMA RELIGIOSO

De otro punto debo hablaros, de una cuestión que a todos los ciudadanos de la República interesa y que aquí tiene un acento especial. Me refiero a la cuestión religiosa ... (Aplausos y gritos de elogio para la obra laica de la República). La República ha cumplido con un deber elemental al decidir la separación de la Iglesia y del Estado. Este acuerdo de la República se expresa con una sola palabra: libertad. Y la cuestión religiosa es la que más violencias ha suscitado y de la que dima

01153

na la fuente ofensiva que sufre ahora el Régimen.

El problema religioso hay que considerarlo de dos maneras: una, la que concierne a las relaciones del individuo con el Estado; y la otra, la que se refiere a la posición del Estado ante la Iglesia. Refiriéndose a la primera, yo oigo de cir que la República ha perseguido a los católicos. Esto es la patraña más solemne que se ha dicho. No hemos perseguido a los católicos, no los queremos perseguir, no los perseguiremos. He mos sentado el principio de la libertad personal de cada uno de los ciudadanos ante la religión. Hemos dicho: ¿quieres creer? Pues cree. ¿No quieres creer? Pues no creas, que nadie te dirá nada. (Ovación). Yo espero siempre que se me diga a qué ciudadano español hemos impedido el cumplimiento de sus deberes religiosos. (Voces: ¡A ninguno!). El Estado, ésta es la verdad, no puede desentenderse de la vida espiritual de sus miembros. Esa vida espiritual cobra, en cada época, un aspecto distinto que refleja el sentido mayoritario. Hace años el Estado era un reflejo de ese espíritu mayoritario. Pero hoy el Estado se preo cupa de otros aspectos fundamentales de la vida del ciudadano. Por ejemplo, lo que concierne al proletariado, reglamentando las relaciones del productor y del capitalismo, principio que hace medio siglo se hubiera considerado como atentatorio a la libertad individual. Y que hoy es perfectamente normal y corres ponde a la más elemental justicia social.

Esta es nuestra política. Lo que se refiere a la Iglesia ha consistido en proporcionarle una situación similar

a la que en otros países aquélla acata sin protesta. Porque la Iglesia no siempre ha estado relacionada en España con el Éstado por medio del Concordato que normalizaba las relaciones en tiempo de la Monarquía. Y en otros países no está regulada la relación como lo estaba en España. ¿Por qué íbamos a ser nosotros, los españoles, de condición distinta e inferior a los ciudadanos de otros países? El Estado ha devuelto a los ciudadanos la potestad de libertad y ha colocado a la Iglesia en una situación que si sabe aprovecharla, la permitirá desenvolverse con mayor dignidad y con mayor esplendor del culto. (Aplausos). La protección del Estado a la Iglesia representa una minoración de los derechos estatales. Y, además, suponía una influencia política o mundana sobre el libre albedrío ciudadano. (Aplausos).

LA POLITICA SOCIAL REPUBLICANA

La política social es una cuestión ardua, que es , también, el origen del combate no sólo a los Gobiernos, sino a la República. Hace meses expuse yo en un acto que no es lícito recitar ni comentar en tono de "humour" el artículo primero de la Constitución de la República. Ese primer artículo dice que "España es una República de trabajadores de todas las clases". La expresión podrá no ser afortunada, porque en España hay quienes no trabajan porque no pueden y porque no quieren. (Risas). Pero lo de menos es la expresión literal, y lo que importa es el sentido atribuido a esa frase. El sentido expresa que la única virtud cualificativa es la ciudadana, y que los otros títu-

01155

los que puedan argüirse no existen. (Aplausos).

Dos o tres enunciados de la Constitución abren unas grandes perspectivas a la reforma social, tan grandes que podrán agotar varios Ministerios y aún varios Parlamentos. Nosotros, en los Gobiernos que yo he presidido y en los trabajos de las Cortes, ¿hemos ido más allá de lo que señalaba la Constitución? No.

La protesta contra las leyes sociales de la República existe, y yo no voy a decir que la desconozco. El origen no es el de las leyes que atañen al trabajador fabril. Todas las leyes son justas y su contenido no ha causado daño a nadie. Sea gobernada la República en sentido de izquierdad o de derecha, será muy difícil justificar modificaciones en la legislación social. Pero sea la derecha o sea la izquierda quien gobierne, conste que nosotros no hemos inventado la contienda social, la lucha de clases. Y de ésta hay que decir que vosotros, vascos, no sabéis lo que es la contienda en los campos andaluces y en los extremeños, donde luchan un campesino famélico y un gran propietario que no sabe cuál es su interés. De ahí, de esa lucha feroz viene la enemiga contra la República. Vosotros, vascongados, conoceréis la paralización de las industrias, el paro fabril; pero no tenéis ni remota idea de lo que supone la lucha social en Andalucía y Extremadura, donde hay campesinos con hambre desde tiempos seculares, desde los tiempos de la Reconquista. Ahí, ahí está el origen de la lucha contra nuestra legislación social. (Aplausos).

01156

LA OBRA DEL REGIMEN

Lo que tenía que hacerse lo ha comenzado la República. Pero no todo está hecho, ni siquiera dentro de los límites del régimen burgués.

Antes de proclamarse la República, hombres de la izquierda y de la extrema derecha -no hay que olvidarlo- convinieron en un programa mínimo de renovación social, todavía no cumplido; por ejemplo, en lo que se refiere a la ley de Arrendamientos rústicos y de rescate de bienes comunales, que tanto interesa a las Vascongadas, leyes no ultimadas y no por culpa nuestra ... (Aplausos).

Se quiere destruir en su raíz los organismos de conciliación social, o entregarlos a la decisión de un ministro, o someterlos al influjo de los caciques provincianos. Yo me pregunto: ¿Es que quiere España retroceder varios lustros? ¿Se quiere volver a la barbarie?

Nosotros no hicimos política socialista, en primer lugar porque la mayoría de los Gobiernos por mí presididos no eran socialistas, y después porque los ministros socialistas no querían hacer una política genuinamente marxista. (Aplausos). Los socialistas y todos los grupos se prestaron a hacer una política de colaboración dentro del Régimen. ¡Ah! Si los socialistas tuvieran trescientos diputados, ya se vería lo que es la política del socialismo. (Aplausos).

01157

DENTRO DE LA LEY, TODO

Todos hemos colaborado dentro de la República; pero nada más. Y yo digo que para algo hay sufragio universal, para algo se celebran estos actos. Si un día un partido rojo o de otro color obtiene la mayoría y la gobernación del país, nosotros iremos a la calle, al pueblo, para conseguir el Poder, pero por vía legal. Ni desde fuera ni desde dentro de la República es tolerable la violencia ante el Poder estatuido. No podemos ir a coger lo que no nos pertenezca. (Aplausos). Utilizando los preceptos constitucionales, las regiones podrán reconstituir su personalidad, las religiones practicar sus cultos y los grupos sociales de diversas tendencias tendrán cerca o en la mano el Poder si consiguen reunir la mayoría de la opinión pública.

Estas son las líneas generales de la República según la entendemos nosotros. Así la hemos entendido en las Cortes, con una mayoría, y durante los dos años y medio que la hemos dirigido y gobernado según nuestra conciencia y bajo nuestra responsabilidad. Si no ha complacido a todos los republicanos nuestra conducta, lo deploraremos, porque deseamos la unanimidad. Pero si no ha gustado a los monárquicos, ¡tanto mejor! (Ovación).

Nosotros somos liberales y queremos que todas las voluntades se concierten y que todos los españoles estén con nosotros; pero tienen que convertirse. Lo que no podemos hacer es darles prendas antes de la conversión. Eso no podemos consen

01158

tirlo los republicanos de izquierda, que estoy por decir que somos los únicos republicanos. (Aplausos).

La República es, sí, un régimen jurídico, un Estado árbitro, inteligente, impulsor del pueblo. Mi partido, Acción Republicana, representa quizá la adhesión más pura, más cabal, más abstracta, si puede decirse, a este régimen. Mi partido, grande o chico, porque el volumen de los partidos no puede me dirse por el bulto de sus componentes, sino por la energía o valor, y de estas prendas creo que hemos dado muestra. (Aplausos).

La República no es una expresión algebraica. Su contenido es la totalidad del pueblo español. Esto es un sentimiento que me anda por el cuerpo, que pudiera decir que me rebosa hasta por los dedos cuando hablo del Régimen. Lo que me anda por el espíritu es la patria española, toda ella, de la que yo soy servidor y miembro. El contenido nacional de la República es lo que hará resurgir a la Patria. Porque ¿dónde acaba la lista de vergüenzas en que sumió a España la monarquía? (Una voz: -En 1931). Bien, pero eso no es un final hacia atrás, sino el epílogo que impuso la República.

Yo no soy más que un transeunte en la política; pero soy un republicano y un fervoroso español, que siempre estaré al servicio de mi Patria y de la República.

Si vosotros, vascos, queréis seguirnos, seguidnos, que nosotros queremos un puesto de vanguardia. Y, si queréis,

01159

contad con nosotros, que estamos al servicio de todos los pueblos en favor de la concordia y de la paz y del trabajo en España dentro del Régimen. ¡Viva la República!

01169

DISCURSO EN JATIVA

Discurso pronunciado en Játiva (Valencia), el 11 de noviembre de 1933, en el Gran Teatro, en un acto electoral.

(El Mercantil Valenciano, 12-11-33).

A MODO DE REPLICA

"Amigos y correligionarios:

No os dejéis impresionar por los incidentes de la calle; yo quisiera haber podido tomar a uno de esos cuantos que están ahí alborotando, ponerle frente a frente a mí, mirarle a los ojos y preguntarle qué tiene contra mí o qué le han dado para estar en contra. (Ovación).

Eso no tiene importancia, porque esos mismos que ahí alborotan estarían rompiéndose las manos de aplaudirme y deshaciéndose la garganta de darme vivas, si se lo hubieran mandado; y para que se lo mandasen yo no tenía más que haber transigido con su política. (Muy bien).

Como no he transigido, se enfadan sus jefes y ellos chillan. Pero un incidente de este género, lejos de ser disgustoso, a mí me agrada, porque es preciso en política tener el valor de dividir los campos, suprimir las confusiones (qué hartas ha habido desde que hay República en España), saber, dónde están los buenos y dónde están las personas y los grupos con quienes se puede y debe contar, y dónde están aquellos de los cuales más vale no hablar.

0116.

Con este incidente, y aún con cualquier otro que se pudiera producir, nuestro paso por la provincia de Valencia , propagando la candidatura del Frente de Izquierdas, ni puede ser más placentero ni puede ser más prometedor; muchedumbres de republicanos, de republicanos y socialistas, nos reciben en todas partes con aplausos y fervoroso entusiasmo. Todos se prometen el triunfo al cual venimos a cooperar.

Y es justo decir que, habiendo yo leído esta mañana en la prensa una información en la cual se atribuye al señor ministro de la Gobernación nada menos que yo puedo recorrer la provincia de Valencia gracias a la protección de los gobernadores civiles, yo tengo que decir que si esta información es cierta y el señor ministro de la Gobernación, persona de todos mis respetos, ha dicho tal cosa, no ha dicho sino una ligereza propia de un principiante. Y que, probablemente, no se le ha ocurrido a él, sino que emana de informaciones salidas de la propia Valencia. Porque hasta ahora, habiendo gobernado tres años, o dos años y medio, a la República, yo puedo ir a ponerme frente al pueblo y recorrer la Península entera, de punta a cabo, sin que nadie tenga que mirarme a mí de través. Y como yo no me he escapado de ninguna cárcel, puedo recorrer la provincia sin necesitar la protección de las autoridades. (Gran ovación).

Esto para quien lo necesite. (Una voz: Para March).

Para quien lo necesite. No hablo yo ahora de ese señor, sino para los que están en el Gobierno, que pueden necesiti

tarlo, pues yo, que represento a mi propia persona y a nuestro partido, no necesitamos estar protegidos contra la opinión pública; contra la opinión pública que existe en España precisamente gracias a nosotros, no gracias a ellos.

La última derivación del Gobierno a través de todo el encadenamiento oficial y jerárquico de sus partidos y de sus organizaciones, es esa que está en la calle chillando; quien necesita la protección de la autoridad, y para manifestarse bárbaramente, son ellos, es el propio Gobierno. Si la autoridad cumpliera con su obligación, eso no ocurriría. (Formidable ovación, que dura largo rato).

Que conste así, y de una manera o de otra, estas manifestaciones mías llegarán al señor ministro, y sabrá con quién trata y con quiénes trata, y que nosotros no necesitamos que nos presente amparados por nadie, ni por la autoridad, y que nos bastan nuestros propios correligionarios y nuestro propio derecho. (Muy bien. Gran ovación).

EL FRENTE DE IZQUIERDAS EN VALENCIA

De todos los actos de propaganda electoral que yo vengo realizando por la Península, estos que realizamos en la provincia de Valencia me son especialmente agradables. No lo digo por lisonja del pueblo valenciano, sino desde un punto de vista absolutamente político; y es que, en la provincia de Valencia, habéis hecho lo que dicta el sentido común, la conveniencia de los partidos y lo que el interés de la República demanda: habéis

01163

hecho el Frente de Izquierdas.

Esta operación táctica inexcusable, aconsejada por mí desde que comenzó la campaña electoral, y que no en todas partes se ha conseguido. Pero aquí sí. Y si nosotros nos encontramos ante ese problema de la disolución del Parlamento, la convocatoria de las Cortes y la posibilidad de un Gobierno de derechas dentro de la República, que significaban la ruptura, el abandono y hasta fuera posible la destrucción de la política que nosotros hemos representado en el Parlamento constituyente y en los Gobiernos presididos por mí. La lógica, la lealtad de nuestras propias convicciones y nuestros propios intereses espirituales de hombres políticos, demandan que vayamos a la lucha electoral, presentando unidos la misma política que hicimos juntos desde el Gobierno. ¿Por qué desplazarse? Ya sé yo que desplazarse no es un capricho y que los partidos que toman esta o la otra resolución lo hacen atendiendo a razones que yo respeto, pero que no han acabado de convencerme, y a mí me parece que, planteada la cuestión entre ser o no ser una República como la que nosotros habíamos creado, presentar o no una política como la que veníamos haciendo, ante todo es conquistar el número, ponerse en posibilidad de mantener la política sin perjuicio de que, después, cada cual siga el camino que sus convicciones le impongan o aconsejen. Pero hay que hacer resaltar en estos momentos que el régimen republicano está hoy en inminente peligro.

RESPONSABILIDAD Y PANORAMA DEL MOMENTO

Yo tengo que deciros, porque lo vengo observando ante los distintos auditorios ante quienes comparezco, y he sacado la impresión de que en gran parte el cuerpo electoral español no se ha dado cuenta de los días críticos que estamos pasando, de la importancia que va a tener el escrutinio del día 19. Es frecuente que los partidos, sean cuales fueren, examinen el problema de su provincia, computen fuerzas, hagan cálculos, se forjen estas o las otras ilusiones; pero es demasiado cierto que no todos han echado una visual por el panorama total de España. Y yo tengo que llamaros la atención sobre la gravedad del día 19, en el que podemos perder incluso la República. Podemos perder la República, y es menester que el cuerpo electoral lo sepa, que se entere, que advierta el peligro, para ver si la proximidad del peligro le hace dar aquel salto con el ímpetu necesario que le dio el año 31, para volver a recuperar, para reconquistar el régimen, que está a punto de perderse. (Gran ovación).

Cuando yo hablo de perder la República no quiero decir que se vaya a proclamar el día 20 de noviembre una anarquía ni que se vaya a instaurar una de esas ridículas intentonas de fascismo en que hasta el propio Gobierno parece creer y darle alientos con su propio susto, no. Ya sé yo que habrá un Parlamento, que habrá una mayoría que se llame republicana y que seguirán imperando las mismas leyes y la Constitución misma, ya lo sé; pero, no necesito deciros, amigos y correligionarios,

que con la Constitución en la mano la República se puede paralizar o puede seguir progresando. Que con las leyes orgánicas y constituyentes que se han votado, o se puede seguir desarrollando la Constitución misma y mantener el progreso de la República, o se pueden estancar o se pueden detener o se pueden modificar las leyes, y dentro de uno o de dos años no conoceremos ni por las orejas a la República que nosotros hemos creado y a la que tanto hemos amado. Esto es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Cuando se ha conseguido la disolución del Parlamento, sin duda por el consejo más imprudente-, como no fuese el consejo más interesado y más egoísta que puede salir de los labios de un político-, ¿qué se pretendía? En primer término, asegurar el predominio de un partido republicano enfrente de la coalición gobernante. Y es una cosa notoria que ningún partido republicano de los que actualmente existen en España, sea histórico o moderno, tiene por sí solo fuerza bastante para dirigir la República; tampoco la tiene el partido socialista, tampoco la tienen las derechas.

¿Cuál sería, cuál hubiera sido lo lógico frente a una consulta desinteresada del cuerpo electoral? Lo más lógico hubiera sido que los republicanos, juntos, los republicanos de izquierda, aliados a los socialistas, marchásemos al mantenimiento de nuestra política. Se ha combatido en el Parlamento y fuera del Parlamento la política de colaboración republicana y socialista. ¡Pues que vayan ellos también a consultar al sufragio, pero sólo! Que consulten al sufragio las derechas si les abona o no su criterio. Y esto no se ha hecho, ciudadanos; esto

01166

no se hace. Lo que han hecho ellos es alimentarse de los últimos restos de la monarquía, de los agrarios más o menos monárquicos.

A favor de esta alianza, más o menos descarada o absolutamente descubierta, se quiere formar una opinión que no existe, una opinión contra la de la República; pero ya sabemos que esa opinión es contraria a la República.

¡No habíamos de saber que la opinión de los agrarios era contraria!... Pero la de estos señores no es una oposición determinada, sino una oposición a la República. ¿Y es tolerable, es lícito que frente a una campaña electoral, cuando se va a buscar el voto para mañana alcanzar el Gobierno; es lícito que no se diga claro que de lo que se trata es de derribar la República? Esto es lo que pasa en las elecciones actuales. Es preciso desenmascararlo y que se sepa mañana, cuando haya un Parlamento ordinario -que no podrá disolverse en cuatro años-, que se corre el peligro de entregar por cuatro años a la República en manos de una alianza de republicanos, que yo no dudo que lo son, pero a los que se les agrega una inmensa masa de fuerza derechista, que es monárquica y que lo seguirá siendo siempre. (Aplausos).

FIJANDO POSICIONES

Nosotros mantenemos nuestra unión de republicanos de izquierda con el partido socialista. ¿Para qué? ¿Para hacer una política socialista? ... De ninguna manera. Se ha hecho con

01167

tra el Gobierno de la República una campaña feroz, fundada en la alegación de que nosotros entregamos la República a los socialistas -y ni los que lo dicen lo creen-. Cuando aún existía la monarquía en España, los republicanos de todos los partidos, incluso los de la extrema derecha republicana -nadie lo podrá desmentir-, estimaron inexcusable el concurso del partido socialista y de la Unión General de Trabajadores y de la C.N.T. para traer la República, y se hizo entonces una alianza entre todos los partidos republicanos, los de la derecha, los de la izquierda, el partido socialista, los dirigentes de la Unión General de Trabajadores, y se recabó la benevolencia -que se obtuvo, por lo menos de palabra-, la benevolencia de la Confederación Nacional del Trabajo para poder instaurar la República por un movimiento revolucionario o por un movimiento electoral; y cuando se hizo esta alianza, los que éramos delegados de los partidos del Comité revolucionario convinimos en un programa de Gobierno que fue votado por unanimidad, no sólo de los partidos republicanos de izquierda de la República, sino por los conservadores de la República, por los más conservadores de la República, y con el silencio -que nosotros consideramos aprobatorio- de los representantes del partido radical.

Y lo que nosotros hemos hecho del Gobierno, lo mismo cuando sólo era yo ministro que después cuando he sido Presidente -y cuando presidía el Gobierno otra figura excelsa de la República-, no ha sido sino desarrollar en leyes lo que allí quedó convenido entre todos los partidos republicanos y el socialista. Y nos hemos quedado aún muy lejos de lo que se convi

no y se pactó en aquellas reuniones previas de la revolución.

LA LEALTAD DE LOS SOCIALISTAS

¿Política socialista? No. Política republicana: lo hecho no es sino el mínimo, en cuanto a interés social, que una República democrática puede otorgar al trabajador. Política aceptada por todos, y de la cual ahora algunos reniegan por que sirve para ello de bandera electoral.

Los socialistas -yo tengo autoridad para decirlo-, los socialistas, en el Gobierno, jamás me han pedido a mí que torciera la conducta de la República en favor de su partido o de sus intereses de partido. ¡Jamás me han pedido a mí que llevase al Parlamento una ley que no estuviera convenida antes de la revolución;

En la crisis de diciembre del año 31 dije en el Parlamento que no se había presentado a las Cortes ni una sola ley de reforma social que no estuviese presentada antes de ser yo Jefe del Gobierno. Las Cortes constituyentes no han hecho sino votar leyes de reforma social que estuvieron presentadas antes de ser yo Presidente del Consejo de ministros. Después no se ha presentado una más. ¿Con qué derecho se me dice a mí ahora que soy el hombre republicano que ha entregado la Repú**blica** a los socialistas? Nadie lo cree. Lo que ocurre es que, en España, la contienda entre el obrero y el patrono es más fuerte y excede de los términos mismos de la legalidad. El pretexto contra la política del Gobierno anterior y contra el Par

lamento no viene de la legislación social ni de actos del Gobierno. La legislación social ha consistido en crear organismos de conciliación que podrán ser mejores o peores, pero cuya estructura es verdaderamente inatacable y cuya necesidad es evidente, a no ser que se quiera lanzar a los españoles unos contra otros para dirimir sus contiendas a tiros, bombas y navajas. No habrá ser civilizado que pida esto a la República. ¡Ni viene de ahí, ni de la legislación de las Cortes Constituyentes, ni de actos de Gobierno! Viene, naturalmente, de la contienda de los trabajadores con las bases de trabajo, por la lucha del mejoramiento social del proletariado que nosotros no hemos inventado. ¡La República no ha inventado la lucha de salarios! No hemos inventado la lucha de clases. El obrero que quiere mejorar su condición, no espera a la República. Ni el patrono que niega al obrero cualquier beneficio no espera a que se implante la monarquía para negárselo. ¡Esta es la realidad! Y esta contienda que vosotros los valencianos -por mucho que os haya podido afectar en alguna ocasión no conocéis más que de oídas-, esta contienda, donde alcanza proporciones de ferocidad insospechada es en las provincias españolas de agricultura misérrima, de gran propiedad, donde la economía agrícola está fundada sobre el hambre del bracero durante seis meses al año y donde los patronos están acostumbrados a obtener grandes ventajas contando con tener parados a los braceros durante otros seis meses cuando no los necesitan. (Grandes aplausos). ¡Esta base es de una realidad terrible y no depende de que haya Republica o de que no haya República, de que haya un Gobierno so-

cialista o de que haya un Gobierno republicano conservador;... Eso existirá siempre, porque es la necesidad urgente, apremiante, del hambre y, además, otra cosa: el despertar de la conciencia de la clase proletaria, a la cual ya no se la puede sujetar con tiros de guardia civil; no se puede ni se debe, y nosotros no hemos querido hacerlo ni lo hemos hecho. (Grandes aplausos).

LA REFORMA AGRARIA

Una vez me decía a mí en el Congreso una persona , por lo demás digna de todo respeto:

-Vosotros, con esa política, estáis arruinando la economía nacional.

Y yo dije: -hablábamos de la Reforma agraria-: ¿Es que la economía agraria española (naturalmente hablábamos de las provincias del Sur y de Extremadura), donde el problema tiene esta gravedad y esta agudización, es que la economía agraria española, tiene que fundarse precisamente sobre el hambre y la miseria del bracero? ¿Sí o no? Y nadie se atrevió a decirme que sí. Y pues, si no se puede fundar en eso, ¿no debe la República española hacer el sacrificio necesario por el Estado, o como fuese, en remedio de esa situación para que pasemos pronto ese trance difícil en una economía miserable, de tener siempre un roído hueso que no basta a alcanzar el sustento del bracero ni del patrono cuando es pobre?...

Y cuando nosotros hemos querido hacer la ley Agraria,

y cuando hemos querido hacerla sin daño del derecho de propiedad; cuando una ley agraria es una ley conservadora, una ley que apenas ha lastimado a los grandes propietarios, ha sido menester el intento del 10 de agosto para que el Parlamento republicano llevase un proyecto, al despertarse un movimiento de justa cólera y de indignación de los republicanos, para imponer a la nobleza la expropiación de los bienes, una especie de desquite y de castigo con la misma actitud que ellos habían adoptado contra la República. ¡Gracias a ello ha tenido la República tierras que ofrecer a los proletarios andaluces y extremeños; Y esta ley conservadora de la Reforma agraria, hemos querido afirmarla y completarla con la ley de Arrendamientos y con la ley de Rescate de bienes comunales -que si se vota será una verdadera revolución en España, porque devolverá la independencia económica a los Municipios y les sacará de la tiranía del cacique y de la miseria al pobre bracero que no tiene más que un escaso jornal. Esas dos leyes han sido el grito que ha hecho derramarse la indignación de toda persona opuesta a esto. La ley de Arrendamientos -que yo he tenido en el Parlamento tres meses, día por día, soportando todas las maniobras públicas o escondidas de aquellos que se sentían asustados por todos los intereses que la ley amenaza- esa ley ha quedado arrumbada por la disolución del Parlamento, y muchos habrán respirado fuerte el día en que se disolvieron las Cortes, pero, ¡cuántos millones de pequeños propietarios habrán llorado y tendrán que llorar pensando en la desaparición del Parlamento que no ha podido votar esa reforma; ... (Grandes aplausos).

01172

¡Este era el misterio de nuestra política titulada socialista! Nosotros no somos socialistas, somos republicanos de izquierda; pero los socialistas sí que son republicanos -harto más que muchos que se lo llaman- y no ha habido en ellos nigún desfallecimiento ni una sola deslealtad. Y siendo republicanos unos y otros nos ha parecido inexcusable torcer las bases del régimen dentro de las cuales todos pudiéramos vivir y abrir caminos al progreso de la democracia y a las vías legales de la propaganda, y aún mañana, si ellos lo saben conquistar legitimamente, todo el mundo tendrá que respetarlo.

NUESTRA CONDUCTA Y LA DE ELLOS

A lo que nos hemos opuesto es a la violencia, a la amenaza, al motín, venga de donde viniese, y es justo decirlo: ha venido más veces de las derechas extremas, enemigas del régimen, que de las extremas izquierdas, porque muchos movimientos más o menos descubiertos de extremismo revolucionario y anarquizante, a quienes aprovechaban no era a sus promotores, sino a los que estaban entre bastidores acechando, a pretexto de restablecer el orden y sofocar la anarquía. Las connivencias están bien claras. Los propósitos lo están también. Y cuando nosotros, entre formidables oleadas de insurrección, hemos sabido imponer el orden a unos y otros -sin doblegarnos ante niguna consideración y sin abusar jamás del derecho del Poder público a hacerse respetar-, entonces ha empezado esa otra leyenda de nuestra dureza, de nuestra crueldad y de nuestra falta de corazón. ¡Si nosotros no hubiéramos tenido eso que llaman

01173

corazón y que yo supongo que quiere decir buenos sentimientos, algunos no podrían salir a cara descubierta por las calles en estos días; (Muy bien. Grandes aplausos).

CONTINUIDAD EN LA OBRA

Por lo tanto, cuando nosotros venimos a mantener en la provincia de Valencia una candidatura del Frente Unico de Izquierdas, lo que venimos a mantener es la política que hemos desarrollado en el Gobierno y los proyectos que se han quedado estancados por la disolución del Parlamento. ¡Ah! Pero no hay que confundir esto -como se ha venido haciendo hasta ahora- con el problema puramente accidental de que los socialistas van a gobernar o no. ¿Qué tiene que ver eso?

Se gobierna o no se gobierna según la fuerza que se tiene en el Parlamento, según el estado de la opinión pública; pero la política común de puntos coincidentes entre la izquierda republicana y los propósitos del mejoramiento social que nosotros podemos y debemos otorgar a las aspiraciones del proletariado, depende de nuestras propias convicciones republicanas, de lo que está en los programas de nuestros partidos, de la necesidad moral y de la justicia, a los cuales hay que abrir cauces. Esto es todo; pero esa campaña, fundada aparentemente en los estragos de una supuesta política socialista, que no ha existido por ninguna parte -los socialistas lo saben mejor que yo-, toda esta campaña no es más que una apariencia, un pretexto.

01174

Cuando discutimos el Estatuto de Cataluña, recordad las tempestades que se desencadenaron contra el Gobierno, imputándonos unos supuestos peligros de la unidad de la patria; se tocaban las fibras más delicadas del sentimiento nacional, se agitaban criminalmente las antipatías de región a región, que son inevitables; se quería hacer un arma política, y hasta se nos designaba a la mano justiciera de no sé qué poderoso eje-cutor de la justicia sobrehumana para que no se cortara en pedazos la patria española.

Aquello era tan monstruoso, tan absurdo, y los resultados de nuestra política tan evidentes y tan notorios, que ya nadie se acuerda de aquella campaña; pero si no hubiéramos sabido resistirla habríamos caído -como hemos caído ahora, bajo el supuesto de que nosotros hacemos dejación continua a favor de los socialistas porque les entregábamos el Poder- ante lo que querían que significase la destrucción de la unidad nacional-. Resistimos aquella campaña -yo sé a costa de cuánta paciencia, de qué sacrificios, de qué tenacidad- y entonces empezó otra -y no quiero tocar este asunto sino con mano ligera , pero no tengo más remedio que tocarlo-. Cuando se votó la Constitución llegamos al artículo 26, que entonces era el artículo 24.

El artículo 26 de la Constitución, en el cual se encontró, gracias a mi intervención personal, una salida a un conflicto parlamentario- que al parecer no la tenía, porque la fracción más numerosa de la Cámara proponía una medida revoluciona-

ria, radical, y otras fracciones de la Cámara proponían soluciones mucho más conservadoras, y algunas sobre el pretexto de la libertad y transigencia, venían a dejar las cosas como estaban en los tiempos de la monarquía, y entonces yo, improvisadamente -como se improvisan las cosas que uno lleva mucho tiempo maduras y pensadas-, intervine en la cuestión y tuve la suerte de hacer tales reflexiones a nuestros camaradas del partido socialista, que con una gran dignidad y conciencia y un gran sentido de responsabilidad, se retiraron de la sesión a deliberar y volvieron a ella aceptando mis conclusiones y así se elaboró el artículo 26 de la Constitución, que representa una transacción que entonces a algunos amigos míos les pareció moderada, pero que la realidad está demostrando que aquella moderación en la práctica ha excedido de los posibles dentro de la realidad republicana y está un poco lejos de haber llegado a una consolidación tal como ellos lo pensaron entonces.

APUNTES PARA LA HISTORIA

Se votó este artículo. ¡Ah! ¿Pero creía alguien en España que este problema del artículo 26 no podría resolverse o que nosotros lo íbamos a dejar arrinconado en la Cámara? ... ¿Es que el artículo 26 de la Constitución iba a servir para que los profesores de Derecho político lo explicasen en la Universidad, diciendo a sus alumnos en qué consiste en el Derecho español separar la Iglesia del Estado sin separarla nunca? No. No. El artículo 26 de la Constitución tenía la conciencia de las Cortes republicanas y la conciencia del espíritu laico, que es

01176

gran mayoría, dígase lo que se diga, en la población española. Teníamos la necesidad de llevarlo a la práctica con una ley or
gánica, y nosotros hicimos la Ley de Congregaciones Religiosas, otra ley que no hace sino traducir escrupulosamente los precep
tos del artículo constitucional. Artículo de la Constitución y Ley de Congregaciones Religiosas, que habiendo levantado tem
pestades entre los elementos clericales españoles, si la Iglesia católica no tuviera también su galería habría aceptado pro
bablemente sin discusión. Porque yo me imagino -procuro poner me momentáneamente en el espí
ritu de sus directores, yo me ima
gino- que si en el momento de la revolución de abril le hubiesen dicho a la Iglesia católica en España que la reacción ofen
siva del pueblo español contra los abusos y las intemperancias y las intromisiones de la potestad religiosa en la vida civil del Estado iba a quedar puramente en la doctrina y en el hecho de la separación y en la simple disolución de la orden de los jesuitas, se habrían dado por contentos. Lo que pasa es que transcurridos los primeros días, los primeros meses del fervor revolucionario, alguien se imaginó que este espíritu laico re
formador de los vicios fundamentales de la Constitución políti
ca de España, se habría marchitado, como se habían marchitado las primeras banderas y las primeras guirnaldas del 14 de abril del 31.

Pero no; aquí estábamos nosotros para demostrar que esto era inexacto, y se llevó a la Ley, y cuando yo vi el giro que tomaba el problema alrededor de esta ley, adquirí el con
vencimiento de que sólo elevándose a un grado de paciencia ra-

01177

yana, iba a decir en la santidad, llegaríamos a obtener el fruto apetecido -haced memoria, hacedmemoria- de la historia de las Constituyentes. No hablo de la historia del Gobierno. Haced memoria de la historia de las Constituyentes y recordad lo que ha pasado en ellas desde el mes de febrero, es decir, desde el punto y hora en que se puso a debate la Ley de Congregaciones Religiosas, ¿qué armas, señores, no se han utilizado?...

Ni siquiera la conjuración, ni siquiera los intentos de corrupción, ni siquiera las amenazas del orden público, todo sin contar los argumentos despreciables de los parlamentarios para el propio derrumbamiento del Gobierno y de las Cortes Constituyentes. Contra esta Ley que era la realidad efectiva de la política laica, la supresión de hechos vergonzosos en la historia del Estado español, se desarrollaron toda clase de ofensivas. ¿Os habéis olvidado de la obstrucción? Yo todavía no me he olvidado de ella. (Grandes aplausos). La obstrucción ha sido el hecho parlamentario de una monstruosidad tal que caso semejante no se ha registrado en ningún Parlamento del mundo; documentos como los que lanzaron los partidos implicados en la obstrucción en los meses de marzo y abril, no se han leído jamás en ninguna parte, y entonces tuve yo una de las mayores satisfacciones de mi vida política porque conservo escrito y firmado por los jefes de la obstrucción un papel que se dio a los periódicos en el que se dice:

"Nosotros no podemos vencer al Gobierno en el Parlamento. No tenemos razones que oponer al Gobierno, y en vista de

01178

esto le hacemos la obstrucción". Este es mi primer título de gloria parlamentaria. (Grandes aplausos).

Porque, ¿qué se le puede decir a un Gobierno, y qué se le puede decir a un Presidente de Gobierno más halagüeño, más satisfactorio, dado el régimen parlamentario, que es discutir y razonar mediante la palabra? ¿Qué se le puede decir de más satisfactorio? No le podemos vencer a usted en el Congreso. Pues, ¿cómo me quieren ustedes vencer? ¿A tiros, en la calle? Ya lo probaron en el año 32 y tampoco pudieron. (Grandes aplausos).

Invencible en el Parlamento, invencible en la calle, la tenacidad de la oposición al Gobierno mejor o peor manejada por los interesados en hacer fracasar nuestra política, no lo consiguieron. Pero yo sé deciros que el día que se votó el último artículo de la Ley de Congregaciones Religiosas, yo dije para mí: Ha terminado mi etapa de Gobierno parlamentario. Porque yo estaba cierto de que la reforma llevada a cabo por nosotros con este empuje, con aquella tenacidad, con aquel ahinco, con aquella lealtad de espíritu, iba a levantar tempestades formidables, y aquí tenéis el resultado de la tempestad.

Todas las derechas que hace dos años se escondían del pueblo, que no se atrevían a hablar siquiera delante de nosotros, ahí los tenéis lanzándose al asalto del Poder. ¿Qué propósito les anima? Acaba de decir en un mitin público uno de los hombres más destacados de la coalición, que se apresuran a gobernar con el propósito de reformar lo que ellos llaman las le

01179

yes sectarias, porque ellos, afortunadamente, se dicen católicos. Ahí tenéis el programa: Derogación de la Ley de Congregaciones Religiosas y rectificación de toda nuestra política.

(Aplausos). (Voces: ¡No, no!)

Y ahora se explota, como entonces, el tópico del sectarismo. Yo supongo, y tengo pruebas de ello, pruebas escritas, de que una porción de españoles de buena fe, de buena fe, timoratos, incluso delicados de espíritu, están persuadidos de que la política de la República en este particular ha sido persecutoria, sectaria, enemiga de la Religión. Lo creerán de buena fe porque es muy difícil que a una persona -ya en la madurez, por ejemplo, cuando difícilmente se trastueca la posición espiritual de cada uno-, es muy difícil persuadirla de que todas las causas del fanatismo o de ceguera espiritual que le fue imbuída en la infancia, o son excesivas o son falsas o son absurdas. Y muchas gentes delicadas, de buena intención, que no serían enemigas de la República, a lo mejor lo son porque se persuaden de que la Religión es perseguida, y esto es falso, absolutamente falso. Sobre este punto se inspira una gran parte de la campaña antirepublikana. Porque no se hace la campaña diciendo que se va a reformar esta ley que les parece injusta, sino que dicen: ¡Vamos a derribar la República, que ha hecho esta ley que creemos injusta!

La diferencia salta a la vista. Nosotros no hemos hecho leyes sectarias contra nadie. No hemos hecho leyes sectarias ni contra los monárquicos ni contra los enemigos de la República

ca, porque hemos hecho una Constitución liberal y hemos dado libertad a los enemigos para que se valgan de esa libertad en contra de la República misma, y nosotros no íbamos a hacer una excepción ante la conciencia religiosa. Todo lo contrario. Cuando oigáis a los enemigos de la República lanzar al rostro de los buenos republicanos la tacha de sectarismo y persecución, decidles que mienten, y si son personas de lealtad y de buena fe, procurad desvanecer sus escrúpulos. Nosotros no hemos hecho otra cosa con respecto a la Iglesia y a los católicos de España que colocarlos en una simple posición. La posición de libertad, de libertad para el Estado que antes no la tenía, y de libertad para la Iglesia que tampoco la tenía. (Grandes - aplausos).

Hemos dado a las Iglesias en general -a la católica y a las demás que haya- absoluta y plena libertad en su personalidad y en su jerarquía. La jerarquía de la Iglesia católica está reconocida por la Ley. ¿Dónde se puede decir que no la hemos reconocido?... Si la hubiéramos perseguido, habríamos comenzado por desconocerla jurídicamente, y nuestra República reconoce su existencia, con su propia jerarquía. Libertad para los católicos, protestantes y mahometanos. Ya a nadie se le pregunta lo que piensa y cree en materia religiosa. ¡Antes se le preguntaba para todo, incluso para hacer el servicio militar! (Grandiosa ovación).

No digamos para los demás actos civiles importantes de la vida. Y la Constitución ha escrito que la Religión no

sea ni privilegio ni menoscabo para los españoles. Cada cual será en materia de religión lo que quiera, piense y crea, que nadie se lo preguntará. ¿A alguien se le ha coartado en ninguna parte el derecho de profesar una religión, de casarse religiosamente y de enterrarse en un cementerio o de hacer lo que quiera?... A nadie. Lo que pasa es que no se le impone a nadie la obligación contraria y la Iglesia -que estaba acostumbrada a constatar los intereses políticos de los partidos de la monarquía, a cambio de la protección oficial del Estado, y sobre todo de las altas cumbres de la monarquía-, por lo menos nos debe la situación de que no tendrá ahora la necesidad de hacer antesala al ministro de Justicia para ver si es grato o no el obispo de Soria o el arzobispo de Granada. (Grandes aplausos). A nosotros nos es igual, con tal de que no sea persona ingrata al régimen republicano, que es lo menos que se puede pedir.

Frente al problema religioso, la República no ha hecho sino esto: atenerse a los principios liberales que son internacionales y obligados en todos los países civilizados del mundo, en lo cual nosotros, los españoles, estábamos por debajo de Turquía. Entre otras liberaciones que debe España a la República nos debe ésta, sin menoscabo para nadie y sin perjuicio para la conciencia religiosa de ningún español. Sobre esto se trabaja contra el régimen, buscando como un campo especial la conciencia de las mujeres.

EL VOTO DE LA MUJER

Se tiene la pretensión de que la mujer española es

un ser todavía inferior, al cual será menester conducir o por el sacerdote o por el marido o por alguna persona que ejerza sobre ella una potestad superior, y nosotros, los republicanos, generosamente, cerrando los ojos a esos peligros, lo que hemos hecho con la mujer ha sido elevarla a la dignidad política que nunca pudo obtener en España, y ahora vamos a ver qué hace la mujer española con la República, que la ha dignificado y que le ha otorgado aquellos derechos que ni sus propios amigos estaban dispuestos a otorgarle.

Nosotros ahora nos encontramos en el punto y hora de recoger los frutos de una obra larga y difícil. Voto de la mujer. Muchos se alarman. El voto de la mujer va a perder la República. Yo no lo creo. Pero si el voto de la mujer perdiese o pusiese en peligro la República que había sido justa y liberal, no habría ~~que~~ arrepentirse de haber sido justos y liberales. Lo que habría de hacerse sería acentuar la obra de la educación de la mujer española, que, a mi juicio, y sin ofensa para nadie, a veces parece tan necesaria en el sexo fuerte como en el débil. (Muy bien. Aplausos).

Por lo menos yo no he visto que las divisiones polí ticas, aquí o allá, en esta región o en la otra, se establezcan ni por la edad ni por el sexo. Tan furibundos y feroces ca vernícolas veo en apuestos varones como en débiles mujeres; lue go no debe depender del sexo, sino del talento, el entendimiento y la educación.

POLITICA PEDAGOGICA

Por eso, ciudadanos, uno de los capítulos más importantes de nuestra obra es el que se refiere a la escuela, tema del que no estamos dispuestos a apartarnos ni una tilde. Nosotros no nacemos republicanos ni monárquicos; somos lo que nos enseñan a ser, y nos orientamos en la vida pública por nuestra conciencia, formada en la escuela de los estudios, que es lo que acaba por darnos la luz que nos guía. Y si nosotros queremos tener República sólidamente fundada, eternamente fundada, no tenemos que buscarla sólo en las divagaciones políticas o en las Asociaciones de políticos; tenemos que buscarla en la preparación de las generaciones que nos sucedan, y precisamente en la escuela. Enseñarles la verdadera historia española, hasta ahora tejida con la fantasía y la leyenda reunidas para corromper la conciencia y el entendimiento de muchas generaciones de españoles. Bastará con que los españoles niños se preparen en la escuela con el conocimiento real de la historia de nuestra patria para hacer de ellos republicanos auténticos, fuente de republicanos enemigos de la monarquía y amigos de la República. (Grandes aplausos).

Nosotros hemos fundado la República en la Ley, la hemos asentado en sus órganos jurídicos de expresión. Hemos creado un Estado; pero la fuente profunda indestructible es la conciencia de los ciudadanos formada en la escuela, y antes que ceder la escuela, lo cederíamos todo; todos los organismos del Estado nos importan menos que la escuela y la Universidad, que

ahí es donde hemos de fundar la República del porvenir. (Grandes aplausos).

A esta política es a la que nosotros aspiramos y de la que esperamos que salga la suficiente elevación del espíritu español para que no pueda haber españoles que crean que desgañitarse en un callejón es una manera de opinar. (Aplausos). O que patear en una reunión pública puede sustituir a la noble expresión de la palabra humana. Eso no basta. Hay que salir de lo zoológico y elevarse a lo moral. (Formidable ovación).

El que no sepa salir de eso, justo es decir que se le tiene en consideración de ciudadanos por misericordia; pero realmente no por derecho. El que dirige un partido o representa una política que pueda estar fundada en semejante manera de entender la relación política del país, tampoco tiene derecho al trato común de gentes entres personas cultas y civilizadas; tampoco lo tiene el que vive dentro de la tolerancia de la Constitución, que parte del supuesto de que todos los españoles somos iguales.

DERECHO Y ETICA

Somos iguales ante la Ley; pero moralmente hay entre nosotros abismos insalvables, y uno de esos abismos afortunadamente insalvables, pero que yo me propongo hacer cada vez más profundo, temeroso para los que asomen a él, es el de la rectitud y la moralidad política.

Si nosotros hemos sido combatidos por laicos y hemos sido combatidos por articular unas mejoras políticas y sociales, por donde más odios nos hemos acarreado, por donde más enemistades se han despertado contra nosotros, es porque en el ejercicio del Poder la gente está segura de que nosotros no transigiremos ni por amistad, ni por inmoralidad, ni por corrupción, con la seguridad de que nadie podrá tachar públicamente ninguno de nuestros actos. Y esta seguridad y otras adquiridas a costa suya y con despecho suyo después de largos meses de experiencias, y en vista de que no podían aportillar el alcázar de nuestra integridad moral, ésto les tiene furiosos, avergonzados, porque nuestra propia presencia es una acusación contra ellos, y cuando nos ven, tienen que bajar los ojos con rubor, porque gracias a nosotros viven. (Grandes aplausos). Nosotros no hemos transigido jamás con nada turbio, no hemos transigido jamás, y este convencimiento de los ataques más viles, de los más despreciables que se han desencadenado contra nosotros. Vosotros quizá hayáis oído o hayáis leído alguna de las demostraciones de odio más feroz que se han podido desencadenar contra un grupo de hombres y contra un hombre. Yo las acepto todas, y me envanezco delante del pueblo de recibirlas, porque yo no podía soñar con una reputación mejor que haber venido yo a representar en la política española, en compañía de mis colaboradores, de todo el Gobierno y mis aliados, la moralidad incorruptible de los principios republicanos. ¿Qué más puede desearse y qué mayor ambición puede tener un hombre en una democracia que ser aborrecido por los enemigos de la democracia y

los enemigos de la República a causa precisamente de eso que os digo?... (Aplausos).

Por mi parte, ya lo saben ellos, por mi parte pueden seguir calumniando hasta que yo les diga basta, que con sus calumnias, con sus ataques, me van a levantar un pedestal y me voy a salir por las cumbres de las cordilleras. Si en realidad yo tengo alguna fuerza en la opinión pública, ellos me la dan o más bien me la conquisto con mi conducta en cierto modo; pero esto es el eje de la política nacional española. Si nosotros no acertamos, los republicanos todos no acertamos a poner en el centro de la Constitución del Estado español un eje duro y brillante y puro como un diamante, la República se hundirá, se hundirá por su propio desprestigio como se hundió la monarquía. Vosotros estaréis convencidos de que si hubo en el año 31 un movimiento nacional que derrumbó al rey y a todo lo que el rey representaba, más que nada aquello fue labrado por la propia inmoralidad de la casa real y de la monarquía, porque los españoles perdonamos un error de entendimiento, perdonamos una equivocación de un Gobierno, perdonamos una ley mal hecha, un tropiezo de un ministro; pero no perdonamos nunca ni olvidamos jamás un desliz de orden moral.

Nosotros hemos visto en España gentes de talento poco común desprestigiados y desacreditados por la nación al tener ésta la convicción de que nunca han sido rectos en su conducta moral. La monarquía se hundió por eso, porque primeramente se derrumbó su prestigio y sus hombres quedaron imposibilitados

01187

para seguir ostentando la representación de España. El pueblo español se avergonzó de ello, y por eso les expulsó. Guardémonos mucho de que, por transigencias a veces disculpables, pueda recaer un día sobre la República, al cabo de meses y meses, un desprestigio igual, porque entonces los votos del mundo, todas las cosas del mundo, no podrían impedir que la República se desmonorase del corazón de los españoles, ya que estaría virtualmente muerta políticamente también, y cuando yo digo que éste es el eje político de la política española, lo digo porque, repasando los anales de la política española del último siglo, lo que se ve siempre a través de intrigas palatinas, de choques parlamentarios y guerras civiles y contiendas de partidos, lo que se ve siempre es la corrupción.

El tapujo escondido, el chachullo hecho a espaldas del pueblo, la componenda, el fracaso en último término, y nosotros hemos ido a la vida política con nuestra honradez -no hablo personalmente-, ante todo. Y no habéis visto vosotros, los que seáis ya de alguna edad, que un ministro que ha tenido en su mano durante dos años y medio poderes ilimitados, durante mucho tiempo, porque no había Constitución, poderes extraordinarios en virtud de la ley de Defensa de la República, que hemos hecho un Estado nuevo, sin que tengamos que sonrojarnos de nada y sin que pueda haber un ciudadano en ninguna parte que pueda acusarnos de nada.

Esto no se había visto nunca en España, y esto es mayor revolución aún que haber cambiado el régimen. (Atronadores

01188

aplausos).

Por tanto, amigos y correligionarios, cuando yo vengo en apoyo de la candidatura del Frente Unico de Izquierdas de la provincia de Valencia, y diciendo estas palabras de amistad y fervor republicano, a lo que os invito y para lo que os llamo es para que nos apoyéis y nos ayudéis en esta manera de entender la política.

No se trata, pues, ahora, de hacer un programa político, ni menos un programa de gobierno, sino de que todos manifestemos cuál es nuestra manera de entender la República y nuestra manera de entender España y nuestra manera de entender la ciudadanía, para que podamos tener la satisfacción de haber traído entre todos un régimen adecuado a la realidad nacional.

Con estas palabras me despido de vosotros, deseando el triunfo de la República de izquierdas el día 19".

01189

DISCURSO EN CASTELLON

Discurso pronunciado en la Plaza de Toros de Castellón, el 12 de noviembre de 1933, durante la campaña electoral.

(El Mercantil Valenciano, 14-11-33).

Ciudadanos: Hace ya mucho tiempo que hubiera yo que rido venir a cumplir una promesa dirigida a mis correligionarios de esta provincia y a demostraros el interés con que siempre hemos seguido el desarrollo y el crecimiento de la democracia republicana de Castellón; pero quizá, ninguno de vosotros dejará de hacerse cargo, y ciertamente se lo hicieron y se lo han hecho siempre mis compañeros republicanos y socialistas de Castellón, de que me ha sido absolutamente imposible durante dos años y medio abandonar el trabajo constante del Parlamento y del Gobierno, para dedicarme a la propaganda de nuestras ideas y a recibir del contacto con la democracia republicana el aliento que los políticos, que los gobernantes, tenemos que ir a buscar en la fuente de donde emana todo el sentimiento cívico nacional.

Nos ha sido imposible, y hoy, cabalmente, en vísperas de una contienda electoral de importancia que no puedo exagerar, cuando me es posible venir a veros, yo no os traigo ya a un propagandista, os traigo lo que queda de un propagandista, los restos de mis energías físicas, aunque la totalidad de mi entusiasmo y de mi entereza moral; pero yo no sé si tengo derecho a alegar ante vosotros como excusa de lo poco que os pueda decir, mi poca salud de hoy. Estamos obligados a darlo todo, y

01199

yo estoy dispuesto a hacer aquí el último esfuerzo que puedo por complacer vuestros entusiasmos, vuestra simpatía y vuestra curiosidad. (Aplausos).

EL FRENTE UNICO DE LAS IZQUIERDAS

Ciudadanos: A lo largo de la campaña electoral me ha sido dado observar el estado de la opinión pública en España, y las posiciones tomadas por los partidos republicanos para afrontar la contienda el día 19. Y debo decir en honor vuestro y para satisfacción de vuestro sentido político, que pocas provincias han tenido una visión tan clara de la situación planteada a la República como la tenéis en Castellón. Aquí habéis llegado a lo que a mi juicio es la verdad política del momento: La necesidad de hacer el frente único de las izquierdas para afrontar la lucha en condiciones de victoria.

Frente único que no ha podido realizarse en la mayor parte del territorio nacional por razones sin duda respetables, pero que representan una ventaja enorme, conseguida u otorgada, bien a nuestro pesar, a los que en la contienda del día 19 pretenden poner en tela de juicio la esencia misma del régimen republicano. Vosotros habéis tenido ese acierto. Y además, por la impresión que me da el auditorio, por las noticias que me comunican los compañeros, me hago cargo de que la situación moral de los castellonenses es la que corresponde a la importancia del domingo próximo, o sea, la de un alzamiento nacional de carácter pacífico y legal; pero un propio alzamiento de la

voluntad republicana, para imponer esa voluntad por los medios legales, frente al alzamiento faccioso contra el régimen republicano, que para vergüenza de todos, de todos los que nos llamamos republicanos y españoles, vemos compartida por aquellos que más obligados estaban a dar toda su vida, toda su energía en defensa del régimen que dicen profesar. (Grandes aplausos).

Y esta coalición, esta coalición del frente de izquierdas tiene además un sentido claro: representa exactamente la moralidad política, la lealtad política, la franqueza delante del sufragio universal. Ninguno de vosotros desconoce que la disolución del Parlamento, del Parlamento constituyente, que la caída de los gobiernos de coalición republicano-socialista, tienen por objeto, no un simple cambio de la política normal, en virtud de una oscilación del sentimiento público o de demostración del sufragio universal que la aconsejase, sino que tiene por objeto destruir hasta la raíz lo que esta política ha representado en el orden legislativo, en el orden de gobierno y hasta en la organización política por la Península; porque si pudieran no se contentarían con reformar la Constitución, con derogar las leyes orgánicas que nosotros hemos hecho votar, sino que desarraigarian del suelo nacional las organizaciones mismas de los partidos republicanos de izquierda y del partido socialista todo entero. (Grandes aplausos). Y puesto que lo que se busca en esta campaña electoral es deshacer nuestra obra, el sentido común mismo, el instinto de conservación y la dignidad que debemos a nuestra obra realizada y nuestros compromisos para el mañana, exigían esta coalición que vosotros habéis forma

do y estáis obligados a mantener, mientras no hayamos conseguido de nuevo la obra de gobierno y la obra legislativa que dejamos iniciada en el Parlamento constituyente. Porque nosotros, ciudadanos, portavoces de una revolución, autores de una Constitución, autores de las leyes que desarrollan y completan esa Constitución, estábamos en el trance de llevar a la práctica el contenido de una revolución, y esta obra no está concluída, y cuando algunos nos dicen por el lado de la derecha y del lado conservador: "Eso que habéis hecho es trastocar la economía nacional, destruir la familia, perturbar el orden público, comprometer la unidad de la patria, atacar a la conciencia religiosa; y en cambio, por la izquierda, se nos acusa de no haber hecho una obra bastante revolucionaria; eso lo que prueba, ciudadanos, es que el espíritu de la Constitución, ampliamente liberal, generosa, incluso para los enemigos de la República y de las leyes complementarias, inspirados en un espíritu de ecuanimidad, recto, leal y justiciero, demuestra que la interpretación del texto constitucional está en el fiel de la balanza de la República, y que nuestra obligación, si queremos que la República subsista, es impedir que esa obra se desvíe ni hacia el tirón derechista, monarquizante y fascista que pretenden darle, incluso con apelaciones a la fuerza física, ni hacia las convulsiones de la izquierda revolucionaria anarquizante, que hace su frente de ataque, no solamente contra los republicanos, sino quizá principalmente contra el proletariado organizado y democrático y respetuoso con la ley que confía en su esfuerzo propio para conseguir su ideal particular, pero que tiene la adhe

sión más formidable, más cordial, más disciplinada, más honorable y más dignamente en la Constitución que se ha votado y de cuya ayuda y de cuya alianza, nosotros debemos todos envanecernos. (Aplausos).

EL CONTENIDO DE LA REPUBLICA

Otras veces se nos dice: "Toda esta agitación que habéis sembrado por el país es estéril, y hay quien niega que nosotros, todos nosotros, hayamos realizado de verdad en España una revolución.

Yo decía hace poco en el Congreso de mi partido: ¡Ah! ¿No hemos hecho una revolución? No vamos a disputar por el nombre. Pero si no hemos hecho una revolución, ¿por qué nos increpan? ¿Por qué pretenden socavar los cimientos de la República? ¿Es que les molesta sólo el nombre, o es que no hemos acertado a dar un contenido a la República?" Pues ese contenido es la obra revolucionaria, que nosotros estamos desarrollando y que estamos dispuestos a continuar cuando nos sea posible continuarla. (Aplausos).

Nosotros no hemos cambiado solamente el título del régimen político de España, no nos hemos limitado a sacar las consecuencias del movimiento de abril del año 31, que fue un alzamiento de la dignidad española contra el régimen de la corrupción, del favoritismo, de escándalos de toda especie, no sólo de orden moral, sino de orden económico y financiero, con

tra el avasallamiento del pueblo español; aquel movimiento que el pueblo español tuvo sonrojado de la degradación, de la ignominia en que habían caído sus indignos representantes históricos. Nosotros no nos hemos limitado sólo a eso -alguno de los compañeros lo decía ayer-; ¿nos íbamos a contentar con sustituir el nombre propio, el nombre de Monarquía por el de República? Eso habría sido casi vano, una obra estéril.

No. Nosotros hemos cambiado la estructura del Estado español, nosotros hemos variado el concepto de la propiedad, nosotros hemos variado la estructura de la familia, nosotros hemos variado el estatuto religioso de la nación española, nosotros hemos separado la Iglesia del Estado y nosotros estamos dispuestos a sacar las últimas consecuencias de los principios de la Constitución, que abre un amplio margen para muchos años, quizás para generaciones, si queremos agotar toda la posibilidad de la justicia y de la reforma social y política que la Constitución nos otorga y permite explotar legalmente, por los medios que tienen los partidos, para explotar y traducir en obras reales los principios de la Constitución. (Aplausos).

Pero contra nosotros, contra el Parlamento Constituyente, contra los Gobiernos salidos del Parlamento Constituyente, se ha desencadenado públicamente una ofensiva brutal, ignominiosa, fundada en los puros instintos de la codicia política y manejada o poniendo en juego las armas más indignas. ¿Y por qué? El año pasado, apenas votada la Constitución, se constituyó un nuevo Gobierno, que yo presidí, de coalición republicana

no-socialista. Y decía hace un momento el compañero Sapiña que se dio paso a aquel Gobierno retirándose de la coalición pactada antes de venir la República, con la ruin esperanza, con el bajo cálculo de que yo sería un hombre tan desafortunado, que en quince días o en un mes rodaría desde el Poder al fondo del fracaso, y que podrían reírse de nosotros y que habiéndoles desembarazado de los obstáculos que podrían representar mi popularidad en España, ya podrían entrar desembarazadamente a explotar por su cuenta y riesgo y para su único provecho político el campo que nosotros les íbamos a dejar libre. Esto es exacto, probado con textos y con declaraciones de quien debió conducirse entonces con más cautela y más prudencia, si hubiera tenido un más exacto conocimiento de las personas. Pero entonces se encontraron con que hay todavía hombres en España con la suficiente abnegación, con suficiente desinterés para no tener ambición de ninguna especie, para no pedir nunca nada, pero con bastante sentido del deber o de la responsabilidad para que cuando el destino, o la suerte o la adversidad les pone en éste u otro puesto sepan sostenerlo con toda dignidad y no permitan jamás que en su mano el ejercicio del poder público padezca menoscabo ni deshonor ni ludibrio, y que además sean fieles cumplidores de los compromisos contraídos ante su propia conciencia, que vale más que los compromisos contraídos ante la opinión pública. (Formidable ovación).

Y cuando nosotros sentados en el Poder en una coalición pactada antes de la proclamación de la República, pactada incluso por los partidos republicanos más moderados y de extre

ma derecha, pactada para confeccionar un programa de reformas sociales y políticas, suscrito por los que hoy más furibundamente nos atacan, suscrito por partidos del centro, de la de recha republicana, cuando nosotros vinimos al Poder en aquellas circunstancias, nos pusimos francamente a realizarlo y se enteraron de que había en el Gobierno DIEZ HOMBRES y al fren te del Gobierno un Hombre, con H mayúscula. (Gran ovación). Y desde entonces no han perdido día ni hora para sembrar entre todos la confusión, el desconcierto y para desacreditarnos y hacernos fracasar ante la opinión pública, tachándonos de las mayores atrocidades, de las mayores ignominias que se pueden acumular sobre una coalición de hombres políticos. Pero a la vista está el éxito. (Aplausos).

LA CAMPAÑA CONTRA EL ESTATUTO CATALAN Y EL SILENCIO ANTE EL ESTATUTO VASCO

¿Qué han dicho contra nosotros? A nosotros se nos atacó el año pasado, cuando discutíamos el Estatuto de Cataluña, tomando en boca el nombre sagrado de la Patria, para arrojarnos al rostro la ofensa de que nosotros íbamos a desmembrar a España; acusación ignominiosa en cualquier boca, pero más ig nominiosa aún si procede de aquellos que habían votado una Cons titución, en la cual se reconocía el principio y la articulación misma de las autonomías regionales españolas, y que lo vo taron, quizá para engañar, porque cuando nosotros fuimos al Par lamento con la realidad, aplicando, desenvolviendo el principio autonomista, se alzaron contra nosotros, como si fuéramos a in

fringir no sólo la Constitución, como si fuéramos a atacar a la sagrada unidad española. Pues entonces, ¿para qué habían votado el texto constitucional? ¿Qué se proponían hacer en el Parlamento y ante el país? ¿Para no aplicarlo nunca?

Este era el secreto de su política, verdadera tradición española: hacer discursos en el Parlamento, tomar actitudes brillantes, votar leyes mejor o peor confeccionadas y luego archivarlas, engañar al pueblo, no cumplir con sus obligaciones... (Grandes y prolongados aplausos).

Se dio el caso, ciudadanos, de que yo no intervine en la discusión del texto constitucional en lo que se refiere al principio de la autonomía, que no intervine en la discusión de este tema, y no intervine más que una vez en la discusión de la Constitución, que no fue a propósito de la autonomía. Cuando yo me encontré en el Gobierno con la obligación de aplicar el texto constitucional, recayeron sobre mí todas las imputaciones más absurdas, como si yo hubiera inventado el problema de las personalidades regionales, como si yo hubiera sacado la Constitución del bolsillo o fuera un capricho o una terquedad mía llevar a la práctica aquel precepto constitucional. (Aplausos).

Aquella campaña tuvo una gravedad inmensa, una gravedad inmensa que hizo crisis en un día memorable, porque nadie puede impedir que a mentes poco preparadas o a espíritus sencillos ajenos a los problemas políticos, o a gentes que se dejan llevar de una emoción elemental, pero que no están habituadas

a gobernar, a discernir el valor de sus convicciones, por un espíritu crítico, hijo del estudio y de la meditación, nadie puede impedir que este género de espíritus, o esta clase de hombres se dejasen impresionar por aquellas infames propagandas que representaban al Gobierno republicano-socialista, como un Gobierno traidor a España, enemigo de España. Y esta campaña tan desusada engaño a una porción de gentes, las sugestionó, las ofuscó, las lanzó al delito de culminación de aquella campaña indecente, repugnante, mantenida en las Cortes y en parte de la prensa, salió a la luz, mejor dicho, salió a las tinieblas de una noche de agosto en Madrid. (Aplausos). Cuando pretendieron, a favor de un supuesto descuido mío, porque no me habían visto perder la tranquilidad, a favor de un supuesto descuido mío, pretendieron simplemente abrir las rejas del ministerio de la Guerra y pegarme cuatro tiros.

Y claro, aquello pasó, aquella campaña indigna, fundada en el pretexto del Estatuto se desvaneció y habrá pocos políticos políticos españoles, por obcecados que estén, que puedan negar la visión que yo tuve de este problema, que era clara, que era justa, que era útil, como las circunstancias lo prueban. ¡Ah! Pero yo tengo la seguridad, mejor dicho, abrigo el horrible temor de que si este cambio en la política española se realizó, allí donde hubo un problema grave, que resolví en colaboración con mi Gobierno y la mayoría parlamentaria, allí donde hubo esos problemas que parecían desvanecidos, vuelvan a surgir mucho más graves, más envenenados y más terribles y difíciles de solución, porque se hayan perdido los primeros meses de la fase revolucionaria, en que todas las cosas difíci

01199

les han parecido fáciles, llevados del mismo espíritu de cordialidad y de colaboración para estructurar el espíritu de la República española. (Aplausos),

Y ahora ocurre que disuelto el Parlamento y desalojados del Poder los que hemos representado en él el verdadero espíritu de la revolución, ahora se persigue a sus mejores ser
vidores , y yo he leído con escándalo en la prensa que ha habido
un miembro del Gobierno que ha llamado, no sé si para corregir
les, para molestarles o castigarles, pero sí para tratarles como agentes sospechosos, a dignísimas personas que visten el honroso uniforme militar y que han sido republicanos antes que muchos que están hoy en el Gobierno de la República, republicanos
de antes de venir la República, que no han cometido más deli
to que servirme a mí lealmente, ciegamente, desinteresadamente,
sin tomar nada y que acabada su función, se han retirado modestamente
a un oscuro destino, y encima los persiguen, los mole
stean, los inquietan, los injurian, suponiéndoles que son capaces de promover complots temerarios militares. ¿En beneficio de quién, si ellos han sido los primeros que no se han favorecido del Poder, que han sabido cumplir con su condición de milita
res excelentes y de buenos republicanos? (Aplausos).

De este escándalo vamos a ver muchos ejemplos. Vamos a ver muchos ejemplos, pero aquí estamos nosotros dispuestos a denunciarlos ante la opinión pública del país y exigir a los que sean bastante necios para producirlos la responsabilidad que deba corresponderles

Decía yo antes que aquella campaña que tomó por pretexto el problema de las autonomías regionales, se desvaneció en gran parte, y ahora se acaba de votar en las Provincias Vascongadas un Estatuto, y a mí me llena de pasmo que aquella gente, que hace año y medio, cuando las Cortes, en uso de su soberanía, hacían un proyecto de Estatuto para Cataluña, en el cual se menguaba y se recortaba alguna de las iniciativas del pueblo catalán, ahora, cuando las Provincias Vascongadas votan su Estatuto, ya no se dice que se desmembra la unidad de la patria, ni se destroza la unidad al tirarla por la ventana. ¿Por qué será? Porque ya no hay un Gobierno a quien tomar por blanco de esta clase de proyectiles. Y el Estatuto de Vasconia se ha votado ante la indiferencia general de los celosos de la patria cuando se trató del Estatuto de Cataluña, presentado por nosotros. (Grandes aplausos).

EL PROBLEMA RELIGIOSO

La campaña contra nuestra política ha tenido una fase crítica, y ha tenido una fase crítica que bien miradas las cosas y con el conocimiento que uno puede tener de ellas, ha llevado a su final al Parlamento y al Gobierno de coalición. Me refiero al problema religioso, a lo que aquí se llama el problema religioso.

Cuando se votó la Constitución, yo tuve ocasión de intervenir una sola vez en el debate, y fue a propósito de la confección del artículo 24, y entonces, recordarán mis compañe

ros de Cortes que el conflicto parlamentario parecía ingente e insoluble; porque había dos criterios frente a frente, uno, extremadamente radical y simplista; otro, excesivamente moderado e intransigente, y en aquella situación, en que las dos mitades de la Cámara se afrontaban, sin esperanza de concordia ni de conciliación, yo tuve, no sé si la ocurrencia o la inspiración, o la adversa suerte de intervenir, y de ponerlos de acuerdo. No se me olvidará el hecho, porque el hecho me costó ser Presidente del Consejo de ministros al otro día, y éste es uno de aquellos sucesos que difícilmente se olvidan, cuando a uno se le cae encima el Poder en circunstancias negras, adversas, en que sobre mi cayó cuando nadie lo quería; cuando todo el mundo, mirando por el egoísmo de lo que se llama carrera política, rehuía las responsabilidades del Poder, que no podía conducir a ninguna gloria, sino al fracaso, al descrédito ante la opinión pública. (Aplausos).

Intervine entonces y puse de acuerdo al Parlamento, y el grupo parlamentario socialista, que era el más extremado en esta cuestión, tuvo la sensatez, el sentido político y de abnegación, en cierto modo, de avenirse a mis razones y aceptar el texto que yo les había propuesto. ¡Ah! Pero desde entonces, si yo llevo el artículo 26 de la Constitución prendido en el pecho como una gala política que yo me he ganado, también lo llevo como pesadumbre en mis movimientos de hombre político, pesadumbre que otros me han puesto y que difícilmente me podrán arrancar, si no es con el concurso de la opinión republicana de España, para hacer como yo, afirmar el principio de la Constitución.

ción, principios que son para nosotros intangibles; y que no será posible proscribir en España ninguna política, por el solo hecho de que se obrase independientemente, inteligentemente por otra parte, lo mismo el artículo 26 de la Constitución que la ley de Congregaciones Religiosas, que es su natural, su legítima y su lógica consecuencia. (Aplausos).

Este problema era probablemente, si no el más difícil de los que hay planteados en España, el más doloroso, el más pendiente, el que más adentro penetra en la sensibilidad de los españoles, y el que se entendido y sentido por el mayor número de gentes. Yo bien sabía que cuando llegásemos a la realidad legal del principio de la Constitución, iba a levantarse frente a nosotros enormes oleadas de oposición, y así ha sido. Y el día que se presentó la ley de Congregaciones Religiosas, y sobre todo el día que se votó el último artículo de la ley, yo bien sabía que estábamos poniendo al Gobierno y al Parlamento la mecha que había de hacerlo saltar hecho pedazos, porque la oposición levantada por aquel artículo era de tal magnitud, hería tal cantidad de preocupaciones y prejuicios, que había de intentarse contra nosotros hasta lo imposible. Y, en efecto, hasta lo que parecía imposible se intentó y en gran parte lo han conseguido. Porque imposible parecía que un Parlamento como el Constituyente, el más glorioso que España ha podido tener, que no tendrá igual, haya sido lanzado a la disolución y a la desaparición política, cuando a mi juicio ha podido subsistir, como yo he aconsejado y dicho en el Parlamento, para lanzarnos a esta campaña electoral, en que se sorprende a los grupos re-

publicanos de izquierda en plena reorganización gastados por el Poder, en la improvisación de una campaña electoral de 40 días, y apenas si tienen tiempo de dirigirse personalmente a los electores españoles para hacerles ver lo que se juegan, lo que pueden perder y lo que pueden ganar. Es decir, han conseguido la máxima victoria a que podían aspirar los que se han opuesto a nuestra política estúpidamente, alegando motivos religiosos y supuestos atropellos a la conciencia nacional.

Pero nosotros hemos sostenido siempre que esta cuestión, que en España parecía insoluble, y que es la que ha levantado mayores intrigas, mayores ataques contra el Gobierno; maniobras más sucias contra la política que nosotros representábamos, ni era sectaria ni era persecutoria, ni era simplemente otra cosa que la aplicación de un criterio, liberal para el Estado, liberal para la Iglesia y liberal para los creyentes, que devuelve a cada uno su posición propia en la vida pública. Cuando os digan que la República, porque os lo dicen muchas veces; cuando os digan que la República ha sido persecutoria del catolicismo, decid sencillamente que mienten. Que os presenten un solo caso de persecución, ni colectiva ni individual. Cuando os digan que la República no ha tolerado la conciencia religiosa de los españoles, decidles que mienten, porque en el texto de la ley y en el texto de la Constitución y en la obra del Gobierno no se ha negado que existe una libre voluntad personal de cada uno para profesar las ideas que quieran, lo mismo políticas que religiosas.

Estoy esperando un caso -y aquí hay un sacerdote cristiano que lo puede comprobar-, un sólo caso como no sea él la única víctima, un solo caso, en que un español haya podido decir: "Yo no puedo ir a misa, yo no puedo confesarme, yo no puedo morir como un católico, porque me lo veda el gobernador o el ministro de la Gobernación". ¿Se me quiere decir dónde está ese caso? (Muy bien. Grandes aplausos).

Lo que pasa, ciudadanos, es que unos y otros estaban acostumbrados a apoyarse como los inválidos que se prestan mutuo socorro, apoyándose los unos a los otros. Una iglesia oficial, apoyándose en la protección del Estado, protección obtenida a través de las bajas combinaciones de la política en que vemos a los altos dignatarios de la Iglesia y a los representantes del papado, ir humildemente como un cacique cualquiera, de una provincia, a suplicar favores o protecciones en el Ministerio de Justicia o en la Presidencia del Consejo de ministros; o a la inversa, las oligarquías monárquicas imperantes, apoyarse en los resortes de las redes de la organización católica para obtener un día un voto, un triste voto de un pobre pueblo, a través del obispo, a través del cabildo, o a través de la parroquia, lo que constituyó su única misión en la sociedad española. Esta es la realidad. Y puesto que nosotros la hemos roto, hemos hecho con eso la obra más profunda y que parecía más difícil en la revolución de España.

EL LAICISMO DE LA ESCUELA

Ahora hay otra consecuencia, otra consecuencia por

la cual estamos peleando actualmente: me refiero a la escuela. La principal consecuencia de la política instaurada por la Constitución y por la ley de Congregaciones religiosas es el laicismo en la escuela, y yo no me canso de repetir delante de todos los auditorios, que la base de la República, el porvenir de la República está en la escuela, y que si nos pusieran a elegir entre abandonar ésta o la otra Institución del Estado, la magistratura, la burocracia, la que fuese, o conservar la escuela, antes que todo la escuela; porque de ellas es de donde han de salir los republicanos el día de mañana, y más aún que republicanos, los hombres de conciencia emancipada y libre, educados en un sentimiento político cívico y español auténtico, librándolos, no de esta creencia o de la más allá si no de la imposición prematura y temprana y del aprovechamiento de la creencia religiosa desde la infancia, para formar, no ciudadanos, sino siervos que eso es lo que nosotros hemos querido proscribir y de esa proscripción ha de salir la única raigambre sólida de la República española. (Aplausos).

LA POLITICA SOCIAL

Por último, nosotros, que estamos comprometidos y ofrecemos al sufragio universal mantener esta dignidad de la política, hemos de decir además que en las propagandas que se han hecho contra nuestra acción de gobierno y del Parlamento, figura como parte principal la política social realizada por el Parlamento y por el Gobierno. Y yo debo declarar a este propósito que una porción de gente que parece despertarse cada ma

ñana habiéndose olvidado de lo que hicieron y dejaron de hacer el día anterior, nos acusan nada menos que de haber entregado la República a los socialistas, Patrañas como ésta no las ha concebido nadie. Pero yo les decía a los correligionarios de Alicante, que si yo hubiese tenido la República en mi mano y hubiera sido capaz de entregársela a alguien y se la hubiera entregado a los socialistas, que no se la he entregado, al fin y al cabo, la República quedaba en manos de republicanos; pero lo que no sería capaz de hacer es tener la República en mis manos y entregársela a los monárquicos. (Gran ovación), que es lo que estamos viendo.

Ya veremos quién es el que se atreve a pasar a la historia de nuestra política con el estigma de haber abierto la puerta del Poder y del predominio en el régimen a sus más furibundos y encarnizados enemigos, más temibles cuanto más ocultos y más solapados sean.

No. Nosotros no hemos hecho política socialista. Debo hacer notar que todas las reformas de carácter social votadas por el Parlamento fueron concertadas en mi presencia y en presencia de la delegación del partido radical. En presencia de los representantes de los partidos republicanos, de los representantes del partido socialista, mucho antes de venir la República, y allí se discutieron estas leyes, estos proyectos y estas reformas, y nadie protestó contra ellas, nadie les hizo la menor objeción, sin exceptuar la Reforma agraria, y otras muchas leyes que han quedado sin hacer. Y añadido a esto que des-

de que se constituyó el Gobierno en diciembre de 1931, segundo que yo presidí, no se ha vuelto a presentar en el Parlamento Constituyente, ninguna ley de reforma social, y todas las leyes votadas por el Parlamento Constituyente en este sentido habían sido presentadas por el Gobierno de mis predecesores, y aceptadas por enorme mayoría parlamentaria que entonces existía, sin ninguna discrepancia.

Y yo dije en aquella declaración ministerial que no volveríamos a presentar en aquella etapa ninguna nueva ley de reforma social. Todas fueron presentadas antes. ¿Con qué derecho estos mismos partidos que con sus representantes autorizados suscribían en el Comité revolucionario los proyectos de reforma social y después en el Parlamento, cuando yo no presidía el Gobierno, no se levantaban a protestar contra estos proyectos de ley, le sirven ahora de ocasión o motivo de protesta para lanzar sobre nosotros, singularmente sobre mí, la acusación estúpida de que con esas reformas, nosotros hemos trastornado la economía nacional? Ni una ni otra; no hemos hecho más que cumplir un deber inexcusable y elemental de una democracia republicana que quiere ser digna de este nombre. Y si os ponéis a examinar esta famosa reforma social, veréis que no tiene otro contenido que el mínimo de justicia de una democracia de hombres civilizados. (Aplausos).

LA REPUBLICA DE TRABAJADORES

No creo yo que querrán los españoles tener que otor

gar al trabajo la única cualidad eminente y edificante que la Constitución admite en la sociedad republicana española. Cuanto se ha dicho en son de mofa, comentando el artículo primero de la Constitución, que declara que España es una República de trabajadores de todas clases; cuanto se ha dicho en son de mofa acerca de este artículo, me recuerda a mí, aunque el caso no sea exactamente igual, todas las burlas, todas las zumbas, que desde mi infancia, desde que empecé a ir al colegio, estaba yo habituado a oír en boca de personas y de multitudes, que yo no sabía entonces que eran reaccionarias, acerca de la Constitución del año 1812, cuando decían que los españoles debían ser justos y benéficos.

Las gentes han estado enseñadas en España brutalmente, bárbaramente, de una manera salvaje, que es la intención que se ha dado al espíritu español durante un siglo, lo que sirvió de base a la Constitución de las Cortes de Cádiz, que no tenían contenido político, ni lo podían tener, pero que era la explosión del sentimiento humanitario que entonces invadía a los hombres civilizados del mundo, sin exceptuar a España, cuando se disponía a considerar el cuerpo nacional, con el ánimo de elevar al cuerpo nacional mismo a una esfera moral que hasta entonces no había alcanzado. Y este hábito salvaje, bárbaro, del espíritu acre del caciquismo español que se ha ensañado durante un siglo, en aquella sencilla expresión, que no tiene más valor que el que acabo de expresar ligeramente, ahora se reproduce cuando en la Constitución española se lee aquella frase de "España es una República de trabajadores de todas

clases". La gente se ríe, se ríe... Barbarie del espíritu nacional, salvajismo de la conciencia española, cuando no estaba despertado el espíritu cívico y liberal que hemos acertado a infundir en ella.

¿Qué quiere decir esto de que España es una República de trabajadores? ¿Qué quiere decir? ¿Era una expresión soviética? Ni de cien leguas. Lo que dice es que en España, en la sociedad moderna española, dignificada por la República, y puesta por la República en vías de regeneración y de salvación, el trabajo, sea el que fuere, es decir, la participación en la producción de la riqueza, es la única cualidad que sirve para dignificar y elevar al ciudadano, la única que sirve para darle estimación pública, y que se han desarraigado y expulsado todos los privilegios del parasitismo de la herencia y del privilegio en que antes estaba asentado el régimen político y el régimen social español, y como ésta es una verdad palmaria, y ellos no tienen otra fuerza para socavarla, se valen de la mofa, de la burla, y creen que al frente de la Constitución española se ha escrito algo así como una gedeonada, como una estupidez memorable, siendo así que es el principio moral de la justicia social más claro que los españoles hemos podido poner al frente de nuestro Código fundamental. (Grandes aplausos).

LOS PRINCIPIOS ESENCIALES DEL REGIMEN REPUBLICANO

Estos son los principios ciudadanos a que ha obedecido nuestra política representada por una unión de partidos

auténticos de izquierda republicana. Y esto es lo que nosotros delante del sufragio universal tenemos que ratificar y tenemos que ofrecer, no sólo por su mantenimiento, sino por su progreso.

Y además -se me permitirá que no siga mucho, porque las fuerzas me faltan absolutamente-, además tenemos que afirmar otro valor que no está escrito en los códigos, que no se sanciona en las leyes, pero que no debe caerse de nuestros labios jamás, y, sobre todo, apartarse de nuestra contienda.

El valor que nosotros afirmamos es la austeridad en los procedimientos, es la limpieza de los modos, es la moralidad política, es la honradez y el cumplimiento de nuestros compromisos, y es claro: la responsabilidad de nuestros actos delante de los electores y delante del país entero. Nosotros no violaremos jamás, no ya abiertamente, sino ni solapadamente, a espaldas de la Nación, los principios esenciales del régimen republicano; y si nosotros afirmamos el principio de moralidad política, la obediencia a los principios y el respeto a los compromisos contraídos, respeto a nuestras propias convicciones, lo que queremos decir es que condenamos los contubernios sospechosos, las combinaciones indecentes entre aquellos que por obediencia a sus propios principios debieran convertirse con más razón que cualquiera otro, porque son hermanos en una misma cosa, en la política nacional. (Muy bien).

A mí me parece, que cuando en un país trabajado por las agitaciones que está trabajada España, al cabo de dos años

y medio de una política determinada, se puede sentir el cansancio -el que lo sienta-, la fatiga, el enojo, por los hechos realizados en el Gobierno y en el Parlamento y puede agitarse la opinión pública en movimientos más o menos fuertes de oposición. Y el que lo sienta así que lo diga; pero lo que me parece más feroz y contrario a la moralidad política es aprovechar estos movimientos para ponerlos al servicio de la idea política. Estaría bueno que mañana nosotros los republicanos de izquierda o yo mismo, en vista de que en España pudiese desarrollarse un movimiento monárquico o fascista o lo que fuese, yo dijera: "como la opinión ha cambiado, yo me voy con la opinión", para dejarme llevar también por este movimiento. Dirían: "Este hombre es un perdido políticamente, no tiene conciencia política, no tiene honradez política". Pues este espectáculo lo estamos presenciando actualmente en España. (Aplausos).

Yo veo gente, grupos políticos, que con escándalo mío, con escándalo mío, aprovechan estos movimientos de opinión más o menos fuertes y más o menos pasajeros para dejarse llevar por ellos, cuando en realidad su obligación primera sería combatirlos y venir a buscar nuestro apoyo y nuestra aprobación y nuestra alianza, y no la alianza de los contrarios al régimen republicano y democrático de España. (Grandes aplausos).

Y con esto, ciudadanos, antes de que se me acabe la voz aprovecharé mis últimos recursos para agradecer esta acogida tan cordial, para disculparme si no he podido entreteneros más y para infiltraros el entusiasmo republicano, no pasajero,

01212

ni del día de la lucha, sino permanente, constante, porque no basta triunfar en una elección, es preciso mantenerse en las filas de combate de la República un día y otro día, dando ilusiones cuando se necesitan ilusiones y dando vida cuando la vida política lo demande, no olvidando y sabiendo constantemente que de la política de su partido depende quizá el régimen mismo, el porvenir del régimen republicano, por el que todos estamos combatiendo.

No os engañéis sobre la realidad, que la situación dista mucho de ser clara. Yo temo en la política española cambios profundos; pero nosotros estamos obligados a permanecer en pie, todos en las filas, cumpliendo la disciplina de partido para remediar si es posible el daño, para estorbarlo y para afirmar que detrás de la papeleta electoral pacíficamente emitida está la voluntad inquebrantable del pueblo republicano español que de ninguna manera ni de ningún modo se dejará arrebatar la República por la que todos vosotros, yo el primero, estamos dispuestos a sacrificar hasta la propia existencia.

01213

UN ACTO DE PROPAGANDA EN BARACALDO

Palabras pronunciadas el 15 de noviembre de 1933, en Baracaldo (Vizcaya), en la Casa del Pueblo, durante la gira electoral realizada por la provincia en compañía de I. Prieto y M. Domingo.

(El Liberal de Bilbao, 16-11-33).

- Ciudadanos: Aquí estáis contemplando y contribuyendo a un espectáculo pocas veces visto en la historia política de nuestro país. Aqué estamos tres ex ministros que hemos regido la República durante cerca de tres años con perfecta identificación de miras y procedimientos. Hemos gobernado durante algún tiempo incluso con plenos poderes. Hemos conocido todas las dificultades y afrontado problemas inherentes a la gobernación del país, y hoy podemos y debemos comparecer ante el pueblo sin recelos, sin temores, sin que de nada tengamos que avergonzarnos, con la tranquilidad y la satisfacción de haber procedido de acuerdo con nuestro deber y nuestra conciencia política. Esto no se habrá visto nunca.

Nuestra presencia aquí, juntos en una candidatura de la cual yo me siento orgulloso, por ser estímulo y galardón de todos los trabajos pasados y futuros, significa que lo que hemos hecho, aquello para cuya realización nos sentimos unidos e identificados, seguirá siendo norma y orientación de nuestra labor futura, y que todos los conjurados contra nuestra política, para lo cual se realizaron las conjunciones más sórdidas y las coacciones más violentas, y a veces los ataques a mano ar-

0121⁷₄

mada y cara descubierta; esos que nos han expelido del Poder con la esperanza, frustrada, de acabar con la tendencia social de la República, esos serán, en la nueva lucha y en el triunfo que nos aprestáis para el día 19, vencidos y derrotados, para que por las vías del sufragio el caciquismo y la reacción que den extirpados de toda España, salvando a la República de los contubernios infamantes con que se ha pretendido desnaturalizarla y asesinarla. (Grandes aplausos).

Esto es lo que nosotros hemos significado y seguimos significando. Esto es lo que venimos a deciros aquí, y yo, en unión de mis compañeros, os prometo hacer, si, con vuestro voto, nos lleváis al Parlamento, dándoos efusivas gracias por vuestra colaboración entusiasta, de la que es prueba inequívoca el acto que celebramos y que el próximo día 19 ha de llevarnos al triunfo, como espero. (Gran ovación).

4. ALOCUCIONES A LOS MILITARES

01216

PROCLAMACION DE LA REPUBLICA

Telegrama enviado el 14 de abril de 1931 a todas las guarniciones del país.

(El Sol, 15-4-31).

"Al constituirse el Gobierno de la República y hacerme cargo del Ministerio del Ejército, saludo a VE. y a los generales, jefes, oficiales y tropa a sus órdenes, de cuyo patriotismo y disciplina, puestos una vez más de manifiesto en el glorioso tránsito del día de hoy, espero la colaboración precisa para que el acierto acompañe al ejercicio de mi cargo y redunde en beneficio del Ejército, prosperidad de la Nación y honra de la República".

01217

CLAUSURA DE CURSO EN LA ESCUELA CENTRAL DE TIRO

Discurso pronunciado en el banquete celebrado en Madrid, el 27 de abril de 1931 en el Centro del Ejército y de la Armada para celebrar el fin del curso de capitanes desarrollado en la Escuela Central de Tiro.

(El Sol, 29-4-31).

Señor capitán general, señor presidente, señores generales, jefes y oficiales: Es para mí un honor muy grande y un acto gratísimo ponerme hoy por vez primera en contacto con una numerosa representación del Ejército de España, y aprovecho esta ocasión para traeros los más cordiales saludos del Gobierno de la República. Unido al Ejército, no sólo por deberes de mi cargo, sino también por afectuosos lazos familiares de sangre y de cariño, lo estoy además en el fondo del alma por un firme sentimiento de amor a la patria, sentimiento por el que exclusivamente he aceptado la enorme responsabilidad que sobre mí pesa, y de la que confío salir triunfante, no ya por mis merecimientos, sino por la acetada colaboración de cuantos me rodean en el ministerio, entre los que me es muy grato destacar y realzar la figura del general subsecretario.

No soy hombre que retroceda ante los obstáculos; por el contrario, soy hombre tenaz en mi empeño, y mi empeño hoy es el de la necesidad de acometer con urgencia la reorganización del Ejército nacional.

No sería pertinente aquí trazaros un plan de mis pro



BIBLIOTECA

pósitos; únicamente expondré las ideas directrices que me guían como ministro de la Guerra, y las expondré con claridad meridiana para que veáis que en ellas no hay más que operaciones de Aritmética elemental.

El Ejército no tiene otra misión que la de la defensa nacional en tiempo de guerra, y en tiempo de paz la de prepararse para la guerra, y ninguna otra más; repito que ninguna otra más. (Grandes aplausos).

Estoy orgulloso, estamos orgullosos los hombres que hemos venido al Poder, porque a él hemos llegado pacíficamente, sin comprometer al Ejército como entidad, sin apoyarnos en él, y estamos orgullosos porque así conserva toda su fuerza moral, sometiéndose voluntaria y sinceramente a la voluntad majestuosa del pueblo.

El Ejército trabaja en silencio, y el Gobierno y su ministro de la Guerra saben lo que tienen que hacer. Al militar no se le preguntará de dónde viene ni cuáles son sus convicciones ni sus ideas; pero se le exigirá siempre el cumplimiento estricto de sus obligaciones, y nada más, absolutamente nada más. (Grandes aplausos). Es decir, se le exigirá también lealtad absoluta al régimen constituido.

El Gobierno os expresa por mí, la satisfacción con que ve vuestra conducta y la firmeza y solidez de vuestra disciplina.

Es preciso que el Ejército sea como colectividad arma

eficaz para la defensa nacional; que tengamos el Ejército que debemos tener; el Ejército que esté en armonía con nuestra situación geográfica, con nuestras relaciones internacionales, con nuestros medios económicos; pero es también preciso que ese Ejército que tengamos sea vigoroso y fuerte, que esté dotado de los mejores elementos de combate, esté nutrido de fuerzas, posea suficiente material y una instrucción que lo coloque a la cabeza de los demás ejércitos mundiales. Hay que acabar con todas las consecuencias de un siglo de guerras civiles y guerras coloniales; no más regimientos de 80 hombres; no más regimientos de Caballería sin caballos; no más tropas sin elementos de combate. Pero tampoco nunca más organismos innecesarios creados para dar aparentes colocaciones al personal sobrante; nunca más dependencias inútiles.

Estas sencillas ideas, en parte ya empezadas a realizar, serán mi norma, y no me detendrán en mi camino los pequeños sacrificios que sean precisos para la realización de mi obra.

Sobre todos los intereses personales, sobre todos los intereses de Arma y Cuerpo, sobre todos los privilegios está el interés nacional, y sólo él me guiará, seguro de que en su día las Cortes habrán de aprobar mi labor, ya que a ellas someteré mi conducta.

Seguro estoy también de la aprobación del Ejército y del país. Decid a vuestros compañeros de provincias que el Gobierno y su ministro de la Guerra ponen en la institución militi

01229

tar sus ojos con más ahinco, con más fe que en otra institución alguna. Recibid y trasmitid nuestros saludos, y sabed que os consideramos hijos predilectos de la República.

¡Viva España! ¡Viva la República!

01221

DISCURSO EN CUATRO VIENTOS

Discurso pronunciado el 4 de julio de 1932 en el aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) en el acto de entrega de premios a las tripulaciones de las escuadrillas que habían participado en la Vuelta a España.

(El Sol, 5-7-32).

Señores generales, jefes y oficiales: Sólo unas cuantas palabras, porque ni es ésta la hora ni seguramente esperáis un gran discurso. Unas palabras sólo que afiancen nuestra amistad y expresen la gratísima impresión que recibo siempre que me pongo en contacto con elementos del Ejército. Palabras de amistad más oportunas de expresar ahora en que hago mi primera visita, bien retrasada por cierto, y no por mi culpa, al aeródromo de Cuatro Vientos. Tenéis que comprender cuántas obligaciones pesan sobre mí y hallar en ellas la disculpa a ese retraso. Sólo así ha podido ser, porque sabréis vosotros cuán grato me es a mí desde que ejerzo este oficio de ministro de la Guerra, y desde antes por una afición de la que he dado algunas pruebas, conocer los problemas del Ejército. Siempre me he preocupado especialmente de la organización militar de España, no porque yo diga que el Ejército sea una cosa única. El pueblo español es un pueblo excepcional en su amor a la Justicia y al Progreso. Siente, sueña y apetece el máximo progreso para su patria; pues bien: el Ejército es, en su expresión, la flor de este patriotismo. Por eso yo siempre que hablo al Ejército hablo a mi país. Tenéis las mismas obligaciones que los demás españoles, tenéis

el mismo derecho, puesto que formáis parte del pueblo español, y tenéis también, por vuestra especial misión, las consideraciones que vuestro patriotismo y disciplina reclaman y obtiene con pleno derecho. Una parte principal de estas virtudes del pueblo español, del cual es flor el Ejército, corresponde a la Aviación, que tiene en España, en el pueblo español, una consideración especial.

La prueba tan felizmente terminada viene a demostrar el temple de vuestro espíritu, vuestra destreza, vuestro vigor, la eficacia de la disciplina particular. Esto confirma mi tesis de que la primera materia, el pueblo español, es excelente, y, por lo tanto el Ejército, intachable en sus hombres, en pericia y conducta, puede parangonarse con cualquiera moral, disciplina, abnegación. En ese orden, vuestro rendimiento es siempre aquel a que es acreedora la patria.

Siempre he pensado yo con tristeza cómo se perdía ese caudal de energía espiritual. Ocurría con sus riquezas morales lo mismo que con sus riquezas materiales. Unas y otras, como los ríos, iban a morir en el mar, y así como su caudal no servía para fertilizar nada, lo mismo se perdía la moral, la energía, la capacidad para el trabajo, sin dejar un rendimiento útil, más que nada por una falta de preparación para el trabajo. Yo creo, señores, que ha llegado el momento de que cambie el modo de ser, la orientación, el sistema; es también la hora de que las virtudes se encaucen, se articulen para la consecución de la alta patria española. Y es en la aviación donde hemos de introducir esa coordinación, para darle aquella eficiencia, aquella efica

cia a que tiene pleno derecho. Pero éste es un problema de enormes dificultades, que tiene que ocupar la atención de muchos hombres, porque no resolveremos nada si no logramos resolverlo en general, y no hemos de hacerlo ni en un año ni en dos. No sé en cuánto tiempo. Lo que sí sé es que hemos de hacerlo, partiendo de lo único con que contamos: este caudal de moral única, admirable, ejemplar. Pero nos hace falta todo lo demás, que no se improvisa. Hasta ahora no hemos hecho más que comenzar a desbrozar el camino por el que hemos de seguir si queremos dar toda su eficacia al Ejército. Muchas veces pienso yo que las reformas militares puestas en vigor y de las que, naturalmente, no soy yo el llamado a hablar, las gentes las toman como cosa definitiva, y no lo son. No son más que los primeros pasos de ese camino. Y al cabo de tiempo de seguir por él corrigiendo errores, compulsando abnegaciones y sacrificios, llegaremos a dotar a la República de un Ejército que sea el que España pueda tener, el que el rango de España en el mundo exige que tengamos. Hasta ahora no hemos hecho más que comenzar un largo camino que pueda hacer posible llegar a esta meta. Hay que pensar en que no podemos obtenerlo todo rápidamente, porque sería preciso un esfuerzo económico superior al que la nación puede hacer. Yo me explico vuestro dolor, nacido de vuestro amor a la profesión, al contemplar las deficiencias. Estamos entre amigos y debemos confesárnoslo todo. Pero así como a mí me consuela todo lo que espero de vuestra colaboración, debéis pensar vosotros en cuanto es el deseo de vuestro ministro de la Guerra de acabar con ello. Pero digámonos toda la realidad. El personal, magnífico. Su ardimiento es ejemplo y modelo para todos. Yo he sentido el orgu

llo de oír hablar a gentes no españolas con elogios ardorosos de vosotros. Esta es hasta ahora nuestra riqueza, la natural; pero el Ejército está en mantillas; no es más que un germen, y dentro del Ejército, la aviación es el dato específico.

El problema de la aviación

Yo os puedo asegurar que el problema de la aviación es uno de los que más desvelos me ha producido por su volumen, por su delicadeza, por las consecuencias que para lo por venir pueda tener. Yo, aunque, parezco un poco alejado de todo lo que el ímpetu juvenil de los aviadores reclama, no es así. Lo que ocurre es que el ministro de la Guerra, por ver lo que ve, tiene que tomarlo todo en cuenta. El problema de la aviación es muy difícil, porque no se reduce a la aviación militar. No. El problema de la aviación no se resolverá hasta que no tengamos un cerebro pensante que nos diga en conjunto lo que va a ser en España el aire. Hasta tanto, la aviación no será nada. Y si sin este antecedente intentamos resolver el problema de la aviación militar, vamos al más rotundo fracaso en sus bases fundamentales. Iremos a una solución imprecisa y falsa, habremos llevado al país al error y al engaño, y eso no. Mi propósito, ya largo, adquirido después de hondas meditaciones, nacidas por preocupaciones muy graves, es el de estudiar y resolver el problema de la aviación en su totalidad. Dar lugar a que España y el organismo que legítimamente la representa, el Parlamento, puedan decir qué es lo que quieren, en cuanto a aviación, para buscar una solución total. Para eso se puede contar conmigo. Para otra cosa,

no. No creo que debamos atender a resolver la aviación militar, porque sólo habríamos resuelto problemas parciales internos de la aviación, que crearían situaciones de hecho y de derecho que perturbarían luego la solución total.

La aviación es la aviación naval y la militar y la civil, y no se puede pensar en resolver una parte sólo. Por eso necesitamos un cerebro de la aviación.

Hay que crear una aviación nacional

Cuando yo establecí el Estado Mayor Central no lo hice por seguir una rutina, lo hice pensando que el Ejército necesita una unidad de doctrina, un órgano que discurra por todos, una entidad permanente que confeccione planes y propósitos que emanen de su competencia y puedan ser recogidas por los ministros de la Guerra. Esto mismo pienso yo para la aviación que no existe. Permitidme que lo diga claramente, y creo yo que para crear lo que no existe, antes hay que tener al creador. De la aviación militar no existe más que vuestra voluntad y vuestro espíritu, que no es bastante a satisfacer, con ser tanto, ni al país ni a vosotros. Por eso hay que llegar al problema íntegro: a la aviación nacional, de la cual es parte integrante la aviación militar. Una aviación nacional, con su potencia, con su organización y con su porvenir. No sé por qué se me reprocha siempre una actitud de dureza. Las gentes que me tratan de cerca saben que no es esa mi característica. Ahora bien, cuando a mí se me plantean cuestiones de cuerpo, problemas de escalafones, no hago ningún caso. ¿Quiere esto decir que yo no reco

nozca la legitimidad de vuestras aspiraciones? De ningún modo. Sé que tenéis que vivir. Sé que se vive de lo que se trabaja. Ahora plantear como problema de Gobierno esto, no. Eso sería la última preocupación. La nación lo que necesita es un organismo constructivo y un sistema dentro del cual entrarán, cómo no, el problema de vuestras aspiraciones; pero ahora el problema personal de la aviación militar es el tercero o el cuarto. El primero es, por España y por vosotros, poner a la aviación en el lugar que debe estar. (Clamorosa ovación).

Hay la creencia de que los ministros estamos encerrados en una torre de marfil, donde no llegan los latidos de los núcleos sociales. Esto no es así. Se reciben y a veces con exceso, y cuando se ha hablado de las aspiraciones del personal de aviación, yo, aunque aparentaba no oírlas, lo que hacía era apartarlas de mí, aunque tuviera que aparentar que era cierta la leyenda de mi dureza, porque se acaba de someter a la totalidad del Ejército a una organización tan radical que los que se han ido sacrificando ilusiones en su carrera, y los que se han quedado han hecho también sacrificios equivalentes y los han soportado con una serenidad, con un estilo de caballeros que a mí me ha producido honda emoción. Por eso he apartado de mí todas esas sugerencias; pero quiero deciros que en mí tendréis un colaborador dispuesto a recibir todas las sugerencias que tiendan primero a satisfacer el bien público. Yo no admito más sugerencias primordiales de otro interés que el de la patria. Por servirla, según mis ideas, yo lo he sacrificado todo, y como esto es lo que yo he predicado siempre, es lo que quiero de

todos. Bien entendido que yo, como ministro de la Guerra, estoy vigilante por vuestro derecho, por vuestras ambiciones de Cuerpo. Yo recogeré cuantos cargos me sugiráis, y estad seguros de que yo aspiro a la formación de un estatuto donde se fundirán esas aspiraciones con algo que hay que crear, porque no existe. Una aviación nacional. A ello habrá que unir el derecho a la vida que os da vuestro trabajo. Todos tenemos como primer postulado la obligación de trabajar conforme a una disciplina. Esa disciplina, que constituye el fondo moral del militar, porque es la más rígida y la más estrecha, permite a éste que encuentre en ella la máxima recompensa. Vuestra recompensa es esa: el cumplimiento de ese deber. Todo lo demás se os da de añadidura. Es preciso que todos trabajemos anónimamente sin esperanza de recompensa, bastando la que nos proporcione nuestra íntima satisfacción. Hay que pensar en servir a España, y que no significa servirla más que llevar ese honrosísimo uniforme. La República es virtud de negaciones individuales ante el bien nacional. A esto es a lo que tenemos que estar dispuestos y llegar a este ideal sacrificando a ella todos nuestros afanes, todo nuestro trabajo y nuestra propia vida. (Gran ovación).

01228

ALOCUCION EN OVIEDO

Palabras pronunciadas en Oviedo en el acto de inauguración de un Hogar del Soldado, el 22 de septiembre de 1932.

(El Sol, 23-9-32).

"Yo quiero que desaparezca la anomalía que existe entre el Ejército y el pueblo. El movimiento último, que todos conocéis ha servido para eliminar del Ejército a aquellos sectores que respondían a la bondad del Gobierno con actos dolorosísimos de todos conocidos. Para nadie fueron más dolorosos que para mí y para mis compañeros. Por mi parte, yo perdono todos estos delitos; los Tribunales se encargarán de sancionarlos con las penas correspondientes. No ansía el Gobierno más que contar con un Ejército leal, que responda a los deberes de los que sois militares profesionales, que aunque ciudadanos como todos, en primer plano no debe haber para vosotros otro móvil que el dedicaros al soldado para que si la patria necesitara de ellos en caso de guerra, pueda contar con un Ejército apto que permita ocupe España un lugar preeminente en el concierto internacional. Para el militar, cuya carrera supone sacrificio, deben pasar a segundo plano las cuestiones interiores referentes a la política. No tengo el honor de conocerlos a todos y a cada uno personalmente; pero sí a vuestro primer jefe, y conociendo el concepto que tiene del honor, seguro estoy de que todos los que formáis parte de la oficialidad de este regimiento habéis de defender a España y a la República que el pueblo impuso por su voluntad".

01229

ALOCUCION EN PALENCIA

Palabras pronunciadas en Palencia, en el Cuartel del Carrión,
el 8 de octubre de 1932.

(El Sol, 9-10-32).

"Yo también siento en estos instantes una gran satisfacción, al hallarme al lado de un batallón y en el seno de un cuartel que son lo mejor de lo mejor que yo he visto en España. Me siento satisfecho además del brillante espíritu que informa su labor en este batallón que por mí fue fundado, porque de na da serviría a los que nos dedicamos a la difícil tarea de gober_{nar} a los pueblos que de nuestros cerebros surjan ideas y pensa_{mientos} dignos de llevarse a la práctica si no encontramos quie_{nes} secunden nuestra labor y la cristalicen en la realidad de los hechos, mejorándola si es posible, y agrandándola con el - ahinco propio de los que saben cumplir fielmente con su deber.

Las sensaciones que acabo de recibir me son en extre_{mo} gratísimas, porque he visto que todo cuanto yo podía soñar para este batallón que tuve la suerte de crear se encuentra pal_{pitante} en esta sala y en estos espaciosos departamentos. Y como no quiero cansaros, para terminar añadiré que así, de esta manera, se trabaja por el honor de la patria y la prosperidad de la República. ¡Adelante, pues, y viva España y viva el Ejér_{cito}!"

01239

HOMENAJE MILITAR A LA REPUBLICA

Discurso pronunciado en Madrid, el 22 de octubre en el Centro del Ejército y de la Armada, en el acto de homenaje a la República organizado por el Ejército y la Marina.

(Luz, 24-10-32).

"General presidente, señoras y señores: Agradezco mucho este homenaje ofrecido a la República por el Ejército y la Marina. Este acto de cortesía es elegante, como vuestro. Agradezco las palabras del general Romerales, y a ellas, como réplica sobria, podría tan sólo decir que así se habla y así se siente cuando se es militar. (Grandes aplausos).

Estoy -añade- habituado a hablar entre militares, y con ellos he convivido desde mi más tierna infancia.

Os conozco, no sólo en vuestra labor profesional, si no hasta en vuestra vida particular. Digo, pues, que estoy acostumbrado a hablar entre vosotros. Esta es la segunda vez que hablo en el Casino Militar. Cuando yo era un novato en el ministerio de la Guerra, ¡felices tiempos!, hablé con motivo de la terminación de las prácticas de un curso de capitanes. Quizá entonces parecieran secas mis palabras, y ahora digo que tengo la satisfacción, y así lo siento, de ver que en esta casa nada hay de equívoco ni de turbio, sino que todo es diáfano como el alma del Ejército. Cuando hablo a soldados, como ahora, siento más que nunca mi responsabilidad como ministro de la Guerra, pues si es verdad que vosotros, los militares, no tenéis otro

privilegio sobre los demás ciudadanos sino el de estar más que nadie sometidos a la disciplina, que es recta y dura, y el de tener más obligaciones que los demás, yo, como ministro de la Guerra, tengo que sentir y siento pesar sobre mi como nadie este privilegio terrible del cumplimiento del deber. Los militares, sujetos por la disciplina, no podéis hablar individual ni colectivamente, pero yo por vosotros tengo que dirigirme al pueblo español para decir el alto concepto que sentís del deber. La República ha hecho cambiar el concepto que antiguamente se tenía de la lealtad.

Todos sentimos hoy una interior satisfacción, y es que el Ejército descansa sobre una nueva base de moral militar. Antiguamente la lealtad consistía en estar sometidos a determinada persona y casa, y hoy esa lealtad consiste en estar compenetrados con el pueblo. Aquí no debe haber nada más que hombres de buena voluntad dispuestos a sacrificarse por la patria. Para ella se ha elevado la moral militar y se ha tendido a dotar al Ejército de todo cuanto le hace falta para que cumpla su misión. El que quiera servir, que sirva, y el que sirva habrá sellado dos veces este deber moral de conciencia. Esta misma mañana he asistido a un pequeño acto militar, y allí he observado un detalle que me ha conmovido en lo más profundo de mi alma: en una mesa se hallaban los soldados, en otra el ministro de la Guerra y en otra el alcalde humilde de un pueblo, de cuyos labios pude saber que vivía de su trabajo, trabajo que no siempre tenía y a veces le faltaba pan que llevar a la boca.

Sin embargo, este humilde alcalde representa hoy la

autoridad en su aldea con toda dignidad, y ante él me descubro. La figura de este hombre se clavaba en mi pensamiento desde hace años, y buscaba ese diamante de la raza española, humilde y tosco, pero que hay que pulir para que brillen sus virtudes e irradian por todas partes. El, sentado en aquella mesa y rodeado de coroneles, simbolizaba la compenetración que debe existir, y que sin duda existe, entre el Pueblo y el Ejército. Vosotros, soldados de España, tenéis que ser el sostén de ella y rendir vuestras espadas ante este símbolo, que es España misma. Quizá algunos de mis conceptos parezcan a veces fuertes. Ya sé que vosotros no estáis acostumbrados a que se os hable así; pero ha sido necesaria una revolución para ello. La revolución ha despertado una nueva España, y yo brindo por la revolución, el primero de cuyos efectos ha sido la República".

DISCURSOS EN VALLADOLID

Discursos pronunciados el 13 de noviembre de 1932, en la visita que realizó Azaña en Valladolid a diversos centros militares.

(El Sol, 15-11-32).

Inauguración de un Hogar del Soldado

Recibo con mucho agrado las palabras que acabáis de pronunciar en nombre del regimiento, y le felicito por lo acertadamente que ha llevado a la práctica la disposición del Gobierno estableciendo en los cuarteles el Hogar del Soldado. Sin hablar de otras cosas que se refieren a la profesión militar, fijémonos en el objeto de esta institución tan discretamente organizada en el regimiento de su mando. En el Ejército una cosa os cumple a los jefes y oficiales, a todos los que tenéis el mando: es formar al soldado. Y la formación del soldado no es sólo la formación profesional y atender a su instrucción, sino la formación del ciudadano. Recibís a los hijos de España en la edad más a propósito para inculcarles el civismo, el amor a la patria y al sentimiento republicano, y hay que entrarles en el alma la convicción de que una de las partes principales del deber ciudadano es aprender la disciplina, es aprender a servir a la patria, y si la patria tuviera esta desgraciada necesidad de llamarlo a su defensa, cumplirla heroicamente como buenos españoles.

Formar ciudadanos es una de las cosas más difíciles. Es más fácil formar soldados que ciudadanos completos, de cuya

educación forma parte la educación militar. Yo confío en que vosotros, animados de este sentimiento republicano y de este amor profesional a vuestro Ejército, cumpliréis esta misión que la República os ha confiado, para lo cual la República os tiene otorgada su confianza. Os felicito a todos, y deseo que este regimiento sea un modelo entre todos los regimientos del Ejército español.

Acto seguido, un soldado se adelantó hacia el ministro de la Guerra, y previa la autorización de éste, dijo:

-Faltaríamos al más elemental deber de gratitud si en el día de hoy, con motivo de la inauguración del Hogar del Soldado, no hiciésemos presente a vuestra excelencia nuestro más absoluto agradecimiento y nuestra más sincera lealtad. Y tened presente que este regimiento, donde vivimos jefes, oficiales y tropa unidos por el vínculo de un deber y dentro de la más pura democracia, jamás tomaría las armas para obedecer órdenes ajenas al Gobierno de la República. Si ésta, lo que no es de esperar, peligrase y fueran necesarios hombres dispuestos a perder la vida en su defensa, acordaos entonces del regimiento 32 de Infantería. ¡Viva España! ¡Viva la República!.

El Jefe del Gobierno contestó así:

-Me alegra oír esas palabras, porque están dentro del espíritu que acaba de expresar vuestro primer jefe. Con estos sentimientos, la observancia más rigurosa de la disciplina, no sólo de los reglamentos, sino de la disciplina moral que impone el cumplimiento de la ciudadanía, llegaréis todos a cumplir

los fines que este hombre, en nombre de todos los demás, acaba de expresar con tanto acierto. Yo te felicito, muchacho, y felicito a toda la tropa en tu persona.

En el Casino de Clases

"Recojo con mucho placer las palabras que vuestro presidente me ha dirigido en nombre del Casino y Centro de Cultura de las Clases del Ejército, y deseo decir en primer término que a mí personalmente nada tenéis que agradecerme. Si en las mejoras concedidas a vuestra clase hay para vosotros, como es natural, un motivo de gratitud, esta gratitud es para la República, no para el ministro. El ministro pasa, y mientras gobierna interpreta un sentir general del régimen; pero el régimen permanece, y a sus principios, a sus métodos de gobierno y a sus propósitos para el porvenir del Ejército es a quien debéis la mejora que habéis logrado. A mí no me debéis nada.

Deseo deciros aquí que cuando yo he llevado a las Cortes o he decretado en el Ministerio reformas hace tiempo sentidas por vosotros como una necesidad, como una aspiración, yo lo he hecho no para que me debáis un favor, ni siquiera para que estuviéseis agradecidos a la República, sino pensando en el bien general del Ejército y en el bien general de la totalidad del país, porque estimo que vosotros tenéis en el Ejército una misión muy importante dentro de las funciones que os competen, y que era menester dar al Cuerpo de suboficiales todas aquellas condiciones de orden moral y profesional que justamente reclamaba. Naturalmente, si fuésemos a hablar largamente de vuestro

presente y de vuestro porvenir, habría que decir muchas cosas; pero la ocasión no es para eso. Cambiemos unas corteses palabras, y quiero dejaros una buena impresión no sólo del pasado, sino del futuro.

Yo me he propuesto en el Ejército estimular el valor personal, la capacidad personal, y en todo lo que se refiere a selección de individuos para ocupar los cargos en el día de mañana lo que yo quiero, porque es de justicia, es que el que valga tenga los caminos abiertos para llegar a donde su valer lo haga merecedor de estar. Esto es lo que hay que hacer, y entre vosotros, después de haberos creado el cuerpo y haberos dado aquellas satisfacciones de orden moral y profesional que ha sido posible daros, tenéis ahora un camino abierto, no a la protección oficial, sino abierto a vuestro propio mérito personal. En las academias militares se os ha reservado una parte importante en la composición de la oficialidad futura, pero dentro de esta parte importante reservada con el propósito de abrir un camino a los hijos del pueblo en el mando de las armas, hay una proporción importante dedicada al esfuerzo personal, de suerte que si el rigor de los escalafones lleva siempre a la cabeza a los más antiguos, habrá una parte dedicada exclusivamente al esfuerzo propio, y este estímulo es el que os debe de servir siempre de guía. No refugiarnos sólo en la antigüedad ni en la intachable conducta; no basta. En el Ejército hay que hacer más que cumplir con el deber. Y en eso encontraréis vosotros vuestra recompensa.

Yo sé cuáles son vuestros sentimientos, cuáles son

vuestra abnegación y devoción a la República; sé que tenéis un perfecto espíritu militar, fundido en un espíritu republicano; vosotros, que estáis entre los jefes y oficiales y la tropa , sois la pieza capital en la organización del Ejército republicano, puesto que en vuestras manos inmediatas está la tropa, es tán los hijos del pueblo. Vosotros sois la clave del cumplimien to perfecto de la disciplina y del mando. Tenéis esta responsabilidad, tenéis con la República una deuda que la República no reclamará, pero que pesará sobre vosotros. Yo espero que el cuer po de suboficiales con un porvenir abierto a su esfuerzo personal, será siempre el más firme sostén de la República y colaborará al engrandecimiento del Ejército y de España".

En la antigua Academia de Caballería

"Recibo con mucho gusto las palabras que acabáis de pronunciar en nombre de la división de su mando. No ponga en du da si me ha sido o no grato visitar esta guarnición. Me ha sido gratísimo, como siempre que tengo ocasión de ponerme en contacto con los elementos militares y de decirles algunas palabras de afecto, de aliento y de espíritu nacional y republicano. No pue do deciros muchas, porque bien se os alcanzará que la fatiga puede más que mi buen deseo, y después de la jornada que llevo difícil me sería entreteneros un rato siquiera con amenidad. Es la primera vez que tengo la ocasión de hablar a la oficialidad de esta guarnición, sin embargo, y no quiero desaprovecharla sin deciros a vosotros lo que he dicho siempre que he dirigido la palabra a vuestros compañeros.

En efecto, como ha dicho vuestro general, hay que apreciar en el Ejército dos aspectos: uno, su aspecto de ciudadanos españoles, y otro, su aspecto profesional. Ha sido cosa corriente en la política española, y de ello han venido a nuestro país no pocas desventuras, encaminar la gobernación del Estado, y sobre todo el mando del Ejército, partiendo del supuesto de que los militares profesionales, como sois vosotros, representaban en el país o eran en el país una clase privilegiada sobre los demás ciudadanos, y que los militares, apartados por deber de la vida pública, podían y hasta debían en determinadas ocasiones de crisis nacional lanzarse con su propia autoridad y su representación de clase a dirigir los negocios del Estado.

Las dos cosas son erróneas. Vosotros, los militares que tenéis el difícil deber de vestir el uniforme y de vestirlo, como es natural, con honor, sois en efecto una clase privilegiada en el país; pero una clase privilegiada en este sentido: que tenéis más deberes que los demás ciudadanos españoles y unos pocos menos derechos en el orden de la ciudadanía. Deberes más grandes que no tenemos los paisanos y unos pocos derechos menos en la vida pública, porque voluntariamente los habéis renunciado cuando aceptasteis la profesión militar.

Vosotros tenéis una obligación suprema que los demás españoles no tenemos. Tenemos otras; pero esa, no. Tenéis el deber de la obediencia silenciosa. ¿A quién? El deber de obedecer en silencio la voluntad nacional. Y cuando esta voluntad nacional se manifiesta de un modo legítimo y auténtico, no sólo nosotros los paisanos, sino de una manera especial los militares,

los que mandáis en el Ejército, tenéis el deber de acatar la orden y no procuparos más que de su cumplimiento.

Este deber tan claro, que es la salvación misma del Ejército, lo que mantiene al Ejército en la pureza de su destino, ha sido olvidado algunas veces en España. Tengamos la franqueza de reconocerlo. Ha sido olvidado -yo no dudo de la buena intención que algunos han podido poner en estas intervenciones del Ejército en la vida pública-; ha sido olvidado no sólo con daño del país, que a todos nos preocupa, sino con daño mismo de vuestro prestigio, de vuestra autoridad y de vuestra capacitación profesional. Esto es lo que debéis evitar vosotros como militares.

En vosotros hay dos aspectos, por tanto: el ciudadano y el militar. Vuestros derechos de ciudadano se acaban, delante de la vida pública, en el derecho electoral que la ley os confiere como a todo el mundo. Pero como militares, como corporación, vuestro deber delante de la vida pública es el silencio y la indiferencia absoluta. En ningún caso, en ninguna crisis, en ninguna dificultad el Ejército tiene por qué preocuparse de lo que hacen los demás ciudadanos en la vida pública, si están en paz, si no están en paz, si se entienden o no, si disputan. Vosotros, como militares, en tanto seais militares y vistáis el uniforme, no tenéis nada que ver con eso. La nación os confiere una misión difícil de las más graves, que es el mando. Nada es más difícil que mandar, y nadie sabe mandar si no ha aprendido antes a obedecer.

La escuela del mando es la obediencia, y el que no ha sabido obedecer, guardándose en su conciencia las convicciones íntimas, en cuanto no chocan con su deber profesional, jamás sa
brá mandar. Esta es la posición que el Ejército debe ocupar en la República.

Naturalmente, vosotros servís a España y estáis reser
vados para un caso en que España necesite defender su independencia y su libertad. Y ahí se acaban vuestros deberes. En prepararos para esa ocasión, con esta agravante: que es propio del Ejército de un país civilizado, como es España, que vosotros no podáis desear la guerra, y, sin embargo, tenéis la obligación de estar preparados para ella. No podéis hacer nada en el país que incite a la guerra, y, sin embargo, tenéis la obligación de afron
tar la guerra si se plantea.

Esto agrava vuestra difícil profesión; pero vuestro deber de ciudadanos acatando la voluntad del país, que es libe
ral y republicano, sólo servirá para recluirlos en vuestra profesión, haciendo que cada día el Ejército sea más puro, más res
petado y más útil. Tened la seguridad, señores oficiales y jefes, que el país mira con simpatía a su Ejército republicano. Cuando han ocurrido diferencias entre la oficialidad y la opi
nión pública se han debido siempre a que algunos, o muchos, han pretendido desviar a la oficialidad de su cometido propio. Pero el país republicano y la patria entera, viendo a los soldados de la República metidos física y moralmente en su uniforme y en su disciplina, no puede menos de verlos con simpatía, puesto que todos somos hijos de la misma madre, hijos de la misma

patria, y cada cual trabaja con su profesión en el engrandecimiento de la República y de la nación.

Yo estoy seguro, señor general, que el alto espíritu republicano que impera en su persona, en su misión, en el cumplimiento de sus deberes, late en todos los pechos de los oficiales que me escuchan. Tened la seguridad de que la República - cuenta con vuestra lealtad, equivalente a la de todos los españoles; lealtad al Gobierno y a la nación, la cual confía en vosotros, y procurará que el Ejército, satisfecho en su integridad de conciencia profesional y en sus deberes, pueda siempre levantar dignamente la cabeza ante la opinión pública, y decir: "He aquí una Corporación del Estado que sabe cumplir con su deber y sacrificarse por la patria".

Os felicito a todos por el espíritu que resplandece en la organización de los centros que he visitado hoy, y os digo, como lazo de unión entre el paisano y el militar: "Señores jefes y oficiales: ¡Viva España! ¡Viva la República!"

5. PREAMBULOS A LAS DISPOSICIONES LEGALES

SOBRE EL EJERCITO

DECRETO 22 ABRIL 1931. EJERCITO

Relativo a promesa de fidelidad a la República por el Ejército.

"La revolución de abril, que por voluntad del pueblo ha instaurado la República en España, extingue el juramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas armadas de la Nación ha bían prestado a las instituciones hoy desaparecidas. No se entiende, en modo alguno, que las fuerzas de mar y tierra del país estaban ligadas en virtud de aquel juramento por un vínculo de adhesión a una dinastía o una persona. La misión del Ejército, dice el artículo 2^a de la Ley constitutiva, es sostener la independencia de la Patria.

Esta doctrina, tan sencilla y tan clara, sobre la cual fundará la República su política militar, va a tener ahora un desarrollo completo y su perfección. El Ejército es nacional , así como la Nación no es patrimonio de una familia. La República es la Nación que se gobierna a sí misma. El Ejército es la Nación organizada para su propia defensa. Resulta, pues, evidente que, tan sólo en la República pueden llegar el Estado y sus servidores en armas, a la identidad de propósitos, de estímulos y de disciplina, en que se sustenta la paz interior y, en caso de agresión, la defensa eficaz de nuestro suelo. Al tender hoy la República a los Generales, Jefes y Oficiales de su Ejército, la fórmula de una promesa de fidelidad, de obediencia a sus Leyes, y de empeñar su honor en defenderla con las armas, les brinda la ocasión de manifestar libre y solemnemente los sentimientos que, como a todos los ciudadanos españoles, dirigen hoy

su conducta. El Gobierno de la República se complace en declarar su satisfacción por el comportamiento de los militares en los días que acaban de transcurrir, y asegura a cuantos desde ahora la sirven, que en el régimen y gobierno del Ejército seguirá las mismas normas de legalidad y responsabilidad, de severa disciplina, de benigna consideración a los sentimientos respetables, y de recompensa a las virtudes cívicas que se propone aplicar en todos los organismos e institutos del Estado. Respetuosa la República con la conciencia individual, no exige la promesa de adhesión. Los que opten por servirla, otorgarán la promesa; los que rehusen prestarla, será que prefieran abandonar el servicio. La República es para todos los españoles, pero sólo pueden servirla en puestos de confianza los que sin reservas y fervorosamente adoptan su régimen. Retirar del servicio activo a los que rehusen la promesa de fidelidad no tiene carácter de sanción, sino de ruptura de su compromiso con el Estado.

Fundado en estas consideraciones, y a propuesta del Ministro de la Guerra, el Gobierno provisional de la República decreta:"

01245

DECRETO 25 ABRIL 1931. EJERCITO

Concediendo el pase a la segunda reserva con el mismo sueldo que disfruten en su empleo de la escala activa a todos los Oficiales del Estado Mayor General, Guardia Civil, Carabineros; a los de los Cuerpos de Alabarderos, Jurídico Militar, Intendencia, Intervención y Sanidad que lo soliciten del Ministerio de la Guerra.

"Las reformas que el Gobierno de la República se propone introducir en la reorganización y régimen del Ejército, han de llevarse a cabo en dos partes: una, más urgente y sencilla, la acometerá desde luego el Gobierno, en virtud de los poderes que la revolución ha puesto en sus manos; otra, que ha de comprender las bases legales de la institución militar, está deferida a las Cortes. Votarán en su día éstas una nueva Ley constitutiva; fundarán sobre algo más que el papel de la "Gaceta" la instrucción premilitar, que permita, con ventaja del Tesoro público y de la producción nacional, la reducción del tiempo de servicio en filas; fijarán las normas de reclutamiento e instrucción de la Oficialidad y la tropa, así como la selección del Estado Mayor General Central, darán una Ley de cuadros para establecer las plantillas según las necesidades que la técnica profesional determina, y una Ley de efectivos que sustraiga la importancia y cuantía de cada unidad táctica a las arbitrariedades administrativas de los licenciamientos anticipados, rebaja del servicio y otras combinaciones reprobables, ajenas, cuando no contrarias, a la buena preparación de la tropa para la guerra; proveerán las Cortes al armamento de las fuerzas que el

país necesita y a la eventualidad de una movilización; revisarán los principios en que se basa nuestra justicia militar, corrigiendo los defectos de un Código penal arcaico y durísimo; votarán el primer presupuesto de Guerra que revele exactamente nuestra organización armada y su costo, que, con otras innovaciones que no son de analizar en este preámbulo, dotarán a España de la capacidad defensiva propia de un pueblo libre y pacífico e infundirán en la clase militar aquella seguridad de justicia y buen gobierno en su carrera, no sólo conciliable, sino estrechamente ligada al respeto de los derechos inherentes a la ciudadanía. Los soldados de España, sujetos por el deber a una disciplina rigurosa, quedarán, merced a la obra legislativa de la República, libres para siempre, como todos los españoles, del despotismo ministerial. La debilidad en que habían caído las Cortes en virtud de motivos pertenecientes al problema general político de la nación nos tenían sometidos al arbitrio sin freno de los Ministros, últimamente concentrado en una sola persona, sobre la cual ha caído ya la cólera del pueblo, y la sanción de la Historia. Pero el despotismo ministerial, pernicioso en todos los servicios del Estado, en ninguno lo ha sido tanto como en el departamento de Guerra, porque a la indefensión en que estaban todos los ciudadanos se junta, respecto del personal militar, la fuerza de la disciplina. El Ejército, obediente a la Ley, se calla.

Abusos de autoridad que trasladan a las funciones de administración y gobierno encomendadas al Ministro de la Guerra, las atribuciones de mando que también le pertenecen por su gra-

do superior en la jerarquía, han servido demasiadas veces para entronizar el favoritismo, formar clientelas, obscurecer el mérito y sembrar en los ánimos el descontento, con lo cual el militar se desmoraliza, porque la entereza de cada uno sólo puede fundarse en el cumplimiento del deber y en la certidumbre de que los demás también lo cumplen. La obra legislativa de la Revolución impedirá que los errores antiguos reaparezcan y el Gobierno provisional cuenta con poner a las Cortes ante esa tarea, complicada y difícil sin duda, pero perfectamente dominable por el trabajo asiduo y el desinterés.

En tanto que las Cortes no estatuyen sobre el régimen definitivo del Ejército, incumbe al Gobierno provisional adoptar ciertas disposiciones, de conocida urgencia y utilidad, que supriman organismos, servicios y personal innecesarios, reduzcan los gastos del presupuesto y, sin prejuzgar la obra de las Cortes, la faciliten. El presente decreto tiende a resolver, cuando menos en parte, un problema específico que no depende de la organización futura, antes la estorba o la imposibilita. Sea cualquiera, en efecto, la orientación de las leyes orgánicas militares, es manifiesto que en todas las escalas del Ejército hay un enorme sobrante de personal y en ningún caso podrá ser utilizado. Figuran en las escalas retribuidas del Ejército (exceptuada la de segunda reserva de Generales), según el Anuario Militar del presente año, 258 Generales y 21.996 Jefes, Oficiales y asimilados.

Basta consignar las cifras para que sea notoria la gravedad de la situación. A esto se ha llegado por consecuencia de

las guerras civiles y coloniales, en virtud de un sistema erróneo en el reclutamiento de la Oficialidad. Todos padecen los efectos de este mal. Los Jefes y Oficiales, por la paralización de las escalas; y el servicio público, porque el exceso de personal, no sólo ha detenido hasta ahora los intentos de reforma del Ejército, sino que ha llevado a muchos Ministros de la Guerra a inventar servicios y destinos de utilidad dudosa con el propósito de colocar a la Oficialidad sobrante. Tal situación ha de concluir, y el Gobierno se halla resuelto a que concluya. Por este primer decreto se implanta un régimen transitorio para que los militares en activo puedan pasar a la situación de reserva o de retirado sin quebranto en su haber. Ellos no son responsables de las dificultades presentes, y nada está más lejos del ánimo del Gobierno que menoscabarles la posición legalmente adquirida en el curso de su carrera. Por eso se adopta en este decreto el principio de voluntariedad para acogerse a los beneficios que ofrece, y el de permanencia y consolidación de las remuneraciones. Con la amortización total de las vacantes que se produzcan, el Tesoro público no sufrirá ninguna carga nueva y si se calcula el volumen de la operación, desde que el decreto comience a surtir efectos hasta que se extinga el último Oficial de cuantos se acojan a sus preceptos, al Estado reportará ventajas de orden económico además de las que resulten desde luego en la organización del Ejército. No puede predecirse desde ahora la importancia del resultado que se obtenga con esta disposición. Conocida que sea y fijadas las plantillas definitivas, el Gobierno proseguirá con vigor la obra que hoy se ini

01249

cia, respetando, como es natural, lo que legalmente puede y debe respetarse.

Fundado en tales consideraciones, a propuesta del Ministro de la Guerra, el Gobierno provisional de la República de creta:"

01250

DECRETO 4 MAYO 1931. EJERCITO

Relativo a la provisión de destinos militares.

"La arbitrariedad en la provisión de destinos militares, puesta demasiadas veces al servicio del favor personal o de otros motivos contrarios al bien público y a la interior satisfacción de las instituciones armadas, han contribuído por modo incalculable a introducir en la oficialidad la persuasión de no ser siempre atendida con un criterio igual en circunstancias iguales. Esta presunción produce el desánimo y la desconfianza en el buen oficial, que ante repetidas denegaciones de justicia, pierde amor a su carrera, o bien incita a otros a hacerse valer por medios muy distintos del cumplimiento riguroso de sus obligaciones.

Con el presente Decreto se pone término a una situación inconveniente, y reservando al Gobierno las indeclinables facultades de elección para proveer ciertos destinos, se establece un riguroso principio de antigüedad en la provisión de todos los demás, en espera de que las Cortes, al votar la Ley orgánica, resuelvan definitivamente el problema.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Guerra, el Gobierno provisional de la República decreta:"

DECRETO 11 MAYO 1931. JURISDICCION Y JUSTICIA MILITAR

Determina la jurisdicción de los Tribunales militares y de Marina.

"La República española, como todo régimen de su misma tendencia, ha de significar un progreso resuelto hacia la unificación de fueros y restablecimiento, en sus naturales límites, de la jurisdicción ordinaria, completando así la obra que ya iniciara la anterior revolución española de 1868.

Entre los acuerdos que reflejaron ha tiempo la coincidencia de todas las fuerzas políticas triunfantes en el movimiento revolucionario y representadas en el Gobierno provisional, figura, como lógicamente debía suceder, el propósito de reducir la jurisdicción militar a aquello que le es propio, o sea al delito esencialmente militar también.

Fijado el criterio y determinadas, también ha tiempo, las modalidades para su aplicación, cedió el presente Decreto paso a otras determinaciones más urgentes; pero es llegada la hora de atender aspiraciones tan justas de la buena doctrina jurídica y de la opinión, dando a ésta la confianza en Tribunales bien organizados y eficaces, de ejercer con prestigio e imparcialidad las altas funciones de juzgador.

Las derogaciones consiguientes a esta reforma en las leyes precesales del Ejército y de la Marina se completan con las de otros preceptos, aún más anormales, contenidos en leyes de excepción mediante las cuales el temor más o menos fundado,

01252

de una sociedad poco reflexiva y de gobierno manifiestamente reaccionarios, extendieron la jurisdicción castrense a hechos totalmente extraños a su cometido y razón de ser.

Reflejo y consecuencia de todas las indebidas expansiones de la jurisdicción militar fue un Consejo Supremo con proporciones y permanencia suntuarias y excesivas que no podía subsistir reducido el fuero a su campo natural y estricto.

A todo ello atiende el Gobierno repartiendo entre organismos especialmente adecuados, cada una de las atribuciones inconexas entre sí, que formaron el cometido del que desaparece.

Por todo ello, el Gobierno provisional de la República decreta: "

DECRETO 25 MAYO 1931. EJERCITO

Reorganización del Ejército.

"En el orden de las reformas conducentes a la reorganización del Ejército, acomete hoy el Gobierno una de las más importantes, base y condición de muchas otras: es una nueva agrupación de las fuerzas militares, encaminada a replantear las unidades orgánicas en que el mando y las tropas se adiestren para la guerra. El problema es de tal monta que, sin resolverlo pronto y bien, no se adelantaría un paso en la renovación del Ejército. Las unidades existentes son, por su número, excesivas; por su contenido, débiles; por su costo, si hubieran de mantenerse en un punto de regular eficacia, onerosísimas. Es inevitable deshacer la organización actual y fundar sobre terreno más firme. Ligada esta cuestión con la del exceso de personal, constituyen una sola y misma dificultad, como que provienen de los mismos errores, y han de resolverse a un tiempo. Hallándose ahora en curso la primera amortización, extraordinaria del personal merced a los beneficios ofrecidos por el Decreto de 25 de abril último, es oportuno plantear inmediatamente los organismos nuevos. Por una parte, el Estado declara en esta manera cuál es el límite que las necesidades de la defensa nacional y los recursos del país ponen a los gastos del presupuesto de la guerra; y por otra, el personal militar a quien afecta la reforma, conocerá los datos necesarios para aceptar o no la opción que contiene el mentado Decreto.

La reorganización comienza por establecer el tipo o

modelo de la división, determinando su estructura general y la composición de las unidades tácticas elementales. Al final de la guerra europea, casi todos los ejércitos beligerantes habían adoptado como tipo la división de tres regimientos de Infantería. La crisis de efectivos aconsejó aquella reforma, que permitía conservar y aun aumentar el número de divisiones. Desde entonces, otros países han organizado también la división sobre base ternaria, acerca de cuyas ventajas las opiniones de los técnicos distan mucho de ser coincidentes. Si la división de tres regimientos es más ligera, acarrea inconvenientes de orden táctico, de tal índole, que ya se defiende con autoridad el retorno a la organización antigua, incluso en las naciones iniciadoras de la reforma. Siendo por lo menos, indecisa la solución de este problema, se ha preferido conservar en España la división de cuatro regimientos, a fin de que, al reducirse ahora el número de grandes unidades, cada una de las subsistentes tenga fortaleza bastante para realizar empresas de alguna consideración. Dentro de la gran unidad, se atiende a la composición de las unidades tácticas elementales en perfecto acuerdo con los reglamentos y se les dota de personal en términos prudentes, de suerte que no sean tan voluminosas que resulten inmanejables, ni tan raquílicas que la instrucción del mando y la tropa se reduzca a supuestos imaginarios. Es resolución inquebrantable del Ministro que suscribe mantener en los Cuerpos armados la integridad del efectivo legal acreditado en el presupuesto, e impedir que el Ejército siga empleando en administrarse a sí mismo una parte de su personal tan considerable como la que ahora emplea. Sin perjuicio de atender a estos propóso

sitos con ulteriores disposiciones de Gobierno, se procura ya en la nueva organización corregir la mengua que en el efectivo útil de las unidades producen el uso y el abuso de los destinos, se crean secciones especiales para este servicio, y si se fijará más tarde la responsabilidad de los Jefes que incurran, a este respecto, en tolerancia. Las plantillas del mando se han establecido con rigurosa exactitud. No se escatima lo necesario. Se quita lo demás, para que los Cuerpos no sean un plantel de destinos superfluos. Por último, la división contiene en su estructura una fuerza artillera proporcionada al volumen de la unidad, y los servicios de enlace, exploración, información, etc., que le son propios. En su nueva planta, y una vez pertrechada de material, la unidad divisionaria podrá compararse con cualquiera otra similar del extranjero.

Trazado el esquema de la división, había que determinar cuántas deben subsistir. Las diez y seis divisiones existentes se reducen a ocho. Para adoptar este número se tiene en cuenta: los hombres que proporciona anualmente el servicio obligatorio a corto plazo; la carga que el presupuesto puede soportar, en relación con otras atenciones del Estado; las exigencias reales de la defensa del territorio, y el papel que le incumbe al Ejército activo en caso de guerra nacional. Si las diez y seis divisiones actuales y las demás fuerzas no incluidas en ellas hubieran de sostenerse en el pie de utilidad y rendimiento necesario en todos los servicios públicos, y singularmente en los de guerra, sería preciso prolongar el servicio en filas, acuartelar doscientos mil hombres, gastar sumas ingen-

tes, para, en fin de cuentas, costear un Ejército en manifiesta desproporción con los fines de nuestra política exterior no menos que con los medios de la economía española. Como esto era imposible, la organización actual sólo en parte ha cobrado realidad; en la cuantía del gasto, mientras que en su eficacia militar la multiplicidad de organismos ha servido para debilitar los todos. El nuevo sistema compagina la mayor utilidad de la fuerza armada y la reducción del gasto; establece verdaderas Escuelas de instrucción militar para el contingente anual de ciudadanos; prevé cualquier urgencia en caso de peligro, y al instituir cierta independencia o separación entre el Ejército permanente activo y la organización profunda de las reservas movilizables para la defensa nacional, introduce propósitos e ideas que hasta ahora no se habían aplicado en nuestro país.

Antes de la guerra europea, la organización militar consistía en un Ejército permanente muy poderoso, de movilización fácil, merced a la incorporación de los contingentes de reservistas. El Ejército se bastaba para la instrucción de las tropas y los cuadros, para abastecerse en la industria militar, preparar la movilización y desarrollar por sí, casi exclusivamente, una campaña. En caso necesario, se elevaban al pie de guerra los efectivos de las unidades de reserva, previstas desde el tiempo de paz en número igual a las de activo. Lo cuantioso de los efectivos de tropa y de los cuadros de mando, en la paz permitía que las fuerzas así organizadas entrasen inmediatamente en campaña. En nuestros días, los pueblos no admiten un Ejército constituido sobre la base de un servicio en filas

de larga duración y con grandes efectivos permanentes. A este sistema reemplaza el armamento general de la Nación, que, en caso de guerra, moviliza todas sus fuerzas, combatientes o no, y exige en tiempo de paz cargas menos pesadas, tanto en el orden económico como en el del sacrificio personal. La organización nueva demanda cuadros profesionales poco numerosos, que tienen a su cargo preparar la movilización, entretener el material, ejercer los mandos superiores, instruir los contingentes y ser vir de base al encuadramiento de las unidades. El tiempo de ser vicio no debe pasar de lo indispensable para la instrucción, que habrá de facilitarse con una preparación adecuada fuera de filas. Finalmente, no puede contarse desde el tiempo de paz con todo el material de guerra moderno necesario para la movilización, porque es complicado y costoso y se perfecciona de conti nuo.

Aplicar estas ideas en España lleva consigo una reducción considerable de los cuerpos y organismos activos. Ya no podrán tales cuerpos atender por sí a la movilización de los efectivos de guerra y a formar nuevas unidades. Estas operacio nes se confiarán a centros de movilización repartidos por el territorio en correspondencia con los cuerpos activos. El Ejér cito permanente quedará así reducido a instruir los reemplazos anuales y a proporcionar con ellos y con los hombres disponibles llamados a sus filas una fuerza que cubra las operaciones de movilizar a la masa de reservistas y de constituir con ellos el verdadero Ejército nacional.

Por el pronto, la organización del Ejército se aco-

modará al nuevo sistema tan sólo en lo que se refiere a las unidades activas o permanentes, punto que no admite espera. Quedan para ser resueltos más adelante problemas de mucha cuantía, como son: formar los cuadros de complemento, que habrán de ejercer en gran escala los mandos subalternos; asegurar la cohesión indispensable entre los soldados y entre los soldados y sus jefes; preparar la movilización, determinando el número de unidades que han de organizarse en caso de guerra y la forma de agruparlas; el reclutamiento e instrucción de la oficialidad; el sistema de ascensos; la selección del Estado Mayor General, y la fabricación y adquisición del material, pudiendo adelantarse desde ahora que el sistema vigente es poco ventajoso, porque representa una carga muy fuerte en tiempo de paz y no bastaría, ni con mucho, a las necesidades más urgentes del Ejército en campaña.

En otro orden de cosas, habrán de hacerse las reform_{as} necesarias para introducir en los cuerpos un sistema de administración compatible con las realidades de la vida militar y que al mismo tiempo se ajuste a las normas generales establecidas en la ley de Contabilidad.

Todo este programa aunque se realizase en lo orgá-nico y administrativo, se frustraría en cuanto a la eficacia militar del Ejército, si el Gobierno, por los medios de acción a su alcance, no acertase a infundir o a fomentar en las institu-ciones armadas de la Nación una fuerza espiritual más alta que la estricta observancia de los Reglamentos, para robustecer y mejorar los resortes del mando y el acatamiento de la discipli

na, que no pueden fundarse tan sólo en el temor a las sanciones, sino en la consciente aceptación de la responsabilidad, en discernir claramente la razón de los deberes y en el sacrificio del interés personal en aras de una función cívica muy elevada.

En cuanto al efecto inmediato de la reforma en el Presupuesto, debe notarse que al pasar de diez y seis a ocho las divisiones existentes, se suprimen treinta y siete regimientos de infantería, cuatro batallones de montaña, nueve batallones de cazadores, diez y siete regimientos de caballería, un regimiento de ferrocarriles y dos batallones de ingenieros; se organizan dos regimientos de carros de asalto y un batallón de ametralladoras. Se conserva la división de caballería independiente, reduciéndose a diez los regimientos de este Arma, y se organizan las tropas de Cuerpo de Ejército y de Ejército estrictamente indispensable para completar el plan adoptado. Con estas reformas, las ya realizadas o a punto de aprobarse en los servicios dependientes de la Administración central y regional y las que están en estudio para la zona de Marruecos, el presupuesto de la guerra se descargará de una suma que no sería prudente cifrar desde ahora por las alteraciones de los precios, pero que puede calcularse no ha de ser inferior a 200 millones de pesetas.

En virtud de tales consideraciones, a propuesta del Ministro de la Guerra, el Gobierno provisional de la República decreta:"

01269

DECRETO 3 JUNIO 1931. EJERCITO

Reorganiza las fuerzas militares de Marruecos.

"El propósito del Gobierno de introducir las mayores economías posibles en el presupuesto, han movido al Ministro de la Guerra a estudiar una reorganización de las fuerzas militares de Marruecos en forma tal que puedan ser reducidas sin restar eficacia a aquel Ejército, ya que si bien hoy existe tranquilidad en la zona del Protectorado es indispensable contar siempre con los medios precisos para que sea factible hacer frente a cualquier eventualidad que allí pudiera presentarse. Esta reducción que hoy se inicia podrá ser ampliada en un día próximo cuando esté terminada la carretera central de la Zona y mejoradas las restantes pistas, con lo cual serán rápidamente transportables grandes núcleos de fuerza a los puntos que las circunstancias demanden.

Las razones indicadas son causa de que si bien se reducen al mínimo los mandos y servicios, no lo sean en gran cuantía los efectivos de las tropas combatientes.

En virtud de tales consideraciones, y a propuesta del Ministro de la Guerra,

El Gobierno provisional de la República decreta:"

DECRETO 3 JUNIO 1931. EJERCITO

Clasificación y calificación de los ascensos que por méritos de campaña se concedieron desde el 13 septiembre 1923.

"La Ley de 29 de junio de 1918, en el inciso a) de su base 10, epígrafe "Recompensas", dispuso que para promover al empleo inmediato por méritos y servicios de campaña a los Jefes y Oficiales sería necesario que, previa propuesta del General en Jefe, se instruyera expediente contradictorio, de carácter sumarísimo, en el que a su tiempo había de informar el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y cuando el informe de éste fuese favorable a la concesión, una Ley otorgaría el ascenso como recompensa.

Posteriormente, la Ley de 5 de agosto de 1922 transfirió al Poder ejecutivo la facultad que la de 1918 reservó a las Cortes, ejerciéndola aquél por el Consejo de Ministros con sujeción a las demás condiciones establecidas.

Con pretexto de abreviar los trámites para la concesión de ascensos por méritos de guerra, el Decreto de 21 de octubre de 1925 suprimió el expediente contradictorio, exigido por la Ley, y garantía de aquellos a quienes el ascenso del propuesto pudiera perjudicar, y dispuso que las propuestas se vieran en una Junta de Generales, la cual podría solicitar del Ministro la recompensa que considerase oportuna, siempre que lo hiciera por unanimidad.

La Junta de Generales con cuya intervención se pre

01262

tendió sustituir el expediente contradictorio no puede suplir lo, porque excluye la posibilidad de que cuantos conozcan datos de interés para aquilatar los méritos del propuesto, los lleven al expediente, el cual, por otra parte, permite conocer las circunstancias que aconsejaron la recompensa y aleja la sospecha de que fuese concedida por confabulación, complacencia u otros motivos inadmisibles.

Atento el Gobierno provisional de la República a restablecer el imperio de las Leyes, alterado por los que vivieron fuera de ellas, ha acordado la revisión de los ascensos por méritos de guerra concedidos después del 13 de septiembre de 1923, para convalidar los que fuesen legales y revocar los demás, sin perjuicio de proponer a las Cortes las rehabilitación de los que sean acreedores a tal distinción. Para que la Comisión revisora encargada de informar al Gobierno pueda cumplir su función.

El Gobierno provisional de la República, a propuesta del Ministro de la Guerra, decreta:"

DECRETO 16 JUNIO 1931. EJERCITO

Supresión de Regiones militares y cargo Capitán general de la región; crea Inspectores generales.

"Implantada por Decreto de 25 de mayo último, la nueva organización divisionaria del Ejército permanente activo, es inexcusable aplicar a la demarcación territorial militar y a las jerarquías de mando hasta hoy subsistentes en ellas las consecuencias rigurosas del principio en que se inspira el sistema adoptado. En su misma existencia y en el trazado que las deslinda, las ocho regiones militares de la Península, ampliadas por razones de prestigio con las Capitanías generales de Baleares y Canarias, responden, en parte, a un pensamiento organizador de la defensa ya anticuada y en parte no pequeña a motivos de orden histórico y político. Se creía en la probabilidad de varios teatros de guerra independientes, o se ceñía la Región a los límites de los antiguos reinos y provincias de España. En cada Región, un Capitán general conservaba cierta sombra de los Virreyes, como se usaron en tierras coloniales, y siendo la única Autoridad que, a diferencia de los funcionarios gubernativos civiles, ejercía un mando interprovincial, el área de su jurisdicción y lo excepcional de su fuero, han introducido a veces confusiones peligrosas respecto a la procedencia de los representantes del Estado en la órbita local, y han habituado a las poblaciones y a los Delegados del Poder público a una intervención de la primera Autoridad militar regional en cuestiones de índole social y política, enteramente ajenas al mando de tropas y a su función peculiar de prepararse para la

guerra. La demarcación regional y el elevado rango en que esta ban constituidas las Capitanías generales no son ya adecuados a la verdadera misión del Ejército ni a un sano concepto del equilibrio interno del Estado, y es preciso concluir en lo político y gubernativo, cuando se roza con las fuerzas armadas, una reforma equivalente a la ya realizada en orden a la justi cia militar.

Suprimiéndose las Regiones y las Capitanías generales, el mando superior de tropas recae, localmente, en los Generales de las divisiones, que no vienen a sustituir bajo otro nombre a la jerarquía extinguida. Las funciones del General de la División se delimitan estrictamente en este Decreto, no tie nen base territorial y, como era deseable y es útil para el Ejército y para el resto de la Nación, se aroldan a la competencia exclusiva del militar.

El buen funcionamiento y la congruencia de la orga nización devisionaria se aseguran mediante la creación de tres Inspectores generales de Ejército, correspondiendo a otros tan tos grupos de Divisiones. Los Inspectores generales de Ejérci to residirán en Madrid, con las facultades que en el articula do se enumeran y con la asistencia y los medios indispensables para su función.

Cuando la reorganización total del Ejército esté acabada y se creen en el Ministerio de la Guerra los Centros técnicos que hayan de coronarla, los tres Inspectores generales entrarán a formar parte del organismo superior que, bajo

01265

la presidencia del Ministro, mantenga la unidad de doctrina y de instrucción indispensable para el adelanto y la eficacia de la defensa nacional.

Fundado en tales consideraciones, el Gobierno provisional de la República, a propuesta del Ministro de la Guerra, decreta lo siguiente:"

DECRETO 16 JUNIO 1931. EJERCITO

Suprime las Zonas de Reclutamiento y Reserva y crea diez y seis centros de movilización y reserva.

"La relativa separación o independencia entre el Ejército permanente activo y la organización de sus reservas, que estableció el Decreto de 25 de mayo último, trae por resultado el que los Cuerpos del Ejército permanente no puedan atender por sí a la movilización de los efectivos de guerra ni a formar nuevas unidades, según ya se hizo notar en el preámbulo de aquella disposición. El presente Decreto, al crear los centros de movilización encargados de tan importantes cometidos, viene a concluir en esta parte el plan adoptado para el aprovechamiento de los recursos del país en caso de guerra, trazando desde ahora en líneas generales el ulterior destino y utilización de los hombres sujetos al deber militar, después que salen de los Cuerpos activos, así como otros Decretos reorganizan al mismo tiempo los centros a quienes se confía las operaciones previas al ingreso de los mozos en filas. Domina en la creación de las nuevas oficinas movilizadoras un propósito de claridad, sencillez y economía, el de exigirles el máximo rendimiento y el de adoptarlas cuanto es posible, repartidas por el territorio, a la densidad demográfica y a los medios de comunicación. Ha sido, pues, necesario suprimir todas las circunscripciones de reserva de Infantería afectas a las Zonas y las Zonas mismas; los Depósitos de reserva de Caballería, Artillería e Ingenieros; las Comisiones encargadas del censo de ganado y material, y quitar toda intervención en las altas y

bajas de los soldados licenciados en situación de reserva a otras unidades y Cuerpos que hasta ahora la tenían. Todas las funciones movilizadoras se acumulan en los nuevos centros, salvo en lo tocante a las industrias, que de momento no se varía. La base para la constitución de los centros consiste en discernir las dos situaciones en que pueden encontrarse los individuos que han servido en filas.

Primera: situación de disponibilidad de servicio activo. Segunda: situación de reserva. Los de aquélla habrán de movilizarse en primer término para elevar al pie de guerra las plantillas de los Cuerpos activos, y luego para el desdoblamiento de los mismos. Pasados a la segunda situación, los reservistas, cualquiera que sea el Cuerpo en que sirvieron, serán dados de alta en el Centro de movilización correspondiente al lugar de su residencia y constituirán unidades de reserva, cuyo número dependerá de la profundidad de la movilización y de los efectivos disponibles dentro de cada Arma o Cuerpo. A cada Centro de movilización se le demarca un territorio. Teniendo en cuenta que entre las unidades activas y las de reserva debe existir relación, y que unas y otras pueden colaborar en tiempo de paz y, seguramente, en tiempo de guerra, se ha adoptado el criterio de que los centros de movilización y reserva sean en número igual al de brigadas de Infantería de las divisiones orgánicas, señalándose a cada dos de ellos lo correspondiente a una división.

Oportunamente se presentará a las Cortes un proyecto de ley sobre movilización, y se redactarán los Reglamentos

01268

para llevarlo a cabo.

Fundado en tales consideraciones, a propuesta del
Ministro de la Guerra, el Gobierno provisional de la Repúbli-
ca decreta:"

DECRETO 30 JUNIO 1931. ACADEMIA GENERAL MILITAR

Suprimiéndola.

"La ley de Bases de 29 de junio de 1918 mantuvo para la enseñanza militar el sistema de Academias especiales creado por el Decreto de 8 de febrero de 1893, que disolvió la antigua Academia general. Un Decreto del Gobierno dictatorial, de 20 de febrero de 1927, resucitó los métodos de enseñanza y reclutamiento de la oficialidad, abolidos muchos años antes, y estableció en Zaragoza, con la amplitud de medios de que luego se hace mención, una nueva Academia, en la que han de cursar dos años los aspirantes a ingreso en los Colegios especiales. No puede subsistir más tiempo el sistema que ahora rige, por dos consideraciones fundamentales: primera, la nulidad del Decreto de 20 de febrero de 1927, incluido en el apartado a) del art. 1^a del Decreto dictado por la Presidencia del Gobierno provisional en 15 de abril último; segunda, lo desproporcionado de la Academia general y su coste con las necesidades presentes y futuras del Ejército, en cuanto al reclutamiento de la oficialidad de carrera.

Las asignaciones y consignaciones relativas a las obras de la Academia general Militar en los Presupuestos de 1928, 1929 y 1930, asciende a un total de 6.387.480 pesetas, y en los Presupuestos de 1928 (capítulo 1^a, artículo único), 1929, 1930 y 1931 (capítulo 4^a, art. 1^a) se han asignado además para gastos de instalación y sostenimiento cantidades diversas, que suman 1.300.000 pesetas. Los devengos de personal

destinado en la Academia importan 1.514.790 pesetas y el sostenimiento del ganado 263.420 pesetas, o sea un total de 1.778.210 pesetas anuales. Sería recomendable y útil mantener este gasto si la Academia general pudiese seguir prestando el servicio para que fue creada y si el servicio mismo estuviese en armonía con la orientación que haya de darse en lo futuro a la enseñanza militar. Es innecesario resolver desde ahora este último punto y decidirse por la unidad de origen de la oficialidad de carrera o por su temprana especialización, así como tomar en cuenta los demás problemas que sobre el caso se presentan, porque clausurado el ingreso en la Academia y habiendo de transcurrir algunos años hasta que en los cuadros del nuevo Ejército se coloque los centenares de alumnos que cursan en ella y en los Colegios especiales, se antepone a toda otra consideración la muy perentoria de no poder utilizarse aquel Establecimiento.

Fundado en tales razones, a propuesta del Ministro de la Guerra, el Gobierno provisional de la República decreta:"

01271

DECRETO 3 JULIO 1931. MINISTERIO DE LA GUERRA

Reorganizándolo.

"Puesta ya en vigor la nueva planta de las unidades del Ejército activo, y su distribución por el territorio, y ajustados también los servicios locales a la reforma decretada con la supresión de las antiguas regiones, procede completar esta parte de la reorganización de nuestros Institutos militares, transformando el Ministerio, que, con los centros de que ahora se le dota, la restauración de otros indebidamente suprimidos y la simplificación del mecanismo burocrático se amoldará por modo cabal a los propósitos del sistema en vías de desarrollo, y rematará en los grados superiores de la jerarquía una estructura general coherente, armónica en todas sus piezas. Así concebida, la reforma del Ministerio de la Guerra tiene dos aspectos, porque es doble la función que este Centro realiza: el primero es puramente administrativo, y consiste en la reorganización de los servicios de la Subsecretaría; el segundo es técnico militar, y se comprende en el restablecimiento del Estado Mayor Central y en la creación del Consejo Superior de la Guerra. En la reforma de la Subsecretaría preside el criterio de ahorrar tiempo, trabajo y personal, distribuyéndose los asuntos, no por Armas y Cuerpos, como hasta hoy, sino por materias, con lo que se reduce el número de secciones, se evitan divergencias de criterio y cierta duplicación de trámites en el despacho, que ha de ser más rápido, y se restringen las plantillas en relación con las vigentes. Una instruc-

ción o reglamento de servicio interior que se redacte por orden ministerial, llevará al extremo la utilidad de esta reforma. En el aspecto técnico militar, la innovación que se introduce es aún más importante. Restablecer el Estado Mayor Central, que una aberración personalista y autoritaria en el gobierno y dirección del Ejército suprimió, es una necesidad manifiesta, como que de la buena ordenación y continuidad de sus funciones depende el que la Nación pueda defenderse eficazmente en caso de guerra. Los artículos de este Decreto declaran lo bastante cuál es el cometido del Estado Mayor Central. Se trata, en suma, de dotar al Ejército de un órgano pensante, que, con separación de los Centros administrativos y gubernativos, así como de la función de mando directo sobre las tropas, fije la doctrina de guerra, la mantenga en relación con los progresos del arte militar, promueva y eleve la instrucción superior y prevea la aplicación de los recursos defensivos del país en todas las eventualidades posibles. De esta manera se asegura la permanencia de una orientación, de un plan militar. Lo mismo que el Subsecretario, el Jefe del Estado Mayor Central despachará personalmente con el Ministro, quien tendrá así, en la doble función que cumple el Ministerio, la responsabilidad constitucional de cuanto se ejecute por su orden o con su anuencia en el Departamento. El Consejo Superior de la Guerra, nuevo en nuestro país, es consultivo para el Ministro, que lo preside.

Formado por el Jefe del Estado Mayor Central y el Subjefe, y por los Generales Inspectores de las Divisiones, a los que puede ser conveniente agregar más adelante algún

otro Jefe superior, el Consejo, que es la más alta autoridad en el ramo de Guerra, pone en contacto las funciones militares con la función del Gobierno responsable, y por este enlace se resuelve el problema de coordinar la situación subordinada que los servicios del Estado deben tener ante las decisiones del Parlamento o del Gobierno con la autoridad técnica de las mociones y consultas que los Centros competentes eleven al Ministro. Poner los recursos de la técnica al servicio de la política militar adoptada por las Cortes y el Gobierno, o, a la inversa, adoptar (cuando el Gobierno crea pertinente adoptarlas), las conclusiones y sugerencias formuladas por los técnicos, y sostenerlas ante las Cortes como resoluciones del Ministerio, es doctrina sencilla y clara, única admisible en el régimen político vigente, y fácil de seguir, cuando se infunde en todos los servidores del Estado el respeto silencioso a los preceptos soberanos de la ley.

Por todo lo expuesto, el Gobierno provisional de la República, a propuesta del Ministro de la Guerra, decreta:"

DECRETO 13 JULIO 1931. EJERCITO

Suprime las escalas de reserva retribuída.

"El presente Decreto, que suprime la escala de reserva retribuída, viene a realizar dos propósitos: el primero, que desaparezca definitivamente una anomalía peculiar del Ejército español; el segundo, preparar el camino para la reforma del reclutamiento de la Oficialidad. En 1883 se creó la escala de reserva de Jefes y Oficiales de Infantería, que se amplió en 1886 y fue extendida al Arma de Caballería. Durante las guerras coloniales se concedió el empleo de segundo Teniente de la escala de reserva retribuída de su Arma o Cuerpo a los Sargentos del Ejército con doce años de servicios y seis de empleo que solicitasen destino en Ultramar, concesión otorgada después a los Sargentos con diez años de servicios. En 1908 se estableció, con ciertas condiciones, el ascenso en tiempo de paz a segundo Teniente de la escala de reserva a los Sargentos de todas las Armas y Cuerpos del Ejército, y la ley de 1918, reformando la clasificación decretada en 1912, dispuso que las clases de segunda categoría estuviesen constituídas por las de Sargentos y Suboficial. La misma ley fijó como límite de la escala de reserva el empleo de Capitán, si bien más tarde se le ha designado plantilla hasta el empleo de Coronel. Toda esta legislación se inspiraba en el plausible designio de no limitar la carrera de las clases de tropa de segunda categoría y de utilizar en jerarquías superiores su competencia y su práctica profesionales; pero en vez de admitirla normalmen

01275

te en la escala activa, en cuanto probasen su aptitud para el empleo de Oficial, se creó una escala paralela a la de activa sin otra misión aparente que la muy problemática de suplir la carencia de Oficiales instruídos en las Academias. Sin logar, ni mucho menos, la reducción de número de estos últimos, la doble escala agrava el problema del personal, mantiene en ciertas categorías del Ejército una diferenciación poco recomendable, y por el modo de formarse no ha permitido hasta ahora acometer con resolución y franqueza el importante problema del reclutamiento de la Oficialidad.

En ningún Ejército existe, ni ha existido, la doble escala permanentemente retribuída, tan arraigada en el nuestro. Todos los Ejércitos necesitan de personal capaz para los empleos de Oficial, que llene los cuadros de las unidades en pie de guerra; pero todos atienden a esa necesidad mediante Oficiales de complemento, sistema menos oneroso y más en armonía con lo que debe ser el Ejército moderno. A esta solución, adecuada al concepto que se tiene de nuestro futuro Ejército y que sirve de base a la reforma militar en curso, no puede llegarse con eficacia mientras no se cambie radicalmente el régimen en vigor.

La Oficialidad se reclutará de otra manera, así para el Ejército permanente activo como para las unidades movilizables en tiempo de guerra. Y lejos de abandonarse o perderse en el nuevo sistema el designio de ofrecer un porvenir a las clases de tropa se logrará con mucha mayor amplitud y más perfecta dignificación personal de estas clases. De momento ,

decretada en 16 de junio último la amortización de todas las vacantes y prohibido hacer promociones en ningún empleo del Ejército mientras exista personal sobrante, no puede pensarse en crear Oficiales con individuos de las clases de tropa o de cualquiera otra procedencia, por lo cual se ha clausurado el ingreso en los Colegios militares. Pero cuando el excedente que existe en los grados inferiores de la Oficialidad quede absorbido en la plantilla y se convoque de nuevo para el ingreso en las Academias, el mayor número de las plazas de cada convocatoria se reservará a las clases de tropa de segunda categoría, para las que se fijarán condiciones especiales de admisión y de estudios que les permitan salir Oficiales de la escala activa. De esta manera las aspiraciones de toda una clase se encauzarán al mejor servicio del Ejército y en pro del interés nacional.

Por todo lo expuesto, el Gobierno provisional de la República, a propuesta del Ministro de la Guerra, decreta:"

01277

DECRETO 21 JULIO 1931. EJERCITO

Creando el Centro de Estudios Militares Superiores.

"Lo complicado que actualmente resulta el ejercicio del mando en todos los grados de la jerarquía militar, y muy especialmente en los empleos de General, hizo pensar en la imperiosa necesidad de procurar que los Coroneles se capacitasen debidamente y en forma tal, que la Junta Clasificadora tuviera garantías eficaces para fundar sus propuestas.

Por ello, desde el año 1927 vienen realizándose cursos de Coroneles, cuya organización y programas han pasado por una serie de tanteos, impuesto ya por vía de ensayo, ya también para lograr que de un modo insensible y sin brusquedad se im-plantase lo que es realmente una novedad en nuestro Ejército.

Pero habiendo ya adquirido carta de naturaleza es-tos cursos entre nosotros, y demostrada su utilidad, es preci-so completar la obra iniciada y extender los programas desarro-llados hasta ahora, en forma de que se traten en ellos todos los puntos que el Alto Mando necesita para realizar su misión; y ello exige, si se quiere que los cursos sean provechosos y obedezcan a una orientación fija y conveniente, que se dispon-ga de un organismo permanente que los prepare, encauce y desarro-lle.

En vista de estas consideraciones, el Gobierno pro-visional de la República, a propuesta del Ministro de la Gue-rra, decreta:"

01278

DECRETO 11 SEPTIEMBRE 1931. EJERCITO

Tiempo de permanencia de Oficiales, en Miqueletes y Miñones.

"La necesidad de mantener constantemente a la oficialidad del Ejército en el grado de competencia y aptitud que la eficiencia de aquél exige, ha motivado la publicación de varias disposiciones encaminadas a lograr tal fin en todas las situaciones y destinos que a los Oficiales en situación de actividad se puedan ofrecer. La gradación de la intensidad de las enseñanzas y prácticas necesarias para conseguir aquel objeto tiene que variar naturalmente, según la situación o el destino, llegando en algún caso a obligar al cese del que se desempeñe, por no bastar un corto período de contacto para restablecer la idoneidad enmohecida o perdida mientras se sirvió aquel destino o se permaneció en aquella situación. Tal ocurre en los puestos que Jefes y Oficiales del Ejército desempeñan en Cuerpos como los de Miqueletes y Miñones, utilizados por las Diputaciones vascongadas, donde, no obstante, su organización militar, sus cometidos y funciones son completamente distintos a los de los Institutos armados, y en los que su peculiar servicio puede desvirtuar o degenerar conceptos espirituales o técnicos que son fundamentales en la profesión. Para evitar que tales deficiencias se produzcan, el Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de la Guerra, decreta:"

6. ENTREVISTAS

CUESTIONES MILITARES

(El Sol, 5-5-31).

El ministerio de la Guerra se ha convertido, por la fuerza de las circunstancias, en eje de la República. La decisión con que la preclara inteligencia de D. Manuel Azaña ha acometido la impropia labor de reorganizar el Ejército, tratando de reintegrarlo a su nobilísima función, y el anuncio de las trascendentales reformas que implican sus primeros decretos, ha llevado a uno de nuestros redactores a obtener del ministro una declaración, que hoy tenemos el gusto de ofrecer a los lectores de EL SOL:

LA REFORMA RADICAL DEL PRESUPUESTO

"Una de las primeras cosas y de las más importantes que he de hacer es la transformación del presupuesto de la Guerra -comienza diciendo Azaña.

La reforma radical que necesita el presupuesto sólo podrá acabarse en las Cortes, cuando ya estén votadas las nuevas leyes orgánicas. Pero antes de eso me propongo realizar en los capítulos de gastos una tala en toda regla, suprimiendo servicios de lujo o inútiles o manifiestamente perjudiciales".

El ministro de la Guerra es hombre de pocos preámbulos. Habla como escribe, claro y conciso, en ese castellano apretado que es la mejor gala de su estilo de gran escritor, y que presta a los decretos emanados hasta ahora de su pluma el encan

to simple y rotundo de una prosa "sui géneris", en que la actua
lidad se declara tradicionalmente española. Responde, desde lue
go, sin vacilación, adelantándose a contestar, apenas iniciada
la pregunta:

-El presupuesto total de gastos, incluídos los de
Africa, asciende a 651 millones de pesetas. De esta suma, 491
millones se gastan en personal, quedando solamente para todas
las dotaciones de material unos 160 millones. Estas son las can
tidades consignadas en el presupuesto publicado en diciembre
último, pero son falsas. Al confeccionarse el presupuesto, una
Real orden de Hacienda dispuso (según me informan los jefes de
este servicio en el ministerio) que se omitiese en los gastos
calculados para 1931 una partida de 28 millones de pesetas, de
jando indotado nada menos que el capítulo de los haberes del
personal en situación de disponible. El objeto de la omisión
era disminuir en apariencia el volumen de los gastos, para pe-
dir más adelante un crédito suplementario. Apurando los recur-
sos de que dispongo podré reducir esa indotación a 14 ó 15 mi-
llones; pero no deja de ser una dificultad fastidiosa, que ami
nora por el momento el resultado de las economías en estudio.

-En ese caso, por ahora, ¿no será posible obtener la
reducción que tan implacablemente se había impuesto?

- Debe tenerse presente que yo me he encontrado el
presupuesto en el cuarto mes del ejercicio. Por tanto, muchas
de las asignaciones que pueden reducirse o suprimirse están en
parte gastadas o comprometidas. El efecto pleno de la economía

sólo se dejará sentir en un ejercicio completo. De todos modos, ya tengo planteadas reducciones que alcanzan a 65 millones de pesetas. A esta suma se añadirá el ahorro que representa para el segundo semestre del año actual la reorganización en curso. Yo quisiera llegar a los cien millones de economía con relación al presupuesto anual; no sé si lo conseguiré de pronto, pero no le andará lejos.

EL FANTASMA DEL MILITARISMO

El desbarajuste inicial que pone de relieve el descubrimiento de anomalías tales no será óbice, por lo tanto, para que el Sr. Azaña prosiga su labor de saneamiento. El ministro insiste en su propósito, y va deduciendo enseñanzas claras de los ejemplos del pasado:

- El Ejército será menos costoso en lo por venir y será más eficaz; tendrá medios que hoy no tiene para la guerra. Esto, que parece un milagro, se logrará sencillamente calificando cada partida del presupuesto por la utilidad que reporte y sometiendo el gasto a una justificación rigurosa. Yo no sé lo que ocurría antiguamente, aunque me lo figuro; pero estoy cierto de que desde hace muchos años la gerencia de los gastos de la guerra se lleva con barullo. El presupuesto está hecho para que los ministros puedan administrarlo a su antojo. El mal se ha agravado desde 1923, cuando el absolutismo suprimió las Cortes. Pero ya las Cortes, aquellas Cortes fantasmales, formadas con clientelas de los señorones de la política, que recibían

por turno la merced del decreto de disolución, dieron muestras de una debilidad humillante. Le citaré a usted un ejemplo. Hace diez o doce años un ministro de la Guerra dirigió a la Comisión de Presupuestos del Congreso una Real orden pidiendo un crédito extraordinario de 12 ó 14 millones para comprar tiendas de campaña. A la Real orden no acompañaba expediente alguno, ni se dieron a la Comisión explicaciones de ninguna clase. El ministro compareció ante la Comisión, y dijo que podían votar o no el crédito, pero que el dinero ya estaba gastado, y no en comprar tiendas. La Comisión y el Congreso votaron el crédito. Así se hacían las cosas. El ejemplo no es excepcional. Examinar con cuidado y competencia los gastos militares parecía un acto de oposición al Ejército, un atrevimiento. De suerte que cuando se habla de desbarajuste en las cosas militares, los responsables no son únicamente los caudillos que abusaban de su posición exenta, sino también los partidos dinásticos que turnaban en el Poder. No querían "historias" con el Ejército. Se imaginaban que dejándolo como un cantón independiente en el Estado, lo tenían contento y aseguraban su fidelidad, cuando lo cierto era que la inmensa mayoría de los militares se quejaban de los abusos (como se probó en el movimiento de las Juntas), y unas cuantas personas usurpaban el nombre y la representación del Ejército para asustar al Poder público y aprovecharse del susto.

POLITICA DE FICHEROS

El ministro sale vehementemente al paso de la insidia

que supone el atribuir a los republicanos la introducción en el Ejército de la política partidista:

- Sí; la política ha dañado mucho al Ejército. Es justo reconocer que nosotros los republicanos no hemos introducido la política en el Ejército. Quien hizo esa obra funesta fue la Monarquía. No se quiso un Ejército nacional; no se quiso un instrumento combatiente para la defensa del territorio. Se quería un Ejército adicto, y lo demás no importaba. Pero el Ejército no puede ni debe sustraerse al espíritu dominante en el país. Hoy sería imposible lo que fue tan fácil en 1923. Por otra parte, si el Ejército se ve desantendido en su eficacia profesional, no puede estar contento, aunque lo cubran de flores. El público no se ha dado cuenta de los extremos a que llegó aquella política mezquina; pero el Ejército los conoce muy bien.. Hombres de mérito, de conducta intachable, permanecían arrinconados tan sólo porque no eran gratos en altas esferas. Se organizó un servicio de espionaje y soplonería. En el ministerio he encontrado un fichero con notas, reseñas, relativas a los "oficiales sospechosos". Yo he mandado que lo destruyan. Se hizo aquel decreto de los "indeseables", que es un oprobio. Se violó la ley de 1918, con promociones por elección, que ahora van a revisarse. Y tengo preparado un decreto estableciendo la provisión de destinos por rigurosa antigüedad para que no haya margen de favor. No insisto. Es agua pasada. Nuestro interés es otro. Igualdad para todos, responsabilidad del que manda, competencia profesional, disciplina y trabajo.

01285

- La desproporción entre el gasto y su eficacia es terrible, en efecto.

Y el Sr. Azaña corrobora rápido:

- Para que usted se forme idea de la situación a que se ha llegado por obra de aquella política, baste decir que carecemos de material casi en absoluto. No podemos dotar suficientemente ni una división. Es menester que el país lo sepa.

LA JUSTICIA MILITAR Y EL EJERCITO NACIONAL

Las últimas palabras del ministro son de fuerte y sereno optimismo:

- En cuanto concluya de articular las reformas orgá-nicas propondré la de la Justicia militar. Este asunto es, como usted comprende, una pieza capital del nuevo sistema. Habrá que hacer otra clasificación de los delitos, trazar nuevos lí-mites a la jurisdicción de Guerra, asegurar los derechos de la defensa y del acusado. Muy bueno es que la justicia sea rápida; pero su virtud principal (cuando verdaderamente es justicia y no un modo de aterrorizar) no consiste en ser presurosa, sino en ser certera. Hay que dejar a salvo en todo caso la conciencia inviolable del juzgador, e impedir que los Tribunales puedan sentir la tentación de mostrarse agradecidos o de hacerse agradables al Poder.

- Complicada es la empresa.

01236

- La empresa es complicada y el trabajo grande. Pero trabajar es la única diversión que no me cansa. Creo que trabajo por un gran interés nacional. Yo he venido al ministerio sin ningún compromiso, como no sea el de servir a la República, es decir, a España, que nos sostiene con entusiasmo. Tengo confianza en el porvenir. Habrá Ejército, porque hay nación.

CUESTIONES DE ACTUALIDAD

Entrevista realizada en 1932 e incluída en el libro "L'oeuvre d'une revolution. L'Espagne republicaine", p. 45 de Picard-Moch y Moch, J).

"Interrogez-moi, nous dit-il, et je répondrai.

- Vous êtes ministre de la Guerre, monsieur le Président, et, á ce titre, avez eu á réorganiser l'armée?

- Evidemment. Résultat des guerres coloniales et des méthodes royales, on avait crée des officiers á tour de bras. (Le président, on le voit, connaît toutes les finesses de notre langue). Nous leur avons offert la retraite á solde entière , sans les indemnités accessoires et sous condition de se tenir tranquilles. Plus de douze mille ont accepté. On a souvent dit dans la presse étrangère que nous chargions ainsi notre budget. Je tiens á vous faire remarquer au contraire que l'économie annuelle ira croissant et atteindra 600 millions de pesetas (1200 millions de francs) d'ici trente ans. Il ne reste ainsi guère plus de 8.000 officiers et nos 16 divisions á effectifs squelettiques (certains régiments ne comptaient que 100 hommes;) ont été réduites á huit, á effectifs normaux.

"Les capitaines-généraux, vrais vice-rois qui se mélaient de tout et surtout de politique intérieure, qui furent les animateurs du coup d'Etat de 1923, ont tous été supprimés. Une bonne centaine de généraux ont été, comme vous dites, "limogés". La justice militaire ancienne a été réorganisée et placée sous le contrôle de la cour suprême civile, tandis qu'était

abolie la loi de 1905 soumettant les délits de presse aux conseils de guerre.

"Enfin, une loi votée il y a cinq jours réorganise le recrutement des officiers pour supprimer les privilèges de classe et l'esprit de corps, petit-bourgeois dans l'infanterie, aristocratique dans la cavalerie".

Puis nous parlons de politique internationale:

"Je suis tenu à une certaine réserve. Mais je tiens à dire que nous sommes absolument sincères dans notre volonté de nous maintenir dans le cadre de la S.D.N.; que nous sommes les seuls en Europe à avoir constitutionnellement banni la guerre comme instrument politique. Evidemment, il peut paraître fantaisiste que nous insistions sur notre volanté de paix, nous qui savons que nous n'avons pas les moyens de faire la guerre. Mais cela est: notre peuple est essentiellement pacifique. Nous voulons la paix par la S.D.N., sans aucune alliance particulière.

- N'a-t-il pas existé un accord secret entre votre dictature et celle d'Italie, dirigée contre la France?

- On l'a dit; mais rien ne permet de l'affirmer.

Nous avons fouillé toutes les archives, mais n'avons trouvé aucun écrit. Il est possible cependant que que Primo ou l'ex-roi aient eu des conversations de ce genre avec. M. Mussolini, mais nous l'ignorons. Je vous autorise à le dire".

Nous interrogeons enfin le président sur la situa-

tion intérieure:

"Je crois à l'avenir des partis républicains de gauche. Il est difficile de prévoir la constitution d'un parti républicain de droite. Car -et M. Azaña scande ses mots- il n'y a pas chez nous de droite "républicaine". L'extrême droite catholique n'a pas accepté la république à cause de sa laïcité et je ne pense pas du tout que la loi agraire la satisfasse. Son groupe principal, l'Action populaire, comporte deux tendances: celle du journal El Debate (qui, nous le notons tandis que parle le présidente, est interdit depuis l'affaire Sanjurjo), dans la main des jésuites, qui, par habileté, accepteraient peut-être la république ... sauf ses lois religieuses, et celle des anciens ministres royaux, irréductiblement hostiles au régime. Le parti agraire, avec ses vingt-six élus, fait également une opposition aussi vive que vaine.

- Et les partis républicains?

- Parmi les partis bourgeois de gauche, peu de différences de doctrine entre le parti radical-socialiste et le mien, celui de l'Action républicaine. Ils sont nés d'initiatives personnelles et de situations locales, avaient un but essentiel commun: détruire la monarchie. La logique voudrait qu'ils s'unifiasent.

"Quant au parti radical -il s'agit du parti de M. Lerroux- qui constitue l'opposition gouvernementale, c'est le plus important actuellement, après le parti socialiste. Il compte

en effet 93 députés, mais comprend, à côté de républicains anciens, indiscutables, de nouveaux ralliés qui lui font du tort. Son influence diminue et il s'éloigne du pouvoir auquel il a participé avec mon prédécesseur.

"Ajoutez-y une demi-douzaine de députés isolés d'extrême-gauche, sans influence aucune, quelques sans-parti du centre, tel Unamuno, un minuscule groupe d'intellectuels "Au service de la République" et vous aurez passé la revue des forces politiques.

- Et le parti socialiste?

- Vous le connaissez: il est puissant, admirablement organisé et discipliné, appuyé sur l'Union générale des Travailleurs. Nous avons avec lui les relations les plus étroites. Il est impossible à un gouvernement républicain d'exister sans lui. J'aurais refusé de former un ministère sans sa collaboration. Je l'ai dit au président de la République.

- Les communistes?

- Discrédités, malgré le travail initial des Soviets chez nous et divisés en tendances opposées. Ils peuvent peut-être provoquer des incidents locaux, mais non pas jouer un rôle. Quant à la Confédération nationale du travail, elle a fatigué les ouvriers par ses excès et ses violences. Elle a eu en 1931 jusqu'à 200.000 cotisants à Barcelone et doit en compter actuellement 20.000 dans cette ville.

- Envisagez-vous inquiétude le vote des femmes?

- Mais oui. Il renforcera peut-être un peu la droite, mais surtout le parti socialiste. Ce que nous perdrons d'un côté, nous le regagnerons de l'autre.

- Et la réforme agraire? En attendez-vous véritablement des résultats?

- Progressivement. Car le rythme de son application va dépendre de l'état de nos finances. Mais n'oubliez pas que c'est chez nous un vieux problème: il n'y a qu'une chose de changée, c'est la résignation des ouvriers des campagnes, qui n'attendaient rien de la monarchie et qui attendent tout de la République ...

AZAÑA ANTE EL MOMENTO POLITICO

(Jar, 23-12-33).

La forma en que viene desenvolviéndose el Parlamento, sobre todo el incidente ocurrido al final del debate que se suscitó con motivo de la declaración ministerial del actual Gobierno, me hicieron suponer que los lectores de nuestro semanario tendrían especial interés en conocer la opinión de don Manuel Azaña acerca del momento político por que atraviesa la República.

Con este propósito me dirijo al domicilio del ex Presidente del Consejo, y Presidente de nuestro Consejo Nacional, quien, con su acostumbrada deferencia por la Juventud, y muy especialmente, por su simpatía hacia nuestro semanario, me hace el obsequio de las primicias de unas declaraciones, que si como suyas tienen extraordinaria importancia, crece ésta ante el interés que por ella muestra el pueblo verdaderamente republicano.

Don Manuel Azaña, líder del republicanismo sereno y limpio, contesta a mis preguntas en la forma siguiente:

- ¿...?

- La sesión de Cortes del miércoles habrá descubierto a los más distraídos cuál es el ánimo preponderante en algunos de los Grupos que apoyan al Gobierno. Los "leaders" hacían discursos muy pensados, sujetándose a una táctica cautelosa y

hábil; nadie quería comprometerse a cara descubierta. La impre
sión era de frialdad y recelo aún entre aquellos mismos que
iban a votar juntos. No se producía ni era posible esa efusión
de sentimientos comunes que determina instantáneamente el acuer
do de una gran masa de diputados y la transforma en mayoría go
bernante. Pero bastó el incidente final en la sesión, para que
la fracción más numerosa de las Cortes, electrizada por una sa
cudida sentimental, demostrase, no sé si imprudente, qué desea,
qué pretende, dónde está sus preferencias. La causa está falla
da ...

- ¿ ...?

- Yo no siento que en las Cortes haya una represen-
tación monárquica. Si en el país hay monárquicos, es, no sólo
legítimo, sino útil para la República que los haya en el Parlamen
to. He lamentado alguna vez que en las Constituyentes no hubu
iera una oposición monárquica, importante y combativa. Eso hubu
iera evitado la dispersión del esfuerzo de las Cortes y la dis
locación de las fuerzas republicanas. Quiero creer que por un
exceso de optimismo, muchos republicanos han procedido como si
ya no tuviéramos enemigo común a quien combatir. Observé el es
tupor con que algunos republicanos contemplaban el miércoles lo
que estaba sucediendo. Comprendo su estupor; pero su sorpresa
-si la sienten- no está justificada. El régimen está todavía
demasiado reciente para que sea admisible que ningún republica
no se entretenga en jugar a las demoliciones.

- ¿ ...?

Cuando yo defendía la permanencia de las Cortes Constituyentes, algunos pensaban y dijeron que me movía el propósito egoísta de conservar el Poder. Yo no tenía medios de disipar tan grave error. Creer en el desinterés del prójimo, no es una obligación legal, y no es, por tanto, exigible. Fuera ya del Gobierno propuse que las Constituyentes durasen aún algún tiempo. Me decían que en el país se marcaba una fuerte reacción hacía la derecha. Yo no lo ignoraba. Por lo mismo me parecía una imprudencia lanzarse a una disolución y a unas elecciones sin tener de antemano preparadas las fuerzas políticas que podían producir un nuevo Parlamento capaz de sustituir con ventajas al que se iba a disolver. El resultado a la vista está. ¿Piensa alguien que la representación manifiestamente desafecta al régimen que hay en las Cortes, corresponde a una fuerza real en el país? ...

- ¿ ...?

- La República estará en la calle, en la opinión del mayor número de españoles, donde usted quiera, menos en estas Cortes. Allí, la República no está más que oficialmente. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que al Gobierno le dure el aguante para soportar las condiciones que le impone la "oposición incorporada a la mayoría". El día que el Gobierno o el Partido Radical no quieran tolerar eso, verán ustedes la adusta cara de la verdad. Pero ¿han debido tolerarse siquiera un minuto?

- ¿ ...?

- Ahora se habla de disolución. Pero no se trata de disolver por disolver. Lo primero que hace falta, antes de ir a una batalla, es saber dónde está el ejército que ha de ganarla. Para repetir el espectáculo del 19 de noviembre, no vale la pena.

- ¿ ...?

- Yo soy republicano, demócrata, constitucional, enemigo por reflexión y experiencia de las recetas catastróficas. Para defender la Constitución, su vigencia y todo lo que es esencial en la República. Estoy pronto a todo. Una inteligencia política entre todos los que hemos votado la Constitución, me parece inexcusable. Yo quise rehacer eso en diciembre del 31, y en junio del 33. No lo conseguí; pero no me parecerá mal que otros lo intentasen, y celebraré que lo consigan. Les ayudaré con todo fervor si nuestro Partido lo encuentra bien.

- ¿ ...?

- Personalmente estoy resuelto a defender la posición de absoluta libertad que recobré en septiembre último, y dentro de la disciplina de ACCION REPUBLICANA, a ser un ciudadano activo consagrado a la propaganda. Tengo gana de que haya un Gobierno republicano al cual se le pueda defender ardorosamente desde la oposición, como defendí a las Constituyentes y a un Gobierno desde el banco azul...

01296

Hasta aquí las manifestaciones que don Manuel Azaña nos ha hecho. Nosotros, por nuestra parte, solamente hemos de decir que si para el logro de esa República democrática y Constitucional que siente el señor Azaña, como todos los afiliados a nuestro Partido, fuese necesario ir a buscarla donde estuviese, lo haríamos sin ningún reparo. Ahora bien, don Manuel Azaña nos lo ha dicho de una manera categórica. La República, en la actualidad, no está en el Parlamento. La República está ... en la calle.

SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL

(Luz, 16-1-34).

Fuimos a ver a D. Manuel Azaña para inquirir su opi
nión acerca del discurso del Sr. Sánchez Román.

Tras una breve espera en una sala sobria y elegante
mente amueblada con el más puro estilo español, nos recibió el
ex presidente del Consejo. Le hicimos presente nuestro deseo,
y él repuso:

- ¿Por qué este afán de que opinemos los políticos
y no opinar los periódicos?

- Los periódicos ya lo hacen, por lo menos LUZ; pe-
ro es que al lector le interesa conocer en todo instante el pen
samiento de los jefes políticos acerca de los temas y problemas
de actualidad.

- Yo no leo periódicos; lo que sé de lo que ocurre
por el mundo es porque me informan mis amigos.

El Sr. Azaña y el repórter se extendieron después en
una larga conversación sobre hechos políticos pasados y futuros.
Cosas muy interesantes dijo el Sr. Azaña en el curso de la con
versación, pero no se cree el repórter autorizado para publicar
todos los extremos de una conversación particular.

Un tema de la conversación fue la ley Electoral. So
bre esto dijo el señor Azaña:

- Ya sé que me achacan la paternidad de la ley Electoral; lo desmentí entonces y ahora. La ley Electoral no es obra de éste o aquél: está hecha por un Gobierno y aprobada por un Parlamento. En ella colaboramos todos los que pertenecíamos a aquella Cámara, menos Ossorio y Gallardo, que defendió la representación proporcional. Los conservadores no intervinieron por omisión, toda vez que se habían retirado del Parlamento, y los radicales lo único que hicieron fue discutir el porcentaje del "quorum".

- Ahora se dice que va a ser reformada esta ley.

- Hasta mí ha llegado este rumor, y ya he dicho que así como los que hicimos la ley en vigor hemos sido los primeros en sufrirla, los que hagan la que sustituya a ésta serán los que primeramente sufrirán sus efectos. Yo, desde luego, no intervendré en la discusión de la nueva ley si llega a derogarse la actual.

- ¿En qué sentido modificarán la ley Electoral?

- ¡Ah! No sé. Creo que se piensa en implantar la representación proporcional, porque no creo que se atrevan a volver al antiguo régimen de distritos, matriz del caciquismo español. Pero la representación proporcional, en toda su pureza, está llena de toda clase de inconvenientes. Con una Cámara elegida por el sistema puro de representación proporcional jamás habrá mayoría republicana.

- ¿Cree usted?

- Evidente. Ahora los partidos suman los votos que han obtenido y calculan el número de diputados que hubieran traído a las Cortes, pero no hacen cálculos sobre los que hubieran traído los restantes grupos políticos, y especialmente las derechas y los socialistas. Por otra parte, desconocen la táctica electoral que hubieran seguido cada uno de los partidos, cómo hubiera respondido el cuerpo electoral a esa táctica y cómo se hubieran producido los electores en definitiva.

- En otros países, sin embargo ...-aventuramos.

- En otros países -nos ataja el señor Azaña- ocurre lo que usted quiera; pero el sistema electoral no puede perder de vista la situación política. En Francia, terminada la guerra, se hizo un ensayo de representación proporcional, dando fin a una serie de luchas sostenidas por los defensores de dicho sistema. Las consecuencias no se hicieron esperar, y el partido radical, base y nervio de la República francesa, corrió serio peligro, y en vista de eso se volvió, con algunas modificaciones, al antiguo sistema. Sobre este tema preparaba yo un libro,

Hace una pausa el jefe republicano, y agrega:

- Ya sé que dicen que con el sistema proporcional podría gobernarse mediante la alianza de fuerzas parlamentarias, pero yo creo que las únicas uniones que tienen legitimidad son las que se consagran en las urnas.

- Entonces ...

- Entonces lo que yo he creído siempre que se debe buscar es una Cámara con más de doscientos diputados republicanos encuadrados entre izquierdas y derechas, y si no se les quiere dar este nombre, entre los socialistas y los partidos que ni acatan ni sienten la República.

- ¿Cree usted que con la experiencia y las enseñanzas de las pasadas elecciones puede obtenerse mayoría republicana en las próximas elecciones?

- Siguiendo un proceso lógico, la conclusión final sería esa a que usted llega; pero no sucederá así. Aquí cada ciudadano se cree que lleva dentro un estadista.

- Es triste -comenta el repórter- que las ambiciones, la desconfianza, el "vedettismo", los egoísmos y las deslealtades de los unos y los otros dejen a la República sin partidos y sin órganos de gobierno propios.

- Eso no va por mí -ataja nuestro interlocutor-; atribuya todo eso a quien quiera, pero no a mí.

- El resultado de todo -sigue el repórter- es que no podrá existir un Gobierno republicano con plenitud de independencia, de acción y de iniciativa, sometido siempre a la tutela de un sector o de otro.

- Esa es la situación actual -refrenda el Sr. Azaña-. Y al régimen lo peor que puede sucederle es la inacción.

- El voto de la mujer ha tenido una influencia decisiva

siva en las elecciones.

- Exacto. Y hay que recordar que el sufragio femenino lo acordó la Cámara por cuatro votos de mayoría. Votos conservadores, por cierto. El resultado de las elecciones ha demostrado que no se equivocaban.

- ¿No ve, entonces, solución a este problema político?

El Sr. Azaña contesta evasivamente:

- No me interesa la política; nunca me ha interesado grandemente; pero ahora menos que nunca.

- No lo creo.

- ¿Cómo?

- Sí; permítame que se lo diga con toda sinceridad; no creo que haya dejado de interesarle la política; creo que al ver que sus intenciones, sus afanes y sus propósitos no han sido comprendidos; que al verse sólo en las Cortes con tres diputados, sienta una justificada amargura, que pierda su fe en el pueblo, que a veces piensa uno se merecía la Monarquía, con todas sus lacras, abusos, despotismos y sistemas de privilegios de explotación.

- No; no hay nada de eso. Yo sabía que no sería eterno en el Poder. No me interesa la política porque no me ha interesado nunca gran cosa.

01302

- Pues no lo creo.

- Hace usted mal, porque se lo digo con absoluta sinceridad. Estoy en la política por deber, no por gusto.

INDICE

	<i><u>Página</u></i>
NOTA INTRODUCTORIA	923
I. DOCUMENTOS DE ACCION REPUBLICANA.	927
1. DOCUMENTOS POLITICOS	928
A. TEXTOS PROGRAMATICOS DEL PARTIDO.	929
DOCUMENTOS Y PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION	
NACIONAL DEL PARTIDO	930
MANIFIESTO FUNDACIONAL DE ACCION	
REPUBLICANA (1925),	930
MANIFIESTO POLITICO DE ACCION REPUBLICANA	
(1930),	933
ACCION REPUBLICANA, BASES DE SU IDEARIO	
POLITICO (1931)	936
PONENCIA POLITICA APROBADA EN LA	
ASAMBLEA NACIONAL DE MARZO DE 1932	941
PONENCIA POLITICA APROBADA EN LA	
ASAMBLEA NACIONAL DE OCTUBRE DE 1933. . . .	945
RESOLUCION APROBADA EN LA ASAMBLEA	
NACIONAL DE DISOLUCION DE ACCIÓN	
REPUBLICANA (MARZO DE 1934)	949
PROGRAMA DE IZQUIERDA REPUBLICANA	
(ABRIL DE 1934)	952
B. DOCUMENTOS DE LAS ORGANIZACIONES PROVINCIALES	
Y DE LA J.A.R.	965

INFORME SOBRE LA SITUACION POLITICA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON Y DEL PARTIDO DE ACCION REPUBLICANA (HACIA MARZO 1933), ,	966
CARTA DE D. JOSE ROYO Y GOMEZ A LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE CASTELLON (MAYO DE 1934),	970
MEMORIA SOBRE LA HISTORIA DE IZQUIERDA REPUBLICANA DE CASTELLON (1936) ,	973
MEMORIA SOBRE FUSION DE PARTIDOS DE IZQUIERDAS (BILBAO, 1934) ,	982
"JUVENTUDES REPUBLICANAS" DE A. AYENSA (8-7-32),	987
MANIFIESTO FUNDACIONAL DE LA JAR (31-7-32) ,	991
BASES SOBRE LA ACTUACION DE LAS JAR , . . .	994
2. ESTATUTOS Y DOCUMENTOS DEL PARTIDO ,	998
ESTATUTOS DE ACCION REPUBLICANA (SEPTIEMBRE DE 1931) ,	999
REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE ACCION REPUBLICANA (OCTUBRE DE 1933) ,	1.010
REGLAMENTO PROVINCIAL DE ACCION REPUBLICANA DE CASTELLON (MAYO DE 1932) ,	1.015
REGLAMENTO PROVINCIAL DE ACCION REPUBLICANA DE MADRID (DICIEMBRE DE 1932)	1.029
REGLAMENTO LOCAL DE ACCION REPUBLICANA, ,	1.034

II, ESCRITOS Y DISCURSOS DE AZAÑA	1.043
1. ARTICULOS DE PRENSA.	1.044
LA POLITICA FRANCESA DE POSTGUERRA	
(POLITICA, ENERO DE 1930).	1.045
EL ATENEO Y LAS RESPONSABILIDADES	
(POLITICA, SEPTIEMBRE DE 1930)	1.054
REVOLUCION Y REPUBLICA (LA TIERRA, 2-4-31) .	1.058
2. INTERVENCIONES EN CORTES	1.061
SOBRE EL CUERPO DE SUBOFICIALES (2-12-31). .	1.062
SOBRE LA SITUACION DE LOS FUNCIONARIOS	
(16-3-32).	1.065
RUMORES SOBRE ACTIVIDADES SUBVERSIVAS EN	
EL EJERCITO (23-6-32).	1.078
VALOR DE LAS DECLARACIONES DE UNA COMISION	
PARLAMENTARIA (2-9-32)	1.082
URGENCIA DE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES	
(17-11-32)	1.083
PRIORIDADES DE GOBIERNO (9-2-33)	1.091
MEDIOS Y RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA	
LEY DE CONGREGACIONES RELIGIOSAS (11-5-33) .	1.096
POSICION DEL GOBIERNO ANTE LA ELECCION DEL	
PRESIDENTE DEL T.G.C. (13-7-33).	1.098
3. DISCURSOS	1.099
EL ATENEO Y LA FUNCION DE GOBIERNO;	
MADRID, 13-5-31	1.100

01306

	<u>Página</u>
VALENCIA, 7-6-31	1.103
VALENCIA, 6-4-32	1.122
MADRID, 2-5-32	1.129
LA CORUÑA, 18-7-32	1.132
ALOCUCION A LOS CATALANES, 27-9-32	1.136
MADRID, 18-10-32	1.138
MADRID, 10-11-32	1.142
SAN SEBASTIAN, 3-11-33	1.146
JATIVA, 11-11-33	1.160
CASTELLON, 12-11-33	1.189
BARACALDO, 15-11-33	1.213
4. ALOCUCIONES A LOS MILITARES.	1.215
PROCLAMACION DE LA REPUBLICA, 14-4-31. . .	1.216
CLAUSURA DE CURSO EN LA ESCULA CENTRAL DE TIRO, 27-4-31	1.217
DISCURSO EN CUATRO VIENTOS, 4-7-32	1.221
ALOCUCION EN OVIEDO, 22-9-32	1.228
ALOCUCION EN PALENCIA, 8-10-32	1.229
HOMENAJE MILITAR A LA REPUBLICA, 22-10-32 .	1.230
DISCURSOS EN VALLADOLID, 13-11-32.	1.233
5. PREAMBULOS A LAS DISPOSICIONES LEGALES	
SOBRE EL EJERCITO.	1.242
D. 22-4-31, SOBRE PROMESA DE FIDELIDAD A LA REPUBLICA	1.243

D. 25-4-31, SOBRE PASE A LA RESERVA DE OFICIALES	1.245
D. 4-5-31, SOBRE PROVISION DE DESTINOS MILITARES	1.250
D. 11-5-31, SOBRE JURISDICCION Y JUSTICIA MILITAR	1.251
D. 25-5-31, SOBRE REORGANIZACION DEL EJERCITO	1.253
D. 3-6-31, SOBRE REORGANIZACION DEL EJERCITO EN MARRUECOS	1.260
D. 3-6-31, SOBRE REVISION DE ASCENSOS	1.261
D. 16-6-31, SOBRE SUPRESION DE REGIONES Y CAPITANIAS GENERALES.	1.263
D. 16-6-31, SOBRE MOVILIZACION Y RESERVA.	1.266
D. 30-6-31, SOBRE SUPRESION DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR	1.269
D. 3-7-31, SOBRE REORGANIZACION DEL MINISTERIO DE LA GUERRA	1.271
D. 13-7-31, SUPRESION DE LA ESCALA DE RESERVA RETRIBUIDA	1.274
D. 21-7-31, CREACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS MILITARES SUPERIORES.	1.277
D. 11-9-31, PERMANENCIA DE OFICIALES EN MIQUELETES Y MIÑONES.	1.278

01303

Página

6. ENTREVISTAS	1.279
CUESTIONES MILITARES (5-5-31)	1.280
CUESTIONES DE ACTUALIDAD (1932)	1.287
ANTE EL MOMENTO POLITICO (23-12-33)	1.292
SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL (16-1-34)	1.297

BIBLIOGRAFIA
=====

Y
=

FUENTES
=====

INDICE DE LA BIBLIOGRAFIA Y FUENTES

I. BIBLIOGRAFIA

1. Obras generales
2. Obras y artículos sobre Azaña y Acción Republicana
3. Obras sobre la II República
4. Artículos

II. FUENTES DOCUMENTALES

1. Obras de interés político de la época
2. Memorias y Testimonios
3. Libros de información documental, estadística y bibliográfica.
4. Debates parlamentarios.
5. Prensa y revistas de la época
6. Archivos.

I. BIBLIOGRAFIA

1. OBRAS GENERALES

- 1.- ALLAROT, E. and ROKKAN, S. (Ed.)
MASS POLITICS. Studies in Political Sociology
The Free Press, New York, 1970.
- 2.- APTER, David E.
THE POLITICS OF MODERNIZATION
University of Chicago Press, 1965.
3. BLONDEL, Jean
Introducción al Estudio Comparativo de los Gobiernos
Revista de Occidente, Madrid, 1972.
4. BRUGUERA, F.G.
Histoire Contemporaine D'Espagne 1739-1750
Ed. Ophrys, París 1950.
5. CABO MARTIN, Carlos de
La República y el Estado Liberal
Tucar (Temas de Ciencias Sociales), Madrid, 1977
6. CARR, Raymond
España 1808-1939
Ariel (Horas de España) Barcelona (2ª ed.) 1970
7. CONARD-MALERBE, P.
Guía para el estudio de la Historia Contemporánea de España
Siglo XXI (Estudios de Historia Contemporánea), Madrid, 1975
- 8.- CROTTY, William J. (Ed.)
Approaches to the Study of Party Organization
Allyn and Bocan, Boston, 1968
- 9.- CHARLOT, Jean
Los Partidos Políticos
A.Redondo (Beta 13), Barcelona 1972.
- 10.- DUVERGER, Maurice.
Métodos de las Ciencias Sociales
Ariel, Barcelona, 1974.
- 11.- DUVERGER, Maurice.
Los Partidos Políticos
Fondo de Cultura Económica, México, 1972
- 12.- EASTON, David
Esquema para el Análisis Político
Amorrortu (Biblioteca de Sociología), Buenos Aires, 1969.
- 13.- EISENSTANDT, Samuel N.
Ensayos sobre el Cambio Social y la Modernización
Tecnos, Madrid, 1970.
14. EISENSTADT
Modernización, Movimientos de Protesta y Cambio Social
Amorrortu, Buenos Aires, 1968.

15. ELDERSVELD, Samuel J.
Political Parties - A Behavioral Analysis
Rand McNally, Chicago, 1964.
16. ESTEBAN, Jorge de, GARCIA FERNANDEZ, J. y ESPIN, Eduardo
Esquemas del Constitucionalismo Español
Facultad de Derecho, Madrid, 1976.
17. HUNTINGTON, Samuel P.
Political Order in Changing Societies
Yale Univ. Press, New Haven-London, 1975,
18. JAGER, Wolfgang
Partei Und System. Eine Kritische Einführung in die Parteien-
forschung
Kohlhammer, Stuttgart, 1973.
19. LA PALOMBARA, Joseph de WEINER, Myron (ed.)
Political Parties and Political Development
Princ. University Press, Princeton, 1972
20. LA PALOMBARA, Joseph
Politics Within Nations
Prentice Hall, New Jersey, 1974.
21. LIPSET, Seymour y ROKKAN, S. (eds.)
Party Systems and Voter Alignments
Free Press, New York, 1967.
22. LOPEZ GUERRA, Luis
Las Campañas Electorales en Occidente
Fundación J. March (Ed. Ariel) (Colección Monografías), Madrid,
1977.
23. MADARIAGA, Salvador de
España. Ensayo de Historia Contemporánea
Sudamericana, Buenos Aires, 1974 (10ª ed.)
24. MEYNAUD, Jean
Introducción a la Ciencia Política
Tecnos Madrid, 1964.
25. MICHELS, Robert
Los Partidos Políticos. Un estudio sociológico de las tenden-
cias oligárquicas de la democracia moderna I y II (1915)
Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1969.
26. MURILLO FERROL, F.
Estudios de Sociología Política
Tecnos, Madrid, 1963.
27. POSADA, A.
España en Crisis.
Caró Raggio, Madrid, 1923.

01314

28. POSADA, A.
La Reforma Constitucional
Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1931.
29. OSTROGORSKI, M.
La Democratie et L'Organisation des Partis Politiques
Calman Levy, Paris, 1912.
30. RAE, D.W.
Leyes Electorales y Sistema de Partidos Políticos
CITEP (Análisis Político), Madrid, 1977
31. RAMOS OLIVEIRA, A.
HISTORIA DE ESPAÑA (3vols.)
C. General de Ediciones, México.
32. ROMANONES, Conde de
Las Responsabilidades del Antiguo Régimen de 1875 a 1924
Madrid, 1924.
33. SCHATTISNEIDER, E.E.
Régimen de Partidos
Tecnos, Madrid, 1964.
34. SADOUL, G. et alii
La Historia Hoy
Avance, Barcelona, 1976
35. SANCHEZ AGESTA, Luis
Curso de Derecho Constitucional comparado
Facultad de Derecho, Madrid, 1976.
36. SANCHEZ AGESTA, Luis
Historia del Constitucionalismo Español
Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1974.
37. SOLE TURA, Jordi y AJA, Eliseo
Constituciones y períodos constituyentes en España
Siglo XXI, Madrid, 1977.
38. SCHWARTZENBERG, R.
L'Etat Spectacle. Essai sur et contre le Star system en poe
litique.
Flammarion, París 1977.
39. SECO, Carlos
Epoca Contemporánea, Tomo VI de la Hª de España
Gallach, Barcelona, 1962.
40. SEVILLA ANDRES, D.
Historia Política de España 1800-1967.
Madrid, 1968.
41. TOMAS VILLARROYA, Joaquín
Breve Historia del Constitucionalismo Español.
Ed. Planeta-Ed. Nacional, Madrid, 1976.

42. TUÑÓN DE LARA Manuel
Metodología de la Historia Social de España
Siglo XX. Madrid, 1973-74
43. UBIETO, A, J. REGLA; J.M. JOVER; C.SECO
Introducción a la Historia de España
Teide, Barcelona 1971.
44. VEGA, Pedro de (ed.)
Teoría y Práctica de los Partidos Políticos
Edicusa, Madrid 1977
45. VICENS VIVES, Jaime
Aproximación a la Historia de España
Salvat-Alianza, Madrid 1970
46. VICENS VIVES, J.
Historia Social y Económica de España y América
Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1974.
47. VILAR, Pierre
Histoire de L'Espagne
P.V.F., París 1947
48. WRIGHT, William E.
A Comparative Study of Party Organization
Columbus, 1971
2. OBRAS Y ARTICULOS SOBRE AZAÑA Y ACCION REPUBLICANA
49. AGUADO, Emiliano
Don Manuel Azaña Díaz
Nauta, Madrid, 1972
50. ALBA, Victor
Los Sepultureros de la República. Azaña, Prieto y Negrín
Planeta, Barcelona, 1977
51. ARAGON, Manuel
Azaña: Un intento de modernización política
en Sistema nº 2, mayo de 1973, págs. 101-114
52. ARAGON, Manuel
La idea del Estado en Manuel Azaña, Tesis Doctoral, Facultad
Derecho, Universidad Complutense
Madrid, 1973.
53. ARAGON, Manuel
Posibles Bases para la Comprensión de la obra Política de
Azaña en Tuñón de Lara et alii, Movimiento obrero, política
y literatura en la España contemporánea, págs. 127-142, 1974,
Madrid Ed. Edicusa.
54. ARAQUISTAIN, Luis
El Mito Azaña. El discurso de Azaña
En Leviatán nº 18, octubre-Noviembre 1935
55. ARAQUISTAIN
El Secreto de Azaña
(Crítica de su libro "La invención del Quijote y otros ensayos")
En Leviatán, nº 11, marzo 1935 p. 32.

56. ARAQUISTAIN
"La utopía de Azaña"
En Leviatán, Septiembre 1934, nº 5 p. 18
57. ARRARAS, Joaquín
Memorias íntimas de Azaña
1939, Madrid, Ediciones Españolas
58. BETEGON DIEZ, R.
Acción Republicana 1931-1934. Un grupo intelectual en torno a Azaña.
En Historia Internacional nº 13, abril 1976, págs. 24-27
59. CASARES, Francisco
Azaña y ellos
Prieto, Granada, 1938
60. ESPINALT, Carlos M.
Estudi de Manuel Azaña
Rafael Salvá, Barcelona, 1971
61. GARAGORRI, Paulino
La Tentación Política: Azaña
En Revista de Occidente, Madrid, nº 83 (1970) 217-225
62. GARCIA ESCUDERO, José María
Azaña
En Índice, nº 367, 1 enero 1975 págs. 23-32
63. GIMENEZ CABALLERO, Ernesto
Manuel Azaña (Profecías Españolas)
1975, Madrid, Turner. Incluye "Sobre un libro obligado: Manuel Azaña (Profecías españolas), de Ernesto Giménez Caballero", de Jean Becarud.
64. GONZALEZ RUIZ, N.
Azaña. Sus ideas religiosas. Sus ideas políticas. El hombre.
Gráfica Universal, Madrid 1932.
65. GUTIERREZ INCLAN, José Manuel
Azaña: España ha dejado de ser Católica.
En Tiempo de Historia, nº 23. p. 4.
66. JACKSON, Gabriel
The Azaña Regime in Perspective (Spain 1931-1933)
The American Historical Review, LXIV, 1959
En Costa Azaña, El Frente Popular y otros ensayos.
1976, Turner, Madrid.
67. MARICHAL, Juan
La vocación de Manuel Azaña
Edicusa, Madrid, 1971.
68. MUÑOZ SANCHEZ, Francisco
Don Manuel
Artes Gráficas, Madrid, 1932.
69. RAMOS OLIVEIRA, Antonio
Azaña y la República Española
En Cuadernos Americanos, noviembre-diciembre 1951, México

70. ROJAS, Carlos
Diez figuras ante la Guerra Civil
Nauta, Madrid, 1973
 71. ROJAS, Carlos
Los dos Presidentes: Azaña/Companys
Dirosa, Barcelona, 1977
 72. ROMERO, Luis
Azaña juzga a sus Ministros
Historia y Vida, 1978
 73. SANCHEZ DE PALACIOS, Mariano
Manuel Azaña. Comentario a una vida.
Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
1975, nº 4 págs. 5-14
 74. SEDWICK, Frank
The tragedy of Manuel Azaña and the fate of the Spanish Republic.
Ohio State University Press, Columbia, 1963
 75. SCHMIDT, B
El problema español de Quevedo a Manuel Azaña
Edicusa, Madrid 1976
- No hemos podido localizar la revista Ibérica, en la que se han publicado algunos breves artículos sobre Azaña
3. CBRAS SOBRE LA II REPUBLICA
76. AGUADO, Emiliano
La República, Ultimo disfraz de la Restauración
Editora Nacional, Madrid, 1972
 77. AGUILO LUCIA, Luis
Las elecciones en Valencia durante la II República
Facultad de Derecho, Valencia, 1974.
 78. ALBA, Victor
Dos Revolucionarios: Andrey Nin, Joaquín Maurín.
Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975.
 79. ALCALA ZAMORA, Niceto
Los Defectos de la Constitución de 1931.
Imp. R. Espinosa, Madrid, 1936
 80. ALFONSO BOZZO, Alfonso
Los partidos políticos y la autonomía en Galicia 1931-36
Akal, Madrid, 1976
 81. ALZAGA, Oscar
La Primera Democracia Cristiana en España
Ariel. Barcelona, 1973.

01318

82. ANDRES-GALLEGO, José
El Socialismo durante la Dictadura 1923-1930
Tebas, Madrid, 1977
83. ARBELOA, Victor Manuel
La Semana Trágica de la Iglesia en España
Galba, Barcelona, 1976.
84. ARIAS VELASCO, José
La Hacienda de la Generalidad 1931-1938
Ariel, Barcelona, 1977.
85. ARRARAS, J.
Historia de la Segunda República Española
Editora Nacional, Madrid, 1956-1962.
86. ARTOLA, Miguel
Partidos y Programas Políticos 1808-1936
Aguilar, Madrid, 1974.
87. ASTARLOA VILLENA, F.
Región y religión en las constituyentes de 1931.
Facultad de Derecho, Valencia, 1976.
88. BALCELLES, A.
Cataluña Contemporánea, II
Siglo XXI, Madrid, 1974.
89. BALCELLS, Alberto
Crisis Económica y Agitación Social en Cataluña: 1930-1936
Ariel, Barcelona, 1971.
90. BALCELLS, A.
Teoría y Práctica del Movimiento Obrero en España
A. Balcells, Valencia, 1977.
91. BECARUD, Jean
La Segunda República Española
Taurus, Madrid, 1967
92. BECARUD, Jean
Miguel de Unamuno y la Segunda República
Taurus, Madrid, 1965.
93. BECARUD, J. y LOPEZ CAMPILLO, E.
Los Intelectuales Españoles durante la II República
Siglo XXI, Madrid, 1978
94. BENAVIDES, Domingo
El fracaso social del catolicismo español Arboleya Martinez,
1870-1951.
Nova Terra, Barcelona, 1973.
95. BENAVIDES, Manuel
La Política Económica en la Segunda República.
Guadiana, Madrid 1972.

96. BENAVIDES, Manuel
La Política Económica en la Segunda República
Guadiana, Madrid, 1972.
97. BIZCARRONDO, Marta
Leviatan y el Socialismo de Luis Araquistain
Estudio preliminar a la reedición de Leviatán. Vol. 5, págs. 7-157
Deltev Auvermann, 1974.
98. BONAMUSA, Francesa
Andreu Nin y el movimiento comunista en España (1930-1937)
Prologo de Josep. Termes, Anagrama, 1977
99. BONAMUSA, Francesa
El bloc obrer camperol (1930-1932)
Cuval (biblioteca de cultura catalana); Barcelona, 1974
100. BRADEMAS, John
Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937)
Ariel, Barcelona, 1974
101. BRAVO MORATA, Federico
La República y el Ejercito
Ed. Fenicia (c. Tricolor), Madrid, 1974
102. BRENNAN, Gerald
The Spanish Labyrinth,
An account of the social and political background of the spanish civil war
University press, Cambridge, 1969
103. BREY, Gual y MAURICE, Jacques
Historia y Leyenda de Casas Viejas
Zero, Madrid, 1976
104. BROUÉ, P.- TÉMINE
La Revolution et la Guerre D'Espagne
Ed. Minuit, Paris, 1961
105. BUSQUETS BRAGULAT, Julio
El Militar de Carrera en España
Ariel, Barcelona, 1971
106. CABANELLAS, Guillermo
Cuatro Generales
Planeta, Barcelona, 1977 (Espejo de España)
107. CALERO, Antonio M.
Movimientos Sociales en Andalucía, 1820-1936
Siglo XXI (Estudios de Historia Contemporanea), Madrid, 1976
108. CAPEL, Rosa M^a
El Sufragio Femenino en la 2^a República Española
Universidad de Granada, 1975

109. CARBALLO, F. y MAGARIÑOS, A.
La Iglesia en la Galicia Contemporánea (Análisis histórico y teológico del período 1931-36, II República)
Akal, Madrid, 1978
110. CARR, R. (ed.)
Estudios sobre la República y la Guerra civil Española
Ariel (Horas de España), Barcelona, 1974
111. CARRION, P.
Los Latifundios en España
Ariel, Barcelona, 1972
112. CARRION, Pascual
La Reforma Agraria de la 2ª República y la situación actual de la Agricultura Española.
Ariel (Horas de España), Barcelona, 1973
113. CASTELLS, Jose Manuel
Las Asociaciones Religiosas en la España Contemporánea
Taurus, Madrid, 1973
114. CASTELLS, Jose Manuel
El Estatuto Vasco. El estado regional y el proceso estatutario vasco.
Luis Haramburu ed. (Hermen nº 1), San Sebastian, 1976
115. CIERVA, Ricardo de la
Historia de la Guerra Civil Española Vol. I Perspectivas y antecedentes 1898-1936
Madrid, 1969, Ariel
116. CILLAN APALATEGUI, Antonio
Sociología Electoral de Guipúzcoa (1900-1936)
Caja de Ahorros Municipal de S.S. (Estudio), San Sebastián, 1975
117. COMIN COLOMER, Eduardo
Historia Secreta de la Segunda República
Ed. AHR, Barcelona, 1959
118. COMIN COLOMER, Eduardo
Historia del Partido Comunista de España (3 vols.) (2ª ed.)
Vol. I y II: Primera etapa. Abril 1920-Febrero 1936. Del nacimiento a la mayoría de edad.
Editora Nacional, Madrid, 1967
119. COMIN COLOMER, Eduardo
Lo que España debe a la Masonería
Barcelona, 1956
120. CUCO, A.
El Valencianisme Politic, 1874-1936
Fundación Jamme Bofill, Barcelona, 1971

01321

121. DESVOIS, J.M
La Prensa en España (1900-1931)
Siglo XXI (Estudios de Hª Contemporánea), Madrid, 1977
122. DIAZ, Elias
Unamuno, Pensamiento Político
Tecnos, Madrid, 1965
123. ELORZA, Antonio
La Utopía Anarquista en la II República Española
Ed. Ayuso, Madrid, 1973
124. ESPAGNE
Estudios de R. Altamira, Jiménez de Arina, Beceña, Gascón
y Marín, De Buen, Garrigues López Rey y Trías de Bes
Delegare, Paris, 1934
125. FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor
Historia de la República Española 1931-1936
Biblioteca Nueva, Madrid, 1940
126. FERNANDEZ AREAL
La Política Católica en España
Dopesa (Problemas contemporáneos), Barcelona, 1970
127. FERNANDEZ CLEMENTE, Eloy
Aragón contemporáneo (1833-1936)
Siglo XXI (Estudio de Hª Contemporánea), Madrid, 1975
128. FERNANDEZ-RUA, Jose Luis
1931 La Segunda República
Tebas (Hª Política), Madrid, 1977
129. FRAGOZO DEL TORO
La España de Ayer
Editorial Nacional, Madrid, 1967 (2ª ed.)
130. GABRIEL, Pere
El Moviment Obrer a Mallorca
Curial-Lavinia, Barcelona, 1973
131. GARCIA CEBALLOS, M.
CASAS VIEJAS (Un proceso que pertenece a la Historia)
Prólogo de Jose Mª Pemán
Fermín Uriarte ed. (Colección "Controversia"), Madrid, 1965
132. GARCIA DELGADO, J.L. (ed.)
La Cuestión Agraria en la España Contemporánea
Edicusa, Madrid, 1976
133. GARCIA ESCUDERO, J.M.
De Canovas a la República
Rialp., Madrid, 1953

134. GARCIA ESCUDERO, J.M.
Historia Política de las dos Españas
Ed. Nacional, Madrid, 1956-57
135. GALINDO HERRERO, Santiago
Los Partidos Monárquicos bajo la Segunda República
Rialp, Madrid, 1956
136. GARCIA VENERO
Historia de las Internacionales en España
Madrid, 1956
137. GARCIA VENERO, Maximiano
Melquiades Alvarez. Historia de un Liberal. Prólogo de Azorín
Tebas (Hª Política), Madrid, 1974 (2ª ed.)
138. GARCIA VENERO, Maximiano
Santiago Alba, Monárquico de Razón.
Aguilar (Evocaciones y memorias) (2ª ed. con un prólogo de
Salvador de Madariaga), Madrid, 1963
139. GARRIGA, Ramón
Juan March y su Tiempo
Planeta, Barcelona, 1976
140. GUMEZ MOLLEDA, Mª Dolores
Los Reformadores de la España Contemporanea
CSIC, Madrid, 1966
141. GONZALEZ CASANOVA
Elecciones en Barcelona, 1931-1936
Tecnos, Madrid, 1969
142. GONZALEZ CASANOVA
Federalisme Autonomia en Catalunya (1868-1938)
Curial, Barcelona, 1974
143. GONZALEZ MUÑIZ, Miguel Angel
Problemas de la Segunda República
Jucar (la Vela Latina/Historia), Madrid, 1974
144. GUZMAN, Eduardo de
1930. Historia Política de un año decisivo
Tebas (Historia Política), Madrid, 1973
145. JACKSON, Gabriel
Costa, Azaña, El Frente Popular y otros ensayos
Turner, Madrid, 1976
146. JACKSON, Gabriel
La República Española y la Guerra Civil 1931-1939
Ed. América, Mexico, 1967

147. JIMENEZ DE ASUA, Luis
Proceso Histórico de la Constitución de la República Española
Reus, Madrid, 1932
148. JIMENEZ DE ASUA
La Constitución de la Democracia Española y el Problema Regional
Ed. Corlada, Buenos Aires, 1946
149. JUTGLAR, Antoni
La era industrial en España
Barcelona, 1963
150. JUTGLAR, Antoni
Ideologías y clases en la España Contemporánea.
Edicusa, Madrid, 1963-69
151. LALCONA, J.F.
El Idealismo Político de Ortega y Gasset
Edicusa, Madrid, 1974
152. LAMO DE ESPINOSA, E.
Filosofía y Política en Julian Besteiro
Edicusa, Madrid, 1973
153. LINZ, J.
El Sistema de Partidos en España
Narcea, S.A. (Biblioteca del Estudiante, Bitacora 43),
Madrid, 1974
154. LINZ, Juan J.
Continuidad y Discontinuidad en la Elite Política Española de la Restauración al Régimen actual. En estudios de Ciencia Política y sociología. Homenaje Ollero 1972 Madrid.
155. LORENZO, Cesar M.
Los Anarquistas Españoles y el Poder
Ruedo Ibérico, Paris, 1972
156. MALDONADO JIMENEZ, R. Jesús
La Minoría agraria de las Cortes Constituyentes de 1931
Facultad de Derecho, U. Complutense, Madrid, 1974
157. MALEFAKIS, Eduardo
Reforma Agraria y Revolución Campesina en la España del siglo XX.
Ariel (Horas de España), Barcelona, 1971
158. MARICHAL, Juan
El Nuevo Pensamiento Político Español
Finisterre (Perspectivas españolas, 1), Mexico, 1974
159. MARONGIU BUONAIUTI, Cesare
Spagna 1931. La Seconda Repubblica e la Chiesa
Bulsoni Editore, Roma, 1976

160. MARTINEZ CUADRADO, M.
La Burguesía Conservadora (1874-1931)
Alianza-Alfaguana, Madrid, 1973
161. MARTINEZ CUADRADO, M.
Elecciones y Partidos Políticos de España 1868-1931 (2 vols)
Taurus, Madrid, 1969
162. MARTINEZ SOSPEDRA, Manuel
Incompatibilidades Parlamentarias en España (1810-1936)
Facultad de Derecho, Valencia, 1974
163. MATEOS RODRIGUEZ
Vid. Sánchez Sánchez, Elecciones..
164. MAURA GAMAZO, Gabriel
Al Servicio de la Historia. Bosquejo Histórico de la Dictadura
Javier Morata, Madrid, 1930
165. MAURA, Duque de-FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor
Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolución de los
partidos históricos durante su reinado
Ed. Ambos mundos, Madrid, 1948
166. MAURICE, J.
La Reforma Agraria en España en el siglo XX (1900-1936)
Siglo XXI, Madrid, 1975
167. MEER LECHA-MARZO, Fernando de
La Cuestión Religiosa en las Cortes Constituyentes de la
II República Española
Universidad de Navarra, Pamplona, 1975
168. MOLAS, I.
Lliga Catalana. Un estudi d'Estasiologia
Edicions 62 (estudis i documents, 18), Barcelona, 1972
169. MOLAS, I.
El Sistema de Partits Polítics a Catalunya (1931-36)
Ed. Península, 1974.
170. MOLERO PINTADO, A.
La Reforma Educativa de la Segunda República Española.
Ed. Santillana, Madrid, 1977
171. MONTERO, Jose R.
La Ceda. El Catolicismo social y político en la II Repú-
blica (2º vols)
Revista de Trabajo, Madrid, 1977
178. MONTERO MORENO, Antonio
Historia de la Persecución Religiosa en España
Madrid, 1961, BAC

179. MUNIS, G.
Jalones de Derrota, Promesa de Victoria. Crítica y teoría de la revolución española (1930-1939)
Zero, Madrid, 1977
180. NAUDON, Paul
La Franc-Maçonnerie
Puf, Paris, 1977
181. ORTEGA y GASSET, José
Escritos Políticos (1922-1933)
Obras Completas, vol XI, Revista de Occidente, Madrid, 1969
182. OSSORIO, Angel
Vida y Sacrificio de Companys
Nova Terra (2ª ed.), Barcelona, 1976
183. PABON, Jesús
Cambó (2 vols.)
Alpha, Barcelona, 1952-69
184. PAGES, Pelai
El Movimiento Trotskista en España (1930-1935)
Península, Barcelona, 1977
185. PAYNE, Stanley G.
Ejercito y Sociedad en la España Liberal, 1808, 1936
Akal, Madrid 1977
186. PAYNE, Stanley C.
Falange. A Story of Spanish Fascism
Ruedo Ibérico, Paris, 1965
187. PAYNE, Stanley G.
La Revolución Española
Ariel (Horas de España), Barcelona, 1972
188. PEIRATS, Jose
Los Anarquistas en la Crisis Política Española
Jucar, Madrid, 1977
189. PEIRATS, Jose
La C.N.T. en la Revolución Española
Ruedo Ibérico, Paris, 1971
190. PEREZ FERRERO, Miguel
Tertulias y grupos Literarios
Ediciones Cultura Hispánica (Plural), Madrid, 1975
191. PEREZ GALAN, Mariano
La Enseñanza en la Segunda República Española
Edicusa (col. I.T.S.), Madrid, 1975
192. PEREZ SERRANO, Nicolás
La Constitución Española (9 diciembre 1931). Antecedentes.
Text. comentarios.
Revista de Derecho privado, Madrid, 1932

193. PITARCH, Ismael E.
L'Estructura del Parlament de Catalunya les Seves Funcions
Politiques (1932-1939)
Curial (Documentos de cultura), Barcelona, 1977
194. POBLET, Josep. M.
Historia de L'Esquerra Republicana de Catalunya 1931-1936.
El partit de Francesc Macià i Lluís Companys.
Dopesa, Barcelona, 1976
195. RAMA, Carlos M.
La Crisis Española del siglo XX
Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1976
196. RAMIREZ JIMENEZ, Manuel
Los Grupos de Presión en la Segunda República Española
Tecnos (col. ciencias sociales, serie de ciencia política)
Madrid, 1969, Tecnos.
197. RAMIREZ, Manuel
Las Reformas de la II República
Tucar, Madrid, 1977
198. RAMIREZ JIMENEZ, M. (ed.)
Estudios sobre la II República Española
Tecnos, Madrid, 1975
199. REBOLLO TORIO, Miguel A.
El Lenguaje de la Derecha en la 2ª República
Fer Torres editor, Valencia, 1975
200. REDONDO, Gonzalo
Las Empresas Políticas de José Ortega y Gasset
Ed. Rialp; 2 vols. (I: 476p, II: 608 p.), Madrid, 1970
201. ROBINSON, Richard A.H.
Los Orígenes de la España de Franco. Derecha, República y
Revolución 1931-1936
Grijalbo, Barcelona, 1974
202. ROSAL, Amaro del
Historia de la UGT de España, 1901-1939
Grijalbo, Barcelona 1977 (2ª vols)
203. ROYO VILLANOVA, A.
La Constitución Española de 9 de diciembre de 1931,
Imprenta Castellana, Valladolid, 1939
204. RUIZ, D.
Asturias Contemporanea (1808-1936)
Siglo XXI, Madrid, 1975
205. RUIZ MANJON, Octavio
El Partido Republicano Radical 1908-1936
Tebas (colección Histórica Política), Madrid, 1976

01327

206. RUIZ SALVADOR, Antonio
Ateneo, Dictadura y República
Fernando Torres ed. (interdisciplinar 2,37), Valencia, 1976
207. SABORIT, Andrés
Julian Besteiro
Losada, Buenos Aires, 1967
208. SAEZ ALBA, A.
La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el
caso de El Correo de Andalucía. La otra "Cosa nostra".
Ruedo Ibérico, París, 1974
209. SAMANIEGO BONEU, M.
La Política Educativa de la Segunda República
CSIC (Historia de España en el Mundo Moderno, 6) Madrid, 1977
210. SANCHEZ SANCHEZ, J y MATEOS RODRIGUEZ, M.A.
Elecciones y partidos en Albacete durante la II República
1931-1936
Impr. J. Gómez Arendano, Albacete, 1977
211. SANTOS JULIA
La Izquierda del PSOE (1935-1936)
Siglo XXI, Madrid, 1977
212. SCANLON, Geraldine M.
La polémica feminista en la España Contemporánea (1868-1974)
Siglo XXI, Madrid, 1976
213. SECO SERRANO, C.
Alfonso XIII y la crisis de la Restauración
Ariel, Barcelona, 1969
214. SECO SERRANO, C.
Historia de España, época contemporánea. La II República
la Guerra civil, la España actual)
Gallach, Barcelona, 1971
215. SORIANO FLORES DE LEMUS, Julian
Calvo Sotelo ante la II República
Editora Nacional (libros de bolsillo), Madrid, 1975
216. SOULIÉ, Michel
La Vie Politique D'Edouard Herriot
Armand Colin, París, 1962
217. TAMAMES, Ramón
La República. La Era de Franco
Alfaguara-Alianza Madrid, 1973
218. THOMAS, Hugh
La Guerra Civil Española
Grijalbo, Barcelona, 1976

01328

219. TOUCHARD, Jean
La Gauche en France depuis 1900
Ed. Seuil (histoire, 26) Paris, 1977
220. TUÑON DE LARA, M.
La España del Siglo XX
Laia (2ª Ed.), Barcelona, 1977
221. TUÑON DE LARA, Manuel
Estudios de Historia Contemporanea
Nova Terra, Barcelona, 1977
222. TUÑON DE LARA
Historia y Realidad del Poder (El poder y las elites en
el primer tercio de la España del siglo XX)
Edicusa, Madrid, 1967
223. TUÑON DE LARA, Manuel
Medio siglo de Cultura Española (1885-1936)
Tecnos 298p. Madrid, 1971
224. TUÑON DE LARA, M.
El Movimiento obrero en la historia de España
Taurus, Madrid, 1972
225. TUÑON DE LARA, Manuel
La II República (2 vols)
Siglo XXI (Estudios de Historia Contemporánea) Madrid, 1976
226. TUÑON DE LARA et alii
Movimiento Obrero, Política y Literatura en la España
Contemporanea
Edicusa, Madrid, 1974
227. TUÑON et alii
Sociedad, Política y Cultura en la España de los siglos
XIX y XX
Edicusa, Madrid, 1973
228. TUSELL, Javier
La Crisis del Caciquismo Andaluz (1923-1931)
Gupsa editorial, Madrid, 1977
229. TUSELL, Javier
La España del Siglo XX
Dopesa, Barcelona, 1975

230. TUSELL, Javier
Historia de la Democracia Cristiana en España (2 vols).
I: Los antecedentes. La Ceda y la II República
II: los nacionalismos vasco y catalán. Los solitarios
Cuadernos para el diálogo (Col ITS), Madrid, 1974.
231. TUSELL, Javier
La Segunda República en Madrid: Elecciones y Partidos Políticos.
Tecnos, Madrid, 1970
232. TUSELL, J.
Sociología Electoral de Madrid, 1903-1931
Edicusa, Madrid, 1969
233. VARELA, Santiago
El Problema Regional en la II República Española
Unión Editorial, S.A. (cuadernos libra, 4), Madrid, 1976
234. VARELA, Santiago
El Sistema de Partidos en las Cortes de la II República Española.
Tesis doctoral, Fac. Derecho U.Complutense, Madrid, 1976
235. VENTALLO, Joaquin
Los Intelectuales Castellanos y Cataluña. Tres fechas históricas: 1924, 1927 y 1930
Galba (11), Barcelona, 1976
236. VICENS VIVES, Jaime
Coyuntura económica y Reformismo Burgués y otros estudios de historia de España
Ariel, Barcelona, 1969
237. ZAPATERO, Virgilio
Fernando de los Ríos: Los problemas del Socialismo Democrático
Edicusa (I.T.S.), Madrid, 1974

4. ARTICULOS

238. AVILES FARRE, Juan
1930-31. La Derecha que se hizo republicana. Viejos monárquicos en obras liberales
En Historia Internacional, Abril 1976, nº 13 pgs. 28-32
239. BLAS GUERRERO, A. de
La Radicalización de Largo Caballero, 1933-34
En Sistema, nº 8, enero de 1975 y 13-84
240. ELORZA, Antonio
Carácter Nacional e Ideologías, 1914-1936
en Triunfo, nº 352 Extra, 9-XII-72

241. ELORZA, Antonio
Las Elecciones del Frente Popular
Triunfo, nº 684, 6 marzo/76
242. FERRER BENIMELI, José A.
Los masones en la Historia Contemporánea de España
en Hª 16, Nov. 77, Extra IV pgs. 57-76
243. GARCIA ALVAREZ, Manuel B.
La Voluntad Regional como origen de Autonomía Política en
la II República
Sistema, julio 1976 (nº 14) págs. 73-93
244. GONZALEZ CASANOVA, J.A.
La Constitución de la II República Española y el Estatut
de Catalunya de 1931.
En Sistema, nº 17-18, pgs. 99-110
245. LAS ELECCIONES EN ESPAÑA
Varios: Historia 16, Extraordinario II, Abril 1977
246. JIMENEZ CAMPO, Javier
Aproximación a un modelo de partido fascista
El caso del Partido Nacionalista Español.
en Sistema nº 22, enero de 1978, págs. 75-92
247. KENT, Victoria
Una Experiencia Penitenciaria
Tiempo de Historia, abril/76 págs. 4-10.
248. LEYS, Colin
Models, Theories and the Theory of Political Parties
En Political studios VII (2), Junio 1959 págs. 127-146
249. LOWI, T.
Toward Functionalism in political science: The case of
innovation in parti systems
En The American Political Science Review, 57 (1963) 570-83
250. LLOPIS, Radolfo
Las órdenes religiosas siguen explotando la enseñanza en
la República Española.
En Leviatán, nº 3, p. 59, Julio 1934 p. 59-63.
251. MAINER, José Carlos
El Aragonismo Político (1868-1936)
En Sistema, nº 8, enero de 1975, págs. 57-73.
252. MEDDING, Peter
A Framework for the analysis of power in political parties
En Political Studies XVIII (1970), 1-17
253. MORAL SANDOVAL, Enrique
El Nacionalismo Catalán: Esquema de su evolución
(Esquema y cronología) en Boletín informativo de Ciencia
Política nº 7, agosto 1971, págs. 193-197.

254. PRESTON, Paul
La Derecha "Moderada" y el Socavamento de la II República Española 1931-1933
En Historia Internacional, nº 14, mayo 1976 págs. 10-25
255. RAMIREZ, M.
La escisión del partido Radical-Socialista en la II República Española
En Atlántida nº 41, set. oct. 1969, págs. 464-483.
256. RAMIREZ JIMENEZ, Manuel
Modernización Política en España: Hipótesis para su estudio.
En Revista de Estudios Sociales, nº 5, mayo-agosto de 1972, págs. 107-133
257. RAMOS OLIVEIRA, Antonio
El Socialismo Español de 1909-1934
En Leviatán, nº 1, mayo 34 págs. 27-34.
258. RUEDA HERNANZ, Germán
El Partido Agrario Español (1934-1936). (Análisis sociológico de la sección valenciana y estudio comparativo con la Agrupación Madrileña del Partido Republicano Radical).
En Revista de Estudios Políticos, nº 206-207, marzo-junio 1976, págs. 303-323.
259. RUIZ MANJON-CABEZA, Octavio
El Partido Republicano Radical de Madrid durante la II República Española. Análisis sociológico.
En Revista de la Universidad Complutense, Madrid, Vol. XXII, nº 87, julio-septiembre 1973, págs. 233-256.
260. SCHLESINGER, Joseph A.
The primary goals of political parties
En The American Political Science Review, Vol. LXIX, n. 3, Septiembre 1975, págs. 840-849.
261. SECO SERRANO, C
La experiencia de la derecha posibilista en la II República Española.
Estudio preliminar a "Los discursos parlamentarios" de J.M. Gil Robles. Taurus, Madrid, 1971.
262. SUEIRO, Daniel
Casas viejas es Benalup de Sidonia
En Triunfo, 5 junio 1976 nº 697, p. 37.
263. TAYLOR, M. HERMAN, V.M.
Party Systems and government Stability
American Political Science Review (March 1971) págs. 28-37
264. TOMAS VILLARROYA, Joaquín
Las Agrupaciones Locales de la Derecha Regional Valenciana
En Saitabi, XVII, 1967 págs. 129-156
265. TOMAS VILLARROLLA, Joaquín
La Campaña de la Derecha Regional Valenciana en las Elecciones de 1933.
En Saitabi, XIV (1964) págs. 71-108.

266. TOMAS VILLARROYA, Joaquín
La formación de Gobierno durante la II República.
En Revista de Estudios Políticos, 204, noviembre-diciembre
1975, págs. 49-91.
267. TUÑON DE LARA, M.
Problemas actuales de la Historiografía Española.
En Sistema nº 1, Madrid, 1973.
268. TUSELL, J. Gª QUEIPO DE LLANO, Genoveva.
Introducción a la Sociología Electoral del País Vasco duran-
te la II República.
En REOP, nº 48, 1977, abril-junio págs. 7-27.
269. VILAS NOGUEIRA, José
La Primera Fase del Proceso Estatutario Gallego. Asamblea
de La Coruña de 4 de Junio de 1931.
En Boletín informativo de Ciencia Política, nº 11-12 (dic.
72 abril 73) págs. 185-204.
270. XIRAY, Antonio
El Estatuto de Cataluña
En Leviatán, nº 1, mayo 1934 págs. 67-73.
271. ZUGAZAGOITIA, Julián.
Las Raíces del Nacionalismo Vasco.
en Leviatán nº 1, mapa 34. págs. 74-79.

II, FUENTES DOCUMENTALES

II. FUENTES DOCUMENTALES

1. OBRAS DE INTERES POLITICO DE LA EPOCA

1. AIGUADER, J.
Cataluña y la Revolución
Edit. Zeus, Madrid, 1932.
2. ALBIÑANA, Dr.
Confinado en las Hurdes
Imp. El Financiero, Madrid, 1933
3. ALBIÑANA SANZ, José M^a
España Bajo la Dictadura Republicana (Crónica de un periodo
putrefacto)
Imp. El financiero Madrid, 1933
4. ALBORNOZ, Alvaro de
El Partido Republicano
Biblioteca Nueva, Madrid, s.d.
5. ALCALA GALIANO, Alvaro
La Caída de un Trono
Compañía Iberoamericana de Publicacion, Madrid 1933
6. ALCALA ZAMORA, Niceto
Conferencia de - pronunciada en el Teatro de Apolo. de Va-
lencia el día 13 de abril de 1930
Imprenta Juan Perez, Madrid, 1930
7. ALIANZA REPUBLICANA
El 11 de Febrero de 1926. Manifiesto
Zoila Ascagibar y Cia, Madrid, 1926
8. ANDRADE, Juan
La Burocracia Reformista en el Movimiento Obrero
E. Gleba, Madrid, 1935
9. ARAQUISTAIN, Luis
El Ocaso de un Régimen
España, Madrid, 1930
10. ARDERIUS, J. y DIAZ FERNANDEZ, Jose
Vida de Fermín Galán. Biografía política
Zeus, Madrid, 1931
11. ARMIÑAN, Luis de
La República... ¿es esto? del retablo Revolucionario
Artes gráficas, Madrid, 1933
12. ARRARAS IRIBARREN, Joaquín
Para la Historia Anecdótica de la Segunda República. Notas
del Bloek
Cultura española, Madrid, 1936

13. ARRESK, Domingo de
Bajo la Ley de Defensa de la República
Compañía General de Artes Gráficas, Madrid, 1933
14. AYENSA, E.
Del Desastre de Annual a la Presidencia del Consejo
Caro Raggio, Madrid, 1930
15. AYENSA, Emilio
Vista de la causa seguida contra el señor Sánchez Guerra
R. Caro Raggio, Madrid, 1929
16. BATALLA, Eduardo
Mis Memorias y mi lucha (viajes, política y negocios)
L'Estampa, Barcelona, 1936
17. BUENO, Manuel
España y la Monarquía. Estudio Político
Ed. Minerva, Madrid, 1925
18. BURGOS Y MAZO, M. de
Al Servicio de la Doctrina Constitucional
J. Morato, Madrid, 1930
19. BURGOS MAZOS
De la República a ...?
J. Morata, Madrid, 1931
20. BURGOS Y MAZO, Manuel de.
La Dictadura y los Constitucionalistas (4 vols)
Morata, Madrid, 1934-1935
21. CALVO SOTELO, José
La voz de un Perseguido
Librería San Martín, Madrid, 1933-34 (2 vols)
22. CAMBA, Francisco
Lerroux. El Caballero de la Libertad
Nuestra Raza, Madrid, s.d. (1935)
23. CAMBO, Francisco
Las Dictaduras
Espasa-Calpe, Madrid, 1929
24. CAMBO, Francisco
Por la Concordia
CIAP, s.a., Madrid, 1927
25. CAMPALANS, Rafael
Hacia la España de todos (Palabras castellanas de un diputado por Cataluña) prólogo de Gabriel Alomar
Espasa-Calpe, Madrid, 1932

01336

26. CANALS, Salvador
La Caída de la monarquía, Problemas de la República. Instalación de un régimen
Ed. Ruiz Hermanos, Madrid, 1931
27. CANALS, Salvador
Reflexiones sobre el actual momento de nuestro problema económico social
Tip. Artística, Madrid, 1932
28. CASARES, Francisco
La ceda va a gobernar (notas y glosas de un año de vida pública nacional)
Gráfica administrativa, Madrid, 1934
29. CASES-CARBO, Joaquín
El Problema peninsular 1924-1932
Barcelona, 1933
30. CASTRILLO SANTOS, Juan
Cuatro años de experiencia republicana
Gráfica administrativa, Madrid, 1935
31. CASTRILLO, Juan
La Orientación de la República
Javier Morata, editor, Madrid, 1933
32. CID LOPEZ, Manuel
La Segunda República
Faro de Vigo, Vigo, 1932
33. COCA, G. Mario de
Anticaballero. Una crítica marxista de la bolchevización del partido socialista obrero español (1930-1936)
Ediciones del Centro, Madrid, 1975
34. CORDERO, Manuel
Los Socialistas y la Revolución
Torrent, Madrid, 1932
35. CORTES CAVANILLAS, Julian
Acta de Acusación. Epistolas, Documentos Frases y Diálogos para la Historia de la Segunda República.
Librería San Martín (1ª ed.), Madrid, 1933
36. CORTES CAVANILLAS, J.
La Dictadura y el Dictador Velasco
Madrid, 1929
37. CORTES CAVANILLAS, Julian
¿Gil Robles monárquico? Misterios de
Librería San Martín, Madrid, 1933

38. CRIPPS, Sir Stafford y otros
Problemas de Gobierno Socialista
Ed. Rev. Derecho Privado, Madrid, 1934
39. CUPER, Mariano
Melquiades Alvarez. El creador; el hombre; el político;
sus ideales; su consecuencia; su integridad.
Reus, Madrid, 1935
40. DOMINGO, Marcelino
Una Dictadura en el siglo XX
Velasco, Madrid, 1929
41. DOMINGO, Marcelino
¿A dónde va España? Prólogo de Gregorio Marañón
Madrid, 1930
42. DOMINGO, Marcelino
La Experiencia del Poder
Tip. de S. Quemadas, Madrid, 1934
43. DOMINGO, Marcelino
Libertad y Autoridad
Madrid, 1928
44. DOMINGO, Marcelino
¿Qué espera el rey?
J. Morata, Madrid, 1930
45. DURAN Y VENTOSA, Luis
Los Políticos
Ed. Mentora, Barcelona, 1928
46. EHERENBURG, Ilya
España, República de Trabajadores
Grijalbo-crítica, Barcelona, 1976
47. ELISEDA, Marqués de
Facismo. Catolicismo. Monarquía
Ed. Fax, Madrid, 1935
48. ESTEBAN INFANTES, Emilio
La Sublevación del General Sanjurjo. Relatado por su ayu-
dante
Imprenta Sánchez Ocaña, Madrid, 1933
49. ESTELRICH, Juan
Catalanismo y reforma hispánica. Prólogo de Angel Ossorio
Gallardo
Mantener y Simón, S.A. Barcelona, 1932
50. ESTELRICH, Joan
Catalunya Endins
Llibr Catalonia, Barcelona, 1930

51. ESTELRICH, Juan
La Persecución Religiosa en España
Difusión, Buenos Aires, 1937
52. FALCON, Cesar
Crítica de la Revolución Española. Desde la Dictadura has
ta las Constituyentes
Ed. Aguilar, Madrid, 1931
53. FALGAIROLLE, Adolphe de
L'Espagne en République
Ed. Fagnello, Paris, 1939
54. FARFAN, Gerard
Por los Fueros de la verdad. Aclaraciones necesarias para
la historia de los sucesos de Valencia. Datos recogidos
por los Apéndice y notas del Exmo Sr. D. Alberto Castro Giron
Madrid, 1930,
55. FERNANDES ALMAGRO, Melchor
Catalanismo y República Española
Espasa-Calpe, Madrid/Barcelona, 1932
56. FERRARI BILLOCH, Francisco
La Masoneria al desnudo.
Ed. Españolas (3ª ed.), Madrid, 1939
57. FERRER CALBETO, Felipe
Los Factores económicos y el momento político catalán
Barcelona, 1933
58. FRANCO, Ramón
Madrid bajo las bombas
Zoda Ascasibar, Madrid, 1931
59. GARCIA MORALES, Juan
Tres años de lucha (a favor de los humildes)
Madrid, 1934
60. GAYA PICON, José
La Autonomía de las Regiones. Antecedentes, opiniones y
orientaciones para la solución del problema
Ed. Castro, Madrid, 1932
61. GAYA PICON, Jose
La Jornada Histórica de Barcelona. Del centralismo o la
autonomía, pasando por unas horas de República catalana
Ed. Castro, Madrid, 1931
62. GARCIA TORAL, Alicia
Breviario de la Dictadura política
(Barcelona-Costa), Madrid, 1928
63. GOMEZ FERNANDEZ, Ramiro
El "52" de General a Presidiario
Gala Saez, Madrid, 1932

64. GOMEZ HIDALGO, F.
Cataluña-Companys
Librería Enrique Prieto, Barcelona, 1935
65. GUIXE, Juan
¿Qué ha hecho la República? (1931-33)
M. Aguilar, Madrid, 1933
66. HIDALGO, Diego
Por qué fui lanzado del ministerio de la guerra. Diez meses de actuación ministerial
Espasa-Calpe, Madrid, 1934
67. JIMENEZ DE ASUA, Luis
Al servicio de la nueva generación
Madrid, 1930
68. LA MAZIERE, Alice
Nouvelle Espagne
Editions Baudimiere, Paris, 1933
69. LEDESMA RAMOS, Ramiro
¿Fascismo en España?
Ariel, Barcelona, 1968.
70. LERROUX, Alejandro
Al Servicio de la República
Morata, Madrid, 1930
71. LIBRO DE ORO DEL PARTIDO REPUBLICANO RADICAL
Dirección por A. Marsá Bragado
Rivadeneyra, Madrid, 1934
72. LOPEZ DE OCHOA, E.
De la Dictadura a la República
Ed. Reus, Madrid, 1930
73. LUIS, Francisco de
La Masonería contra España
Imp. Aldecoa, Burgos, 1935
74. LLOPIS, Rodolfo
La Revolución en la escuela
M. Aguilar, Madrid, 1933
75. MADRID, Francisco
14 de ABRIL (Novela-Reportaje)
Ed. de la Flecha, Madrid-Barcelona, 1934
76. MADRID, F.
Els Exiliats de la Dictadura
Barcelona, 1930
77. MARCO MIRANDA, V.
Las Conspiraciones contra la Dictadura
Tebas, Madrid, 1975

78. MARTINEZ SIERRA, María
La mujer española ante la República
Ed. de la Esfinge, Madrid, 1931
79. MATORRAS, Enrique
El Comunismo en España. Sus orientaciones. Su organización
Madrid, 1935
80. MAURA GAMAZO, Gabriel
Dolor de España
Madrid, 1932
81. MAURIN, Joaquín
Los hombres de la dictadura, Sánchez Guerra, Cambó, Iglesias, Largo Caballero, Lerroux, Melquiades Álvarez
Ediciones Cénit, Madrid, 1930
82. MEDINA Y TOGORES, José de
Un año de Cortes Constituyentes. Impresiones parlamentarias
Ed. Iberica, Madrid, o.d.
83. MIRKINE-GUERTZEVIZCH et REALE, Egidio.
L'Espagne, 1933
Delagrare, Paris, 1933.
84. MOLA, Emilio
El Pasado, Azaña, y el porvenir! Las tragedias de nuestras instituciones militares.
Edit. Bergua, Madrid, 1934
85. MORAL, J. del
Oligarquía y Enchufismo
Imp. de Galo Saez Madrid, 1933
86. MORAL, Joaquín del
La República Española. Síntesis perspectiva de dos años de progreso
Madrid, 1933
87. MORON, G.
El Partido Socialista ante la Realidad Política de España
Argis, Madrid, 1929
88. MORON, Gabriel
La Ruta del Socialismo en España
Ed. España, Madrid, 1932
89. MORRON, Felix
Revolution & Counter-Revolution in Spain. Including "The Civil War in Spain" (1936-1938)
Pakhfinder Press, Inc., New York, 1974

90. NELKEN, Margarita.
La Mujer ante las cortes constituyentes
Castro, Madrid, 1931
91. OLIVEROS, Antonio L.
Asturias en el Resurgimiento español. Apuntes históricos
y biográficos
Madrid, 1935
92. ORTEGA Y GASSET, Eduardo
España Encadenada. La verdad sobre la dictadura
Juan Dura impresor, Paris, 1925
93. PALOMO, E.
Dos ensayos de revolución ¿España en marcha?
Ed. Morata, Madrid, 1930
94. PARDO GONZALEZ, Cándido
Desempolvando legajos. El problema militar de España
Rehyma, Madrid, 1934
95. PARDO GONZALEZ, Candido
Al Servicio de la verdad. Las juntas de Defensa Militares..
La Dictadura del segundo marqués de Estella
Madrid, 1930
96. PARTIDO REPUBLICANO RADICAL
Actuación de la minoría parlamentaria
Madrid, 1935
97. PESTAÑA, Angel
Trayectoria Sindicalista
Tebas, Madrid, 1975
98. PICARD-MOCH, G. et MOCH, J.
E'OEUVRE D'UNE REVOLUTION. L'Espagne Republicaine
Paris, 1933
99. PIRACES, Agustín
Por qué se proclamó la Segunda República en España
Joaquín Gil, Barcelona, 1931
100. PLA, José
Madrid, L'Adveniment de la Republica
Barcelona, 1933
101. PORTILLO, Eduardo M. del
Niceto Alcalá Zamora
Biblioteca Nueva, Madrid, 1932
102. PRADERA, Victor
Al Servicio de la patria, Las ocasiones perdidas por la
Dictadura
Morata, Madrid, 1930

103. RISCO, Vicente
El problema político de Galicia
CIAP, Madrid, 1930
104. ROMERO CUESTA, J.
El Congreso de los Diputados (Breve historia, anécdota
y reportaje de la cámara popular)
Edit. Castro Madrid, 1931
105. ROVIRA Y VIRGILI, A.
La constitución interna de Cataluña
Barcino, Barcelona, 1932
106. SALAZAR ALONSO, Rafael
Bajo el signo de la revolución
Librería de Roberto de San Martín, Madrid, 1935
107. SALAZAR ALONSO
TAREA. Cartas políticas
Madrid, 1934
108. SALAZAR ALONSO R.-CARMONA, Miguel.- ARRAZOLA, Mariano
Alejandro Lerroux. Trayectoria política
Revista Progreso, Madrid, 1934
109. SANCHEZ GUERRA, R.
Dictadura, Indiferencia, República
CIAP, Madrid, 1931
110. SANCHEZ GUERRA, R.
El movimiento revolucionario de valencia
CIAP, Madrid, 1930
111. SANCHEZ GUERRA, Rafael
El proceso de un cambio de régimen. Historia y murmuración
Madrid, 1932
112. SANTIAGO, Enrique
La Unión General de Trabajadores ante la Revolución
Saez Hnos, Madrid, 1932
113. SOLÀ CAÑIZARES, F. de
Les Lluites socials a Catalunya (1812-1934)
Barcelona, 1934
114. SOLÀ CAÑIZARES, Felip. de
El Moviment Revolucionari a Catalunya
Libr. Catalonia, Barcelona, 1932
115. TUSQUETS, J.
Orígenes de la Revolución Española
Ed. Vilamala, Barcelona, 1932

116. UNA PODEROSA FUERZA SECRETA. La Institución libre de enseñanza
Ed. Española, San Sebastián, 1940
117. VALLS TABERNER, Ferran
En les hores Confuses
Inps. Clarasó, Barcelona, 1934
118. VALLS TABERNER, F.
Paraules del moment
Sarriá A.G., Barcelona, 1930
119. VALLS TABERNER, F.
Per la nostra cultura
La Revista, Barcelona, 1930
120. VAZQUEZ HUMASQUÉ, Adolfo
(Del momento actual sobre el agro español) Mi proyecto de reforma agraria.
Imp . El Arca de Noé, Madrid, 1931
121. VILA, Enrique
Un año de República en Sevilla
Ed. Sevillana, Sevilla, 1932
122. VILLANUEVA, Francisco
La Dictadura Militar
Javier Morata, Madrid, 1930
123. VILLANUEVA, Francisco
¿No pasa nada! Continuación de la crónica ¿qué ha pasado aquí?
Editor Morata, Madrid, 1931
124. VILLANUEVA, Francisco
El Momento Constitucional
Editor. Javier Morata, Madrid, 1929
125. VILLANUEVA, Francisco
¿Qué ha pasado aquí?
Editor, J. Morata, Madrid, 1930
126. YABEN, Hilario
¿Monarquía o República?
Madrid, 1931

2. MEMORIAS Y TESTIMONIOS

127. AGUIRRE, J.A.
Entre la libertad y la Revolución (1935)
Ed. Geu., Bilbao, 1976 (2ª ed.)
128. ALCALA ZAMORA, Niceto
Memorias (Segundo texto de mis memorias)
Planeta, Barcelona, 1977.

129. ANSO, Mariano
Yo fui Ministro de Negrín.
Planeta, Barcelona, 1976.
130. AZAÑA, Manuel
Obras Completas. Edición y prólogos de J. Marichal
Oasis, . México, 1966-68.
131. AZAÑA, Manuel
La Velada en Benicarlo. Edición, introducción y notas M. Arago
Castalia, Madrid, 1974.
132. BERENGUER, Dámaso
De la Dictadura a la República.
Tebas, Madrid, 1975.
133. BOWERS, Claude G.
Mi misión en España
Grijalbo, México, 1966.
134. BULLEJOS, José
La Comintern en España
Impresiones modernas, México, 1972.
135. BURGOS Y MAZO, Manuel de
Antología Histórica
Ed. America, Valencia, 1944.
136. CIERVA Y PEÑAFIEL, Juan de la
Notas de mi vida
Reus, Madrid, 1955.
137. CORDON, Antonio
Trayectoria. Memorias de un militar republicano
Ebro, París, 1971.
138. CHAPAPRIETA, Joaquín
La Paz fue posible. Memorias de un político
Ariel, Barcelona, 1971.
139. FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco
Mis conversaciones privadas con Franco
Planeta, Barcelona, 1976.
140. GIL ROBLES, José M^a.
No fue posible la paz
Ariel, Barcelona, 1968.
141. HIDALGO DE CISNEROS
Cambio de Rumbo
Laia, Barcelona, 1977
142. GORDON ORDAS, Félix
Mi política en España, I, II y III
Figaro, México, 1961-63.

143. HURTADO, A.
Quaranta anys d'advocat: Historia del Mex Temps
Xaloc, México 1958.
144. IBARRURI, Dolores
El Unico Camino
Editions Sociales, Paris, 1965.
145. JALON, César
Memorias Políticas
Guadarrama, Madrid, 1973.
146. LARGO CABALLERO
Mis recuerdos. Cartas a un amigo
Ediciones Unidas, México, 1976.
147. LERROUX, Alejandro
Mis Memorias
Afrodisio Aguado, Madrid, 1963.
148. LERROUX, Alejandro
La Pequeña Historia
Afrodisio Aguado, Madrid.
149. MADARIAGA, Salvador de
Españoles de mi tiempo
Planeta, Barcelona, 1976
150. MADARIAGA, Salvador de
Memorias. Amanecer sin mediodía
Espasa Calpe, Madrid, 1974.
151. MADARIAGA, Salvador de
Memorias de un Federalista
Espasa Calpe, Madrid, 1977
152. MARQUES DE HOYOS
Mi Testimonio
Afrodisio Aguado, Madrid, 1962.
153. MARTINEZ, Régulo
Republicanos de Catacumbas
Ediciones 99, Madrid, 1977
154. MAURA, Gabriel
Confesiones de nuestro tiempo.
Aguilar, Madrid, 1934.
155. MAURA, Miguel
Así cayó Alfonso XIII
Ariel, Barcelona, 1966.
156. MOLA, Emilio
Obras completas
L. Santaren, Valladolid, 1940

157. OSSORIO, Angel
Mis Memorias
Losada, Buenos Aires, 1946.
158. PI SUNYER, Carlos
La República y la Guerra
Oasis, México, 1975.
159. PRIETO, Indalecio
Convulsiones de España
Oasis, México, 1967
160. PRIETO, Indalecio
Palabras al viento
Ed. Minerva, México, 1969
161. RIVAS XERIF, Cipriano
Retrato de un desconocido (Vida de Manuel Azaña)
Ed. Oasis, México, 1961
162. ROMANONES, Conde de
Notas de mi vida.
Espasa Calpe. Madrid 1947
163. ROMANONES, Conde de
... Y sucedió así.
Espasa Calpe, Madrid, 1947
164. SANCHEZ-ALBORNOZ, Claudio
De mi anecdotario político
Losada, Buenos Aires, 1972.
165. SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio
Mi testamento histórico político
Planeta, Barcelona, 1975
166. SAINZ RODRIGUEZ, Pedro
Testimonio y Recuerdos
Planeta, Barcelona, 1978
167. SALAZAR SOTO, Rafael
La II República Española: PERSONAJES Y ANECDOTAS
Ed. Católica, Madrid, 1975.
168. SERRANO SUÑER, Ramón
Memorias. Entre el silencio y la propaganda. La Historia
como fue.
Planeta, Barcelona, 1977
159. VIDARTE, Juan Simeón
Las Cortes Constituyentes de 1931-1933.
Grijalbo, Barcelona, 1976
170. VIDARTE, Juan Simeón
No queríamos al Rey
Grijalbo, Barcelona, 1977

171. ZUGAZAGOITIA, Julián
Guerra y vicisitudes de los Españoles
Librería española, París, 1968.
3. LIBROS DE INFORMACION DOCUMENTAL, ESTADISTICA Y BIBLIO-
GRAFICA.
172. ARCHIVO VIDAL Y BARRAQUER
Iglesia y Estado durante la II República Española 1931-36.
Edición a cargo de M. Batllori y V.M. Arbeloa.
1971, Publicaciones de la Abadía de Montserrat
173. CIERVA, Ricardo de
Bibliografía sobre la Guerra de España (1936-39) y sus
antecedentes.
Ariel, Barcelona, 1968
174. DIAZ PLAJA, Fernando
La Historia de España en sus Documentos (Nueva serie)
El Siglo XX: Dictadura... República (1923-1936).
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964
175. GARCIA NIETO, M.C. DONEZAR, J.M. LOPEZ PUERTA, L.
La Dictadura 1923-1930.
Guadiana, Madrid, 1973.
176. GARCIA NIETO, M.C. DONEZAR, S.M.
La II República, I. Economía y aparato del Estado 1931-36
Guadiana, Madrid, 1974.
177. GARCIA NIETO, María Carmen. DONEZAR, Javier Ma
La II República, II. Política burguesa y movimiento obre-
ro, 1931-36.
Guadiana, Madrid 1974.
178. GUTIERREZ-RAVE, José
España en 1931, Anuario
Imprenta Sáez Hermanos. Madrid 1932.
179. GUTIERREZ-RAVE, José
España en 1932, Anuario
Madrid, 1933. Imprenta de A. Marzo
180. LINZ, Juan J.
Cinco siglos de Historia Española: Cuantificación y Com-
paración, en las dimensiones del pasado.
Alianza, Madrid 1974.
181. REPUBLICA ESPAÑOLA. CORTES CONSTITUYENTES.
(Album de los diputados de las Constituyentes con indica-
ción de sus profesiones).
Ed. Rivas, Madrid, 1932.

4. DEBATES PARLAMENTARIOS

182. DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES CONSTITUYENTES
(1931-33) 25 vols.
183. MORI, Arturo
Crónica de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española
Aguilar, Madrid, 1932-33.

5. PRENSA Y REVISTAS DE LA EPOCA.

Publicaciones vistas regularmente:

184. El Debate (Madrid), 1931-34
185. Jar (Madrid, semanario), 1933-34
186. Leviatán. Revista mensual de hechos e ideas (Madrid),
1934-35
187. El Liberal (Madrid), 1925-34
188. Luz (Madrid), 1932-33.
189. El País (Pontevedra), 1933-34
190. Política, Revista mensual de doctrina y crítica (Madrid),
1930.
191. El Socialista, (Madrid), 1931-1934.
192. El Sol (Madrid), 1925-1934.

Otras publicaciones consultadas :

193. Ahora (Madrid)
194. El Diluvio (Barcelona)
195. Heraldo de Madrid
196. El Imparcial (Madrid)
197. El Mercantil Valenciano.
198. La Nación (Buenos Aires)
199. Nosotros (Madrid, Semanario)
200. País (Lérida)
201. El Pueblo (Valencia)
202. Rioja (Logroño)

203. La Tierra (Madrid)

204. La Voz de Guipuzcoa

6. Archivos

Hemos consultado el Archivo de Salamanca perteneciente a la Jefatura Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno. Hemos localizado documentos interesantes para nuestro trabajo en las carpetas de las provincias de Castellón, Bilbao y Madrid.

En las citas el número que va tras la referencia AS, y la provincia correspondiente se refiere al número de las carpetas; eventualmente los documentos contenidos en ellas están catalogados en legajos y folios, en cuyo caso se indica la numeración correspondiente.